



Knut Walter

El régimen de Anastasio Somoza 1936 - 1956

972.85052
W-232
c. 2

El Régimen de Anastasio Somoza, 1936-1956

Knut Walter



62521

972.850 52

W231

Walter, Knut

El régimen de Anastasio Somoza: 1936-1956;
traducción al español por Knut Walter. --Managua :
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica –
Universidad Centroamericana, 2004.

418 p. : fotos b. y n.

ISBN: 99924-834-9-0

1. HISTORIA DE NICARAGUA 2. HISTORIA POLÍTICA
3. HISTORIA SOCIAL 4. HISTORIA DEL ESTADO
5. DICTADURA SOMOCISTA 6. ADMINISTRACIÓN
SOMOZA GARCIA, ANASTASIO 7. PARTIDOS
POLÍTICOS 8. GUARDIA NACIONAL 9. REPRESIÓN
POLITICA 10. PACTOS

I. Título

THE REGIME OF ANASTASIO SOMOZA, 1936-1956 by Knut Walter.

Copyright (c) 1993 by the University of North Carolina Press.

Published in the Spanish language by arrangement with the University
of North Carolina Press, Chapter Hill, North Carolina 27515-2288,
www.uncpress.unc.edu

EL REGIMEN DE ANASTASIO SOMOZA, 1936-1956. Knut Walter.

Edición 2004 por el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica
Universidad Centroamericana, UCA. Managua.

Depósito legal: 0112

ISBN: 99924-834-9-0

Original: inglés

Traducción al español: Knut Walter

Cuidado de edición: Margarita Vannini

Corrección de estilo: Frances Kinloch

Portada y contraportada: Eduardo Herrera Scott

Fotos: Archivo Histórico IHNCA-UCA, Archivo General de la Nación,
Centro de Historia Militar, Ejército de Nicaragua

Diseño y diagramación: Eduardo Herrera Scott



PLUMSOCK MESOAMERICAN STUDIES
South Woodstock, Vermont, USA

Ingreso	07-09-05
Comprado a	Multa
Donado por	
Precio	\$212 ⁵⁰
Reg	200575023

Introducción 11

**CAPITULO I: La sociedad y la política en Nicaragua
antes de 1930** 23

- A. La sociedad y la política durante la Colonia 23
- B. La Independencia y la lucha de facciones 26
- C. El impacto político de la producción cafetalera 29
- D. Los años del protectorado 32
- E. La crisis del protectorado 37
- F. Las fuerzas políticas y sociales durante
el protectorado 44

CAPÍTULO II: Los orígenes de la dictadura 57

- A. Reconciliación política y enfrentamiento armado 57
- B. El deterioro del control político civil 65
- C. El impacto político de la crisis económica 68
- D. Los políticos civiles y la Guardia Nacional 74
- E. La ideología del somocismo 79
- F. Somoza y la vieja dirigencia partidista 82
- G. El golpe de estado somocista 86
- H. La formación de una coalición electoral 89
- I. La campaña electoral de 1936 98
- J. Conclusión 103

CAPÍTULO III: La renovación del estado 119

- A. La regulación del comercio internacional
y las divisas 121
- B. Controles de precio y reformas financieras 126
- C. La reorganización del gobierno nacional
y de los municipios 138



D. El crecimiento del sector público	143
E. La reforma constitucional	150
F. El Partido Liberal bajo Somoza	155
G. El trato hacia la oposición leal	161
H. El régimen y el movimiento obrero	163
I. El régimen y el sector privado	170
J. El régimen y la oposición desleal	176
K. Conclusión	181
CAPÍTULO IV: Crisis, reforma y represión	211
A. La agitación de junio y julio de 1944	212
B. Las fuerzas políticas durante la crisis	217
C. Las nuevas reglas del juego para los medios y los trabajadores	225
D. Estados Unidos y la reelección de Somoza	231
E. La campaña electoral de 1947	237
F. El resultado electoral	245
G. Conclusión	252
CAPÍTULO V: Las alianzas con conservadores y capitalistas	269
A. La creación de un nuevo gobierno	269
B. Ablandando a los conservadores	274
C. La gran coalición	282
D. Crecimiento económico y reforma institucional	288
E. Política fiscal y desarrollo económico	299
F. El régimen y el sector privado	308
G. Conclusión	318
CAPÍTULO VI: Defensores y opositores del régimen	331
A. El partido Liberal	332
B. La Guardia Nacional	339
C. La oposición cívica	344
D. La oposición sindical	352
E. Censura, represión y la oposición en el exilio	357
F. La oposición armada	362
G. La última campaña	366
CONCLUSIÓN	383
A. El somocismo y las alianzas políticas	384
B. El somocismo y el desarrollo institucional	388
C. El somocismo y la oposición política	391
D. El estado nicaragüense bajo Somoza García	395
Bibliografía	401

Agradecimientos

Este libro apareció en inglés en 1993. Ya para ese momento, había traducido al castellano los dos primeros capítulos y tuve la intención de completar los cuatro restantes poco tiempo después. Sin embargo, por diversas razones que no viene al caso explicar, no seguí con la traducción sino hasta octubre de 2000, ya con el firme compromiso de que el libro estaría listo para prensa al finalizar el primer trimestre de 2001. Los terremotos de enero y febrero de 2001 en El Salvador se encargaron de agregar otro retraso, pero felizmente pude terminar la traducción a fines de abril.

La investigación sobre el régimen del primer Somoza comenzó a mediados de la década de 1980 en diversos archivos nicaragüenses. En esos tiempos tan difíciles, varias personas me acuerparon y apoyaron de manera incondicional. El director del entonces Instituto Histórico Centroamericano (IHCA), el padre Álvaro Argüello, S.J., tomó un interés personal en mi trabajo y me facilitó un acceso directo a los riquísimos fondos del Instituto. En el Archivo Nacional de Nicaragua, Adilia Moncada, Alfredo González y Liduvina Calatayud, al igual que el resto del personal, me ayudaron en la búsqueda de documentación que todavía estaba en proceso de clasificación o que, en algunos casos, ni siquiera había sido sacada de las cajas después de que el Archivo tuvo que mudarse de local. Las fotos que acompañan al texto han sido facilitadas por el Archivo Nacional y el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), cuya directora, Margarita Vannini, nunca dejó de insistir en la necesidad de traducir y



publicar este escrito. Durante el proceso de la investigación, Eugenio Arene destiló miles de páginas de información presupuestaria a partir de las cuales se elaboraron algunos de los cuadros estadísticos sobre el crecimiento y las funciones de las instituciones estatales; para él mis agradecimientos muy especiales por un trabajo engorroso en extremo.

Mis maestros y colegas Joseph S. Tulchin, Gilbert M. Joseph y Rose Spalding tuvieron a bien leer el manuscrito en inglés y aportaron abundantes comentarios, que enriquecieron el texto de manera importante. En Nicaragua, muchas personas se interesaron en mi trabajo y me ofrecieron libremente sus opiniones y análisis, tanto como parte de las entrevistas que realicé como en discusiones informales. A todos ellos, mi profundo agradecimiento.

San Salvador
Mayo de 2001

Preámbulo

.... los hacedores de dinero *money makers* todos los del negocio, el negocio total y general del General, el negocio del robo total totalitario, el robo del poder, el triple robo de los tres poderes, el robo electoral como función del Tribunal Electoral y sus ladrones de elecciones, el robo institucional y constitucional bicameral senatorial y congresional, el robo militar y paramilitar, el robo judicial civil y criminal, el robo del poder para poder robar, el poder convertido en poder de robar y de matar para robar, es decir, el poder convertido en simple medio de robar o simplemente el robo cometido por medio del poder, el magno poder mismo el magno latrocinio *magnum imperium magnum latrocinium* dice San Agustín al fin de cuentas el negocio de los negocios de los socios de sus negocios ordinarios y extraordinarios....

José Coronel Urtecho
Paneles de infierno (1981)

Introducción

En julio de 1979, Anastasio Somoza Debayle – tercer miembro de esta familia que gobernó Nicaragua – huyó hacia Miami, cuando los últimos reductos de la otrora temible Guardia Nacional caían ante el empuje de una violenta insurrección popular. Así se desplomó un sistema político que parecía inamovible desde que Anastasio Somoza García se apoderó de la presidencia de la República a mediados de la década de 1930. ¿Cómo se explica la longevidad y solidez del régimen somocista? En general, las dictaduras latinoamericanas han sido estudiadas e interpretadas a través de las figuras de los propios dictadores, considerados como representantes de una cultura política particular. Sin embargo, los esfuerzos por descubrir las características que distinguen el control político dictatorial de otros sistemas políticos han sido escasos¹. Por tanto, no es conveniente describir el régimen somocista como una de tantas dictaduras latinoamericanas que permitieron el enriquecimiento de la familia y los allegados del dictador, gracias a la corrupción del poder estatal. En realidad, el dictador y su camarilla tan sólo conformaban la fachada de un engranaje de dominación política y económica mucho más amplio y profundo.

La historia reciente de Nicaragua ha acrecentado la importancia de encontrar un enfoque correcto para analizar el régimen somocista. La Revolución Sandinista intentó erradicar su legado más visible, reformando el Estado nicaragüense con miras a crear un nuevo orden social y económico. El mayor obstáculo que enfrentó este proyecto revolucionario probablemente fue la “herencia pasiva” de la

era somocista; es decir, el conjunto de instituciones e intereses económicos, tanto públicos como privados, que formaban parte del anti-guó régimen. La Revolución intentó orientar las políticas públicas y el papel de la empresa privada a fin de satisfacer las demandas populares; para ello, se propuso reestructurar el Estado nicaragüense, reformar sus instituciones y sus leyes, además de purgar la burocracia de funcionarios desleales o ineficientes. Sin embargo, resultó-imposible completar semejante tarea de un día para otro; el viejo orden, sólidamente arraigado aún después de la caída de la dictadura, conjugó el poder coercitivo de sus fuerzas armadas con una gama de alianzas políticas y económicas, logrando resistir con tenacidad las medidas impulsadas por el régimen revolucionario.

Por lo tanto, el propósito de esta investigación es indagar acerca del problema del desarrollo político de Nicaragua, a partir de la formación del Estado durante las primeras dos décadas de gobierno somocista (1936-1956). Durante esos años, tanto el régimen somocista como el estado nicaragüense moderno adquirieron sus rasgos fundamentales, sentando las bases de la evolución económica y política del país hasta el triunfo revolucionario de 1979.

El Estado constituye un objeto de estudio muy apropiado para comprender el desarrollo político de Nicaragua. En primer lugar, el concepto de estado contempla de manera explícita los problemas del poder político y la dominación social. Estas consideraciones resultan de particular importancia en el caso de Nicaragua en vista de su larga trayectoria de gobiernos dictatoriales, así como del triunfo del movimiento revolucionario que reemplazó un sistema de dominación política por otro de signo marcadamente distinto. En segundo lugar, el estado puede entenderse como una arena política dentro de la cual varias fuerzas sociales luchan por el control del gobierno. Este enfoque es importante para comprender la historia política de Nicaragua desde la Independencia de España – una historia plagada de guerras civiles y animosidades regionales, intercaladas en medio de diversos esfuerzos de líderes políticos y grupos económicos por crear un Estado fuerte, sea mediante la conciliación política o la fuerza militar. Finalmente, dada su ubicación geográfica y las posibilidades de construir un canal interoceánico a través de su territorio, Nicaragua

se convirtió en blanco de los designios de las grandes potencias, lo que sometió a sus clases dominantes a intensas presiones. En consecuencia, el accionar de las potencias extranjeras incidió en la conformación del sistema político nicaragüense; en otras palabras, el Estado nicaragüense fue el resultado, en buena medida, de las decisiones políticas y militares de estados más fuertes.

Desde una perspectiva más amplia, el concepto del estado – tanto en su vertiente teórica como objetiva – ha llamado la atención de los pensadores europeos, al menos desde el Renacimiento tardío. En algunos de los trabajos más recientes sobre el desarrollo político y económico de Europa, el estado ocupa una posición central en la interpretación del proceso de surgimiento del capitalismo.² Mientras tanto, otro enfoque contemporáneo busca más bien explicar el estado en términos políticos e institucionales.³ De hecho, el debate actual sobre este tema gira precisamente en torno a la relación entre el papel del estado y la consecución de objetivos sociales fundamentales. Por supuesto, según las interpretaciones que privilegian el papel de las formaciones sociales, la lucha de clases constituye la fuerza determinante en la organización y orientación del estado. Por ejemplo, de acuerdo a Harold Laski, cada estado presenta un sesgo parcializado a favor de un grupo social particular, pues su función principal es “asegurar el proceso pacífico de producción dentro de la sociedad”. Por tanto, los conflictos fundamentales suscitados dentro del estado siempre ocurren “entre las clases económicas que buscan asegurarse el control del poder soberano”.⁴ De manera similar, Guillermo O’Donnell observa que el “gran diferenciador” dentro de una sociedad es la estructura de clases, pues otorga a ciertos individuos mayor acceso a los recursos del poder del estado.⁵ En todo caso, el fin último de toda actividad política es apoderarse del estado. Por tanto, todo estudio sobre la formación y consolidación estatal debe identificar a aquellos actores políticos – ya sean grupos, clases o movimientos sociales – que participan en la lucha por el control del estado, y cuyos intereses se reflejan en las decisiones políticas que éste toma.

En síntesis, el poder, el conflicto político y las políticas gubernamentales definen el estado y establecen los límites dentro de los cuales debe ser analizado. En la medida de que el estado está en

capacidad de ejercer el poder, de anular, canalizar o reprimir el conflicto político, y de formular políticas que garanticen la estabilidad fundamental del sistema social, adquiere fuerza y legitimidad, cuales son los objetivos últimos de todo estado. El primero, la fuerza, es una condición necesaria para la supervivencia del gobierno del estado ante las pretensiones de grupos políticos rivales. La fortaleza del estado es sinónimo de estabilidad, así como de continuidad política e institucional. Depende, en gran medida, de la capacidad del estado de extraer y controlar los recursos materiales necesarios para el ejercicio del poder político efectivo. Tales recursos incluyen, entre otros, una base tributaria, una burocracia y fuerza armada eficientes, así como una infraestructura acorde con las necesidades estatales mismas.

El segundo objetivo – la legitimidad – se manifiesta de hecho en la capacidad del Estado de exigir obediencia a la población, sin recurrir a la violencia o a la coerción. Descansa, por lo tanto, en la difusión de un conjunto de creencias sobre la conveniencia de la paz, el orden social y el bien común en una sociedad. El gobierno de un estado necesita legitimidad, pues ésta permite reducir de manera significativa los costos políticos y económicos de la dominación social, en la medida en que la población se muestra dispuesta a obedecer por convicción o conveniencia, y no por temor al castigo físico o judicial. A fin de inculcar ideas de legitimidad en una población, el estado deberá asegurarse los instrumentos de control ideológico que refuerzan la lealtad hacia las estructuras socioeconómicas y las instituciones gubernamentales vigentes. Tales instrumentos incluyen el sistema educativo, los medios de comunicación, y una religión y/o ideología política que otorgan el aval moral supremo al estado.⁶

La legitimidad y la estabilidad de un estado no se alcanzan a corto plazo, pues son resultado de un proceso muy gradual que se prolonga a través de los siglos y probablemente nunca se concluye. Oscar Oszlak sugiere medir el nivel de “estabilidad” adquirido por una sociedad a lo largo del tiempo, analizando no sólo la cuestión de su estabilidad y legitimidad, sino también identificando aquellos aspectos que suscitan conflictos políticos y mueven a los actores políticos a la acción. Según Oszlak, es posible medir la estabilidad en términos de

la capacidad del estado de extraer y asignar los recursos materiales y humanos de la sociedad, imponer identidades y lealtades colectivas, institucionalizar su autoridad y externar su poder dentro de un sistema internacional de estados⁷.

Sin embargo, la medida fundamental del nivel de estatidad es, para Oszlak, el desarrollo del aparato institucional del estado, constituido por el “conjunto heterogéneo e interdependiente de organizaciones ‘públicas’”, tanto privadas como gubernamentales, “donde se dirimen cuestiones que conforman la agenda de problemas socialmente vigentes”. Conforme crece el nivel de involucramiento de estas instituciones, así también aumenta el nivel de autonomía estatal como garante del orden social. La resolución de las cuestiones sociales es trasladada gradualmente del ámbito de las interacciones directas entre individuos y grupos a un conjunto de instituciones que supuestamente actúan en función del “interés general”. En otras palabras, la existencia de instituciones estatales no sólo refleja las contradicciones y los conflictos existentes en el seno de una sociedad, pues éstas también nacen y se desarrollan precisamente en respuesta a la necesidad de dirimir aquellos asuntos vitales que la afectan. Ello significa que las instituciones estatales y las cuestiones sociales son aspectos inseparables en una sociedad determinada, y éstas últimas inciden en el desarrollo de la estatidad⁸.

De acuerdo a Oszlak, las primeras formaciones estatales y el logro de niveles mayores de estatidad en Latinoamérica surgieron, en gran medida, a partir de la articulación de intereses urbanos y rurales ligados a las actividades de exportación, como en los casos de Chile y Costa Rica. Sin embargo, en la mayoría de los demás países latinoamericanos tal articulación no se materializó en los años posteriores a la Independencia de España. Por el contrario, en éstos la consigna de “orden y progreso” se constituyó en el fundamento de la formación del Estado: un orden impuesto por un gobierno central sobre los grupos de poder en los ámbitos locales y regionales, y un progreso nacido de una eventual estabilidad política y de las oportunidades brindadas por la demanda en los mercados mundiales de materias primas y productos alimenticios. En estos países, el Estado se convirtió en el eje alrededor del cual se consolidaron nuevas for-

mas de dominación política y económica, y la estatidad se desarrolló en torno a las cuestiones del orden y el progreso⁹.

El desarrollo del Estado en Centroamérica por lo general se corresponde con el patrón descrito por Oszlak. Tres de las naciones centroamericanas – El Salvador, Guatemala y Costa Rica – desarrollaron sectores exportadores dinámicos poco después de la Independencia. Los años de anarquía y rivalidades regionales se superaron hacia 1870, al instaurarse gobiernos centrales fuertes bajo el control de las oligarquías cafetaleras. En los casos de Honduras y Nicaragua, la actividad exportadora arrancó en el siglo XIX pero permaneció bajo control extranjero, operando como enclaves, por lo que apenas afectó los sistemas políticos y sociales de ambos países. En consecuencia, durante el siglo XIX, la actividad económica y la vida política de la mayor parte de la población hondureña y nicaragüense continuó girando en torno a la hacienda tradicional, caracterizada por su producción agrícola de carácter semiautárquico y la dominación de caudillos locales¹⁰. En Nicaragua, el desarrollo político se vio complicado por varios episodios de intervención extranjera, vinculados en forma directa o indirecta a su posición privilegiada como posible ruta canalera. Como resultado, este país constituye un caso tardío particular dentro del proceso de agro exportación y formación estatal.

La investigación propuesta aquí aborda la cuestión de la formación del Estado nicaragüense entre los años 1936 y 1956, período en el cual Anastasio Somoza García ocupó la jefatura del Estado y la comandancia de la Guardia Nacional. Argumento que el régimen somocista colocó los cimientos del Estado moderno en Nicaragua, al impulsar una serie de cambios importantes dentro del sistema político de este país. En primer lugar, neutralizó o asimiló la antigua dirigencia caudillista de los grupos de poder local y regional, sustituyéndola por una amplia coalición de empresarios agrícolas, comerciantes y burócratas gubernamentales así como por organizaciones partidistas y sindicales identificadas con el régimen. En segundo lugar, fortaleció y especializó el conjunto de instituciones estatales, en respuesta a la creciente complejidad de la sociedad nicaragüense y a la necesidad de resolver los asuntos sociales, financieros y legales resultantes del modelo agro exportador. Finalmente, aunque el régimen pretendió

lograr un nivel de legitimidad que le permitiera ejercer sus funciones sin recurrir a la violencia, utilizó la coerción en momentos de crisis política cuando las contradicciones y tensiones medulares del Estado se manifestaron abiertamente.

Cada uno de estos tres objetos de estudio exige un enfoque distinto. El primero supone identificar aquellos actores políticos cuya alianza con Somoza sentó las bases del régimen. La burocracia estatal, el partido oficial y otros grupos organizados leales al régimen pueden estudiarse a través de sus expresiones públicas de apoyo durante los procesos electorales u otros momentos críticos de movilización política, como también a través del análisis de su desarrollo y crecimiento.

En segundo lugar, el desarrollo y la diferenciación institucional constituyeron una parte integral del crecimiento agro exportador. La participación del Estado en apoyo al sector exportador fue vital, no sólo porque construyó infraestructura y ejecutó tareas administrativas, sino también porque enfrentó los cambios sociales resultantes de la actividad agro exportadora: urbanización, industrialización incipiente, demandas de servicios sociales y crecimiento de la fuerza de trabajo asalariada. En este sentido, cobra importancia el análisis del desarrollo de ministerios y departamentos administrativos (especialmente en los rubros del crédito y las finanzas, la infraestructura y el control político), de organizaciones del sector privado y de diversas asociaciones artesanales y sindicales.

Finalmente, el análisis detallado de las fisuras sociales y políticas del modelo agro exportador nos revelará con mayor claridad la naturaleza del Estado nicaragüense. Es evidente que la oposición más fuerte y tenaz al régimen somocista provino del Partido Conservador, sobre todo durante las periódicas reelecciones de Somoza a la presidencia. Sin embargo, la retórica y las acciones de este partido generalmente lo definen como una oposición “leal” o asimilada, pues el régimen pudo neutralizar las críticas de los conservadores mediante algunas fórmulas de cogobierno nominal, conjugadas con la amenaza de recurrir a la coerción. Sin embargo, también existió una oposición política más difícil de doblegar, cuya retórica y acciones cuestionaban

al propio Estado nicaragüense. Ésta se hallaba conformada por grupos radicalizados de estudiantes, obreros e intelectuales nacionalistas, que veían en la figura de Somoza la mano del imperialismo y la explotación capitalista de Estados Unidos. Enemigos implacables del régimen, fueron acusados de comunistas y reprimidos con saña por Somoza.

En conclusión, esta investigación pretende demostrar que la creciente estatidad fue indispensable para el éxito del régimen somocista, y explicar cómo esta dictadura de carácter personalista pudo adaptarse a diversos niveles de estatidad. Si bien los años de efervescencia revolucionaria no forman parte del objeto de estudio, intentaremos explicar por qué la oposición más radical optó por la lucha armada como la única forma viable de enfrentarse al régimen.

Por lo general, la organización de los capítulos obedece a una secuencia cronológica debido a la necesidad de incorporar un elemento narrativo mínimo, y destacar los problemas más importantes concernientes a la consolidación del régimen y organización del Estado, que surgieron en diversas coyunturas. El primer capítulo describe y analiza el Estado nicaragüense anterior a 1930, destacando su debilidad y la ausencia de políticas socioeconómicas de índole “nacional”. Asimismo, se explica cómo las constantes presiones extranjeras y los episodios de intervención directa complicaron la competencia política interna, acentuando su conflictividad. El capítulo segundo esboza el ascenso político de Somoza, desde su nombramiento como jefe director de la Guardia Nacional en 1933 hasta su llegada a la presidencia en 1937. El énfasis se centra en las cuestiones sociales y alianzas políticas que llevaron a Somoza al poder, así como en el uso de la coerción y en el papel de la ideología. En esencia, este período constituyó una ruptura en el desarrollo político de Nicaragua, pues se produjo la instauración de un gobierno que afirmaba representar a todos los nicaragüenses, por encima de la política partidista y de las facciones. Asimismo, prometía cumplirle al país, en el sentido de impulsar medidas para contrarrestar los efectos de la crisis económica y restaurar el control del gobierno central en todo el territorio nacional.

El capítulo tercero contiene un análisis de los primeros siete años del régimen somocista (1937-1943), caracterizados por diver-

sas iniciativas legislativas e institucionales de importancia. Durante este período, el régimen definió su relación con el sector privado, los trabajadores organizados, los partidos políticos tradicionales y los grupos de oposición marginales. Los temas abordados en este capítulo incluyen las reformas bancarias y financieras de 1940, la política monetaria y fiscal (incluyendo la devaluación de la moneda, los incrementos tributarios y los controles del cambio de divisas internacionales), la incipiente legislación obrera, los acuerdos entre el partido gobernante y las fracciones del principal partido de oposición, la reforma constitucional y municipal, así como varias medidas represivas contra determinados opositores del régimen. En términos generales, durante estos años el nuevo régimen trató de organizar a toda la población en función de un esfuerzo nacional, dirigido a superar los efectos de la depresión, eliminar los conflictos sociales así como la lucha “estéril” de facciones, y garantizar el funcionamiento eficiente del aparato estatal.

En el capítulo cuarto se analiza la primera crisis seria enfrentada por el régimen a partir de junio y julio de 1944, cuando miles de nicaragüenses marcharon por las calles de Managua y otras ciudades exigiendo el fin de la presidencia de Somoza. Éste enfrentó la crisis aplicando de inmediato medidas represivas; luego, durante los tres años siguientes, procuró conciliarse con diversos grupos de la oposición, tendiendo la mano a los obreros organizados y a la izquierda política. A diferencia del período 1937-1943, en que el régimen se abocó sobre todo a aplicar medidas de tipo fiscal y económico, el período de 1944 a 1947 se caracterizó por las maniobras políticas dirigidas a reconstruir una nueva coalición favorable al régimen. Cuando dicho esfuerzo fracasó en 1947 – a raíz de la rebelión de un presidente que el propio Somoza había impuesto mediante una elección fraudulenta – el dictador dio un golpe de Estado y procedió a fraguar una solución política más estable y duradera.

Esta solución – analizada en el capítulo quinto – implicó la asimilación de la oposición conservadora, así como la creación de instituciones y políticas favorables a los productores del sector agro exportador. En efecto, la fracción más recalcitrante del Partido Conservador finalmente llegó a un acuerdo con el régimen en 1950, he-

cho que — combinado con el posterior auge del cultivo del algodón — sentó las bases de un acuerdo político fundamental entre los principales actores políticos del país. Sin embargo, la oposición al régimen no desapareció; más bien adquirió nuevas formas y contenidos que se manifestaron en la búsqueda del derrocamiento del régimen por la vía armada, y en el desarrollo de nuevas alternativas ideológicas y programáticas frente al somocismo. Tal como se describe en el capítulo sexto, por lo general estos primeros esfuerzos fracasaron en su propósito de lograr que las élites o los sectores populares mostraran un mayor rechazo al gobierno de Somoza; no obstante, lograron allanar el camino para el surgimiento posterior de una oposición más radical, comprometida no sólo con la eliminación del gobierno somocista sino también con la total renovación del Estado nicaragüense.

→ En las conclusiones de este trabajo, intentaremos identificar algunas características peculiares del sistema político nicaragüense que explican la longevidad del viejo régimen, a la vez que aclaran los orígenes del movimiento revolucionario. Al respecto, pueden mencionarse: los espacios políticos que el régimen se mostró incapaz o renuente de cerrar; la fuerza de la coalición política gobernante en términos de intereses compartidos, afinidades ideológicas y rechazo a las alternativas políticas radicales; la capacidad del régimen de recompensar económica y políticamente a diversos grupos o clases sociales; la importancia de los aspectos represivos del régimen para asegurar su permanencia en el poder; y la naturaleza de la dominación “dinástica” dentro de un sistema político dictatorial. En un ámbito más general, la conclusión presentará algunas observaciones sobre el problema de la democracia y la dictadura en una sociedad capitalista subdesarrollada, así como sobre la estabilidad y permanencia de los regímenes dictatoriales.

CITAS Y NOTAS:

1. Una contribución importante dentro de este enfoque es la de Charles E. Chapman, "The Age of the Caudillo: A Chapter in Hispanic American History". En el caso de Somoza, dos ejemplos de este enfoque son los de Richard Millett, "Anastasio Somoza García: A Brief History of Nicaragua's 'Enduring' Dictator"; y William Krehm, *Democracias y tiranías en el Caribe*, capítulo VII. Dentro de lineamientos similares puede consultarse a Kenneth J. Grieb, *Guatemalan Caudillo. The Regime of Jorge Ubico. Guatemala, 1931-1944*. Estos autores subrayan las características personales de los dictadores como explicación de su ascenso al poder y su permanencia al frente del estado, lo que no niega la validez de sus argumentos sino que permite señalar que los dictadores y los regímenes dictatoriales existen dentro de un entorno determinado que incide en sus iniciativas gubernamentales y limita sus opciones políticas como ocurre bajo cualquier otro sistema político. Por ejemplo, pueden consultarse los planteamientos convincentes de Paul H. Lewis, *Paraguay Under Stroessner* y, particularmente, los de Charles W. Anderson, "Nicaragua: The Somoza Dynasty", de los cuales asimilé abundantes ideas acerca del funcionamiento de los regímenes dictatoriales.

2. Perry Anderson, *Lineages of the Absolutist State*; Immanuel Wallerstein, *El moderno sistema mundial*; Douglass C. North y Robert Paul Thomas, *El nacimiento del mundo occidental. Una nueva historia económica (900-1700)*. Si bien Anderson y Wallerstein se ubican dentro de una corriente marxista en contraposición al enfoque neo-clásico de North y Thomas, todos estarían de acuerdo en que el papel del estado fue decisivo en la promoción del desarrollo capitalista.

3. Harold Laski, *The State in Theory and Practice*; también pueden verse los trabajos de diversos estudiosos en Charles Tilly, recopilador, *The Formation of National States in Western Europe*.

4. Laski, *The State in Theory and Practice*, pp. 88-99. Alfred Stepan proporciona un análisis sintético de este problema en

su libro *The State and Society. Peru in Comparative Perspective*, pp. 3-45.

5. Guillermo O'Donnell, "Apuntes para una teoría del Estado," pp. 196-199. Otras consideraciones en torno al papel del estado y la independencia del estado frente a determinadas clases sociales (la llamada "autonomía relativa del estado") pueden encontrarse en David Held, "Central Perspectives on the Modern State," pp. 23-43; Theda Skocpol, *States and Social Revolutions*, pp. 24-29 y "Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research", pp. 9-14; y Nora Hamilton, *The Limits of State Autonomy. Post Revolutionary Mexico*.

6. Marcos Kaplan, *Formación del estado nacional en América Latina*, pp. 43-46.

7. Oscar Oszlak, "Formación histórica del Estado en América Latina," pp. 254-263. Oszlak se ha basado en los escritos de J.P. Nettie y Philippe C. Schmitter para desarrollar estos puntos.

8. Ibid., pp. 247-252.

9. Ibid., p. 254-260. Oszlak desarrolla sus ideas a partir de un caso histórico concreto en *La formación del estado argentino*.

10. Edelberto Torres Rivas, "Poder nacional y sociedad dependiente: las clases y el estado en Centroamérica," pp. 178-83. También puede verse su "La formación del estado y del sector público en Centroamérica y Panamá."

CAPITULO I

La sociedad y la política en Nicaragua antes de 1930

Nicaragua se destaca como un caso extremo dentro de una región caracterizada por frecuentes conflictos internos e intromisiones extranjeras. A inicios de la Conquista, Nicaragua se convirtió en un campo de batalla entre diversas columnas de exploradores y capitanes españoles; su competencia por el dominio territorial sentó las bases del conflicto político de los siglos posteriores. En efecto, un grupo de colonizadores españoles pobló Granada, fundada por Hernández de Córdoba en 1524 en la ribera noroccidental del Gran Lago. Mientras tanto, otros conquistadores españoles avanzaban hacia el sur desde México y Guatemala, amenazando el control de Hernández de Córdoba sobre el territorio, razón por la cual éste ordenó a un grupo de sus hombres fundar el pueblo de León, con el propósito de consolidar su dominio y repeler las expediciones rivales que merodeaban en Honduras.¹

A. La sociedad y la política durante la Colonia

Si bien León se convirtió en el centro administrativo del territorio, Granada conservó un lugar privilegiado en términos sociales y económicos. La mayor parte de los nobles e hidalgos de las columnas conquistadoras se asentaron en Granada, pues allí se concentraba una buena parte de la población indígena. Además, su ubicación a orillas del Gran Lago le daba acceso a la navegación lacustre, aunque

no tuvo comunicación directa con el mar Caribe sino hasta después del descubrimiento del río San Juan, alrededor del año 1539.

León tuvo acceso al océano Pacífico a través del puerto del Realejo, ubicado a pocas leguas del poblado. Durante el primer siglo de dominio español, el Realejo se convirtió en un emporio comercial dotado de un astillero importante. Mediante su control de los bosques en las tierras altas al norte de Nicaragua – los actuales departamentos de Nueva Segovia y Madriz – los comerciantes de León se enriquecieron supliendo maderas, resinas y alquitrán para la construcción de barcos en el Realejo.

En consecuencia, León gozó de una temprana bonanza económica y comercial, mientras Granada tan sólo contaba con un escaso intercambio comercial dentro del área de su influencia inmediata. En la década de 1540, el río San Juan empezó a ser utilizado para el tráfico de embarcaciones, pero la ruta nunca dejó de ser problemática y lenta debido a la presencia de bancos de arena y raudales a lo largo de su curso, así como por la poca profundidad de sus aguas durante el verano. No obstante, el comercio a través de Granada aumentó hacia fines del siglo XVI, sobre todo debido a los ataques de piratas al Realejo y demás puertos de la costa pacífica de Centroamérica. Varios productos, entre los que sobresalió el añil, provenientes de lugares tan lejanos como Guatemala y San Salvador, eran llevados en recuas de mulas hasta Granada, donde se les embarcaba para iniciar la lenta travesía al mar Caribe. Como resultado, las familias de los comerciantes granadinos pudieron enriquecerse durante más de un siglo.

Sin embargo, este rol de intermediaria dentro del comercio imperial no constituyó la base de la prosperidad de Granada en el largo plazo. Más bien, la ciudad se convirtió en el centro de operaciones de un considerable número de hacendados y ganaderos, dueños de tierras en las comarcas de Rivas, Carazo, Masaya y, sobre todo, Chontales – una franja de tierra especialmente rica y húmeda frente a la costa oriental del Gran Lago. Desde inicios del siglo XVII, varias familias obtuvieron títulos reales de propiedad, convirtiéndose así en los primeros integrantes de lo que posteriormente se conocería

como la oligarquía granadina. A través de la propiedad de la tierra y de sus redes familiares, los mercaderes y ganaderos de Granada llegaron a controlar casi toda la ribera del Gran Lago.

Por otra parte, la navegación en el océano Pacífico decayó a finales del siglo XVI, por lo que la economía de la zona de León y del noroeste de Nicaragua se orientó hacia la ganadería y el cultivo de cereales. Sin embargo, el intercambio comercial entre León y Granada no se desarrolló, pues la base material de ambas ciudades era similar y suplían distintos mercados. Granada exportaba carne salada y cueros a España y Costa Rica, mientras León vendía su ganado en pie en los mercados de San Salvador y Guatemala. Por lo tanto, no hubo conflictos entre ambas ciudades durante el período colonial, a excepción de las exigencias administrativas o fiscales que emanaban del centro provincial en León y que producían algún desagrado o resentimiento entre la oligarquía granadina. Pero, a la vez, tampoco hubo esfuerzos de integración social o política: cada ciudad se desarrolló con autonomía de la otra, y extendió su respectiva esfera de influencia a través de sus propias redes familiares y de intercambio comercial así como de la propiedad sobre las tierras, todo bajo la égida de la producción ganadera.

* [La estructura económica de Nicaragua, basada en la ganadería y la producción cerealera de subsistencia, tuvo un impacto decisivo en la conformación de las instituciones gubernamentales de la entonces provincia colonial.] La ausencia de un mercado interno y el predominio de la ganadería extensiva con su bajo requerimiento de inversiones en infraestructura, se conjugaron con la importancia de los nexos familiares y la tenencia de la tierra como elementos constitutivos del poder político y social, para limitar el crecimiento de las instituciones gubernamentales en la provincia. [En realidad, el Estado colonial tuvo una débil presencia en la mayor parte de Centroamérica.] Durante el reinado de los Austrias, las autoridades coloniales se limitaron a preocuparse por recolectar el tributo y garantizar la lealtad política de criollos e indígenas. Por otra parte, las iniciativas de los Borbones por centralizar el aparato estatal con miras a aumentar la recaudación fiscal y fortalecer la capacidad defensiva de las colonias frente a la amenaza externa, por lo general fueron ineficaces, sobre

todo en aquellas zonas alejadas del control directo del capitán general, radicado en la ciudad de Guatemala. A lo sumo fueron los burócratas de la corona y los clérigos católicos quienes dieron cierta cohesión a la región centroamericana.² Con la desaparición o debilitamiento de estos elementos unificadores a raíz de la Independencia de España, Centroamérica entró en una época de divisionismo y conflicto civil que duró medio siglo.

B. La Independencia y la lucha de facciones

La Independencia llegó a Centroamérica en septiembre de 1821, más como secuela de la emancipación de México que como fruto de una iniciativa local. De hecho, Agustín de Iturbide intentó anexionar Centroamérica al naciente imperio mexicano, pero un conflicto interno impidió a su ejército consolidar el dominio sobre Guatemala y San Salvador, teniendo que retirarse en 1823. Ese mismo año, representantes de toda la región se reunieron en la ciudad de Guatemala y suscribieron un acta reafirmando la independencia y creando una nueva entidad política llamada Provincias Unidas del Centro de América. Posteriormente, promulgaron una Constitución bajo la cual se organizó un débil gobierno federal, encargado de establecer e impulsar las relaciones diplomáticas y el comercio internacional, así como de velar por la seguridad militar del istmo.³

Sin embargo, la Federación centroamericana tuvo una existencia muy breve y violenta. El carácter pacífico del proceso independentista contrasta con el período de guerras fratricidas crónicas que se inició en 1824. Liberales y conservadores, ambos dispuestos a imponer su ideología y programa de gobierno, terminaron desmembrando la Federación en 1839. En Nicaragua, las ciudades de León y Granada se disputaban el control del gobierno del Estado. En 1824, estalló una guerra civil de la que Granada emergió victoriosa, después de dejar en ruinas a su contrincante: novecientas viviendas fueron destruidas en León y algunos barrios reducidos a cenizas. El gobierno federal envió un ejército desde San Salvador para restaurar el orden en la provincia.⁵ Como resultado, en Nicaragua dejó de existir cualquier semblanza de gobierno central. La existencia de cargos y oficinas públicas, leyes y constituciones era tan sólo nominal,

pues en la práctica el poder político pasó a manos de los grandes terratenientes que dominaban en sus respectivas localidades.

La fragmentación del poder en Nicaragua puede atribuirse a su tradicional descentralización política y al conflicto regional; sin embargo, también es necesario tomar en cuenta las condiciones especiales que caracterizaban la economía de la provincia. Con frecuencia, cuando estallaba un conflicto civil, la población campesina era obligada a prestar servicio militar; como dice Wortman, "los peones y los ejércitos privados pasaron a ser la misma cosa". Asimismo, la mano de obra se hacía cada vez más escasa, pues la escalada de violencia obligaba a la población a huir a Costa Rica o San Salvador, donde podían ganar sus salarios en paz. Finalmente, debido a la abundancia de tierras baldías en Nicaragua, la población trabajadora podía reubicarse en las fronteras agrícolas, si las condiciones de empleo en las haciendas no le resultaban satisfactorias. En consecuencia, durante las primeras décadas del siglo XIX, muchos hacendados dejaron sus propiedades en el abandono, lo que contribuyó al deterioro de la economía y a una mayor reducción de los ingresos fiscales.⁶

El conflicto político conllevó el desmembramiento territorial. Hacia mediados del siglo XIX, la Mosquitia se encontraba completamente bajo el dominio inglés. Años antes, la península de Guanacaste se había separado de Nicaragua para unirse a la nueva República de Costa Rica. El conflicto político en Nicaragua se limitó, por lo tanto, al eje territorial entre León y Granada, con sus respectivas zonas de influencia. De esta rivalidad surgieron dos partidos o facciones que habrían de dominar la vida política de Nicaragua durante los siguientes ciento cincuenta años: los liberales, cuya fuerza radicaba en León, y los conservadores con su base en Granada. El trasfondo del conflicto no era un proyecto político o económico de envergadura nacional, ni un programa de gobierno que pretendiera favorecer a una ciudad en detrimento de la otra, pues no existía una economía o un sistema político nacional. Más bien, lo que estaba en juego era el control de los exiguos recursos financieros del gobierno central, y el dominio oligárquico sobre las áreas de influencia de cada ciudad.

Las fuentes de los ingresos del gobierno central eran muy escasas, y consistían sobre todo de derechos aduaneros, algunos

gravámenes sobre artículos de consumo, y el impuesto cobrado a las empresas dedicadas al transporte de personas entre el Atlántico y el Pacífico – la llamada “ruta del tránsito”.) En su conjunto, estos ingresos eran muy reducidos, pero constituían la única fuente de dinero en efectivo por lo que su control ofrecía una ventaja considerable al partido gobernante.⁷ Además de esta situación, debe tomarse en cuenta el arraigado dominio de los caudillos en las zonas rurales y la red de alianzas políticas basada en las relaciones personales o familiares. Tal como plantea Humberto Belli, la formación de un Estado nacional, caracterizado por burocracias impersonales y leyes racionales, era imposible dada la realidad nicaragüense de aquella época. Por tanto, la solución de los conflictos políticos y el establecimiento de alianzas se llevaban a efecto como arreglos entre individuos, de acuerdo a relaciones de amistad o de parentesco. Los pobres – aquellos campesinos y artesanos que conformaban el grueso de cada facción política y de los ejércitos privados – cayeron bajo el control de diversas oligarquías locales que les ofrecían protección y asistencia, fortaleciendo así las relaciones de clientelismo.⁸

La naturaleza localista de los conflictos políticos en Nicaragua se aprecia claramente en el episodio protagonizado por William Walker en 1856, cuando la facción liberal contrató los servicios del filibustero estadounidense y su ejército mercenario para derrotar a la facción granadina, que controlaba el gobierno en ese momento. Sin embargo, después de derrotar a los conservadores y darle la espalda a los liberales, Walker decidió apoderarse de la presidencia de la República. A fin de expulsarlo de Nicaragua, liberales y conservadores se vieron obligados a unir sus fuerzas militares, y solicitar el apoyo de los ejércitos de Guatemala, San Salvador y Costa Rica. Así terminó la primera de una serie de intervenciones estadounidenses que Nicaragua soportaría durante los siguientes setenta y cinco años de su existencia republicana. El episodio de Walker puede caracterizarse como una empresa “privada”, diferente de las posteriores intervenciones directas – tanto militares como políticas – del gobierno de Washington. Sin embargo, su causa inmediata es similar: un choque entre facciones que se transforma en un conflicto abierto, seguido de la solicitud de ayuda externa por parte de una de las facciones, deseosa de imponerse a la otra, y la anuencia de un grupo o gobierno foráneo de prestar tal asistencia.

(Al menos, el episodio de la ocupación filibustera condujo al acercamiento de las oligarquías de Granada y León, tanto para combatir a Walker como para buscar un arreglo político interno. Este objetivo se materializó en el pacto entre democráticos y legitimistas del año 1856, y en la promulgación de la Carta Magna de 1858. En términos económicos, los acuerdos contemplaban una distribución más equitativa de los ingresos aduaneros y los impuestos a las empresas del tránsito, la eliminación de ciertas ventajas comerciales de tipo monopolístico favorables a Granada, y la reapertura del puerto de Corinto (que reemplazó al Realejo), además de algunas concesiones fiscales a los exportadores, incluyendo la introducción libre de bienes de capital y la reducción de los impuestos de exportación. En sus aspectos políticos, el acuerdo ratificó el control oligárquico de los procesos políticos, al excluir del derecho al voto a las personas que carecieran de propiedades. Asimismo, reconoció el poder de los caudillos mediante la creación de gobiernos locales llamados “prefecturas”, y autorizó la existencia de grupos armados irregulares bajo el control de los caudillos.⁹

C. El impacto político de la producción cafetalera

(El pacto inter-oligárquico evitó las guerras civiles en Nicaragua durante los siguientes treinta años. Desde 1858 hasta 1893, los dirigentes de la facción granadina ocuparon la presidencia de la República, pero algunos liberales de León fueron incluidos en los gabinetes de gobierno y en el Congreso Nacional. Durante este período, la estabilidad política y la creciente demanda de café en los mercados mundiales sentaron las bases de la economía agro exportadora moderna de Nicaragua. Sin embargo, con el tiempo, el desarrollo de la producción cafetalera debilitó el pacto oligárquico. Esto se debió, en primer lugar, a la aparición de nuevos actores políticos y económicos – los cafetaleros de la región de Managua y Carazo – que trastornó el balance entre los grupos de poder tradicionales. En segundo lugar, León recibió mayores beneficios de la producción cafetalera que Granada, pues su puerto en el Pacífico, Corinto, se convirtió en la principal estación de la línea férrea y el punto de exportación del grano. Hacia 1890, los cafetaleros de Managua y Carazo revelaron su preferencia política acercándose al Partido Liberal y a la facción leonesa.

Tres años más tarde, ya eran lo suficientemente fuertes como para derrocar al presidente Roberto Sacasa, aprovechando una división en el seno del Partido Conservador.

Desde 1893 hasta 1911, el gobierno nacional fue controlado por el Partido Liberal. Más precisamente, el poder estuvo en manos de la facción del Partido Liberal liderada por José Santos Zelaya, un cafetalero de Managua. Zelaya gobernó el país en forma dictatorial hasta 1910, año en que renunció ante las presiones del gobierno de Estados Unidos. Durante los diecisiete años de su régimen, orientó las políticas del Estado en favor de la exportación y la inversión extranjera. Sin embargo, cabe anotar que su gobierno no inició tales medidas, pues los anteriores gobiernos conservadores habían comenzado la construcción del ferrocarril, impulsado el rápido desarrollo de la producción del café, regularizado el crédito bancario y privatizado las tierras comunales.¹⁰ No obstante, las medidas de Zelaya provocaron entre los conservadores una oposición tan extrema como no se había visto desde mediados del siglo XIX, pues se empeñaron, una y otra vez, en derrocar al gobierno. Durante este período, Emiliano Chamorro – eterno caudillo y conspirador del Partido Conservador – adquirió notoriedad y construyó su base social. Por lo tanto, cabe preguntarse por qué los conservadores presentaron una oposición tan feroz contra Zelaya.

La oposición a las políticas de Zelaya reflejaba las fisuras regionales e ideológicas que persistieron durante los treinta años de gobiernos conservadores. La oligarquía granadina, estrechamente vinculada con la Iglesia Católica, rechazó de manera tajante el anticlericalismo de Zelaya, así como las disposiciones de la Constitución de 1893 de secularizar la educación pública, cancelar el control eclesiástico de matrimonios, cementerios y registros civiles, y anular el carácter confesional del Estado. Sin embargo, el problema religioso no tuvo un carácter fundamental. Zelaya procuró involucrar al Estado en la promoción del desarrollo agroexportador, aun más que los regímenes conservadores de antaño. Es decir, dedicó todos los recursos estatales posibles para ampliar la red ferroviaria y los puertos, construir carreteras, modernizar el aparato del Estado y extender la educación pública. Asimismo, Zelaya se interesó mucho por atraer la

inversión extranjera, mediante concesiones exclusivas y préstamos contratados por el Estado. Las políticas de Zelaya muestran la influencia de su educación en diversas escuelas y universidades europeas; no obstante, este gobernante definió el primer plan económico y político de proyección nacional en la historia de Nicaragua.¹¹

El régimen de Zelaya recibió el respaldo de la mayoría de los caficultores de la región de Managua y Carazo – un nuevo grupo económico que incluía a ganaderos y añileros perjudicados por la competencia de los tintes químicos –, así como de medianos agricultores y de algunos pobladores urbanos deseosos de probar suerte en la caficultura. En el norte de Nicaragua, en la región de Matagalpa y Jinotega, también se encontraban inmigrantes extranjeros, sobre todo alemanes, que comenzaron a cultivar café con mucho éxito, pero necesitaban del apoyo estatal para construir la infraestructura requerida para el transporte del grano a los puertos. Asimismo, Zelaya recibió el respaldo de la oligarquía liberal de León, que se beneficiaría del aumento de las exportaciones de café y del estímulo al comercio regional fomentado por el tráfico ferrocarrilero.¹²

Por el contrario, los oligarcas granadinos recibieron menos beneficios de la política zelayista. Ello no significa que se oponían a la agroexportación en sí, pues durante siglos se habían lucrado de las exportaciones de ganado y cueros. Un grupo de destacados empresarios de Granada, incluso, había invertido en la producción de azúcar en la región de Chinandega, en el noroeste de Nicaragua; en 1890 fundaron el ingenio San Antonio que en poco tiempo se convirtió en el más importante de toda Centroamérica.¹³ Pero la mayoría de los ganaderos y comerciantes de Granada, así como sus aliados en los departamentos de Chontales y Boaco, no tenían interés en que el Estado invirtiera en una infraestructura para beneficio de los caficultores y otros productores en el resto del país. Durante años habían controlado el gobierno nacional, bajo una óptica de mínima intervención fiscal, asegurando el control de sus asuntos a través del sistema de dominación de caudillos y acuerdos entre familias. A lo sumo, manifestaron un gran interés por la construcción de un canal interoceánico a través del Gran Lago. Semejante obra prometía aumentar la importancia de Granada como puerto de embarque de diversos productos

de exportación, y mejorar las ventajas comerciales de los mercados granadinos. Por tanto, no era de extrañar que los hacendados granadinos poseyeran grandes extensiones de tierra cerca de la potencial ruta canalera.

Zelaya no se oponía a un canal a través de Nicaragua. Todo lo contrario; su gobierno solicitó el apoyo de Estados Unidos para el proyecto, pero sus exigencias, aparentemente, resultaron demasiado elevadas. Los promotores del canal por Panamá lograron convencer al congreso en Washington de las ventajas de dicha ruta, y Zelaya se quedó con las manos vacías. Cuando recobraron el poder gracias a la intervención norteamericana, los conservadores firmaron el tratado Chamorro-Bryan en 1914, otorgando a Estados Unidos derechos perpetuos para construir un canal en Nicaragua a cambio de un puñado de dólares. Por supuesto, en ese momento — justo cuando comenzaba a operar el canal de Panamá — Estados Unidos no tenía interés alguno en construir otro canal a través de Nicaragua. El tratado Chamorro-Bryan no fue más que un artificio para impedir que otra potencia explotara el potencial canalero nicaragüense, en ese entonces o en el futuro.

D. Los años del protectorado

La era de Zelaya llegó a su fin como resultado de una revuelta del Partido Conservador, en alianza con un grupo de liberales desafectos, y apoyados por el gobierno de Estados Unidos. El intento de Zelaya de impulsar la construcción del canal sin participación estadounidense, la negociación de importantes préstamos con consorcios europeos, sumado a su intromisión en los asuntos internos de Honduras, motivó al secretario de estado Philander Knox a apoyar a los enemigos políticos del dictador liberal para lograr su derrocamiento. Zelaya se vio obligado a renunciar en diciembre de 1909, como resultado de una combinación de censuras internacionales a su régimen, y el apoyo militar directo de Washington a un ejército rebelde organizado alrededor de Bluefields, en la costa Atlántica de Nicaragua. La misma suerte corrió su sucesor, José Madriz, en agosto del siguiente año. Se instaló en Managua un nuevo gobierno, pero éste se mostró incapaz de darle una dirección política eficaz al país, que se hundía en

medio de disputas por cargos burocráticos, incluyendo la presidencia de la República. El derrocamiento de Zelaya resultó ser una empresa fácil para Washington; por el contrario, el mantenimiento del orden y la paz interior habría de requerir varias intervenciones militares directas y una injerencia descarada en la política nicaragüense, así como el control de las instituciones financieras y fiscales del país durante casi un cuarto de siglo.¹⁴

El nuevo gobierno, encabezado por una coalición inestable de caudillos conservadores, liberales anti-zelayistas y representantes de empresas extranjeras, comprendió que el apoyo de Estados Unidos sería indispensable para su permanencia en el poder. Desde un primer momento, los dirigentes del movimiento anti-zelayista entraron en consultas con representantes del gobierno estadounidense, como Thomas Dawson, ministro de Washington en Panamá, quien fue despachado a Managua en octubre de 1910 para asistir en la organización del nuevo gobierno. Los llamados “Pactos Dawson”, firmados el 27 de octubre por los jefes de los ejércitos rebeldes, estipulaban la creación de una comisión mixta de nicaragüenses y estadounidenses para resolver las disputas en torno a los contratos y las concesiones otorgadas durante el gobierno de Zelaya. Asimismo, comprometían “los buenos oficios del gobierno americano” para que bancos privados estadounidenses otorgaran a Nicaragua un préstamo, a cambio de la hipoteca de los ingresos aduanales. Contemplaban, además, la promesa formal de los políticos nicaragüenses de excluir al “elemento zelayista” de cualquier gobierno futuro.¹⁵ Los Pactos Dawson fueron tan sólo el comienzo del intervencionismo de Estados Unidos.

El nuevo gobierno se encontraba en bancarrota y sus líderes no dejaban de reñir entre sí. Durante los dos años posteriores a la caída del presidente Madriz, los ministros de Washington en Managua se dedicaron a apuntalar al gobierno a fin de lograr un mínimo de orden político y eficiencia administrativa. Sin embargo, con el tiempo, la coalición gobernante se derrumbó. A solicitud del presidente Adolfo Díaz, Estados Unidos intervino militarmente en Nicaragua para reprimir una revuelta encabezada por el ministro de Guerra, el general Luis Mena. Durante los meses de agosto y septiembre de 1912, Estados Unidos desembarcó un total de 2,300 infantes de marina en el

puerto de Corinto, ocupó militarmente la ciudad de León y extendió su control a lo largo de toda la línea férrea, hasta la ciudad de Granada. El grueso de la fuerza militar abandonó Nicaragua a mediados de noviembre, pero dejó a 100 infantes de marina como guardia de la legación estadounidense. Allí permanecerían durante los siguientes catorce años, como viva advertencia de que Estados Unidos intervendría de nuevo si las circunstancias lo ameritasen.

La intervención fiscal y financiera de Estados Unidos resultó más prolongada y determinante para el desarrollo posterior de Nicaragua que la ocupación militar. Bajo el supuesto de que el interés estadounidense de garantizar la paz y el orden en la región centroamericana se aseguraría mejor mediante la promoción de los negocios estadounidenses y la eliminación de compromisos financieros entre los gobiernos centroamericanos y las potencias extra-continetales, Washington se dedicó a sanear las finanzas nicaragüenses y a cancelar sus deudas pendientes. Al gobierno de Nicaragua también le urgía contratar préstamos con bancos estadounidenses para dar respuesta a una serie de reclamos de indemnización presentados por empresarios nacionales y extranjeros por daños sufridos durante el conflicto militar, así como para compensar a los dueños de concesiones otorgadas por Zelaya que habían sido canceladas por el nuevo gobierno.

En 1911, el gobierno de Nicaragua obtuvo un crédito de US\$1,500,000 en Estados Unidos, pero a cambio debió entregar la administración de las aduanas a un funcionario estadounidense nombrado por el Departamento de Estado – el llamado “Recaudador General de Aduanas”. Pese a la obtención de otros préstamos en 1912 y 1913, aún se necesitaban más recursos para sanear las finanzas nacionales. En consecuencia, el Ferrocarril del Pacífico y el Banco Nacional de Nicaragua, ambos propiedad del estado, fueron entregados en hipoteca a un consorcio de bancos estadounidenses. Ambas empresas pasaron a ser corporaciones norteamericanas, inscritas en los Estados de Maine y Connecticut, respectivamente. En 1917, la magnitud del desorden fiscal obligó al gobierno nicaragüense a tomar medidas desesperadas para cumplir con sus obligaciones ante los banqueros y el gobierno de Estados Unidos. A fin de consolidar la deuda flotante del gobierno nicaragüense y asegurar su sol-

vencia fiscal, Washington desembolsó US\$3,000,000 que le adeudaba a cambio del tratado canalero Chamorro-Bryan, pero a la vez impuso al gobierno el llamado “Plan Financiero de 1917”. Asimismo, estableció una “Alta Comisión” con potestad para aprobar y fiscalizar el presupuesto nacional, fijar los aranceles aduaneros y exigir al gobierno el pago puntual de todos los bonos de la deuda pública. Integraban la Alta Comisión dos estadounidenses nombrados por el Departamento de Estado y un nicaragüense en representación del gobierno de Managua. Por último, el plan estipulaba que todos los fondos recibidos por el recaudador general de aduanas debían depositarse en el Banco Nacional y erogarse para cancelar la deuda pública antes de efectuar cualquier otro gasto. Como resultado, el gobierno de Nicaragua recibió apenas US\$500,000 de la suma contemplada en el tratado Chamorro-Bryan, que utilizó para cancelar los sueldos rezagados de los empleados públicos. El resto del dinero lo entregó a los banqueros estadounidenses y a un consorcio británico que había otorgado un préstamo al gobierno de Zelaya en 1909.¹⁶

Estas políticas financieras y fiscales tuvieron un impacto desastroso en el desarrollo económico del país. Entre 1917 y 1927, el gobierno de Nicaragua dedicó más del 43% de todos sus egresos para cubrir los compromisos de la deuda pública y los gastos de recaudación de impuestos y derechos. Un 18.7% adicional se gastó en el ejército y la policía. En vista de la prioridad conferida a la solvencia fiscal y al pago puntual de la deuda interna y externa, a partir de 1920 Nicaragua no tuvo más problemas ante sus acreedores. Sin embargo, estas políticas dejaron al estado muy pocos recursos para realizar inversiones en infraestructura, salud y educación, o para fomentar la producción y la exportación. Durante el período entre 1910 y 1930, se paralizó la construcción de la red ferrocarrilera, así como de las carreteras hacia el norte y oriente del país. Dada las limitaciones en los medios de comunicación, Nicaragua permaneció como un país de regiones aisladas entre sí. A lo sumo, el gobierno recuperó parte de su independencia económica en 1924, al comprarle una mayoría de las acciones del ferrocarril y el Banco Nacional a los banqueros estadounidenses. Sin embargo, ambas corporaciones siguieron registradas en Estados Unidos y sus juntas directivas se reunían en la ciudad de Nueva York.¹⁷

La subordinación de los gobiernos conservadores a los intereses de Estados Unidos, no significa que las políticas que impulsaron bajo presión norteamericana hayan sido, por sí mismas, incompatibles con los intereses de la oligarquía granadina. Sus miembros que figuraron en la revuelta contra Zelaya, con frecuencia se beneficiaron del traspaso de las concesiones comerciales canceladas después del derrocamiento del dictador liberal. Además, la mayor parte de los fondos erogados por la comisión bilateral para indemnizar a los afectados por la lucha armada fueron a parar a manos de miembros del Partido Conservador.¹⁸ Sin embargo, pesó más el desinterés de los conservadores en un gobierno fuerte, capaz de extraer e invertir recursos nacionales en proyectos de desarrollo. A lo sumo, buscaban la canalización del río San Juan para que los barcos pasaran directamente del mar Caribe al puerto de Granada – un proyecto que para entonces no tenía tanta importancia, pues el ferrocarril ya transportaba carga desde Corinto hasta Granada. Sus necesidades de infraestructura se reducían a la flota de pequeños vapores lacustres y a las veredas que utilizaban para mover sus hatos de ganado hacia Costa Rica.

Al mismo tiempo, los comerciantes de Granada satisfacían la demanda de productos importados de un grupo social muy reducido que disponía de altos ingresos. Por lo tanto, no tenían interés alguno en impulsar políticas redistributivas para ampliar el mercado o promover el desarrollo de la manufactura nacional. Por el contrario, la evidencia disponible sugiere que los años de gobierno conservador e intervención fiscal estadounidense fueron muy perjudiciales para los artesanos nicaragüenses (zapateros, carpinteros, sombrereros), quienes quedaron desprotegidos ante la irrupción de productos baratos de origen industrial, provenientes sobre todo de Estados Unidos.¹⁹

La intervención estadounidense fue tan directa y contundente en el campo político como en lo económico y fiscal. La opinión del ministro de Washington en Managua, acerca de cualquier candidatura presidencial, coalición de partidos o procedimiento electoral, era considerada imprescindible. La mayor preocupación del Departamento de Estado era evitar que la sucesión presidencial desembocara en un nuevo episodio de lucha armada; de allí la insistencia de los

ministros estadounidenses en cuanto a la honestidad y transparencia de las elecciones, pues ello garantizaría el reconocimiento de la legitimidad del presidente electo.²⁰ En 1921, el doctor Harold Dodds, catedrático de ciencias políticas, fue contratado por el gobierno de Nicaragua – bajo fuerte presión de Washington – para analizar la ley electoral vigente y proponer las reformas necesarias para garantizar su imparcialidad. En abril de 1923, el Congreso nicaragüense aprobó un nuevo código electoral, cuyo contenido se ajustaba a lo propuesto por Dodds, con algunas modificaciones mínimas. Los procedimientos electorales establecidos por la nueva ley eran bastante convencionales, excepto por el hecho de que el voto no era secreto, pues exigía a los ciudadanos colocarse en filas distintas según el partido de su preferencia y marcar la boleta en presencia de los funcionarios de la junta electoral. Además, dicha ley otorgaba al gobierno el derecho a nombrar a los miembros de las juntas electorales, lo que facilitaba el fraude y la coacción al partido que se hallaba en el poder al momento de la elección. Finalmente, la ley limitaba la personería jurídica a aquellos partidos políticos que hubiesen obtenido un mínimo del 10% del total de votos depositados en la contienda electoral inmediatamente anterior, y conservado una estructura organizativa viable a nivel nacional en el ínterin. En la práctica, la ley electoral de 1923 institucionalizó un sistema bipartidista, pues estableció muchos obstáculos para la formación e inscripción de nuevos partidos.²¹

E. La crisis del protectorado

En 1926 estalló una nueva guerra civil entre rebeldes del Partido liberal y el gobierno conservador encabezado por Emiliano Chamorro. Obviamente, los quince años de protectorado no habían resuelto las contradicciones políticas, económicas y sociales que inicialmente sirvieron para justificar la intervención estadounidense. Los funcionarios estadounidenses buscaron una explicación simplista y superficial, identificando supuestos obstáculos legales y culturales que impedían el desarrollo de la democracia y la transparencia electoral en Nicaragua.²² Atribuían la inestabilidad política y la debilidad de las instituciones democráticas al secular atraso educativo de los nicaragüenses, a su falta de respeto por las leyes y las buenas costumbres. Tal explicación ocultaba las raíces del conflicto político. Para com-

prender los conflictos de este período, es preciso centrar la atención en sus problemas subyacentes; no en las manifestaciones superficiales más obvias, como el fraude electoral, la guerra civil y la intervención extranjera. Al fin de cuentas, el Partido Liberal se mantuvo activo durante todos los años de gobierno conservador, procurando ampliar su base social. ¿Por qué habría actuado si no buscaba la toma del poder?

La crisis política que vivió Nicaragua entre 1910 y 1927 – los años del protectorado estadounidense – fue en realidad una crisis del propio Estado. Los grupos sociales que competían por controlar el gobierno nacional guardaban diferencias fundamentales entre sí, aunque éstas no se apreciaban de manera clara en las promesas y los programas políticos. Por su parte, Estados Unidos – cuyo control sobre el gobierno era superior al de cualquier partido local – consideraba posible alcanzar la estabilidad en Nicaragua mediante el desarrollo de instituciones y procedimientos, tanto electorales como legislativos, que garantizaran la participación política de ambos partidos históricos. El Departamento de Estado norteamericano no tenía razones ideológicas para favorecer a un partido sobre el otro, pero deseaba el establecimiento de un gobierno capaz de imponer un control efectivo sobre el territorio nacional, respetuoso de la soberanía de los países vecinos y de los derechos canaleros adquiridos por Estados Unidos mediante el tratado Chamorro-Bryan y, en suma, dispuesto a defender los intereses estadounidenses en la región centroamericana.²³

Entre 1911 y 1927, el Partido Conservador ofreció obediencia incondicional a los dictados de Estados Unidos, pues dependía de su apoyo para mantenerse en el poder. Además, no tenían discrepancias fundamentales con respecto a las políticas impuestas por Washington. No incomodaba mucho a la oligarquía conservadora de Granada el que las corporaciones estadounidenses se adueñaran del ferrocarril y el Banco Nacional, o que funcionarios estadounidenses administraran las aduanas y fijaran el gasto público. Ni siquiera tendría mucho peso el problema de la soberanía nacional para aquellos conservadores que negociaron y firmaron el tratado Chamorro-Bryan a cambio de tres millones de dólares. En el fondo, la política de los

gobiernos conservadores, en armonía con los intereses de Estados Unidos, básicamente buscaba el orden público y el equilibrio fiscal. En consecuencia, su proyecto de Estado no había variado mucho desde los días de la Independencia: deseaban un papel fuerte para los caudillos regionales, una participación mínima del gobierno en el desarrollo de la infraestructura del país, y la conservación de los valores tradicionales para contrarrestar las corrientes secularizantes que amenazaban con abolir la educación religiosa, y subvertir la unidad familiar a través del matrimonio civil y el divorcio. El papel del gobierno nacional era repartir algunos cargos públicos y servir como instancia de conciliación de las diferencias políticas que no se podían arreglar a un nivel local o regional.

Los liberales rechazaban la visión de los conservadores, pues deseaban un Estado fuerte, así como gobiernos activos en la construcción de infraestructura productiva, en la promoción de la educación y la salud pública, y en la apertura de vínculos financieros y comerciales estrechos con los países industrializados. Los liberales demandaban un sistema bancario más dinámico, con una fuerte participación estatal en caso necesario, que permitiera canalizar una mayor proporción de los exiguos ahorros del país hacia la inversión productiva, especialmente en los sectores exportador y manufacturero. Los cafetaleros, la columna vertebral del Partido Liberal, seguían siendo la fuerza económica dominante en el país, pero se les negaba el acceso directo al poder del Estado porque los conservadores controlaban la maquinaria electoral y contaban con el apoyo de Estados Unidos. Por lo tanto, no debe sorprender que la lucha del Partido Liberal por retomar el poder adquiriese un matiz “anti-intervencionista” frente a la presencia de Estados Unidos en Nicaragua. Concretamente, los liberales querían que Estados Unidos devolviera el control de las instituciones financieras estatales con miras a iniciar un programa de reactivación económica.²⁴ Incluso, algunos sectores del Partido Conservador se hallaban dispuestos a entrar en alianza con políticos liberales, tal como ocurrió durante las elecciones de 1924, cuando José Solórzano, un conservador progresista, se postuló como candidato a presidente acompañado del liberal leonés, Juan Bautista Sacasa, candidato a la vicepresidencia. Esta fórmula libero-conservadora ganó la elección con amplio margen sobre el candidato conservador, Emiliano Chamorro.

En términos generales, los resultados de la elección de 1924 sugieren que la brecha, ideológica y regional, entre liberales y conservadores, tendía a desaparecer. El estancamiento de la producción cafetalera durante los años del protectorado estadounidense había golpeado a los caficultores de todos los signos políticos. (De hecho, había un buen número de caficultores conservadores; el padre de Anastasio Somoza García fue uno de ellos). La crisis económica del país exigía reactivar la caficultura, y de ser posible, promover otros productos de exportación dinámicos. En consecuencia, algunos sectores de los Partidos Liberal y Conservador se mostraron dispuestos a discutir la formación de un gobierno bi-partidista y la distribución de cuotas de poder, con miras a lograr un acuerdo político que impulsara tales iniciativas, más relacionadas con intereses económicos y la búsqueda de la tranquilidad política del país que con ideologías o regionalismos.

Después de 1920, Estados Unidos dejó de objetar a la incorporación de elementos liberales en los gobiernos de Nicaragua. Washington reconoció los resultados electorales de 1924 que llevaron al liberal Sacasa a la vicepresidencia del país. Incluso, decidió retirar en agosto de 1925 el contingente de infantería de marina destacado en la legación estadounidense en Managua, interrumpiendo por primera vez su presencia militar en Nicaragua, establecida trece años atrás. Sin embargo, a fines de octubre de 1925, Emiliano Chamorro dio un golpe de estado (conocido como el "lomazo"), obligando al presidente Solórzano y su vicepresidente Sacasa salir al exilio. Estados Unidos se negó a extender el reconocimiento diplomático al nuevo gobierno, por lo que Chamorro tuvo que renunciar y entregar la presidencia a Adolfo Díaz, el incondicional de la política de Washington en Nicaragua. Estados Unidos no toleraba que los acontecimientos políticos en Nicaragua escaparan a su control. Sin embargo, esto fue lo que ocurrió en diciembre de 1926, cuando Sacasa regresó del exilio, dispuesto a derrocar a Díaz. Desembarcó en Puerto Cabezas, al frente de un ejército organizado con ayuda del presidente Calles de México, y se proclamó presidente constitucional de Nicaragua. Viendo la incapacidad del gobierno de Díaz de repeler el ataque de los liberales, Estados Unidos volvió a introducir sus fuerzas militares en Nicaragua para poner fin al enfrentamiento armado. Mien-

tras tanto, despachó a Henry Stimson a Managua en abril de 1927 con la encarga de buscar una solución política al conflicto.

Stimson se presentó como delegado personal del presidente Coolidge, con plenos poderes para negociar acuerdos en el acto, y su misión pretendía transmitir la idea de que Estados Unidos se hallaba sumamente preocupado por los acontecimientos en Nicaragua. A su llegada a Managua, Stimson inició una ronda de consultas con representantes de ambos partidos políticos. Éstos consideraban indispensable la mediación de Estados Unidos, y coincidían en que la solución más viable al conflicto era la celebración de elecciones supervisadas por Washington en 1928. Por su parte, Stimson estaba convencido de que la única salida al crónico problema de las luchas políticas de Nicaragua era un proceso electoral libre, pero esto exigía algunas condiciones previas: desarme total, amnistía general y establecimiento de la paz y el orden en todo el país. En vista de su total identificación con los intereses de Estados Unidos, Adolfo Díaz no podía estar más satisfecho con las propuestas de Stimson, pero agregó otras de su propia cosecha que contemplaban la incorporación de varios liberales en su gabinete, y la organización de una fuerza pública (“constabularia”) bajo el mando de oficiales estadounidenses.²⁵

El 27 de abril, Stimson se reunió con una delegación de tres dirigentes liberales: Rodolfo Espinoza, Leonardo Argüello y Manuel Cordero Reyes, quienes más tarde llegarían a ocupar la vicepresidencia, presidencia y ministerio de relaciones exteriores, respectivamente. Todos aprobaron el diagnóstico de la situación política presentado por Stimson y “negaron vehementemente cualquier sentimiento anti-norteamericano de parte de los liberales o que tuvieran algún acuerdo hostil con México. Afirmaron que su partido reconocía que Estados Unidos tenía una legítima zona de interés e influencia que se extendía hacia el sur hasta Panamá y que consideraban esto como natural y beneficioso en cuanto a sus resultados para Nicaragua”. El 4 de mayo, Stimson se reunió con José María Moncada, general en jefe del ejército liberal, bajo la sombra de un árbol de espinillo en el pequeño pueblo de Tipitapa, ubicado al norte de Managua. Moncada aceptó las condiciones del gobierno de Díaz a cambio de un compromiso formal de Estados Unidos de supervisar las eleccio-

nes de 1928. Stimson redactó un documento a tal efecto y enfatizó la absoluta necesidad de un desarme general para el desarrollo del proceso electoral. Por tanto, todas las armas de guerra debían ser entregadas a las tropas estadounidenses, y éstas se encargarían de “desarmar por la fuerza a todos aquellos que se negaran a hacerlo”.²⁶

Una semana después de la firma del acuerdo de Tipitapa, Moncada lanzó un manifiesto anunciando que los liberales aceptaban la palabra del gobierno de Washington. Durante los días siguientes, las fuerzas en pugna entregaron más de 9,000 fusiles, 296 ametralladoras y casi 6 millones de balas. Tan sólo un general liberal, Augusto C. Sandino, rechazó el acuerdo de Tipitapa, y se internó en las montañas del norte de Nicaragua con 150 de sus hombres, para iniciar la resistencia armada contra la intervención estadounidense en el país. Sin embargo, las principales fuerzas políticas del país habían llegado a aceptar lo inevitable: la presencia de Estados Unidos en Nicaragua. Dicha presencia era determinante, no sólo como instrumento de conciliación entre liberales y conservadores, sino también como una fuerza al servicio de una agenda estratégica y política propia. En consecuencia, conocer los designios de Estados Unidos y recibir su bendición pasó a convertirse en un elemento intrínseco a la política nicaragüense. Los dirigentes nicaragüenses también tuvieron que reconciliarse con el nuevo sistema político que estaba surgiendo bajo la tutela de Estados Unidos.

En 1930, este nuevo sistema político aún no estaba plenamente definido, pero algunos de sus componentes principales ya habían entrado en acción. En primer lugar, Nicaragua recibió un nuevo ejército nacional con el membrete de “Guardia Nacional”, en cumplimiento de un tratado suscrito en diciembre de 1928 entre el ministro estadounidense Dana C. Munro y Carlos Cuadra Pasos, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno conservador de Adolfo Díaz. El tratado contemplaba la formación de una fuerza armada compuesta por 100 oficiales y más de 1,100 soldados, como única institución militar y policial de la República. Asimismo, estipulaba que la Guardia empezaría a operar bajo el mando de oficiales de la infantería de marina de Estados Unidos – quienes gozarían del privilegio de extraterritorialidad judicial – mientras concluía el entrenamiento de oficia-

les nicaragüenses para dirigir dicha fuerza militar.²⁷ A juicio del gobierno de Estados Unidos, la formación de una fuerza armada, apolítica y nacional, pondría fin a la larga historia de ejércitos privados y de facción, así como a las guerras civiles engendradas por éstos. Por otra parte, este ejército era necesario para combatir a Sandino, cuyas tácticas guerrilleras ocasionaban problemas a la fuerza de ocupación de Estados Unidos.

En segundo lugar, hacia 1930 las instituciones financieras creadas por Estados Unidos ya estaban consolidadas, si bien permanecían bajo control extranjero. El Banco Nacional de Nicaragua, Ltd., tenía un peso abrumador dentro del sistema financiero del país, pues combinaba las funciones de banco central, banco de emisión y banco comercial. Sus socios estadounidenses tenían mayoría en la junta directiva del banco que sesionaba en Nueva York, aunque un gerente general se encargaba de las operaciones diarias desde una oficina en Managua. La Recaudación General de Aduanas también se encontraba bajo la dirección de un estadounidense, situación que imperó hasta comienzos de la década de 1950.

En tercer lugar, la ley Dodds, que normaba los procesos electorales y las actividades de los partidos políticos, se mantuvo sin mayores cambios hasta la década de 1960. La ley pretendía sentar las reglas del juego de un sistema bipartidista, pero la dictadura somocista se las arregló para excluir a los conservadores del poder, salvo los pocos casos de gobierno compartido surgido de alguno que otro pacto político. Aunque las dos elecciones supervisadas de 1928 y 1932 fueron calificadas, en su momento, como relativamente limpias, la ley Dodds no garantizó la prevención del fraude electoral; durante los cincuenta años siguientes, el dicho muy nicaragüense “Quien escruta, gana” reflejaba una realidad innegable.

En síntesis, hacia 1930 Estados Unidos había dotado a Nicaragua del ropaje propio de una democracia moderna; por tanto, Washington confiaba haber erradicado por completo las causas ancestrales de las guerras civiles. Sin embargo, la confianza en la efectividad de las iniciativas estadounidenses y los augurios de un futuro mejor para Nicaragua, se fundamentaban en una lógica simplista que

explicaba el origen de la inestabilidad política en términos de ejércitos partidistas, elecciones fraudulentas e irresponsabilidad fiscal. Pero la existencia de instituciones importantes de tipo financiero, electoral y militar no era sinónimo de un estado fuerte. Mientras estas instituciones se creaban y consolidaban bajo la tutela directa de Estados Unidos, las fuerzas políticas y económicas dentro de Nicaragua no tenían más opciones que aprobar los objetivos estadounidenses o callar. Pero al desaparecer la presión extranjera directa en 1925, después de la salida de la infantería de marina de la legación, las disputas sobre el futuro de la nación nicaragüense afloraron con mayor virulencia, por lo que Estados Unidos necesitó aplicar mucho más fuerza para imponer un nuevo arreglo político en 1927.

Es decir, la intervención norteamericana de 1911-1912, dirigida a resolver la cuestión de la sucesión presidencial después de la caída de Zelaya, resultó mucho más sencilla en sus aspectos medulares que la crisis nacional desatada en 1927. La explicación de esta diferencia deberá buscarse en los cambios ocurridos en la sociedad y la política nicaragüense en los primeros cinco lustros del siglo XX. Durante los treinta años de gobiernos conservadores y los diecisiete años del régimen liberal de Zelaya, Nicaragua presentó una situación de dominio estrictamente oligárquico. Posteriormente, surgieron nuevos actores (incluyendo, por supuesto, a Estados Unidos) que se introdujeron en la arena política de Nicaragua, reclamando mayor participación y beneficios socioeconómicos.

F. Las fuerzas políticas y sociales durante el protectorado

Entre 1911 y 1927, el escenario político nicaragüense estuvo dominado por el Partido Conservador, que poco a poco cayó bajo el control del eterno caudillo, Emiliano Chamorro. Hacia 1916, año en que resultó electo presidente, Chamorro ya era el líder indiscutible de los conservadores y lo seguiría siendo hasta la década de 1950. Sin embargo, carecía de un proyecto político claro para Nicaragua, lo que a veces provocaba conflictos con otros sectores de su partido — tal como se evidencia en el golpe de Estado que propinó al gobierno de Solórzano. Dentro de su propio partido, Chamorro enfrentó la

oposición de un grupo que intentaba negociar un acuerdo político con los liberales, mientras se esforzaba por definir una ideología conservadora más precisa como alternativa al liberalismo. Encabezaba este grupo – más débil y reducido que el chamorrista – un abogado granadino, Carlos Cuadra Pasos, cuya actividad política coincidió con la de Chamorro hasta mediados de siglo. Con el tiempo, Cuadra Pasos pasó a dirigir el llamado grupo “civilista” dentro del Partido, que se caracterizó por su habitual oposición al choque armado con los liberales, pese a su vehemente defensa de los valores católicos tradicionales de familia, propiedad y relaciones armoniosas entre el estado y la iglesia. A través de los años, chamorristas y civilistas pugnaron por controlar al partido; el caudillo Chamorro era el favorito de las masas conservadoras mientras que Cuadra Pasos atraía a los elementos intelectuales y profesionales del Partido.

Resulta difícil precisar el contenido de la ideología conservadora nicaragüense entre los años 1911 y 1930. El lema del Partido “Dios, orden, justicia” ofrece algunas pistas, pero éstas son insuficientes para formular un andamiaje ideológico. Otra consigna común entre los conservadores era “¡Viva el general Chamorro!”, que si bien era muy efectiva para movilizar al pueblo, carece de contenido ideológico. En realidad, pocos conservadores se preocuparon por escribir sobre el pasado y el futuro político de Nicaragua, pues en su mayoría estaban inmersos en el trajín diario de la política. Los escritos y análisis más coherentes del conservadurismo salieron de la pluma de Cuadra Pasos, la eminencia gris del Partido, cuyas obras aparecieron impresas a partir de 1935 aproximadamente.

Como era de esperarse, la mayor preocupación de Cuadra Pasos era el debilitamiento de los valores tradicionales ante la penetración del pensamiento secular, modernizante y progresista en Nicaragua. A su juicio, la fuerza de una sociedad descansa sobre la solidez de sus instituciones básicas: familia, propiedad e iglesia. En opinión de Cuadra Pasos, la institución familiar era sólida en el seno de la elite, conformada por las familias principales, la clase media y los artesanos; por el contrario, era muy débil o inexistente entre el proletariado. Asimismo, las clases bajas menospreciaban e irrespetaban la propiedad; al igual que los dirigentes militares de las facciones políti-

cas, acostumbrados a destruir y saquear propiedades durante las guerras civiles. Peor aun, observaba Cuadra Pasos, los terratenientes – columna vertebral del orden social nicaragüense – estaban perdiendo interés en la administración personal de sus propiedades rurales. Preferían vivir en las ciudades, haciendo visitas esporádicas a sus haciendas, lo que reflejaba el agotamiento de su amor por la tierra. Finalmente, la presencia de la iglesia entre el pueblo se había debilitado, como resultado de la escasez de sacerdotes. La vida de las parroquias, tan importante para la conservación de la armonía social, como facilitadora de la solución de problemas y querellas personales, se había deteriorado.²⁸ A juicio de Cuadra Pasos, las reformas impulsadas por los liberales habían destruido el viejo orden patricio, fundamentado en la relación ancestral entre el caudillo terrateniente y el pueblo, para reemplazarlo con una relación entre una burguesía arribista y una masa de obreros asalariados. Aquella relación supuestamente generosa y caritativa entre las clases alta y baja se vio desplazada por una actitud “plutocrática” de parte de los patronos hacia sus empleados.²⁹ En suma, la masa del pueblo ya no respetaba a la clase alta, y ésta carecía de compasión por el pueblo.³⁰

Los escritos de Cuadra Pasos reflejan nostalgia por un pasado que se derrumbaba ante el acoso de fuerzas seculares y urbanas. Desde su perspectiva, el Partido Conservador debía mantener viva esa nostalgia y limitar o contener los cambios dentro de la sociedad nicaragüense. Pero otros pensadores dentro de esta organización política, como José Coronel Urtecho y Pablo Antonio Cuadra, desarrollaron puntos de vista distintos y buscaron respuestas a la problemática nacional en el fascismo y el corporativismo. Tal enfoque era de esperarse en las décadas de 1920 y 1930, pero las raíces de esta corriente de pensamiento debe buscarse en las guerras civiles recientes. La destrucción causada por el enfrentamiento entre liberales y conservadores en 1926-1927 y la guerra contra Sandino en los años posteriores, llevó a algunas personas al convencimiento de que Nicaragua sólo podría progresar bajo un gobierno autoritario, capaz de neutralizar – incluso por la fuerza, si era necesario – las tendencias centrífugas de la política nicaragüense. La paz social y política, por tanto, se convirtió en el objetivo supremo. La manera de alcanzarlo era erradicando las causas de las guerras civiles tan dañinas para Nicaragua, tal como la lucha por el poder entre distintas facciones

políticas. En su opinión, el país necesitaba un gobierno sólido respaldado por una fuerza armada poderosa – la misma que Estados Unidos ya estaba organizando bajo el nombre de Guardia Nacional. Algunos de estos pensadores hasta coquetearon con la posibilidad de establecer una monarquía en Nicaragua, pero al final se aliaron con Somoza, en quien creyeron ver un garante del orden y el progreso.³¹

En suma, hacia 1930 en el Partido Conservador convivían algunos caudillos tradicionales faltos de ideología o proyectos políticos definidos, y dos grupos que representaban distintas tendencias ideológicas: una añorando un pasado de escasa viabilidad futura, otra mirando hacia el futuro con mucha confianza, aunque carecía de un programa de acción concreto, salvo sus pronunciamientos en favor de un gobierno fuerte. Ante la posibilidad de que los liberales ganaran las elecciones en 1928 – y las subsiguientes – los conservadores tenían dos opciones: convertirse en una oposición armada o buscar un acomodo que les permitiera cuando menos alguna incidencia en la toma de decisiones gubernamentales. Esta situación ambivalente sería explotada por Somoza a partir de 1934, cuando ofreció encabezar un gobierno de unidad nacional, situado por encima de las disputas y las facciones políticas.

El Partido Liberal, excluido del poder desde 1910, no estaba exento de las luchas internas que afectaban al Partido Conservador. Sin embargo, después de 1911, el principal desafío de los liberales era retornar al poder y, sobre todo, ganarse la confianza de Estados Unidos, que identificaba liberalismo y zelayismo. Tomar el poder por la vía armada, tal como Zelaya había hecho en 1893, no era una opción viable para los liberales, pues Estados Unidos no toleraría el derrocamiento del gobierno. Por tanto, ¿cuál era su única alternativa? Ésta era emprender una labor organizativa para ampliar las bases del partido, y movilizar grupos sociales hasta entonces excluidos del proceso político. Mientras los conservadores se permitían ignorar las demandas populares, confiados en el respaldo de Estados Unidos para mantenerse en el poder, los liberales se dedicaron al trabajo político entre los artesanos urbanos, los profesionales de estratos medios y los trabajadores agrícolas – especialmente en áreas donde predominaban los pequeños agricultores y los trabajadores asalariados.

El Partido liberal se hallaba excluido del gobierno y sujeto a diversas formas de persecución; por tanto, su primera preocupación era velar por la integridad y el bienestar de sus correligionarios. En consecuencia, aprobó una serie de medidas dirigidas a fortalecer los lazos entre su membresía, en una convención celebrada en Managua el 22 de agosto de 1913. Entre las resoluciones de dicha convención, el partido instó a sus miembros a socorrer a los liberales que hubiesen sufrido “ataques del poder público”, como si se tratara de un hermano necesitado. Asimismo, los exhortó a crear asociaciones de ayuda mutua para asistir a los lisiados de guerra, así como a las viudas y huérfanos. El Partido acordó, además, contribuir al establecimiento de cooperativas en beneficio, sobre todo, de artesanos y obreros liberales, así como a la apertura de escuelas para artesanos para divulgar los principios del liberalismo.³² El Partido Liberal desarrolló su mayor actividad organizativa en la región de León, donde se fundó un sindicato obrero en 1913; iniciativa que se reprodujo posteriormente en Granada, Managua y Chinandega. En alguna medida, el Partido Liberal obtuvo el apoyo de los obreros como resultado de su posición nacionalista de repudio a la intervención de Estados Unidos.³³

Sin embargo, el Partido Liberal no logró atraer a todos los obreros. En 1918, se fundó la Federación Obrera Nicaragüense (FON), conformada sobre todo por artesanos, organizados en diversos sindicatos y sociedades mutualistas. La FON estableció contactos internacionales con la American Federation of Labor (AFL) de Estados Unidos y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). Esto provocó la escisión del Grupo Socialista, cuyos elementos más radicales exigían una línea de mayor independencia frente a las alianzas nacionales e internacionales. Otros obreros y artesanos se aglutinaron en torno al movimiento Obrerismo Organizado, fundado en 1923 por Sofonías Salvatierra – un miembro del Partido Liberal que anteriormente había establecido una escuela para obreros en Managua. El Obrerismo siempre mantuvo una posición claramente nacionalista, de rechazo a la injerencia estadounidense en Nicaragua; sin embargo, su plataforma reivindicativa era modesta. Promovía la creación de sociedades mutualistas, escuelas y cooperativas de ahorro y préstamo para cohesionar y beneficiar a los obreros. En

otras palabras, la organización fundada por Salvatierra no se proponía cambiar la estructura social vigente, sino tan sólo mejorarla. Salvatierra no ocultaba su posición anti-marxista, pues rechazaba la lucha de clases y la solidaridad obrera internacional, así como la actividad partidista dentro de los sindicatos obreros; por ejemplo, se oponía a la celebración del Día del Trabajo el 1 de mayo.³⁴

Es necesario cuidarse de sobrevalorar los vínculos entre el Partido Liberal y la clase obrera organizada, pues ésta no pasaba de ser una fracción de la población total. Por otra parte, la línea política del Partido era muy convencional, enmarcada en la defensa de un conjunto de derechos ciudadanos: habeas corpus, sufragio universal directo y secreto, libertad de expresión, asociación, movimiento y comercio, e inviolabilidad de la propiedad privada. Asimismo, el Partido promovía la educación pública y secular, la separación de la iglesia y el estado, el matrimonio y divorcio civiles, y la independencia de los poderes del estado. Otros puntos prioritarios para los liberales – destacados en la declaración de principios del Partido – contemplaban la promulgación de una ley electoral que evitase el fraude en las urnas, el otorgamiento de los derechos políticos a la mujer y la estricta separación del ejército de la política partidista. Asimismo, demandaban una serie de medidas de seguridad social en beneficio de los obreros y asalariados de clase media, como la creación de un montepío nacional, planes de jubilación y leyes para regular las prestaciones de los obreros y la seguridad industrial.³⁵

Si bien la ideología y el programa de acción del Partido Liberal eran aceptables, en general, el crecimiento de su base popular de apoyo se vio obstaculizado por las características estructurales de la sociedad nicaragüense, que lo afectaron en mayor grado que al Partido Conservador, debido a la situación de desventaja política en que se encontraba. Un análisis somero de algunas estadísticas demográficas de la Nicaragua de las décadas de 1910 y 1920 indica que la sociedad todavía se manejaba bajo patrones tradicionales de dominación y control político. El censo de 1920, a pesar de sus deficiencias, ofrece alguna información acerca del empleo y la distribución de la población que indica la existencia de una proporción abrumadora de población rural y de una fuerza de trabajo bajo el control de cau-

dillos terratenientes. En 1920, cerca del 80% de la fuerza de trabajo nicaragüense se dedicaba a labores agrícolas, ya sea como propietaria (32%) o como asalariada (47%). Solamente el 9.6% del total de la fuerza de trabajo se registró como artesanos u obreros industriales.³⁶ El 11% restante se dedicaba a profesiones varias, al comercio, a la minería (solamente el 0.5%) y a trabajos de oficina.

Un desglose más detallado de la fuerza de trabajo por departamento explicará algunas variaciones regionales que incidieron en el desarrollo político. (Ver cuadro 1.) En primer lugar, la proporción más alta de agricultores, ganaderos y otros que poseían o alquilaban sus tierras se encontraba en los departamentos norteños de Nueva Segovia y Jinotega; en consecuencia, estos departamentos presentaban la proporción más baja de asalariados agrícolas o “jornaleros”, al igual que una de las proporciones más bajas de artesanos y obreros industriales. Fue en estos departamentos que Sandino se movió con más éxito durante los años 1927-1933. El carácter peculiar de estos departamentos puede explicarse, en alguna medida, por su condición de frontera agrícola; desplazados por la expansión del cultivo del café en las regiones centrales y por las haciendas ganaderas y cerealeras de León y Chinandega, los obreros y sus familias emigraron en busca de tierras hacia Nueva Segovia y Jinotega. Matagalpa, que también forma parte de la región septentrional del país, presenta una proporción mucho mayor de obreros asalariados, como resultado de la temprana expansión del cultivo cafetalero.

En segundo lugar, las proporciones más elevadas de obreros agrícolas se encontraban en Estelí y Chinandega; ambos departamentos, enmarcados dentro de la zona de influencia de León, debieron aportar un buen número de votos para los caudillos liberales de la región, en vista de la alta proporción de peones y la concentración de la propiedad rural (Chinandega tenía la proporción más baja de propietarios en relación a obreros agrícolas en todo el país). Las áreas sujetas a la influencia de Granada – los departamentos de Chontales y Rivas – presentaban una situación similar a la de Chinandega y Estelí, pues tenían una concentración relativamente alta de la propiedad de la tierra y una proporción considerable de asalariados agrícolas.

En tercer lugar, la proporción más alta de artesanos y obreros industriales se encontraba en aquellos departamentos donde se ubicaban las principales ciudades: Granada, Managua, Chinandega y León. Masaya también se destaca, debido a su larga tradición de producción artesanal. En vista de que todos, con la excepción de Granada, se encontraban en zonas de preeminencia liberal, no es sorprendente de que el movimiento obrero en sus etapas iniciales se identificara sobre todo con ese partido político.

Por lo tanto, podemos suponer que, en líneas generales, buena parte de la población se encontraba bajo la influencia de caudillos y políticos regionales, tanto conservadores como liberales. Muy pocos integrantes de la fuerza de trabajo eran autónomos en términos políticos, o gozaban de suficiente independencia económica como para actuar con criterio propio. Fue dentro de este reducido grupo social que el Partido Liberal buscó ampliar su base política. Hacia 1928, resultaba evidente que el Partido Liberal contaba con más seguidores que el Partido Conservador. En efecto, en las elecciones celebradas ese año, el candidato liberal, José María Moncada, obtu-

Cuadro 1.1. Distribución regional de algunos empleos, 1920

Departamento	Agricultores, ganaderos y otros		Jornaleros		Artesanos y obreros	
	número	porcentaje	número	porcentaje	número	porcentaje
Bluefields	2,907	23.4	7,250	58.3	719	5.8
Carazo	3,058	27.4	6,179	55.4	926	8.3
Chinandega	3,334	19.0	10,426	59.3	2,161	12.3
Chontales	8,490	34.9	13,100	53.9	1,547	6.4
Estelí	3,410	30.9	7,102	64.3	289	2.6
Granada	2,040	16.4	4,120	33.1	2,320	18.6
Jinotega	5,768	62.9	2,695	29.4	441	4.8
León	7,125	26.7	11,114	31.7	3,333	12.5
Managua	5,302	21.6	10,179	41.5	4,636	18.9
Masaya	5,929	44.4	4,172	31.2	1,441	10.8
Matagalpa	9,575	39.7	12,854	53.3	692	2.9
Nva. Segovia	9,074	62.3	4,002	27.5	1,160	8.0
Rivas	2,397	21.4	6,288	56.1	939	8.4

Fuente: Oficina Central del Censo, Censo general de 1920 (Managua: Tipografía Nacional, 1920). No se incluyen dos pequeñas subdivisiones políticas en la Costa Atlántica: Comarca Gracias a Dios y Comarca San Juan del Norte. Los porcentajes no suman cien porque se ha dejado fuera algunas categorías de la fuerza de trabajo.

vo 76,676 votos, mientras que su contrincante conservador, Adolfo Benard, recibió tan sólo 56,987. Esta fue la primera elección supervisada por funcionarios de Estados Unidos, y ambos candidatos reconocieron la imparcialidad y honestidad del proceso. La siguiente elección presidencial celebrada en 1932 – también bajo la supervisión norteamericana – arrojó resultados similares: 76,269 votos a favor del liberal Juan Bautista Sacasa y 53,845 para el conservador Adolfo Díaz.³⁷

La elección supervisada de 1932 coincidió con la decisión de Estados Unidos de retirar su contingente de infantería de marina, entregar la dirección de la Guardia Nacional a oficiales nicaragüenses y dejar que la política nicaragüense se desarrollara sin una presencia estadounidense directa y visible. Asimismo, la decisión de Sandino de llegar a un acuerdo con el gobierno nicaragüense y entablar conversaciones con el nuevo jefe director de la Guardia, Anastasio Somoza, tuvo una gran importancia en el desarrollo político de Nicaragua. La crisis económica mundial también fue un factor determinante en el curso de los acontecimientos, pues hacia 1932 las exportaciones de Nicaragua se hallaban muy golpeadas, por lo que diversos sectores sociales exigían al gobierno tomar cartas en el asunto. Si bien el Estado nicaragüense se había formado bajo los dictados del protectorado estadounidense, en esta encrucijada empezó a actuar por cuenta propia. Al parecer, Estados Unidos había alcanzado sus metas en Nicaragua: un presidente electo constitucionalmente ocupaba la primera magistratura, una fuerza armada sin compromisos partidistas había frenado el avance de las fuerzas sandinistas, dos elecciones consecutivas habían demostrado que la cultura política nicaragüense no era incompatible con los enunciados de la democracia liberal, y las finanzas del país estaban bajo la administración de instituciones sólidas y responsables. Era de esperar que todo saldría bien...

CITAS Y NOTAS:

1. El análisis que sigue sobre la historia colonial de Nicaragua se basa en: Radell, "An Historical Geography of Western Nicaragua," pp. 59-64, 97-98, 112-122, 137-139 y 148-157; Woodward, *Central America*, pp. 29-30 y 35-39; y MacLeod, *Spanish Central America*, pp. 51-55 y 277-279.

2. Wortman, *Government and Society in Central America*, capítulo 6.

3. Ibid., p. 205. Una excelente colección de documentos relativos a la independencia de Centroamérica se encuentra en Meléndez, *Textos fundamentales de la independencia centroamericana*.

4. Un análisis detallado de los problemas subyacentes en este conflicto se encuentra en Woodward, *Central America*, pp. 88-111. También puede consultarse a Gallardo, *Las constituciones de la República Federal de Centro-América*, que contiene un análisis de las experiencias federales en Centroamérica y una antología de todas las constituciones federales. La obra de Karnes, *The Failure of Unión*, ofrece una amplia perspectiva histórica de las fuerzas que propiciaban y rechazaban la unión política del istmo.

5. Wortman, *Government and Society in Central America*, pp. 235-36.

6. Ibid., p. 271.

7. Velásquez, "La incidencia de la formación de la economía agroexportadora", pp. 12-13. Puede también consultarse a Lanuza, "La formación del estado nacional en Nicaragua," pp. 99-109.

8. Humberto Belli, "Un ensayo de interpretación sobre las luchas políticas nicaragüenses", pp. 13-14.

9. Velásquez, "La incidencia de la formación de la economía agroexportadora," pp. 13-14 y 19.

10. Barahona Portocarrero, "Estudio sobre la historia contemporánea de Nicaragua," p. 32.

11. Stansifer, "Una nueva interpretación de José Santos Zelaya." Un análisis detallado de las políticas del régimen de Zelaya se encuentran en Teplitz, "The Political and Economic Foundations of Modernization in Nicaragua."

12. Barahona Portocarrero, "Estudio sobre la historia contemporánea de Nicaragua," p. 33.

13. Nicaragua Sugar Estates, Ltd., Ingenio San Antonio, pp. 4-5.

14. El derrocamiento de Zelaya ha sido ampliamente estudiado. Entre los escritos que pueden consultarse se encuentran: Cox, *Nicaragua and the United States*, pp. 707-710; Findling, "The United States and Zelaya," capítulo 8; y U.S. Department of State, *The United States and Nicaragua*, pp. 6-7. Un análisis de los objetivos más amplios de Estados Unidos en Centroamérica y, en particular, en Nicaragua, se encuentran en Callcott, *The Caribbean Policy of the United States*, capítulo 5, y Langley, *The United States and the Caribbean*, capítulo 2.

15. El texto de estos acuerdos se encuentra en Decimal Files, 27 October 1910, 817.00/1469 1/2, General Records of the U.S. Department of State, Record Group 59, National Archives, Washington, D.C.

16. Pedro Belli, "Prolegómeno para una historia económica," pp. 5-6. Un estudio exhaustivo de la política fiscal de Estados Unidos en Nicaragua puede leerse en Hill, *Fiscal Intervention in Nicaragua*; una perspectiva más amplia de los intereses estratégicos estadounidenses y su relación con el tema fiscal se encuentra en Tulchin, *The Aftermath of War*, capítulo 5.

17. Pedro Belli, "Prolegómeno para una historia económica," pp. 7, 19-20. Una descripción general de la economía nicaragüense durante la década de 1920 se encuentra en Cumberland, *Nicaragua: an Economic and Financial Survey*.

18. Valle Martínez, “Desarrollo económico y político,” pp. 19-20.

19. Ibid., pp. 22-25.

20. Puede consultarse a Frazier, “The Dawn of Nationalism and its Consequences in Nicaragua,” pp. 132-183, quien analiza detenidamente el papel que jugó Estados Unidos en la selección de los presidentes nicaragüenses y la organización de los eventos electorales.

21. Nicaragua, Ley electoral, LG/DO 27,71-74 (3-6 de marzo de 1923).

22. Véase, por ejemplo, Stimson, *American Policy in Nicaragua*, pp. 8-12.

23. Una explicación convincente, pero apologética, de la política de Estados Unidos hacia Nicaragua se encuentra en Stimson, *American Policy in Nicaragua*, pp. 90-129. También puede consultarse a Kamman, *A Search for Stability*, y Munro, *The United States and the Caribbean Republics*, capítulos 5 y 6.

24. Valle Martínez, “Desarrollo económico y político,” pp. 26-27.

25. Stimson, *American Policy in Nicaragua*, pp. 56-57, 63-64.

26. Ibid., pp. 71-72, 78-79.

27. Millett, *Guardians of the Dynasty*, pp. 70-71.

28. Cuadra Pasos, *Posibilidades de existencia del comunismo en Nicaragua*, pp. 4-7.

29. Cuadra Pasos, *Obras*, pp. 572-573.

30. Cuadra Pasos, *Posibilidades de existencia del comunismo en Nicaragua*, pp. 12-13.

31. José Coronel Urtecho, entrevista en Managua, 28 de noviembre de 1984. También puede consultarse a Tirado, Conversando con José Coronel Urtecho, pp. 112-118.

32. Partido Liberal Nacionalista, *Estatuto constitutivo*, artículos 4 y 14.

33. Gutiérrez Mayorga, "Dos etapas en la historia del movimiento obrero de Nicaragua," pp. 161-164.

34. Ibid., pp. 166-168 y 185-192

35. Partido Liberal Nacionalista, *Estatuto constitutivo*, pp. 21-32.

36. Cálculos basados en el censo de 1920. Cantarero, quien utilizó los mismos datos censales, estima que el 84% de todos los nicaragüenses estaban dedicados a la agricultura pero solamente un 8.4% a la manufactura. Cantarero, "The Economic Development of Nicaragua," p. 61.

37. Dodd, *States in Nicaraguan Politics*, p. 212.

CAPÍTULO II

Los orígenes de la dictadura

Los sucesivos triunfos de los liberales en las elecciones celebradas en 1928 y 1932 bajo la supervisión de Estados Unidos, evidenciaron el apoyo mayoritario de los nicaragüenses hacia ese partido. Los liberales se mostraron muy satisfechos por la elección de Sacasa a la presidencia en 1932, pues los derechos políticos de este candidato habían sido conculcados por el golpe de Estado perpetrado por Emiliano Chamorro en 1925. Pero el voto a favor de Sacasa no puede interpretarse como prueba de la solidez del régimen en sí. Más bien, Sacasa llegó a la presidencia en el peor momento posible, cuando Nicaragua sufría los efectos de la crisis económica y de la guerra contra Sandino en el norte del país. Por otra parte, la presidencia de Sacasa fue producto, hasta cierto punto, de componendas y negociaciones previas entre liberales y conservadores.

A. Reconciliación política y enfrentamiento armado

A partir de abril de 1932, dirigentes políticos de ambos partidos se reunieron para discutir posibles fórmulas que garantizaran una transición presidencial tranquila, ante la inminente salida de la infantería de marina estadounidense en enero de 1933. Buena parte del debate se centró en el problema de la representación del partido minoritario dentro de las diversas ramas del gobierno nacional. En la mesa de negociaciones estaba en juego el número de diputados y

senadores que corresponderían al partido perdedor en el Congreso Nacional, la distribución de los cargos en los concejos municipales y la filiación política de los jueces de la Corte Suprema y de diversos juzgados menores, como también una multitud de cargos burocráticos ocupados por liberales y conservadores. Al cabo de varias reuniones, el 30 de junio de 1932 se pactó un acuerdo general entre los candidatos a presidente y vicepresidente, mediante el cual aceptaron el principio de la representación de la minoría como un aspecto fundamental del sistema político, y se comprometieron a incluir dicho principio en la Constitución. Acordaron, además, que en aras de la reconciliación nacional los miembros del partido perdedor recibirían un trato “justo y amigable” después de las elecciones. Finalmente, los de la minoría se empeñaron en ejercer toda su influencia sobre aquellos sectores que se mostrasen inconformes con los resultados, a fin de lograr su apoyo al gobierno nacional y su cooperación en el mantenimiento de la paz.

Un segundo acuerdo, firmado el 3 de octubre de 1932 por el candidato presidencial Sacasa y su contrincante conservador Adolfo Díaz, estipuló medidas muy concretas a tomarse después de las elecciones. Entre las decisiones más importantes cabe destacar la de enviar de inmediato una comisión bipartidista para negociar la paz con Sandino. Además, se acordó que la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los jueces de las Cortes de Apelación de León y Bluefields debían ser liberales, pero los conservadores podrían ocupar la mayoría de los cargos en las Cortes de Apelación de Granada y Matagalpa. Por otra parte, se convino en otorgar al partido minoritario representación en el Poder Ejecutivo mediante la formación de dos comisiones bipartidistas que supervisarían el funcionamiento de las secretarías de Relaciones Exteriores y Finanzas. El acuerdo estableció, asimismo, la obligación de cada partido de integrar sus listas de candidatos a concejos municipales con un tercio de individuos del otro partido. Finalmente, se acordó reformar la Constitución Política, a fin de institucionalizar dichos procedimientos de representación del partido minoritario. En negociaciones posteriores se acordó que el candidato presidencial perdedor pasaría automáticamente a ocupar la presidencia del Senado, así como elevar a las autoridades electorales en un poder independiente dentro del gobierno, garantizando la representación de la minoría dentro del mismo.¹

Años más tarde, Anastasio Somoza se ocuparía de refinar este tipo de acuerdos preelectorales, para sacar ventaja en sus tratos con la oposición. Sin embargo, las negociaciones desarrolladas en torno a la elección de Sacasa en diciembre de 1932, reflejaban más bien la fragilidad de las instituciones políticas mediante las cuales se escogía al gobierno y, en consecuencia, la necesidad de echar mano de recursos extra-institucionales para asegurar los reacomodos políticos. Mediante dicho acuerdo, el Partido Liberal – que gozaba del control del gobierno y anticipaba con mucha confianza la victoria de su candidato presidencial en 1932 – obtuvo garantías de que los conservadores no impugnarían los resultados con demasiada insistencia, ni intentarían derrocar a un gobierno en el cual tenían una participación directa. Por su parte, los conservadores ganaron la posibilidad de objetar la aplicación de los principios liberales que no eran de su agrado, y de retener en la nómina de empleos públicos a algunos miembros de su partido. Además, los conservadores podrían aspirar a reconquistar el poder político en futuras elecciones, sin verse obligados a recurrir a la revuelta armada. Pero en los acuerdos se olvidó tomar en cuenta a Sandino y a Somoza, quien ya ocupaba el cargo de director adjunto de la Guardia Nacional. Ninguno fue consultado, y el sentir de sus respectivos cuerpos armados fue ignorado mientras se discutían y suscribían dichos acuerdos. Como resultado de este error los acuerdos no pasaron de ser letra muerta, pues solamente Sandino y Somoza controlaban los elementos de coerción necesarios para imponer su autoridad. Correspondió a Sacasa – apenas asumió la presidencia, el 1 de enero de 1933 – enfrentar el problema de la existencia de dos ejércitos en Nicaragua, encabezados por personas que tenían proyectos políticos marcadamente distintos.

La más poderosa de estas dos fuerzas era, sin duda alguna, la Guardia Nacional. En 1927, Washington había encargado a los oficiales de la infantería de marina de Estados Unidos la tarea de organizar dicho cuerpo policial – o “constabularia”, según el término utilizado en aquella época – como una institución apartidista. Pero, en vista de las dificultades para cumplir este objetivo, en noviembre de 1932 ambos partidos acordaron que el cuerpo de oficiales de la Guardia Nacional debía estar integrado por igual número de conservadores como de liberales. En consecuencia, los candidatos presidencia-

les Díaz y Sacasa elaboraron sendos listados con los nombres de las personas a quienes – en caso de ganar las elecciones – designarían para ocupar los cargos más altos dentro de la Guardia, cuidándose de incluir igual número de miembros de cada partido en dichas listas. Sin embargo, el presidente electo tendría plena libertad para escoger al oficial que debía ocupar el cargo de jefe director, por lo que la tradición nicaragüense del partidismo de las fuerzas armadas no se vio alterada con la gestación de este nuevo ejército.

De acuerdo a otro compromiso suscrito por Sacasa y Díaz (en presencia del ministro estadounidense Matthew Hanna, y de Anastasio Somoza, ministro de Relaciones Exteriores y representante del gobierno de Moncada), el futuro presidente electo conservaría a la Guardia como la única fuerza armada del país y respetaría el carácter apolítico de la oficialidad – condición ya viciada por el acuerdo previo que obligaba al nombramiento de oficiales de ambos partidos. Asimismo, dicho acuerdo otorgaba al presidente la facultad de nombrar al estado mayor, de común acuerdo con el jefe director. Una vez electo, el presidente Sacasa enfrentó la grave decisión de escoger al nuevo director de la Guardia Nacional que debía reemplazar al general estadounidense Calvin B. Matthews. Aunque en teoría Sacasa gozaba de plena libertad para escoger a la persona que considerase más conveniente, en la práctica, el nombramiento del jefe director fue resultado de un complejo proceso de consultas entre el presidente Moncada, el mismo general Matthews y el ministro estadounidense Hanna, todos ellos partidarios de Somoza. Al parecer, Sacasa permaneció al margen de dicho proceso; quizás su parentesco con Salvadora Debayle Sacasa, esposa de Somoza, lo inclinó a aceptar su nombramiento, aunque es casi seguro que el nuevo jefe director no figuraba entre los principales candidatos del presidente electo.

Por otra parte, Sacasa violó los acuerdos de noviembre de 1932, al colocar a un mayor número de liberales como jefes de tropa, pese al compromiso previamente adquirido de distribuir tales cargos en forma equitativa con el partido minoritario. Como resultado, tanto el jefe director, como tres de los cinco coroneles y seis de los ocho mayores de la Guardia Nacional nombrados por Sacasa pertenecían al Partido Liberal, ubicando claramente a esta fuerza armada al lado

de dicho partido a raíz de su traspaso a mandos nicaragüenses. Sin embargo, el problema para Sacasa radicaba en el poco control efectivo que ejercía sobre la Guardia. Dicho control decrecería aún más con el paso del tiempo, mientras el de Somoza aumentaba sin cesar. Además, la Guardia era una fuerza poderosa en un país que, en buena medida, había sido desarmado a raíz del acuerdo de Tipitapa de 1927. En febrero de 1933, la Guardia contaba con más de 4,000 efectivos y su armamento consistía de 259 ametralladoras, 54 subametralladoras, 23 fusiles automáticos y 4,474 fusiles corrientes. En consecuencia, se inició un candente debate dentro del poder legislativo y en los medios de comunicación, en los que se criticó el costo de mantenimiento de semejante ejército de línea.²

En el lado contrario se hallaba Sandino, cuyas fuerzas habían alcanzado un alto nivel de organización hacia 1932, llegando incluso a operar en las márgenes septentrionales del lago de Managua en varias ocasiones. En 1931, las columnas sandinistas habían efectuado incursiones exitosas en la costa Atlántica, destruyendo minas y plantaciones bananeras de empresas estadounidenses. La administración del presidente norteamericano Hoover había anunciado su decisión irrevocable de retirar la infantería de marina de Nicaragua el 1 de enero de 1933. Por tanto, los dirigentes de los Partidos Liberal y Conservador estaban conscientes de la impostergable necesidad de concluir la guerra a través de la negociación. El propio Sandino nunca rehuyó las conversaciones de paz; la única condición previa que exigía para iniciar la búsqueda de una solución política al conflicto era el retiro de las fuerzas estadounidenses del territorio nicaragüense. Por lo tanto, tal como era de esperarse, las acciones militares sandinistas disminuyeron a raíz de la elección de Juan Bautista Sacasa como presidente de la República, en noviembre de 1932.³ Casi de inmediato, Sandino y los representantes de Sacasa intercambiaron notas para sostener una conferencia de paz a la mayor brevedad posible. El hecho de que Sandino se haya mostrado dispuesto a negociar cuando su fuerza militar se encontraba en un punto álgido, mientras que el retiro de las tropas estadounidenses había debilitado la posición del gobierno, ha generado un debate en cuanto a los objetivos concretos del líder guerrillero. Sin duda, la preocupación fundamental de Sandino era la presencia de tropas extranjeras en su país, y la razón de ser de

su lucha perdería mucha fuerza con la evacuación de los soldados estadounidenses. Además, Sandino rechazaba tajantemente el gobierno de Moncada, pues ante sus ojos, éste era el traidor que había abierto las puertas a la intervención estadounidense al suscribir el pacto del Espino Negro en Tipitapa. Sin embargo, para Sandino era factible negociar con el presidente Sacasa, quien no se había manchado personalmente en los hechos de 1927, aun cuando se desempeñó como embajador de Nicaragua en Washington durante todos los años de la presidencia de Moncada.⁴

La decisión de Sandino de buscar una salida negociada también obedeció a otras consideraciones prácticas. En primer lugar, sus solicitudes de apoyo habían sido desoídas por los gobiernos latinoamericanos. Ni siquiera México – adonde Sandino acudió personalmente en 1930 – se mostró dispuesto a enviarle ayuda material, a diferencia de lo ocurrido durante la revuelta liberal de 1926. Como resultado de las tremendas presiones que Estados Unidos ejerció sobre el gobierno de Portes Gil, Sandino apenas pudo radicarse en Yucatán en calidad de “exilado”; su única visita a la ciudad de México en enero de 1930 fue infructuosa, y en mayo se vio obligado a regresar a Nicaragua con las manos vacías. En segundo lugar, sin lugar a dudas el ejército de Sandino se hallaba agotado, escaso de municiones y armas. Los objetivos del movimiento no eran muy claros para la tropa, por lo que ésta “con demasiada facilidad equiparó la retirada de la infantería de marina con el triunfo total de la causa sandinista”.⁵ En tercer lugar, las negociaciones eran una alternativa nada despreciable para Sandino, pues sabía que el presidente electo Sacasa no podía postergar la conclusión de la guerra, dada la fuerte crisis económica que golpeaba al país. Por su parte, Sacasa debió saber que Sandino no representaba una amenaza a escala nacional, pues el principal teatro de acción y la retaguardia política de sus fuerzas se encontraban circunscritas a la región septentrional de Nicaragua. En términos estrictamente militares y políticos, Sandino era un fenómeno regional, aun cuando el accionar de sus columnas desbordase el departamento de las Segovias en los últimos años de su lucha. A decir verdad, el resultado de las conversaciones de paz confirmarían la posición real de Sandino dentro del Estado nicaragüense: la de un caudillo regional con el cual transó el gobierno central.

El acuerdo entre el gobierno nacional encabezado por Sacasa y el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional liderado por Sandino, otorgó a este último el control sobre una región en las riberas del río Coco, donde tendría derecho a organizar cooperativas agrícolas para sus seguidores. Asimismo, se le permitió conservar una fuerza armada de cien hombres por un plazo de un año, al cabo del cual el gobierno nacional tendría la opción de desmovilizarla, reducir su tamaño o colocarla bajo nuevos oficiales. El resto de la tropa de Sandino entregaría todas sus armas a Sofonías Salvatierra, el ministro de Agricultura y Trabajo quien fungía también como delegado presidencial en los departamentos del norte. Salvatierra se había desempeñado como intermediario entre Sacasa y Sandino y disfrutaba de la confianza del jefe guerrillero. El 22 de febrero de 1933, Sandino desmovilizó su ejército en San Rafael del Norte; Salvatierra recibió un total de 337 fusiles, 2 ametralladoras y 16 rifles automáticos, así como 3,000 balas. Una parte de estos pertrechos le fueron devueltos a Sandino para equipar a los cien hombres que conservaría bajo su mando. Sin embargo, surgieron dudas en cuanto a la entrega de la totalidad de las armas del Ejército Defensor, pues unos 1,800 combatientes sandinistas se desmovilizaron ese mismo día.⁶

*El país entero recibió con júbilo el acuerdo de cese al fuego, así como el posterior arribo de Sandino a Managua el 2 de febrero de 1933. Miles de habitantes de la capital se congregaron a lo largo de la ruta hacia el aeropuerto, y presenciaron emocionados a Sandino mientras se dirigía a la casa presidencial, acompañado por el jefe director de la Guardia, Anastasio Somoza. Tanto el Partido Liberal como el Conservador emitieron proclamas aplaudiendo la “noble y patriótica actitud” del general Sandino.⁷ El sector privado también manifestó su optimismo. En las páginas del *Mercurio* —órgano mensual de la Cámara de Comercio de León— se felicitó efusivamente a Sacasa por su triunfo electoral, enfatizando la necesidad de alcanzar la paz a cualquier costo. Cabe señalar que el año anterior, a través de esta misma publicación, se había solicitado al gobierno de Washington el envío de más pertrechos a las fuerzas armadas de Nicaragua, para eliminar a los “bandoleros” que habían causado mucho daño a la cosecha del café en el norte.⁸

A fin de revestir el acuerdo de paz de mayor peso legal, Sacasa solicitó al Congreso otorgar una amnistía general a todos los participantes en la guerra. Además de beneficiar a los soldados de la Guardia Nacional y del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, la amnistía también abarcaba a todos aquellos encarcelados o exiliados por apoyar la causa del sandinismo. Dicho proyecto de ley provocó un debate en la Cámara de Diputados en torno a la forma de distinguir las fechorías cometidas por bandoleros comunes de las acciones bélicas, propiamente tales. Algunos diputados comprendieron el problema en términos de conveniencia nacional, considerando que la violencia en el norte del país podría continuar en caso de no aprobarse la amnistía. En el Senado, varios legisladores expresaron su preocupación por la concesión hecha a Sandino de conservar una fuerza militar de cien hombres, pues ésta quedaría fuera del control de la Guardia. Otros se mostraron inconformes con la entrega de tierras a los sandinistas, criticando el establecimiento de un precedente peligroso. Sin embargo, la necesidad de terminar con el conflicto prevaleció sobre estas objeciones, y ambas cámaras votaron en favor del decreto de amnistía, tal como lo propuso el presidente.⁹

De esta manera llegó la paz a Nicaragua después de seis años de guerra civil e intervención extranjera, que costó la vida a 136 infantes de marina – aunque sólo 47 de ellos perecieron en enfrentamientos armados – y 75 guardias, lo mismo que a 1,115 sandinistas.¹⁰ Sin embargo, el cese de hostilidades no significó la ausencia de conflictos en los meses subsiguientes. Ocasionalmente, en los departamentos del norte, las patrullas de la Guardia entraban en choques armados con columnas sandinistas, provocando más muertes. Los informes de inteligencia de la Guardia continuaron refiriéndose a los reductos sandinistas como “posiciones de elementos enemigos” y a los seguidores de Sandino como “bandoleros”.¹¹ Para Somoza y la Guardia, la guerra no había terminado; y para Sandino, la Guardia representaba una amenaza constante. A comienzos de 1934, Sandino declaró que la Guardia era “inconstitucional”, por lo que debía ser reestructurada. Por su parte, Somoza acusaba a Sandino de violar los acuerdos de paz de 1933, y le exigía la entrega de la totalidad de sus armas. Atrapado entre estas dos fuerzas se encontraba el presidente Sacasa.

La situación de Nicaragua había evolucionado hacia el enfrentamiento entre dos cuerpos armados: uno se arrogaba el monopolio del poder coercitivo del Estado, mientras el otro reclamaba el control exclusivo sobre una parte del territorio nacional. Sacasa intentó desempeñar un papel de mediador. Por una parte, proporcionó a Sandino armas y municiones para equipar a los cien hombres de su tropa; por otra, procuró apaciguar a Somoza concediéndole una cuantiosa partida del presupuesto nacional para la Guardia Nacional. Obviamente, Sacasa aprovechaba la coyuntura para fortalecer su propia posición, y neutralizar las manifiestas ambiciones políticas del jefe director de la Guardia, mientras éste se ocupaba de enfrentar a Sandino. Finalmente, movida por el odio hacia el líder guerrillero, la oficialidad de la Guardia decidió acabar con su vida. El plan se desarrolló durante una visita de Sandino a Managua para dialogar con Sacasa; Sandino fue capturado por un destacamento de guardias, quienes lo llevaron al aeropuerto de Managua y lo fusilaron la noche del 21 de febrero de 1934. Inmediatamente después, tropas de la Guardia cayeron sobre los poblados de los sandinistas en el río Coco donde mataron a centenares de personas y destruyeron viviendas e instalaciones agrícolas. Por el momento, Sandino y el sandinismo habían sido eliminados del territorio nicaragüense.¹²

B. El deterioro del control político civil

A raíz del asesinato de Sandino, Sacasa se encontró cara a cara con Somoza. Durante los dos años siguientes, Sacasa y Somoza ejecutarían diversas maniobras políticas, buscando influenciar a su favor al ministro estadounidense, ordenando cambios en la oficialidad de la Guardia y fortificando sus respectivas residencias.¹³ Sin embargo, la manifestación más visible de su rivalidad política giró en torno al control del Congreso Nacional. Cada uno tenía sus respectivos seguidores en ambas cámaras; con el tiempo, aumentó el número de los allegados a Somoza. Esta tendencia se manifestó en el curso de dos debates en el Congreso. El primero ocurrió el 23 de mayo de 1934, cuando un diputado conservador afirmó que el país se encontraba completamente tranquilo bajo el pleno control de la Guardia. Por tanto, solicitó a la Cámara de Diputados poner fin al estado de sitio decretado por el presidente Sacasa. Asimismo, sostuvo que el gene-

ral Somoza compartía su criterio, pues así se lo había manifestado personalmente poco antes. A esto, un grupo de diputados liberales respondió que debía prevalecer la opinión del presidente de la república sobre la de Somoza, quien no tenía derecho a inmiscuirse en asuntos políticos dada su condición de militar activo. La moción de levantar el estado de sitio fue rechazada por la Cámara, con una mayoría de 27 contra 15. Sin embargo, el debate continuó en la sesión del día siguiente, y los ánimos se caldearon cuando varios liberales acusaron a los conservadores de pretender instaurar una dictadura militar encabezada por Somoza.¹⁴ Al parecer, Somoza procuraba el apoyo de políticos conservadores sin poner en entredicho su lealtad formal al Partido Liberal.

En agosto se presentó una situación similar, en la que los aliados de Somoza salieron más airoso. En esta ocasión, el debate giró en torno a la propuesta de otorgar una amnistía general a favor de todos los participantes en “los acontecimientos de febrero” – un eufemismo para referirse al asesinato de Sandino. El proyecto de ley de amnistía fue presentado por un grupo de diputados, en contra de la voluntad expresa del presidente Sacasa, quien se empeñaba en llevar a juicio a los implicados en el asesinato. Sin embargo, tanto el Partido Conservador como un grupo de liberales se pronunciaron en favor de la moción, argumentando la conveniencia de echar dicho episodio al olvido en aras del interés nacional. Puesto que los “bandoleros” habían sido beneficiados con una amnistía en febrero de 1933 – argumentó el diputado liberal Carlos Pasos – era imposible negarle una concesión similar a los asesinos de los bandoleros. Tan sólo unos cuantos diputados defendieron la posición del presidente Sacasa, insistiendo en que era incorrecto decretar una amnistía cuando aún no habían concluido las investigaciones para identificar a los responsables de la muerte de Sandino. Finalmente, el debate se cerró cuando 33 diputados votaron a favor de la amnistía, y tan sólo 4 se opusieron.

El Partido Conservador razonó su voto a favor afirmando que el acuerdo de paz con Sandino constituía en sí mismo una prueba palpable de la “descomposición moral” de Nicaragua, pues subvertía las instituciones políticas del país al enfrentar a la Guardia con el po-

der ejecutivo. Calificaron de un error la entrega de tierras al “bandolero” Sandino, así como la concesión de permitirle conservar una fuerza armada personal al “estilo feudal”. Asimismo, los conservadores alegaron la inconveniencia de realizar una investigación exhaustiva del crimen, pues si bien nadie dudaba de la responsabilidad colectiva de la Guardia en la muerte de Sandino, el orden interno del cuerpo militar se vendría abajo ante la amenaza de un proceso judicial. Otorgando mayor importancia al aseguramiento del orden que a la búsqueda de la justicia, el partido Conservador se pronunció por un perdón absoluto.

Los argumentos del Partido Conservador reflejaban su percepción de lo que convenía al país en lo inmediato. En contraste, el diputado liberal Ildefonso Palma Martínez razonó su voto en contra de la amnistía desde una perspectiva de futuro, argumentando que el fusilamiento de Sandino era un delito en total contravención de la protección extendida por el presidente Sacasa al líder guerrillero:

“Los individuos que así procedieron [al matar a Sandino], por mandato superior o voluntad propia, violaron el decreto de amnistía que cobijaba el General Sandino contra cualquiera agresión y pusieron en injusto predicado la moralidad y el civismo de los nicaragüenses. Si no respetaron un decreto de amnistía que el Congreso emitió, faltaríamos a nuestro propio decoro si los favorecemos con una ley idéntica a la que deliberadamente violaron . . . Si nosotros incurrimos en el yerro de perdonarlos, sentamos precedentes de seguras y muy funestas consecuencias”.¹⁵

El proyecto de ley de amnistía general recibió el apoyo de una mayoría abrumadora en el Senado, incluso de parte de la banca conservadora, cuyo razonamiento refleja claramente la crisis que atravesaba el Estado nicaragüense. En efecto, los senadores conservadores argumentaron que el acuerdo firmado por Sacasa y Sandino en 1933 era una tregua, y no la conclusión definitiva de la guerra, pues el gobierno no asumió el control completo de la situación en el país “sino que quedaba al margen un elemento al mando del general Sandino, fuera del organismo legal, constituyendo un estado dentro

del Estado". Dicha situación se había evidenciado claramente cuando Sandino cuestionó la constitucionalidad de la Guardia Nacional — "el único ejército de Nicaragua", a juicio de los conservadores. Por otra parte, los conservadores manifestaron que la paz nacional se vería amenazada si se enjuiciaba al ejército, pues éste era "el poder de la República más fuerte en el orden material" y podría "repeler con violencia" cualquier fallo que le resultara adverso. En todo caso, concluían los conservadores, el asesinato de Sandino no era resultado de una acción individual sino de una empresa colectiva, cuya intención "meramente política" no podía ser castigada por la justicia. Por tanto, el decreto de amnistía era la manera más eficaz de resolver el problema y cerrar de una vez por todas este "período de agitación, salpica-do de crímenes, que fue dolorosísimo para la Patria".¹⁶

✧ En otras palabras, a juicio de los conservadores la Guardia Nacional se hallaba por encima de la ley o, más precisamente, sólo obedecía a su propia ley. Asimismo, sus argumentos reflejan la percepción de que la Guardia era la única garantía del orden público; pero que el orden interno de este cuerpo militar podría derrumbarse frente a una amenaza a su institucionalidad. En consecuencia, sus oficiales y tropas podrían dar un golpe de Estado o llevar a cabo actos de violencia. Por lo tanto, los conservadores insistían en la necesidad de evitar disposiciones que irritasen a este fuerte poder militar.

El proyecto de ley de amnistía fue vetado por Sacasa y su consejo de ministros, pero el Congreso rechazó el veto y el proyecto se convirtió en ley. En este momento, la autoridad de Sacasa comenzó a menguar. Su propio partido lo había despreciado en el Congreso, al inclinarse por respaldar a Somoza y a la Guardia. En lo sucesivo, los intentos del Presidente por controlar a Somoza tan sólo llevaron a aumentar la animosidad y desconfianza entre ambos.

C. El impacto político de la crisis económica

Además de los problemas estrictamente políticos que agobiaban a Sacasa, su administración enfrentaba el permanente acoso de los efectos de la crisis en la economía nicaragüense. El valor de las exportaciones de café — el principal rubro generador de divisas fuer-

tes – decayó de US\$5.9 millones en 1929 a un poco menos de US\$2.4 millones en 1934, aun cuando el volumen de la exportación del grano aumentó en este último año. Esta situación exigió una drástica reducción en las importaciones para mantener un balance comercial favorable. Durante el gobierno de Moncada, se estableció un control sobre el cambio de divisas bajo una comisión especial integrada por el ministro de Finanzas, el gerente general del Banco Nacional y el Re-caudador General de Aduanas. Dicha comisión ejercía un control selectivo sobre las exportaciones, y sólo permitía la salida de aquellos productos cuya venta en el extranjero garantizaba el retorno de divisas al país. Asimismo, prohibió toda operación de cambio de divisas vinculadas con actividades especulativas o importaciones innecesarias.¹⁷ En septiembre de 1932, la autoridad de la Comisión se hizo extensiva a un control directo de las importaciones, a fin de dar preferencia a los productos esenciales y las materias primas que requería el sector exportador.¹⁸ En general, el gobierno se afanaba en mantener la paridad del córdoba con el dólar estadounidense, pese a que la fuerte demanda de divisas excedía las exiguas reservas del país.

Por otra parte, el descenso en las importaciones trajo como consecuencia la reducción en los derechos aduaneros y, por tanto, en los ingresos fiscales del Estado. Los derechos aduaneros siempre habían representado una proporción considerable de los ingresos fiscales totales. (Ver el Cuadro 2.1.) Ante la falta de nuevos impuestos y la disminución de los ingresos internos, el gobierno se vio precisado a reducir sus gastos de manera dramática. Incluso, algunos servicios públicos fueron suspendidos totalmente, como fue el caso del sistema educativo estatal, que cerró sus puertas durante todo el año de 1932. Peor aún, en 1931 Managua fue estremecida por un terremoto, y después del sismo estallaron numerosos incendios, dañando la mayoría de las viviendas y edificios de la capital. El gobierno se vio obligado a invertir en la construcción de un nuevo palacio nacional y una nueva catedral, cuando las arcas públicas se encontraban más vacías.

Cuadro 2.1. Impuestos de importación e ingresos totales del gobierno
1925-1935 (en córdobas)

Año	Impuesto de importación	Ingresos totales del gobierno	% de impuestos a ingresos totales
1925	2,621,595	3,860,000	67.9
1926	2,592,203	4,443,630	58.3
1927	3,118,091	4,871,427	64.0
1928	4,146,066	5,987,583	69.2
1929	3,917,553	6,553,094	59.8
1930	2,771,799	4,975,928	55.7
1931	2,330,542	3,934,185	79.1
1932	1,681,365	4,666,000	36.0
1933	1,772,359	2,771,000	64.0
1934	1,915,003	2,844,000	67.3
1935	2,213,862	5,044,000	43.9

Fuente: Los impuestos de importación de 1926-1935 y los ingresos del gobierno de 1925-1931 han sido tomados de Recaudación General de Aduanas, Memoria para 1931, pp. 62 y 95. Los ingresos del gobierno para 1925 y 1932-1935 son de Luis Augusto Cantarero, "The Economic Development of Nicaragua, 1920-1947," tesis doctoral de State University of Iowa, 1948, p. 262.

La difícil situación fiscal del gobierno era tan sólo uno de los aspectos de la crisis económica nacional. Comerciantes, terratenientes, caficultores, ganaderos y asalariados se vieron afectados por la crisis, aunque en diferentes grados. El gobierno tomó algunas medidas para aliviar su situación, pero éstas fueron, por lo general, muy limitadas y tardías. En 1930, se fundó el Banco Hipotecario de Nicaragua por acuerdo del Congreso Nacional. El Banco recibió autorización para otorgar créditos con un máximo de 30 años de plazo, parte de los cuales serían destinados al sector agrícola (menos del 50%) y a las edificaciones urbanas (no más del 25%). Pocos meses después, el Banco fue cerrado por falta de fondos, reabriendo en 1934 gracias a una nueva inyección de recursos estatales. En este año, se estipuló que el banco debía destinar al menos un 70% de sus préstamos al sector agrícola.¹⁹ El gobierno también decretó la creación de un montepío nacional, conocido oficialmente como la Caja Nacional de Crédito Popular; cuya función era facilitar créditos hasta de C\$100 córdobas (equivalentes a cien dólares) garantizados por alguna prenda personal, a un plazo no mayor de seis meses y a un interés del 2%. Sin embargo, los fondos otorgados por el gobierno al montepío eran muy escasos, por lo que esta institución apenas sirvió

para sacar de apuros a algunos individuos que estaban atrasados en sus pagos al tendero o casero.²⁰ El gobierno también dispuso otras medias para beneficiar a los deudores; por ejemplo, prohibió a los prestamistas privados cobrar más del 9% de interés por los créditos otorgados, y embargar los salarios de los empleados públicos y privados que se encontrasen morosos.²¹ No es claro, sin embargo, si el gobierno contaba con los recursos materiales como para velar por el cumplimiento de estas disposiciones.

Obviamente, estas medidas eran insuficientes, por lo que muchas organizaciones y ciudadanos privados elevaron diversas propuestas al gobierno para superar la crisis. Algunos sugerían negociar más préstamos en Estados Unidos mientras se aumentaba el circulante en el país.²² Otros exigían solucionar problemas específicos, tales como los excesivos derechos aduaneros, la escasez de divisas para cancelar importaciones, y la falta de políticas para proteger a la manufactura nacional frente a la competencia de productos extranjeros.²³ Por su parte, la Cámara de Comercio de Managua presentó una visión más general de la situación en el editorial de su órgano, el *Boletín*, señalando que las empresas nicaragüenses hacían caso omiso de la crisis y operaban como si los tiempos fueran de bonanza. El *Boletín* instó al gobierno a no seguir permitiendo un sistema de *laissez-faire* pleno, pues era aprovechado por los más fuertes para adquirir un control total sobre los más débiles. Por tanto, todo el sistema requería un remozamiento de acuerdo a un plan general de reconstrucción. A juicio de la Cámara, la agenda de este plan debía incluir los siguientes puntos: suspensión de todos los embargos mientras no se encontrase una solución justa y legal para los deudores; aumento del circulante como elemento fundamental de la reactivación económica; condonación de las deudas hipotecarias mediante la emisión de más córdobas; y reorganización del sistema bancario, así como de la comisión de control de cambios, a fin de priorizar los intereses nacionales.²⁴

Sin embargo, el eje de este debate era un tema más trascendental: el control del Banco Nacional y sus reservas de moneda dura. La administración del Banco estaba en manos de una junta directiva, integrada mayoritariamente por ciudadanos estadounidenses. Éstos

insistían en seguir una política muy conservadora, que consistía en colocar sus reservas en dólares en el mercado de bonos de corto plazo de la bolsa de Nueva York para obtener algunas utilidades y apuntalar su solidez crediticia. Esta política dejaba muy pocos dólares a disposición de los comerciantes nicaragüenses que estaban desesperados por cancelar sus facturas de importación. En diciembre de 1935, la Cámara de Comercio de Managua criticó el empeño del Banco en mantener la paridad del córdoba con respecto al dólar, argumentando que dicha política conduciría el país al desastre. El presidente de la Cámara, José Benito Ramírez, exigió poner de inmediato las reservas en dólares del Banco a disposición de los comerciantes, y reestructurar la comisión de control de cambios, a fin de independizarla de la influencia de la junta directiva del Banco.²⁵

Sin embargo, el papel del Banco Nacional en la reactivación económica se vio limitado por las exigencias del gobierno nacional para cubrir el déficit fiscal. El presupuesto nacional se hallaba en permanente desequilibrio desde inicios de la crisis económica, por lo que el gobierno recurría a préstamos del Banco Nacional para cubrir su déficit. La utilización de los fondos del Banco para cubrir los gastos de operación del gobierno dejaba muy pocos recursos para satisfacer las necesidades de crédito de los clientes particulares del Banco. El problema del presupuesto podía solucionarse de una manera más convencional mediante el aumento de los impuestos, pero la administración Sacasa nunca se atrevió a poner en práctica esta alternativa, ya sea por temor a las consecuencias políticas o porque pensó que la crisis no sería muy prolongada.²⁶

En resumidas cuentas, el manejo de la crisis económica y fiscal complicó los problemas políticos del gobierno y dividió al Partido Liberal. La personalidad del presidente Sacasa quizás significó una desventaja adicional. Este médico, proveniente de una de las familias principales de León, a menudo es descrito como un caballero elegante, más atraído por el goce de la compañía de sus pares aristocráticos a la hora de los cócteles, que por el ajetreo de la política y la administración pública. Sin embargo, una apreciación objetiva de Sacasa debe tomar en cuenta que sus opciones eran muy limitadas; el impacto de la crisis sobrepasaba las posibilidades de una economía subdesarrollada. A lo sumo, el gobierno pudo negociar un acuerdo

con los acreedores británicos del préstamo de 1909 -- el más fuerte compromiso financiero de Nicaragua en ese momento -- para que durante 1935 y 1936 se cancelaran solamente los intereses acumulados. Asimismo, el gobierno hizo todo lo posible por reducir el gasto en todas las dependencias del gobierno, mientras exhortaba a la población a practicar la mayor austeridad en su vida cotidiana.²⁷

El impacto de la crisis no parece haber generado mayor efervescencia política entre la población desposeída. Probablemente, la población rural que vivía en las haciendas, así como los pequeños y medianos agricultores, propietarios o arrendatarios, restringieron sus compras de productos importados (nunca muy importantes, en todo caso) y continuaron viviendo cerca de los niveles de subsistencia a los cuales estaban acostumbrados desde tiempo atrás. Entre la población urbana, el impacto del desempleo y la caída de los salarios reales fue mayor, pero no suficiente como para desencadenar manifestaciones de descontento social. Sin embargo, algunos casos de represión a los sectores populares llegaron al conocimiento del Congreso Nacional en enero de 1933. Varios diputados exigieron investigar a la Guardia y policías locales implicados en torturas y fusilamientos sumarios de campesinos y dirigentes obreros. En León, tres presos fueron sacados de sus celdas y asesinados al lado de una carretera “mientras trataban de huir”. Otro preso, acusado de mantener contacto con los sandinistas, sufrió torturas que lo dejaron al borde de la muerte. Un diputado informó haber recibido telegramas desde varias partes del país, denunciando capturas arbitrarias y ejecuciones. Un periódico de Managua informó del caso de varios obreros acusados de ser comunistas que habían sido torturados mientras guardaban prisión. El subsecretario de gobernación eventualmente se presentó ante la Cámara de Diputados para declarar sobre estos casos y aseguró estar investigando las denuncias de violaciones de derechos individuales. Cuando fue interrogado nuevamente en el mes de mayo, negó que las autoridades hubieran cometido desmanes en contra de la población, calificando las denuncias de infundadas o plagadas de inexactitudes. El asunto se descartó en este momento y no se volvió a retomar.²⁸

Los hechos anteriores no significan que el gobierno permitiera un debate político libre y abierto. El presidente Sacasa limitó las libertades de prensa y asociación imponiendo el estado de sitio con

mucha frecuencia, por diversos motivos: en enero de 1933, debido a una conspiración de oficiales de la Guardia descontentos con nombramientos de índole partidista; en mayo del mismo año, a raíz de la explosión del arsenal de Managua; en febrero de 1934 en respuesta al asesinato de Sandino; y en septiembre del mismo año, debido a una segunda explosión del arsenal de Managua.²⁹ En la mayoría de estos casos, el estado de sitio tenía como fin reprimir a los conservadores, a quienes se les sospechaba de inclinaciones golpistas, especialmente en vista de que los liberales controlaban formalmente el aparato del estado y daban pocas muestras de querer compartir el poder o entregarlo en su momento.

D. Los políticos civiles y la Guardia Nacional

Una amenaza mayor para los liberales lo constituía el asunto de la sucesión presidencial, que hizo crisis dentro del partido en la medida que aparecieron varios candidatos para las elecciones de 1936. Al menos tres individuos buscaban la candidatura presidencial liberal: Rodolfo Espinoza (el vicepresidente de Sacasa), Leonardo Argüello y Enoc Aguado. Todos eran liberales de larga trayectoria cuya iniciación en la política partidista se remontaba a la década de 1910; sus méritos para aspirar a la presidencia se reducían, fundamentalmente, a su lealtad y dedicación a la causa del partido. Por otra parte, el problema de la sucesión presidencial adquirió un matiz muy distinto para los conservadores: resultaba poco probable que pudieran ganar una elección de manera limpia, en vista de sus pobres resultados en la última contienda, pero resultaba aún menos probable sin la presencia de los supervisores estadounidenses que limitaría las posibilidades de fraude electoral. Además, en julio de 1934 el Congreso había aprobado una enmienda a la ley electoral de 1923, que trasladaba la facultad para nombrar al presidente del Consejo Nacional Electoral de manos de la Corte Suprema de Justicia al presidente de la República. De acuerdo a esta reforma, las autoridades del Partido Liberal elaborarían una lista de seis candidatos liberales para ocupar dicho cargo; la lista sería enviada a los conservadores, quienes escogerían a tres, entre los cuales el presidente haría la selección final.³⁰ Al final, el puesto quedó en manos de un liberal, colocando a los conservadores en desventaja dentro del Consejo. Por tanto, los conservadores optaron

por un candidato de consenso entre los dos partidos, y negociaron la distribución de cargos públicos en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno, de manera similar a como lo hicieran en 1932.

Los conservadores no se manifestaron muy conformes con los resultados de los acuerdos de 1932. En septiembre de 1934, el secretario del Partido Conservador, David Stadthagen, envió una carta al Partido Liberal quejándose de que muchas municipalidades carecían de una representación realmente bipartidista. Además, denunció que se seguía persiguiendo y encarcelando a los miembros del Partido Conservador cuando se dedicaban a labores partidistas. En diciembre del mismo año, volvió a insistir en que los acuerdos de 1932 buscaban alcanzar un equilibrio general entre los dos partidos “que se reparten la opinión pública”. Sin embargo, agregó, los conservadores se habían visto obligados a resignarse a una pequeña cuota de poder dentro del Congreso y alguna que otra prebenda. En consecuencia, el sistema político bipartidista había caído en desprestigio entre el electorado. En marzo de 1935, Stadthagen escribió a Sacasa informándole que a juicio del Partido Conservador los acuerdos de 1932 ya eran “letra muerta”. Sacasa deploró la actitud del Partido Conservador pero insistió en la vigencia de los acuerdos, y aseguró que en su calidad de presidente seguiría nombrando a miembros de ese partido en los puestos reservados para ellos.³¹

Mientras liberales y conservadores se enfrascaban en discusiones sobre las condiciones y las concesiones necesarias para presentar un candidato único a la presidencia, Anastasio Somoza se afanaba en promover sus propias ambiciones políticas, que para entonces ya eran un secreto a voces. En noviembre de 1934, grupos de somocistas comenzaron a organizarse en varios puntos del país. Por ejemplo, en Casa Colorada, un pequeño pueblo al sur de Managua, se reunieron unos 140 hombres y juraron apoyar a Somoza tanto en las urnas electorales como en la campaña misma, aunque temporalmente promoverían su candidatura “en privado” para no interrumpir las labores de la administración Sacasa con “actividades prematuras de propaganda política”. (Una razón más probable es que Sacasa había prohibido toda actividad proselitista hasta ocho meses antes de los comicios.) En León, otro grupo de 27 liberales somocistas deci-

dió empezar a hacer proselitismo político de manera abierta bajo el nombre de Grupo de Unificación Liberal, cuyo supuesto objetivo era el de superar el divisionismo que aquejaba al partido, y lograr la cohesión de todos los liberales alrededor de un solo candidato. En Chinandega, unos activistas organizaron el Comité Departamental de Propaganda Pro-Somoza y el club Juventud Somocista. Otros comités similares aparecieron en varios poblados de Masaya, Estelí y Matagalpa, así como en Bluefields en la costa Atlántica. A comienzos de 1935, el ministro estadounidense – receptor de todos los rumores políticos del país – escribió a sus superiores en Washington: “muchos amigos cercanos al General Somoza me han informado que se dispone en definitiva a convertirse en el próximo presidente”.³²

Además de los comités que apoyaban su candidatura, Somoza enviaba y recibía cartas referentes a su candidatura presidencial. Con base en esta información, es posible identificar tres tipos de simpatizantes somocistas. El primero incluía a miembros del partido Liberal que comprendían las ventajas de apoyar a Somoza como el más probable candidato de ese partido; algunos de éstos eran amigos de Somoza desde antes de su gestión como jefe director de la Guardia. Por ejemplo, en una carta dirigida a Leonardo Somarriba de Matagalpa, Somoza le informó de la existencia de un fuerte respaldo para su candidatura y le solicitó sumarse a esa “cruzada por el partido”, en aras de la vieja amistad que les unía.³³ Asimismo, Baltazar López escribió a Somoza desde Chichigalpa, alentándolo a aceptar la candidatura presidencial pues contaba con el apoyo de “la mayoría de los pueblos”.³⁴

Asimismo, se utilizaron otros procedimientos más elaborados para conseguir apoyo entre posibles votantes, tal como una carta abierta remitida desde Managua a comienzos de 1935 a los principales somocistas del interior del país, solicitándoles obtener el mayor número de firmas de respaldo en sus respectivas comunidades. La carta ensalzaba a Somoza y la Guardia, destacando su papel en la erradicación del “bandolerismo” de Nicaragua, así como su apoyo al gobierno de Sacasa que le había permitido dedicarse a la reconstrucción nacional y la reorganización administrativa. En consecuencia, decía la carta, todo el pueblo se había identificado “espontáneamente” con

Somoza, quien encarnaba la voluntad popular de alcanzar la concordia y la renovación nacional. Las clases trabajadoras anticipaban grandes realizaciones en pro del bienestar colectivo – se aseguraba – y quienes se oponían a la candidatura de Somoza con argumentos legalistas no eran más que políticos envidiosos; por tanto, no tenían derecho alguno de contravenir la voluntad popular, desde donde surgía en definitiva la escogencia del liderazgo de un país.³⁵ Al parecer, el propósito de esta circular era medir el nivel de apoyo hacia Somoza entre los liberales de todo el país; sin embargo, la evidencia documental disponible es insuficiente para llegar a conclusiones en este sentido.³⁶ Resulta obvia, sin embargo, la existencia de un núcleo de simpatizantes dispuestos a promover la candidatura de Somoza, ya por razones de amistad o por expectativas de un futuro mejor.

Un segundo grupo de seguidores de la causa somocista incluía a miembros del Partido Conservador que veían en Somoza una oportunidad para acceder a un cargo en el gobierno u obtener algún favor político. Tal fue el caso de un compañero de escuela de Somoza en Jinotepe, Agustín Sánchez Vigil, quien ofreció a Somoza el apoyo de los conservadores de ese pueblo si el Partido Conservador no lanzaba su propio candidato. A juicio de Sánchez, Somoza gozaba de mucha simpatía entre los conservadores, siempre y cuando no actuara de manera imprudente y se mostrara dispuesto a conceder favores solicitados.³⁷ A inicios de 1934, supuestamente hasta Emiliano Chamorro creía que la candidatura de Somoza representaba los mejores intereses del país.³⁸

El sector más importante que respaldaba la candidatura de Somoza era la propia Guardia Nacional, especialmente aquellos oficiales que le eran incondicionales por lazos de amistad o afinidad partidista. Éstos informaban a Somoza sobre las corrientes políticas en las regiones donde se hallaban destacados y la efectividad de la campaña somocista, como también acerca de las preferencias políticas de otros oficiales de la Guardia. En otras ocasiones, los oficiales se dedicaban a manejar las finanzas de la campaña, ofrecían discursos y elaboraban listados de simpatizantes somocistas. Por ejemplo, en diciembre de 1934, Somoza delegó en el capitán Ambrosio Parodi la coordinación de su campaña en Matagalpa, un bastión del Partido

Conservador.³⁹ A medida que avanzaba la campaña, los oficiales de la Guardia asumieron más funciones políticas en diferentes partes del país. A comienzos de 1936, Somoza recibía numerosas cartas y telegramas de sus subalternos, informándole sobre el desarrollo de la campaña. Para citar algunos casos, el teniente J.E. Rourk le remitió una evaluación de la labor de los cuadros somocistas en Ciudad Darío; el capitán L. Delgadillo le envió un análisis sobre el amplio respaldo a su candidatura entre la población de Ocotál; desde Bluefields, el mayor A.M. Baca recomendó aprobar la solicitud de un préstamo bancario presentada por un destacado activista de la causa; desde Siuna, el capitán R. Meza sugirió depositar en las arcas de la campaña somocista las utilidades de los juegos de azar de la localidad, recaudadas por el mayor Balladares; y el capitán Francisco Gaitán envió una lista de oficiales leales y desleales a la causa en Puerto Cabezas, elaborada con base en el contenido de cartas interceptadas.⁴⁰

La Guardia desplegaba sus actividades políticas de manera abierta, pues uno de sus objetivos era que el pueblo tomara conciencia del apoyo total e incondicional de ese cuerpo militar hacia Somoza. Por ejemplo, desde Boaco, el sargento Gámez informó de sus diferentes actividades dentro de la campaña, incluyendo su táctica de comulgar en la iglesia para ganarse la simpatía de la feligresía de ese departamento, tradicionalmente católico y conservador.⁴¹ De igual manera, el capitán Hermógenes Prado escribió a Somoza desde Estelí solicitando el traslado de oficiales de la Guardia a Pueblo Nuevo y Ocotál para que se incorporaran directamente a la campaña somocista.⁴²

La participación de la Guardia en la campaña fue observada también por el presidente Sacasa y sus seguidores. El Presidente recibió telegramas de varios jefes políticos (los gobernadores departamentales de entonces) quejándose de la celebración de asambleas políticas no autorizadas, en las cuales oficiales de la Guardia ofrecían discursos e incluso amenazaban con usar la fuerza si no se respetaba la voluntad popular, supuestamente favorable a Somoza.⁴³ En otras ocasiones, la Guardia encarcelaba a liberales sacasistas mientras se dedicaban a distribuir volantes y, en general, amenazaba a todo aquel liberal no partidario de Somoza.⁴⁴ Ante el creciente clima represivo,

en febrero de 1936 Rodolfo Espinoza –vicepresidente y aspirante a la candidatura liberal– se quejó amargamente ante Sacasa de que los somocistas estaban intimidando a las personas para que firmaran las llamadas “actas de adhesión” a favor de Somoza. Insistió “por centésima vez” en la ilegalidad de la candidatura de Somoza, y por ende, en la nulidad de las promesas de imparcialidad y respeto a la ley hechas por Sacasa. Asimismo, refutó la afirmación de Sacasa en el sentido de que Somoza no estaba utilizando su cargo militar para favorecer su candidatura, pues personalmente le había proporcionado al presidente abundante documentación demostrando lo contrario. Espinoza concluyó su carta amenazando con retirarse de la campaña si la situación no era corregida.⁴⁵

E. La ideología del somocismo

El control de Somoza sobre la Guardia Nacional no implica que su ascenso al poder se debiera exclusivamente al uso de la fuerza. El discurso dirigido por Somoza al país y a los diferentes grupos sociales a veces parecía contradictorio; pero en la mayoría de las ocasiones utilizaba un lenguaje tan rimbombante que daba lugar a las más variadas interpretaciones. No obstante, es indudable que el somocismo representaba una ruptura con respecto a la política tradicional nicaragüense, sobre todo debido a sus esfuerzos por incorporar a las masas obreras y campesinas dentro de un movimiento político nacional. Además, proyectaba su candidatura como una alternativa a los dos partidos viejos, que algunos identificaban como la causa de las abundantes desgracias sufridas por los nicaragüenses. ¿Cuál era el mensaje del somocismo a mediados de la década de 1930?

No es posible identificar un documento que sirviera de base para nutrir la campaña somocista o elaborar su programa de gobierno y filosofía política. Sin duda alguna, los acontecimientos mundiales también jugaron un papel importante en la formulación del pensamiento político en Nicaragua. En determinados momentos, varios liberales se refirieron al “New Deal” de Roosevelt, la nueva Alemania de Hitler o la Italia fascista de Mussolini como modelos, aunque no pasaron de hacer algunas sugerencias muy vagas con respecto a las acciones políticas que debían tomarse para aplicarlas en la práctica a

la realidad nicaragüense. Las fotografías exhibidas en la oficina de Somoza revelan su veneración por Zelaya, Moncada y el Duce – aunque luego sustituyó la foto de Mussolini por la de Roosevelt.⁴⁶ De hecho, la evolución del somocismo obedeció más a las oportunidades políticas que se le iban presentando a través del tiempo, que a un plan predeterminado. Sin embargo, algunos de sus postulados básicos ya se vislumbraban en 1935.

En un discurso pronunciado en el Ateneo Militar de Managua, en julio de 1935, Horacio Espinoza ofreció una interpretación general de la versión somocista del liberalismo nicaragüense. Hizo un recuento de la evolución del liberalismo clásico en el Viejo Mundo a partir de la Revolución francesa, y concluyó con las reformas liberales en Centroamérica promovidas por Barrios en Guatemala y Zelaya en Nicaragua. Advirtió, sin embargo, que el liberalismo, con su fuerte carga de individualismo económico y político, ya estaba desfasado en la década de 1930, pues el colectivismo se mostraba como la fuerza dominante. Espinoza argumentó que si bien la Revolución francesa había proclamado los derechos del hombre frente al despotismo autocrático, en el presente los pueblos del mundo estaban proclamando los derechos colectivos frente a los derechos del hombre como individuo. Por tanto, si el liberalismo pretendía seguir a la cabeza del desarrollo de las nuevas ideas políticas, debía romper con el pasado, descartar conceptos abstractos y sustituirlos con programas concretos, encaminados a la consecución de la justicia social y la equidad, así como al logro de objetivos tangibles. Para ello, se hacía necesario desarrollar nuevas organizaciones sociales y económicas, mediante la síntesis de ciertos aspectos del sistema capitalista imperante – “que no podemos ni debemos sacudirnoslo” –, con aquellos aspectos del colectivismo dirigidos a la distribución más equitativa de las oportunidades individuales de ascenso social y económico. Es decir, Nicaragua necesitaba un sistema de “moderado socialismo de estado”, parecido al que Roosevelt había impulsado en Estados Unidos. En concreto, exigía la formación de todo tipo de cooperativas, la distribución de parcelas de tierras a campesinos asentados en propiedades estatales, sobre todo en el norte y costa Atlántica del país, y la promoción de formas artesanales de producción.⁴⁷

Un esbozo más preciso del programa somocista se encuentra en una pequeña tarjeta distribuida a los activistas de campaña del departamento de Chinandega a mediados de 1935, bajo el título de ¿Por qué soy somocista? Además de destacar el papel de Somoza en el logro y mantenimiento de la paz y el orden en el país, la tarjeta resume las políticas del futuro gobierno somocista en los siguientes términos: tierra para los campesinos desheredados, consideraciones especiales para la clase obrera, crecimiento económico mediante apoyo estatal al comercio y la industria, así como construcción de escuelas y carreteras, especialmente en las zonas más apartadas.⁴⁸ No se ofrecía un plan cronológico de ejecución de dichas tareas, ni se explicaba cómo se alcanzarían. Por tanto, no pasaban de ser promesas, pero las referencias a la distribución de la tierra y concesiones para la clase obrera constituían una novedad, sobre todo para un político que buscaba votos en un departamento con alta concentración de latifundios.

Asimismo, el discurso somocista hacía frecuentes referencias al pasado político del país, criticando a los partidos y dirigentes tradicionales; y ofrecía como alternativa diferente un gobierno somocista, situado por encima de los viejos partidos y sus gobiernos ineficaces. En un volante difundido en Jinotega, en enero de 1936, se afirmó que si bien Nicaragua era formalmente una República democrática, el pueblo se hallaba totalmente marginado del gobierno porque “la aristocracia lo mantiene sumido en la ignorancia y la miseria, porque así les conviene, porque así lo engaña mejor, lo explota y lo domina”. Peor aún, durante las guerras civiles, el pueblo se batía entre sí “sin que sepa el infeliz soldado, el humilde hijo del pueblo, por qué lucha, ni por qué muere”. La Constitución era letra muerta; se citaba en ocasión de las contiendas electorales, y después se desechada para que la aristocracia pudiera gobernar a su antojo. En otro volante distribuido en Chinandega ese mismo mes, se aseguraba que Somoza cambiaría tal situación, partiendo de una reforma a la Constitución para modernizarla de acuerdo a los requerimientos de “la nueva Nicaragua”⁴⁹

En general, Somoza procuraba tomar distancia del sistema partidista tradicional de Nicaragua, y presentarse como un nuevo tipo de dirigente. Incluso, negó su condición de político, y que hiciera

promesas falsas.⁵⁰ Sin embargo, su aprovechamiento del viejo orden caudillista para promover su candidatura es evidente. La organización del comité pro-Somoza en La Concepción, departamento de Masaya, fue producto de la reunión de varios caudillos “de reconocido prestigio popular”.⁵¹ En León, los somocistas reclutaron a Marcial Ríos Jerez, pues tenía 979 compadres en dicha ciudad y en sus alrededores, cuyos votos controlaba. En Corinto, los somocistas se acercaron a Rufino Guerrero, dada su “ascendencia” sobre unos 400 votantes de ese poblado.⁵²

El mismo Somoza proyectaba la imagen de un caudillo fuerte que redimiría Nicaragua, capaz de resolver los problemas de todos, en especial, de sus amigos y simpatizantes. En una carta circular enviada en febrero de 1936 a sus principales simpatizantes en el país, Somoza destacó la importancia de trabajar con tesón a fin de garantizar su triunfo en las siguientes elecciones “para bien de la patria y de mis amigos”.⁵³ En los discursos y volantes se destacaba el carácter de Somoza; por ejemplo, en la tarjeta difundida en Chinandega se le describía en términos de valor, arrojo y fuerza. Asimismo, Julio César Sáenz escribió ensalzando “el gesto enérgico y decisivo con que cortó de una vez para siempre el Sandinismo”; sin duda era el hombre que Nicaragua necesitaba “para salvarla de esas situaciones de exterminio, de humo, de sangre que ha constituido nuestra afrenta ante todo los países del mundo”. Por otra parte, decía Sáenz, Somoza era un caudillo popular, generoso y tolerante, pero con un puño de hierro para los que intentaran alterar la paz del país.⁵⁴

F. Somoza y la vieja dirigencia partidista

A comienzos de 1936, la campaña somocista avanzaba viento en popa, aún cuando Sacasa había convencido al ministro estadounidense de la necesidad de presionar a Somoza a efectos de que desistiera de su candidatura. En cierto momento, Somoza pareció dispuesto a obedecer a Sacasa, e incluso el presidente lo invitó a participar, junto a liberales y conservadores, en la escogencia de un candidato de unidad nacional que le aseguraría su puesto en la Guardia Nacional. Sin embargo, los conservadores enfatizaron que únicamente apoyarían un candidato liberal si éste era Somoza.⁵⁵ Dicha

posición no debe interpretarse como una muestra de aprecio hacia Somoza, sino una táctica para obtener mayores ventajas de un arreglo con los liberales que, en ese momento, probablemente sólo el jefe director de la Guardia Nacional les ofrecía. El apoyo a Somoza también debilitaba aun más la maltrecha unidad del Partido Liberal, al fortalecer a los somocistas a expensas de los sacasistas. Sin embargo, en esta oportunidad el acuerdo entre Somoza y los conservadores no se materializó, por lo que éstos se dirigieron a la cúpula del Partido Liberal y propusieron un pacto general, a fin de superar la crisis electoral.

Esta propuesta amerita un análisis detallado, pues ilustra claramente el estilo tradicional de la política partidista nicaragüense. En abril de 1936, tres dirigentes conservadores – entre ellos, Horacio B. Argüello – enviaron un memorando al Partido Liberal, subrayando la importancia de la cooperación entre ambos partidos ante la grave crisis general que abatía al país. El problema más crucial, por lo tanto, no era el proceso electoral en sí, sino más bien la formación de un gobierno nacional que, respaldado decididamente por ambos partidos, podría trabajar por la solución de la crisis en sus diversas manifestaciones. En otras palabras, sugerían que el país necesitaba descansar del enfrentamiento político mediante la formación de un gobierno de unidad nacional o, como lo llamaban los conservadores, un “gobierno de concentración.” Sin embargo, los conservadores entendían la formación de semejante gobierno en función de la distribución de cargos burocráticos.

En primer lugar, proponían escoger un candidato presidencial único, un hombre de suficiente prestigio para que el pueblo no se sintiera defraudado y acudiera en masa a las urnas. A tal fin, el Partido Liberal enviaría una lista de quince posibles candidatos al Partido Conservador, y éste escogería a uno de ellos. De manera similar, sugerían definir la selección de los diputados y senadores antes de la elección, asegurando para el Partido Conservador el 40% de los curules. Al parecer, los liberales habían ofrecido repetir la distribución de curules producto de la elección de 1932, cuando los conservadores recibieron el 40% de los votos, pero una proporción menor de los puestos legislativos.

En segundo lugar, propusieron reformar la Constitución después de elegir una Asamblea Constituyente, integrada por tres diputados por departamento – uno del partido de la minoría y dos de la mayoría, de acuerdo a los resultados electorales en cada departamento. Previo a la elección de la Constituyente, ambos partidos debían ponerse de acuerdo en torno a varios principios constitucionales básicos, que para los conservadores incluían la libertad religiosa, el respeto a la familia, la prohibición de la usura y “la organización de la propiedad y el trabajo en base a la justicia social”.

En tercer lugar, el gabinete de un gobierno bipartidista debía incluir algunos ministros conservadores, escogidos por el presidente liberal a partir de listas elaboradas por el Partido Conservador – a fin de garantizar que éstos realmente fueran verdaderos conservadores. Además, todos los puestos diplomáticos y consulares se distribuirían equitativamente entre liberales y conservadores – aunque la embajada en Washington estaría en manos de un liberal – y la Corte Suprema de Justicia tendría tres magistrados liberales y dos conservadores. Finalmente, el empleo en las obras públicas se determinaría con base al mérito y la competencia del individuo y no a su filiación partidaria; pero para comenzar a echar a andar el sistema el 40% de los empleados en tales actividades debían ser escogidos por el Partido Conservador.⁵⁶

El énfasis de esta propuesta es eminentemente burocrático y clientelista, pues ni siquiera pretende diagnosticar los problemas del país o proponer soluciones específicas a la crisis social y económica. A juicio de sus autores, el acuerdo entre ambos partidos dejaría satisfecho a todo mundo, como si todos los habitantes de Nicaragua eran liberales o conservadores incondicionales. En otras palabras, entendían la política en función de la distribución de empleos y favores y las relaciones entre caudillos y clientelas políticas. No se perfilaba discrepancia fundamental alguna con los liberales en términos ideológicos, menos aun cuando se trataba de algunos principios generales con los cuales pocos estarían en desacuerdo.

El 14 de mayo, liberales y conservadores llegaron a un acuerdo; en presencia del presidente Sacasa, dos representantes de cada partido firmaron un documento mediante el cual se comprometían a

respaldar a un candidato presidencial único, y proceder a reformar la Constitución lo antes posible. La dirigencia de ambos partidos debía escoger como candidato presidencial a un miembro del Partido Liberal que contara con el beneplácito tanto de Sacasa como de Somoza. Los diputados y senadores del Congreso Nacional y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia también serían determinados de antemano, asegurándose los liberales una mayoría en ambos casos. Finalmente, los conservadores tendrían dos puestos en el gabinete ejecutivo y controlarían las jefaturas políticas de los departamentos de Matagalpa, Chontales, Boaco, Rivas y Granada, territorios históricamente bajo la influencia del conservadurismo granadino. Dos de los firmantes, el caudillo conservador Emiliano Chamorro y Crisanto Sacasa, hermano del presidente, debían reunirse de inmediato con Somoza y conseguir su respaldo para el acuerdo.⁵⁷

Sin embargo, el jefe director de la Guardia Nacional tenía su propia propuesta, que dio a conocer al momento que liberales y conservadores firmaban dicho acuerdo. Considerando que Somoza representaba “el mayor volumen de opinión pública”, le correspondía el derecho a escoger al candidato presidencial del seno del Partido Liberal. Según él, esta decisión era, por lo demás, justa, pues Somoza renunciaría a su propia candidatura. En cuanto a las elecciones legislativas, Somoza propuso repetir los resultados de 1932, presentando un candidato único en cada distrito electoral, el cual debía ser miembro del partido que hubiese obtenido la mayoría de votos en aquella contienda. El derecho a escoger a los jueces de la Corte Suprema también debía recaer en el propio Somoza, quien tomaría en consideración la fuerza electoral de cada partido. Además, el jefe director exigió autoridad exclusiva para nombrar a todos los oficiales de la Guardia Nacional, incluyendo al comandante del fortín de Acosasco en la ciudad de León, para asegurarse el control total de ese cuerpo militar. En aquel momento, el fortín estaba bajo el mando de Ramiro Sacasa, un sobrino del presidente que no era leal a Somoza. Asimismo, exigió al gobierno aprobar de inmediato la compra de tela y zapatos para la Guardia, así como otras solicitudes de equipo pendientes. Además, Sacasa debía hacer todos los esfuerzos posibles para aumentar los salarios de los oficiales y la tropa, y el futuro gobernante debía comprometerse a fundar una academia militar y una escuela de

aviación. Finalmente, el gobierno debía abandonar el cobro de una contribución arbitraria del 5% del salario de todo empleado público, una vieja práctica que aseguraba al partido en poder un ingreso regular y sustancioso.⁵⁸

Somoza ofreció engavetar sus pretensiones presidenciales bajo dichas condiciones, pero la aceptación de su propuesta lo habría convertido en mucho más que un simple presidente de la República. En efecto, llegaría a ser el hombre fuerte de Nicaragua, con poderes muy superiores a los que disfrutaba en ese momento. El presidente de la República sería una figura decorativa, el Congreso y la Corte Suprema obedecerían sus dictados, la Guardia estaría completamente comprometida con él como su benefactor y comandante en jefe y los empleados públicos se dirigirían a él en busca de soluciones a todo tipo de problema. La propuesta del jefe director de la Guardia no era sino un proyecto somocista de gobierno. Sacasa lo rechazó de manera tajante, pero su decisión no resolvió el problema. Las juntas directivas de los Partidos Liberal y Conservador intentaron llegar a una solución en el curso de una reunión sostenida con Sacasa y Somoza el 22 de mayo, pero esta fue infructuosa. Los conservadores se sorprendieron ante el choque entre el presidente y el jefe director de la Guardia, sobre todo cuando se discutió el tema de la sucesión presidencial.⁵⁹ Una semana más tarde, las dirigencias de ambos partidos se reunieron nuevamente con el presidente Sacasa, y acordaron apoyar a Leonardo Argüello como candidato único a la presidencia.⁶⁰ Somoza no asistió a esta reunión pues estaba ocupado con un asunto más urgente: la organización y dirección de un golpe de Estado.

G. El golpe de estado somocista

Cuando ambos partidos se negaron a apoyar su campaña presidencial, o permitirle escoger a su propio candidato, Somoza comprendió que sólo tenía una opción para conservar el control de la Guardia y mantener a flote sus propias aspiraciones presidenciales: Sacasa debía abandonar la presidencia o ser neutralizado, y las jerarquías partidistas debían ser marginadas del proceso de selección del candidato. Es decir, Somoza debía lograr un control total del proceso político, mas no destruirlo, de ser posible. Durante los meses previos

había demostrado el grado de poder e influencia que ejercía dentro del país: participó en la solución de una huelga de taxistas que protestaban por la escasez de combustible, sustituyó a todos los oficiales sacasistas de la Guardia con sus propios incondicionales y se convirtió, a la vista de todos, en nada menos que el gran elector.⁶¹

El control absoluto que Somoza ejercía sobre la marcha de los acontecimientos le permitió desplazar a Sacasa de la presidencia y reemplazarlo con un presidente títere, empleando un mínimo de violencia y apenas haciendo caso omiso de la ley. Ni siquiera se vio obligado a preocuparse mucho por Estados Unidos, que había adoptado una política de no intervención en los asuntos internos de Nicaragua a raíz del retiro de la infantería de marina. Después de años de interferencia política descarada, este giro en la política exterior estadounidense resultó en extremo desconcertante para la dirigencia partidista tradicional. El presidente Sacasa, por ejemplo, trató desesperadamente de lograr que el gobierno de Estados Unidos le manifestara su apoyo, u ofreciera sugerencias sobre los pasos a seguir para frenar las ambiciones de Somoza. Incluso despachó a su hermano y confidente, Federico Sacasa, a Washington para conversar con los funcionarios del Departamento de Estado. Puesto que Estados Unidos había creado a la Guardia Nacional – insistía el presidente – también cargaba con una cuota de responsabilidad por las acciones de ese cuerpo militar. Sin embargo, el Departamento de Estado, en la persona de Sumner Welles, dejó en claro que la era de las intervenciones e interferencias era asunto del pasado; por tanto, los nicaragüenses debían buscar una solución interna al conflicto.

En Managua, el ministro Arthur Bliss Lane y su sucesor, Boaz Long, quien arribó a Managua en marzo de 1936, ofrecieron extensas explicaciones sobre las razones que les impedían emitir opiniones a favor de un candidato u otro, o responder qué haría Estados Unidos ante el hipotético caso de que alguien asumiera la presidencia de Nicaragua por medios inconstitucionales. A lo sumo, los diplomáticos estadounidenses se declaraban contrarios a cualquier gobierno que llegara al poder por medio de la violencia, pero se abstuvieron de explicar si el término “violencia” significaba solamente el uso de la fuerza, o si también incluía la violación de disposiciones constitucio-

nales. A toda costa, Estados Unidos deseaba evitar una crisis, un desplome del orden legal y social que dejara en entredicho todos sus esfuerzos por encaminar a Nicaragua hacia el sendero de la estabilidad y la solvencia fiscal o, en el peor de los casos, que exigiese otra intervención militar.⁶² En última instancia, ni los llamados de auxilio de Sacasa ni las maniobras de Somoza bastaban para alarmar a Washington.

El primer objetivo de Somoza en su marcha hacia la presidencia fue lograr el control completo sobre todos los destacamentos de la Guardia en el país entero. Sacasa todavía contaba con la lealtad de dos unidades del ejército: la guardia presidencial y el fortín de Acosasco en León, que había sido reforzado con un contingente de voluntarios civiles de la facción sacasista del Partido Liberal. El golpe de Estado empezó con la movilización de un tren repleto de tropas hacia León. Luego, Somoza exigió al comandante del fortín entregar el mando a un oficial que le era leal; cuando esta demanda fue rechazada, Somoza amenazó con emplear la fuerza. El 31 de mayo, sus tropas comenzaron a disparar sobre el fortín y la casa presidencial en Managua. Después de tres días de acoso militar, interrumpidos por algunas conversaciones, el fortín en León se rindió y Sacasa comenzó a licenciar a sus soldados en la residencia presidencial.⁶³

Mientras se llevaba a cabo el levantamiento militar, los simpatizantes de Somoza se apoderaron de los gobiernos municipales en las principales ciudades. Con total desfachatez, echaron a los alcaldes y empleados, mientras la Guardia observaba indiferente o, en algunos casos, intervenía para imponer el orden público, pero el resultado fue siempre el mismo. Sacasa no podía impedir estos asaltos al poder municipal, ni controlar el nombramiento de oficiales somocistas a los puestos claves de la Guardia, pues había perdido el control sobre las instituciones políticas del país y no contaba con ningún apoyo. El 6 de junio, el presidente renunció y partió de inmediato hacia El Salvador; nunca más volvió a Nicaragua.

Las dos Cámaras del Congreso aceptaron por unanimidad, sin debate alguno, las cartas de renuncia de Sacasa y de su vicepresidente, Rodolfo Espinoza y el 9 de junio, designaron al Dr. Car-

los Brenes Jarquín como presidente interino. La elección de Brenes Jarquín – quien antes había sido propuesto por Somoza como candidato de conciliación – suscitó alguna controversia, pues la bancada conservadora, encabezada por Carlos Cuadra Pasos, anunció que estaba dispuesta a votar por un liberal “distinguido”, pero que este hecho no conllevaba ninguna obligación política en el futuro. Brenes Jarquín fue electo, finalmente, por aclamación.⁶⁴

Dos días después de la elección de Brenes Jarquín, el Departamento de Estado envió un cable al ministro estadounidense en Managua avisándole que: “no parece haber razón alguna para que usted no se entienda con el gobierno actual, que parece ejercer control sobre el país y de toda la maquinaria del gobierno y que realiza las funciones normales propias de un gobierno, como el Gobierno de Nicaragua”. De esta manera, Washington reconoció al títere de Somoza, facilitando a éste el camino hacia la presidencia.⁶⁵

H. La formación de una coalición electoral

El 16 de junio en León se llevó a cabo la convención del Partido Liberal para escoger a su candidato presidencial. La nominación de Somoza no causó sorpresa alguna, pero no debe subestimarse la importancia de este acontecimiento. Tal como informó un periodista de *La Prensa*, toda una generación política del Partido Liberal quedó anulada durante la convención.⁶⁶ La vieja dirigencia del partido fue echada fuera para dar lugar a un grupo nuevo de hombres más jóvenes, dinámicos y ambiciosos. El discurso de Somoza al aceptar la candidatura reflejó un nuevo estilo de hacer política. Prometió paz, “democracia ordenada”, nacionalismo, justicia social, instrucción y trabajo para todos mediante la conformación de un gobierno de renovación institucional y constitucional.

¿Cuál era el significado de estos conceptos? La “paz” se refería al funcionamiento normal de las actividades del país incluyendo, por supuesto, todas las empresas nacionales y extranjeras; es decir, la paz era precondition necesaria para la empresa privada. “Democracia ordenada” significaba el predominio de la opinión de la mayoría, sin la presencia de tendencias demagógicas o anárquicas y de

ideologías extremistas. El “nacionalismo” ofrecía oportunidades a todos los nicaragüenses, por encima de sus diferencias políticas, para servir a su país – en alusión a los conservadores, por ejemplo. La “justicia social” se entendía como la conciliación armoniosa de los intereses de la clase obrera con los de los empresarios, mediante la promulgación de una legislación adecuada. La “instrucción” contemplaría la expansión del sistema escolar con miras a elevar el nivel cultural de las masas. Y “trabajo para todos” incluía la creación de nuevos empleos y una mayor eficiencia dentro del sector público.⁶⁷

Durante la campaña electoral que se prolongó durante los siguientes cuatro meses y medio, Somoza anunció cambios y renovación, sin detallar en qué consistirían ni cuándo se llevarían a cabo. A decir verdad, no tenía mucha necesidad de hacer campaña. El golpe de Estado desarticuló la vieja dirigencia liberal; tanto Sacasa como Espinoza abandonaron el país, el segundo supuestamente después de recibir US\$20,000 por su cooperación. La dirección del partido quedó en manos de Somoza, aunque algunos miembros leales a la vieja guardia intentaron organizar un partido liberal alternativo. Los conservadores también estaban desconcertados. Emiliano Chamorro se trasladó a Costa Rica el 23 de junio de 1936, aduciendo temer por su vida, y permaneció en el extranjero durante la siguiente década.⁶⁸ En consecuencia, las divisiones dentro del Partido Conservador se hicieron más evidentes: los chamorristas trataban de controlar el partido en nombre del caudillo ausente y los civilistas apoyaban a Cuadra Pasos para que asumiera el liderazgo.

Aunque la oposición se hallaba muy debilitada, Somoza aprovechó la campaña para empezar a articular la coalición política que le apoyaría, con algunas excepciones, durante los veinte años siguientes. Algunos elementos de esta coalición, como la clase obrera urbana, eran todavía muy débiles y poco importantes. Otros grupos se hicieron sentir a raíz de la renuncia de Sacasa a la presidencia, sobre todo los que demandaban una solución a la crisis económica. Por ejemplo, el sector privado se dirigió casi de inmediato al presidente provisional Brenes Jarquín para exponerle sus problemas y ofrecer propuestas de solución. A fines de junio de 1936, la Cámara de Comercio de Managua le escribió quejándose de haber sido ignorada

por Sacasa, quien se había negado repetidas veces a reunirse con los empresarios. La Cámara se lamentó, asimismo, de la futilidad de sus conversaciones con el Dr. Vicente Vita, gerente del Banco Nacional, pues este funcionario era inoperante. Prometía tomar distintas medidas para enfrentar la crisis – un día hablaba de devaluar la moneda, otro proponía una conversión monetaria y después se mostraba partidario de la libre convertibilidad pero al fin no hacía nada. Los caficultores habían sido muy perjudicados por la política del Banco – agregaron – pues les pagaba su café en córdobas, cuyo valor había caído mucho en relación al dólar. En general – aseguraban los miembros de la Cámara de Comercio – los directores del Banco Nacional no se preocupaban por los problemas del país, y la comisión de control de cambios era incapaz de determinar o influenciar la tasa de cambio del córdoba. Peor aún, el Banco había vendido dólares a individuos sin la autorización de la comisión de control, promoviendo así las actividades del mercado negro de divisas y el contrabando. Para concluir con su diagnóstico de la situación, la Cámara señalaba que el Banco Nacional, bajo la conducción de los “magos financieros” de su junta directiva, había decidido atesorar sus reservas en metálico a fin de mantener la ilusión del patrón oro, en vez de cancelar la deuda comercial pendiente.

La Cámara pedía al Banco comenzar a vender dólares a los comerciantes para cancelar sus deudas comerciales, al valor de cambio vigente cuando efectuaron las compras en cuestión. Asimismo, le solicitaban otorgar créditos adicionales a los agricultores, pues ellos habían sido los más afectados por las políticas desatinadas del Banco. La carta concluía con una lista de solicitudes específicas referidas a la política económica futura del gobierno: elaboración de un plan financiero nacional “ajustado a las necesidades del país”, incluyendo la libre convertibilidad del córdoba y el abandono del patrón oro; supresión de la comisión de cambios y de todas las restricciones a la libertad para importar y exportar; venta de las reservas de oro para cancelar la deuda comercial; reducción de la tasa de interés sobre los créditos agrícolas a un 4% anual; fiscalización adecuada de las operaciones del Banco Nacional y traslado de su junta directiva a Managua. La Cámara también insistió en que se le informara con anticipación, al igual que a la Asociación Agrícola de Nicaragua, de cualquier

iniciativa de política estatal que afectara “la vida económica del país en las actividades por ellas representadas”; es decir, reclamaban una atención especial a sus propios intereses. En la conclusión de la carta se ensalzó el “genuino nacionalismo económico” del nuevo gobierno.⁶⁹

La Asociación Agrícola también envió una carta a Brenes Jarquín pocos días después, deplorando la política crediticia y cambiaria del anterior gobierno, pues había golpeado a los caficultores en particular. A continuación, solicitó al presidente interino las mismas disposiciones enumeradas por la Cámara de Comercio, tal como la libre convertibilidad del córdoba y la reducción de las tasas de interés.⁷⁰ Las empresas extranjeras también reclamaban mayores concesiones del gobierno. El gerente general de la Bragmans Bluff Lumber Company, Inc., subsidiaria de la Standard Fruit Company que operaba en la costa Atlántica, escribió a Somoza solicitando su intercepción ante las autoridades del Banco Nacional, a fin de asegurar a su empresa suficiente disponibilidad de dólares para pagar las importaciones de bienes requeridas por sus operaciones. Recalcó que la empresa estaba operando con el margen de ganancia más bajo posible; por tanto, cualquier medida contraria a los intereses del capital extranjero podría llevar a la suspensión de sus actividades. La carta cerró con un ruego: “Por favor haga todo a su alcance para impedir cualquier medida que afecte seriamente nuestros negocios”.⁷¹

En octubre de 1936, el gobierno respondió a estas solicitudes autorizando la liberalización de los controles de cambio. El presidente emitió un decreto reconociendo la necesidad de “prestar un justo apoyo a las fuerzas y actividades nacionales productoras de artículos exportables”. Por tanto, autorizó pagar a los productores el 70% del valor de sus exportaciones en dólares, a condición de que vendieran esas divisas al cambio libre a los importadores debidamente autorizados por la comisión de control de cambios. El 30% restante sería comprado por el Banco Nacional al cambio oficial de C\$1.10 por dólar para atender los pagos del gobierno y el servicio de la deuda pública externa.⁷² En vista de que el cambio libre (es decir, el cambio del mercado negro) en ese momento era de C\$1.75 por dólar, aproximadamente, los exportadores empezaron de inmediato a recibir alrededor de un 60% más por cada dólar de exportaciones.

En términos generales, los importadores se mostraron satisfechos con esta medida, aunque sugirieron algunas modificaciones. En primer lugar, solicitaron destinar dos terceras partes del 30% de las divisas compradas por el gobierno al cambio oficial para el pago de la deuda comercial congelada, pero vendiendo los dólares al cambio oficial de C\$1.10 por dólar. Es decir, insistieron en la necesidad de adquirir dólares al tipo de cambio más bajo que se hallaba vigente en años anteriores cuando tramitaron sus pedidos de mercancías en el extranjero. La concesión solicitada por los comerciantes era muy cuantiosa, pues la deuda comercial congelada superaba los US\$2.5 millones. Asimismo, solicitaron al gobierno obligar a los exportadores a vender sus dólares al cambio libre dentro de los tres meses de haberlos recibido para evitar el acaparamiento y la especulación. La Cámara de Comercio de León hizo una solicitud similar.⁷³ El gobierno no respondió a estas solicitudes sino hasta el siguiente año, cuando la comisión de control de cambios fue reformada de nuevo. Sin embargo, los exportadores recibieron un significativo alivio en lo inmediato; por su parte, los importadores enfrentaron una baja en la demanda para sus mercancías (ya que los precios aumentaron) pero les era más fácil adquirir dólares.

Otros aspectos fundamentales de la crisis económica quedaron sin resolverse, aunque era urgente tomar algunas medidas obvias. Por ejemplo, el recaudador general de aduanas y miembro de la Alta Comisión observó que la continuada escasez de fondos para el presupuesto nacional exigía incrementar los ingresos. La misma recaudación de impuestos adolecía de muchas deficiencias, debido a la corrupción y el favoritismo. El recaudador estimaba que los ingresos fiscales podrían duplicarse fácilmente si se implementaban sistemas de recaudación más confiables.⁷⁴ De hecho, Somoza retomaría algunas de estas recomendaciones cuando llegó a la presidencia y controlaba mejor la situación del país.

En 1936, Somoza se acercó con mucha cautela al movimiento obrero organizado. A decir verdad, no existían muchas organizaciones obreras. Los esfuerzos del Obrero Organizado y de la Federación Obrera Nicaragüense por impulsar la formación de sindicatos en la década de 1920 no había dado muchos resultados, en vista

de lo reducido de la clase obrera urbana y la preponderancia de formas de producción artesanales. A lo sumo, algunos obreros adquirieron experiencia en la actividad sindical y se prepararon así para dar el próximo paso, el cual llevó a la creación del Partido Trabajador Nicaragüense (PTN) en 1931. Los objetivos del PTN se redactaron en términos muy vagos, sin mención alguna a principios marxistas o leninistas y escasas referencias a la justicia y los derechos del hombre. Sin embargo, el gobierno expulsó a varios de sus dirigentes en 1932 por dedicarse a organizar a la clase obrera. El año siguiente, el PTN tenía apenas dieciséis miembros en Managua y su dirigencia estaba dispersa. Un intento de establecer contacto con Sandino (quien lo rechazó) condujo a la división del partido en dos bandos: aquellos partidarios de una línea que se inclinaba a participar en la política partidista y aquellos que se inclinaban por una actividad más bien revolucionaria. La formación de sindicatos obreros tampoco fue muy exitosa. La mayor parte de éstos eran pequeños y estaban formados por artesanos y sus ayudantes, mientras el gobierno – que no percibía diferencia alguna entre “sindicato” y “bolchevismo” – siguió reprimiéndolos.

A comienzos de 1935, la fracción más progresista del PTN tomó control de la dirección del partido y sentó las bases de una línea más acorde con los principios marxista-leninistas. El periódico del partido, *Causa Obrera*, reflejó esta línea hasta que fue cerrado por orden de Somoza a comienzos de mayo y se encarceló a sus directores. Aun así, la dirigencia del partido insistió en una postura radical; en junio de 1935, el comité central del PTN aprobó un programa que contenía, entre otros puntos, la redacción de un código de trabajo (que contemplaría el derecho a la huelga y el salario mínimo), la abolición de todas las deudas hipotecarias, un impuesto sobre el capital, la socialización completa de todas las empresas industriales y agrícolas, la nacionalización de la banca, la propiedad estatal de todas las tierras, el repudio de la deuda externa, y la reforma del sistema educativo para promover el socialismo. El contenido de dicho programa no sólo era muy ambicioso, sino también contradictorio, pues si bien era factible alcanzar algunos de sus objetivos dentro de un sistema capitalista, otros requerían de una revolución proletaria previa para su realización. Para Somoza, el PTN no pasaba de ser un pequeño

estorbo en aquel momento, controlable mediante la aplicación de la represión selectiva; después del derrocamiento de Sacasa, varios de los dirigentes del PTN fueron confinados a Corn Island bajo la acusación de ser “comunistas”.⁷⁵

Somoza tenía interés en recibir el apoyo de los obreros, pero bajo sus propias condiciones. Se mostró dispuesto a intervenir a favor de los choferes de taxi que se fueron a la huelga en febrero de 1936, respaldados por unos 8,000 obreros de la construcción, empleados del ferrocarril y artesanos diversos, pero reprimió al PTN cuando éste se pronunció por la continuación de la huelga.⁷⁶ Somoza mostró más simpatía por organizaciones como Juventud Obrera, que lo invitó a un baile popular en agradecimiento por su apoyo a la clase obrera; tales organizaciones buscaban encaminar sus actividades dentro de lineamientos estrictamente legales y no permitir cualquier incidente que incomodara a Somoza “en lo más mínimo”.⁷⁷ Éste era el tipo de organización obrera concebido por Somoza, cuando el gobierno decretó un incremento al impuesto del aguardiente en agosto de 1936, prometiendo utilizar dichos ingresos para construir Casas del Obrero en Managua y en cada una de las principales cabeceras departamentales. El gobierno ofreció entregar estos fondos a comités previamente constituidos para dirigir la construcción de estos locales donde los obreros podrían dedicarse a diversas actividades recreativas y educativas.⁷⁸

El apoyo que recibió Somoza de parte de los trabajadores agrícolas fue determinado, muy probablemente, por los terratenientes, quienes ejercían un control político sobre la población rural mediante relaciones de clientelismo. Donde imperaban los caudillos liberales, el voto sería favorable a Somoza. En algunas zonas donde la presencia terrateniente era escasa, la candidatura de Somoza pudo prosperar bajo la iniciativa de oficiales de la Guardia Nacional y de activistas somocistas. En la costa Atlántica, los obreros del banano fueron abordados por partidarios de Somoza y parecen haber respondido favorablemente. En el distrito de Siquia, en la región sur del departamento de Zelaya, unos 3,000 pequeños productores de banano apoyaron a Somoza esperanzados en que éste los apoyaría frente a la compañía bananera estadounidense, que les pagaba bajos pre-

cios por sus cosechas.⁷⁹ Por otra parte, en algunas zonas rurales se distribuyeron volantes prometiendo que Somoza repartiría tierras y mejoraría las condiciones de vida de los campesinos – actividad que podría indicar un intento de pasar por encima del control terrateniente sobre las masas rurales en ciertas partes del país. Sin embargo, al parecer los somocistas trataron, en general, de ganarse el voto rural por medio del sistema de dominación política imperante, es decir, el voto que controlaban los caudillos rurales.⁸⁰

Un tercer grupo que Somoza incorporó a su coalición fue la derecha extrema, cuyos integrantes más visibles eran los llamados “Camisas Azules”, en imitación de los grupos fascistas europeos, que procedieron a organizar grupos afines en ciudades como Managua, Granada y León, además de algunas pequeñas comunidades cerca de la capital. Al parecer, la mayoría de sus integrantes eran jóvenes de la clase media, algunos de los cuales provenían de antiguas familias de Granada cuya situación económica se había deteriorado en el curso de los años. Sin embargo, no lograron reclutar muchos adeptos; en Managua, no pasaron de los ochenta.⁸¹ Los Camisas Azules mantenían vínculos estrechos con la Guardia Nacional, de la cual recibían entrenamiento militar. Somoza recibía un informe mensual de sus actividades y extendía documentos de identificación a sus organizadores; también les pasaba dinero para sus gastos.⁸² Además de participar en desfiles en apoyo a la candidatura de Somoza y pegar afiches de propaganda en las paredes de las casas, los Camisas Azules también efectuaron algunas actividades de choque, como el ataque al pequeño periódico opositor, *La Tribuna*, que fue saqueado durante una operación vandálica en mayo de 1936.⁸³ Sin embargo, la importancia de su participación en la campaña somocista debe haber sido muy reducida; después de la elección de Somoza, los Camisas Azules se disolvieron.

De gran importancia para la campaña electoral somocista fue el voto del propio Partido Conservador, al que Somoza cortejó efusivamente. A raíz de la salida de Nicaragua del general Chamorro, los conservadores discreparon sobre la posición a tomar en las elecciones. Un bando, encabezado por Chamorro, decidió seguir apoyando la candidatura de Leonardo Argüello, tal como se había acor-

dado en el pacto libero-conservador firmado poco antes del derrocamiento de Sacasa. Una fracción disidente de liberales antisomocistas formó el Partido Liberal Constitucionalista, que se unió a los conservadores chamorristas en apoyo a la candidatura de Argüello y su compañero de fórmula, Rodolfo Espinoza.⁸⁴ La respuesta de Somoza fue la creación de un partido conservador rival que apoyó su propia candidatura. El resultado final, por tanto, fue el de dos candidatos liberales, Somoza y Argüello, cada uno de ellos apoyado por una coalición de liberales y conservadores.

Los conservadores somocistas se organizaron en torno al llamado Partido Conservador Nacionalista. Si bien es cierto que estos conservadores eran genuinos –en el sentido de que habían votado anteriormente por el Partido Conservador– sus líderes probablemente provenían de los niveles medios del partido. Ninguno de los dirigentes de prestigio del Partido Conservador se unió a esta nueva agrupación, y los conservadores acaudalados le negaron su apoyo económico para la campaña electoral. Somoza se vio obligado a financiar casi todas sus actividades, incluyendo los gastos de la campaña, el empadronamiento de los electores y la movilización de sus adeptos el propio día de la votación.⁸⁵ Sin embargo, esto no quiere decir que Somoza sacara fondos de su propio bolsillo, pues ya tenía suficiente control sobre el aparato del estado como para desviar fondos del gobierno hacia actividades políticas partidistas.⁸⁶

El Partido Conservador Nacionalista orientó su campaña fundamentalmente en apoyo a la candidatura de Somoza, sin buscar ningún tipo de concesión o consenso a nivel ideológico. Los dirigentes del partido tan sólo veían la oportunidad de compartir las prebendas del poder; se les prometieron algunos curules en el Congreso Nacional y, sin duda, un número de cargos en el gobierno para los miembros menos destacados del partido. Estas recompensas se calcularían con base en el número de votantes que llevaran a las urnas.⁸⁷ El apoyo de este grupo conservador permitió a Somoza proyectar su candidatura en términos de una coalición nacional, dentro de la cual se conjugaban los dos partidos políticos históricos en apoyo a un hombre y un programa de gobierno. En noviembre, la oposición antisomocista decidió retirarse de la contienda electoral, argumentando

que se fraguaba una burla a la voluntad popular en la urnas. Somoza quedó como candidato único, pero aún así pudo afirmar que su candidatura contaba con un apoyo bipartidista.⁸⁸

I. La campaña electoral de 1936

Probablemente, una proporción relativamente pequeña de la población votante consideró importante el hecho de que Somoza representara un nuevo programa político. Para la mayoría, la campaña electoral de 1936 se diferenció poco de los ejercicios políticos anteriores, en los cuales la masa de votantes era arrastrada a apoyar a determinado candidato, y después conminada a votar por él en las urnas. Las concentraciones políticas eran eventos festivos donde se repartía aguardiente y tamales para atraer a los concurrentes. Por ejemplo, Carlos D. García informó a Somoza que los activistas somocistas (en su mayoría oficiales de la Guardia) habían obsequiado pólvora, sal, tabaco y comida a la población rural del río Coco. Subrayó la necesidad de prometer que el día de las elecciones se distribuiría mucha comida a los votantes, sobre todo a los indígenas, "pues el indio come mucho y es lo que principalmente les llama la atención y llegará desde lejos por una buena comida".⁸⁹ Además, sugirió concentrar a la gente que vivía en zonas de difícil acceso en un punto determinado unos días antes de la votación, proporcionándoles alimentos, tabaco y aguardiente durante ese tiempo, para asegurar la presencia de todos en las urnas.⁹⁰ Como resultado de la excesiva distribución de aguardiente, el ministro de Finanzas se quejó ante Somoza que sus activistas estaban revendiendo a bajo precio el alcohol exento de impuestos entregado por la destilería del Estado para la campaña electoral. Esto mermaba los ingresos fiscales provenientes del impuesto sobre el aguardiente que se expendía lícitamente. El ministro sugirió distribuir en la campaña un aguardiente de menor grado alcohólico que el producto comercializado; de esa manera, habría más para repartir y se podría identificar a los tramposos.⁹¹

En el departamento de León, baluarte del liberalismo, el Partido Liberal se esforzó por lograr una victoria somocista abrumadora. En primer lugar, todos los comités partidistas del departamento fueron reorganizados para que solamente quedaran somocistas. Des-

pués, el comité ejecutivo departamental estructuró 115 comités a nivel local y formó un número de comités más especializados, tales como un comité médico encargado de ofrecer atención médica y medicinas a los enfermos del partido y un comité de alimentación que repartiría comida y bebida durante las reuniones y manifestaciones del partido. Un comité de prensa hacía de enlace con los periódicos para asegurar la publicación de artículos favorables a Somoza como también la distribución de volantes de propaganda. El financiamiento de la campaña ocupó la atención de otro comité, que solicitaba donaciones de carne, arroz y manteca para las comidas y vendía bonos para pagar otros gastos de la campaña.⁹²

Si bien no todos los departamentos tenían una maquinaria de campaña tan eficiente como la de León, Somoza disponía del apoyo de la Guardia en todo el territorio, así como de las ventajas derivadas del control del aparato del Estado. Aun así, los resultados electorales no fueron tan satisfactorios como esperaba Somoza. El abstencionismo parece haber sido muy alto, pues se reflejó hasta en los cómputos oficiales ofrecidos por el Consejo Nacional de Elecciones. En las dos elecciones presidenciales supervisadas por las misiones estadounidenses en 1928 y 1932, la proporción de votantes inscritos en relación al total de votos emitidos fue del 88.3 y 84.3 por ciento, respectivamente; en 1936 llegó apenas al 49.8%.⁹³ La abstención de más del 50% de los votantes obedeció sobre todo a la decisión de los conservadores de retirarse de la campaña; la fórmula Argüello-Espinoza que habrían apoyado (junto a los Liberales Constitucionalistas disidentes) recibió apenas 189 votos en todo el país. Sin embargo, esto no explica el problema en su totalidad, pues aún en departamentos fuertemente liberales como León y Chinandega el nivel de abstencionismo fue alto. (Ver el Cuadro 2.2.)

Los niveles de abstención en los departamentos dominados por los conservadores, tales como Chontales, Rivas, Boaco (desprendido de Chontales en 1935) y Granada, sugieren que el sistema de control político basado en las redes de caudillos todavía funcionaba eficazmente. En 1936, el abstencionismo en Chontales – quizás el más conservador de los departamentos gracias a sus enormes haciendas y poderosos caudillos rurales – superó el 70%, mientras que

en 1932 fue inferior al 15%. En general, el llamado de los conservadores a boicotear la elección fue obedecida por la dirigencia regional del partido y la masa de sus simpatizantes.

Cuadro 2.2.

Votantes inscritos y votos emitidos, 1932 y 1936

Departamento	1932 inscritos	votos emitidos	%	1936 inscritos	votos emitidos	%
Bluefields	9,972	8,373	84.0			
Carazo	9,615	8,522	88.6	11,189	5,875	52.5
Chinandega	12,353	10,733	86.9	14,974	8,048	53.8
Chontales	17,923	15,391	85.9	20,387	5,605	27.5
Estelí	7,169	5,107	71.2	15,994	6,237	40.0
Granada	9,894	8,583	86.8	11,041	4,836	43.8
Jinotega	5,600	2,846	50.8	8,923	4,435	49.7
León	16,183	13,058	80.8	24,215	12,248	50.6
Managua	22,055	19,809	89.8	30,596	13,230	43.2
Matagalpa	17,104	14,717	86.0	22,008	12,778	58.1
Masaya	11,878	10,656	89.7	14,998	6,900	46.0
Nva. Segovia	6,659	5,388	80.9	4,765	3,202	67.2
Rivas	7,926	6,921	87.3	8,797	4,139	47.1
Boaco				9,250	4,161	45.0
Madriz				7,081	4,490	63.4
Zelaya				15,450	13,235	85.7
Totales	154,331	130,114	84.3	219,668	109,4190	49.8

Fuentes: Consejo Nacional de Elecciones, *La verdad electoral de 1936* (Managua: Talleres Nacionales, 1937); Recaudación General de Aduanas, *Memoria* para 1932. Bluefields fue rebautizado como Zelaya en 1935.

En los departamentos de tradición liberal, tales como León, Chinandega, Estelí y Nueva Segovia, el abstencionismo reflejó, con toda seguridad, el desagrado de muchos liberales con el procedimiento empleado por Somoza para tomar el poder. Asimismo, reflejó la división de los votantes en facciones rivales dentro del partido mismo, tales como los sacasistas y los argüellistas. En León, departamento de origen de Sacasa, el abstencionismo se acercó al 50%, mientras que los resultados en Chinandega apenas fueron un poco mejor. El abstencionismo del 57% de los votantes de Managua probablemente refleja la fuerza del bando argüellista, combinado con la presencia de un buen número de simpatizantes del Partido Conservador en ese departamento. El abstencionismo del 60% en Estelí – el

más alto después de Chontales – fue similar al de 1932, porcentaje superado tan sólo por el del departamento de Jinotega, que ese año aún se hallaba convulsionado por la lucha sandinista.

Los resultados electorales arrojaron un 80.1% de los votos en favor de Somoza, mientras que los conservadores nacionalistas obtuvieron la mayor parte de los restantes. (Ver el Cuadro 2.3.) Por tanto, en términos absolutos, Somoza podía afirmar que había recibido un mandato popular categórico para encargarse del gobierno. Sin embargo, en cinco de los departamentos del país – Carazo, Chinandega, Granada, León y Rivas – los liberales obtuvieron menos votos que en 1932; aunque en Managua y Masaya recibieron un poco más. En conjunto, Chontales y Boaco dieron al Partido Liberal unos 600 votos más que los obtenidos en Chontales en 1932, antes de la división de ese departamento. Los liberales mostraron un avance más notable en Bluefields, denominado Zelaya en 1935; en Nueva Segovia, que en 1935 se dividió en Madriz y Nueva Segovia; y en Jinotega. La Guardia Nacional tenía una fuerte influencia en todos estos departamentos. En Jinotega, Nueva Segovia y Madriz, esta presencia militar era secuela de la guerra contra Sandino. En Bluefields/Zelaya, esta influencia fue resultado de la extrema dispersión de la población, que incluía grupos indígenas y criollos de habla inglesa, lo que facilitaba el control ejercido por la Guardia. En estos departamentos, los liberales obtuvieron un total de 21,212 votos en 1936, en contraste con los 11,849 obtenidos en 1932 – una diferencia de más de 9,000 votos. Esto explica, en gran medida, el aumento del total de votos para los liberales, que pasó de 76,269 en 1932 a 87,648 en 1936. Por supuesto, los votos de los conservadores nacionalistas, que sumaron casi 21,000, también eran votos a favor de Somoza. Desde esta perspectiva, Somoza pudo jactarse de haber recibido 33,000 votos más que los que recibió Sacasa en 1932. Sin embargo, este apoyo del Partido Conservador Nacionalista apenas alcanzó la mitad de los 40,000 votos que la dirigencia de esa agrupación le había ofrecido.⁹⁴ El conjunto de estos datos deben haber indicado a Somoza que un buen número de nicaragüenses, de todas las tendencias políticas, no comulgaban con sus métodos ni respondían a sus llamados de unidad nacional. Por lo tanto, en el futuro sería necesario seguir fortaleciendo la coalición somocista.

Cuadro 2.3.**Resultados electorales, 1932 y 1936**

(los porcentajes del voto total se encuentran en paréntesis)

Departamento	1932		1936	
	Liberales	Conservadores	Liberales	Conservadores
Bluefields	6,569 (68.5)	1,804 (21.5)		
Carazo	4,718 (55.4)	3,804 (44.6)	4,403 (74.9)	1,465 (24.9)
Chinandega	8,799 (82.0)	1,934 (18.0)	7,144 (88.8)	902 (11.2)
Chontales	5,182 (33.7)	10,209 (66.3)	3,006 (53.6)	2,599 (46.4)
Estelí	3,356 (65.7)	1,751 (34.3)	4,741 (76.0)	1,482 (23.8)
Granada	3,961 (43.0)	4,892 (57.0)	3,296 (68.2)	1,539 (31.8)
Jinotega	1,767 (62.1)	1,079 (37.9)	3,433 (77.4)	1,002 (22.6)
León	11,913 (91.2)	1,155 (8.8)	11,437 (93.4)	802 (6.6)
Managua	11,398 (57.5)	8,411 (42.5)	11,541 (87.2)	1,663 (12.6)
Matagalpa	6,496 (44.1)	8,221 (71.4)	9,122 (71.4)	3,642 (28.5)
Masaya	5,696 (53.5)	4,960 (46.5)	6,050 (87.7)	821 (11.9)
Nva. Segovia	3,513 (45.8)	1,875 (34.8)	2,488 (77.7)	714 (22.3)
Rivas		3,750 (54.2)	2,885 (69.7)	1,182 (28.6)
Boaco			2,811 (67.6)	1,349 (32.4)
Madriz			3,481 (77.5)	1,009 (22.5)
Zelaya			11,810 (89.2)	1,411 (10.7)
Totales	76,269 (58.5)	53,845 (41.4)	87,648 (80.1)	21,582 (19.7)

Fuente: Consejo Nacional de Elecciones, *La verdad electoral de 1936* (Managua: Talleres Nacionales, 1937); Recaudación General de Aduanas, *Memoria para 1932*.

En esta coyuntura, la fuerza de Somoza también era reflejo de la debilidad de la oposición. Una vez concluido el conteo de los votos, y proclamada la victoria de Somoza, la oposición de liberales anti-somocistas y conservadores tenía pocas alternativas de acción, aparte de quejarse ante el gobierno de Washington. Antes de las elecciones, Sacasa, Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro visitaron el Departamento de Estado para solicitar la supervisión estadounidense, pero su petición fue denegada.⁹⁵ Concluido el proceso electoral insistieron de nuevo, y contrataron los servicios de dos abogados de Washington, Charles A. Douglas y Joseph V. Morgan, para redactar un documento argumentando en contra del reconocimiento del próximo gobierno somocista por parte de Estados Unidos. El escrito alegaba la inconstitucionalidad de la presidencia de Somoza, pues no sólo era pariente de Sacasa, sino también militar y, además, era producto de un golpe de Estado. Por tanto, su aceptación como presidente consti-

tucional legítimo violaría la política estadounidense de no reconocer a los gobiernos surgidos de la fuerza. Asimismo, dicho reconocimiento violaría el tratado por medio del cual Estados Unidos ayudó a crear la Guardia Nacional como una fuerza armada apolítica.⁹⁶ Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos – que ya había establecido relaciones diplomáticas con el gobierno de Hernández Martínez, producto de un golpe de Estado en El Salvador – no tenía intenciones de involucrarse en una disputa legal en torno a los requisitos que debía llenar Somoza en su calidad de aspirante a la presidencia. Cabe señalar, por otra parte, que tal disputa estaba referida a la posición de una coma en el artículo constitucional sobre la sucesión presidencial. Gracias al consentimiento de Washington, el apoyo de la Guardia Nacional y la coalición política que había organizado, Somoza ya no enfrentaba oposición alguna digna de tomarse en cuenta. El 1 de enero de 1937 se instaló debidamente en la presidencia para un período de gobierno de cuatro años.

J. Conclusión

La llegada al poder de Somoza se debió a varias circunstancias políticas fundamentales. La más importante, sin duda, fue su control de los instrumentos de coerción. Tanto el acuerdo de Tipitapa de 1927, que desarmó a los ejércitos contendientes de liberales y conservadores, como la creación de la Guardia Nacional ese mismo año como única fuerza armada del país, eliminaron en la práctica toda posibilidad de un asalto al poder estatal por parte de un caudillo respaldado por un ejército privado. De hecho, el derrocamiento del gobierno por Chamorro en 1926, al estilo del más rancio caudillismo, sería el último de su tipo en la historia de Nicaragua. En todo caso, no habría sido posible derrotar al gobierno en el campo de batalla después de la formación de la Guardia, dotada de gran poder de fuego y tropas numerosas. Sandino también debió haber comprendido esta realidad; al optar por una negociación con el gobierno central, una vez evacuado el último infante de marina, dotó a su movimiento de una orientación más política.

El asesinato de Sandino y la destrucción de su movimiento a manos de la Guardia constituyen un segundo elemento importante para explicar el auge de Somoza. Si bien es cierto que después de los

acuerdos de paz de 1933 las fuerzas sandinistas se redujeron a su mínima expresión, es concebible que Sandino hubiera estado en capacidad de reorganizarlas para auxiliar al presidente Sacasa, o emprender, dentro de una estrategia política más amplia, un asalto directo al gobierno. En todo caso, Sandino era el único dirigente político que en 1933 y 1934 exigía de manera abierta una renovación de la Guardia, para someterla cabalmente a la autoridad constitucional del presidente.⁹⁷ Somoza debió comprender que una acción de esa naturaleza hubiese puesto en jaque su papel como jefe director o, cuando menos, requerido una reducción de las fuerzas de la Guardia, debilitando, por ende, su peso político. A su vez, Sandino comprendía que la sobrevivencia de su propio experimento político y social en el río Coco exigía que la Guardia dejase de hostigar a sus seguidores. En última instancia, Somoza puso fin al enfrentamiento al ordenar el asesinato de Sandino, una maniobra que permitió, de manera simultánea, reducir el espacio político del presidente Sacasa y abrir el camino a las ambiciones de Somoza.

En tercer lugar, la potencia extranjera que en las dos décadas anteriores había intervenido con tanta fuerza, se había convertido en una esfinge cuya política del “Buen Vecino” hacia Nicaragua más bien debió llamarse la del “vecino indiferente”. Tal política obedecía a la decisión de Washington de reducir sus acciones intervencionistas en todo el hemisferio, así como al hecho que después de 1934 había desaparecido el peligro del surgimiento de una situación que justificara una intervención directa en Nicaragua. Tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador se acostumbraron a la tutela de Washington, después de años de negociaciones con los ministros y emisarios de Estados Unidos y de sometimiento a la supervisión electoral. La Guardia Nacional era producto directo de la intervención de Estados Unidos y su jefe director, sin duda alguna, era el más sumiso de la dirigencia política nicaragüense. Por lo tanto, Estados Unidos no creía necesario apoyar de manera abierta a ningún grupo o dirigente a fin de garantizar sus intereses en Nicaragua; es decir, bien podía colocarse al margen y dejar que el sistema político nicaragüense alcanzara un estado de equilibrio sin su intervención directa. A lo sumo, Washington dejó en claro que no toleraría la destrucción del sistema organizado en Nicaragua con tanto esfuerzo. Conociendo esto, Somoza

utilizó el mínimo de fuerza necesaria para lograr la renuncia de Sacasa, mientras observaba las apariencias de legalidad constitucional requeridas para escalar a la presidencia. Entre los políticos nicaragüenses, Somoza se distinguió por su hábil manejo del arte de interpretar las intenciones de Estados Unidos y actuar conforme a ellas; en el curso de los años seguiría perfeccionando esta habilidad.

Por otra parte, cabe anotar que Somoza comenzó a promover sus ambiciones presidenciales mediante una campaña política mucho antes del golpe contra Sacasa. En este sentido, no esperó el surgimiento de una coyuntura propicia, sino que creó las condiciones para su ascenso al poder. Proyectó su figura, envuelta en un programa de gobierno, como la alternativa política que Nicaragua necesitaba en ese momento. Hizo promesas a todos los sectores sociales dispuestos a escucharle, ofreciendo dejar atrás el pasado y colocarse por encima de las tradicionales divisiones de la sociedad nicaragüense, y presentándose como el sucesor de Zelaya, el líder de un movimiento de renovación, reconciliación y reconstrucción nacional. Aunque provenía del partido Liberal, no tuvo reparo alguno en acercarse a los conservadores, o a la extrema derecha, ni a la clase obrera organizada o diversos intereses agrarios y comerciales. Sin duda, era un oportunista consumado, pero en el mundo de la política esa es una cualidad importante.

Dentro del contexto centroamericano de la época, es imposible identificar un fenómeno político similar, aun sin tomar en cuenta la presencia singular de Estados Unidos. Tampoco es válido equiparar la admiración de Somoza por Mussolini y Roosevelt con las políticas del "New Deal" o el fascismo italiano. En caso que hubiese tenido en mente algún modelo político, quizás Somoza pudo haberse identificado con las figuras de Lázaro Cárdenas o Getulio Vargas, tal como lo indicarían las políticas de su gobierno en los años subsiguientes, especialmente en lo referente a la organización y movilización de la clase obrera y los sectores populares, así como en el papel del Estado en el desarrollo económico. Sin embargo, en los inicios del somocismo no era evidente su intención de convertirse en un poder económico, mediante la apropiación de los recursos del Estado para crear un enorme imperio empresarial. Desde una perspectiva más amplia, quizás

se podría comparar a Somoza con el empresario-general del “maximato” en México, quien conjugó un discurso a favor de la reforma social con una dedicación práctica al desarrollo capitalista.

CITAS Y NOTAS

1. Salvatierra, *Conciliación democrática de los partidos políticos de Nicaragua*, p. 2, 29-31, 41-43.

2. Un análisis detallado de estos asuntos, incluyendo el nombramiento de Somoza como jefe director, se encuentra en Millett, *Guardians of the Dynasty*, p. 125-136, 149-150.

3. Un recuento de los aspectos militares de la lucha sandinista puede leerse en Macaulay, *The Sandino Affair*.

4. Esta interpretación de los hechos ha sido tomada, en gran medida, de la obra fundamental de Gregorio Selser, *Sandino: General de hombres libres*, especialmente las p. 153-156, 174-176, 215-216.

5. Black, *Triumph of the People*, p. 25. También puede consultarse a Macaulay, pp. 158-160.

6. Macaulay, *The Sandino Affair*, p. 247; Selser, *Sandino*, pp. 276-283.

7. Macaulay, *The Sandino Affair*, pp. 245-246.

8. *Mercurio*, no. 29 (noviembre de 1931) y no. 42 (diciembre de 1932).

9. LG/DO, 1933: 37,39 (17 de febrero); 37,52 (4 de marzo); 37,88 (22 de abril).

10. Macaulay, *The Sandino Affair*, p.237. Las cifras son las oficiales de la infantería de marina de Estados Unidos; Macaulay cree que solamente las cifras de las bajas de los infantes de marina son “indudablemente correctas”.

11. Millett, *Guardians of the Dynasty*, p. 152. También pueden consultarse Guardia Nacional, Departamento de Inteligencia y Operaciones, “Informes” del 1 de julio, 1 de octubre y 1 de noviembre de 1933, caja 143, AN.

12. Millett ofrece una descripción detallada de los acontecimientos en torno a la muerte de Sandino y del papel que jugaron Somoza y el ministro estadounidense, Arthur Bliss Lane. Millett, *Guardians of the Dynasty*, pp. 152-161.

13. Ibid., pp. 169-174.

14. LG/DO 1934: 36,163 (23 de julio); 38,180 (14 de agosto).

15. LG/DO 38,259 (19 de noviembre de 1934).

16. LG/DO 38,248 (6 de noviembre de 1934).

17. LG/DO 35,243 (13 de noviembre de 1931).

18. LG/DO 36,195 (12 de septiembre de 1932).

19. LG/DO 34,221 (1 de octubre de 1930); 38,259 (19 de noviembre de 1934). El gobierno autorizó simultáneamente a las municipalidades de todo el país para que crearan instituciones de crédito rural mediante la recaudación de impuestos especiales. La ley en cuestión autorizó la creación de la primera de estas instituciones en el municipio de Chinandega para que apoyara a pequeños y medianos agricultores con préstamos de hasta C\$300 al 9% de interés por un plazo de seis años. LG/DO 38,213 (24 de septiembre de 1934). El problema de tanto el Banco Hipotecario como estos Institutos de Crédito Rural es que los fondos con los cuales trabajaban eran sencillamente insuficientes.

20. LG/DO 39,203 (12 de septiembre de 1935).

21. LG/DO 37,121 (2 de junio de 1933).

22. La Cámara de Comercio de León defendió este punto de vista con mucha insistencia. *Mercurio*, no. 47 (mayo de 1933). También criticó al gobierno por contratar un préstamo con unos bancos de Nueva York por apenas US\$1.5 millones cuando el país requería cuatro veces esa cantidad. *Mercurio*, no. 51 (septiembre de 1933). En ciertos momentos, un patriotismo mancillado asomaba en estos argumentos; *Mercurio* planteaba que Nicaragua tenía derecho a exigir un mejor trato financiero de Estados Unidos después de que los bancos de ese país se encargaron de extraer abundantes ganancias del país. Además, los míseros tres millones de dólares que recibió el gobierno de Nicaragua como parte del tratado Chamorro-Bryan debían ser renegociados. *Mercurio*, no. 52 (octubre de 1933).

23. El 16 de agosto de 1934, la Cámara de Comercio de Managua le envió una carta al presidente Sacasa solicitando que devaluara el córdoba con miras a aumentar la disponibilidad de divisas y mejorar la situación de las operaciones de crédito en el país. La devaluación también contribuiría a estimular a los agroexportadores y, combinada con la imposición de barreras arancelarias, incentivaría la producción para el consumo local. *Boletín*, no. 1 (agosto de 1935).

24. *Boletín*, no. 3 (octubre de 1935).

25. *Boletín*, no. 5 (diciembre de 1935).

26. Irving Lindbergh, Recaudador General de Aduanas, al presidente provisional Carlos Brenes Jarquín, Managua, 22 de junio de 1936, caja 73, folder “aduanas,” AN.

27. Al pronunciar su discurso inaugural, el presidente Sacasa hizo un llamado a las familias nicaragüenses para que organizaran sus vidas bajo “un régimen de sencillez y sobriedad.” Nicaragua, Presidencia de la República, Mensaje inaugural del señor Presidente de la República Dr. Juan Bautista Sacasa leído ante el Congreso Nacional

el 1 de enero de 1933, p. 6. En diciembre de 1935, Sacasa informó que el déficit fiscal se había reducido a C\$30,000 mensuales pero que ya no se podrían lograr economías adicionales y un incremento de impuestos era imposible “dentro de las circunstancias.” Nicaragua, Presidencia de la República, Mensaje del Presidente de la República Dr. Juan Bautista Sacasa al Honorable Congreso Nacional del 15 de diciembre de 1935, p. 11.

28. Véase LG/DO, 1933: 37,17 (23 de enero); 37,29 (6 de febrero); 37,35 (13 de febrero); 37,36 (14 de febrero); 37,40 (18 de febrero); y 37,116 (27 de mayo).

29. LG/DO, 1933: 37,15 (20 de enero); 37,104 (12 de mayo); y 1934: 38,45 (22 de febrero); 38,206 (13 de septiembre).

30. LG/DO 38,160 (19 de julio de 1934). El procedimiento de listas de candidatos para ocupar cargos públicos se convirtió en una solución frecuente a las discrepancias entre los dos partidos sobre nombramientos burocráticos. Le permitía al partido minoritario ejercer una cuota de poder mientras el partido mayoritario se quedaba con la última palabra.

31. Partido Liberal Nacionalista, *Política liberal concerniente a los convenios de conciliación*, pp. 4-11, 42-44.

32. La información sobre estos comités la proporciona Sánchez, *La vieja guardia*, una colección de artículos, fotografías y documentos sobre los orígenes de la causa somocista y, en particular, sobre aquellos individuos que se declararon verdaderos somocistas desde el principio. Las opiniones del ministro Lane se encuentran en Minister in Nicaragua to Secretary of State, 15 de marzo de 1935, FRUS, 1935, 4:842-846.

33. ASG a Leonardo Somarriba, Managua, 10 de diciembre de 1934, caja 75, folder “documentos”, AN.

34. Baltasar López a ASG, Chichigalpa, 11 de diciembre de 1934, caja 65, folder 34.11, AN.

35. Cartas enviadas desde La Concordia, 15 de enero de 1935, con 95 firmas; desde Estelí con 70; desde Corinto con 90; desde Bluefields con 40; y desde Jinotega, 11 de marzo de 1935, con 80. Un grupo de simpatizantes somocistas en León convirtió la carta en un volante. Caja 289, AN.

36. Un mitin organizado por Somoza en Managua en enero de 1935 en apoyo a su candidatura logró atraer a solamente 2,000 personas, aun con la promesa de que se repartirían dinero y guaro. Millett, *Guardians of the Dynasty*, p. 171.

37. “Algunos amigos me piden cartas de recomendación; a muchos tendré que dárselas. Espero sabrás disimular estas molestias”. Agustín Sánchez Vigil a ASG, Jinotepe, 3 de julio de 1935, caja 65, folder 34.5, AN.

38. Escrito de Agustín Sánchez Vijil en Sánchez, *La vieja guardia*, sin página.

39. ASG a Ambrosio Parodi, Managua, 5 de diciembre de 1934, caja 75, folder “documentos,” AN.

40. Caja 72, folder “Guardia Nacional,” AN.

41. Sargento Gámez a ASG, Boaco, 16 de marzo de 1936, caja 69, folder “elecciones,” AN.

42. Capitán Hermógenes Prado a ASG, Estelí, 6 de febrero de 1936, caja 72, folder “elecciones,” AN.

43. J.R. Sevilla a Juan B. Sacasa, León, 13 de enero de 1936; Horacio Fonseca a Juan B. Sacasa, Juigalpa, 8 de marzo de 1936; y J.M. Icaza a Juan B. Sacasa, León, 21 de abril de 1936. Caja 68, folder “elecciones,” AN.

44. Cartas a Juan B. Sacasa de los jefes políticos en Juigalpa, 25 de enero de 1936; Matagalpa, 24 y 27 de enero de 1936; y Estelí, 25 de enero de 1936. Caja 68, folder “informes,” AN.

45. Rodolfo Espinoza a Juan B. Sacasa, Managua, 24 de febrero de 1936, caja 73, folder "elecciones," AN.

46. Julio César Saenz, "Como liberal hablo..." en Sánchez, *La vieja guardia*, sin página.

47. Horacio Espinoza, *El liberalismo debe renovar su ideología y su actuación*.

48. Caja 65, folder 34.11, AN.

49. Caja 211, AN. El uso del término aristocracia en este escrito sin duda se refiere a los oligarcas granadinos, a quienes los liberales consideraban los descendientes de la clase criolla colonial.

50. Discurso en Chinandega, 25 de diciembre de 1934, en Sánchez, *La vieja guardia*, sin página.

51. Reunión efectuada el 9 de noviembre de 1934, en Sánchez, *La vieja guardia*, sin página.

52. Medardo Lanzas a ASG, León, 26 de marzo de 1936, y Roberto Chacón a ASG, Corinto, 9 de enero de 1936, caja 69, folder "elecciones," AN.

53. Caja 270, AN.

54. Julio César Sáenz, "Como liberal hablo..." en Sánchez, *La vieja guardia*, sin página.

55. Millett, *Guardians of the Dynasty*, pp. 174-175.

56. Horacio Argüello B., et al., *Interpretación de las propuestas*.

57. *La Prensa*, 14 de mayo de 1936.

58. Ibid.

59. *La Prensa*, 23 de mayo de 1936.

60. *La Prensa*, 31 de mayo de 1936.

61. Una descripción detallada de los acontecimientos del primer semestre de 1936 se encuentra en Millett, *Guardians of the Dynasty*, pp. 174-178. La autoridad e influencia de Somoza no se limitaron a los acontecimientos más importantes. Utilizó su posición para extender todo tipo de favores a las personas que buscaban su ayuda. María Peralta le escribió al presidente Sacasa solicitando que se le autorizara abrir un negocio de juegos de azar similar a uno que Somoza le había autorizado a otras dos mujeres. Sacasa escribió en el margen que no podía autorizar algo que estaba prohibido por la ley y ordenó que se investigara a Somoza en relación al caso. María Peralta a Sacasa, Bluefields, 1 de agosto de 1935, caja 65, folder 34.7, AN. En un caso parecido, Rosalío González se quejó ante Somoza de que el bar de Eduardo Dávila en León había sido cateado por la policía en busca de “un cierto negocio que él tiene allí” (probablemente una casa de juego) pero que Dávila era un somocista comprometido, por lo que le pedía a Somoza que intercediera a su favor. Además, decía González, semejantes hechos daban la impresión de que el movimiento somocista estaba perdiendo fuerzas, “especialmente entre las masas flotantes que son tan importantes.” Rosalío González a ASG, 26 de marzo de 1936, caja 69, folder “elecciones,” AN.

62. Las reuniones que sostuvo Federico Sacasa en Washington están resumidas en Memorandum by the Assistant Chief of the Division of Latin American Affairs (Beaulac), 1 de octubre de 1935, y Memorandum by the Chief of the Division of Latin American Affairs (Wilson), FRUS, 1935, 4:877-879, 883-886. La posición de Estados Unidos sobre el tema de la “violencia” se encuentra en Minister in Managua to Secretary of State, 18 de junio y 26 de septiembre de 1935, *ibid.*, pp. 862-864, 872-873.

63. Millett, *Guardians of the Dynasty*, pp. 178-180. El presidente Sacasa redactó su propia versión de los acontecimientos en Sacasa, *Cómo y por qué caí del poder*.

64. LG/DO 40-135 (20 de junio de 1936).

65. FRUS, 1936, 5:841.

66. *La Prensa*, 18 de junio de 1936.

67. *La Prensa*, 19 de junio de 1936. También puede verse ASG a Agencia de Noticias Trens en la ciudad de México, Managua, 16 de septiembre de 1936, caja 66, folder “informes,” AN.

68. Emiliano Chamorro, *Autobiografía*, pp. 101-102.

69. Alejandro Salvatierra a Carlos Brenes Jarquín, Managua, 30 de junio de 1936, en *Boletín*, no. 10-11 (mayo-junio de 1936).

70. Asociación Agrícola de Nicaragua a Carlos Brenes Jarquín, Managua, 2 de julio de 1936, en Nicaragua, Secretaría de Agricultura y Trabajo, *Memoria* de 1938, pp. 29-31. La Asociación Agrícola se fundó en 1934 para defender los intereses de los productores agrícolas; sus ingresos provenían en mayor grado de un impuesto especial de C\$0.05 por cada saco de café exportado y de C\$0.02 por cada saco de azúcar producido.

71. H.D. Scott a ASG, Puerto Cabezas, 27 de septiembre de 1936, caja 72, folder “inglés”, AN. Unos meses más tarde, el señor Scott le escribió a un político liberal para expresar su fe en Somoza: “No existe nadie, estoy seguro, que le daría mejor servicio a los americanos que él.” Scott a Mariano Argüello, Puerto Cabezas, 12 de noviembre de 1936, caja 72, folder “inglés”, AN.

72. Nicaragua, Decreto ejecutivo liberalizando el cambio de divisas, LG/DO 40,227 (16 de octubre de 1936).

73. Cámara Nacional de Comercio e Industrias al Ministro de Hacienda, Managua, 20 de octubre de 1936. caja 66, folder “informes,” AN. Véase también *Boletín*, no. 14-15 (septiembre-octubre de 1936).

74. Irving Lindbergh, Recaudador General de Aduanas, a Carlos Brenes Jarquín, Managua, 22 de junio de 1936, caja 73, folder “aduanas,” AN.

75. Pérez Bermúdez y Guevara López, *El movimiento obrero en Nicaragua*, pp. 18-27, 39-42, 51-54.

76. Gould, “*The Nicaraguan Labor Movement and the Somoza Regime*”.

77. Juventud Obrera a ASG, Managua, 20 de febrero de 1936, caja 73, folder “actas y acuerdos,” AN.

78. Nicaragua, Impuesto adicional al alcohol, LG/DO 40,177 (14 de agosto de 1936).

79. Teniente José N. Castillo a ASG, Siquiá, 15 de julio de 1936, caja 66, folder “informes,” AN.

80. En Chontales, por ejemplo, los caudillos eran mayormente ganaderos conservadores, aunque algunos apoyaron a Somoza a través del Partido Conservador Nacionalista. Un informe preparado para Somoza mencionó a tres de estos caudillos y los votos que entregarían: Cornelio Bravo Duarte con 600, Ufredo Argüello con 400-500 y Manuel Lacayo con 50. E.J. Moncada a ASG, Juigalpa, 20 de agosto de 1936, caja 66, folder “elecciones,” AN.

81. Guillermo E. Cuadra a Pedro A. Rodríguez, Managua, 24 de abril de 1936, Fondo Felipe Rodríguez Serrano, AN.

82. ASG a Pedro Alejandro Rodríguez, Managua, 27 de enero de 1936; Jacinto Suárez Cruz a Pedro A. Rodríguez, Managua, 12 de abril de 1936; y Eligio Álvarez a Pedro A. Rodríguez, Managua, 25 de febrero de 1936. Fondo Felipe Rodríguez Serrano, AN.

83. Rafael Córdova Rivas, entrevista con el autor, Managua, 22 de junio de 1984.

84. *La Prensa*, 2, 3 y 12 de septiembre de 1936.

85. J. Solórzano Díaz a ASG, Managua, 26 de septiembre de 1936, caja 66, folder “elecciones,” AN; J. Solórzano Díaz a ASG, Managua, 28 de septiembre de 1936, caja 66, folder “varios,” AN; J. Solórzano Díaz a ASG, Managua, 7 de octubre de 1936, caja 66, folder “informes,” AN. Los conservadores nacionalistas estimaron que les costaría C\$16,000 para empadronar a 40,000 votantes el 1 de noviembre de 1936 para que pudieran votar en las elecciones de diciembre, cantidad que fue debidamente solicitada. Véase J. Solórzano Díaz a ASG, Managua, 20 de octubre de 1936, caja 73, folder “elecciones,” AN.

86. Ministro de Hacienda al gerente general del Banco Nacional, Managua, 5, 19 y 27 de noviembre de 1936, caja 73, folder “ministerios,” AN. Estas cartas contienen instrucciones del ministro para que el banco transfiera fondos de una cuenta especial al Dr. Humberto Guevara, tesorero del Partido Conservador Nacionalista.

87. En Boaco, los liberales y los conservadores nacionalistas pugnaron por inscribir a los votantes bajo su respectivo partido al grado de que estaban anulando sus esfuerzos y causando daño a la campaña somocista. Capitán E. Matamoros a ASG, Boaco, 6 de noviembre de 1936, caja 69, folder “informes,” AN.

88. Millett, *Guardians of the Dynasty*, p. 181.

89. Carlos D. García a ASG, Managua, 7 de octubre de 1936, caja 66, folder “informes,” AN. García acababa de volver de una viaje a los departamentos del norte donde realizó actividades proselitistas.

90. J. Solórzano Díaz a ASG, Managua, 14 de noviembre de 1936, caja 73, folder “elecciones,” AN. Solórzano, presidente de los conservadores nacionalistas, decía que su partido tenía como 3,000 hombres en Ocotal dispuestos a votar por Somoza pero que necesitaba C\$1,400 para comprarles comida y bebida a fin de asegurar su presencia en las urnas el día de las elecciones.

91. Ministro de Hacienda a ASG, Managua, 2 de octubre de 1936, caja 73, folder “informes,” AN.

92. Partido Liberal Nacionalista, Informe de las actividades desplegadas por el Comité Departamental de Propaganda. Los bonos de campaña eran vendidos en todo el país bajo el nombre de “certificados de crédito liberal.” Serían repagados después del 30 de abril de 1937 con los ingresos de la contribución del 5% del salario de todos los empleados públicos. Un ejemplar de este tipo de bono se encuentra en la caja 292, AN.

93. Las cifras correspondientes a 1928 y 1932 se calcularon sobre la base de los datos electorales en Recaudación General de Aduanas, *Memoria* de 1932, pp. 53-55. Las cifras de 1936 han sido tomadas de Consejo Nacional de Elecciones, *La verdad electoral de 1936*, pp. 169-180. Estoy suponiendo que estos resultados electorales son fidedignos, por lo general. Las elecciones de 1928 y 1932 fueron supervisadas de manera imparcial, supuestamente, por las misiones estadounidenses; en los años siguientes, cuando liberales y conservadores discutían los acuerdos de co-gobierno, se referían a la elección de 1932 como un barómetro preciso de las preferencias de los votantes. La elección de 1936 fue supervisada, si acaso, por la Guardia Nacional. El Consejo Nacional de Elecciones tampoco era un cuerpo imparcial. Sin embargo, creo que los resultados de esa elección son correctos porque no reflejan una proporción abultada a favor de Somoza y porque los niveles de ausentismo corresponden a la fuerza electoral de cada uno de los partidos tal como se expresó en las elecciones de 1928 y 1932.

94. J. Solórzano Díaz a ASG, Managua, 20 de octubre de 1936, caja 73, folder “elecciones,” AN.

95. Millett, *Guardians of the Dynasty*, p. 181.

96. Douglas y Morgan, *Nicaragua and the United States*.

97. Pueden verse las cartas que dirigió Sandino a su general, Francisco Estrada, el 24 de mayo de 1933, y al presidente Sacasa el

16 de febrero de 1934, donde califica de inconstitucional a la Guardia Nacional porque se constituyó bajo los auspicios de Estados Unidos y por su independencia de la autoridad presidencial. Ramírez, *Augusto C. Sandino*, pp. 336, 379-380.

CAPÍTULO III

La renovación del estado

Al recibir la banda presidencial el 1 de enero de 1937, Somoza se dirigió al Congreso Nacional y al pueblo en términos muy similares a los que empleó durante su campaña electoral: paz interna, democracia ordenada, justicia social, educación y trabajo. Se extendió en algunos de estos conceptos, dando así una visión más precisa de lo que habría de ser su programa de gobierno. El mantenimiento de la paz exigía un gobierno fuerte, dispuesto a tomar medidas rápidas y decisivas con el respaldo de “un ejército perfeccionado, disciplinado, que constituye el baluarte de las instituciones del estado y de los derechos del ciudadano”. De lo contrario, aseguró Somoza, el país caería en “la locura disolvente de las demagogias o de la opresión de regímenes más o menos despóticos”.¹

Sin embargo, agregó, la existencia de un gobierno fuerte, por sí solo, era insuficiente para hacer frente a las exigencias del momento; también era necesario reformar la Constitución en aras de los intereses más amplios de la sociedad, y no tan sólo con miras a proteger los derechos del individuo. La justicia social era la expresión concreta de esta preocupación, concepto que Somoza definió como “una equitativa protección a los intereses de obreros y campesinos, a efecto de evitar abusos y elevar su *standard* de vida, sin descuidar lo que corresponde al empresario, industrial o capitalista, ya que la verdadera justicia significa un concepto ponderado de equilibrio”. En vista de que este concepto de justicia social se basaba en la solidaridad entre

los hombres, el nuevo gobierno prohibiría la expresión de “ideas exóticas”, tendientes a apartar a las clases sociales de tal principio.

La preocupación inmediata del gobierno, dijo Somoza, sería dar una respuesta a los problemas económicos y financieros, pues de ello dependía la solución de los demás problemas del país. A tal fin, el gobierno procuraría garantizar la honestidad administrativa, la solvencia fiscal, la distribución equitativa de la carga tributaria, y la inversión eficiente de los fondos públicos. En lo inmediato, el gobierno buscaría equilibrar el presupuesto, consolidar la deuda interna, reformar el sistema impositivo, asegurar la estabilidad monetaria y escoger cuidadosamente a los empleados públicos. A largo plazo, el Estado estimularía el potencial agrícola del país mediante la construcción de nuevas carreteras, el crédito agrícola, la educación y la apertura de nuevos mercados. En general, las políticas enumeradas por Somoza reflejaban el gran peso que la crisis todavía ejercía sobre la economía nicaragüense y la determinación del nuevo gobierno de esforzarse por superarla. Somoza enfrentaba el reto de estructurar un conjunto de medidas que ofrecieran, al menos, una mínima satisfacción a los grupos económicos más poderosos, sin generar una oposición muy fuerte entre los sectores populares.

El reto no era sencillo. El precio del café, el producto de exportación más importante de Nicaragua, permanecía a un nivel muy bajo de alrededor de US\$0.07 la libra; es decir, tanto el precio como el volumen de café exportado seguía a los mismos niveles que en 1932 y 1933. La producción bananera estaba en franco declive, y las compañías estadounidenses en la costa Atlántica recortaban sus compras a los productores locales. El único sector que no estaba deprimido era la minería del oro, pero la naturaleza de esta actividad en Nicaragua reducía significativamente su impacto en la economía, pues la mayoría de las minas estaban en manos de inversionistas extranjeros y operaban como enclaves. Además, casi no pagaban impuestos. A lo sumo, el Banco Nacional compraba en córdobas parte de la producción de oro, pero el resto salía del país sin dejar beneficio alguno. El café seguía siendo, por lo tanto, el producto de exportación más importante, pues no sólo generaba la mayor cantidad de divisas sino también ofrecía oportunidades de empleo a un número

mayor de obreros agrícolas.² Una vez que Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones nicaragüenses de otros productos, como el caucho y el sésamo, se incrementarían de manera dramática. Pero en 1937, la economía todavía se encontraba postrada.

A. La regulación del comercio internacional y las divisas

Al igual que las demás economías agroexportadoras de Latinoamérica, el problema inmediato que enfrentaba la economía nicaragüense en ese momento era el de la balanza comercial. En 1936, Nicaragua todavía presentaba una balanza comercial desfavorable que limitaba seriamente su capacidad de importación, y dificultaba el pago de las obligaciones de la deuda externa. Por tanto, la principal preocupación del gobierno era lograr una balanza comercial favorable, que solamente sería posible mediante una reducción de las importaciones. El gobierno tenía a su disposición una gama de opciones, incluyendo la devaluación, los controles sobre las importaciones y el cambio de divisas, y la inflación monetaria para reducir la capacidad de compra de la población. De hecho, todas éstas fueron empleadas en diversos momentos con impactos más o menos exitosos.

Dos semanas después de haber asumido la presidencia, Somoza se dirigió a la nación para dar a conocer la gravedad de la situación económica. Como medida paliativa, anunció que a partir de ese momento el Banco Nacional vendería dólares para la importación de productos de primera necesidad y materias primas a una tasa de cambio de 1.90 córdobas por dólar – en vez del cambio anterior de 1.10 córdobas por dólar – lo que equivalía a una devaluación del 80%. Este anuncio obligó a una baja de la tasa del mercado negro, que era de 2.60 córdobas por dólar, aproximadamente.³ Sin embargo, poco después el mercado negro volvió a subir drásticamente; los comerciantes e importadores se quejaron de la escasez de dólares en los bancos que los obligaba a seguir comprando divisas a la tasa del mercado negro. El gobierno les instaba a mantener fijos el precio de sus mercaderías, pero les sería imposible cumplir si no se les daba acceso a dólares más baratos para pagar sus deudas comerciales.

Insistieron, nuevamente, en que el Banco Nacional vendiese sus reservas de oro y colocase los dólares que obtendría de esta transacción a disposición de los comerciantes.⁴

Hacia mediados de 1937, la situación seguía sin mejorar para los comerciantes e importadores. La Cámara de Comercio de Managua escribió nuevamente a Somoza, reclamando poner en efecto la medida decretada en octubre de 1936, según la cual el Banco Nacional debía colocar el 70% de los ingresos generados por las exportaciones a disposición de los comerciantes, para que éstos pudiesen pagar las importaciones. Asimismo, se quejaron de la lentitud en la aplicación del plan de Somoza de vender dólares a una tasa de 1.90 córdobas por dólar, por lo que su impacto económico era imperceptible. En suma, las instituciones del Estado no cumplían con las leyes y los reglamentos decretadas por éste, obligando a los comerciantes e importadores a seguir comprando dólares en el mercado negro en perjuicio de los consumidores.⁵

A fin de enfrentar dichas críticas, el gobierno contrató los servicios de un estadounidense experto en finanzas, el doctor James H. Edwards, a quien encomendó analizar la situación fiscal y financiera de Nicaragua y presentar un plan para corregirla. Después de varios meses de discusiones y estudios, Edwards recomendó que el gobierno reimpusiera un estricto control de las importaciones, exportaciones y cambio de divisas. En respuesta a sus propuestas, en agosto de 1937 el Congreso aprobó una ley autorizando a la comisión de cambios a controlar todas las exportaciones e importaciones y establecer una tasa de cambio que no excediera los dos córdobas por dólar.⁶ Sin embargo, el incremento de los controles gubernamentales sobre el comercio exterior y el mercado de divisas no resolvería el problema, pues su trasfondo era el insuficiente ingreso de divisas y la excesiva demanda de productos importados. Ante la imposibilidad de aumentar la disponibilidad de divisas en el corto plazo, debido a la depresión del mercado mundial, la única alternativa realista era restringir el consumo de bienes importados. Sin embargo, era preciso definir si la asignación de las pocas divisas para pagar las importaciones se efectuaría mediante la operación irrestricta de las fuerzas del mercado, o si el gobierno racionaría los dólares y las libras esterlinas

mientras intentaba frenar el aumento en la tasa de cambio. Las recomendaciones de Edwards fueron puestas en práctica de acuerdo a esta segunda opción.

Hacia diciembre de 1937, tanto la Cámara de Comercio de Managua como la Asociación Agrícola de Nicaragua manifestaban su rotunda oposición al llamado “Plan Edwards”. La Cámara de Comercio reiteró su oposición a cualquier tipo de control gubernamental sobre las divisas, manteniendo la misma posición adoptada desde la creación de la Comisión de Control de Cambios en 1931. El sistema, observaba la Cámara, había fracasado en sus objetivos de estabilizar el córdoba, eliminar el mercado negro, y evitar la fuga de capitales — única “razón plausible para el mantenimiento del sistema”. Las reformas posteriores tampoco habían producido mejora alguna, por lo que todo el sistema debía eliminarse, concluyó la Cámara.⁷

Por otra parte, la Asociación Agrícola expuso las dificultades de su sector, pues no sólo enfrentaban la caída en el precio del café, altos impuestos y costos de transporte, sino también los errores de la comisión de control de cambios, a la que describieron como una “institución que ha ejercido la más nefasta influencia sobre los productores en general y sobre los cafetaleros en particular”. De acuerdo a la Asociación Agrícola, la comisión de control de cambios sólo favorecía a los comerciantes, quienes vendían sus productos a precios de mercado negro mientras compraban dólares al cambio oficial. Mientras los agricultores se veían imposibilitados de cancelar sus deudas a tiempo, los comerciantes se beneficiaban del tratamiento especial que les otorgaban las medidas de la Comisión de Control de Cambios, por lo que ninguno se había visto obligado a declararse en quiebra jamás. En palabras de la Asociación, los comerciantes gozaban de “un bienestar envidiable, logrado a la sombra de la Comisión de Control”. Por lo tanto, recomendaron varias medidas como la liquidación de la Comisión de Control de Cambios, la libre flotación del córdoba, la reducción de los impuestos de exportación, y la suspensión del pago de la deuda comercial.⁸

Aunque los comerciantes y los caficultores defendían intereses muy distintos y percibían la situación del momento desde pers-

pectivas diferentes, ambos coincidieron en la necesidad de eliminar el control de cambio y devaluar el córdoba. La oposición de estas dos poderosas organizaciones gremiales a las políticas económicas establecidas, obligaron a Somoza a reconocer que la Comisión de Cambios había sido un fracaso. El 10 de diciembre, durante su conferencia de prensa semanal, dijo que el “Plan Edwards” no había funcionado porque el experto estadounidense había recibido “datos incorrectos” sobre las reservas de oro de Nicaragua. En consecuencia, Somoza propuso un nuevo plan, según el cual los exportadores recibirían hasta un 80% de las divisas recaudadas para disponer de ellas a voluntad, y la Comisión limitaría su función a impedir la fuga de capitales. El Congreso aprobó rápidamente esta propuesta. De acuerdo a este plan, en Nicaragua se podría negociar libremente con cualquier moneda extranjera, a excepción de aquellas divisas provenientes de las exportaciones, que continuarían siendo canalizadas a través del Banco Nacional. Además, se dejaría flotar libremente la tasa de cambio, de tal manera que los exportadores de café recibirían más córdobas por dólar, y los comerciantes tendrían que pagar más por la divisa. El Banco cobraría un 10% de impuesto sobre cada operación de compra de divisas y de exportación.⁹ A partir de ese momento, la Comisión de Cambios se convirtió en una especie de bolsa de valores donde se realizaban las transacciones de divisas.

El impacto de estas medidas y la creciente demanda de dólares produjo el resultado esperado por los agroexportadores: el córdoba se devaluó hasta estabilizarse en junio de 1938 alrededor de los cinco córdobas por dólar al cambio oficial, y un poco más bajo al cambio libre. (Ver Cuadro 3.1.) Sin embargo, los comerciantes no se mostraron totalmente satisfechos. Al presentar su informe de fin de año a los socios de la Cámara de Comercio de Managua, el presidente Eduardo Mendoza dijo que los logros del año 1937 habían sido pobres, y criticó la indiferencia de los funcionarios del gobierno. Aunque reconoció la leve mejoría resultante del plan económico más reciente, anotó que sus efectos todavía estaban por verse. A su juicio, la situación económica del país a fines de 1937 había empeorado en términos generales desde principios del año, especialmente en el sector exportador, por lo que los comerciantes no podrían prosperar.¹⁰

Cuadro 3.1 Valor del córdoba frente al dólar

Cambio oficial		Cambio libre	
Antes de 11/1934	C\$ 1.00		
26/11/1934	1.10	31/12/1934	C\$ 1.25
16/03/1937	2.00	30/06/1937	3.20
23/12/1937	4.00	31/12/1937	4.30
9/06/1938	5.00	30/06/1938	5.90

Fuentes: "Cost of living in Managua, Nicaragua" el costo de la vida en Managua, Nicaragua, documento preparado por un equipo de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua (1944), el cual a su vez utilizó datos del Banco Nacional y la Dirección General de Estadística, caja 269, AN.

Mientras tanto, un grupo de empresarios se reunieron por su propia cuenta, y llegaron a un acuerdo informal de no pagar más de C\$4.50 por dólar a los exportadores. Asimismo, intentaron llegar a un arreglo con la Asociación Agrícola para estabilizar la tasa de cambio en C\$4.50 por dólar; sin embargo, ésta respondió que dicha tasa de cambio dejaba a los agricultores un margen de ganancia muy escaso. Además, no entendían por qué la Cámara de Comercio había modificado su posición inicial de pedir una tasa de cambio libre, para proponer después que se fijara una tasa máxima. Como era de esperarse, no se llegó a ningún acuerdo.¹¹ Al parecer, esta situación se debió a que la Cámara de Comercio de Managua pasó a ser controlada por empresarios identificados con el gobierno, que rechazaban la libre flotación del córdoba. A partir de enero de 1938, Constantino Pereira asumió la presidencia de la junta directiva de la Cámara y en los meses siguientes no dejó de ensalzar a Somoza. Además, Somoza nombró a José Benito Ramírez, un antiguo presidente de la Cámara, al cargo de ministro de Hacienda. Tanto Pereira como Ramírez habían firmado el acuerdo informal sobre la tasa de cambio. La nueva directiva de la Cámara, por ende, trató de apoyar al gobierno en sus intentos de mantener la tasa de cambio al nivel más bajo posible, mientras que los agroexportadores pujaban por elevarla.

Ante este problema, Somoza trató de actuar de manera imparcial, aunque en términos políticos al régimen le convenía una tasa de cambio más baja, para evitar que el precio de los productos importados aumentara mucho. En enero de 1938, Somoza firmó un

decreto estableciendo la reglamentación para la puesta en marcha de la última versión del sistema de control de cambios. Tal decreto estipulaba la obligación de todos los exportadores de obtener una autorización de la Comisión de Control de Cambios antes de embarcar sus producción hacia el exterior, y las divisas recibidas a cambio de las exportaciones serían canalizadas a través del Banco Nacional. Después, los exportadores autorizados por la comisión podrían solicitar dólares al Banco para cancelar el valor de las importaciones y otras obligaciones pendientes en el exterior. La Comisión le daría prioridad en la venta de dólares a los comerciantes para la importación de mercancías, a la vez que vendería divisas a los exportadores “en cantidad razonable” de acuerdo a sus necesidades. Por otra parte, aquellos autorizados para comprar divisas tendrían que dirigirse a los que tenían dólares para vender – es decir, los exportadores – y regatear con ellos el precio de venta.¹² De esa manera, el gobierno se desentendió de la fijación de la tasa de cambio pero mantuvo un control sobre las operaciones de cambio al manejar los procedimientos administrativos que le permitían autorizar la venta de divisas a unos y a otros no.

Una vez que la tasa de cambio se estabilizó alrededor de C\$5.00 por dólar, el gobierno intentó de nuevo establecer controles más estrictos para la venta y compra de dólares. En junio de 1938, el Congreso aprobó otra medida de control de cambios que autorizaba al gobierno fijar la tasa de cambio semanalmente. Además, seguiría controlando los trámites administrativos; pues la compra y venta de dólares entre particulares estaba prohibida.¹³ En realidad, los nuevos procedimientos no aumentaron la injerencia del Estado en las operaciones de cambio, y la tasa no siguió bajando. El gobierno se había retirado de la fijación de la tasa de cambio mientras el córdoba se devaluaba en un entorno de mercado libre. El gobierno volvió a fijar la tasa cuando el córdoba se estabilizó.

B. Controles de precio y reformas financieras

Conforme bajaba el valor del córdoba, Somoza se vio obligado a tomar en cuenta los costos políticos del aumento de los precios que ocurrió posteriormente. Sus promesas en la campaña elec-

toral de proteger a obreros, campesinos y clase media urbana se verían desvirtuadas frente a una espiral inflacionaria. Los controles de precio parecían ser el instrumento más eficaz en ese momento y, además, eran consistentes con la política del gobierno de participar activamente en la economía. En marzo de 1937, el gobierno tomó algunos pasos iniciales con mucha cautela en esa dirección. A iniciativa propia con el fin de favorecer “los intereses de los sectores populares”, Somoza emitió un decreto ordenando a los comerciantes que exhibieran los precios de los productos en venta en lugares visibles para facilitar a los inspectores de la Comisión de Cambios su verificación. Además, se facultó a estos inspectores revisar la contabilidad de los comerciantes, a fin de comparar los costos con los precios de venta al detalle. Con base en esta información, la Comisión de Cambios podría otorgar un trato preferencial en la venta de divisas a aquellos comerciantes que vendían a los precios más bajos.¹⁴ Éste no era un sistema de control de precios, en el sentido estricto de la palabra, sino, más bien, un sistema de premios y castigos que probablemente no tuvo mayores consecuencias; al menos, no existe evidencia de que los comerciantes objetaran su puesta en marcha.

Sin embargo, hacia fines de 1937 el aumento de los precios se había convertido en motivo de preocupación para el gobierno, y en enero de 1938 el régimen incursionó por primera vez en el campo del control de precios mediante un proyecto de ley para regular la tasa de ganancias. Esta ley proponía fijar la utilidad máxima que podrían obtener los comerciantes mayoristas y minoristas en un 20% sobre la venta de artículos de primera necesidad, tales como tela ordinaria, hilos, herramientas, machetes, arados, palas, medicinas, harina y, en general, todos aquellos productos considerados esenciales para el pueblo nicaragüense. Asimismo, se contemplaba la creación de un nuevo organismo — la Comisión Ajustadora Nacional — para supervisar los efectos de esta ley. El presidente recibiría la facultad de nombrar a los integrantes de dicha comisión, de manera que estuviesen representadas varias instituciones, como la Comisión de Cambios, la Recaudación General de Aduanas, el Banco Nacional, el gremio de comerciantes y el sector laboral. Los consumidores podrían dirigir sus quejas ante la Comisión Ajustadora, la cual tenía la potestad de multar y, en caso extremo, hasta cerrar, los negocios que excedían el nivel de utilidades del 20%.¹⁵

Esta ley fue aprobada por el Congreso sin mayor debate. Algunos diputados se preguntaron si un detallista podría obtener una ganancia del 20% por encima de la ganancia del mayorista. Otros se preguntaron si existía suficiente capacidad administrativa para hacer cumplir esta disposición.¹⁶ La Cámara de Comercio tampoco expresó gran desacuerdo. En una nota dirigida a Somoza, atribuyó los precios altos en los almacenes a la incertidumbre en torno a la tasa de cambio, que obligaba a los comerciantes a vender a un precio que compensaría una posible caída del valor del córdoba.¹⁷ Somoza se reunió posteriormente con una delegación de comerciantes para discutir esta ley, y les explicó su intención de beneficiar a todo el pueblo sin perjudicar a nadie. En consecuencia, el presidente de la Cámara de Comercio de Managua envió una nota a todos los asociados pidiéndoles cumplir con la ley, y aseguró que la Comisión Ajustadora resolvería cualquier injusticia que afectara a los comerciantes.¹⁸ La ausencia de protestas ante esta ley, por parte de los comerciantes, pudiera ser un indicio de su inocuidad. Una ganancia del 20% quizás era suficiente para compensar la caída del córdoba; por otra parte, el gobierno carecía de suficiente capacidad administrativa como para controlar todas las transacciones comerciales.

En el transcurso del año 1937, el gobierno anunció algunas medidas adicionales para contrarrestar el alza en los precios. En junio, Somoza prohibió la exportación de ganado durante cinco años, supuestamente con miras a mantener bajos los precios de la carne en el mercado interno. Tanto la Asociación Nacional de Ganaderos como la Cámara de Comercio de Managua objetaron esta medida, argumentando que la causa del alto precio de la carne no era la insuficiente oferta, sino los altos impuestos.¹⁹ En todo caso, las facilidades existentes para el contrabando en la frontera con Costa Rica anularon cualquier intento de impedir el trasiego de ganado; por otra parte, posiblemente el propio Somoza ya estaba personalmente involucrado en el contrabando de ganado.²⁰ Un poco después, en febrero de 1938, Somoza reveló un plan para crear un comisariato nacional que vendería productos de primera necesidad al costo a obreros y campesinos. El proyecto debía arrancar con pequeñas contribuciones de los mismos trabajadores, pero la propuesta no progresó. Lo mismo ocurrió con otro proyecto para imponer controles al valor de los al-

quileres.²¹ En general, los controles de precios más severos fueron introducidos después del estallido de la guerra en Europa, pues el gobierno adquirió más autoridad para intervenir en diversos aspectos de la economía. Mientras tanto, Somoza había logrado satisfacer el viejo reclamo de los agroexportadores y comerciantes: la devaluación del córdoba y la estabilidad de la tasa de cambio.

La intervención del régimen para resolver el problema de la tasa de cambio mediante la devaluación fue la más visible de una serie de medidas económicas que Somoza puso en práctica durante sus primeros años en la presidencia. Todas estas disposiciones tenían como propósito fortalecer las instituciones del Estado, pero a largo plazo las más importantes fueron las reformas de los sistemas fiscal y bancario. En junio de 1937, seis meses después de asumir la presidencia, Somoza recibió de manos del asesor Edwards un informe global sobre los principales problemas económicos del país. Dicho informe había sido elaborado por el experto estadounidense con base en entrevistas a banqueros, empresarios, comerciantes, agricultores y funcionarios del gobierno. Las recomendaciones de Edwards eran muy convencionales: equilibrar el presupuesto, estabilizar la tasa de cambio, aumentar los ingresos del estado mediante la creación de nuevos impuestos, y consolidar la deuda flotante, entre otros. Asimismo, sugirió reformar todo el sistema financiero y bancario, para permitir la efectiva puesta en marcha de las políticas fiscales y bancarias.²² A fines de ese año, Edwards cayó en desgracia como resultado del fracaso de su plan para estabilizar el córdoba. Sin embargo, sus recomendaciones dirigidas a equilibrar el presupuesto e incrementar los ingresos tributarios hasta cierto punto fueron tomadas en cuenta.

Durante el último año del gobierno de Sacasa, el presupuesto finalmente había presentado un pequeño superávit. Somoza, sin embargo, se empeñó en aumentar dicho superávit y procedió de manera agresiva para lograr su propósito. Mejoró los sistemas de recaudación, sobre todo en los rubros del papel sellado, el aguardiente y las tarifas del ferrocarril nacional. Asimismo, aumentó los impuestos sobre la gasolina, el alcohol, el tabaco y el azúcar. En diciembre de 1939, estableció el primer impuesto sobre la propiedad, a una tasa del 0.5% de su valor catastral, y gravó las transacciones de venta y

herencia de toda propiedad (0.5% en el caso de una venta y del 0.5% hasta un 15% en el caso de una herencia).²³ Sin embargo, las sumas recaudadas en concepto de impuestos sobre la propiedad fueron mínimas; por otra parte, no se empezó a cobrarlos hasta 1944, y el impuesto sobre venta y herencia de propiedades se evadía con frecuencia. Por tanto, el aumento en los impuestos recayó sobre los consumidores, pese a las declaraciones del gobierno en el sentido contrario. En efecto, durante una conferencia de prensa celebrada en diciembre de 1937, el propio Somoza afirmó que el aumento a los impuestos vigentes y la creación de otros gravámenes adicionales, no afectarían al pueblo sino a los ricos “que quieren gastarse cierto lujo”. A continuación, su ministro de Hacienda pronunció un discurso criticando el peso de la tributación indirecta en Nicaragua, e insistió en la necesidad de redistribuir la carga fiscal por medio de los impuestos directos.²⁴ Sin embargo, el único impuesto directo de alguna cuantía recaudado en ese momento era el que gravaba las exportaciones de café y éste se redujo en un 20% para favorecer a los productores.²⁵

Al margen del carácter regresivo de la estructura tributaria, los ingresos del gobierno aumentaron a partir de 1937. (Ver Cuadro 3.2.) En buena medida, este aumento fue tan sólo nominal, producto de la devaluación del córdoba; si se convierten los ingresos en córdobas a dólares al cambio vigente, se nota que dicho aumento no fue tan sustantivo. Por otra parte, los mayores incrementos se produjeron después de 1940, gracias al estímulo de la Guerra Mundial a las exportaciones nicaragüenses. En todo caso, el presupuesto generó un superávit de manera consistente, a excepción de dos años fiscales (1942-43 y 1944-45), lo que demuestra la determinación y el éxito del gobierno por controlar el desequilibrio fiscal.

El aumento de los impuestos y el equilibrio presupuestario fueron dos aspectos importantes de la política económica del régimen que fueron complementadas por la reforma del sistema bancario. Desde la creación del Banco Nacional en 1912, el sistema bancario del estado había dominado completamente las operaciones de crédito en el país. A raíz de la fundación del Banco Hipotecario en 1931, estos dos bancos estatales adquirieron un cuasi-monopolio de todas las operaciones bancarias. Sin embargo, ambas instituciones venían

Cuadro 3.2 Ingresos y egresos del gobierno, 1935-1945

Año fiscal	Ingresos en C\$	en US\$	Egresos en C\$	Superávit/ Déficit
1935-36	5,302,486	4,820,442	4,945,823	356,663
1936-37	7,493,825	5,790,682	6,850,020	643,805
1937-38	10,416,000	3,645,600	n.d.	n.d.
1938-39	16,746,156	3,349,231	14,386,323	2,358,833
1939-40	28,147,895	5,629,579	23,388,784	4,759,111
1940-41	32,973,443	6,594,688	28,066,642	4,906,801
1941-42	40,724,658	8,144,931	38,053,185	2,671,473
1942-43	41,141,255	8,228,251	41,308,462	(-) 167,207
1943-44	48,893,683	9,778,736	43,247,971	5,645,712
1944-45	47,782,397	9,556,479	59,801,240	(-) 12,018,943

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Memorias.

siendo criticadas desde algún tiempo por deficiencias en la coordinación en sus operaciones. Por ejemplo, el Banco Nacional se había involucrado en operaciones de crédito rural que coincidían con los objetivos del Banco Hipotecario; asimismo, en 1935, la Comisión de Control de Cambios autorizó la venta de divisas pero el Banco Nacional no tenía los fondos necesarios para suplirlas. Asimismo, algunos sectores de la opinión pública censuraban el control estadounidense del Banco Nacional y cuestionaban su política restrictiva en cuanto al uso de sus reservas de oro.

Con el propósito de dotar al Estado de un mayor control sobre el sistema bancario, en primer lugar Somoza ordenó que a partir de mayo de 1938 la junta directiva del Banco Nacional debía sesionar en Managua. La mayor parte de las acciones del Banco ya estaban en manos del gobierno, pero el hecho de que la junta directiva se reuniera en Managua la haría más permeable a las presiones e intereses locales. En adelante, el Banco se vería obligado a prestar más atención a los requerimientos de los exportadores y los comerciantes, y el gobierno nacional podría ejercer mayor influencia en cuanto a la política fiscal.

En segundo lugar, Somoza se propuso reformar el sistema bancario en su totalidad, y para ello contrató los servicios del doctor

Herman Max – un economista chileno asociado al Banco Central de Chile – quien arribó a Managua en mayo de 1940. El doctor Max permaneció en Nicaragua durante el resto del año. Inició su trabajo con un estudio del sistema bancario y concluyó proponiendo una serie de leyes nuevas para regular la política monetaria y crediticia. El presidente aprobó dichas leyes en su conjunto, y las promulgó el 26 de octubre de 1940 bajo decreto ejecutivo, con algunas modificaciones menores.²⁶ En el preámbulo, el decreto enumera una serie de razones para justificar la reforma al sistema bancario, entre éstas, la necesidad de alcanzar la estabilidad de los precios, adaptar el sistema bancario y monetario a las nuevas realidades de un mundo que se hundía en la guerra, y aumentar el número y el monto de las operaciones de crédito.²⁷ Sin embargo, omitió mencionar un objetivo fundamental: el de colocar todo el sistema bancario bajo control directo del presidente de la república.

En virtud de la primera y más importante de estas leyes, el Banco Nacional fue convertido en un “ente autónomo” de la república; es decir, a partir de octubre de 1940 dejó de ser una corporación inscrita en el estado de Connecticut. Sus operaciones básicas pasaron a manos de un departamento bancario que operaba como un banco comercial, así como de un departamento de emisión haciendo las funciones de un banco central. Aunque estos departamentos eran independientes entre sí, ambos quedarían bajo el control de una sola junta directiva. Correspondía al presidente de la República nombrar a los miembros de dicha junta; tres de éstos debían ser representantes de la Cámara de Comercio de Managua, de la Asociación Agrícola (que velaba por los intereses de los caficultores) y de la Asociación de Ganaderos, respectivamente; quedando a voluntad del mandatario escoger a otros cuatro miembros que constituirían una mayoría en la directiva. En vista de la amplitud de las funciones del Banco, la influencia del presidente se haría sentir en muchos aspectos de la vida económica del país. Por ejemplo, el departamento bancario – conformado por oficinas de crédito comercial, agrícola e industrial – era el encargado de resolver sobre todas las solicitudes de crédito, grandes y pequeñas, especialmente en los rubros de producción de café y azúcar, mediante créditos de avío. A su vez, correspondía al departamento de emisión la potestad de fijar la tasa de descuento

bancario, la tasa de cambio de divisas, y la tasa máxima de interés bancario, emitir moneda, así como realizar operaciones de compra-venta de oro y moneda extranjera.²⁸

Otra ley regulaba las operaciones de las instituciones bancarias, tanto nacionales como extranjeras, reservando para el presidente de la República el poder de autorizar la creación de todo banco e institución de crédito. Una vez constituidos, los bancos quedarían sometidos a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, institución autorizada para inspeccionar sus sistemas de contabilidad y evaluar el cumplimiento de las normas relativas a depósitos, créditos y operaciones de cambio. El jefe de la Superintendencia sería nombrado por el presidente de la República, aunque su oficina dependería del Ministerio de Hacienda.²⁹

Asimismo, se emitieron leyes adicionales que fijaron la tasa de interés máxima para todas las operaciones de crédito en una y media veces la tasa de descuento bancario, y otorgaron al departamento de emisión del Banco Nacional la facultad de fijar la tasa de cambio del córdoba. Las operaciones de compra-venta de divisas pasaron a ser reguladas por una Comisión de Cambios, antes denominada Comisión de Control de Operaciones de Cambio. Dicha comisión se hallaba integrada por tres personas nombradas por el presidente de la República, que debían conocer el mundo de los negocios y del comercio, pero “sin tener ninguna relación directa con dichas actividades”. Correspondería a éstos controlar todas las exportaciones y asegurar el retorno a Nicaragua de las divisas percibidas en el extranjero. Asimismo, se encargaría de distribuir las divisas entre aquellos que buscaban satisfacer necesidades “legítimas”, tales como importaciones, pagos de deudas, repatriación de utilidades de las empresas extranjeras, así como viajes de negocio y estudio en el exterior.³⁰ El Banco Hipotecario fue reorganizado para evitar que su política crediticia se traslapara con la del Banco Nacional. En adelante, debía limitarse exclusivamente a otorgar créditos de largo plazo destinados a la agricultura, la compra de tierras y la construcción de viviendas, negocios e industrias. Su junta directiva se redujo de nueve a cinco miembros, todos nombrados por el presidente – tres a su voluntad y los dos restantes de ternas presentados por el Banco Na-

cional y la Asociación Agrícola de Nicaragua. Al igual que los bancos particulares, las operaciones del Banco Hipotecario serían supervisadas por la Superintendencia de Bancos.³¹

El montepío nacional, denominado Caja Nacional de Crédito Popular, también fue afectado por las reformas de las leyes bancarias. La contribución del gobierno para formar su capital se incrementó de C\$50,000 a C\$150,000 y se le autorizó otorgar créditos hasta por la suma de C\$3,000, en vez del límite máximo vigente de C\$100. Sin embargo, no se modificó la disposición de dejar en manos del presidente de la República la potestad de nombrar a los tres miembros de su junta directiva, así como al gerente general.³²

Finalmente, en octubre de 1940 se aprobó otra ley para reorganizar la llamada Compañía Mercantil de Ultramar. Dicha compañía había sido fundada en 1919 como una empresa comercial privada, inscrita en el estado de Nueva York, cuyos dueños originales eran un estadounidense y un británico. Posteriormente, sus acciones fueron compradas por el Banco Nacional y la Compañía Mercantil se convirtió en el agente comercial del mismo. De acuerdo a la ley de 1940, la compañía dejó de existir como una corporación independiente y se constituyó en parte del Banco Nacional bajo el nombre de Compañía Mercantil de Ultramar, Oficina de Exportación e Importación del Banco Nacional de Nicaragua. Ésta se encargaría principalmente de la exportación de café y el establecimiento de normas de control de calidad, pero también podía comprar y exportar cualquier producto agrícola, así como importar y vender a bajo precio todo tipo de insumos requeridos por el sector agrícola. Su directiva se hallaba conformada por tres personas, en representación del Banco Nacional, el Banco Hipotecario y la Asociación Agrícola de Nicaragua.³³

A raíz de la aprobación de este conjunto de leyes bancarias, el nuevo sistema comenzó a funcionar el 1 de enero de 1941, con la apertura del Banco Nacional como una institución netamente nacional. La característica más notable de este nuevo sistema fue el peso enorme de los bancos estatales en las operaciones de crédito del país. (Ver Cuadro 3.3.) Entre 1941 y 1945, los bancos privados

nunca tuvieron más de un 14% de participación en todo el crédito extendido en Nicaragua. El Banco Nacional, por sí solo, manejaba entre las dos terceras y las tres cuartas partes del volumen total de préstamos.

Cuadro 3.3

Operaciones de crédito públicas y privadas, 1941-1945 (en miles de C\$)

	1941	1942	1943	1944	1945
<i>Bancos privados:</i>					
JRE Tefel	76	139	235	397	453
Caley Dagnall	229	562	941	878	943
Banco de Londres	2,369	3,527	4,124	3,960	5,653
Total	2,674	4,228	5,300	5,235	7,049
<i>Bancos estatales:</i>					
Caja Cred. Pop.	638	758	842	962	1,162
Banco Hipotecario	5,069	5,851	6,167	7,339	7,873
Banco Nacional	16,516	21,664	26,466	36,408	45,861
Total	22,223	28,273	33,475	44,709	54,896
Total general	24,897	32,501	38,775	49,944	61,945

Fuentes: Juan María Castro Silva, *Nicaragua económica* (Managua: Talleres Nacionales, 1949), pp. 103-110. JRE Tefel y Caley Dagnall no eran bancos, en el sentido estricto del término, sino más bien "casas de cambio autorizadas"; ambas se dedicaban principalmente a la exportación de café y al negocio de los créditos de avío. Caley Dagnall era propiedad de dos ingleses mientras que JRE Tefel era una empresa nicaragüense.

Sin duda, a través de las operaciones de crédito se ejercía una influencia política considerable. Somoza recibía mensualmente copias de todas las operaciones de crédito del Banco Nacional y del Banco Hipotecario, y con frecuencia escribía cartas de recomendación a sus respectivos presidentes, apoyando determinadas solicitudes de crédito.³⁴ Probablemente, una carta de recomendación de Somoza era suficiente garantía para la aceptación de una solicitud de crédito; pero el presidente sólo extendía dichos documentos a las personas de su confianza.

Entre 1941 y 1945, las operaciones de crédito se aceleraron, destinados en su mayoría hacia la agricultura y la ganadería; y aproximadamente la mitad de la cartera de préstamos del Banco Nacional se orientó a este sector. Los comerciantes también constituían una clientela importante del Banco; por lo general, los créditos al comercio representaban entre una tercera y una cuarta parte de todos los préstamos otorgados.

En parte, el incremento del volumen de los préstamos bancarios fue reflejo de la devaluación del córdoba y de la espiral inflacionaria que se desató a partir de 1938, a pesar de los intentos del gobierno por frenarla. Además de las medidas dictadas en 1937 y 1938 para limitar las ganancias y controlar la tasa de cambio, a raíz del inicio de la Segunda Guerra Mundial se tomaron nuevas disposiciones, entre éstas, la restricción a las importaciones, el intento de fijar la tasa máxima de ganancia en un 5% para aquellos productos de primera necesidad, y el establecimiento de precios tope para algunos de ellos. Asimismo, los alquileres fueron congelados al nivel en que se encontraban en agosto de 1939 y se constituyó un monopolio estatal encargado de importar medicamentos para combatir ciertas enfermedades endémicas. Cuando Estados Unidos entró al conflicto, se creó una Junta de Control de Precios y Comercio para ejercer una mayor fiscalización sobre los mismos, y en 1944, la autoridad de esta junta fue ampliada para abarcar el control de todas las importaciones.³⁵

En la práctica, estas medidas constituyeron un sistema de racionamiento, especialmente de los productos importados, la mayoría de los cuales provenían de Estados Unidos. Sin embargo, los precios siguieron aumentando. (Ver Cuadro 3.4.) La causa de este proceso inflacionario, inmune a las nuevas leyes y reglamentos, era el incremento de la masa monetaria que acompañó la devaluación del córdoba y los déficit presupuestarios. En efecto, entre 1938 y 1945, la masa monetaria se quintuplicó. El precio de los alimentos experimentó el alza más fuerte, quizás debido a que los productos locales nunca fueron controlados o racionados, de tal manera que su precio era determinado por la oferta y demanda en el mercado. No se observó en las demás categorías de bienes y servicios un alza tan notable; quizás el aumento del precio de los alimentos no dejaba a los consumidores de bajos ingresos mucho dinero para otros gastos.

Cuadro 3.4

Índice del costo de vida en Managua, 1940-1945 (1939=100)

Año	Alimentos	Alquileres y servicios	Medicinas	Ropa y mercería	Índice combinado
1940	123.6	113.6	97.2	110.2	115.9
1941	135.1	124.5	119.6	130.8	128.9
1942	185.1	145.7	190.8	162.8	164.1
1943	243.2	196.8	278.5	188.0	214.3
1944	352.5	300.4	321.4*	210.8*	271.9*
1945	433.4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Fuentes: Embajada de Estados Unidos en Managua, "Cost of Living in Managua, Nicaragua" (escrito mecanografiado), caja 269, AN; Recaudación General de Aduanas, *Memoria* de 1949, p. 80; Jeffrey Gould, "The Nicaraguan Labor Movement and the Somoza Regime, 1944-1946," apéndice D; U.S. Department of Commerce Yearbook Series, "Nicaragua" (agosto de 1946), 3:8.

* Corresponde solamente a los primeros ocho meses del año.

Hacia 1943, las finanzas de Nicaragua presentaban un orden aceptable, en parte como resultado del incremento de las exportaciones en la coyuntura de la Guerra Mundial, y de las medidas económicas del gobierno. Se había alcanzado un equilibrio entre presupuesto y el comercio exterior, así como pagado la deuda comercial externa. La emisión de bonos de 1917 había sido amortizada antes de lo previsto, lo cual permitió disolver la Alta Comisión.³⁶ El gobierno nicaragüense tenía pleno control del Banco Nacional, así como de las demás instituciones financieras, tanto públicos como privadas, ya en forma directa o indirecta. El precio de estos logros fue una reducción en los niveles de consumo, que a su vez reflejaba el alza en los precios y los impuestos, así como la reducción de las importaciones. En términos reales, las medidas económicas del gobierno definieron su orientación política con mucha más precisión que las declaraciones públicas y las promesas de Somoza. Los principales beneficiarios fueron los agroexportadores y, en menor grado, los comerciantes, cuyas desavenencias en relación a la tasa de cambio y los controles de las divisas eran mínimas en comparación a los beneficios recibidos gracias a la devaluación del córdoba. En el otro extremo, la población de menores ingresos se vio obligada a cargar con la mayor parte de los costos de dichos logros.

C. La reorganización del gobierno nacional y de los municipios

En su discurso de toma de posesión, Somoza expresó que la recuperación económica sería la preocupación principal e inmediata de su gobierno. Sin embargo, sus promesas de mayor justicia social y desarrollo material, lo mismo que el mantenimiento de la paz, requerían del fortalecimiento del aparato del Estado: la burocracia, las fuerzas coercitivas y los procedimientos administrativos, en general. El objetivo subyacente era lograr que el aparato del estado acatara las órdenes presidenciales con mayor celeridad, mejorando la eficiencia de sus operaciones. La cohesión y fuerza de dicho aparato dependían directamente de la disponibilidad de recursos económicos, por lo que Somoza le prestó especial atención a mejorar la eficiencia en el cobro de impuestos para elevar el nivel de la recaudación tributaria. Como puede apreciarse en el Cuadro 3.2, los ingresos del gobierno empezaron a subir marcadamente después de 1939. Este fenómeno fue resultado del aumento en los impuestos, así como del mejoramiento del sistema de recaudación con la creación de la Dirección de Ingresos.

Previo a la creación de esta dirección, los impuestos eran cobrados por diversas unidades administrativas: la Dirección General de Rentas, encargada del cobro de impuestos al aguardiente; el Negociado del Impuesto Directo sobre el Capital; el Estanco de Fósforos; la Inspección General de la Renta de Papel Sellado y Timbres; la Sección de Timbres para Cigarrillos; la Inspectoría de los Impuestos sobre Cerveza, Destace de Ganado y Producción de Azúcar; y la Recaudación General de Aduanas. A excepción de la Recaudación General de Aduanas, todas estas dependencias estaban bajo el Ministerio de Hacienda, pero sus procedimientos administrativos eran tan disímiles que, para efectos prácticos, operaban como entidades independientes. Al crearse la Dirección de Ingresos, estas dependencias fueron colocadas bajo una sola cabeza administrativa, el Director de Ingresos, nombrado por el presidente por períodos de dos años. Además, se agilizó su funcionamiento al integrarse varias unidades y separarse otras, de tal manera que la organización tributaria del Ministerio de Hacienda se redujo a cuatro unidades: Renta de Lico-

res, Tabaco y Fósforos; Papel Sellado y Timbres; Impuestos Directos sobre el Capital, Instrucción Pública, Vialidad, Derechos Reales y Licencias de Comerciantes; e Impuestos sobre Cerveza, Destace de Ganado, Azúcar, Venta y Arrendamiento de Tierras Baldías, Explotación de Bosques Nacionales y Patentes Mineros. Finalmente, a fin de imprimir un sentido de eficiencia y probidad a estos cambios, se nombró a un mayor de la Guardia Nacional como Director de Ingresos.³⁷

De hecho, el nombramiento de oficiales de la Guardia para dirigir varias oficinas del gobierno se convirtió en una práctica bastante común. El Ferrocarril del Pacífico, que fue nacionalizado en 1937, se colocó bajo el control directo de Somoza, quien asumió sus funciones bajo el título de “Jefe Supremo”.³⁸ El Ministerio de Salud Pública fue reemplazado por una Dirección General de Sanidad bajo el control del cuerpo médico de la Guardia.³⁹ El sistema de correos y telégrafos fue militarizado en su totalidad, supuestamente para “mejorar el servicio”. Igual ocurrió con la Recaudación General de Aduanas, después de que Nicaragua declarara la guerra a las potencias del Eje.⁴⁰ El nombramiento de oficiales a cargos públicos o la militarización de una oficina de gobierno pudo haber contribuido a mejorar la eficiencia, en tanto que los empleados negligentes estaban sujetos a ser juzgados por una corte marcial. Sin embargo, también permitió un mayor control político de la burocracia, pues con toda seguridad los oficiales en dichos cargos eran incondicionales a Somoza, como fue el caso del Director General de Sanidad, el coronel Luis Manuel Debayle, cuñado de Somoza. Finalmente, ofreció oportunidades de superación administrativa a los oficiales de la Guardia, quienes percibirían un segundo sueldo y tendrían acceso a diversas formas de corrupción. Sin embargo, al menos en un inicio, estas medidas probablemente fueron interpretadas como resultado del deseo de un presidente dinámico que buscaba sacudir la burocracia estatal para lograr mayor eficiencia.

Otro ámbito del gobierno remozado por orden de Somoza fue la autoridad municipal. Bajo la Constitución de 1911, los gobiernos municipales eran electos por votación popular directa cada dos años. Tal como ocurrió con las elecciones presidenciales y legislativas, el partido en el poder maniobraba para marginar a la oposición

de los cargos municipales. Sin embargo, después de 1928, cuando se introdujo el principio de la representación de la minoría en los diversos órganos del gobierno, los liberales y conservadores se dividieron el control de las municipalidades conforme a acuerdos preelectorales. Además, bajo la Constitución de 1911, el gobierno municipal debía limitarse a desempeñar funciones netamente económicas y administrativas. Sin embargo, la escasez de recursos materiales a disposición de las municipalidades se reflejó en un cumplimiento muy pobre de las atribuciones y competencias que les señalaba la Constitución.⁴¹ Más bien, los concejos municipales se convirtieron en centros de activismo político del partido en el poder y en una fuente de sinecuras para los correligionarios más leales. Aunque no pretendía erradicar estas prácticas, Somoza sí creyó que las municipalidades deberían preocuparse más por la comunidad y, de esa manera, fortalecer la presencia del gobierno en la sociedad.

Para proceder a reformar el sistema de gobierno municipal, Somoza decidió que primero necesitaba controlarlo directamente. En marzo de 1937, firmó un decreto interviniendo el gobierno municipal de la ciudad de León bajo el argumento de que el alcalde había abandonado su cargo, desatendiendo los servicios públicos al extremo de generar amenazas de “perturbación social”. En vista de la importancia de este centro urbano, rezaba el decreto, el gobierno no podía permanecer indiferente ante el deterioro de la situación. Por lo tanto, el presidente procedió a nombrar una “junta local” de tres miembros para administrar el gobierno municipal mientras se reformara la Constitución o se eligiera un nuevo alcalde. Tres días más tarde, la municipalidad de Masaya fue intervenida bajo pretextos similares, aunque en este caso se justificó dicho decreto en el estallido de motines y protestas; dada la cercanía de Masaya a la capital, el gobierno estaba obligado a intervenir para restaurar la paz y armonía social. Poco después, el gobierno municipal de Chinandega fue intervenido también.⁴² Debe aclararse que Managua ya estaba bajo el control directo del presidente desde mediados del siglo XIX, a partir de la creación del Distrito Nacional.

En agosto de 1937, el Congreso aprobó una ley suspendiendo todas las elecciones municipales a celebrarse en el futuro, mientras

no se reformara la Constitución. Provisionalmente, quedó en manos del presidente la potestad de nombrar las autoridades municipales “en caso de urgencia o falta de ellos”.⁴³ A partir de este momento, el presidente empezó a intervenir un municipio tras otro, y los gobiernos locales pasaron a ser apéndices del gobierno nacional. Todos los gobiernos municipales del departamento de Masaya fueron reemplazados por “juntas de vecinos . . . bajo la vigilancia y control directos del Gobierno Central para que lleven a cabo las obras de progreso y atiendan los servicios de cada ciudad, procurando la comodidad y bienestar de sus habitantes”. Otros nueve departamentos fueron afectados por decretos similares. Aunque no todos los gobiernos municipales fueron reemplazados de manera simultánea, la mayoría pasó bajo el control de “juntas locales” o “juntas de vecinos” casi de inmediato. Los departamentos y municipios restantes fueron afectados por decretos ejecutivos en los meses siguientes.⁴⁴

El control ejercido por el gobierno central se extendió más allá del nombramiento de alcaldes, regidores, síndicos y tesoreros. Desde mediados de la década de 1920, los concejos municipales habían sido fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, y en 1935 el gobierno se arrogó la potestad de aprobar los presupuestos anuales de los concejos municipales.⁴⁵ El gobierno de Somoza creó la Contraloría General de Cuentas Locales, una oficina especial dependiente del Ministerio de Gobernación, encargada de supervisar las finanzas municipales. Además de aprobar el presupuesto de ingresos y gastos, correspondía a la Contraloría autorizar todos los contratos firmados por las municipalidades con empresas privadas, así como todas las obras públicas que se proponían realizar.⁴⁶

Una vez que los gobiernos municipales habían sido instalados según los deseos y la conveniencia del presidente, se emitió un reglamento para sistematizar y racionalizar tanto los recursos humanos como los materiales del municipio. Las juntas locales fueron divididas en tres categorías según sus ingresos mensuales, los cuales también determinarían el número y las funciones de sus miembros. De acuerdo al reglamento, los ingresos municipales debían ajustarse a las posibilidades económicas reales de cada región y los impuestos municipales no debían recaer excesivamente sobre los productos de primera necesi-

dad y los servicios básicos. Finalmente, el reglamento obligaba a distribuir los presupuestos municipales de la siguiente manera: un 35% para gastos de administración, un 40% para mejoras y servicios públicos, un 10% para salud y un 5% cada uno para pago de deudas, gastos imprevistos y materiales de oficina.⁴⁷ Con estas medidas, el gobierno central prácticamente abolió la autonomía municipal y convirtió las alcaldías en brazos administrativos de la presidencia de la república.

En diciembre de 1939, se realizó un congreso de municipalidades en Managua, con el objetivo de lograr una mayor coordinación administrativa entre el gobierno central y los gobiernos locales. Asistieron los presidentes de todas las juntas locales de las dos primeras categorías de municipio, quienes recibieron charlas sobre el viejo y el nuevo sistema municipal, los métodos más adecuados para llevar la contabilidad municipal y el papel de las municipalidades en los programas de educación y salud pública. En su exposición, el ministro de Gobernación, Gerónimo Ramírez Brown, destacó que en las sociedades modernas los gobiernos nacionales estaban adquiriendo mayores responsabilidades, mientras los gobiernos municipales decaían como resultado de la escasez de recursos, conflictos políticos e ineficiencia burocrática. En consecuencia, bajo el nuevo sistema las municipalidades se dedicarían exclusivamente a los asuntos económicos y administrativos; los resultados – aseguró – eran muy prometedores, dado el aumento en los ingresos municipales y la multiplicación de las obras públicas u “obras de progreso”, como se les llamaba entonces. Además, dijo Ramírez, la abolición de las elecciones municipales había contribuido a fortalecer la paz en los pueblos y las ciudades. Al finalizar, los asistentes al congreso acordaron aumentar los ingresos municipales mediante la sustitución de impuestos poco rentables por otros nuevos, y la introducción de procedimientos contables uniformes. Se comprometieron, asimismo, a extender los programas municipales al campo de la salud pública, mediante la inspección de alimentos, eliminación de basura y construcción de drenajes.⁴⁸

Tres años más tarde, en diciembre de 1942, se llevó a cabo un segundo congreso de municipalidades, con una agenda muy simi-

lar a la anterior.⁴⁹ Los problemas que afectaban a las municipalidades no habían cambiado mucho desde el congreso anterior. Las municipalidades más pequeñas y pobres tampoco habían recibido mayores beneficios, y ni siquiera fueron invitadas a participar en dicho evento. A partir de la información disponible, no se puede determinar cómo se distribuyeron los fondos del gobierno central entre los municipios, ni los montos de impuestos recaudados a nivel local. Al parecer, solamente los pueblos y ciudades más grandes – aquellas con mayor importancia política y asentadas sobre bases económicas más sólidas – se beneficiaron en alguna medida del proceso de reforma municipal. Las municipalidades más pequeñas probablemente limitaron su quehacer a las funciones básicas, tales como el registro de las estadísticas vitales y la recolección de algunos impuestos para cubrir los pobres salarios de unos pocos empleados.

D. El crecimiento del sector público

Considerando que a partir de 1937 el gobierno central impulsó la mayoría de las iniciativas políticas en Nicaragua, es necesario tomar en cuenta el crecimiento de la burocracia y del presupuesto de ingresos y gastos para realizar una apreciación objetiva sobre el fortalecimiento de la autoridad del Estado. Al igual que en el resto de Centroamérica, la economía de Nicaragua se hallaba fuertemente orientada hacia las exportaciones; sin embargo, la dependencia del gobierno con respecto a los impuestos aduanales, como fuente de ingresos fiscales, no era tan determinante, porque el Estado era dueño de varias empresas de servicio público y de buena parte del sistema bancario, que le reportaban utilidades. A primera vista, podría resultar extraño que Nicaragua haya heredado un importante sector estatal en su economía, después de haber permanecido bajo el protectorado de Estados Unidos por tantos años. Sin embargo, esta situación se explica por el hecho mismo de la presencia de Estados Unidos, pues en su afán por imponer la paz y el orden en Nicaragua, exigió que todos los asuntos financieros de importancia tuvieran el visto bueno del gobierno de Washington. Por tanto, a diferencia de los demás países centroamericanos, el gobierno nicaragüense podía echar mano de una cantidad de recursos. En Nicaragua, las bases de la solidez fiscal e institucional del sector público se sentaron a co-

mienzos de la década de 1930, pero su tamaño e importancia aumentó bajo el régimen de Somoza.

Tal como se observó anteriormente, los ingresos del gobierno nicaragüense descansaban, en gran medida, en la tributación indirecta. Los derechos aduanales constituían la fuente de ingresos más importante. (Ver el Cuadro 3.5.) Durante los años anteriores a la gran crisis, las aduanas aportaban alrededor de la mitad de todos los ingresos del gobierno; durante los años de crisis, esta cantidad se redujo a casi una cuarta parte. La cifra exageradamente baja para 1925-1926 es reflejo del caos político provocado por el golpe de Estado jefado por Emiliano Chamorro; Estados Unidos se negó a reconocer la legitimidad de su gobierno, y no autorizó a la Recaudación General de Aduanas – entonces bajo el control directo de Washington – entregarle el producto de los impuestos aduanales. Después de 1942, la importancia de los impuestos aduanales aumentó aún más como consecuencia del incremento de las exportaciones nicaragüenses a Estados Unidos durante los años de la guerra. Además de los impuestos sobre el aguardiente y el tabaco, existían otros impuestos indirectos, tales como el papel sellado, los patentes de comercio y diversos impuestos al destace de ganado, el azúcar y las bebidas.

Después de los impuestos aduanales, el rubro más importante de ingresos fiscales eran las utilidades de las empresas y propiedades del mismo estado. El ferrocarril era la más rentable de todas. Hasta la década de 1940, el ferrocarril ejercía un monopolio sobre el transporte de todos los bienes hasta Corinto, en vista de que no había una carretera transitable a dicho puerto. El puerto también era propiedad del Estado, al igual que los principales vapores que transitaban en el Gran Lago.⁵⁰ Como era de esperarse, Somoza se hizo cargo del ferrocarril, así como de su extensa red de bodegas y talleres, con miras a promover sus ambiciones e influencias políticas. El control del ferrocarril le permitía fijar las tarifas para carga, así como otorgar concesiones especiales a exportadores e importadores, de manera que el ferrocarril se convirtió en un instrumento de control político dentro de la comunidad empresarial. Otro componente importante de la infraestructura nacional que estaba bajo el control del gobierno eran los sistemas de telégrafo, radio y teléfono. En realidad, existían

dos sistemas de radio: la Radio Nacional y la radio de la Guardia, que también ofrecía servicios al público. Por lo tanto, el gobierno controlaba la infraestructura básica de transporte y comunicaciones del país.

Cuadro 3.5
Fuentes de ingresos fiscales, 1910-1945
(como porcentajes del total)

Año	Indirectos Aduanas	Alcohol	Tabaco	Otros	Directos	Servicios públicos
1910-11	55.1	18.1	10.1	11.2	—	5.5
1915-16	45.4	21.8	13.9	18.8	—	—
1920-21	51.5	21.7	6.5	20.3	—	—
1925-26	1.8	46.3	20.0	31.9	—	—
1930-31	32.3	9.6	2.6	23.9	—	31.6
1935-36	25.5	7.7	1.5	31.2	—	34.2
1936-37	21.7	8.2	1.3	32.1	—	36.7
1938-39	15.9	11.7	2.1	34.2	—	36.2
1939-40	25.2	11.2	3.5	38.7	—	21.4
1940-41	27.6	10.6	3.7	36.3	—	21.8
1941-42	25.7	10.5	3.9	31.7	—	28.2
1942-43	25.4	13.1	4.1	23.2	—	34.2
1943-44	46.7	12.9	4.0	5.7	2.4	28.3
1944-45	39.6	14.4	4.9	6.4	3.0	31.6

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Memorias*. Los datos del año 1937-38 no están disponibles.

El ingreso generado por las empresas del Estado, sumado a las ganancias de los bancos nacionales, significaba un aporte al presupuesto nacional que oscilaba entre un 20 y un 35 por ciento. Como era de esperarse, la magnitud del sector público creó fricciones con ciertos elementos del sector privado, que protestaron por la situación de competencia desleal y favoritismo de parte del gobierno hacia algunos empresarios, en perjuicio de otros. Sin embargo, el poder del Estado aumentó considerablemente gracias al control de las empresas públicas, lo que permitió a Somoza proyectar una imagen de administrador eficiente, cuyo liderazgo era imprescindible para la marcha de la economía.

Durante los primeros años de la presidencia de Somoza, la distribución del gasto fiscal se orientó primordialmente a resolver los problemas financieros acumulados en el período de la crisis económica, así como aquellos derivados de los préstamos externos de 1909 y 1917 y de la deuda comercial externa en mora. El Ministerio de Ha-

cienda y el pago de la deuda llegaron a absorber alrededor de un 45 por ciento del gasto fiscal hasta el año 1940-41. (Ver Cuadro 3.6.) Posteriormente, la inversión en obras públicas se convirtió en el rubro presupuestario más importante; sin embargo, gran parte de los fondos asignados para fomento y obras públicas provenían, en realidad, de donaciones estadounidenses para finalizar la construcción de la carretera Panamericana – proyecto negociado por Somoza con el presidente Roosevelt durante su viaje a Washington en 1939.

Las sumas considerables gastadas en las finanzas del Estado y las obras públicas, contrastaban con los recursos invertidos en programas sociales, cuya situación no varió mucho en comparación a las administraciones anteriores. Las inversiones en salud, educación, trabajo y agricultura, en su conjunto, rara vez pasaron del 10 por ciento del presupuesto total de gastos, lo que desdice mucho de la supuesta preocupación de Somoza por la clase obrera y el campesinado. La política fiscal estaba orientada, en términos generales, a promover la producción para la exportación mediante la ampliación de la infraestructura de transportes y el mantenimiento de la paz social, mientras se buscaba simultáneamente cancelar las obligaciones financieras de Nicaragua en el exterior.

Cuadro 3.6
Gasto fiscal, 1930-1945 (como porcentaje del total)

Año	a	b	c	d	e	f	g
1930-31	7.5	30.4	44.2	1.2	9.9	3.6	3.3
1935-36	8.0	37.0	33.8	6.6	8.7	2.4	3.4
1936-37	7.2	36.0	33.7	7.8	6.8	2.6	5.8
1939-39	4.7	30.2	27.2	6.5	9.9	2.4	19.3
1939-40	3.9	22.0	45.4	5.3	11.5	2.0	9.9
1940-41	4.0	22.7	44.4	5.5	10.5	2.6	10.5
1941-42	3.9	22.9	28.8	5.2	14.3	2.7	22.4
1942-43	3.0	19.2	20.6	5.7	44.3	3.0	4.2
1943-44	3.4	19.0	18.5	6.6	5.3	4.0	3.1
1944-45	3.2	20.4	20.3	6.7	42.5	3.7	3.2

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Memorias*. Los datos de 1937-38 no están disponibles. Los porcentajes han sido calculados sobre la base del gasto fiscal total, excluyendo las partidas para las empresas públicas y los bancos nacionales, que no están disponibles para la mayoría de años.

Códigos: a = Poder Legislativo y Judicial; b = Fuerza armada e interior; c = Hacienda y deuda pública; d = Educación; e = Fomento y obras públicas; f = Agricultura, trabajo y salud; g = otros.

El impacto del presupuesto sobre la sociedad nicaragüense puede medirse, en parte, en términos del empleo que generó. Durante los años de crisis económica, especialmente, el gobierno se convirtió en un importante proveedor de empleos. Además, el empleo público amplió la clientela política del régimen y, por lo tanto, incidió directamente en el peso relativo de las fuerzas políticas del país. El empleo público que se desprende del gasto público aumentó de 5,321 en 1936-37 a un poco menos de 9,500 nueve años más tarde. (Ver el Cuadro 3.7.) Sin embargo, estas cifras no ofrecen un panorama completo, pues no incluyen a los trabajadores de las empresas estatales como el ferrocarril, los puertos y varios otros servicios públicos, ni tampoco a los empleados de los bancos estatales o a los que trabajaban por jornal. La información disponible sobre estos últimos rubros de empleo es parcial, y solamente existen datos completos para los años de 1940-44, cuando el total del empleo público llegó alrededor de 15,000 en 1941-42. La información proporcionada por el censo de 1940 indica que un total de 11,941 personas eran empleados estatales permanentes; es decir, 2,000 personas más que la suma de las dos cifras para 1940-41 del Cuadro 3.7. Esta cifra no incluía a los trabajadores empleados en la construcción de la carretera Panamericana, aunque probablemente sí incluía a los empleados de los bancos nacionales, las aguadoras y las municipalidades. Por lo tanto, es posible concluir que uno de cada siete u ocho asalariados urbanos trabajaba para el gobierno.⁵¹

La información disponible permite concluir que, entre 1936 y 1945, el incremento proporcional más fuerte en la nómina del Estado se dio en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Ver el Cuadro 3.8.) Este incremento guarda relación con los esfuerzos del régimen por aumentar la recaudación fiscal. El segundo incremento más fuerte ocurrió en la rama judicial del gobierno (que está incluida en la columna “a” del Cuadro 3.8). El Ejército y el personal del Ministerio de Gobernación – incluyendo miembros de la Guardia Nacional quienes se desempeñaban como policías – refleja la tasa de crecimiento más baja de todas, sin duda porque la Guardia Nacional ejercía un control completo sobre el país después de la muerte de Sandino. El aumento del número de empleados en la rama de educación no es despreciable, pero sin duda fue resultado, en gran medida, de la contratación de maestros con salarios muy bajos.

Cuadro 3.7
Empleo público, 1930-1945 (1936-37 = 100)

Año	Según presupuesto número	índice	Ferrocarril	Carretera Panamericana
1930-31	5,872	(110)		
1936-37	5,321	(100)		
1937-38	6,162	(116)		
1938-39	6,898	(130)		
1939-40	6,325	(119)		
1940-41	7,678	(144)	2,203	2,250
1941-42	8,627	(162)	2,451	3,899
1942-43	8,663	(163)	2,512	
1943-44	9,030	(170)		2,624
1944-45	9,475	(178)		

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Presupuesto general de ingresos y egresos de la República de Nicaragua*. Los datos sobre empleados del ferrocarril han sido tomados de varios informes preparados para Somoza que se encontraron en las cajas 167, 211 y 273, AN. La información sobre el empleo en la carretera Panamericana para 1942-43 se encuentra en un informe preparado por John K. Flick, un ingeniero de la oficina de la Public Roads Administration de Estados Unidos a cargo de la supervisión de la construcción del tramo de la carretera Panamericana en Nicaragua, caja 267 AN; los datos para 1940-42 se encuentran en "Inter-American Highway, Nicaragua, Quarterly Progress Reports" del 31 de diciembre de 1941 y del 31 de diciembre de 1942 que fueron sometidos a consideración del Export-Import Bank en Washington, Fondo Salvadora de Somoza, no. 8, AN.

Cuadro 3.8
Empleos públicos según categoría, 1930-1945
(1936-1937 = 100)

Año	a	b	c	d	e	f
1930-31	636 (198)	2,479 (95)	1,380 (125)	380 (132)	785 (96)	212 (118)
1936-37	321 (100)	2,611 (100)	1,101 (100)	288 (100)	820 (100)	180 (100)
1937-38	307 (96)	2,673 (102)	1,297 (118)	708 (246)	976 (119)	201 (112)
1938-39	307 (96)	3,017 (116)	1,521 (138)	776 (269)	1,060 (119)	217 (121)
1939-40	287 (89)	2,322 (89)	1,446 (131)	832 (289)	1,203 (147)	235 (131)
1940-41	280 (87)	3,489 (134)	1,582 (144)	873 (303)	1,166 (142)	288 (160)
1941-42	720 (224)	3,619 (139)	1,718 (156)	1,010 (351)	1,254 (153)	306 (170)
1942-43	753 (235)	3,543 (136)	1,734 (157)	1,050 (365)	1,276 (156)	307 (171)
1943-44	761 (237)	3,610 (138)	1,834 (167)	1,191 (414)	1,305 (159)	329 (183)
1944-45	774 (241)	3,717 (142)	1,973 (179)	1,214 (422)	1,442 (176)	355 (197)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Presupuesto general de ingresos y egresos de la República de Nicaragua*.

Códigos: a = Congreso, Poderes Ejecutivo y Judicial, y Relaciones Exteriores; b = Ejército y Gobernación; c = Educación pública; d = Hacienda; e = Fomento y obras públicas; f = Salud pública, Agricultura y trabajo.

Trabajar en el gobierno acarreaba ciertas obligaciones políticas, ya sea directamente con Somoza o con el Partido Liberal. Para conseguir un empleo público, se requería una recomendación de una persona en posición de autoridad. Si esa persona era el mismo Somoza, mucho mejor, lo cual no significa que el presidente se ocupara personalmente de colocar a sus amistades o simpatizantes en un cargo u otro. Las cartas de solicitud de empleos remitidas a Somoza generalmente eran contestadas por su secretario privado. Por ejemplo, un antiguo compañero de escuela, José del Carmen Flores, remitió una carta asegurando ser masón, al igual que Somoza, así como un simpatizante incondicional de su gobierno. Por tanto, Flores dijo al presidente sentirse en “derecho de pedirte lo que tú puedas darme” y procedió a solicitarle un trabajo en el gobierno que le permitiera “llevar el pan a mis hijos”. El secretario privado de Somoza le respondió informándole haber recibido instrucciones del presidente de colocarlo “en algún puesto adecuado,” pero solicitó a Flores identificar “la plaza que se halle vacante para ordenar lo conveniente”.⁵² En otras oportunidades, el secretario le indicaba al solicitante que se presentara directamente en un ministerio para solicitar un puesto, sin la recomendación expresa del presidente. Pero en todos los casos, un empleo público era un nombramiento político que se explotaba al máximo en tiempos de penurias económicas, pues el número de desempleados superaba con creces la disponibilidad de cargos públicos.

La persona beneficiada con un cargo público debía apoyar al régimen, o al menos, abstenerse de criticarlo. Al parecer, eran numerosos los informantes dispuestos a delatar a sus conciudadanos para acumular méritos con sus superiores. Por ejemplo, Armando Rodríguez O., auditor de la Contraloría Especial de Cuentas Locales, informó a su jefe, el vice-ministro de Gobernación, que el alcalde de Diriamba y demás funcionarios de la municipalidad de Diriamba eran conservadores y extendían un trato preferencial a sus correligionarios, pese a que aparentaban ser liberales.⁵³ En otra ocasión, Francisco Gaitán, un mayor de la Guardia Nacional, envió a Somoza un informe denunciando a Hernaldo Peña, empleado del Banco Nacional en Masaya, quien se había expresado mal del presidente. Al parecer, Peña había calificado a Somoza de ladrón y sinver-

güenza, pues gracias a sus autorizaciones directas, los oficiales de la Guardia se estaban enriqueciendo con préstamos del Banco Nacional. Por tanto, a juicio de Gaitán, Peña merecía ser despedido de su trabajo, amonestado y despojado de todos los privilegios que había recibido del gobierno hasta esa fecha.⁵⁴

La burocracia del gobierno era recompensada ocasionalmente con incrementos salariales, aunque la información disponible no permite saber si dichos aumentos eran proporcionales a la tasa de inflación. En febrero de 1938, Somoza ordenó un aumento escalonado en los salarios de todos los empleados del gobierno, desde un incremento del 10% para aquellos con cargos mejor remunerados, hasta de un 60% para los que ganaban menos, pero esto ocurrió antes de los años de mayor inflación.⁵⁵ Sin embargo, la característica más atractiva de un empleo público era su estabilidad relativa, especialmente en tiempos de crisis económica. Por lo tanto, la burocracia resultó ser muy leal al régimen y podía ser movilizada fácilmente para participar en manifestaciones y emitir su voto a favor de Somoza durante las elecciones.⁵⁶ En conjunto con la Guardia Nacional, constituyó un poderoso bloque político que el régimen controló en todo momento.

E. La reforma constitucional

Los cambios que impulsó el régimen somocista en relación a la dimensión y funciones del Estado exigían una justificación ideológica o legal, que abarcara no sólo las innovaciones ya efectuadas sino también los cambios venideros. Con frecuencia, Somoza y sus seguidores abordaban el tema de las nuevas responsabilidades asignadas al Estado, y se preocuparon por legitimar esta nueva orientación estatizante mediante una reforma a la Constitución. Apenas transcurridas dos semanas después de haber admitido la renuncia del presidente Sacasa, el Congreso comenzó a discutir el tema de la reforma constitucional. La mayoría de los diputados y senadores liberales estaban dispuestos a apoyar un debate conducente a la promulgación de una nueva constitución a corto plazo, aunque los conservadores se inclinaron por alcanzar algún tipo de acuerdo previo para limitar el alcance de dicha reforma. Como era de esperarse, la propuesta liberal fue aprobada holgadamente, pese al voto negativo de los con-

servadores.⁵⁷ Varios comités legislativos comenzaron entonces a elaborar las bases de una nueva carta magna, que fueron presentadas a ambas cámaras en agosto de 1938.

En la Cámara de Diputados, el comité redactor insistió en la necesidad de las reformas constitucionales para legalizar el status de la Guardia Nacional como ejército nacional, reglamentar el funcionamiento de las municipalidades a raíz de su intervención por el gobierno central, y modificar la estructura impositiva. El comité también tomó en consideración las demandas provenientes de la clase obrera (que, en justicia, pensó debían ser atendidas) y la importancia de las disposiciones constitucionales que le otorgarían al partido de la minoría su debida representación en el gobierno. Sin embargo, los miembros del comité pertenecientes al Partido Conservador decidieron votar en contra de las bases de la reforma, pues estaban convencidos de que la razón verdadera tras estas deliberaciones era el deseo de Somoza de extender su período presidencial. Por tanto, insistieron en la necesidad de que las reformas constitucionales incluyeran una disposición explícita prohibiendo la reelección presidencial. En el Senado, los conservadores también denunciaron las ambiciones políticas de Somoza; sin embargo, su oposición fue infructuosa, pues eventualmente ambas Cámaras aprobaron las bases elaboradas por el comité.⁵⁸ Posteriormente, un decreto legislativo convocó a elecciones generales para conformar Asamblea Constituyente que sesionaría a partir del 15 de diciembre de 1938.⁵⁹

Sin embargo, Somoza deseaba asegurarse la participación de todos los conservadores – no sólo la de sus aliados, la facción de los Conservadores Nacionalistas – para que, en la medida de lo posible, la nueva Constitución reflejara la opinión de todas las fuerzas políticas importantes. A tal efecto, emitió dos decretos presidenciales. En virtud del primero, se nombró una “comisión técnica” compuesta de siete miembros para elaborar el anteproyecto de ley de la nueva Constitución. Aunque la mayoría de los miembros de dicha comisión eran liberales, se cuidó de incluir también a tres miembros de la facción civilista del Partido Conservador. El líder de esta facción, Carlos Cuadra Pasos, se mostró dispuesto a participar en la redacción del anteproyecto de Constitución, aunque se había pronunciado en contra de la iniciativa cuando ésta fue discutida en el Congreso.⁶⁰

Mediante el segundo decreto presidencial, se estableció un procedimiento para asegurar a todas las fuerzas políticas una “representación proporcional” en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, en uno de los considerandos del decreto, se hace referencia a las dificultades que supondría un procedimiento electoral basado en “los métodos científicos deseables”, debido a la falta de “costumbre y preparación que requieren de parte del electorado”. En vista de lo anterior, “se hace indispensable la aplicación en el presente caso de un método empírico, que sin descuidar la proporcionalidad de la representación de las diversas fuerzas políticas, consulte procedimientos sencillos que hagan efectivo el principio, salvándolo de complicaciones que pudieran frustrarlo en la práctica”. En consecuencia, al Partido Conservador se le devolvería la personería jurídica que había perdido al no participar en las elecciones de 1936, eximiéndolo, además, de la obligación de realizar todos los trámites del caso. De esta manera, se limitó el derecho a participar en las elecciones a tres partidos políticos: liberales, conservadores y conservadores nacionalistas. Los diputados miembros de la Asamblea Constituyente debían ser asignados de manera predeterminada según la fuerza electoral de cada partido. Por ejemplo, en el departamento de Managua, el partido con más votos tendría derecho a cinco diputados, mientras los partidos en segundo y tercer lugar tendrían uno cada uno. En un departamento como Chinandega, el partido con más votos tendría tres diputados, el siguiente tendría uno, pero el tercero no recibiría ninguno; por el contrario, en León, todos los seis diputados serían para el partido que ocupara el primer lugar. Obviamente, la matemática electoral estaba diseñada para favorecer al Partido Liberal: cuarenta diputados para el partido que ganara el primer lugar, doce para el segundo y cuatro para el tercero.⁶¹ Ésta era la representación proporcional en la Nicaragua somocista.

El 6 de noviembre de 1938 se celebró la elección de los diputados a la Asamblea Constituyente, pero dicho proceso fue más fraudulento que la elección de Somoza a la presidencia en 1936. Nuevamente, el Partido Conservador se retiró de la contienda. Las boletas y urnas electorales fueron distribuidas en todo el país por el encargado de abastos de la Guardia Nacional. Los resultados finales se dieron a conocer al cabo de veinticuatro horas, estableciendo un

tiempo record aún no superado en Centroamérica hasta la fecha. Sin embargo, los resultados no fueron motivo de entusiasmo para los liberales: recibieron 10,000 votos menos que en 1936.⁶² Este partido sólo logró mejorar un poco su desempeño en León, Jinotega y Chontales: el primero un departamento tradicionalmente liberal; el segundo un bastión de la Guardia; y el tercero, uno de los departamentos más conservadores donde los liberales se esforzaron por llevar gente a las urnas o llenar éstas de manera fraudulenta con boletas inválidas. La situación de los conservadores nacionalistas fue aún peor, pues su caudal de votos descendió de 21,582 en 1936 a sólo 11,196 en 1938. Por lo tanto, Somoza apenas podía jactarse de que su partido hubiera logrado una proporción mayor de los votos que en 1936.

La Asamblea Constituyente, dominada por somocistas, elaboró la nueva Constitución de Nicaragua en cuatro meses. Aunque la mayoría de sus artículos eran similares a los de las Constituciones anteriores, el documento presentó algunas características novedosas. Una de las innovaciones más notables de la nueva Constitución se refería al tema de la propiedad. Aunque se conservó la idea de que la propiedad privada era inviolable, se estableció su sujeción al interés colectivo bajo el concepto de “propiedad en función social”, por lo que el Estado podía gravarla, restringir su venta, e incluso expropiarla en caso necesario. Además, de acuerdo a la Constitución, las porciones incultas de los latifundios serían parceladas para promover el desarrollo de la pequeña y la mediana propiedad rural. La Carta Magna también reconoció los derechos de los trabajadores a un día semanal de descanso, salario mínimo, jornada laboral máxima e indemnización por accidentes laborales. Asimismo, se consignó el compromiso del Estado a crear un Instituto Nacional de Seguridad Social.⁶³

Tal como ocurre con frecuencia en Centroamérica, la nueva Constitución contenía disposiciones contradictorias en lo que se refiere a las libertades públicas y los derechos políticos. Así, mientras se ratificó el derecho a la libertad de expresión, se colocó fuera de la ley a “aquellos que externen opiniones contrarias al orden público, a las instituciones fundamentales del Estado, a la forma republicana y democrática del Gobierno, al orden social establecido, a la moral y las buenas costumbres, o que causen daños a terceros”. En contraste, en

los artículos siguientes se garantiza el pleno disfrute de la libertad de prensa y de palabra, asegurándose que no se impondría una censura previa. La Constitución también contenía disposiciones relativas a la detención preventiva y el confinamiento interno, en caso de que el presidente de la República considerara que “se hallare amenazada la tranquilidad pública”.

La Constitución institucionalizó la nueva relación del gobierno central con los municipios, facultando al presidente a nombrar a los miembros de los concejos municipales cada dos años, y estipulando que dichos órganos de poder local “estarán sometidos a la vigilancia correccional y económica del Poder Ejecutivo”. El Consejo Nacional de Elecciones también cayó bajo el control presidencial, pues se dejó en manos del ejecutivo el nombramiento de dos de sus tres miembros. Finalmente, la Constitución definió la naturaleza y el papel del ejército, que estaría integrado por la Guardia Nacional y la policía como única fuerza armada de la República, destinada a garantizar la independencia de la nación, la integridad territorial, la paz interior y la seguridad de los derechos individuales.

Sin embargo, tal como temían los conservadores, el mayor impacto inmediato de las reformas constitucionales se derivó de sus disposiciones transitorias, que extendieron el período presidencial de Somoza hasta el 1 de mayo de 1947. Además, la Asamblea Constituyente dispuso convertirse a sí misma en Congreso Nacional, con derecho a seguir legislando hasta el 15 de abril de 1947, sin que mediara elección alguna durante ese tiempo. Estas disposiciones se justificaron bajo el argumento de que se necesitaba suficiente tiempo para trabajar por la patria, sin la distracción de las campañas electorales y la política partidista.

El 30 de marzo de 1939, en su discurso de toma de posesión ante el Congreso, Somoza destacó que la nueva Constitución era producto de las mismas inquietudes nacionales y apartidistas que lo habían llevado a la presidencia. Los “partidos tradicionales” – aseguró – nunca se habían puesto de acuerdo para reformar la Constitución, porque se habían enfrascado durante años en mezquinas luchas, regateando prebendas y convenios. Sin embargo, en adelante las nue-

vas instituciones garantizarían la eficiencia administrativa y la justicia social, abriendo el camino a la participación de todo el pueblo, en aras del bien común. Somoza elogió a los miembros del Partido Conservador que – desobedeciendo las instrucciones de la jefatura de su partido de abstenerse de participar en las elecciones – habían ganado algunos escaños bajo las listas del Partido Conservador Nacionalista, dándole así a la Constituyente un amplio apoyo político. Concluyó su discurso con las consabidas promesas de nivelar el presupuesto nacional, estabilizar la moneda, distribuir el crédito, construir más infraestructura y viviendas baratas y promover la educación pública.⁶⁴

F. El Partido Liberal bajo Somoza

Los llamados de Somoza relativos a la unidad nacional trascendían la simple retórica. Se requerían medidas específicas para fortalecer la coalición somocista, atraer a los disidentes y persuadir a otros que el futuro sería mejor con Somoza. Una de sus primeras preocupaciones fue el mismo Partido Liberal. Después de la confrontación electoral entre argüellistas y somocistas en 1936, el partido había quedado maltrecho: Argüello había salido al exilio y los sacasistas estaban amargados por el derrocamiento de su presidente. Somoza debía fortalecer el ala somocista del partido y, de ser posible, convertirla en la fuerza absolutamente dominante. Como primer paso, llegó a un arreglo con Argüello, quien estaba viviendo en San Salvador. En febrero de 1937, Somoza envió una delegación a entrevistarse con Argüello e informarle que contaba con todas las garantías para regresar a Nicaragua a voluntad. En agosto del mismo año, Somoza también autorizó el regreso del exilio a Sofonías Salvatierra, miembro del ala izquierda del Partido Liberal y otrora confidente de Sandino. En julio, Argüello llegó a Managua e inmediatamente se reunió con Somoza para negociar las bases de su reconciliación, que incluían el nombramiento de ministros argüellistas al gabinete de gobierno.⁶⁵ Somoza perseguía ampliar el caudal de votos liberales mediante este acuerdo, pero las elecciones de diputados a la Asamblea Constituyente no rindieron los frutos deseados. Sin embargo, logró neutralizar a un número de dirigentes liberales partidarios de Argüello y, de esa manera, fortalecer la unidad del partido.

Los esfuerzos más intensos para reconstituir el partido se realizaron en León. Hacia mayo de 1937, se constituyó la “Asociación Pro-Unificación Liberal” con el objetivo de promover las expresiones públicas de apoyo hacia el gobierno de Somoza. La Asociación envió a Somoza una carta firmada por unos 450 dirigentes y miembros del Partido Liberal, en la cual manifestaban su confianza en el gobierno y respaldaban sus políticas frente a “una situación económica difícil”. Representantes de las principales familias del departamento asociadas con la causa liberal – como los Mayorga, Herdocia, Sevilla, Sacasa y Debayle – suscribieron dicha carta.⁶⁶

En otros departamentos se hicieron esfuerzos similares para fortalecer las lealtades liberales. Un procedimiento bastante común fue organizar concentraciones públicas, generalmente en ocasión de una visita de Somoza a un pueblo o departamento. Una ocasión de éstas de especial relevancia fue el retorno de Somoza a Nicaragua en junio de 1939, después de su visita de Estado a Washington donde el presidente Roosevelt lo recibió con todos los honores. El viaje de Somoza fue explotado al máximo, ya que el sello de aprobación del gobierno de Estados Unidos era la mayor aspiración de la mayoría de los políticos nicaragüenses. En las semanas anteriores a la llegada de Somoza, se repartieron volantes invitando a la población de Granada, Masaya y León para que asistieran al magno evento. El ferrocarril ofreció pasajes gratis y se entregaron boletos para un almuerzo.⁶⁷ El 29 de junio, el día de llegada de Somoza a Managua, unas 70,000 personas se abarrotaron en las calles del aeropuerto a la casa presidencial, mientras diversas empresas y ciudadanos particulares repartían comida y bebidas entre la concurrencia.⁶⁸ Somoza encabezó el desfile, seguido del cuerpo diplomático, los senadores y diputados del Congreso, los magistrados de la Corte Suprema, el Estado Mayor de la Guardia Nacional, los empleados de los Bancos Nacional e Hipotecario, los jefes políticos y los comandantes departamentales de la Guardia, las carrozas de diversas organizaciones, automóviles particulares y autobuses, equipos deportivos, los “boy scouts”, bomberos, organizaciones obreras y el público en general, lo cual sugiere el orden de importancia de los componentes de la coalición somocista.⁶⁹

Después de la declaración de guerra de Nicaragua a las potencias del Eje en diciembre de 1941, Somoza se dedicó a visitar diversos puntos del país para comprometer el apoyo de la población en la lucha contra el totalitarismo. En julio de 1942, en León, se hizo un esfuerzo descomunal en este sentido. Como de costumbre, el ferrocarril ofreció pasajes gratis a los pobladores de las comarcas cercanas y se organizaron siete cocinas populares para preparar 14,000 platos de comida. Los obreros y los campesinos recibieron una invitación especial para asistir al evento, en la cual se les recordaba cómo Somoza los había librado de la explotación de los agiotistas, mediante las reformas al sistema bancario y el congelamiento de los alquileres. El gran acontecimiento del día fue la inauguración de la Casa del Obrero en esa ciudad. Los equipos de avanzada del Partido Liberal visitaron varias comunidades para organizar los desfiles de montados, que siempre llamaban la atención del público. El 12 de julio, el propio día del evento, los discursos estaban cargados de loas a Somoza. Isidro Muñoz, del barrio indígena de Sutiava, expresó que el gobierno de Somoza “cobija con paternal abnegación a todos los nicaragüenses sin distinción de los partidos políticos nefastos”. A juicio del orador Tomás Montalván H., los nicaragüenses disfrutaban de paz y trabajo únicamente gracias a Somoza; por lo tanto, desde ese mismo momento, los obreros y los campesinos debían proclamarlo para un nuevo período presidencial.⁷⁰

En noviembre de 1942 se organizó otra manifestación en Managua para expresar apoyo al gobierno en su lucha contra el fascismo.⁷¹ Los volantes distribuidos en todos estos eventos presentaban a Somoza vestido de uniforme militar y, a veces, rodeado de las banderas de Nicaragua y Estados Unidos. Somoza proyectaba una imagen de fuerza y estabilidad de cara a la agresión totalitaria, al hacer un llamado al patriotismo de los nicaragüenses envuelto con el aura del poderío de Estados Unidos. Aunque Nicaragua nunca proporcionó tropas a los ejércitos aliados, Somoza insistía en que su país desempeñaba un papel importante en el esfuerzo aliado a través de sus exportaciones de materias primas, tales como el caucho, el aceite de ajonjolí, el oro y los cocos. Aprovechando toda oportunidad posible, se hacía fotografiar en compañía del embajador de Washington, o asistía a algún evento en la legación de Estados Unidos.⁷²

A comienzos de 1943, Somoza se sentía muy confiado acerca de la solidez de su posición, por lo que consideró oportuno empezar una nueva campaña de reelección. En marzo y abril de 1943 se organizaron las primeras reuniones de somocistas con ese propósito, convocados como cabildos abiertos por el alcalde de cada localidad, bajo el pretexto de discutir la necesidad de reformar nuevamente la Constitución. Se argumentaba que la Carta Magna vigente no era lo suficientemente “flexible” para la época, pues el gobierno necesitaba potestades especiales para combatir el totalitarismo nazi-fascista. Asimismo, se postulaba la necesidad de incluir el articulado de la Carta del Atlántico en la Constitución nicaragüense. En algunos casos, los cabildos abiertos concluían con un pronunciamiento de rechazo al artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial, bajo el argumento de que éste representaba un obstáculo a la libre voluntad política de un pueblo en democracia. Al finalizar los discursos y los acuerdos, todos los participantes suscribían un documento redactado al estilo de una petición, que se enviaba a Somoza y al Congreso. El número de firmas oscilaba entre 50 y 500, según el tamaño del municipio; pero León desbordó tales cifras al convocar una “asamblea popular” en la que supuestamente participaron más de 8,000 personas.⁷³

La supuesta amenaza que se cernía sobre Nicaragua por causa de la guerra contra las potencias del Eje, también sirvió para promover la ampliación del ala paramilitar del Partido Liberal – la llamada Liga Militar Liberal Nacionalista o Liga Militar Liberal de Nicaragua. En sus inicios, ésta parece haber sido una asociación de veteranos de guerra de la época de Zelaya, y de otros combatientes liberales. En diciembre de 1937, la Liga Militar Liberal del departamento de León acordó convertirse en un cuerpo de “auxiliares de la Guardia Nacional”, organizándose en columnas y escuadras de 25 hombres cada una, distribuidas en los pueblos bajo el mando de un estado mayor departamental. En aquel momento, la Liga Militar de León tenía aproximadamente 2,600 miembros. En Zelaya, Chinandega y Managua se formaron organizaciones similares.⁷⁴ El jefe supremo de la Liga Militar Liberal era, por supuesto, el propio Somoza, quien extendió a los miembros de dicha asociación sus respectivos documentos de identidad sellados con su propia rúbrica y la del ministro de Guerra. En

dichos documentos, se estipulaba la condición del portador como integrante de las fuerzas de reserva de la Guardia Nacional, sujeto a su disciplina y código de honor.⁷⁵ De esta manera, una parte del Partido Liberal se colocó directamente bajo el control militar de la Guardia, y podía ser movilizado para cumplir una variedad de tareas políticas.

Asimismo, Somoza se propuso centralizar el control a lo interno del Partido Liberal, mediante una reforma de sus estatutos y estructura organizativa. Una convención del partido, que sesionó en León del 7 al 9 de febrero de 1944, aprobó de manera expedita un conjunto de cambios en la organización interna y el programa político del partido. Aunque los objetivos generales del partido, vigentes desde 1913, no sufrieron mayores modificaciones, la convención introdujo algunas referencias explícitas al compromiso de esta organización política de elaborar un código del trabajo en beneficio de los obreros nicaragüenses, incrementar el número de pequeñas y medianas propiedades rurales, y modernizar el sistema tributario.⁷⁶ Sin embargo, los procedimientos para elegir a los funcionarios del partido sufrieron cambios de fondo. Anteriormente, las personas que representarían a los miembros del partido en su “Gran Convención” eran electas por asambleas locales de partidarios. Sin embargo, los nuevos estatutos establecieron la celebración de un plebiscito nacional sobre la base de un delegado por cada mil votos liberales emitidos en la elección presidencial anterior. Si bien este procedimiento daba la apariencia de ser más “democrático”, por cuanto los delegados a la convención eran electos de manera directa, en la práctica significó que los procedimientos electorales podrían controlarse desde el centro partidista. Además, los nuevos estatutos abolieron la elección de las juntas departamentales del partido; en adelante, sus miembros serían nombrados por la junta nacional del partido, la cual era electa por la Gran Convención. Las juntas departamentales nombrarían, a su vez, a los comités locales, y éstos a los consejos cantonales y los clubs rurales. Es decir, se eliminó la elección directa de los organismos intermedios y de base del partido.⁷⁷

Además de cumplir con las actividades políticas y organizativas acostumbradas, los organismos departamentales y lo-

cales del partido desempeñaban la importante tarea de distribuir diversos tipos de prebendas entre los miembros del partido. En efecto, estos funcionarios recibían órdenes de cumplir con “todos los preceptos y disposiciones que en materia de ASISTENCIA SOCIAL puedan favorecer a todos los miembros del Partido, entendiéndose por Asistencia Social el cumplimiento de todas las disposiciones que para el mejoramiento de las clases proletarias del país contienen la Declaración de Principios y el Programa del Partido”. Es decir, debían brindar asistencia a los miembros del partido para que aprovecharan los programas de salud pública del gobierno, el crédito agrícola, la educación pública y otros programas sociales. En la práctica, esto significaría que los miembros del partido recibirían un trato preferencial sobre otros ciudadanos en la distribución de la asistencia económica y social del Estado. A cambio de estas prebendas, el miembro del partido a nivel local debía actuar como los ojos y oídos del partido, o en palabras del nuevo estatuto, “informar de las necesidades de sus afiliados y dar parte inmediata de cualquier actividad peligrosa para el Partido que notaren en la jurisdicción a fin de que se dicten las medidas oportunas que el caso requiera”.⁷⁸

La promulgación de dicho estatuto marcó la institucionalización de un nuevo partido, que ya no sería tan “liberal” o “nacionalista”, sino más bien “somocista”. Aunque se conservó la misma retórica ideológica, o se volvió más progresista en algunos sentidos, la maquinaria del partido reflejó un sesgo marcado hacia la figura de Somoza, en la medida en que éste consolidaba su control. El presidente de la República se convirtió formalmente en el “Jefe Supremo” del partido, facultado para intervenir en cualquier ámbito de la organización partidista, así como para revisar y dar su visto bueno a todas las decisiones importantes que se tomaran.⁷⁹ Además del control de las finanzas del partido, Somoza gozaba de autoridad para gastar los fondos provenientes de la contribución del 5% descontado del salario de todos los empleados públicos – una práctica que el mismo Somoza había prometido abolir en 1936.⁸⁰

G. El trato hacia la oposición leal

La fuerza y unidad impuesta por Somoza a los liberales, contrastaba con el caos y la desunión imperante en el seno del Partido Conservador. A raíz de su división en torno a la decisión de participar o abstenerse en las elecciones presidenciales de 1936, los conservadores se mostraron incapaces de enfrentar a Somoza como una alternativa política unida. La razón era muy sencilla: siempre había conservadores dispuestos a colaborar con las maniobras de los liberales somocistas, ya sea apoyando a los conservadores nacionalistas o respaldando al ala disidente de los conservadores “genuinos” (o “tradicionales”) encabezados por Carlos Cuadra Pasos. En 1936, un grupo de conservadores “genuinos” participó en las elecciones como candidatos por la facción de los conservadores nacionalistas, llegando a ocupar algunos escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado.

En 1938, el mismo grupo conservador decidió presentar candidatos a la Asamblea Constituyente, aunque la dirigencia del partido se opuso vehementemente. Emiliano Chamorro, que para entonces vivía exilado en la capital mexicana, difundió un manifiesto proclamando su rechazo a cualquier trato con los liberales. Además, acusó a Somoza de ser la causa de todos los males sufridos por Nicaragua desde la revuelta liberal de 1926, y denunció que el verdadero propósito de la Asamblea Constituyente era alargar el período presidencial de Somoza.⁸¹ Las autoridades del Partido Conservador en Managua giraron instrucciones similares a sus representantes en el Congreso, instándolos a oponerse al proyecto de reformas constitucionales, pero esta orden no fue acatada. En consecuencia, Carlos Cuadra Pasos renunció a la junta directiva del Partido Conservador bajo presión de los chamorristas. En cuestión de días, sin embargo, Cuadra Pasos y los conservadores disidentes llegaron a un arreglo con los conservadores nacionalistas para presentar una sola lista de candidatos, tal como lo habían hecho en 1936.⁸²

El 8 de octubre de 1938, los disidentes emitieron un comunicado explicando su posición bajo el argumento de que, pese a las imperfecciones de la ley electoral, la oposición debía aprovechar la

oportunidad de participar en el debate político del país. Tal participación era muy importante, en vista de que los conservadores corrían el peligro de desaparecer del mapa político si no mantenían una presencia activa y dejaban escuchar su voz. Además – explicaron – al participar en el debate, defenderían la plataforma de su partido, y los principios de libertad religiosa, respeto por la familia, prohibición de la usura, y búsqueda de la justicia social.⁸³ Una vez instalados en la Asamblea Constituyente, los conservadores “genuinos” procuraron explicar en qué consistían sus diferencias con respecto a los conservadores nacionalistas, pero su argumentación se redujo a afirmar que estos últimos “estaban con el gobierno” mientras ellos no eran aliados de Somoza. Para dejar en claro su posición, los “genuinos” abandonaron la Asamblea cuando se les pidió votar por la ratificación de la nueva Constitución, aunque regresaron a sus asientos una vez que ésta había sido aprobada.⁸⁴ Mientras tanto, la otra facción de los conservadores “genuinos” procedió a expulsar a los disidentes, acusándolos de abandonar sus principios políticos, y aclaró que el Partido Conservador se había mantenido totalmente al margen de las reformas constitucionales.⁸⁵

Aunque se hallaban completamente subordinados a la línea política de Somoza, los conservadores nacionalistas también tenían problemas internos. Tres de sus diputados a la Asamblea Constituyente, pertenecientes al movimiento político de extrema derecha en Nicaragua, declararon públicamente su rechazo al sistema democrático, y su simpatía por Somoza, porque éste había prometido encabezar un gobierno fuerte que erradicaría la violencia y el desorden del país. Los tres diputados eran partidarios incondicionales de la reforma constitucional, precisamente porque deseaban convertir a Somoza en un presidente vitalicio. Sin embargo, hacia 1940, su franqueza resultó inoportuna, en vista de la posición adoptada por Estados Unidos ante las potencias del Eje. Por tanto, en agosto de ese año, Henri Pallais, diputado liberal por León, los acusó formalmente de difundir “propaganda contraria a las instituciones fundamentales del Estado”, y exigió al Senado que los sometiera a juicio. Pallais denunció que dichos diputados – José Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra y Diego Manuel Chamorro – pertenecían al “Partido Reaccionario” y mantenían frecuente comunicación con la Falange española, además

de dedicarse a organizar grupos de jóvenes bajo el nombre de Legiones Católicas Nacionalistas.⁸⁶

Los tres acusados se defendieron vigorosamente, argumentando que un sistema democrático permite todas las expresiones del pensamiento político, tal como ocurría en los parlamentos europeos, donde monarquistas y comunistas se sentaban a la par del otro. Coronel Urtecho dijo llanamente que su presencia en el Congreso obedecía a su fe en Somoza – no en la democracia – pues éste era jefe del primer ejército verdaderamente nacional en la historia de Nicaragua, y constituía la columna vertebral del Estado. Negó ser miembro de un partido reaccionario – que, por lo demás, era inexistente – aunque reconoció pertenecer a un grupo minoritario dentro de un partido minoritario, por lo que no representaba peligro alguno para el país. Cuadra optó por defenderse con argumentos legalistas, probablemente como resultado de la influencia de su padre, Carlos Cuadra Pasos. Insistió que todos los diputados gozaban del fuero parlamentario, y éste abarcaba sus expresiones políticas; por consiguiente, tanto él como sus otros colegas bajo juicio habían actuado dentro de partidos políticos legalmente reconocidos. Después del debate correspondiente, el Senado votó en sesión secreta y absolvió a los tres diputados por un voto de ocho a seis. A partir del ingreso de Nicaragua a la Guerra en diciembre de 1941, la expresión de ideas fascistas fue prohibida, pero para esa fecha la importancia política que los diputados ultra-derechistas podían significar para Somoza había menguado, y dejaron de tener presencia.⁸⁷

H. El régimen y el movimiento obrero

El movimiento obrero tuvo una importancia mucho mayor para Somoza, pues al margen de la actitud que había mostrado hacia los obreros en 1936, durante los años de la guerra le era más difícil ignorarlos. En efecto, la clase obrera urbana había crecido notablemente, producto del establecimiento de numerosas empresas dedicadas a la sustitución de importaciones, así como de los programas de obras públicas y el desarrollo de la exportación de productos no tradicionales, sobre todo del caucho y la minería. En 1940, la mayor parte de los 23,000 obreros dedicados a la manufactura trabajaban en talleres

de menos de cinco empleados cada uno. Sin embargo, en 1945 alrededor de 8,000 obreros trabajaban en fábricas, lo que representaba un 30% de toda la fuerza de trabajo industrial, mientras que la minería, la construcción y el transporte empleaban a otros 18,000 obreros.⁸⁸ Representaban, pues, una potencial clientela política, que podría ser movilizada junto a otros grupos urbanos para impulsar los objetivos políticos de Somoza.

Las organizaciones sindicales no habían crecido mucho durante las décadas de 1920 y 1930. En parte, esto se debió a la escasa proporción de obreros industriales, como también a la naturaleza generalmente represiva de los gobiernos nicaragüenses. Pero a partir de la fundación del Partido Trabajador Nicaragüense en 1931, la presencia organizada de este sector social empezó a repuntar, alimentando el interés de Somoza por reclutar su apoyo para impulsar sus ambiciones políticas. Hacia 1936, Somoza ya coqueteaba con el movimiento obrero, ofreciéndole construir “casas del obrero” y viviendas de bajo costo, iniciar un programa de legislación del trabajo, e incluir disposiciones sobre seguridad social en la nueva Constitución. Un mes después de asumir la presidencia, Somoza asistió a la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Casa del Obrero en Managua.⁸⁹

Al mismo tiempo, el Congreso se abocó al estudio de un código de trabajo a iniciativa de un diputado liberal, pero no contaba con el apoyo de Somoza por lo que ni siquiera pasó a discusión en el plenario. Somoza explicó su actitud, argumentando la necesidad de revisar el anteproyecto con mayor detenimiento y, sobre todo, someterlo a consideración de las organizaciones sindicales para enriquecer su contenido.⁹⁰ Probablemente, la causa fue otra: en ese momento la introducción de un código de trabajo era inoportuna, y podría haber generado una reacción negativa entre la comunidad empresarial. Tal riesgo no compensaba la posibilidad de ganarse el apoyo de la clase obrera. Por otra parte, la estrategia de Somoza era la de prolongar al máximo los efectos políticos de sus decisiones, tanto antes como después de su ejecución. Es decir, la oferta de un código de trabajo valía tanto para Somoza como el código en sí, pues empezaba a recibir el apoyo del movimiento obrero desde el momento en que proclamaba

su promesa. Mientras tanto, podía promulgar otras medidas, sin dejar de mencionar, de vez en cuando, su ofrecimiento inicial.

En septiembre de 1937, el Congreso aprobó una ley que obligaba al Banco Hipotecario a destinar C\$300,000 de sus utilidades anuales para la construcción de viviendas de bajo costo.⁹¹ En tres años, el gobierno construyó un total de noventa y una casas en la Colonia Somoza de Managua, y aunque dicha cifra era insignificante para paliar la escasez de viviendas en el país, el gobierno explotó el proyecto por su valor propagandístico.⁹² En enero de 1940, la primera Casa del Obrero fue inaugurada formalmente en Managua con la presencia del propio Somoza. El presidente ofreció un discurso rimbombante en el cual comparó la Casa del Obrero con un “templo” donde todos los trabajadores verdaderos podrían sesionar “bajo la augusta serenidad de su techo” y discutir sus problemas comunes. Asimismo, reclamó reciprocidad al movimiento obrero, diciéndoles: “... tengo derecho a esperar que el Obrerismo Nicaragüense, comprensivo de estas francas y leales declaraciones, reconocerá con la misma lealtad, la obra regeneradora que en su provecho se está realizando en diversas formas, que marcan un derrotero seguro e indubitable hacia un mejor destino de las clases trabajadoras de Nicaragua”.⁹³

Somoza redactó y decretó un estatuto para la administración y funcionamiento de la Casa del Obrero, que en buena medida restringió sus actividades a las de un club social. El estatuto prohibía las discusiones políticas o religiosas, lo mismo que “toda actividad o propaganda comunista o de sistemas totalitarios y en general de opiniones contrarias al orden público”. Además, estipuló que la junta directiva de la Casa debía ser electa en asamblea general de los delegados de los diversos sindicatos obreros, pero los propios delegados serían escogidos por el presidente de la República con base en temas sometidos a su consideración.⁹⁴ Cabe señalar que, según el informe financiero de las actividades de la Casa del Obrero del año 1942, más del 91% de todos los gastos correspondieron a compra de licor y fiestas, mientras que sólo un 6.4% fue dedicado a actividades culturales y asistencia social.⁹⁵

Otra legislación laboral promulgada en esta época fue una ley de seguridad industrial para las compañías que utilizaran sustancias

tóxicas, como las mineras. Asimismo, permitió al gobierno imponer multas a las empresas que no protegieran a sus trabajadores de accidentes industriales, estableció un salario mínimo, una jornada de trabajo máxima y varios servicios sociales, incluyendo atención médica gratuita y alimentos subsidiados.⁹⁶ En vista que esta ley solo se aplicaría en algunas regiones remotas del departamento de Zelaya, no ofreció beneficios a los obreros de la región del Pacífico. La Cámara de Diputados aprobó una ley de salario mínimo con alcance nacional, pero ésta fue derrotada en el Senado, aparentemente debido a la oposición de los terratenientes.⁹⁷ Antes de la promulgación del Código de Trabajo en 1945, tan sólo se aprobó una ley laboral que favoreció a los trabajadores, incluyendo a los obreros agrícolas, con un día semanal de descanso obligatorio con goce de sueldo.⁹⁸

El objetivo de estas leyes laborales era demostrar a los trabajadores – organizados o no – que Somoza y su gobierno estaban sinceramente interesados en el bienestar de la clase obrera. Pero no todos los trabajadores entendieron esta legislación en los mismos términos. En consecuencia, surgieron dos corrientes de pensamiento y acción dentro del movimiento obrero. Un sector defendía la “colaboración” con Somoza, confiando en su palabra cuando externaba su deseo de ayudar a los obreros a elevar su nivel de vida. Sin embargo, también existía un sector “independiente”, cuya actitud era más cautelosa; éstos percibían las declaraciones de Somoza como maniobras políticas para incorporar a los obreros a la coalición somocista en igualdad de condiciones que otros grupos. Ambas corrientes se enfrentaron en el seno del Partido Trabajador Nicaragüense, luchando por controlar la dirección del movimiento, mientras Somoza, desde la barra, negociaba con ambas tendencias.

La dirigencia más veterana del movimiento sindical era más proclive a dialogar con Somoza; estaba compuesta por individuos que habían pasado muchos años en prisión o en el exilio, y estaban dispuestos a operar dentro de un entorno restringido. Los dirigentes más jóvenes, menos fogueados y más radicales, predominaban en el ala intransigente del PTN. Los dirigentes colaboracionistas gozaban de bastante prestigio en aquel momento y no eran simples títeres del régimen. Aunque algunos de ellos terminaron subordinados a Somoza,

no es correcto suponer que el movimiento obrero carecía de autonomía con respecto al régimen. Aun los dirigentes más somocistas ocasionalmente actuaban con criterio propio; por ejemplo, cuando se pronunciaron a favor de la formación de un partido laborista en 1941 y 1945, independiente del Partido Liberal.⁹⁹ Sin embargo, las divisiones dentro del movimiento obrero eran reales y favorecían a Somoza. El ejemplo más claro de esta división ocurrió en tiempos del primer congreso del PTN, celebrado en Managua del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1938.

Previamente, Somoza convocó a varios dirigentes del PTN a una reunión, y les ofreció incluir en la nueva Constitución algunas disposiciones favorables a los obreros. En ese momento, el ala somocista del PTN tenía ascendencia y decidió que un congreso nacional del PTN sería la mejor forma de unificar al movimiento obrero alrededor un programa de acción social con apoyo del gobierno. Somoza, a su vez, se mostró entusiasmado por el congreso obrero; emitió una declaración en la cual aceptaba el apoyo del PTN para que, en el futuro, el movimiento obrero y el gobierno pudieran marchar juntos. Pero también dejó en claro que dicha alianza debía ser entre nicaragüenses “nacionalistas”, ajena a “la sombra de teorías importadas”.¹⁰⁰ La dirigencia del PTN justificó su acercamiento a Somoza como parte de su búsqueda de la justicia social. Así lo expresó en un editorial de *Causa Obrera*, el periódico del PTN: “Queremos justicia y para conseguirla preciso es estar cerca de quienes pueden administrarla. No es yéndose al desierto de los actos ineficaces como se puede calmar la sed”.¹⁰¹

En julio de 1938 se nombró un comité para organizar el congreso del PTN, integrado por tres miembros del ala colaboracionista y dos del ala independiente. Acordaron dejar de lado sus diferencias temporalmente, y establecer los procedimientos más eficaces para la elección de los delegados al congreso. Este evento se realizó en el edificio del concejo municipal de Managua que Somoza puso a su disposición, y contó con la presencia de 226 delegados de la región del Pacífico del país. Entre varios acuerdos, el congreso decidió enviar una delegación para hablar con Somoza acerca de las disposiciones sobre seguridad social que contendría la nueva Constitución.

El presidente aceptó sus propuestas, pero no cumplió con su ofrecimiento de incluir a un representante obrero en la siguiente Asamblea Constituyente. Como resultado, la elección del nuevo comité ejecutivo del PTN favoreció al ala independiente; Somoza mantuvo comunicación con la nueva directiva pero su interés inicial por el movimiento obrero se enfrió notablemente. El mismo PTN se desarticuló en 1939 por diversas razones, entre las que se destacan la rivalidad entre ambas tendencias, la pérdida de interés por parte de los trabajadores, y el aumento de la represión del Estado. En julio de 1939, un número considerable de dirigentes del PTN partieron al exilio en Costa Rica, mientras otros terminaron en la cárcel por orden de Somoza, debido a que publicaron algunos escritos criticando al régimen y denunciando las condiciones de vida en el país.¹⁰²

Después del primer intento de acercamiento entre el régimen y el movimiento obrero, el activismo obrero se limitó a una serie de peticiones dirigidas a Somoza por las organizaciones de trabajadores para que les resolviera asuntos muy puntuales, generalmente relacionados con aumentos de salarios y mejoras en las condiciones de trabajo. Tal fue el caso de los trabajadores del taller de mantenimiento del ferrocarril nacional, quienes solicitaron un aumento de salario porque la devaluación del córdoba había sido mucho mayor que los dos aumentos salariales decretados por el gobierno en 1938 y 1939.¹⁰³ En otro caso, el Sindicato Industrial de Zapateros, que reunía a un total de 458 operarios, informó a Somoza de su lucha por ganar mejores salarios y recibir su pago en efectivo los sábados a las cuatro de la tarde, así como por lograr un mejor trato de parte de los maestros de taller, y recibir ocho días de aviso en caso de despido.¹⁰⁴

En 1941, cuando Somoza declaró la guerra a las potencias del Eje e inició su lucha retórica en contra del fascismo, los trabajadores se vieron obligados a moderar sus demandas o solicitudes de aumentos de salario y mejores condiciones laborales. Los periódicos de los trabajadores, tales como *La Verdad* y *Hoy*, destacaban que Somoza defendía los derechos de los trabajadores de buena fe, pero esto no les salvó de ser clausurados en 1941 y 1942, respectivamente, cuando exigieron un aumento general de salarios y la promulgación del código de trabajo. La represión se mostró particularmente aguda

en el caso de las organizaciones laborales de izquierda que estaban tratando de recuperar el terreno perdido. En enero de 1943, la Guardia Nacional disolvió el “Congreso para la paz, la unidad y la liberación”, organizado por el clandestino Partido Comunista con el propósito de crear un amplio movimiento antifascista con la participación de obreros, estudiantes y empleados. El mes siguiente se organizó un “Bloque de Trabajadores Anti-fascistas” como mampara del Partido Comunista; el 2 de mayo de 1943, sus líderes fueron encarcelados por reclamar tierra para los campesinos y una rebaja de los precios de la comida en una manifestación conmemorativa del Día del Trabajo.¹⁰⁵

Hacia fines de 1943, Somoza empezó a moderar su postura ante el movimiento obrero organizado y las agrupaciones políticas de izquierda, como contrapeso a la creciente oposición de estudiantes universitarios, profesionales, empresarios y oligarcas conservadores. El Partido Comunista, bajo el nombre de Partido Socialista de Nicaragua, emergió de la clandestinidad para apoyar de manera abierta la promulgación de un código de trabajo para Nicaragua, y varios grupos pertenecientes al movimiento obrero –tanto somocistas como opositores– se unieron para conformar un Consejo Intergremial Obrero. La posibilidad de que tal colaboración se materializara sugiere la existencia de ciertos puntos de convergencia entre los dirigentes obreros anti-comunistas cercanos a Somoza y aquellos del ala izquierda. Por ejemplo, ambos repudiaban a la derecha y al Partido Conservador, que se oponía a cualquier concesión en favor de los trabajadores, incluyendo el código de trabajo. Por otra parte, el movimiento todavía era muy reducido y débil. Sus recursos, tanto humanos como materiales, eran escasos, y las maniobras de Somoza lo debilitaban aún más. En esa época, sólo tenían alianzas internacionales con los movimientos obreros de México y Costa Rica, que funcionaban como apéndices del régimen de turno, o en estrecha armonía con el mismo.¹⁰⁶ Sin embargo, Somoza valoraba la importancia de contar con el apoyo de los obreros, o al menos, de algunos sectores de los trabajadores. Tal apoyo fortalecía su imagen como líder “nacional”, tanto dentro como fuera de Nicaragua; por lo que procuraba atraerlos con nuevas promesas y concesiones a cambio de apoyo político.

I. El régimen y el sector privado

Un último componente de la coalición política somocista fue el sector privado. A inicios de la primera presidencia de Somoza, buena parte de la discusión entre el gobierno y el sector privado se centró en las soluciones de corto plazo a los problemas económicos más inmediatos. Una vez resueltos mediante la devaluación de la moneda, los incrementos impositivos y el aumento de la masa monetaria, las relaciones del gobierno con el mundo de los negocios fue mucho más amistosa. A comienzos de 1939, Somoza parece haber hecho las paces con los comerciantes dedicados a las importaciones, cuya oposición inicial al mantenimiento de un cambio fijo influyó poderosamente en la decisión de devaluar la moneda. El 5 de febrero, las cámaras de comercio de todo el país (Managua, León, Granada, Chinandega, Masaya y Matagalpa), representadas por cien invitados en traje de esmoquin, le obsequiaron un agasajo de gala a Somoza “como homenaje de simpatía y reconocimiento por el interés que el Mandatario ha demostrado por el mejoramiento económico de la nación”. En su discurso de orden, el presidente de la Cámara de Comercio de Managua, Constantino Pereira, quien además era tesorero del Partido Liberal, subrayó la importancia de la cooperación entre el gobierno y el sector privado y ensalzó a Somoza por haberle dado al país paz, estabilidad monetaria y un Banco Nacional nacionalizado. Por estas razones, y porque los gremios de comerciantes eran “apolíticos” e independientes, se habían reunido todos ellos, provenientes de diversas partes del país, para dar su respaldo a un presidente quien era el garante de la paz, la libertad y la democracia.¹⁰⁷

Somoza respondió con un discurso en el cual recordó a los presentes que en los días previos había asistido a la inauguración de viviendas para obreros y del nuevo edificio del Banco Nacional. Ahora se encontraba con las cámaras de comercio, “la arteria más fuerte en el sistema orgánico de la República”, a quienes pedía su cooperación en nombre de la Patria. Se comprometió a garantizar la libertad requerida por los empresarios para producir e intercambiar, a dejar que las leyes de la oferta y la demanda determinaran los precios en el país, mantener la paz sustentada en el orden, y presidir un gobierno nacio-

nal ajeno a la política partidista. En este sentido, Somoza recalcó el cariz “antipartidista” de su gobierno, asegurando gobernar para todos.

Durante los años siguientes, la atención de los comerciantes se centró en los problemas menores que los afectaban, así como en los ajustes requeridos por la economía nacional. En agosto de 1939, se quejaron del aumento de los impuestos de importación, y el mes siguiente, protestaron por la puesta en vigencia de medidas de control de precios de los productos de primera necesidad. En diciembre de 1939, la cámara de Managua escribió al ministro de Gobernación describiendo el impacto negativo sobre la actividad comercial del decreto que limitaba las ganancias. Sin embargo, todas las cámaras de comercio respaldaron el plan Max para reformar los sistemas bancario y fiscal. Después de 1941, las escasas referencias a las políticas económicas del gobierno, aparecidas en las publicaciones de las Cámaras de Managua y León, eran generalmente favorables. Por ejemplo, en su informe de fin de año de 1941, el presidente de la Cámara de Comercio de Managua solamente expresó una sugerencia al gobierno, referida a la posibilidad de mejorar los trámites burocráticos de las solicitudes de dólares ante la comisión de cambios.¹⁰⁸

Resulta más difícil desentrañar el carácter de las relaciones del gobierno con los ganaderos y agricultores, debido a la falta de información y de material impreso. Las medidas económicas del régimen de los años 1937 y 1938, por lo general beneficiaron a los agroexportadores mediante la devaluación de la moneda y el incremento del crédito agrícola. Es decir, la relación de Somoza con los cafetaleros parece haber sido generalmente buena. La única evidencia disponible de un reclamo específico es una carta del presidente de la Asociación Agrícola de Nicaragua al secretario privado de Somoza quejándose de la falta de brazos para cortar el café en la región de Managua. Atribuyó este problema al bajo precio del café, que impedía pagar mejores salarios, pero también responsabilizó al gobierno por no suspender los trabajos de construcción de carreteras durante los meses de la cosecha y por no rebajar el precio de los boletos del tren para los trabajadores migrantes, tal como se había hecho antes. Por el contrario, la construcción de carreteras se había intensificado y la mano de obra era más escasa que nunca.¹⁰⁹

La actitud del gobierno hacia algunos de los ganaderos del país no parece haber sido tan conciliatoria. En primer lugar, los ganaderos de Chontales y Boaco eran, en su mayoría, terratenientes conservadores cuya lealtad al caudillo Chamorro cerraba toda posibilidad de que se convirtieran en aliados leales del gobierno. Además, las medidas tomadas por Somoza para prohibir la exportación de carne durante un período de cinco años debe haber generado mucha animosidad entre ellos, agravada por la creciente participación del propio Somoza en el negocio de la ganadería. Posteriormente, en 1940, Somoza decretó la suspensión del subsidio gubernamental a la Asociación Nacional de Ganaderos. También despojó a la Asociación de las funciones que coincidían con las del Ministerio de Agricultura; como justificación de esta medida, el decreto en cuestión planteaba que “la defensa de la agricultura nacional requiere urgentemente una organización de la producción y del beneficio de ciertos artículos exportables que no pueden lograrse sino mediante la intervención y dirección del Estado”.¹¹⁰

La política de Somoza hacia los terratenientes conservadores no se hizo extensiva a todos los propietarios conservadores. Sus relaciones con el poderoso complejo agroindustrial de la Nicaragua Sugar Estates, Limited, del departamento de Chinandega, parece haber sido particularmente cordial, debido tanto a la importancia de la producción y exportación de azúcar como a los nexos de los dueños del complejo con los grupos más conciliadores del conservatismo. En 1939, Silvio Pellas – presidente de la Nicaragua Sugar Estates y de la muy influyente Asociación Azucarera de Nicaragua, que incluía a todos los grandes y medianos cañeros – escribió a Somoza solicitando la intercesión de la embajada de Nicaragua en Washington ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos, para lograr una reducción de los impuestos de importación y una cuota mayor para el azúcar nicaragüense. Somoza contestó de inmediato, expresando a Pellas su total acuerdo con la solicitud, por lo que ya había girado las instrucciones del caso al embajador nicaragüense en Washington.¹¹¹

La importancia de la minería y el cultivo del banano para las exportaciones nicaragüenses, y para los ingresos del propio Somoza, sentaron las bases de una relación particularmente cálida con el capi-

tal extranjero. En ocasión de la visita de Somoza a Estados Unidos, a inicios de 1939, la Bragmann's Bluff Lumber Company puso a su disposición uno de sus barcos para transportarlo con su comitiva a Nueva Orleans. H.D. Scott, gerente de la empresa, se ofreció para "recibirlo y llevarlo a pasear por la ciudad de Nueva Orleans para después volver con usted – a NUESTRA Nicaragua".¹¹² En otra ocasión, cuando el Congreso nicaragüense comenzó a estudiar el anteproyecto de ley de protección de accidentes para los obreros en las minas, el gerente de La Luz Mines, Limited, escribió a Somoza expresando sus reservas, porque las empresas mineras ya proporcionaban servicios médicos, alimentos subsidiados y agua potable a sus obreros, aparte de que los costos de operación de las empresas habían subido debido a la guerra en Europa. Además, dijo, la ley propuesta era discriminatoria porque sólo se aplicaría a las operaciones mineras, sin afectar a cantidad de otras empresas que también empleaban a obreros nicaragüenses. Por lo tanto, solicitó al presidente tomar interés personal en el asunto a fin de que la ley no afectara solamente a las empresas mineras.¹¹³ Finalmente, la ley aprobada por el Congreso afectó a todas las empresas que manejaban materiales tóxicos, pero sus disposiciones relativas a las prestaciones a los trabajadores no supusieron ninguna carga adicional a los costos de operación de las empresas mineras. Somoza sabía que si gravaba a las empresas mineras más allá de cierto límite, corría el riesgo de que abandonarían el país, provocando una reacción política negativa en el sector privado.

Un grupo del mundo empresarial que no prosperó bajo Somoza fue el de los cafetaleros alemanes, especialmente aquellos concentrados en el departamento de Matagalpa. Aún no habían transcurrido dos semanas después del ataque a Pearl Harbor y la declaración de guerra de Nicaragua a las potencias del Eje, cuando Somoza ordenó congelar todas las cuentas bancarias de los ciudadanos de los países incluidos en dicha declaratoria.¹¹⁴ De inmediato, el gobierno intervino las fincas cafetaleras y los negocios de estos extranjeros. En el caso de los cafetaleros, se les confiscó toda la cosecha, la cual fue vendida por el Banco Nacional; el Banco, a su vez, canceló las deudas e impuestos pendientes que tenían los dueños y les dio dinero suficiente para mantener sus fincas y sus familias inmediatas. Todo el

sobrante pasó a una cuenta congelada en el Banco Nacional hasta el término del conflicto o según decidiera el gobierno. Asimismo, todos los extranjeros originarios de los países del Eje que se dedicaban al comercio de exportación en Nicaragua fueron afectados por medidas similares. Aunque se les permitió mantener abiertos sus negocios, se les prohibió exportar o importar producto alguno.¹¹⁵ En virtud de otro decreto posterior, se exigió a los extranjeros de países en guerra con Nicaragua presentar listas detalladas de todas sus pertenencias y de los bienes que producían. Si bien los negocios de extranjeros podían seguir abiertos bajo la dirección de sus dueños, se facultó al Banco Nacional para supervisar directamente sus operaciones, y apoderarse de cualquier dinero producto de la venta de estos negocios. Sin embargo, en febrero de 1943, otro decreto prohibió terminantemente a dichos extranjeros vender o permutar sus propiedades.¹¹⁶

El último paso, por supuesto, fue la expropiación. Dicha medida se materializó en una resolución dictada por el Congreso en septiembre de 1943, facultando al gobierno intervenir todos los negocios de extranjeros enemigos, que se considerasen esenciales para la salud económica del país y el esfuerzo bélico. Una vez expropiadas por el Banco Nacional o el presidente de la República, las propiedades debían ser puestas en subasta, y los ingresos del remate depositados en cuentas congeladas del Banco Nacional.¹¹⁷ Muchas de estas propiedades, especialmente las fincas de café de la región de Matagalpa, terminaron en manos de Somoza y su camarilla.

De hecho, desde comienzos de su presidencia, Somoza combinó su posición de ejecutivo nacional con el de ejecutivo de empresas. Cuando firmaba algún contrato de negocios, se identificaba con frecuencia como “agricultor”. En este momento, no es posible hacer un estudio detallado sobre el crecimiento de sus negocios, pero existe suficiente evidencia para determinar, en cierta medida, la manera en que prosperó. El control sobre el sistema financiero fue fundamental para Somoza, lo mismo que el manejo de información sobre el gasto público. Es decir, pudo dedicarse a especular sin correr mayores riesgos e involucrarse en inversiones productivas. Por ejemplo, cuando se construyó el nuevo aeropuerto de la ciudad de Managua, Somoza se las arregló para comprar las tierras donde se construiría dicha obra.

Después, anunció la decisión del gobierno de proceder con la construcción, y le vendió los terrenos al Banco Nacional; finalmente, autorizó a esta institución vender dicha propiedad al gobierno. Su estrategia de inversiones se reflejó también en la construcción de una planta cementera en 1940, en la cual Somoza tenía un 36.6% de las acciones. Asimismo, creó la primera empresa nicaragüense de seguros, que era manejada por un grupo de sus amigos y parientes, todos ellos con cargos en el gobierno.¹¹⁸ Sin embargo, la mayor riqueza acumulada por Somoza fue producto de su acumulación de tierras, compradas a través del sistema financiero bajo su control. En 1940, Somoza ya era un destacado ganadero y agricultor, y sus toros, caballos, vacas y cerdos ganaron la mayoría de los primeros premios en la feria agrícola celebrada anualmente en Managua.¹¹⁹

Somoza también recibía contribuciones monetarias de parte de empresarios extranjeros, que consideraban prudente tener al presidente de Nicaragua de su lado. Al parecer, todas las empresas mineras pasaban a Somoza una contribución en especie sobre la base de su producción de oro. Una de éstas, la compañía Minas Matagalpa, le enviaba US\$10 por cada kilogramo de oro producido, como una contribución “voluntaria y espontánea” que se mantuvo mientras el contrato firmado entre la empresa y el gobierno de Nicaragua estuvo vigente. Gracias a este arreglo, Somoza recibió US\$1,885 y US\$905 cada semestre del año 1943. A fines de la década de 1940, el periodista canadiense William Krehm estimó que Somoza se embolsaba cerca de US\$175,000 al año, en contribuciones entregadas por las empresas mineras.¹²⁰

Por lo general, los empresarios extranjeros interesados en invertir en Nicaragua tenían que entenderse primero con Somoza. Por ejemplo, en 1939 Somoza impuso una serie de condiciones a Alejandro Safié para poder establecer una fábrica textil y un molino de harina en Nicaragua. De acuerdo al contrato preliminar, Somoza debía recibir un 40% de las utilidades, sin invertir un centavo de su bolsillo, pero a cambio de “su consejo y cooperación comerciales a fin de que las actividades de la empresa se desarrollen dentro del más completo campo de libertad, haciendo uso de todos los derechos y privilegios que le conceden las leyes del país”. Al cabo de diez años,

las cuatro décimas partes de la maquinaria y las edificaciones debían pasar a nombre de Somoza; mientras tanto, se prohibía a la empresa vender sus haberes o adquirir deudas mayores de US\$10,000, sin la aprobación explícita de Somoza.¹²¹

Resulta evidente que desde inicios de su mandato, Somoza nunca hizo una distinción entre el servicio público y el lucro personal, ni creía incorrecto la conjugación de ambas actividades. Manejaba sus negocios directamente desde la oficina presidencial y los embajadores y cónsules de Nicaragua en el extranjero fungían como sus agentes comerciales, al margen de sus funciones diplomáticas.¹²² Los documentos relativos a la creación de una empresa a su nombre o la compraventa de alguna propiedad aparecían debidamente en *La Gaceta/Diario Oficial*. La gestación de su imperio económico no generó mucho revuelo dentro de la clase empresarial nicaragüense, ni tampoco suscitó protestas del Partido Conservador en la oposición. Esto se explica, en parte, porque su dimensión aún no era tan grande como para crear fricciones, y porque en medio de la depresión económica, siempre habían personas deseosas de venderle una propiedad.

J. El régimen y la oposición desleal

Al menos hasta 1944, Somoza pudo incursionar de manera abierta en el mundo de los negocios, gracias a que la oposición a las políticas de su gobierno, o a su afán de seguir ocupando la silla presidencial, era muy limitada. La escasa oposición política se manifestaba en algunos incidentes aislados o en la publicación de volantes y folletos, tanto en Nicaragua como en el exterior. Los opositores más activos contra Somoza eran los estudiantes de los colegios y universidades, pero éstos representaban una molestia, más que una verdadera oposición política. En febrero de 1939, un grupo de estudiantes de la universidad en León se opuso a que se colgara en el paraninfo un retrato de Somoza bordado en seda, obsequio del emperador Hirohito del Japón. Los estudiantes lograron introducirse al edificio por la noche y rociaron el retrato con ácido. Poco después, los supuestos implicados fueron capturados, sometidos a torturas y encarcelados por algunos meses.¹²³ En febrero de 1940, la policía de Managua capturó a un grupo de “conspiradores comunistas”, que resultaron

ser unos estudiantes responsables de imprimir y distribuir un volante con la célebre fotografía que Somoza se había hecho tomar abrazando a Sandino, poco antes de su asesinato. En la parte inferior del volante se leía: “El abrazo de la muerte. Ayer asesinó a Sandino, hoy asesina al pueblo”, enmarcadas por las palabras “hambre” y “opresión”. Ocho estudiantes fueron acusados de la impresión del volante, y confinados a Little Corn Island por actividades subversivas e injuriar a funcionarios del gobierno. Otros nueve fueron condenados a treinta días de obras públicas por distribuir los volantes.¹²⁴

La oposición estudiantil a Somoza se manifestó a través de un lenguaje antiimperialista y sandinista, pero su contenido seguía siendo muy ambiguo. Se carecía de una ideología aglutinadora en torno a la cual pudiera tomar cuerpo una coalición política más amplia. Por ejemplo, las relaciones entre el movimiento obrero y los estudiantes universitarios nunca fueron muy buenas. Los estudiantes leían los escritos de Víctor Raúl Haya de la Torre y estudiaban los pormenores de la guerra civil española, pero fueron bombardeados con mucha más información y análisis desde Estados Unidos, sobre todo después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En palabras de un contemporáneo, era una “generación perdida” dentro de una “población adormecida”.¹²⁵ Esta situación cambió repentinamente en 1944, cuando los estudiantes y otros grupos sociales se unieron para impedir otra reelección somocista; sin embargo, antes de esa fecha, lo común era ver a los estudiantes universitarios y de colegio involucrados en actividades de apoyo a Somoza y su gobierno.¹²⁶

Al inicio de la guerra en Europa, el régimen advirtió a sus contrarios que castigaría con severidad todo intento de comprometer la neutralidad nicaragüense o de alterar el orden público. Incluso, desaconsejó a los miembros del Congreso aprovecharse de su inmunidad parlamentaria para realizar actividades políticas ilícitas.¹²⁷ Además de aprobar la nueva Constitución en marzo de 1939, el Congreso decretó una “Ley marcial o de orden público”, que debía entrar en vigencia cuando se suspendieran las garantías constitucionales. La ley marcial estaba diseñada para asegurar el orden público y la seguridad del estado durante circunstancias “anormales”. Bajo esta ley, el presidente tendría la facultad de ordenar, sin autorización judicial, la de-

tención de cualquier persona y su confinamiento por un tiempo indefinido. En caso necesario, las autoridades militares podrían proceder “a todo trance” a disolver grupos sediciosos responsables de causar circunstancias anormales, o aprovecharse de ellas para realizar sus actividades subversivas. Correspondería, entonces, a los tribunales militares juzgar todos los delitos de traición, rebelión, sedición, motín y asonada.¹²⁸ A mediados de 1941, el Congreso aprobó otra medida, la llamada “Ley de defensa de la democracia”. Esta legislación prohibía la difusión de toda ideología o sistemas político-social contrario al “régimen republicano y democrático” del estado y el orden social establecido. Los sistemas identificados específicamente por la ley incluían aquellos que pregonaban la doctrina comunista y las organizaciones nazistas y fascistas. La creación de partidos políticos con nexos internacionales, y el uso de uniformes o insignias de agrupaciones políticas extranjeras, también quedaron prohibidas.¹²⁹

Como era de esperarse, tan pronto como Nicaragua declaró la guerra a las potencias del Eje, Somoza decretó el estado de emergencia y puso en vigencia la ley marcial.¹³⁰ Durante los cuatro años siguientes, Nicaragua permaneció bajo ley marcial; tanto el ala derecha del espectro político (por ejemplo, el grupo de los “reaccionarios” en el seno del Partido Conservador Nacionalista) como los comunistas y los dirigentes más radicales del movimiento obrero sólo podrían actuar bajo su propio riesgo, según la voluntad del dictador. Incluso las actividades de agrupaciones políticas legítimas fueron restringidas. Como resultado, cuando varios dirigentes del Partido Conservador decidieron reunirse en junio de 1943 para analizar la situación política del país, primero debieron solicitar el permiso del jefe político; éste, a su vez, se dirigió al ministro de Gobernación, quien decidió que solamente había dos partidos políticos en Nicaragua, los liberales y los conservadores nacionalistas. En vista de que los conservadores “genuinos” no habían participado en la última elección, se les consideró inexistentes como partido y se les negó el permiso para efectuar la reunión.¹³¹

Estas medidas de control político, públicas e institucionalizadas, se complementaban con una serie de medidas más insidiosas, típicas de los regímenes dictatoriales. Una de las formas más comunes para

generar inteligencia política era contratar espías a sueldo. En Granada, donde la presencia de conservadores y fascistas era notoria, el director de la policía mantenía una estricta vigilancia sobre sus actividades, de manera especial los contactos con la Compañía de Jesús y varias organizaciones obreras.¹³² En Masaya, un espía que firmaba sus informes con las iniciales A. P., deambulaba en lugares públicos supuestamente para enterarse de lo que decían conservadores, comunistas y liberales anti-somocistas acerca de la situación política.¹³³ En las áreas rurales, los “jueces de mesta” ejercían una función judicial combinada con la inteligencia política, pues se les pedía que enviaran semanalmente un informe sobre la “situación” de su comarca, en particular, de las reuniones políticas y sociales. Tal como muestran los informes disponibles, los jueces de mesta parecen haber sido personas con muy poca formación; probablemente eran campesinos bien conectados con el Partido Liberal o la Guardia Nacional.¹³⁴ Su importancia para el régimen se aprecia en el hecho de que siguieron funcionando – en provecho de las necesidades del régimen – hasta el triunfo sandinista de 1979.

En vista de estas limitaciones a la actividad política dentro de Nicaragua, el único lugar donde la oposición política podía externar sus puntos de vista de manera más o menos abierta era en el extranjero, en países como Costa Rica, México, Estados Unidos y, eventualmente, Guatemala, después de instalado el gobierno de Juan José Arévalo. Con la excepción de los dirigentes obreros exiliados, la mayoría de los grupos opositores en el extranjero se identificaban con un reformismo moderado y la democratización política. El Comité Patriótico Abstencionista Nicaragüense, con sede en la ciudad de Nueva York, lanzó un manifiesto a mediados de 1938 pidiendo a todos los nicaragüenses que boicotearan la elección de la Asamblea Constituyente. De lo contrario, decía el comité, el poder de Somoza terminaría consolidándose y, en el futuro, sólo quedaría la alternativa de la revuelta armada, la que, a su vez, permitiría la penetración de “doctrinas exóticas”, como consecuencia natural y directa de un régimen dictatorial.¹³⁵

En septiembre de 1938, el Comité Revolucionario Nicaragüense en la ciudad de México lanzó un “Programa de acción”, expli-

cando los males políticos de Nicaragua como resultado directo de la influencia pretoriana dejada por Estados Unidos, en contubernio con los dos partidos históricos. Es decir, consideraba que el problema de Nicaragua no era Somoza, sino la Guardia Nacional. Los partidos Liberal y Conservador habían aceptado de manera sumisa este nuevo elemento dentro del sistema político nicaragüense, por lo que se encontraban sufriendo las consecuencias. Somoza y la Guardia terminarían domesticándolos y destruyéndolos mediante el uso de “el pan y el garrote” – táctica contra la que se hallaban indefensos, pues en realidad los partidos no representaban más que a caudillos con creencias y prácticas tradicionales, sin vínculos reales con el pueblo.¹³⁶

Ante esta realidad, el Comité Revolucionario pensaba, en primer lugar, erradicar la presencia pretoriana para después proceder a reconstruir el país bajo nuevas líneas. Es decir, se propuso organizar una oposición armada con apoyo popular contra el régimen y después poner en marcha un nuevo modelo político y social. Específicamente, el Comité mencionó la necesidad de realizar una reforma agraria mediante la expropiación y distribución de tierras incultas, la devolución de tierras comunales y ejidales a sus dueños legítimos, y la organización de nuevas unidades agrícolas sobre la base del sistema cooperativo y la asistencia técnica y financiera. En segundo lugar, el Comité consideraba que la base agrícola de Nicaragua era demasiado vulnerable a las fluctuaciones del mercado mundial; por lo tanto, exigía el desarrollo de la industria bajo la égida del estado. El desarrollo industrial, a su vez, exigía la puesta en marcha de una legislación laboral, incluyendo un código de trabajo y de seguridad social. El Estado también debía asumir un papel más directo en la promoción de las actividades comerciales y exportadoras, mediante una reforma del sistema financiero y un mayor control sobre la inversión extranjera en el país. En tercer lugar, el Comité Revolucionario hizo un llamado para que se pusiera en práctica una nueva política exterior, abandonando la del régimen somocista, que había coqueteado con el fascismo y se mostraba sumiso ante el imperialismo – presumiblemente el de Estados Unidos – que tanto daño había ocasionado a Nicaragua. En particular, señalaba dicho programa, era necesario revisar y aún abrogar todos los acuerdos internacionales

que limitaban la soberanía de Nicaragua y controlaban sus finanzas. Finalmente, el Comité proponía el establecimiento de un nuevo sistema político para garantizar los derechos políticos y civiles básicos, la autonomía municipal y la educación gratuita y laica.¹³⁷

Tanto el Comité Patriótico Abstencionista y el Comité Revolucionario sostenían una posición que reflejaba una ideología reformista, propia de la clase media de la época. Si bien ésta era bien intencionada, no tenía vínculo orgánico alguno con el pueblo. Al igual que otros grupos que se formaron en los años siguientes, éstos se hallaban integrados por profesionales y empresarios desencantados, que deseaban un mejor gobierno para Nicaragua; otros habían sufrido un agravio personal de parte de Somoza y buscaban la manera de vengarse. Aunque algunos de estos grupos, como el Comité Revolucionario, se mostraban dispuestos a contemplar una renovación de la sociedad nicaragüense, en ningún momento llamaron al pueblo a organizarse para actuar en contra del régimen.

K. Conclusión

Hacia 1943, el régimen somocista no admitía rivales dentro ni fuera del país. El capital nacional y extranjero había sido incorporado, en gran medida, a la coalición somocista. El movimiento obrero, aunque más dividido e impredecible, también había sido abordado para que se manifestara dentro de los límites establecidos por el mismo régimen. Solamente la fracción chamorrista del Partido Conservador se oponía públicamente al régimen y a Somoza, pero su líder estaba en el exilio y los miembros que vivían en Nicaragua eran severamente vigilados y controlados en sus actividades. La debilidad de los conservadores se veía agravada por su falta de propuestas políticas claras, y su insistencia en el respeto a procedimientos constitucionales que, ellos mismos, rara vez habían observado en el pasado. Su base social de apoyo entre los ganaderos, peones y campesinos de Granada, Chontales, Boaco y Rivas no competía con la coalición somocista de comerciantes, cafetaleros, obreros urbanos, empleados de gobierno y la Guardia Nacional. Otros grupos opositores que operaban fuera del país se dedicaban a redactar propuestas altisonantes, pero carecían de bases sociales de apoyo dentro del país.

El régimen, por el contrario, había fortalecido las instituciones del Estado y las había colocado directamente bajo el control de Somoza. Las medidas económicas que se ejecutaron, en primer lugar, en respuesta a la crisis económica y, en segundo lugar, a la Guerra Mundial, centralizaron en manos del ejecutivo nacional las determinaciones sobre política fiscal y monetaria. Además, dejaron en manos de Somoza buena parte de las decisiones sobre la concesión de los créditos de los principales bancos del país. En este sentido, fue muy importante el traslado de la junta de directores del Banco Nacional a Managua, y la reforma subsiguiente de todo el sistema bancario en 1940. Al combinar un control más estricto sobre las finanzas y el crédito en el país, con una política de devaluación e inflación favorable a los exportadores, el régimen podía vanagloriarse de su compromiso con la reactivación económica, sin poner en tela de juicio los postulados fundamentales del sistema de la libre empresa. Los controles de precios y de cambios, si bien representaban una limitante, en principio, a la operación de las fuerzas del mercado, no fueron particularmente efectivas para controlar la inflación o el mercado negro de divisas. Los comerciantes protestaban ocasionalmente por la falta de moneda extranjera y los cuellos de botella burocráticos que entorpecían los trámites en los bancos, pero en última instancia se acoplaron al sistema.

Las reformas municipales y el crecimiento de la burocracia nacional otorgaron al régimen una variedad de mecanismos adicionales de control político. La vieja rivalidad electoral liberal-conservadora fue eliminada en el ámbito local por medio del nombramiento directo de las autoridades municipales desde la presidencia de la República, y la abolición casi total de la autonomía municipal. El gobierno central llegó a controlar casi todo el empleo público, situación que aprovechó para desarrollar apoyo y lealtad política entre la burocracia y los que buscaban trabajo. Además, en la medida que se mejoraban los mecanismos de recaudación tributaria y aumentaban los ingresos del Estado, el régimen obtenía los recursos necesarios para financiar el crecimiento del sector público.

Finalmente, la Constitución de 1939 otorgó al régimen un grado de legitimidad al delinear un nuevo Estado con mayores atribu-

ciones de intervencionismo social y económico. La Constitución comprometió al Estado a promulgar, eventualmente, medidas de seguridad social y de subdivisión de latifundios incultos para crear la pequeña y mediana propiedad rural; también introdujo el concepto de la propiedad como un derecho, pero en “función social”. Además, ratificó los cambios introducidos en el régimen municipal y, por primera vez, estableció el carácter constitucional de la Guardia Nacional como el ejército de Nicaragua. Finalmente, la Constitución le otorgó al Estado extensos poderes para limitar la libertad de expresión y, de acuerdo a las estipulaciones de la ley marcial, para capturar, encarcelar y confinar a las personas consideradas peligrosas para la seguridad del Estado mediante procedimientos administrados por los tribunales militares. Por supuesto, la Constitución no estableció un marco temporal para la puesta en marcha de sus disposiciones sociales y económicas, ni definió en término claros cuando entrarían en vigencia sus disposiciones represivas. Estos imponderables quedaron en manos de Somoza, quien los explotaría políticamente durante los años venideros.

Por tanto, a comienzos de la década de 1940, el Estado nicaragüense fue el producto de un proceso de desarrollo institucional y de la llegada al poder de un individuo que controlaba la institución más poderosa de todas, la Guardia Nacional. Esta mezcla de características institucionales y personales se refleja en la misma Constitución, pues define al presidente de la República como la “personificación de la Nación”.¹³⁸ Sin embargo, el éxito del Estado somocista en aquella época también se debió a la habilidad de Somoza de conciliar los intereses de los grupos sociales más poderosos, mientras solicitaba el apoyo de otros sectores que previamente habían sido marginados del proceso político. El uso de la fuerza como mecanismo de dominación política se supeditó a la conciliación política; por una parte, era prácticamente imposible enfrentarse al régimen por medio de las armas, pero por otra, tampoco tenía mucho sentido hacerlo cuando existían canales de comunicación con el jefe del Estado, aunque éstos sólo estaban abiertos para aquellos que aceptaban actuar bajo las normas establecidas por el régimen. Y finalmente, al mostrar su firme intención de colocarse dentro de la gran alianza mundial contra el fascismo y el totalitarismo – aunque sólo verbalmente – Somoza

pudo explotar la importante presencia de Estados Unidos entre las figuras políticas nicaragüenses que habían crecido bajo el protectorado de las décadas de 1910 y 1920. Para muchos nicaragüenses, la imagen de Somoza acompañado del embajador y la bandera de Estados Unidos significaba una sola cosa: la nación más poderosa del hemisferio no se oponía a que Somoza siguiera en el poder; por tanto, no vería con buenos ojos cualquier intento de derrocarlo.

Hacia comienzos de 1944, Somoza se sintió más fuerte que nunca y sus intenciones de continuar en el poder después de 1947 no se le ocultaban a nadie. Sin embargo, no todos aceptaban de buena gana semejante posibilidad. En la medida en que aumentaba el rechazo al somocismo, también aumentaba la voluntad de enfrentarse de manera abierta al régimen, lo que efectivamente ocurrió en 1944, cuando estalló la primera crisis seria del nuevo orden – una crisis que amenazó con dismantelar la coalición somocista y debilitar el apoyo vital de Estados Unidos. Somoza pudo sobrevivir esta crisis, en buena medida, gracias a su capacidad para maniobrar eficazmente, y a su control sobre el aparato del Estado, ya renovado y consolidado.

CITAS Y NOTAS

1. Las citas y el resumen del discurso de Somoza en éste y los dos párrafos siguientes han sido tomados de Presidencia de la República, Mensaje inaugural del Excmo. Señor Presidente de la República, General Anastasio Somoza, al Honorable Congreso Nacional, el 1 de enero de 1937, pp. 8-9, 11-12, 14-18.

2. Nicaragua, Recaudación General de Aduanas, *Memoria* de 1940, p. 32. Un memorando interno preparado por el Departamento de Emisión del Banco Nacional describe en detalle las operaciones de las compañías mineras. Las cuatro minas más grandes (La Luz Mines Ltd., Neptune Gold Mining Co., Compañía Minera La India y Compañía Minas Matagalpa), todas de propiedad extranjera,

produjeron US\$3,014,147 de oro durante el período enero-junio de 1943, lo cual representa un 76% de la producción total de oro valuada en US\$3,950,431. Sobre el valor de esta producción, pagaron una “contribución voluntaria” al gobierno nicaragüense de US\$45,212, es decir, 1.5% de la producción total. Las minas restantes, mucho más pequeñas, simplemente vendían al gobierno entre un 12 y un 50 por ciento de su producción, de acuerdo a contrato. Memorando del Departamento de Emisión del Banco Nacional, Managua, 8 de octubre de 1944, caja 229, AN.

3. *La Prensa*, 17 y 21 de febrero de 1937.

4. Alejandro Salvatierra, secretario de la Cámara de Comercio de Managua, al Ministro de Hacienda, Managua, 4 de febrero de 1937, en *Boletín*, no. 18-19 (enero-febrero de 1937): 8-12. La Cámara de Comercio de León también respaldó esta postura. *Mercurio*, no. 93-95 (marzo de 1937): 8-9, 24-25.

5. Miguel Silva S., secretario de la Cámara de Comercio de Managua, a ASG, Managua, 1 de junio de 1937, caja 86, folder “junio de 1937,” AN.

6. Nicaragua, Decreto de reorganización de la Comisión de Control de Operaciones de Cambios, LG/DO 41,164 (2 de agosto de 1937).

7. Cámara de Comercio de Managua a ASG, Managua, 7 de diciembre de 1937, *Boletín*, no. 29 (diciembre de 1937): 19-20.

8. Asociación Agrícola de Nicaragua a ASG, Managua, 30 de noviembre de 1937, *Boletín*, no. 29 (diciembre de 1937): 21-25.

9. *La Prensa*, 11 de diciembre de 1937; Nicaragua, Decreto liberalizando la negociación de divisas internacionales, LG/DO 41,281 (23 de diciembre de 1937).

10. Eduardo Mendoza a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Managua, en *Boletín*, no. 31 (febrero de 1938): 4-11.

Mendoza era de la opinión de que la junta directiva había sido criticada injustificadamente por algunos socios de la Cámara por no defender con suficiente vehemencia los intereses de los comerciantes.

11. *Boletín*, no. 32 (marzo de 1938): 9-12; y no. 33 (abril de 1938): 13-14.

12. Nicaragua, Reglamento del decreto liberalizando la negociación de divisas del 23 de diciembre de 1937, LG/DO 42,14 (19 de enero de 1938).

13. Nicaragua, Decreto prohibiendo el libre comercio de divisas dentro del país, LG/DO 42,121 (9 de junio de 1938).

14. Nicaragua, Decreto de control de precios, LG/DO 41,159 (16 de marzo de 1937).

15. Nicaragua, Ley de ganancias máximas para mercaderías de primera necesidad, LG/DO 42,17 (22 de enero de 1938).

16. LG/DO 42,86 (27 de abril de 1938).

17. Memorando de las Cámaras de Comercio de Chinandega, León, Granada, Masaya, Matagalpa y Managua a ASG, Managua, 8 de febrero de 1938, en *Boletín*, no. 31 (febrero de 1938): 25-28.

18. Constantino Pereira a miembros de la Cámara de Comercio de Managua, Managua, 11 de febrero de 1938, en *Boletín*, no. 31 (febrero de 1938).

19. Asociación Nacional de Ganaderos de Nicaragua a ASG, Managua, 9 de junio de 1937, caja 86, folder "junio 1937," AN; Cámara de Comercio de Managua a Ministro de Agricultura y Trabajo, Managua, 22 de junio de 1937, caja 84, folder "mayo 1937," AN. Esta prohibición de exportación de ganado parece haber estado vigente solamente durante 1937, año en que salieron (legalmente) 15 cabezas de ganado. Durante los años subsiguientes, las exportaciones de ganado aumentaron, llegando a más de 13,000 cabezas en

1939; durante los años de la guerra mundial las exportaciones oscilaron entre 1,500 y 7,000 cabezas anualmente.

20. Krehm, *Democracias y tiranías en el Caribe*. Krehm, ciudadano canadiense, se desempeñó como periodista de la revista *Time* en Centroamérica durante la década de 1940. Sus muy amenas impresiones de los jefes de estado de la región, muchos de los cuales conoció personalmente, ofrecen interesantes apreciaciones sobre la cultura política de la región.

21. *La Prensa*, 19 de febrero y 4 de junio de 1938.

22. *Boletín*, no. 25 (agosto de 1937): 9-13.

23. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Memoria de 1936-1937*, pp. IV-VI. Los impuestos a la gasolina fueron aumentados en junio de 1937 y julio de 1938. LG/DO 41,133 (24 de junio de 1937); 42,145 (9 de julio de 1938). Los impuestos al aguardiente se incrementaron en agosto de 1937, enero de 1938 y septiembre de 1939. LG/DO 41,168 (6 de agosto de 1937); 42,15 (20 de enero de 1938); 43,209 (27 de septiembre de 1939). Los impuestos al tabaco aumentaron en agosto de 1937 y octubre de 1939. LG/DO 41,173 (13 de agosto de 1937); 43,219 (9 de octubre de 1939). En febrero de 1938 los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y el azúcar fueron aumentados en un 100% en respuesta a la devaluación del córdoba. LG/DO 42,25 (1 de febrero de 1938). Sobre el asunto de los impuestos de venta y herencia de bienes inmuebles, véase LG/DO 43,278 (20 diciembre de 1939) y 44,18 (22 de enero de 1940).

24. *La Prensa*, 25 de diciembre de 1937, 19 de mayo de 1938.

25. Nicaragua, Decreto rebajando el impuesto al café exportado, LG/DO 43,277 (19 de diciembre de 1939).

26. Nicaragua, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Memoria de 1939-1940*, p. XXXIV.

27. LG/DO 44,242 (29 de octubre de 1940).

28. Nicaragua, Ley del Banco Nacional de Nicaragua, LG/DO 44,242-244 (29-31 de octubre de 1940).

29. Nicaragua, Ley general de instituciones bancarias, LG/DO 44,244-245 (31 de octubre-2 de noviembre de 1940).

30. Nicaragua, Ley de intereses; y Ley que reorganiza el control de cambios, LG/DO 44,246 (4 de noviembre de 1940).

31. Nicaragua, Ley de reorganización del Banco Hipotecario de Nicaragua, LG/DO 44,246-247 (4-5 de noviembre de 1940).

32. Nicaragua, Ley orgánica de la Caja Nacional de Crédito Popular, LG/DO 44,247-248 (5, 8 de noviembre de 1940).

33. Nicaragua, Ley de reorganización de la Compañía Mercantil de Ultramar, LG/DO 44,245-246 (2, 4 de noviembre de 1940).

34. Los listados de las operaciones de crédito se encuentran en las cajas 137, 144, 216, 238, 274, 275, 283, 303, 316, 322, 334 y 339, AN. Una muestra de las cartas de recomendación que enviaba Somoza se encuentra en caja 293, folder “correspondencia firmada por el señor Presidente,” AN. Un análisis sistemático de los préstamos otorgados por el Banco Nacional y el Banco Hipotecario esclarecería enormemente el papel del crédito bancario como instrumento de control político. Por ejemplo, tal como se observa en la documentación de la caja 293, AN, algunas de las más fuertes solicitudes de crédito que Somoza respaldó eran de oficiales de la Guardia Nacional.

35. Nicaragua, Decreto de control de importaciones, LG/DO 43,206 (23 de septiembre de 1939); Decreto de control de precios y ganancias, LG/DO 43,199 (13 de septiembre de 1939); Ley de inquilinato, LG/DO 43,211 (29 de septiembre de 1939); Ley sobre medicamentos estancados, LG/DO 43,248 (13 de noviembre de 1939); Decreto de creación de la Junta de Control de Precios y Co-

mercio, LG/DO 45,274 (17 de diciembre de 19041); Decreto ampliando las funciones de la Junta de Control de Precios y Comercio, LG/DO 48,39 (23 de febrero de 1944).

36. Irving A. Lindberg, Recaudador General de Aduanas, a ASG, Managua, 23 de junio de 1943, caja 216, AN.

37. Nicaragua, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Memoria* de 1939-40, pp. LVII-LVIII; Decreto de creación de la Dirección de Ingresos, LG/DO 43,250 (15 de noviembre de 1939).

38. Nicaragua, Decreto de disolución de la corporación “Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua” incorporado bajo las leyes del estado de Maine, Estados Unidos de América, LG/DO 41,69 (6 de abril de 1937).

39. Nicaragua, Decreto de supresión del Ministerio de Higiene Pública y creación de la Dirección General de Sanidad, LG/DO 41,94 (12 de mayo de 1937).

40. *La Prensa*, 5 de marzo de 1938; Recaudación General de Aduanas, *Memoria* de 1941, p. 20.

41. Nicaragua, Constitución Política de 1911, LG/DO 16,13 (17 de enero de 1912), artículos 145-147. Si bien autónomas en teoría, las municipalidades estaban subordinadas al gobierno central para la aprobación de sus tarifas de arbitrios y las auditorias del caso. Nicaragua, Decreto legislativo relativo a la fiscalización y control de cuentas municipales y otras, LG/DO 39,171 (5 de agosto de 1937).

42. Nicaragua, Decreto presidencial interviniendo la municipalidad de León, LG/DO 41,59 (16 de marzo de 1937); Decreto presidencial interviniendo la municipalidad de Masaya, LG/DO 41,62 (19 de marzo de 1937). Para el caso de Chinandega, véase LG/DO 41,75 (13 de abril de 1937).

43. Nicaragua, Decreto legislativo suspendiendo elecciones municipales, LG/DO 41,187 (30 de agosto de 1937).

44. Nicaragua, Decreto ejecutivo creando juntas locales en varios departamentos del país, LG/DO 41,188 (31 de agosto de 1937); 41,189-190 (1-2 de septiembre de 1937); 42,154 (22 de julio de 1938); y 44,26 (31 de enero de 1940).

45. Nicaragua, Decreto legislativo de fiscalización y control de cuentas municipales y otras, LG/DO 39,171 (5 de agosto de 1935).

46. Nicaragua, Ley de fiscalización de las cuentas municipales y de otras juntas locales, LG/DO 41,189 (1 de septiembre de 1937).

47. Nicaragua, Reglamento para el funcionamiento de juntas locales y de la Contraloría General de Cuentas Locales, LG/DO 42,132 (23 de junio de 1938).

48. Nicaragua, Ministerio de Gobernación y Anexos, Anales del primer Congreso de Municipalidades de Nicaragua, pp. 9-10, 26-34, 117-129.

49. Nicaragua, Ministerio de Gobernación y Anexos, Programa del segundo Congreso de Municipalidades de Nicaragua. Puede también consultarse la caja 199, folder “Ministerio de Gobernación”, AN.

50. El ferrocarril fue nacionalizado en abril de 1937; para entonces, el gobierno de Nicaragua era propietario de todas sus acciones y su junta directiva ya funcionaba en Managua. Nicaragua, Decreto de disolución de la corporación “Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua” incorporado bajo las leyes del estado de Maine, Estados Unidos de América, LG/DO 41,69 (6 de abril de 1937). Otra ley modificó su estructura interna, abolió la junta de directores y puso al frente de la empresa a un gerente general directamente bajo las órdenes del presidente de la República, quien se convirtió en el “Jefe Supremo” del ferrocarril. Nicaragua, Ley constitutiva de la empresa del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, LG/DO 44,238 (24 de octubre de 1940).

51. Los datos del censo de 1940 han sido tomados de Valle Martínez, “Desarrollo económico y político,” p. 58. El censo de 1940 es un misterio. Es citado con frecuencia en estudios demográficos y económicos pero un ejemplar del censo, propiamente, no se pudo conseguir (si es que existe). La población económicamente activa de Nicaragua de acuerdo al censo de 1940 fue de 331,161, de los cuales 257,963 estaban dedicados a las faenas agrícolas, lo que deja un total de 73,198 personas empleadas en las zonas urbanas. Esta última cifra es la que se divide por 11,941, el total de empleados por el gobierno según Valle Martínez (p. 58). Las cifras de la población económicamente activa son del censo de 1940 tal como aparecen citadas en U.S. Department of Commerce, *Country Economic Reviews*, “Nicaragua,” vol. 3 (agosto de 1946): 9.

52. José del Carmen Flores a ASG, Managua, 23 de marzo de 1940, caja 312, AN.

53. Armando Rodríguez O. al Sub-Secretario de Gobernación, Managua, 19 de agosto de 1942, caja 199, folder “Ministerio de Gobernación,” AN.

54. Mayor Francisco Gaitán a ASG, Masaya, 25 de mayo de 1946, caja 312, AN.

55. Nicaragua, Decreto ejecutivo elevando sueldos de empleados públicos, LG/DO 42,33 (11 de febrero de 1938).

56. Durante la década de 1930, especialmente, la gente buscaba ayuda del gobierno (los llamados “remiendos”) para resolver sus problemas personales, fortaleciendo así la clientela burocrática del partido en el poder. Entrevista del autor con Enrique Espinoza Sotomayor, Managua, 11 de marzo de 1985.

57. LG/DO 40,182; 40,197; y 40,219 (21 de agosto, 8 de septiembre y 6 de octubre de 1936).

58. LG/DO 42,244 (10 de noviembre de 1938); 43,9 (12 de enero de 1939).

59. Nicaragua, Decreto convocando a elección para Asamblea Constituyente, LG/DO 42,176 (18 de agosto de 1938).

60. Nicaragua, Decreto presidencial creando Comisión Técnica que elaborará un anteproyecto de Constitución, LG/DO 42,195 (9 de septiembre de 1938).

61. Nicaragua, Decreto estableciendo la modalidad para elección de Asamblea Constituyente, LG/DO 42,195 (90 de septiembre de 1938).

62. *La Prensa*, 15 de octubre de 1938.

63. El análisis en éste y los siguientes dos párrafos se basa fundamentalmente en Nicaragua, Constitución Política de 1939, LG/DO 43,68 (23 de marzo de 1939), artículos 63-70, 100-104, 128-130, 220, 303-306, 326 y 335. Somoza ya había anticipado algunas de las disposiciones sobre bienestar social en la nueva constitución cuando se dirigió a la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 1938. Dijo en esa oportunidad que la constitución incluiría “aquellos asuntos relacionados con nuestras formas de producción y distribución de la riqueza, que aunque en nuestro ambiente no han creado todavía problemas de carácter grave, estimo de urgencia prevenirlos, mediante una adecuada protección al trabajo y al capital, basada en principios de justicia social que propugnan porque la más estrecha cooperación y solidaridad sean la norma que rija las relaciones entre el Capital y el Trabajo”, Nicaragua, Presidencia de la República, Mensaje del Excmo. Señor Presidente de la República, General Anastasio Somoza, en el acto de inauguración de las sesiones de la Honorable Asamblea Nacional Constituyente el 15 de diciembre de 1938, p. 9.

64. Nicaragua, Presidencia de la República, Discursos cruzados entre el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Dr. Roberto González, y el Excmo. Señor Presidente de la República, General de División A. Somoza, en el solemne momento de recibir de nuevo la alta investidura de Presidente de la República para el período constitucional comprendido entre el 30 de abril de 1939 y el 1 de mayo de 1947.

65. *La Prensa*, 16 de febrero, 21 de julio, 8 de agosto de 1937.

66. Caja 81, folder “mayo de 1937,” AN.

67. Caja 115, folder “jefatura política de Masaya,” AN.

68. *La Prensa*, 30 de junio de 1939.

69. Caja 116, AN.

70. Los discursos aquí citados se encuentran en las cajas 204 y 212, folder “manifestaciones públicas,” AN. Varios volantes que se tiraron para este evento se encuentran en caja 183, AN.

71. Caja 227, AN.

72. El 7 de noviembre de 1940 se llevó a cabo una concentración frente a la legación de Estados Unidos en respaldo a la ayuda que el gobierno de Roosevelt estaba enviando a Inglaterra. Somoza, quien se encontraba reunido con el embajador, salió a un balcón para dirigirse a la muchedumbre. Hizo referencia a la fuerte amistad entre Nicaragua y Estados Unidos y felicitó a Roosevelt por su tercera reelección, un tema que sacaría a relucir con mayor frecuencia conforme maduraban sus propios planes reeleccionistas. *La Prensa*, 8 de noviembre de 1940.

73. Se pueden encontrar copias de estas actas en el AN: caja 235; caja 216; caja 228; caja 237, folders “jefatura política de Chontales” y “jefatura política de Boaco;” y caja 223. La caja 216 contiene una lista de fechas y lugares de “asambleas populares” que se habían realizado hasta el 23 de mayo de 1943; suman un total de cincuenta y tres.

74. Caja 78, folders “agosto” y “diciembre de 1937,” AN. De manera especial, puede verse la carta de Felipe T. Flores, “General de Brigada y Comandante Departamental de la Liga Militar Liberal de León,” a ASG, León, 3 de diciembre de 1937, caja 78, folder “diciembre de 1937,” AN. Ver también caja 133, folder “Partido Liberal,” y caja 200, folder “Liga Militar Liberal de Nicaragua,” AN.

75. Puede verse la caja 265, AN, que contiene documentos de identificación entregados a un Santiago Morazán en Managua el 19 de octubre de 1937.

76. *Partido Liberal Nacionalista, Declaración de principios*, pp. 27-30.

77. Ibid., pp. 40-45. De acuerdo a la Ley Electoral de 1923, estos cuerpos partidistas se llamarían Junta Directiva Nacional y Legal (JDNL), Junta Directiva Departamental y Legal (JDDL) y Consejo Locales. Esta terminología se aplicaría a todo partido político en Nicaragua.

78. Ibid., pp. 45-47, 49.

79. Ibid., pp. 52-54. De acuerdo a los estatutos, “todas las cuestiones de importancia trascendental para el conglomerado o que tengan relación con los poderes públicos serán sometidos a su elevado consejo”.

80. Si bien los registros contables del PLN anteriores a 1944 no son muy abundantes, los documentos a mano indican que los fondos que se recibían de las contribuciones de los empleados públicos se empleaban principalmente para costear los gastos de las oficinas centrales del partido en Managua, mientras que cantidades más pequeñas se distribuían entre individuos y grupos que respaldaban al PLN (periodistas, estudiantes, los Conservadores Nacionalistas). Ver cartas del Ministro de Hacienda al Banco Nacional autorizando pagos a cargo de la cuenta “Fondo Especial - 5% Empleados Públicos,” caja 112, AN.

81. El volante del general Chamorro, fechado el 25 de junio de 1938, refleja la inconsistencia política e ideológica del caudillo. Atacó a Somoza por haber asesinado a Sandino “con premeditación, alevosía y ventaja, perpetrando el más horrendo crimen en el más audaz y heroico de los guerrilleros de nuestros tiempos,” cuando los conservadores se pronunciaron en 1934 a favor de una amnistía para

los implicados en el hecho. Concluyó su escrito con un llamado a “todos los pueblos de Indoamérica”, tal como decía Sandino, para que censuraran al tirano nicaragüense; de manera particular, hizo un llamado al pueblo mexicano, cuyo presidente, Lázaro Cárdenas, recién había proclamado la independencia económica de México, cuando Chamorro jamás se había preocupado mayor cosa por la soberanía de Nicaragua. Caja 100, AN.

82. *La Prensa*, 14 y 24 de septiembre de 1938. Según el acuerdo entre los dos partidos, de los dieciocho diputados que le correspondían a la oposición, once serían conservadores nacionalistas y siete conservadores “genuinos.” *La Prensa*, 5 de octubre de 1938.

83. *La Prensa*, 9 de octubre de 1938.

84. *La Prensa*, 12 de enero y 23 de marzo de 1939.

85. *La Prensa*, 1 de abril de 1939.

86. José Coronel Urtecho, Carta política del señor José Coronel Urtecho al general Emiliano Chamorro; la cita es de LG/DO 44,227. Coronel Urtecho argumentó de que ya era tiempo para que Nicaragua se adentrara en un largo período de paz y reconstrucción bajo una “jefatura nacional”. Creía que las elecciones, los parlamentos y los partidos políticos eran innecesarios para el futuro del país.

87. LG/DO 44,227-231 (10-16 de octubre); 44, 268-282 (3-19 de diciembre); y 44,284 (21 de diciembre de 1940). Ambos José Coronel Urtecho y Pablo Antonio Cuadra tuvieron una presencia destacada en la vida política e intelectual de Nicaragua durante la década revolucionaria de 1980. Cuadra dirigió el periódico *La Prensa*, de clara línea antisandinista, mientras que Coronel Urtecho se expresó a favor del Frente Sandinista.

88. Gould, “The Nicaraguan Labor Movement,” pp. 4-5.

89. Caja 67, folder “varios,” AN.

90. LG/DO 41,56 (12 de marzo de 1937).

91. Nicaragua, Ley sobre construcción y adquisición de la vivienda obrera y sobre préstamos para edificaciones, LG/DO 41,205 (22 de septiembre de 1937).

92. Nicaragua, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Memoria* de 1940-41, pp. XX-XXI.

93. Caja 113, AN.

94. Nicaragua, Estatutos para la administración de la "Casa del Obrero de Managua," LG/DO 44,13 (16 de enero de 1940).

95. Caja 235, AN.

96. Nicaragua, Ley sobre seguridad industrial, LG/DO 44,139 (24 de junio de 1940).

97. LG/DO 44,163 y 44,191 (25 de julio y 28 de agosto de 1940).

98. Nicaragua, Decreto de descanso semanal obligatorio, LG/DO 44,202 (10 de septiembre de 1940), y Reglamento del descanso semanal obligatorio, LG/DO 44,267 (3 de diciembre de 1940).

99. Gould, "The Nicaraguan Labor Movement," pp. 9-10.

100. Caja 95, AN. El documento no tiene fecha pero se ubica entre junio y agosto de 1938. La reunión de Somoza con la dirigencia del PTN fue el 10 de junio de 1938. *La Prensa*, 11 de junio de 1938.

101. Citado en Pérez Bermúdez y Guevara López, *El movimiento obrero en Nicaragua*, p. 127.

102. Ibid., pp. 142-143, 146-151 y 162-166.

103. Empleados del Taller del Ferrocarril del Pacífico a Manuel Parajón, gerente general del Ferrocarril, Managua, 5 de sep-

tiembre de 1939, caja 102, AN. Un total de 135 trabajadores firmaron la petición.

104. Antenor Serrano, secretario general del Sindicato Industrial de Zapateros, a ASG, Managua, 8 de agosto de 1939, caja 116, AN.

105. Pérez Bermúdez y Guevara López, *El movimiento obrero en Nicaragua*, fascículo 5, pp. 17-33, y fascículo 6, pp. 5-13 y 16-18.

106. Gould, "The Nicaraguan Labor Movement," pp. 10-11. En ese momento, el movimiento obrero mexicano se mostró inequívocamente a favor de una colaboración entre el PTN y Somoza, especialmente en lo referente a la reforma constitucional y la formación de un movimiento popular de amplia base. María López Pérez de F. a Carlos Pérez Bermúdez, México, D.F., 15 de octubre de 1938, caja 104, AN.

107. Las citas de este y el siguiente párrafo son de *Boletín*, no. 43 (febrero de 1939): 1, 3-7.

108. *Mercurio*, no. 121-124 (mayo-agosto de 1939), y no. 132-135 (abril-junio de 1940); *Boletín*, no. 50 (septiembre de 1939), no. 53 (diciembre de 1939), no. 67 (febrero de 1941) y no. 79 (febrero de 1942). El número total de empresas afiliadas a una gremial no era muy grande. En 1937, la Cámara de Comercio de Managua tenía un total de 66 socios; hacia 1941 la cifra había aumentado a 102 y en 1943 a 169. De los socios en 1941, 69 se dedicaban a la importación-exportación, 5 a la banca y 3 a la exportación de café; el resto cubría una gama de servicios y manufactura. Sin embargo, la influencia de la Cámara de Comercio de Managua era expresión de sus socios más importantes, tanto nacionales como extranjeros: Pan American Airways, West India Oil Company (una subsidiaria de Standard Oil of New Jersey), Bragmann's Bluff Lumber Company (una subsidiaria de Standard Fruit Co.), Grace and Company, Nicaragua Sugar Estates (Limited), Pellas y Compañía, y Ferrocarril del Pacífico de Ni-

caragua. La Cámara de Comercio de León tenía 114 socios en 1943 pero el número bajó a 92 en 1945; además, ninguno de sus socios tenía el nivel de presencia de las firmas importantes asociadas a la Cámara de Comercio de Managua. Véase *Boletín*, no. 23 (junio de 1937), no. 71 (junio de 1941), y no. 114 (febrero de 1945). También consúltase *Mercurio*, no. 141 (diciembre de 1943) y no. 142 (enero de 1946).

109. José Frixione a J. Ramón Sevilla, Managua, 10 de enero de 1940, caja 143, AN.

110. Nicaragua, Decreto trasladando funciones de la Asociación Nacional de Ganaderos al Ministerio de Agricultura y Trabajo, LG/DO 44,98 (4 de mayo de 1940).

111. Silvio Pellas a ASG, Granada, 26 de enero de 1939; y ASG a Pellas, Managua, 31 de enero de 1939, caja 113, AN.

112. H.D. Scott a ASG, Puerto Cabezas, 4 de febrero de 1939, caja 114, AN.

113. Frank Cameron a ASG, Siuna, 20 de septiembre de 1939, caja 111, AN.

114. Nicaragua, Decreto ejecutivo de bloqueo de propiedades y valores de nacionales de Alemania, Italia y Japón, LG/DO 45,275 (18 de diciembre de 1941).

115. Nicaragua, Decreto interviniendo fincas de café y comercios de extranjeros en cuanto a comercialización se refiere, LG/DO 45,275 (18 de diciembre de 1941).

116. Nicaragua, Reglamento de firmas o personas afectadas por el decreto de propiedades de extranjeros bloqueados, LG/DO 46,38 (20 de febrero de 1942); y Decreto prohibiendo a extranjeros de países en guerra disponer de sus propiedades, LG/DO 47,32 (16 de febrero de 1943).

117. Nicaragua, Ley sobre bienes pertenecientes a nacionales de países en guerra con Nicaragua que deben custodiarse, LG/DO 47,190 (8 de septiembre de 1943).

118. Nicaragua, Contrato de construcción del aeropuerto Las Mercedes, LG/DO 46,19 (28 de enero de 1942); y Autorización para que el gobierno compre al Banco Nacional los terrenos del aeropuerto Las Mercedes, LG/DO 46,214 (6 de octubre de 1942). La información sobre la planta de cemento se encuentra en “Contrato para construir fábrica de cemento,” LG/DO 44,204 (12 de septiembre de 1940) y en varias cartas en el Fondo Salvadora de Somoza, no. 12, AN. La información sobre la compañía de seguros se encuentra en una carta, con fecha 6 de febrero de 1943, que envió la empresa a uno de sus clientes. Caja 216, AN. El presidente de la aseguradora era José Benito Ramírez, secretario privado de Somoza; el secretario era Guillermo Sevilla Sacasa, yerno de Somoza y embajador en Washington; el tesorero era Rafael A. Huezo, gerente general del Banco Nacional; y uno de los directivos era Luis Manuel Debayle, el director general de sanidad, jefe del cuerpo médico de la Guardia Nacional y cuñado de Somoza.

119. Nicaragua, Secretaría de Agricultura y Trabajo, Memorias de 1940-1944. La única actividad en la cual no competía Somoza era la cría de gallinas.

120. C. Carleton Semple, gerente general de Compañía Minas Matagalpa, a ASG, Matagalpa, 25 de agosto de 1943 y 20 de enero de 1944, Fondo Salvadora de Somoza, no. 8, AN. También puede consultarse a Krehm, *Democracias y tiranías en el Caribe*, p. 175; los datos que proporciona Krehm se basan en una contribución a Somoza de US\$17 por kilo de oro producido más otra cantidad equivalente al 2.25% del valor de la producción total.

121. Caja 114, AN. Este borrador de contrato con Safié no tiene fecha pero se encontró en una caja que contenía documentos de 1939.

122. Caja 183, folder “órdenes y pedidos para haciendas del señor Presidente,” AN. En la caja 167, folder “misceláneas,” AN,

hay documentos de los administradores de las fincas de café de Somoza en que solicitan gasolina y otros insumos que serán recogidos por camiones conducidos por sargentos y cabos de la Guardia Nacional. Para conocer las actividades de negocios de los diplomáticos nicaragüenses, véase, por ejemplo, N.A. Portocarrero, consul general en Nueva York, a ASG, Nueva York, 6 de marzo de 1941, caja 166, AN. Portocarrero informaba a Somoza de los contactos que había logrado para vender una variedad de productos nicaragüenses, especialmente artículos de cuero.

123. Rafael Córdova Rivas, Eduardo Pérez Valle y Octavio Caldera, entrevista con el autor, Managua, 26 de junio de 1984.

124. *La Prensa*, 25 de febrero de 1940; Fondo Salvadora de Somoza no. 6, AN; Nicaragua, Decreto de confinamiento, LG/DO 44,57 (8 de marzo de 1940)..

125. Córdova Rivas, Pérez Valle y Caldera, entrevista con el autor, Managua, 26 de junio de 1984.

126. Una asociación estudiantil a nivel de colegios con vínculos al partido Liberal, la Unión Nacional de Estudiantes, se organizó en octubre de 1936. Lacayo, *590 días de acción estudiantil*, pp. 6-9. A nivel universitario existió el Frente Universitario de Acción Liberal, que proporcionaba asistencia médica y legal a los indigentes. José M. Zelaya a ASG, Managua, 20 de julio de 1943, caja 228, AN.

127. *La Prensa*, 15 de junio de 1940.

128. Nicaragua, Ley Marcial o de orden público, LG/DO 43,75 (12 de abril de 1939).

129. Nicaragua, Ley de defensa de la democracia, LG/DO 45,138 (30 de junio de 1941).

130. Nicaragua, Ley de aplicación de la Ley Marcial, LG/DO 45,267 (9 de diciembre de 1941).

131. Gustavo Manzanares al capitán Ambrosio Parodi, Managua, 23 de junio de 1943; Parodi a Leonardo Argüello, Managua, 24 de junio de 1943; y Parodi a Manzanares, Managua, 25 de junio de 1943, en caja 218, AN.

132. Teniente Domingo Ibarra a ASG, Granada, 6 y 23 de enero, y 8 de marzo de 1940, caja 127, folder “jefatura política de Granada,” AN. Ibarra fue despedido eventualmente, aparentemente por su excesivo celo de perseguir a los conservadores.

133. A.P. a la Guardia Nacional, Managua, 20 de mayo de 1939, caja 116, AN.

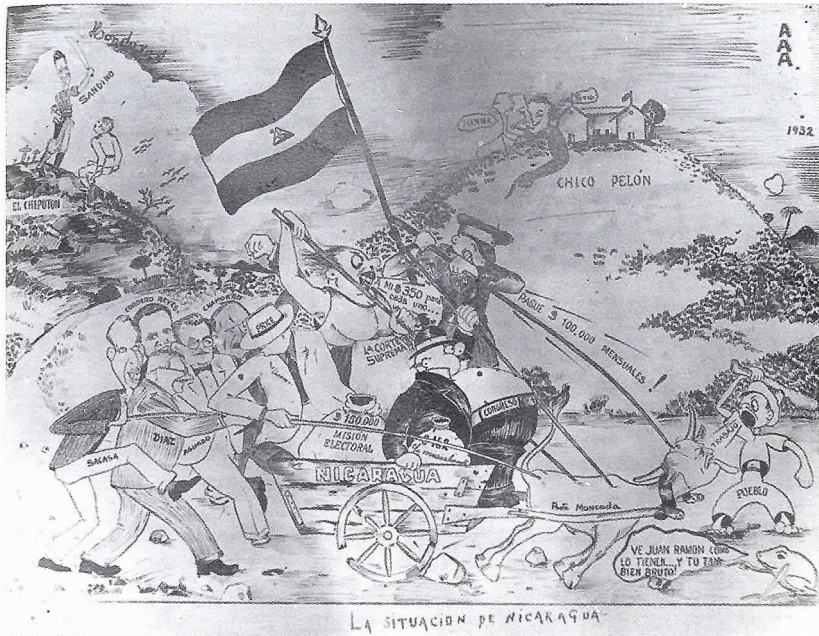
134. Caja 116, AN. Los informes al Ministerio de Gobernación debían contener información recabada por los jueces de mesta sobre faltas menores, homicidios, alambiques clandestinos y asistencia a las escuelas, lo mismo que “reuniones sociales y políticas.” Los informes que contiene la caja en cuestión corresponden mayormente al año de 1939.

135. Caja 104, AN.

136. Comité Revolucionario Nicaragüense, *Programa de acción*, pp. 4-6.

137. Ibid., pp. 7-24.

138. Nicaragua, *Constitución Política* de 1939, artículo 201.



Una caricatura del momento político de Nicaragua en 1932. El presidente José María Moncada es el buey, aguijoneado por una carretada de políticos y guardias nacionales quienes le exigen dinero mientras que el pueblo pide trabajo. A la izquierda, Sandino esgrime un machete desde su cuartel en las Segovias y, a la derecha, el embajador estadounidense Matthew Hanna conversa en su residencia. Anastasio Somoza todavía no se merecía un lugar en la caricatura; la Guardia Nacional todavía estaba bajo control americano. (Archivo Nacional de Nicaragua)



Manifestación de la campaña de 1936: Una manifestación somocista que se realizó en Somoto el 5 de enero de 1936. Los afiches que porta la muchedumbre mayormente campesina contienen mensajes vacuos: “El Gral. Somoza no será vencido nunca,” “Los enemigos del pueblo son los enemigos de la patria,” y “El General Somoza será el reformador.” (Archivo Nacional de Nicaragua)



Manifestación de la campaña de 1936: Una concentración somocista en la ciudad de Bluefields en la costa atlántica el día 1 de mayo de 1936. El afiche a la izquierda reza: “El pueblo te aclama, el ejército te respalda.” La foto fue enviada a Somoza por el capitán J. Adrián Somarriba de la Guardia Nacional quien evidentemente tuvo mucho que ver con el evento. (Archivo Nacional de Nicaragua.)



Recibimiento en Matagalpa: El general Somoza es recibido en Matagalpa en 1940 por una muchedumbre, incluyendo buen número de campesinos llegados a la ciudad para el evento. (Archivo Nacional de Nicaragua)



En campaña 1936 con bandera de USA (lugar indefinido): Somoza hace campaña portando la bandera de Estados Unidos. Los recuerdos de la ocupación estadounidense deben haber estado muy presentes en las mentes de muchos nicaragüenses pero Somoza, descrito por algunos como “el último infante de marina”, no tuvo resquemores por expresar sus verdaderos sentimientos. (Archivo Nacional de Nicaragua)

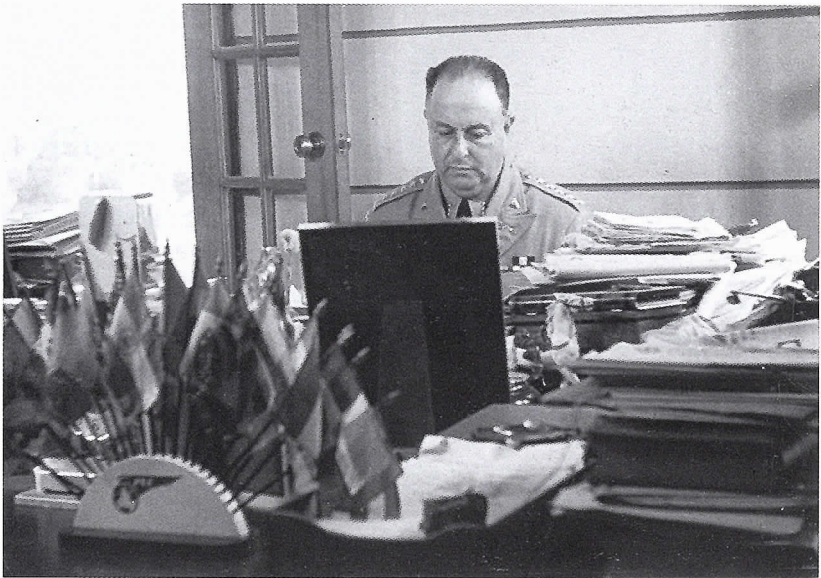


Recibimiento en Washington (1939): Somoza visitó Washington en 1939, donde fue recibido con honores plenos por el presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt, quien no podía caminar, es sostenido por Somoza y un edecán. Atrás se encuentran las esposas de los presidentes, Eleanor Roosevelt y Salvadora Somoza. (Instituto de Historia de Nicaragua)

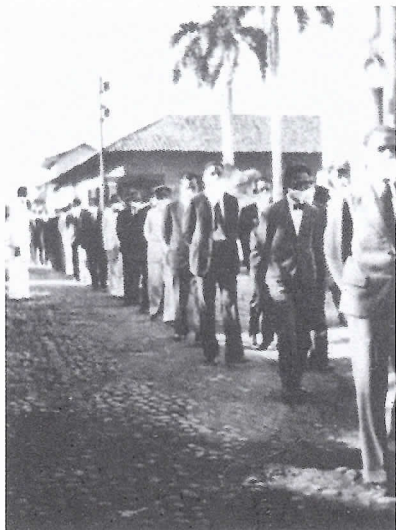


Manifestación anti-eje: Esta manifestación callejera en celebración de la victoria aliada coloca a Somoza a la par del presidente Franklin Roosevelt. Esta tiene que haber sido una de las muy pocas veces que la hoz y el martillo se exhibían públicamente en la Nicaragua somocista. (Instituto de Historia de Nicaragua)

Afiche anti-somocista (1948): “Un afiche antisomocista elaborado en 1948 para conmemorar el decimocuarto aniversario de la muerte de Sandino. Califica al “pirata Somoza” como “el verdugo del pueblo nicara-güense.” A la izquierda se listan sus negocios particulares, incluyendo ferrocarriles, vapores, azúcar, algodón, ganado, maderas, minas de oro, juegos ilícitos, aguardiente y prostitución. A la derecha, su sistema político: prisiones, asesinatos, torturas, sobornos, destierros y ley fuga (fusilamientos sumarios). (Archivo Nacional de Nicaragua)



Somoza en su escritorio: El empresario-político en su despacho a mediados de la década de 1940. Somoza administraba sus negocios y el país de manera simultánea, al grado que no era fácil separarlos. (Instituto de Historia de Nicaragua)



Manifestación estudiantil (León): Los estudiantes de la universidad en León protestan contra las leyes mordaza durante las movilizaciones de junio y julio de 1944. (Instituto de Historia de Nicaragua).



Somoza y Argüello: Somoza traspasó la presidencia a Leonardo Argüello en abril de 1947. Sin embargo, el poder real permaneció mayormente en manos de Somoza y la Guardia Nacional, como se evidenció durante el derrocamiento de Argüello a menos de un mes de asumir el cargo. (Instituto de Historia de Nicaragua)



Pacto Somoza-Cuadra Pasos (1948): Los principales políticos de los partidos “tradicionales” (también llamadas “las paralelas históricas”) se reúnen en 1948 para firmar un pacto de entendimiento. Somoza, de uniforme, rubrica el acuerdo que le permitirá a los Conservadores “civilistas” participar en unas elecciones cuyo resultado estaba determinado de antemano. Carlos Cuadra Pasos observa junto con el presidente Román y Reyes, vestido de blanco. (Instituto de Historia de Nicaragua).



Somoza rodeado por la tropa (1948): Somoza y su esposa, Salvadora, rodeados por rasos del destacamento presidencial de la Guardia Nacional (agosto de 1948). Somoza se proyectaba entre la tropa como un padre, listo para escucharles y ayudarles. (Instituto de Historia de Nicaragua)



Somoza y los obreros (joyeros y mecánicos): Somoza recibe un diploma que le entregan los dirigentes de los sindicatos de mecánicos y joyeros (circa 1950). (Archivo Nacional de Nicaragua).



Exiliados nicaragüenses se manifiestan en la ciudad de Guatemala inmediatamente después del fallido intento de derrocamiento de Somoza en abril de 1954. A los pocos días, ellos también serán acallados cuando el gobierno de Jacobo Arbenz cae frente a un golpe de Estado fraguado por Estados Unidos. (Archivo Nacional de Nicaragua)

CAPÍTULO IV

Crisis, reforma y represión

Anticipando el fin de su período presidencial, que concluía en 1947, Somoza empezó tres años antes – con la mayor naturalidad imaginable – a preparar las condiciones para reelegirse, confiado en el sólido respaldo de la Guardia Nacional, en su firme alianza con Estados Unidos frente a las potencias del Eje, y en el apoyo de una amplia coalición política dentro de Nicaragua. Al igual que en 1935 y 1936, grupos de liberales empezaron a reunirse “espontáneamente” para proclamar a Somoza como próximo candidato presidencial, suscribiendo documentos en los que se argumentaba la necesidad de prolongar su gobierno, en vista de sus grandes logros y de la seguridad que ofrecía al país ante los peligros de la Guerra Mundial.¹ En junio de 1944, Somoza declaró durante una conferencia de prensa que si bien personalmente se oponía a la reelección presidencial, tenía igual derecho que cualquier ciudadano para lanzarse como candidato.² Un par de meses antes, en abril, el Congreso había aprobado, por la acostumbrada amplia mayoría, una enmienda a la Constitución para permitir al presidente en funciones postularse a la reelección, si su período de gobierno original coincidía con un estado de guerra declarado de al menos dos años de duración.³ Tal enmienda, hecha a la medida de Somoza, dejó en claro que el presidente tenía todas las intenciones de mantenerse en el gobierno más allá del término de su mandato.

El deseo de Somoza de mantenerse en el poder estaba totalmente reñido con los procesos políticos en Centroamérica en ese momento. Después de casi quince años de dictadura militar, Guatemala y El Salvador estaban viviendo las primeras expresiones de oposición abierta a los regímenes de Ubico y Hernández Martínez, respectivamente. Consciente del auge de la oposición en Centroamérica, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a sus funcionarios diplomáticos en la región que debían mantener relaciones muy imparciales y discretas, tanto con los gobiernos como con los grupos opositores. De acuerdo al Secretario de Estado, esta postura era muy importante, pues “resulta casi inevitable que la oposición eventualmente llegará al poder en estos países”.⁴ En el caso de Nicaragua, la oposición había estado adormecida por largo tiempo, salvo unos pocos disidentes dentro del país y los pequeños grupos de exiliados que ocasionalmente se pronunciaban contra el régimen desde México y Costa Rica. Sin embargo, esta situación cambió repentinamente, y durante un período de dos semanas el régimen pareció al borde del colapso, ante una ola de protestas violentas.

A. La agitación de junio y julio de 1944

La causa inmediata de la disidencia política en 1944 fue el deseo de Somoza de perpetuarse en el poder. Existían grupos dentro del mismo Partido Liberal con ambiciones políticas propias; asimismo, otros grupos consideraban que los principios liberales estaban siendo conculcados por el continuismo de Somoza. Mientras el Congreso debatía la reforma del artículo constitucional que prohibía la reelección presidencial, algunos prominentes liberales exteriorizaron su oposición y fueron encarcelados de inmediato en León y Managua. El diputado liberal, Adolfo Altamirano Brown, presentó una moción en la Cámara de Diputados para que se solicitara a Somoza ponerlos en libertad; dicha medida fue aprobada por unanimidad y recibió el visto bueno del presidente.⁵ Esta fue una de las primeras manifestaciones de disidencia dentro del Partido Liberal, y en ese momento Somoza procuró evitar una ruptura que pudiera conducir a una crisis política seria. Pero la actitud conciliatoria de Somoza hacia los miembros de su propio partido no se repitió en junio, cuando las calles de Managua se abarrotaron de manifestantes – un fenómeno

que no se había visto desde inicios de 1936, cuando Somoza estaba por tomar el poder.

El núcleo inicial de esta oposición urbana estaba formado por estudiantes universitarios. Su número no pudo haber sobrepasado los 600, pues éste era el total de estudiantes inscritos en el sistema universitario en ese momento, la mitad de los cuales estudiaban en el recinto de Managua y el resto en Granada o León.⁶ Durante una asamblea general de estudiantes realizada el 27 de junio de 1944, se acordó celebrar una manifestación ese mismo día, en apoyo a los esfuerzos del movimiento estudiantil guatemalteco por derrocar a la junta derechista que se había apoderado del gobierno de ese país, después del derrocamiento de Ubico. Durante la tarde, los estudiantes y otras personas que los apoyaban marcharon por las calles de Managua exigiendo democracia en Guatemala y Nicaragua. Los manifestantes llegaron a sumar unas 2,000 personas, antes de que la policía y la Guardia los dispersara al anochecer, mientras protestaban frente a la academia militar. Alrededor de 500 manifestantes fueron encarcelados y pasaron la noche en prisión. Algunos fueron liberados al día siguiente pero otros siguieron tras las rejas. El 29 de junio, un grupo de mujeres vestidas de luto marchó por las calles para pedir la libertad de los detenidos, pero una manifestación pro-somocista les salió al paso, obligándolas a dispersarse.⁷ Ese mismo día en León, alrededor de 150 estudiantes, profesionales y agricultores firmaron una carta dirigida a Somoza en la cual protestaban por el trato que habían recibido los manifestantes en Managua, pues en ningún momento habían representado una amenaza al orden público ni subvertido el esfuerzo bélico – más “formal” que real – de Nicaragua.⁸ Un grupo de dirigentes obreros también se reunió con Somoza para pedirle que dejase en libertad a unos 60 obreros apresados durante la manifestación.⁹

No resulta difícil determinar la naturaleza de las manifestaciones. Las consignas que se escucharon reflejaban una oposición fundamentalmente política al régimen. A partir de la movilización de los estudiantes, en su gran mayoría de extracción de clase media o alta, la protesta llamó la atención de un grupo de políticos conservadores y de liberales disidentes; algunos de éstos fueron apresados cuando se

manifestaban en las calles, mientras que otros exteriorizaron su protesta al renunciar a algún cargo público. La marcha de las mujeres vestidas de negro estaba conformada por las madres y las hermanas de los estudiantes detenidos, muchas de las cuales eran damas elegantes de las clases media y alta, que fueron dispersadas por una manifestación de somocistas, cuyos integrantes fueron descritos por *La Prensa* como verduleras y muchachos y muchachas de “mala conducta”, es decir, de las clases bajas.¹⁰ El trato dado a los manifestantes sugiere que Somoza conocía el tipo de opositor con el cual estaba lidiando. El 1 de julio, expresó durante una conferencia de prensa que los manifestantes que aún guardaban prisión serían trasladados a los tribunales civiles, aunque sus acciones frente a instalaciones militares ameritaban una corte marcial.¹¹ El día siguiente, Somoza personalmente supervisó el excarcelamiento de algunos estudiantes, pero antes de entregarlos a sus padres, los reprendió por criticar a su gobierno y no reconocer todo el esfuerzo que él había hecho a favor de la Universidad Central.¹²

Sin embargo, la respuesta relativamente moderada del gobierno ante la ola de protestas callejeras no resolvió el problema. El 3 de julio, la dirigencia del Partido Liberal se reunió para analizar la situación; un sector del mismo planteó que los tiempos de libertad y democracia habían llegado, y exigió a Somoza desistir de sus planes de reelección o que, incluso, renunciara de inmediato.¹³ Ese mismo día, el ministro de Educación, Gerónimo Ramírez Brown, uno de los más antiguos simpatizantes de Somoza, renunció a su cargo en protesta por la orden de Somoza de cerrar la Universidad Central.¹⁴ El 4 de julio, tanto somocistas como opositores decidieron aprovechar el aniversario de la Independencia de Estados Unidos para organizar manifestaciones callejeras y difundir sus consignas. Los somocistas, sin duda, procuraban llamar la atención a sus nexos íntimos con Estados Unidos; por su parte, la oposición esperaba aprovechar dicha efemérides, bajo la creencia de que sus expresiones públicas no serían acalladas durante una festividad en honor a la libertad.¹⁵

El 4 de julio, temprano por la mañana, miles de personas se congregaron alrededor de la embajada de Estados Unidos, la mayoría de las cuales parecía oponerse a Somoza. Carlos Pasos, un em-

presario liberal que se perfilaba como el principal opositor a Somoza dentro del partido, pronunció un encendido discurso ante una multitud de 20,000 personas. Poco después, un destacamento de cadetes de la Guardia Nacional que desfilaba frente a la embajada, fue abucheado por la gente. Igual ocurrió cuando Somoza intentó hablar desde una tarima que había mandado construir después de que el Departamento de Estado en Washington le negara el permiso para hablar desde uno de los balcones del edificio diplomático. Posteriormente, la muchedumbre procedió a manifestarse por las calles, pero después de avanzar unas pocas cuadras hasta la embajada mexicana fue disuelta por la Guardia. Alrededor de 500 manifestantes se resguardaron dentro de la propia embajada; después Somoza permitió que la mayoría de éstos se retirara a sus casas, con la excepción de veinte dirigentes que permanecieron en la embajada en calidad de refugiados.¹⁶

El 5 de julio, los propietarios de varios negocios amenazaron con cerrar en protesta por las capturas; una vez enterado de sus intenciones, el gobierno dispuso que la Junta de Control de Precios y Comercio – dirigida por el coronel estadounidense Irving A. Lindberg, recaudador general de aduanas – les advirtiera que todo negocio que cerrara sus puertas sería intervenido y liquidado, mientras que los comerciantes extranjeros serían expulsados del país.¹⁷ Los ganaderos de Boaco y Chontales también habían reducido sus envíos de carne a Managua, por lo que Somoza los acusó de subversión y ordenó a los jefes políticos amenazar a los ganaderos que sus reses les serían requisadas y transportadas a Managua por cuenta del gobierno.¹⁸ En suma, el movimiento que comenzó como una protesta estudiantil degeneró en una crisis dentro del Partido Liberal que amenazaba con desarticular la coalición somocista; asimismo, abrió las puertas para que los conservadores expresaran su oposición al presidente.

El 7 de julio, Somoza decidió mostrar alguna flexibilidad, y anunció el retiro de su candidatura presidencial para las siguientes elecciones. Aunque la enmienda constitucional que permitiría la reelección presidencial bajo circunstancias especiales gozaba del apoyo de la mayoría de los liberales – explicó Somoza – se hallaba cons-

ciente de que la insistencia en su promulgación podría ocasionar una ruptura dentro del partido, en beneficio de la oposición. Por tanto, estaba dispuesto a sacrificar su futuro político en aras de la unidad partidista y se proponía vetar la enmienda. Asimismo, aseguró que las elecciones presidenciales a realizarse en 1947 serían limpias y garantizó la libertad de prensa. Al referirse a los disturbios de los días anteriores, dijo que las acciones del gobierno no ameritaban semejante comportamiento; por tanto, habían obedecido exclusivamente al interés de algunas personas en subvertir el orden público. En todo caso, agregó, una vez superado el impasse político gracias a su veto de la enmienda constitucional, ya no existía razón alguna para continuar los disturbios; en consecuencia, las personas que insistieran en seguir creando problemas serían tratadas “con la rigidez que merece un crimen de lesa patria”.¹⁹

Conjugando concesiones y amenazas, Somoza logró superar, en buena medida, la crisis política enfrentada por su gobierno, cuyos últimos episodios se desarrollaron en los días siguientes. El 10 de julio, el ministro de Gobernación, Leonardo Argüello, renunció en protesta por la actitud autocrática adoptada por Somoza ante los disturbios, asegurando que el presidente jamás había tomado en cuenta la opinión de sus ministros o colaboradores cercanos para encontrar soluciones políticas y expeditas a la crisis. Alberto Reyes, alcalde de León, también renunció por razones similares.²⁰ Carlos Pasos, el líder liberal disidente, fue llevado de su refugio en la embajada mexicana a entrevistarse con Somoza, con miras a buscar una reconciliación entre los liberales; sin embargo, dicha reunión fue infructuosa debido a la desconfianza de los disidentes hacia Somoza.²¹ Mientras tanto, seguían las capturas en algunas partes del país, especialmente en Managua y León, donde se concentraba la mayor parte del estudiantado universitario. En Managua, la lista de estudiantes y de otros participantes en las manifestaciones que habían sido encarcelados sobrepasaba los noventa; muchos de ellos pertenecían a reconocidas familias liberales y conservadoras. En León, el número de manifestantes apresados era menor, pero la ciudad vivía bajo la sombra del temor y la desconfianza.²²

El 14 de julio, el primer grupo de liberales disidentes abandonó el país hacia el exilio en Costa Rica; entre ellos estaban Carlos

Pasos y Carlos Castro Wassmer, un caudillo liberal de la región de León. Otros quince disidentes fueron confinados en Corn Island, aunque según *La Prensa* casi setenta personas fueron enviadas a exilio interno en esa isla. El día 15 de julio, durante una conferencia de prensa, Somoza aseguró tener un completo control de la situación política. Destacó que ni una sola persona en toda Nicaragua había sido muerta durante los días de disturbios y prometió otorgar en los días siguientes una amnistía en beneficio de todos los exiliados, a fin de que pudieran volver a Nicaragua cuando las pasiones políticas se hubiesen enfriado un poco.²³ En efecto, tres semanas más tarde, envió un proyecto de ley de amnistía al Congreso y difundió un comunicado enfatizando que gracias a la solidez de su gobierno podía actuar con benevolencia y tolerancia frente a la crítica política, siempre que ésta se expresara a través de los canales legalmente establecidos.²⁴

B. Las fuerzas políticas durante la crisis

No sería correcto afirmar que el régimen somocista logró superar la crisis política tan sólo como resultado de su fortaleza, o de su actuación magnánima y conciliatoria frente a sus oponentes; su capacidad de sobrevivir también fue consecuencia directa de la debilidad de la oposición. Años más tarde, Somoza reconoció que estuvo a punto de renunciar y abandonar el país en julio de 1944, pero que pudo seguir en el poder gracias a las divisiones en el seno de la oposición.²⁵ De hecho, la oposición a Somoza y su régimen era muy heterogénea, pues el único elemento que le daba cohesión era el deseo de impedir la reelección de Somoza u otra forma de continuismo somocista.

Algunos de los más fuertes opositores a su reelección eran miembros del Partido Liberal, y eventualmente se desprendieron del mismo para formar el Partido Liberal Independiente (PLI). Los orígenes del PLI se remontan a 1937, cuando unos cuantos jóvenes universitarios liberales organizaron el llamado Grupo Democrático Nicaragüense. El Grupo se reunía para discutir – por lo general, en términos críticos – la naciente dictadura somocista, pero nunca se manifestó públicamente.²⁶ A comienzos de la década de 1940, el descontento dentro del Partido Liberal se intensificó, a medida que la

fortuna y las ambiciones políticas de Somoza se hacían más evidentes. Finalmente, el conflicto estalló abiertamente en enero de 1944 durante los funerales de Manuel Cordero Reyes, un liberal destacado quien había fungido como ministro de Relaciones Exteriores de Somoza hasta que renunció y se distanció del régimen. Durante el entierro, jóvenes liberales distribuyeron volantes denunciando al régimen de Somoza y convocando a los liberales a unirse en contra del “continuismo somocista”. Suscribieron dicho volante en su calidad de “Liberales Independientes”, término que pasó a convertirse en nombre del partido.²⁷

La ideología política del PLI se caracterizó por su acendrado antisomocismo. Acusaban a Somoza de violar los postulados liberales del buen gobierno y de establecer en Nicaragua un sistema de despotismo particularmente duro. En enero de 1944, apareció una crítica al régimen somocista desde la perspectiva de la disidencia liberal, suscrita por tres de sus líderes: Manuel Cordero Reyes, Carlos Castro Wassmer y Carlos Pasos. En general, acusaron a Somoza de violar las libertades políticas del pueblo, de aprovecharse de las instituciones financieras del Estado para su propio peculio, y destruir la independencia del sistema judicial. La crítica en torno a los aspectos económicos del somocismo se centró en las ventajas competitivas injustas de las empresas de Somoza, derivadas de su control sobre el aparato del Estado, y la coerción política ejercida a través de los bancos y las aduanas. Asimismo, criticaron el control de Somoza sobre el ferrocarril del Estado, situación que aprovechaba para transportar mercancías de su propiedad con un trato preferencial y para convertir el ferrocarril en un instrumento político: “El Ferrocarril es factor principal en el acaparamiento de los negocios del país, y al efecto, estorba, retarda o niega con fútiles pretextos el transporte de los productos cosechados o adquiridos por industriales, comerciantes o productores independientes, métodos que también se usan para ejercer presión política sobre la ciudadanía”.²⁸

El PLI mostró particular preocupación porque Somoza estaba “invadiendo” una gama muy diversa de actividades económicas; en ese momento, su fortuna total se estimaba en US\$10 millones, y sus utilidades anuales en US\$1 millón. Los disidentes liberales con-

cluían que era prácticamente imposible iniciar un negocio en Nicaragua sin la aprobación – por no decir la participación – de Somoza, a lo que agregaban el siguiente planteamiento: “Y lo peor de un régimen semejante es que mata toda iniciativa, relaja los esfuerzos en marcha, crea un espíritu derrotista y anquilosa el progreso de la nación. (...) Lo indicado constituye el carácter diferencial de la dictadura de Somoza con respecto a las demás de la América Latina, la mayoría de las cuales son de tipo exclusivamente político y algunas verdaderamente honestas y organizativas”.²⁹ En otras palabras, el problema no se reducía tan sólo a la existencia de una dictadura; sino al tipo específico de dictadura encarnado en el somocismo.

El PLI logró crecer y fortalecerse sobre todo en Managua, León, Masaya y las Segovias. De acuerdo a Enrique Espinoza Sotomayor, uno de los fundadores del PLI, entre más negocios tenía Somoza en una región determinada, afectaba a un número mayor de empresarios locales, que se sentían fácilmente atraídos por el PLI.³⁰ Sin duda, el PLI se consideraba el repositorio de la ideología liberal genuina – en contraposición a la versión somocista aberrante – pero la ideología no jugó un papel importante en su crítica del somocismo. En algunas ocasiones, los escritos del PLI hacían referencia a “el pueblo hambriento” y a “la miseria de la gente”, pero con más frecuencia el objeto de sus críticas era la figura de Somoza: “¿Ese ladrón? ¿Ese caco moderno, ese Al Capone sin valor es vuestro presidente? ¿Vais a seguir consintiendo semejante villanía?”³¹

En realidad, el PLI no propugnaba por cambios de envergadura en la sociedad o la economía nicaragüense. Tal como manifestó en un comunicado, emitido en julio de 1944, el propósito del PLI era obligar a Somoza a renunciar, para acabar con el continuismo y garantizar las libertades públicas.³² El PLI se presentó, por lo tanto, como un partido de las clases medias, similar al arevalismo en Guatemala o el figuerismo (más tarde) en Costa Rica, comprometido con la modernización del Estado mediante el fortalecimiento de sus instituciones políticas y la promoción del desarrollo del capitalismo bajo líneas más humanas y socialmente comprometidas.³³

El Partido Conservador jugó un papel mucho más limitado durante la crisis de 1944. A raíz de las manifestaciones en Managua,

algunos estudiantes de familias conservadoras prominentes fueron encarcelados, tales como Pedro Joaquín Chamorro, quien se convertiría en el director de *La Prensa*, y Fernando Agüero, futuro líder del Partido Conservador después de la muerte del caudillo Chamorro, a mediados de la década de 1960. El diputado conservador Octavio Pasos Montiel también fue encarcelado, pese a su inmunidad parlamentaria.³⁴ Tal como se deduce de la agenda de una reunión de conservadores notables, la posición oficial del partido era responsabilizar al gobierno y al Partido Liberal por los acontecimientos pasados, por lo que les correspondía encontrar una solución a la crisis política; mientras tanto, los conservadores se mantendrían al margen, sin aprovecharse de la situación para sus propios fines políticos. Más bien, hicieron un llamado para encontrar una solución democrática y política, pero sin especificar en mayor detalle a qué se referían concretamente.³⁵ En parte, la pasividad de los conservadores se debía a la ausencia del exiliado Emiliano Chamorro; de haber estado en Managua, es casi seguro que hubiese intentado un golpe de estado en contra de Somoza.³⁶ Por el contrario, la posición de los conservadores fue reflejo de la actitud de los grupos más conciliadores del partido, incluyendo a los civilistas liderados por Carlos Cuadra Pasos, y los conservadores somocistas encabezados por José Coronel Urtecho. Por tanto, en esencia, Somoza enfrentó una rebelión dentro de su propio partido.

Un elemento clave que permitió a Somoza resolver la crisis fue la decisión del movimiento obrero de no inmiscuirse en la pugna política; incluso, en algunos casos, ofrecieron apoyo al régimen. Desde finales de 1943, Somoza ya había tomado la iniciativa de buscar una relación más amistosa con varios dirigentes obreros. A comienzos de 1944, el Partido Socialista de Nicaragua (PSN) salió de la clandestinidad y comenzó a organizar actividades proselitistas. En abril del mismo año, Somoza públicamente pidió disculpas a los dirigentes del PSN por haberlos encarcelado, e incluso ofreció presidir un congreso de obreros y campesinos que uniría a las dos facciones del movimiento obrero.³⁷

En efecto, el 26 de mayo de 1944 Somoza inauguró el Congreso Obrero en Managua, con un discurso en el que hizo un recuen-

to de la política de su gobierno a favor de las relaciones armoniosos entre el trabajo y el capital, además de las medidas impulsadas para generar empleo y controlar los precios de los productos de primera necesidad. Asimismo, informó que el gobierno se hallaba estudiando un anteproyecto de código de trabajo que pronto sería enviado al Congreso para su aprobación. En un futuro próximo, propondría una serie de medidas de seguridad social en apoyo a los enfermos, los jubilados y los desempleados. El gobierno también apoyaría la formación de cooperativas obreras. Concluyó su discurso con una declaración lírica sobre su posición ante la clase obrera: “He querido llevar esperanza y fe en el mañana a los campesinos de piel curtida que se curvan de sol a sol en el dolor fecundo de la siembra, y a los obreros que en las fábricas y en los talleres, lo mismo que en las noches sin estrellas de las minas, amasan con sudor y sangre generosos la riqueza nacional. Esperanza y fe en un porvenir con pleno acceso al pan, a la risa y al canto”.³⁸

El discurso de Somoza fue contestado por el dirigente sindical Absalón González, un somocista a ultranza, quien fue electo presidente del congreso con miras a ofrecer un semblante de unidad entre las varias facciones sindicales. Somoza era el primer presidente en la historia independiente de Nicaragua – aseguró González – que había mostrado algún interés por la clase obrera y cumplido fielmente con sus promesas a los trabajadores. Solicitó al gobierno la promulgación de un código de trabajo de “inspiración cristiana”, y pidió a todos los presentes respaldar dicho proyecto para lograr su aprobación en la legislatura. Aunque el Congreso Obrero no apoyó las pretensiones reeleccionistas de Somoza, sí le dio un voto de confianza por sumarse a la coalición antifascista con las potencias aliadas, y por permitir a los obreros organizarse y expresarse libremente.³⁹ De hecho, la mayoría de los doscientos delegados al congreso pertenecían a facciones del movimiento obrero identificadas con la izquierda marxista, pero prácticamente se vieron obligados a apoyar al régimen somocista debido a la oposición de los conservadores y empresarios a la promulgación de un código de trabajo.⁴⁰

Las manifestaciones antisomocistas y la represión desatada por el régimen durante los meses de junio y julio de 1944, significaron

una prueba de fuego para los obreros, pues los obligó a definir su posición política. En Managua, varios sindicatos obreros firmaron un volante titulado “Formal llamamiento a los trabajadores”, en el cual condenaban el llamado de la oposición a una huelga general. En dicho volante, se justificaban las huelgas convocadas y dirigidas por la clase obrera como una acción legítima; sin embargo, sólo generaban hambre y miseria para la clase trabajadora cuando obedecían a otros intereses. En este caso – afirmaban – el llamado a la huelga provenía de “los de arriba, de nuestros explotadores más reaccionarios y peligrosos”. Por ende, sólo podía considerarse legítima una huelga que respondiese a las necesidades más importantes e inmediatas de la clase obrera. Finalmente, el volante llamaba a los trabajadores a mantener la tranquilidad, para poder seguir organizando y fortaleciendo sus sindicatos en un clima de “paz democrática y normalidad constitucional”.⁴¹ Obviamente, tal postura favorecía al régimen.

De manera simultánea, el Comité Organizador de la Confederación de Trabajadores de Nicaragua, dentro del cual se hallaban representadas ambas tendencias del movimiento obrero, emitió un volante explicando su posición frente a los disturbios. Por una parte, felicitaron a los estudiantes nicaragüenses por respaldar la legítima lucha de sus homólogos guatemaltecos contra la tiranía en aquel país. Sin embargo, por otra parte, argumentaron que los estudiantes nicaragüenses habían sido manipulados por grupos liberales disidentes, conservadores y “tipos nazi-fascistas”, cuyo único objetivo era apoderarse del gobierno y adueñarse del presupuesto nacional. Por tanto, lo que había empezado como una simple expresión de solidaridad estudiantil, se había convertido en una provocación peligrosa. Si en realidad deseaban contribuir al bienestar del país – advirtió el Comité a los estudiantes – primero debían rechazar todas las intrigas políticas y unirse al movimiento obrero, a fin de lograr una “paz democrática”, pues ésta era una condición necesaria para asegurar el bienestar y el progreso de la nación. De lo contrario, Nicaragua caería en la “descomposición social”, promovida por políticos ambiciosos quienes buscaban su propio provecho personal “en aquellos momentos cuando el pueblo equivocadamente les apoya”.⁴² Aunque el Comité Or-

ganizador evitó en todo momento exaltar a Somoza como un líder nacional u ofrecerle su respaldo, tácitamente dio un voto de confianza a Somoza al negarse a apoyar a la oposición.

El Partido Socialista de Nicaragua, que representaba el ala izquierda del espectro político, también hizo pública su posición frente al régimen. En un extenso comunicado, firmado por varios dirigentes sindicales que también pertenecían al Comité Organizador, el PSN describió el sistema de partidos de Nicaragua como un pequeño grupo de líderes que tomaban decisiones a nombre de muchos obreros y del pueblo en general, en ausencia de una organización política verdaderamente representativa de la clase obrera. El PSN anunció su decisión de llenar tal vacío, luchando por la justicia social bajo un programa de unidad nacional. De acuerdo al comunicado, el PSN estaba dispuesto a apoyar las políticas de bienestar social del régimen somocista, y a subordinar los intereses del propio partido en aras del interés nacional. Reconocieron haber cometido un error en el pasado, al insistir en su propia posición: “Adversábamos al gobierno del General Somoza, pero advertimos que no poseíamos una justa línea política y luego procedimos a justificarla. El General Somoza nos ha manifestado también que él está dispuesto a oír la voz de su pueblo... Tenemos fe en que el señor Presidente de la República sabrá entenderse con nuestro pueblo, porque EL SABE MUY BIEN QUE NINGUN GOBERNANTE DE LA TIERRA PODRA EXISTIR SI DESOYE LA VOLUNTAD POPULAR”. De manera más precisa, agregaron: “Tenga Ud. en cuenta, General Somoza, que si nuestro pueblo no participa en actividades contra el régimen que Ud. representa, Ud. podrá mantenerse tranquilo”. Por su parte, el PSN se comprometió a oponerse a todas las acciones que violentaran el orden público e hizo un llamado a todos los nicaragüenses a seguir su ejemplo.⁴³

Otras organizaciones obreras – sobre todo aquellas que se habían formado en torno a las casas del obrero – se pronunciaron a favor de Somoza en términos aún más contundentes. En un volante emitido por la Casa del Obrero de León se instó a los obreros a rechazar los llamados de la oposición, recordándoles que Somoza

había construido escuelas para la clase obrera, otorgado créditos a bajos intereses a los campesinos y prometido un código de trabajo.⁴⁴ Otro grupo hizo circular un volante titulado “Seis verdades sobre el Presidente Somoza” en el que se describía a la oposición en términos particularmente duros: “El grupo de políticos profesionales que actualmente combaten al Presidente Somoza son de linaje estrictamente burgués, inclusive, latifundista, industriales, negociantes, traidores y en fin, hombres que durante un decurso [sic] de años han gobernado al país organizados en castas aristocráticas explotadoras del pueblo”. Sin embargo, los autores del volante ofrecieron un apoyo más matizado al gobierno: “El pueblo nicaragüense no seguirá la tesis de botar a un Somoza para entronar a otro. Mientras no cuente con elementos sanos y preparados, capaces de darle la batalla a la reacción, estaremos al lado del Gral. Somoza”.⁴⁵

Además del apoyo tácito o declarado ofrecido por el movimiento obrero al régimen somocista, el Partido Liberal procuró la movilización de sus seguidores en diversas partes del país, instándolos a manifestar su respaldo a Somoza por medio de pronunciamientos escritos, o mediante el traslado de sus simpatizantes hacia los puntos de mayor tensión. Desde el departamento norteco de Jinotega, el Partido Liberal envió a Managua siete camiones repletos de somocistas dispuestos a apoyar la causa en caso necesario. Asimismo, organizaron una fuerza de auto-defensa, previendo la posibilidad de que los guardias destacados en Jinotega fuesen movilizados a otra región.⁴⁶ En Managua, la dirección del Partido Liberal emitió un comunicado llamando a los liberales a cerrar filas en torno al partido, para que pudiera presentarse a los siguientes comicios desde una posición de fuerza.⁴⁷ La Guardia Nacional, integrada sobre todo por liberales, se mostró muy preocupada por el desenlace de los acontecimientos de julio; tal como se revela en una carta remitida a Somoza por el teniente Alfonso J. Borgen desde el Ingenio San Antonio en Chindandega: “La Guardia Nacional casi está formada solo por liberales, y creo que todos mis compañeros ven, como lo veo yo, que si Ud. abandona la Presidencia, nuevamente y a continuación volveremos a sentir la bota verde del conservatismo, las cadenas y el látigo de los Chamorros”.⁴⁸

C. Las nuevas reglas del juego para los medios y los trabajadores

Aunque Somoza logró controlar la situación política en cuestión de semanas, la gravedad de la crisis le obligó a reconsiderar la composición de la coalición somocista. Se evidenció, en primer lugar, que el presidente no contaba con la total fidelidad del Partido Liberal; además, ciertos comerciantes y ganaderos habían manifestado su disgusto hacia el régimen al intentar cerrar sus establecimientos o limitar sus actividades. La Guardia se había mantenido firme y el movimiento obrero había dejado en claro sus preferencias políticas, aunque no de manera tan categórica como lo hubiera deseado Somoza. Los empleados públicos también se habían mantenido fieles, e incluso habían participado en las manifestaciones callejeras en apoyo al régimen.⁴⁹ Sin embargo, era necesario fortalecer la coalición somocista, esforzándose por unir a la familia liberal, estrechar los vínculos con la clase obrera y ampliar la clientela burocrática del gobierno.

Asimismo, era necesario definir con mayor precisión el papel de la oposición política y de las opiniones disidentes dentro del Estado nicaragüense, a fin de evitar una nueva explosión como la de julio de 1944. Es decir, el régimen permitiría a la oposición política actuar y expresar sus puntos de vista, pero dentro de ciertos límites establecidos por las leyes y por las prácticas electorales anteriores. Se perseguía un doble objetivo. Por una parte, permitir la presencia de cierta oposición para legitimar al régimen somocista, sobre todo para acallar a los críticos, dentro y fuera de Nicaragua, que acusaban a Somoza de ser un dictador. Por otra parte, la oportunidad de expresar opiniones disidentes y participar en eventos electorales servía como válvula de escape a las presiones acumuladas dentro del restringido entorno político de Nicaragua. Además, permitía mantener viva la esperanza entre la oposición de que quizás, algún día, se podría derrotar al régimen siguiendo sus propias reglas.

Somoza consideraba fundamental tomar medidas que limitaran los espacios de expresión política, pero evitando crear la imagen de que se vivía bajo un pleno estado de sitio, pues ello anularía toda

posibilidad de presentar a Nicaragua como una “democracia”. En pocas palabras, Somoza estaba dispuesto a permitir la existencia de una oposición política, pero restringiendo su acceso a los medios de comunicación, para evitar que la información política fluyera libremente a través de los periódicos, las estaciones de radio y el cine. La actitud del régimen hacia los medios de comunicación siempre fue ambivalente. Somoza fingía agradecer las críticas a su gobierno, siempre que éstas fueran “constructivas” y enmarcadas dentro de las leyes. Sin embargo, al mismo tiempo acusaba a los periódicos de desempeñarse como voceros de la oposición política para lanzar críticas insultantes a su gobierno, al extremo de borrar toda distinción entre “libertad” y “libertinaje”.⁵⁰ Una vez superada la crisis de julio de 1944, Somoza envió un proyecto de ley al Congreso para restringir la libertad de expresión. Además, decretó que a partir del 5 de agosto, se pondría en práctica la censura previa; ésta sería ejercida por un censor del gobierno facultado para revisar las galeras de los periódicos y eliminar todo material considerado inapropiado bajo los lineamientos de la ley marcial vigente desde diciembre de 1941.⁵¹ La política de censura previa fue abrogada tres días más tarde, después de una reunión entre Somoza y los dueños de periódicos en la que éstos se comprometieron a asumir estricta responsabilidad de la línea editorial de sus medios, emplear un “lenguaje de altura” en sus escritos, y abstenerse de lanzar insultos personales.⁵²

Aunque en la práctica no se ejerció la censura previa, en septiembre de 1944 el Congreso aprobó una ley que restringía la libertad de expresión, y ésta fue ratificada por Somoza. La ley otorgó una serie de concesiones a los medios de comunicación, incluyendo la exención de todo impuesto y del pago de correo dentro del país, aun para el envío de periódicos por suscripción. Sin embargo, también enumeraba una serie de situaciones que constituían violaciones a la libertad de prensa, entre otras, la publicación de propaganda que incitase a la subversión del orden social o público por medios violentos, llamados a la desobediencia civil, comentarios insultantes acerca de las instituciones fundamentales del Estado, y noticias falsas con miras a alterar el orden público o infundir pánico en los negocios. Los castigos previstos para los que violaran la ley incluían el pago de multas, en los casos más leves, hasta el cierre del medio en los casos más

graves.⁵³ *La Prensa*, el principal periódico opositor, fue cerrado por el gobierno antes de que la ley entrara en vigencia, y no se le permitió reabrir hasta mediados de 1946.

Después de limitar la libertad de expresión, Somoza se dedicó a cimentar sus relaciones con el movimiento obrero. En este momento, el punto medular era el código de trabajo, que el presidente venía prometiendo al movimiento obrero desde fines de la década de 1930. Hacia agosto de 1944, el Congreso ya había recibido el anteproyecto de ley correspondiente. Algunos senadores conservadores expresaron su desaprobación, argumentando que el código era muy prematuro, pues en Nicaragua no existían problemas laborales urgentes que exigieran un cuerpo legislativo tan extenso. Además, dijeron, el anteproyecto hacía muy poca referencia al campesino; pero, como era de esperarse, la mayoría liberal aprobó el código sin mayor debate.⁵⁴

El Código de Trabajo de 1945, documento fundamental que reglamentaría las relaciones entre el capital y el trabajo, reflejaba la perspectiva somocista de que la producción económica debía organizarse bajo el amparo del Estado.⁵⁵ En consecuencia, se convirtió en un instrumento que permitió al Estado controlar las relaciones entre el capital y el trabajo; su importancia para los trabajadores, como un medio que les permitiese alcanzar sus objetivos a través de huelgas, negociaciones y expresiones políticas, fue mucho menor. Por ejemplo, el Código reconocía el derecho no sólo de los trabajadores, sino también de los patrones, de unirse en cooperativas y sindicatos. Entre los objetivos de tales asociaciones se enumeraron los siguientes: denunciar las irregularidades en la aplicación del Código de Trabajo y celebrar convenciones colectivas de trabajo, así como representar a sus miembros en los conflictos obrero-patronales y en los procedimientos de conciliación y arbitraje. Además, para funcionar, cada sindicato debía estar previamente legalizado por la Inspección General de Trabajo. Esta dependencia del Ministerio del Trabajo también podía revocar la inscripción de un sindicato si el número de sus asociados caía por debajo del mínimo de veinticinco miembros exigidos por el Código, si se adhería a un partido político de carácter nacional o internacional, o se dedicaba a actividades políticas.⁵⁶

Incluso la huelga – uno de los instrumentos fundamentales de los obreros en sus relaciones con los patrones – estaba sujeta a ciertas condiciones y objetivos, que otorgaban al Estado la facultad de decidir, en última instancia, si una huelga era “lícita” o no lo era. En consecuencia, sólo era posible convocar legalmente a una huelga con el fin de conseguir un “equilibrio” entre los diversos factores de la producción, evitar malos tratos o medidas injustas por parte de los patrones, obtener del patrón el cumplimiento o la celebración del contrato de trabajo, y “armonizar” los derechos del trabajo con los del capital. La legalidad de una huelga dependía, además, de que estuviera apoyada por el 60% de los trabajadores, y se desarrollara sin violencia y sin coerción. Por otra parte, los trabajadores de instituciones de servicio público – es decir, la totalidad de los empleados del gobierno – no podían hacer uso de la huelga bajo ninguna circunstancia. El recurso a este instrumento de negociación también le estaba vedado a los trabajadores de sectores de “interés colectivo”, término que abarcaba a todos los trabajadores rurales dedicados a la agricultura, la ganadería y la industria de la madera.⁵⁷ Por lo tanto, tan sólo una ínfima parte de la fuerza laboral del país tenía derecho de declararse en huelga; y aún éstos corrían el riesgo de que su decisión de irse a la huelga no fuese aprobada por las autoridades estatales. Se estipulaba, además, que la decisión de irse a la huelga sólo podía ser tomada por los propios trabajadores de una empresa; las personas ajenas a la misma que intentaran fomentar una huelga desde fuera, politizar un conflicto laboral o incitar a la violencia serían castigados por la ley. Finalmente, la ley exigía agotar todos los recursos de mediación y conciliación antes de convocar a una huelga.⁵⁸

En vista de las múltiples restricciones que pendían sobre los derechos de los trabajadores y sus sindicatos, la independencia del movimiento obrero con respecto al régimen resultaba prácticamente imposible. No obstante, durante los años de 1944-1946 el país vivió un nivel de activismo sindical casi sin precedentes, y que pocas veces se repetiría. Entre agosto y diciembre de 1944, estallaron varias huelgas en Managua; la más importante de éstas ocurrió en septiembre, en la empresa textilera de Pasos y Arellano, de la que era socio Carlos Pasos, líder del PLI. Poco después, los obreros de la fábrica de cemento, cuyo principal accionista era el propio Somoza, se fueron a

la huelga. En diciembre, los obreros que construían la carretera Panamericana se declararon en huelga en demanda de mejores salarios. En todos estos casos, el gobierno pudo negociar arreglos que los trabajadores aceptaron sin objeciones. Sin embargo, hacia comienzos de 1945, Somoza comenzó a reprimir a los sindicatos dominados por los socialistas, así como a aquellos que estaban causando demasiados problemas a las empresas industriales.⁵⁹ En primer lugar, Somoza no tenía intención de permitir el crecimiento de la presencia del PSN dentro del movimiento obrero, si ésta llegaba a poner en peligro la posición de los dirigentes somocistas. En segundo lugar, Somoza era accionista de un buen número de las empresas industriales. Es decir, estaba dispuesto a permitir el crecimiento del movimiento obrero, siempre que no representara una amenaza para su control político o intereses económicos, por lo que su margen de maniobra era escaso.

No obstante, el crecimiento del movimiento obrero – en términos del número de sindicatos y de trabajadores afiliados – fue impresionante. Entre 1944 y 1945, el número de sindicatos legalmente autorizados para operar en el país pasó de 11 a 97.⁶⁰ En vista del entusiasmo por organizar nuevos sindicatos, el Ministerio del Trabajo elaboró machotes de actas de constitución y de estatutos que podrían emplear todos los sindicatos. Hacia fines de 1945, el total de obreros sindicalizados sobrepasaba los 14,000; el sindicato más numeroso – el de los estibadores del puerto de Corinto – tenía 167 afiliados, y el más pequeño tenía siete. La mayoría de los demás sindicatos tenía entre 30 y 50 afiliados cada uno.⁶¹ Es posible que algunos de estos sindicatos ya existiesen bajo distintos nombres, y su aparición en los registros del Ministerio del Trabajo obedeciera a la necesidad de acatar las nuevas disposiciones de inscripción. En 1946, el número de inscripciones de sindicatos se redujo a 29 y en 1947 apenas fue de 13. En los años siguientes, casi ningún sindicato nuevo se inscribió. Estos datos sugieren que el interés de Somoza por la organización sindical estaba determinado por una conveniencia pasajera, aunque también es posible llegar a la conclusión de que el potencial para la organización sindical dentro de los límites del Código de Trabajo ya se había agotado en gran medida en 1945.

La verdadera actitud de Somoza hacia el movimiento obrero comenzó a perfilarse durante y después de 1945. Con miras a contrarrestar la influencia del Partido Socialista dentro del movimiento obrero, Somoza le dio su apoyo al denominado Comité Organizador de la Confederación de Trabajadores de Nicaragua, encabezado por dirigentes sindicales que estaban dispuestos a trabajar con Somoza. Pero la creciente fuerza y presencia del partido Socialista dentro del movimiento sindical, y su rechazo a convertirse en un aliado dócil dentro de la coalición somocista, finalmente convenció a Somoza de la necesidad de aplicar mano dura. En agosto de 1945, el gobierno expulsó a un primer grupo de dirigentes socialistas; sin embargo, pese a la represión, el PSN continuó manteniendo una presencia fuerte dentro del movimiento obrero, e incluso llegó a imponerse durante la convención obrera organizada por la Confederación de Trabajadores de Nicaragua (CTN) en febrero de 1946.⁶²

Si bien es cierto que el apoyo de los trabajadores fue decisivo para mantener al régimen somocista en el poder durante los meses críticos de 1944, en última instancia, Somoza no logró unificar a su alrededor un movimiento obrero fuerte, tal como le hubiera gustado. Quizás Somoza consideró que su apoyo al Código de Trabajo, así como su actitud tolerante frente al activismo político y sindical de la izquierda, le bastarían para ganar el apoyo incondicional de los trabajadores. Al no lograr su propósito, el valor político del apoyo brindado por el movimiento obrero no compensaba las críticas que recibía desde el sector empresarial y del Partido Conservador. Además, una vez superada la crisis de 1944, el apoyo obrero perdió importancia. En ese momento, consideró conveniente distanciarse del movimiento obrero, o al menos romper los nexos con los sindicatos y federaciones dominados por el PSN. Su actitud empezó a cambiar. Por ejemplo, en abril de 1946, la Federación de Trabajadores de Managua (FTM) solicitó autorización para celebrar el Día del Trabajo con un desfile por las calles de la ciudad; Somoza rechazó su solicitud bajo el pretexto de haber otorgado ya un permiso similar a otra federación; por tanto, instó a la FTM a celebrar la festividad en la Casa del Obrero.⁶³ Y cuando el sindicato — identificado con el PSN — de la empresa textilera de Pasos y Arellano se fue a la huelga de nuevo en diciembre de 1946, Somoza se alió con los dueños y procedió a decretar la ilegalidad de la huelga.⁶⁴

D. Estados Unidos y la reelección de Somoza

Ante el progresivo distanciamiento del movimiento obrero, el régimen somocista se vio obligado a reforzar sus vínculos con los demás elementos que formaban parte de la coalición somocista, así como buscar un acomodamiento con los partidos políticos de oposición. Estos esfuerzos se enmarcaron en el proceso de elecciones presidenciales y legislativas programadas para febrero de 1947. Mediante este procedimiento, Somoza buscaba fortalecer al PLN para que participara con ventaja en las elecciones y que el pueblo pudiera expresar su apoyo al régimen. Asimismo, procuraba asegurarse la participación de los partidos de oposición, para que canalizaran sus energías políticas en la campaña electoral. En otras palabras, el régimen necesitaba recuperar la legitimidad perdida durante los días conflictivos de junio y julio de 1944. Incapaz de obtener el apoyo de la clase obrera para movilizar a las masas bajo sus propias condiciones, Somoza optó por el mecanismo legitimador más convencional de celebrar elecciones. Tal decisión le exigía, a lo sumo, abandonar sus pretensiones de ocupar de nuevo la silla presidencial, pues había vetado la enmienda constitucional que autorizaba la reelección presidencial. Sin embargo, éste era un obstáculo un poco ambiguo; en realidad, la decisión de Somoza de abstenerse de lanzar su candidatura fue determinada, en buena medida, por la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos a través de su embajador en Managua.

Hacia comienzos de 1945, en diversos puntos del país volvieron a escucharse voces en apoyo a una candidatura somocista. En León, donde Somoza llegó en enero para inaugurar un evento religioso en compañía del obispo, hubo discursos que lo animaban a lanzarse como candidato a la presidencia en imitación del presidente estadounidense Franklin Roosevelt, quien acababa de ganar una cuarta elección consecutiva en su país. Seguidamente, un campesino quien se pronunció a favor de Somoza, desestimó los impedimentos legales a una reelección, bajo el argumento de que la población rural necesitaba tierras y herramientas para trabajarla, caminos rurales, escuelas y apoyo técnico. Las exigencias que otros planteaban al régimen, dijo, eran ajenas al campesinado: “La libertad que otros reclaman no nos afecta, porque en el campo no se sienten las necesidades que

afectan a los hombres de la ciudad”.⁶⁵ Es decir, no importaba si Somoza se decidía a gobernar como dictador, mientras cumpliera con sus promesas al pueblo.

Durante los siguientes meses del año 1945, los cabildos y cónclaves de los liberales somocistas concluían con las acostumbradas “actas de adhesión y proclamación” firmadas por centenares de simpatizantes del régimen.⁶⁶ Su contenido era muy similar a las que se redactaron durante la campaña de 1935-1936, donde se destacó el papel de Somoza en el mantenimiento de la paz, la unidad del PLN y el progreso nacional. Los mecanismos empleados para entusiasmar a los seguidores fueron muy similares, también. El dinero y el licor fluyeron en abundancia, especialmente en julio cuando las proclamaciones a favor de Somoza se intensificaron. En Nandaime, cerca de Granada, el partido congregó a músicos, acompañados de pólvora y guaro, para crear un ambiente festivo entre la concurrencia. En el departamento de Jinotega, se estimó el gasto de propaganda en CS\$10,000 y se repartieron 800 litros de aguardiente, mientras que en el departamento de Estelí cada pueblo recibió CS\$200 (equivalentes a unos US\$40) para gastos, además de 150 litros de licor.⁶⁷

Hacia mediados de 1945, Somoza no daba indicios de tener intenciones de cumplir con la promesa que hiciera el año anterior en el sentido de no buscar la reelección. En agosto, Nelson Rockefeller, para entonces secretario de estado en funciones, advirtió al embajador nicaragüense en Washington, Guillermo Sevilla Sacasa, que los planes de reelección de Somoza entorpecerían las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua, mientras que su retiro de la campaña electoral le ganaría el respeto y los aplausos de su gobierno.⁶⁸ Unos días más tarde, el embajador de Estados Unidos en Managua, Fletcher Warren, abordó dicho tema con Somoza, y éste le aseguró estar consciente que las proclamaciones de su candidatura violaban la ley electoral, atribuyéndolas a la iniciativa personal de algunos amigos a quienes no podía enviar a la cárcel sin más. Asimismo, se había visto motivado a permitir que se le postulara como candidato – aseguró – para mantener bajo control a ciertos oficiales de la Guardia Nacional, cuyas ambiciones políticas personales amenazaban la paz de la nación. Informó a Warren de una tercera razón para permitir la pro-

clamación de su candidatura: si anunciaba su determinación de no presentarse como candidato, algunos funcionarios de su gobierno se apresurarían a enriquecerse de manera exagerada antes que finalizara su gestión, dada su “desafortunada” inclinación a querer lucrarse de sus cargos. Finalmente, explicó que mientras se le proclamara como candidato, la oposición no encontraría un contrincante viable para presentarlo ante el electorado; llegado el momento oportuno, esta situación le permitiría escoger un candidato aceptable tanto para él como para la oposición. Por tanto, aseguró: “En ese momento, nosotros (no cabe duda que se refería a su persona y a Estados Unidos cuando dijo ‘nosotros’) podemos estar seguros que el hombre seleccionado actuará patriótica y lealmente en función de los intereses de Nicaragua y Estados Unidos”.⁶⁹ Finalmente, Somoza aseguró a Warren que no quería buscar la reelección, por hallarse demasiado cansado para seguir en la política.

Comprendiendo que el gobierno de Estados Unidos no veía con buenos ojos sus ambiciones políticas, Somoza empezó a darle largas al asunto de las elecciones. A finales de agosto volvió a reunirse con Warren, y le pidió que el gobierno estadounidense ofreciera algunas sugerencias en cuanto a la persona idónea para ser designada candidata a la presidencia. Los conservadores se hallaban perfectamente conscientes de que el próximo presidente sería un liberal – aseguró – y su líder Cuadra Pasos prefería que él (Somoza) continuara en la presidencia.⁷⁰ La respuesta del Departamento de Estado fue de que las candidaturas presidenciales eran un asunto netamente nicaragüense. Sin embargo, en octubre, Somoza se acercó nuevamente al embajador estadounidense y le informó que probablemente acabaría siendo designado candidato presidencial por el Partido Liberal; por tanto, era necesario pensar en una salida a tal encrucijada. A continuación, le participó de sus planes de viajar a West Point en junio del siguiente año para asistir a la graduación de su hijo, Anastasio Somoza Debayle, y de permanecer en Estados Unidos hasta después de las elecciones de febrero de 1947. Mientras tanto, debía decidir, en conjunto con el Departamento de Estado, si mantenía su candidatura a la presidencia de Nicaragua.⁷¹

Obviamente, Somoza necesitaba la aprobación estadounidense para impulsar su candidatura, mas no el apoyo directo de Was-

hington. Su situación en ese momento era diferente a la de 1936, cuando Washington proclamaba una estricta política de no injerencia. Ahora, las autoridades más altas del Departamento de Estado le habían solicitado explícitamente que se apartara de la presidencia al finalizar su período de gobierno. Aunque Washington no llegó a amenazarlo con represalias concretas, Somoza estaba consciente del riesgo de oponerse a sus deseos, pues si Estados Unidos se negaba a reconocer la legitimidad de su futuro gobierno, el resto de Latinoamérica también lo aislaría. Más grave aún, el no reconocimiento por parte de Estados Unidos pondría en entredicho su propia legitimidad dentro de Nicaragua. Si Estados Unidos daba a entender de que el continuismo somocista no era condición necesaria para la paz y la estabilidad de Nicaragua, tampoco se opondría a su derrocamiento. Éste era el quid del mensaje que el Departamento de Estado le estaba transmitiendo: desde la perspectiva de Washington, ya no era indispensable que Somoza continuara al frente del gobierno.

Somoza, por supuesto, pensaba todo lo contrario. Tal como enfatizó Warren en una nota remitida a Washington, Somoza se consideraba como el único garante de la paz y el orden en Nicaragua. Se había convencido a sí mismo de que su deber ante Nicaragua y su pueblo era postularse a la reelección. De acuerdo a Warren, Somoza creía “intensamente” que la democracia nicaragüense requería de “expresiones y procedimientos diferentes” a los que imperaban en Estados Unidos.⁷² Asimismo, Somoza insistía en contar con el apoyo del 80% del pueblo nicaragüense.⁷³ Al parecer, hacia mediados de noviembre Somoza creía que su posición frente al Departamento de Estado se había fortalecido. Por tanto, comunicó al embajador estadounidense sus intenciones de buscar el apoyo de conservadores y liberales para su candidatura, propósito del que desistiría sólo en caso de no conseguir el apoyo bipartidista.⁷⁴

Ante la actitud desafiante de Somoza, el Departamento de Estado procedió a intensificar las presiones. El embajador Warren recibió copia de un discurso pronunciado en la Universidad de Pennsylvania por Elliot O. Briggs, director de la Oficina de Asuntos de las Repúblicas Americanas, sentando la posición del gobierno estadounidense frente a los gobiernos dictatoriales en Latinoamérica.

En breve, Briggs reiteró la política de no intervención de Estados Unidos en Latinoamérica; sin embargo, aclaró que dicha política no era impedimento para externar su opinión sobre asuntos de “vital importancia”. Por tanto, manifestaba su preocupación ante la existencia de algunos gobiernos que no habían llegado al poder a través de procesos democráticos, o que se habían mantenido en el poder mediante mecanismos inconstitucionales, sin el consentimiento del pueblo. Según Briggs, Estados Unidos “obviamente sentiría una amistad más cálida y mayor deseo de cooperación en el caso de aquellos gobiernos que se mantienen mediante la voluntad popular expresada libre y periódicamente . . . La política de no intervención no significa la aprobación de la tiranía local”.⁷⁵ El 29 de noviembre, Warren se presentó ante Somoza con una copia de este discurso y de otros documentos que reflejaban el desencanto del Departamento de Estado en relación a las ambiciones reeleccionistas del dictador. Platicaron largo y tendido.

Somoza procuró dar la apariencia de ser totalmente ajeno a las preocupaciones del gobierno estadounidense, y solicitó a Warren una explicación al respecto. Observando un estricto protocolo diplomático, con el fin de evitar la impresión de que estaba interfiriendo en los asuntos internos de Nicaragua, Warren informó a Somoza haber recibido instrucciones de entregarle dicha documentación, pero el presidente debía extraer sus propias conclusiones de la misma. Ante la insistencia del presidente en demandar una aclaración, Warren le aclaró que sólo emitiría su opinión “personal”: Somoza era un dictador. Obviamente, la opinión del embajador coincidía plenamente con el criterio del Departamento de Estado. Ante esta respuesta, Somoza le preguntó por qué el Departamento de Estado no le indicaba con exactitud lo que deseaba de él. A esto Warren respondió que precisamente llevaba cuatro meses intentando comunicarle cuál era su situación con respecto al gobierno de Estados Unidos. Somoza ripostó: “Como amigo, me merezco un mejor trato del Departamento de Estado. Debe decirme exactamente qué es lo que quiere de mí, tal como le he pedido que me lo diga”. A continuación, tomó un lápiz y redactó una declaración ofreciendo “al Departamento de Estado renunciar a mi candidatura dentro de un máximo de treinta días y dedicarme durante el resto de mi gobierno a laborar por el progreso y garantizar

elecciones libres en Nicaragua durante el próximo período electoral”. Explicó a Warren que necesitaba treinta días “a fin de arreglar algunos asuntos pendientes y para no dar la impresión de que se estaba doblegando bajo presión” – argumento que el embajador interpretó como “pura contemporización”; es decir, una maniobra para ganar tiempo.⁷⁶

Ante esta situación, el Departamento de Estado dio instrucciones a Warren de comunicar a Somoza que no podía aceptar su ofrecimiento de renunciar a la candidatura, pues ese era un asunto interno de Nicaragua y responsabilidad exclusiva del presidente. Somoza reaccionó molesto; según Warren “pareció herido” y lamentó haber sido malinterpretado por Estados Unidos. En un telegrama enviado al Departamento de Estado, el embajador transmitió la respuesta de Somoza: “Solamente quería que Estados Unidos, un país amigo (el hermano mayor del continente, como suelo decir), conociera mi decisión de antemano con la esperanza de que mi acción contribuiría a la tranquilidad de Nicaragua. No era mi intención ofender o perjudicar a Estados Unidos bajo ningún concepto . . . Dígales que no quise perjudicar u ofender; solamente quería ser amistoso”.⁷⁷

Dos semanas más tarde, se celebró una reunión en Washington a la cual asistieron el embajador nicaragüense, Guillermo Sevilla Sacasa; el secretario de estado adjunto, Spruille Braden; y el jefe de la División de Asuntos Caribeños y Centroamericanos, William P. Cochran. Sevilla Sacasa confirmó la decisión de Somoza de rechazar la candidatura para otro período presidencial, a pesar de que “muchos miembros” de la Guardia Nacional, así como “sectores amplios” del pueblo, deseaban su continuidad en el cargo. Braden se abstuvo de emitir juicios sobre la decisión de Somoza, pero aseguró que “la mejor manera de practicar la democracia era practicando la democracia”, aunque resultase un proceso difícil. Insinuó que Somoza, como un ciudadano privado, podría seguir ejerciendo una influencia considerable en el desarrollo de Nicaragua hacia la democracia; dejando en claro que convertirse en un “ciudadano privado” implicaba separarse de la presidencia y de la Guardia Nacional, y retirarse de la política. Es decir, Braden deseaba que Somoza abandonara el escenario político por completo.⁷⁸ Poco tiempo después, Somoza anun-

ció su retiro de la campaña electoral, pero no mostró intención alguna de renunciar a la jefatura de la Guardia Nacional.

La oficialidad más joven de la Guardia Nacional se mostraba cada vez más preocupada por las posibles consecuencias de las ambiciones de Somoza. El agregado militar de Estados Unidos en Nicaragua, el coronel Judson, había sostenido conversaciones con estos oficiales sobre la necesidad de una guardia “apolítica”, así como de la posibilidad de suspender la asistencia militar estadounidense mientras no se resolviera el problema de Somoza. El cuñado de Somoza, Luis Manuel Debayle, incluso renunció a su cargo de coronel en la Guardia en protesta por la campaña reeleccionista de Somoza.⁷⁹ La renuncia de Somoza a su candidatura presidencial no causó mayor sorpresa, en vista de la decidida oposición de Estados Unidos y las probabilidades de una división dentro de la Guardia. Sabía que de insistir en sus objetivos originales, corría el riesgo de perder el apoyo de sus bases sociales más leales, sin haber preparado alternativas confiables. No le quedaba más opción que llevar a cabo las elecciones tal como había prometido, procurando sacarles todo el provecho posible.

E. La campaña electoral de 1947

Al decidirse por celebrar elecciones en 1947, el régimen se vio obligado a iniciar un proceso de “apertura”, y resolver algunos problemas legales. Uno de estos era la inexistencia jurídica del Partido Conservador, liderado por Emiliano Chamorro y Cuadra Pasos, pues no había participado en las elecciones de 1936 y 1938. De acuerdo a la ley electoral de 1923, los partidos que decidieran participar en la contienda, debían solicitar su inscripción ante el Consejo Nacional de Elecciones, respaldada por un número de firmas equivalente al 5% del total de votos emitidos en la elección anterior. Con miras a facilitar el retorno de los conservadores al redil de los partidos políticos, en agosto de 1945 el gobierno emitió un decreto reconociendo a los liberales y conservadores nacionalistas como los principales partidos de Nicaragua; sin embargo, también reconocía la “existencia histórica y legal” del Partido Conservador, por lo que le permitiría presentar candidatos a cargos públicos sin necesidad de los trámites de petición y recolección de firmas.⁸⁰

En segundo lugar, en noviembre de 1945, el gobierno levantó el estado de sitio que había impuesto desde diciembre de 1941. Esta medida permitía reiniciar las actividades políticas sin necesidad de solicitar permiso a las autoridades antes de cada acto político; de esta manera, se abrieron las puertas para la realización de manifestaciones, reuniones y propaganda política que, hasta entonces, era ilegal.⁸¹ En tercer lugar, Somoza eliminó gradualmente las restricciones que pesaban sobre la prensa, tal como había prometido al embajador de Estados Unidos durante una de sus reuniones en noviembre de 1945. El periódico *La Prensa*, que había permanecido cerrado desde mediados de 1944, reapareció finalmente en junio de 1946, después de un año y diez meses de silencio.⁸² Como resultado, los periódicos empezaron a publicar con frecuencia agudas críticas a Somoza y su régimen. William Krehm, corresponsal de la revista *Time* en Centroamérica, comentó esta situación con el presidente, a lo que respondió que el gobierno tomaría las medidas del caso si dichas críticas transgredían los límites de “la decencia cívica y periodística”.⁸³

Sin embargo, estas concesiones no implicaban una apertura amplia y verdaderamente democrática por parte del régimen. La campaña electoral y el proceso de votación del año 1947, se desarrollaron bajo condiciones muy propias de la “democracia” nicaragüense, caracterizada por “expresiones y procedimientos diferentes” - tal como indicó Somoza al embajador Warren. Una de estas expresiones peculiares era el control de los mecanismos electorales, que Somoza había modificado a su favor en septiembre de 1945. En efecto, el Congreso aprobó varias reformas a la ley electoral de 1923, y una de éstas dificultaba la inscripción de nuevos partidos políticos, pues se aumentó el número de firmas requeridas de un 5 al 10% de los votos emitidos en la elección precedente. Puesto que el Partido Conservador ya había sido eximido de la necesidad de presentar firmas, tal disposición afectaba directamente a los liberales independientes del PLI, quienes habían iniciado su proceso de organización para participar en las elecciones. Otro reforma a la ley electoral otorgaba al presidente de la República la facultad de nombrar dos de los tres integrantes del Consejo Nacional de Elecciones, potestad que antes correspondía a los dos partidos políticos principales.⁸⁴

La posición del régimen ante la libertad de prensa constituía otra de esas “expresiones diferentes” de la democracia nicaragüense. Pese a la promesa de Somoza de respetar este principio fundamental de la democracia liberal, por lo general, únicamente gozaban de este derecho aquellos grupos y partidos dispuestos a actuar dentro de los límites establecidos por el régimen. Por el contrario, el periódico estudiantil, *El Universitario*, fue hostigado por la Guardia Nacional desde el momento de su fundación en diciembre de 1945, y en febrero de 1947 el gobierno ordenó su clausura.⁸⁵ Asimismo, los liberales independientes enfrentaron muchos obstáculos para hacer uso de los medios de comunicación. En Chinandega, el jefe político prohibió a todas las imprentas producir material para el PLI sin su autorización previa.⁸⁶ En contraste, *La Prensa* publicaba fuertes críticas al gobierno en sus editoriales, sin que Somoza tomara medidas en su contra.⁸⁷

Tal situación sugería que Somoza reconocía la existencia de dos tipos de oposición en Nicaragua. El Partido Conservador representaba la oposición leal, pues sus conflictos con Somoza se derivaban de sus disputas por cuotas de poder y el derecho de representación de la minoría, sin abordar las problemáticas de la sociedad nicaragüense. Es decir, Somoza tenía buenas relaciones con los conservadores porque – pese a sus críticas – no representaban una amenaza a su ya considerable imperio económico, ni atacaban el fundamento original de su poder político: la Guardia Nacional y su nexo con Estados Unidos. A fin de cuentas, los conservadores habían gobernado a Nicaragua durante dieciocho años amparados por la ayuda económica y militar directa de Estados Unidos; además, el gobierno conservador de Adolfo Díaz había aprobado la formación de la Guardia. Por el contrario, la oposición desleal de liberales independientes y estudiantes universitarios ponía en tela de juicio la razón de ser del somocismo, pues descalificaban sus orígenes y prácticas como inmorales e ilegítimas. Sus declaraciones daban a entender que la oposición política a Somoza no debía limitarse a impedir su reelección, sino también a eliminar por completo las instituciones del Estado somocista y sus principales actores.

Las expresiones de oposición política a Somoza fueron obstaculizadas cuando provenían de aquellos grupos identificados con la

oposición desleal. Cuando los liberales independientes y los conservadores solicitaron permiso para realizar unos “actos cívicos” el 24 de noviembre de 1946, en celebración de la candidatura presidencial del Dr. Enoc Aguado, apoyada por ambas agrupaciones, el jefe político de Managua rechazó su petición, bajo el pretexto de que la ley electoral de 1923 solamente contemplaba los “actos políticos”. Incluso, el jefe político objetó el término “concentración de masas”, atribuyéndole un origen marxista y subversivo. Ordenó a los solicitantes reformular su documento “en términos sencillos”, lo que se vieron obligados a hacer dos veces más, hasta que se les concedió el permiso a regañadientes, acompañado de la advertencia de mantener a los manifestantes alejados de las guarniciones militares y estaciones de policía.⁸⁸

El movimiento obrero independiente también sintió la hostilidad del régimen. Hacia fines de 1946, la Federación de Trabajadores de Managua solicitó un permiso para reunirse en un cine capitalino, con el fin de analizar los problemas del desempleo y el alto costo de la vida. El jefe político rechazó su petición, argumentando que la Federación no había explicado con suficiente detalle la naturaleza de la reunión propuesta. Además, dijo, sus dirigentes estaban identificados con movimientos políticos que no eran reconocidos por el Estado, refiriéndose al Partido Socialista.⁸⁹

Dentro de este entorno de libertad restringida, Somoza procedió a movilizar al Partido Liberal Nacionalista para la campaña que se avecinaba. Por supuesto, los liberales no se vieron afectados por las limitaciones a la expresión y participación política que los demás partidos debían soportar. Además, disponían de mucho más recursos que los demás partidos. A comienzos de 1946, su fondo de campaña ascendía a los C\$1,189,581, procedente, en su mayor parte, de la “contribución” del 5% que se descontaba de los salarios de todos los empleados públicos. Debido a que en 1944 y 1945 se había gastado poco, las contribuciones se habían acumulado en las arcas del partido, para ser utilizadas durante la campaña.⁹⁰ El partido también tenía acceso a los bancos del estado, donde podía solicitar un préstamo o sobregiro.⁹¹ Finalmente, disponía de algunos fondos propios del comercio somocista. En octubre de 1946, Somoza anunció haber apor-

tado CS\$100,000 para la causa del PLN de su propio bolsillo, e instó a otros liberales seguir su ejemplo.⁹² Al parecer, su llamado no se concretó en fuertes donaciones, por lo que el PLN organizó una campaña para recaudar CS\$1,000,000 a través de empréstitos voluntarios. Se ofreció pagar dichos préstamos mediante sorteos mensuales del 5% que se descontaría de la nómina de los empleados públicos – “siempre y cuando el PLN triunfara en las próximas elecciones”.⁹³

Aunque no fue posible recabar información sobre los gastos del PLN durante la campaña electoral de 1946 y 1947, otros documentos nos ofrecen pistas sobre la manera en que el partido procuró alimentar el entusiasmo de los correligionarios para seguir recibiendo su apoyo a la causa somocista. Uno de éstos es el informe enviado por el tesorero del PLN a la Gran Convención de 1946. Según este documento, cerca del 17% de los egresos fueron destinados a ayudar de manera individual a miembros del partido – descritos, según la usanza, como “pobres de solemnidad y buenos liberales” –, y a satisfacer peticiones de ayuda para gastos de funerales; aunque por lo general estas erogaciones representaban cantidades muy pequeñas que oscilaban entre 15 y 30 córdobas, equivalentes a tres y seis dólares al cambio vigente.⁹⁴ En todo caso, el número de beneficiarios era demasiado reducido – a lo sumo unos cien al mes – como para incidir en el resultado electoral. Es decir, las prebendas distribuidas por el PLN entre sus seguidores, en términos de empleo público y favores especiales, eran mucho más importantes que las donaciones caritativas distribuidas directamente por el partido. Sin embargo, es concebible que los gastos de propaganda y de organización del plebiscito liberal de octubre de 1945 – que suman más de la mitad de todos los gastos del año – también incluían donativos a individuos, pagos por servicios prestados o la compra de lealtades políticas.

La fuerza del PLN se derivaba, en buena medida, de su solidez financiera; pero no bastaba, por sí sola, para garantizar la afluencia de los votantes a la urnas. Con miras a persuadir a los miembros del partido a participar en la campaña y votar por el PLN, la organización partidista necesitaba crear un clima de urgencia en torno al proceso electoral de 1947. Como primer paso, el partido convocó a

sus miembros a un plebiscito nacional en octubre de 1945 para elegir a sus representantes ante la Gran Convención, programada a celebrarse en enero de 1946. De acuerdo a la dirigencia del partido, unos 76,000 liberales escogieron a 101 delegados ante la convención.⁹⁵ En algunas partes del país, los liberales independientes trataron de interrumpir el plebiscito, repartiendo volantes entre la gente y deteniéndolos mientras se dirigían a los lugares de votación.⁹⁶ En otras partes, la organización del PLN se había deteriorado con el paso de los años y la gente se mostraba escéptica de seguir apoyando al partido o a Somoza.⁹⁷ También se dieron casos de fuertes pleitos internos entre facciones opuestas dentro del partido para elegir a los representantes a la convención.⁹⁸ Sin embargo, los resultados parecen haber sido un indicador bastante preciso del nivel de apoyo político que gozaban los liberales. Además, seguramente proporcionaron información a la dirigencia sobre los lugares que requerían un trabajo político más intenso, con miras a las elecciones de 1947.

Durante la Convención Liberal, Somoza ratificó su decisión de abstenerse de presentar su candidatura a la presidencia, pero tampoco se decidió quien debía sustituirlo. Esta ambigüedad obedecía al interés de Somoza en atraer a los disidentes del PLI de nuevo al seno del partido. Durante la primera mitad de 1946, los representantes de Somoza se reunieron con miembros del PLI para buscar algún tipo de entendimiento, pese a la oposición de algunos dirigentes de ese partido a negociar acuerdos con Somoza.⁹⁹ En junio, el PLI decidió romper el diálogo con Somoza, pero éste insistió una vez más en julio, proponiendo como posibles candidatos a Leonardo Argüello e Ildefonso Palma Martínez. Cabe anotar que éste último había sido diputado liberal en 1934, y se opuso al decreto de amnistía en favor de los asesinos de Sandino. De acuerdo a *La Prensa*, tanto los somocistas como los liberales independientes se inclinaban por apoyar a Palma Martínez, pues a diferencia de Argüello no estaba identificado con el régimen. De hecho, el 10 de julio el PLI aceptó en principio la candidatura de Palma Martínez, aunque siguió expresando su desconfianza con respecto a Somoza.¹⁰⁰ Sin embargo, durante otra Convención Liberal realizada en León en agosto de 1946, Somoza se las ingenió para que Argüello fuera electo candidato, con 98 de los 101 votos de los delegados.¹⁰¹

La escogencia de Argüello como candidato del PLN representó un nuevo intento de Somoza de reconciliarse con algunos de los liberales disidentes. Argüello parecía ser independiente de la influencia de Somoza, pues había renunciado al cargo de ministro de Gobernación a raíz de los días conflictivos de junio y julio de 1944. Además, había figurado como dirigente destacado del partido desde la década de 1910, lo cual podría representarle una ventaja entre los correligionarios más antiguos del partido que no estaban identificados con la causa somocista de manera directa. Finalmente, Somoza lo presentó en la Convención de León como un candidato de conciliación cuando ninguno de los otros dos aspirantes logró una mayoría absoluta entre los delegados. Por otra parte, Argüello podría ser el candidato más “manejable”, dada su avanzada edad y la gratitud que le debería a Somoza como facilitador del cumplimiento del sueño de su vida de llegar a la presidencia.

Gracias, en buena medida, al control de Somoza sobre el PLN, este partido pudo escoger a su candidato para la presidencia sin mayores complicaciones. Por el contrario, la oposición se enfrascó durante todo un año a regatear y negociar condiciones para presentarse como un frente unido ante las fuerzas del gobierno. En vista de las divisiones entre la oposición reflejadas durante los días de crisis política de 1944, era de esperarse que la formación de una coalición antisomocista sería muy difícil. Inicialmente, la salida de los liberales independientes del PLN tampoco contribuyó mucho a fortalecer la oposición, pues el PLI conservó su ideología liberal y procuró alcanzar una solución negociada para resolver sus diferencias con los liberales somocistas.¹⁰² Sin embargo, la oposición se inclinaba a conformar algún tipo de frente unido y escoger un candidato único para disputarle la presidencia al PLN.

Las dos fuerzas opositoras más importantes eran los liberales independientes y los conservadores, aunque el PLI aún no había tenido la oportunidad de demostrar cuántos votos le había restado al PLN cuando abandonó las filas del partido de gobierno. No obstante, los dirigentes del PLI lograron persuadir a los conservadores que su candidato conjunto debía ser liberal, aunque acordaron dar al general Chamorro la última palabra y escoger al candidato de una lista

elaborada por el PLI a tal efecto.¹⁰³ Chamorro regresó a Nicaragua a fines de julio de 1946, después de diez años de exilio; el siguiente mes, el PLI y los conservadores firmaron un pacto comprometiéndose a luchar juntos para alcanzar la victoria en las elecciones de 1947. Bajo los términos del pacto, se comprometieron, entre otras cosas, a luchar por defender la democracia nicaragüense del peligro de una continuación de la dictadura somocista. Posteriormente, los liberales independientes se reunieron en convención en León para ratificar la escogencia del Dr. Enoc Aguado – un liberal de avanzada edad – como candidato presidencial de ambos partidos.¹⁰⁴ En último término, ambos candidatos de las fuerzas políticas opositoras compartían la ideología liberal, distinguiéndose tan sólo por su apoyo o rechazo a los designios de Anastasio Somoza para Nicaragua.

Las maniobras y regateos políticos, así como el enfrentamiento de dos candidatos de estirpe liberal, provocó la confusión entre el electorado. La presentación de los programas de gobierno de cada candidato tampoco contribuyó a aclarar el panorama. Argüello describió su futuro gobierno en términos de una continuación de las iniciativas de Somoza en el campo del bienestar social, prometiendo un sistema de seguridad social, reforma agraria, controles de precio y apoyo a los sindicatos obreros. Asimismo, propuso la creación de una policía nacional dentro de la Guardia Nacional, para que ésta limitara sus funciones al campo estrictamente militar en defensa de la soberanía nacional. Entre sus muchas promesas dirigidas a todos los sectores sociales, se comprometió a impulsar grandes “campañas de desanalfabetización”.¹⁰⁵ El programa de gobierno de Aguado no era muy distinto; también se refirió a la necesidad de transformar la Guardia en una fuerza profesional, independiente de los vaivenes políticos del país, además de respetar plenamente todos los derechos políticos e impulsar programas sociales en beneficio de los grupos más pobres de la sociedad. Quizás la única diferencia significativa del programa de Aguado consistía en su plan para descentralizar el poder político mediante el fortalecimiento de los concejos municipales, pero este punto había sido un viejo anhelo de los conservadores, cuando Somoza abolió la autonomía municipal.¹⁰⁶

El asunto central, por supuesto, era la continuación del somocismo y la figura del propio Somoza, pese a que éste parece

haber guardado un perfil bastante bajo durante la campaña electoral. Durante la mayor parte de septiembre y octubre permaneció en Boston, Estados Unidos, recibiendo atención médica para un problema intestinal, y cuando volvió a Managua reiteró su promesa de celebrar elecciones justas y limpias. Sin embargo, ratificó su participación en la lucha contra el comunismo que representaba una nueva amenaza a las repúblicas americanas. Esta preocupación, explicó, no debía interpretarse como un deseo de promover sus ambiciones políticas, sino como muestra de su interés ciudadano por asegurar la continuidad de su obra en pro de la consolidación de la democracia nicaragüense. Concluyó diciendo: “En este empeño estoy seguro que contaré con sectores importantes de la misma oposición, ya sea por motivos religiosos, ya por intereses materiales, ya por un común espíritu de asegurar la organización nítidamente democrática del Estado”.¹⁰⁷ Por lo tanto, resultaba evidente que, en caso de una victoria de Argüello, Somoza permanecería dentro del gobierno o, cuando menos, cerca del presidente. Bajo esta óptica, las elecciones del 1 de febrero de 1947 se convirtieron en un referendo sobre el somocismo; sus resultados indicarían el nivel de desgaste sufrido por la coalición somocista después de una década en el poder.

F. El resultado electoral

Los investigadores interesados en analizar los resultados de las elecciones de 1947 enfrentan un problema fundamental: éstas, por lo general, se consideran las más fraudulentas jamás realizadas bajo el régimen de Somoza García. No obstante, es posible plantear algunas conclusiones tentativas sobre la base del abstencionismo y de los informes de testigos presenciales. En primer lugar, cabe anotar que el padrón electoral fue elaborado el 29 de julio y el 4 de agosto de 1946, arrojando un total de ciudadanos inscritos de 221,590.¹⁰⁸ De inmediato, el Partido Conservador denunció que los procedimientos de inscripción estaban viciados, pues los vigilantes de este partido habían sido expulsados de un 80% de las mesas de inscripción. En consecuencia, más de la mitad de los votantes conservadores no pudieron inscribirse, pues no fueron atendidos por los funcionarios electorales.¹⁰⁹ Por su parte, *La Prensa* estimó que 50,000 individuos habían sido inscritos de manera fraudulenta.¹¹⁰ En todo caso, el Con-

sejo Nacional de Elecciones procedió a organizar los comicios con base en sus cifras, que apenas superaron las de 1936, cuando se inscribieron 219,668 ciudadanos.

Apenas cerradas las urnas el propio día de las elecciones, se dejaron oír las denuncias de que se había realizado un fraude en gran escala. Según *La Prensa*, las listas de electores estaban incorrectas, lo que impidió a muchas personas depositar su voto, pues no encontraron la mesa correspondiente. En otros lugares, el recuento total de los votos fue alterado después de que los vigilantes se vieron expulsados de los recintos.¹¹¹ En otras mesas, la Guardia Nacional recogió las urnas y las hizo desaparecer.¹¹² Una revisión de los resultados oficiales indica que las irregularidades empezaron desde el inicio del proceso de inscripción de los votantes. (Ver Cuadro 4.1.) En algunos departamentos, el número de votantes inscritos fue muy inferior a las cifras obtenidas en 1936. En Chontales, por ejemplo, la inscripción bajó casi un 35% en relación a 1936, pese a que el predominio conservador en ese departamento hacía esperar un mayor número de inscritos. La reducción de inscritos en casi un 40% en el departamento de Estelí también parece excesivo. En la mayoría de los otros departamentos, el incremento en el número de inscritos entre 1936 y 1947 fue mínimo. Entre los departamentos tradicionalmente liberales, sólo Chinandega y Managua reflejaron un incremento significativo en el registro de votantes. A nivel nacional, el incremento de votantes inscritos en relación a 1936 no llegó a 2,000, lo que sugiere un esfuerzo deliberado por limitar al máximo la inscripción de votantes de la oposición, mientras se promovía la inscripción de liberales simpatizantes con la causa somocista.

Al margen de la existencia de un fraude en gran escala, los resultados no fueron alentadores para Argüello y Somoza. La alianza PLN-Conservadores Nacionalistas recibió casi 5,000 votos menos que en 1936. (Ver Cuadro 4.2.) En nueve de los quince departamentos, recibió menos votos que en 1936, y apenas logró mantener su caudal en cuatro otros. Sólo en Chinandega y León, tradicionalmente liberales, pudo el PLN aumentar su votación por un poco más de 2,500 sufragios en cada caso. Por otra parte, la coalición PLI-Conservadores ganó las elecciones por estrecho margen en Managua y

Rivas; además, estuvo a punto de ganar en Chontales y Boaco. Todos estos departamentos, con la excepción de Managua, eran bastiones del Partido Conservador.

Cuadro 4.1
Participación electoral en 1936 y 1947

Departamento	1936			1947		
	Inscritos	Votos	%	Inscritos	Votos	%
Boaco	9,250	4,161	45.0	10,055	7,783	77.4
Carazo	11,189	5,875	52.5	11,647	8,398	72.1
Chinandega	14,974	8,048	53.8	19,499	14,657	75.2
Chontales	20,387	5,605	27.5	13,297	9,829	73.9
Estelí	15,994	6,237	40.0	9,692	7,957	82.1
Granada	11,041	4,836	43.8	11,774	8,936	75.9
Jinotega	8,923	4,435	49.7	8,856	6,276	70.9
León	24,215	12,248	50.6	24,579	19,794	80.5
Madriz	7,081	4,490	63.4	7,354	5,792	78.7
Managua	30,596	13,230	43.2	35,893	28,664	79.9
Masaya	14,998	6,900	46.0	14,176	11,504	81.2
Matagalpa	22,008	12,778	58.1	23,193	16,703	72.0
Nva. Segovia	4,765	3,202	67.2	5,472	4,348	79.5
Rivas	8,797	4,139	47.1	8,941	6,912	77.3
Zelaya	15,450	13,235	85.7	17,162	12,515	72.9
Totales	219,668	109,419	49.8	221,590	169,708	76.6

Fuente: Los datos de 1936 han sido tomados de Consejo Nacional de Elecciones, *La verdad electoral de 1936* (Managua: Talleres Nacionales, 1937), y Recaudación General de Aduanas, *Memoria para 1932*. Los datos correspondientes a 1947 son de LG/DO 51,50 (6 de marzo de 1947) al 51,58 (15 de marzo de 1947)

¿Cómo podrían estimarse los niveles de fraude? No es preciso suponer que los resultados electorales de la alianza liberal-conservadora nacionalista hayan sido inflados. Durante el proceso de inscripción desarrollado en 1946, los liberales lograron incorporar al padrón a más de 136,000 votantes bajo el membrete de su partido.¹¹³ Además, en vista del descenso en el número de votos emitidos a favor de la coalición liberal-conservadora nacionalista – en relación a los resultados de 1936 – se puede concluir que los resultados no fueron manipulados mucho en ese aspecto. Con toda probabilidad, los efectos del fraude se hicieron sentir sobre todo en el número de votantes de la oposición, aunque los resultados emitidos por la oposición daban a los liberales-conservadores nacionalistas apenas 37,532 votos contra 107,591 a favor de Aguado, y este resultado parece tan

exagerado como el ofrecido por el gobierno.¹¹⁴ Obviamente, el régimen sufrió un deterioro de su fuerza política en lo que se refiere al electorado. El cisma de los liberales independientes debe haber restado un buen número de votos al PLN, y el movimiento obrero, dividido entre somocistas y anti-somocistas, no estaba en condiciones de darle mayor apoyo a Argüello.¹¹⁵

Cuadro 4.2
Resultados electorales en 1936 y 1947

Departamento	1936	PLN-Cons.	1947		
	PLN-Cons.		%	PLI-Cons.	%
Boaco	4,160	4,160	50.3	3,867	49.7
Carazo	5,868	4,703	56.0	3,695	44.0
Chinandega	8,046	10,674	72.8	3,983	27.2
Chontales	5,605	4,979	50.2	4,950	49.8
Estelí	6,223	5,105	67.2	2,492	32.8
Granada	4,835	5,036	56.4	3,900	43.6
Jinotega	4,435	4,658	74.2	1,618	25.8
León	12,239	14,838	75.0	4,956	15.4
Madriz	4,490	4,902	84.6	890	50.9
Managua	12,764	14,076	49.1	14,588	46.1
Masaya	6,871	6,227	53.9	5,331	36.7
Matagalpa	12,764	10,568	63.3	6,135	31.3
Nva. Segovia	3,202	2,988	68.7	1,360	50.3
Rivas	4,067	3,437	49.7	3,475	29.3
Zelaya	13,221	8,851	70.7	3,664	38.2
Totales	109,230	104,958	61.8	64,904	76.6

Fuente: La información correspondiente a 1936 es de Consejo Nacional de Elecciones, *La verdad electoral de 1936* (Managua: Talleres Nacionales, 1937), y Recaudación General de Aduanas, *Memoria* para 1932. Los datos de 1947 son de LG/DO 51,50 (6 de marzo de 1947) al 51,58 (15 de marzo de 1947).

Sin embargo, el deterioro del apoyo electoral hacia el régimen no debe interpretarse como una pérdida real de poder político. La Guardia Nacional permanecía leal a su jefe director, aunque algunos oficiales se mostraban preocupados por el continuismo somocista y abandonarían a Somoza durante la efímera presidencia de Argüello. La comunidad de empresarios, a la cual Somoza, por lo general, había apoyado desde que impulsó las reformas bancarias y monetarias de comienzos de la década de 1940, había salido fortalecida de los años de la Guerra Mundial, como resultado del aumento en la demanda de productos de exportación destinados al mercado de Estados Uni-

dos. De vez en cuando se escuchaban algunas críticas en torno a la política crediticia restrictiva del Banco Nacional, y a los problemas burocráticos asociados con las solicitudes de divisas destinados al pago de las importaciones.¹¹⁶ En cierto momento, el Banco Nacional fue objeto de numerosas críticas por su negligencia en aplicar todas las recomendaciones del Dr. Max, especialmente aquellas relacionada con el nombramiento de personas competentes en los cargos claves, y la eliminación de las influencias políticas en las operaciones del Banco.¹¹⁷ Esta última era probablemente una referencia velada al control que ejercía Somoza sobre las operaciones de crédito del Banco, algo que los empresarios asociados con el PLI denunciaban con especial vehemencia. Pero si bien es cierto que algunos empresarios se mostraban críticos del gobierno de Somoza y de su creciente imperio económico, se limitaban a expresar sus opiniones en privado; a nivel público, las gremiales empresariales a lo sumo sugerían la introducción de mejoras en las operaciones del sistema económico.¹¹⁸

En términos generales, la reacción ante los resultados electorales y la victoria de Argüello fue bastante limitada. En León, un grupo de dirigentes del PLI y del Partido Conservador lanzaron un volante en el cual acusaban a Somoza de “tomarse las urnas por la fuerza”, lo que invalidaba la elección de Argüello. Aseguraron que Aguado había recibido el 95% de los votos emitidos y que Argüello no era más que un representante de la dictadura. Por tanto, la lucha por la democracia apenas empezaba y no se detendría hasta lograr la libertad.¹¹⁹ En Masatepe, un pequeño pueblo rodeado de cafetales al sureste de Managua, unos doscientos opositores amenazaron con interrumpir una celebración de argüellistas; chocaron con un contingente de guardias, uno de los cuales perdió su fusil en la trifulca mientras que otros fueron apedreados. Más tarde, el grupo insistió en insultar a las patrullas de la Guardia, gritándoles “hijos de la gran puta” mientras lanzaban vivas al general Chamorro.¹²⁰

Sin embargo, estas limitadas expresiones de descontento fueron insignificantes en comparación a los problemas que el propio Argüello habría de causar al régimen somocista. Entre el 1 de febrero, fecha de su triunfo electoral, y su toma de posesión el 1 de mayo de 1947, el presidente electo se reunió con diversos grupos políticos,

laborales y empresariales, así como con oficiales de la Guardia Nacional, para escuchar sus opiniones y sugerencias acerca de la política del nuevo gobierno. En el discurso que pronunció ante el Congreso, en ocasión de asumir la presidencia, transmitió su propósito de encabezar un gobierno de distinta naturaleza y contenido en relación al pasado. Procuraría eliminar los abusos cometidos por los gobiernos anteriores – aseguró – erradicando los intereses particulares que habían desplazado el espíritu de servicio al público dentro de la burocracia estatal. Aunque reconoció las significativas mejoras en infraestructura y servicios sociales impulsadas por el gobierno de Somoza, observó la necesidad de hacer mayores esfuerzos en los campos de la educación y la alfabetización.¹²¹ En términos generales, Argüello presentó un programa convencional de gobierno liberal, y con mucho tacto acusó a Somoza de apartarse de los verdaderos principios liberales.

Una vez instalado en la oficina presidencial, Argüello procedió a efectuar cambios en los altos cargos del gobierno, con el propósito de socavar el control de Somoza sobre la burocracia y la Guardia Nacional. Giró órdenes de cerrar de inmediato todos los sitios de juegos prohibidos, tales como loterías y casinos, afectando con ello a un número de empleados públicos y oficiales de la Guardia que se lucraban de estas actividades. El gerente general del Ferrocarril del Pacífico – un antiguo cómplice de Somoza que facilitaba a sus empresas el uso de los talleres y los materiales del ferrocarril – fue reemplazado por un estadounidense con experiencia en el ramo.¹²² Asimismo, Argüello se propuso desmilitarizar los servicios públicos que Somoza había puesto bajo control de la Guardia durante los años de la guerra, tales como los programas de salud pública, las aduanas, la red de comunicaciones y el propio ferrocarril. Por el contrario, a Somoza le convenía mantener aquella situación, pues le permitía extender su autoridad directa más allá de la esfera de la jefatura de la Guardia Nacional.¹²³ Sin embargo, la pieza más importante en el tablero del poder era la propia Guardia Nacional. Argüello sabía bien que la influencia de Somoza no se vería menguada si retenía su cargo como jefe director de la Guardia Nacional. Antes de asumir la presidencia, Argüello parece haber llegado a un acuerdo con Somoza en el sentido de que se abstendría de efectuar cambios en la oficialidad.¹²⁴ Mientras tanto, Somoza se esforzó por destacar su posición

dentro de la Guardia; la tropa y los oficiales le ofrecieron homenajes acompañados de discursos y banquetes, y se comprometieron a seguirle hasta el final.¹²⁵

La ruptura entre ambos se produjo cuando el Congreso, todavía bajo el firme control de Somoza, procedió a nombrar a los tres designados a la presidencia, entre los que se escogería al encargado de reemplazar al presidente en caso de que éste dejara el cargo. Como era de esperarse, los tres seleccionados eran somocistas. Argüello, por su parte, procedió a destituir al director general de comunicaciones, al jefe de policía de Managua, al inspector general del ejército, al jefe del estado mayor y al comandante de la guardia presidencial. Luego, los reemplazó con personas que le eran leales, violando así el acuerdo pactado con Somoza sobre la remoción de oficiales de la Guardia.¹²⁶ El 25 de mayo, Argüello notificó a Somoza que debía abandonar el país, después de lo cual anunciaría su renuncia como jefe director de la Guardia. Somoza aparentó aceptar la orden presidencial, pero pidió unos días para arreglar sus asuntos personales, tiempo que aprovechó para organizar el derrocamiento de Argüello. El 26 de mayo la Guardia Nacional tomó control del Palacio Nacional y de las instalaciones militares del Campo de Marte y cortó las comunicaciones con la casa presidencial. Argüello se negó a renunciar a la presidencia, pero eventualmente aceptó trasladarse a la embajada mexicana en calidad de exiliado. Se llevó consigo los sellos y la banda presidencial, insistiendo hasta el último momento en que seguía siendo el presidente de la República.¹²⁷

Una semana después del golpe, el Congreso se reunió y acordó destituir a Argüello, aduciendo que había demostrado incapacidad para ejercer el cargo de presidente. Además, se le acusó de negarse a ratificar a los designados a la presidencia y provocar divisiones dentro de la Guardia Nacional que amenazaban su unidad y disciplina.¹²⁸ En sustitución de Argüello, el Congreso escogió a Benjamín Lacayo Sacasa, un títere de Somoza. Aunque las razones y las circunstancias eran diferentes, los hechos de 1947 se asemejaban a los de la coyuntura de 1936, cuando Somoza expulsó a Sacasa de la presidencia. Al mantener el control del aparato coercitivo del Estado, Somoza impuso sus propias reglas del juego y siguió actuando con ventaja.

G. Conclusión

El problema fundamental enfrentado por el régimen de Somoza en 1944 estaba relacionado con el agotamiento del consenso construido a raíz del derrocamiento de Sacasa en 1936. Por primera vez, la oposición se manifestó en las calles de Nicaragua, y la legitimidad misma del Estado se vio cuestionada. Sin embargo, las manifestaciones de protesta no deben interpretarse como un rechazo a la organización fundamental del Estado, sino más bien al régimen somocista. Es decir, las críticas externadas por los liberales disidentes y algunos conservadores no contemplaban la abolición de algunas de las instituciones más importantes del Estado, tales como la Guardia Nacional, los bancos nacionales, el ferrocarril, o el sistema político bipartidista. Por otra parte, quienes apoyaban al gobierno lo hacían por lealtad partidista o porque buscaban que Somoza les hiciera concesiones específicas, como en el caso del movimiento sindical. La crisis de 1944 pudo haber sido más grave si la oposición al régimen se hubiera conjugado con un rechazo a la organización fundamental del Estado.

Además, el derrumbe del consenso político fue limitado. Las protestas de 1944 surgieron de manera espontánea y su organización fue apresurada, e involucró sobre todo a grupos urbanos dirigidos por políticos y activistas de clase media, con escaso contacto con las masas. Aparte del derrocamiento de Somoza, el movimiento opositor nunca hizo promesas concretas, pues su discurso giró alrededor de los conceptos abstractos de “democracia” y “libertad”. El propio Somoza había empleado estos conceptos para identificar a su gobierno con la lucha contra el fascismo y el totalitarismo. La diferencia entre Somoza y la oposición nunca quedó muy clara para las personas que observaban el conflicto. Incluso, los dirigentes sindicales que se esforzaban por mejorar la condición de la clase obrera, percibían a Somoza como un dirigente progresista; por el contrario, calificaban a sus oponentes de reaccionarios y oligárquicos.

El régimen enfrentó a la oposición empleando dos estrategias muy sencillas. En primer lugar, ejecutó medidas represivas para marcar los límites de la oposición tolerable, utilizando a los soldados y grupos de choque para controlar las manifestaciones callejeras, así

como medidas administrativas para limitar la libertad de expresión. De esta manera, dejó en claro su voluntad de actuar de manera drástica, mientras circunscribía sus medidas represivas a niveles comparables con las amenazas enfrentadas por el régimen. De esta manera, Somoza pudo jactarse de haber sofocado los incidentes sin derramamiento de sangre, y de haber puesto en libertad a los capturados en cuestión de horas, a excepción de unos pocos que fueron confinados y exiliados.

En segundo lugar, el régimen inició una política de largo plazo, extendiendo la mano a simpatizantes y opositores con miras a reconstruir el consenso de la década anterior. Ofreció a la oposición conservadora la oportunidad de medir sus fuerzas con los liberales somocistas, en un proceso electoral que se perfilaba lo bastante limpio como para atraer la participación de sus oponentes. Incluso los liberales disidentes del PLI aceptaron el reto, demostrando suficiente fuerza y convicción como para imponer a uno de los suyos, Enoc Aguado, como candidato único de la oposición. El movimiento sindical, un extraño híbrido de tendencias marxistas y somocistas, aceptó la promesa de un código de trabajo como muestra de buena fe y de oportunidades potenciales en el futuro. El PLN, provisto de abundantes fondos y fortalecido por una reorganización reciente, estaba en condiciones de movilizar a sus votantes; además, al seleccionar a un candidato presidencial proveniente de la vieja guardia del partido, los liberales esperaban recuperar parte del terreno que habían perdido a raíz de la escisión del PLI. Finalmente, Somoza se vio obligado a reconciliar su propia posición dentro del sistema político nicaragüense frente a Estados Unidos, su más antiguo y poderoso promotor. Su actitud aduladora y servil frente al embajador de Washington no debe interpretarse necesariamente como muestra de temor o debilidad; simplemente reflejaba su aceptación del enorme poder ostentado por el representante de Estados Unidos, un poder al que era peligroso contrariar pero del cual se podrían extraer algunas concesiones. Somoza pudo ganar tiempo pues sabía que a Estados Unidos le preocupaba más las posibilidades de un colapso político en Nicaragua que su propia permanencia al frente del gobierno.

Por tanto, en última instancia, ningún grupo opositor llegó al extremo de pedir la renuncia de Somoza a la presidencia antes del

término de su mandato, como condición para negociar un acuerdo político. Somoza pudo descartar sus ambiciones continuistas sin debilitar su propia posición política cuando los conservadores y liberales independientes aceptaron la opción electoral, los medios de comunicación de sus opositores – sobre todo *La Prensa* – fueron rehabilitados, el movimiento obrero recibió el Código de Trabajo, y Estados Unidos se convenció de que la permanencia de Somoza en la presidencia hasta el fin de su mandato en 1947 no afectaría la estabilidad de Nicaragua.

Algunos observadores pudieron haber interpretado la coyuntura desde otra óptica, creyendo que Somoza había sido puesto a la defensiva por los hechos de junio y julio de 1944, y que el retiro de su candidatura para otro período presidencial reflejaba una sensible disminución de la fortaleza de su régimen. Sin embargo, la oposición de conservadores y liberales independientes fue incapaz de revertir los resultados electorales fraudulentos de 1947. El presidente Argüello no pudo subvertir el control ejercido por Somoza sobre el Partido Liberal y la Guardia Nacional sin provocar su propio derrocamiento. Somoza ya no era presidente, pero nunca dejó de dirigir la Guardia Nacional y el Partido Liberal o de controlar el aparato del Estado a través de estas instituciones.

CITAS Y NOTAS

1. Por ejemplo, unos 790 liberales se congregaron en Jinotega el 2 de febrero de 1944 (bajo la dirección del alcalde) para celebrar el cumpleaños de Somoza y proclamarlo como candidato para un nuevo período presidencial. Caja 75, AN. En San Rafael del Sur, casi 600 habitantes hicieron lo mismo el 26 de marzo de 1944. Caja 247, fólder “jefaturas políticas y alcaldías”, AN. Un número considerable de las “firmas” en estas proclamas parecen haber sido escritas por la misma mano, lo cual sugiere que los analfabetas pedían a otros que incluyeran su nombres o que los nombres eran inventados.

2. *La Prensa*, 24 de junio de 1944.

3. *La Prensa*, 20 y 26 de abril de 1944.

4. Secretary of State to Certain Diplomatic Representatives in the American Republics, 2 de febrero de 1944, FRUS, 1944, 7:1391-1392.

5. *La Prensa*, 4 de mayo de 1944.

6. U.S. Department of Commerce, *Country Economic Reviews*, "Nicaragua," vo. 3, no. 33 (agosto de 1946): 2.

7. *La Prensa*, 29 de junio de 1944.

8. Fondo Salvadora de Somoza, no. 3, AN.

9. *La Prensa*, 30 de junio de 1944.

10. *La Prensa*, 29 de junio de 1944.

11. *La Prensa*, 1 de julio de 1944.

12. *La Prensa*, 2 de julio de 1944.

13. *La Prensa*, 4 de julio de 1944.

14. Gerónimo Ramírez Brown a ASG, Managua, 3 de julio de 1944, Fondo Salvadora de Somoza, no. 3, AN.

15. Un memorando interno enviado a Somoza por un asesor con fecha del 3 de julio de 1944 expresa la necesidad de sacar a los seguidores de Somoza a la calle para demostrarle a Estados Unidos que la mayoría de nicaragüenses seguían respaldando al régimen; esto sería "absolutamente indispensable" para que Roosevelt siguiera dando su "apoyo" a Somoza. Fondo Salvadora de Somoza, no. 8, AN.

16. *La Prensa*, 5 de julio de 1944.

17. Fondo Salvadora de Somoza, no. 8, AN.

18. SG a jefes políticos de Boaco y Chontales, Managua, 12 de julio de 1944, caja 258, AN.

19. *La Prensa*, 6 de julio de 1944; una copia de la declaración se encuentra en Fondo Salvadora de Somoza, no. 8, AN.

20. *La Prensa*, 6 y 11 de julio de 1944. Argüello había sido ministro de Gobernación desde noviembre de 1940. Se había opuesto a las ambiciones políticas de Somoza en 1936; en 1944 seguía sosteniendo los principios liberales de democracia constitucional que resultaban reñidos con las ambiciones de Somoza y con su propia participación en un gobierno somocista. Su carta de renuncia puede verse en Fondo Salvadora de Somoza, no. 6, AN.

21. *La Prensa*, 11 de julio de 1944.

22. *La Prensa*, 7 de julio de 1944; carta abierta de los estudiantes universitarios a ASG, León, 11 de julio de 1944, Fondo Salvadora de Somoza, no. 3, AN.

23. *La Prensa*, 15 de julio de 1944.

24. *La Prensa*, 4 de agosto de 1944.

25. Edgardo Buitrago, entrevista con el autor, León, 23 de marzo de 1984. Buitrago fue diputado conservador en la década de 1950 quien se reunió con Somoza en varias ocasiones por razones políticas.

26. *Paso a paso*, no. 5, 23-30 de noviembre de 1984. En su momento, este fue el periódico oficial del PLI. En el número que se cita, Alejandro Zúñiga Castillo, uno de los fundadores del partido, escribe una breve historia del PLI. Un documento interno del partido titulado "Breve historia del Partido Liberal Independiente" (mimeo, sin fecha) ubica los orígenes del PLI en Sandino, a quien describe como "el más sólido y firme baluarte del Ideario Liberal Independiente."

27. Enrique Espinoza Sotomayor, entrevista con el autor, Managua, 11 de marzo de 1985. Espinoza fue uno de los miembros fundadores del Grupo Democrático Nicaragüense y del PLI.

28. Cordero Reyes, Castro Wassmer y Pasos, *Nicaragua bajo el régimen de Somoza*, pp. 4-11 (la cita es de la página 8).

29. Ibid., pp. 13-14.

30. Espinoza Sotomayor, entrevista con el autor, Managua, 11 de marzo de 1985.

31. Varios volantes distribuidos por el PLI durante junio y julio de 1944 pueden verse en Fondo Salvadora de Somoza, no. 8, AN.

32. *La Prensa*, 18 de julio de 1944.

33. De los catorce fundadores del PLI, doce eran abogados o médicos. *Paso a paso*, no. 5, 23-30 de noviembre de 1984. Algunos de los fundadores del PLI vislumbraban un estado más activo e intervencionista, tal como lo describieron en un manifiesto (nunca publicado) de 1937 escrito por Espinoza Sotomayor, Salvador Buitrago Ajá, Alejandro Zúñiga Castillo y cinco más. Insistieron en la necesidad de un gran esfuerzo educacional bajo dirección estatal, una reforma del sistema impositivo para tornarlo más progresivo, una reforma agraria en tierras del estado, legislación laboral e industrialización nacional. También eran partidarios de la eugenesia según los "métodos más recientes". Espinoza Sotomayor, *Partidos políticos*, pp. 112-116; este escrito es la tesis de Espinoza para optar al título en derecho.

34. *La Prensa*, 29 de junio de 1944.

35. *La Prensa*, 5 de julio de 1944.

36. Chamorro no hace mención alguna de los acontecimientos de 1944 en su autobiografía.

37. Gould, “‘For an Organized Nicaragua’: Somoza and the Labour Movement, 1944-1948,” especialmente pp. 358-360. Un memorandum sin fecha de un tal Manuel Mendoza a ASG describe una propuesta para ganarse el apoyo de la clase obrera mediante el nombramiento de dirigentes somocistas en los cargos de dirección de los sindicatos. Como resultado, dice Mendoza, “el movimiento obrero actuará con moderación en sus indispensables y avanzadas demandas socialistas”. Fondo Salvadora de Somoza, no. 8, AN.

38. Fondo Salvadora de Somoza, no. 6, AN.

39. *La Prensa*, 28 de mayo de 1944.

40. Gould mantiene que la respuesta favorable del movimiento obrero ante las promesas de Somoza “solo se explica dentro del contexto de un movimiento obrero joven y potencialmente dinámico, debilitado por las divisiones internas, constantemente acosado por los patronos y seriamente amenazado por un posible asalto al poder por parte de la derecha política”. Gould, “‘For an Organized Nicaragua’: Somoza and the Labour Movement, 1944-1948,” pp. 360-361.

41. Fondo Salvadora de Somoza, no. 8, AN. Este volante en particular está firmado por los sindicatos de zapateros, tipógrafos, electricistas, albañiles, carpinteros, aurigas y choferes.

42. Una copia de este volante me fue proporcionado por Jeff Gould, quien lo encontró en los Archivos Nacionales de Estados Unidos en Washington.

43. “Manifiesto a la Nación del Partido Socialista de Nicaragua,” Colección Centroamericana, legajo 4, no. 638, IHCA.

44. “No estamos con los agitadores del orden público,” Colección Centroamericana, legajo 4, no. 583, IHCA.

45. “Seis verdades sobre el Presidente Somoza,” Fondo Salvadora de Somoza, no. 6, AN.

46. J. David Zamora a ASG, Jinotega, 6 de julio de 1944, caja 267, folder “listas del Partido Liberal,” AN.

47. Fondo Salvadora de Somoza, no. 3, AN.

48. Teniente Alfonso J. Borgen a ASG, Chichigalpa, 5 de julio de 1944, caja 262, AN.

49. Pueden verse varios pronunciamientos en apoyo a Somoza redactados por los empleados del ferrocarril y del servicio de telégrafos en caja 248, AN.

50. Conferencia de prensa tal como informó *La Prensa*, 10 de junio de 1944.

51. *La Prensa*, 5 de agosto de 1944. El ministro de Gobernación ya les había escrito el 28 de julio de 1944 a todos los dueños de periódicos insistiéndoles que sus reportajes debían apegarse a “la realidad”. Subrayó que la crítica a la Guardia Nacional, en particular, ya no sería tolerada porque dicha institución se encontraba “por encima de los intereses políticos” como garante de las instituciones y la paz de la República. *La Prensa*, 29 de julio de 1944.

52. *La Prensa*, 8 de agosto de 1944.

53. Nicaragua, Ley sobre la libertad de emisión y difusión del pensamiento, LG/DO 48,188 (7 de septiembre de 1944).

54. LG/DO 49,19 (27 de enero de 1945); 49,42 (23 de febrero de 1945).

~

55. El Código de Trabajo de 1945 se mantuvo vigente hasta entrada la década de 1990.

56. Nicaragua, *Código de Trabajo*, LG/DO 49,23 (1 de febrero de 1945), artículos 193, 198-99, 203-4.

57. *Ibid.*, artículos 222-29.

58. Ibid., artículos 251-64, 302-13.

59. Gould, “‘For an Organized Nicaragua’: Somoza and the Labour Movement, 1944-1948,” pp. 367-379.

60. Nicaragua, Secretaría de Agricultura y Trabajo, *Memoria* de 1944, p. 133, y de 1945, p. 9. *La Memoria* de 1945 dice que se habían inscrito más de 100 sindicatos durante el año, pero un análisis de LG/DO indica que el total anduvo por 97.

61. De acuerdo a Jeff Gould, el total de obreros organizados a mediados de 1945 era de más de 17,000 en 100 sindicatos; éstos representaban a más del 50% de todos los trabajadores de minas, transporte y fábricas y alrededor del 25% de toda la población económicamente activa fuera de la agricultura. La cifra de Gould es cuatro veces más grande que la oficial. Si sus datos y sus fuentes son confiables, y no tengo porque dudarlo, probablemente incluyan a todos los sindicatos y sus miembros – ya sea los inscritos en el Ministerio de Agricultura y Trabajo o los que operaban independientemente. Vease Gould, “‘For an Organized Nicaragua’: Somoza and the Labour Movement, 1944-1948,” p. 364.

62. Una análisis completo de las relaciones del régimen somocista con el movimiento obrero durante 1944-45 puede encontrarse en Gould, “‘For an Organized Nicaragua’: Somoza and the Labour Movement, 1944-1948,” pp. 358-379.

63. ASG a la Federación de Trabajadores de Managua, Managua, 26 de abril de 1946, caja 320, folder “organizaciones obreras 1946”, AN.

64. Gould, “‘For an Organized Nicaragua’: Somoza and the Labour Movement, 1944-1948,” pp. 378-379. Información adicional sobre este conflicto laboral se encuentra en la caja 320, folder “organizaciones obreras 1946,” AN.

65. Elite, no. 53 (enero de 1945); caja 295, folder “discursos pronunciados por amigos del señor Presidente,” AN.

66. Estas “actas de adhesión y proclamación” pueden ubicarse en las siguientes cajas del Archivo Nacional: 281, 282, 285, 286, 294 y 296.

67. Manuel Urbina B., jefe político de Granada, al teniente Francisco Aguirre Baca (Granada, 27 de julio de 1945); mayor L. Delgadillo, comandante departamental de Jinotega, al teniente Francisco Aguirre Baca (Jinotega, 27 de julio de 1945); L. Alfaro a varios grupos en Estelí (julio de 1945), caja 295, folder “telegramas varios,” AN.

68. Rockefeller resumió esta conversación en una carta que envió al Embajador de Estados Unidos en Managua, Secretario de Estado en funciones (Rockefeller) al Embajador en Nicaragua (Warren), 7 de agosto de 1945, FRUS, 1945, 9:1215.

69. Memorando de la conversación del Embajador en Nicaragua (Warren), 10 de agosto de 1945, FRUS, 1945, 9:1215.

70. Embajador en Nicaragua (Warren) al Secretario de Estado, 29 de agosto de 1945, FRUS, 1945, 9:1217.

71. Embajador en Nicaragua (Warren) al Eecretario de Estado, 22 de octubre de 1945, FRUS, 1945, 9:1219.

72. Ibid.

73. Embajador en Nicaragua (Warren) al Secretario de Estado, 9 de noviembre de 1945, FRUS, 1945, 9:1221.

74. Embajador en Nicaragua (Warren) al Secretario de Estado, 15 de noviembre de 1945, FRUS, 1945, 9:1222.

75. Secretario de Estado al Embajador en Nicaragua (Warren), 23 de noviembre de 1945, FRUS, 1945, 9:1222-23.

76. Embajador en Nicaragua (Warren) al Secretario de Estado, 29 de noviembre de 1945, FRUS, 1945, 9:1225-28.

77. Embajador en Nicaragua (Warren) al Secretario de Estado, 1 de diciembre de 1945, FRUS, 1945, 9:1228-29.

78. Memorando de conversación, del Jefe de la División de Asuntos del Caribe y América Central (Cochran), 17 de diciembre de 1945, FRUS, 1945, 9:1229-30.

79. Millett, *Guardians of the Dynasty*, pp. 206-7.

80. Nicaragua, Decreto reconociendo a los dos partidos políticos principales, LG/DO 49,175 (22 de agosto de 1945).

81. Nicaragua, Decreto levantando suspensión de garantías constitucionales decretada en 1941, LG/DO 49,255 (30 de noviembre de 1945).

82. Embajador en Nicaragua (Warren) a Secretario de Estado, 30 de noviembre de 1945, FRUS, 1945, 9:1227; *La Prensa*, 11 de junio de 1946.

83. ASG a William Krehm, 27 de septiembre de 1945, caja 294, AN.

84. Nicaragua, Reforma a la ley electoral de 1923, LG/DO 49,216 (11 de octubre de 1945).

85. Pueden verse una serie de artículos de Eduardo Pérez Valle publicados en *El Nuevo Diario*, 19-22 de diciembre de 1982. Pérez Valle era estudiante universitario a mediados de la década de 1940 y fungió como director de *El Universitario*, un semanario que criticaba a Somoza y ensalzaba a Sandino en cuanto oportunidad se presentaba. *El Universitario* finalmente dejó de publicarse cuando el gobierno prohibió que las imprentas recibieran su material. Entrevista del autor con Eduardo Pérez Valle, Managua, 13 de junio de 1984. El gobierno trató de clausurar *El Universitario* en marzo de 1946 amparado por la prohibición jurídica de publicar “propaganda subversiva,” en este caso la “doctrina del sandinismo,” que el gobierno equiparaba con el comunismo. Carlos A. Morales, ministro de

Gobernación, a la Corte Suprema, Managua, 9 de marzo de 1946, Fondo Salvadora de Somoza, no. 6, AN. La Corte Suprema, sin embargo, falló a favor de *El Universitario*, el cual siguió publicándose durante un año más.

86. Ernesto Pereira a ASG, Chinandega, 6 de septiembre de 1945, caja 287, folder “Jefatura Política de Chinandega,” AN.

87. *La Prensa* criticó a Somoza por tratar de imponer a su sucesor por decreto, y por utilizar al gobierno de Nicaragua para su propio peculio, al grado de que estaría dispuesto a aliarse con los comunistas para conservar el poder. “La opulencia epulónica del gobernante es un constante insulto a la miseria del pueblo nicaragüense,” *La Prensa*, 13 de junio y 18 de diciembre de 1946.

88. Carlos Pasos y Salvador Buitrago Díaz al mayor Ambrosio Parodi y Alfredo Castillo, Managua, 7, 14 y 20 de noviembre de 1946; y Alfredo Castillo a Carlos Pasos y Salvador Buitrago Díaz, Managua, 12, 19 y 20 de noviembre de 1946, caja 317, AN.

89. Manuel Pérez Estrada y Edmundo Leets C. al mayor Ambrosio Parodi, Managua, 7 de noviembre de 1946; y Alfredo Castillo a Manuel Pérez Estrada, Managua, 12 de noviembre de 1946, caja 317, AN.

90. Partido Liberal Nacionalista, “Informe que rinde la Junta Directiva Nacional y Legal del PLN a la Gran Convención,” León, 20 de enero de 1946, pp. 11-13, caja 336, folder “juntas directivas del PLN,” AN.

91. El 31 de octubre de 1945, Somoza García, en su calidad de presidente de la Junta Directiva Nacional y Legal del PLN, escribió al Banco Nacional solicitando un sobregiro por C\$180,000, que sería pagado en seis meses con los fondos provenientes de la contribución del 5% de los salarios de los empleados públicos. Hasta le propuso al Banco que se descontara la suma directamente del cheque de pago de cada empleado. Caja 321, fólder “Banco Nacional de Nicaragua, 1946,” AN.

92. *La Prensa*, 26 de octubre de 1946. La contribución de Somoza al fondo del partido bien podría entenderse como una inversión productiva.

93. Jose M. Zelaya, secretario de la Junta Directiva Nacional y Legal del PLN, a ASG, Managua, 19 de diciembre de 1946, caja 336, folder "juntas directivas del PLN," AN.

94. Informe del tesorero del PLN, Camilo López Irías, a ASG, presidente nacional del PLN, Managua, 18 de enero de 1946, caja 336, folder "juntas directivas del PLN," AN. Pueden consultarse también los informes financieros mensuales en AN: Fondo Salvadora de Somoza, no. 8; caja 267, folder "listas del Partido Liberal;" y caja 310.

95. Partido Liberal Nacionalista, "Informe que rinde la Junta Directiva," pp. 8-10.

96. Carmen Noguera, jefe político del departamento de Jinotega, a ASG, Jinotega, 22 de octubre de 1945, caja 282, AN.

97. Edmundo Rostrán B. a ASG, Managua, 1 de agosto de 1945, caja 310, AN. Rostrán había estado en la zona de Bluefields, donde observó mucha corrupción y malos tratos hacia la población por parte de los oficiales de la Guardia Nacional. En el importante distrito minero de Siuna, solamente 170 personas se habían hecho presentes para proclamar la candidatura de Somoza el 29 de julio de 1945, entre una población adulta en el distrito que superaba los 4,000.

98. Marco Tulio Martínez, secretario de la Comisión Departamental Electoral de Chontales, a ASG, Juigalpa, 30 de octubre de 1945, caja 286, AN. En el distrito de Acoyapa en Chontales, los resultados obtenidos por cada facción reflejan claramente la importancia del dominio de los caudillos; allí los ganadores en cada mesa se llevaban la totalidad de los votos.

99. Carlos Castro Wassmer, el caudillo del PLI en León, mandó a repartir un volante en el cual anunciaba su retorno del exilio y su completa desconfianza en Somoza. Todos los ofrecimientos de Somoza no eran sino argucias para ganar tiempo, dijo; la verdadera solución tendría que comenzar con la renuncia de Somoza y la formación de un nuevo gobierno que estaría en capacidad de garantizar una elección libre. Copia del volante se encuentra anexada a una carta que envió Félix Medina a ASG, Telica, 30 de abril de 1946, caja 339, AN.

100. *La Prensa*, 18 de junio, 7 y 10 de julio de 1946.

101. *La Prensa*, 13 y 14 de agosto de 1946.

102. Por cierto, el PLI conservó los mismos estatutos y principios ideológicos del PLN hasta 1954, cuando redactó su propio programa político. Orlando Blandino, entrevista con el autor, León, 26 de marzo de 1984.

103. Memorando enviado al general Emiliano Chamorro a un comité conjunto del PLI y el partido Conservador, Managua, sin fecha pero probablemente de fines de 1945, caja 310, folder “archivo especial de documentos políticos,” AN.

104. *La Prensa*, 18 de agosto y 3 de septiembre de 1946.

105. Argüello, Plataforma política para el período presidencial 1947-1953.

106. La plataforma del PLI-Partido Conservador puede encontrarse en *La Prensa*, 18 de agosto de 1946 y números subsiguientes.

107. Guardia Nacional, no. 167 (octubre de 1946), p. 7.

108. Cuadro elaborado a máquina que contiene datos de padrón y de urna, fechado 8 de marzo de 1947, caja 344, AN.

109. *La Prensa*, 30 de julio de 1946.

110. *La Prensa* partió de los datos de inscritos en 1928 y 1932 y los proyectó hasta 1946 según el incremento poblacional estimado; concluyó que no podrían ser más de 180,000 los inscritos en 1946. *La Prensa*, 7 de septiembre de 1946.

111. *La Prensa*, 4 de febrero de 1947.

112. Alvaro Ramírez G., entrevista con el autor, Managua, 16 de enero de 1984. Ramírez se desempeñó como observador de urna en las elecciones de 1947.

113. Memorando interno del PLN (sin fecha), Fondo Salvadora de Somoza, no. 113, AN.

114. *La Prensa*, 25 de febrero de 1947. La oposición insistió que los somocistas obtuvieron más votos que la oposición solamente en el departamento de Madriz, una afirmación que es evidentemente exagerada.

115. Solamente el movimiento laboral denominado Obrerismo Organizado de Nicaragua, fundado por políticos liberales en la década de 1920, se sumó públicamente a la campaña de Argüello a cambio de concesiones tales como una representación obrera en el Congreso Nacional, seguridad social y distribución de tierras a campesinos. Consúltese su Manifiesto del 15 de septiembre de 1946 en caja 314, AN.

116. El "Primer Congreso de Cámaras de Comercio y Producción de Nicaragua," realizado en diciembre de 1944, solicitó mayores facilidades de crédito por parte del Banco Nacional, la creación de una policía rural, la reducción de las tarifas ferroviarias, y las reformas al Código de Trabajo que aconsejaba la misma experiencia. *Boletín*, no. 112 (diciembre de 1944).

117. Editorial en *Boletín*, no. 133 (septiembre de 1946).

118. Como ejemplo, el informe anual correspondiente a 1945-46 presentado por el presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Managua limita sus comentarios al tema de los cuellos de botella en la administración pública; no hace referencia alguna a los problemas económicos y sociales mayores que enfrentaba el país. *Boletín*, no. 131 (julio de 1946). La Cámara de Comercio de León se limitó a comentar el depósito previo excesivamente alto que estaba exigiendo el Banco Nacional para la compra de divisas y a solicitar la construcción de la carretera León-Sébaco que abriría el tráfico desde la costa del Pacífico directamente hacia el norte del país. Véase *Mercurio*, no. 142 (enero de 1946), y no. 147 (enero-febrero de 1947).

119. Fondo Salvadora de Somoza, no. 13, AN.

120. Informe sobre el “amotinamiento” de opositores políticos en Masatepe preparado por los tenientes Domingo Torres R. y Gonzalo Matus L., Managua, 19 de febrero de 1947, Fondo Salvadora de Somoza, no. 6, AN.

121. Nicaragua, Presidencia de la República, Discurso pronunciado por el doctor Leonardo Argüello el 1 de mayo de 1947 ante el Congreso Nacional al tomar posesión de la Presidencia de la República.

122. *La Prensa*, 11 de mayo de 1947.

123. *La Prensa*, 16 de abril de 1947.

124. *La Prensa*, 13 de abril de 1947.

125. *La Prensa*, 13 de abril y 13 de mayo de 1947.

126. *La Prensa*, 17 y 23 de mayo de 1947.

127. Un recuento detallado de los acontecimientos que desembocaron en el golpe de Estado, y del mismo golpe de Estado, se

encuentra en Millett, *Guardians of the Dynasty*, pp. 208-211, y *La Prensa*, 28 de mayo de 1947.

128. LG/DO 51,114 (2 de junio de 1947).

CAPÍTULO V

Las alianzas con conservadores y capitalistas

El derrocamiento de Argüello provocó una sorpresa general. Las maniobras ejecutadas por el presidente y el jefe director de la Guardia Nacional para eliminarse mutuamente transcurrieron con gran rapidez, dejando a la mayoría de los actores políticos del país en condición de espectadores. Sin embargo, cuando Argüello se asiló en la embajada de México el día siguiente del golpe, las repercusiones de su derrocamiento empezaron a salir a luz. En Nicaragua, las reacciones fueron muy diversas. En un extremo, algunos sectores asumieron una posición cautelosa de apoyo a una solución política; en el otro, se manifestó un rechazo absoluto a cualquier entendimiento con Somoza. El golpe provocó una fuerte reacción de parte de Estados Unidos, y casi todas las Repúblicas latinoamericanas se pronunciaron al respecto. En consecuencia, Somoza se vio obligado a maniobrar en dos niveles para recuperar la escasa legitimidad de su régimen, mermada por el fraude electoral y el fiasco de la presidencia de Argüello. La habilidad para evaluar sus opciones políticas, así como para actuar de manera rápida y decisiva, le permitió aventajar a sus opositores, imponer un nuevo gobierno y conservar su cargo de jefe director de la Guardia Nacional.

A. La creación de un nuevo gobierno

En primer lugar, Somoza enfrentó la tarea de escoger un nuevo presidente para concluir el período presidencial de Argüello. El

primer designado a la presidencia por el Congreso, Benjamín Lacayo Sacasa, asumió el cargo, pero al parecer esta maniobra no bastó para legitimar al nuevo gobierno. El 6 de junio, Lacayo Sacasa anunció la celebración de elecciones para conformar una Asamblea Constituyente, con miras a reconciliar a los dos partidos históricos y restablecer la concordia en el país. Un decreto emitido unos días más tarde, estipuló que las elecciones debían celebrarse el 3 de agosto de 1947, y limitó la participación en la contienda a los Partidos Liberal Nacionalista y Conservador tradicionalista.¹ A raíz del derrocamiento de Argüello, Somoza intentaba incorporar a los conservadores a una solución política, al proponer un acuerdo nacional entre los dos partidos principales. Si bien dicho pacto no bastaría para justificar el golpe de Estado, al menos lo relegaría al olvido.

En un inicio, los conservadores mostraron interés en ser partícipes de algún arreglo. La junta directiva del partido se reunió y acordó conversar con el presidente Lacayo; asimismo, manifestó su rechazo a la posición de los liberales independientes, que exigían el retorno de Argüello a la presidencia como requisito previo de cualquier acuerdo político. Los conservadores se limitaron a pedir garantías de limpieza en el proceso electoral y respeto a sus resultados. El 18 de junio, la dirigencia conservadora se reunió con Lacayo, y le solicitó posponer la fecha de las elecciones para Asamblea Constituyente, a fin de disponer de más tiempo para organizar su campaña. Asimismo, exigieron revisar el padrón y eliminar sus irregularidades, pues en opinión de los conservadores éstas eran suficientes como para invalidar cualquier resultado electoral. Al finalizar dicha reunión, el general Chamorro declaró que Lacayo había rechazado las condiciones presentadas por los conservadores, por lo que éstos se abstendrían de participar en las elecciones.² Varios días después, el líder conservador, Carlos Cuadra Pasos, intentó concertar una reunión entre Somoza y Chamorro para que ambos llegaran a un acuerdo político, pero su iniciativa no prosperó.³

Al mismo tiempo que Somoza se mostraba abierto a la negociación política con los conservadores, reprimía a la izquierda política y al movimiento laboral. El 5 de julio de 1947, el presidente provisional Lacayo decretó el confinamiento de los principales dirigentes del

Partido Socialista en la isla de Ometepe, bajo el único cargo de pertenecer a una agrupación política identificada con una ideología extraña, prohibida por la Constitución. Se les acusaba de constituir un potencial peligro para el país, capaces de alterar el orden público, interrumpir la reorganización “pacífica” de las instituciones del Estado e introducir ideas comunistas que subvertirían “el orden social y político establecido”.⁴ Este hecho evidencia que hacia mediados de 1947, Somoza había roto todos sus vínculos con la izquierda; en la nueva coyuntura buscaba una alianza con los conservadores, por considerar que ésta era la manera más eficiente de lograr un nuevo consenso nacional y garantizar la supervivencia del régimen.

La Guardia Nacional tampoco emergió incólume del episodio Argüello, pues cuando el depuesto presidente se asiló en la embajada mexicana, once oficiales militares lo acompañaron.⁵ Se cree que otros 150 oficiales opuestos a la permanencia de Somoza en la jefatura de la Guardia, o que habían manifestado apoyo a las políticas de Argüello, también fueron purgados.⁶ Somoza, por supuesto, retuvo su cargo de Jefe Director; desde entonces, su continuidad en el mismo nunca fue cuestionada seriamente. En su calidad de Jefe Director de la Guardia y ministro de Guerra, tanto en el gabinete de Lacayo como en el de otros presidentes, Somoza conservó el control directo del ejército, y también, para efectos prácticos, del aparato gubernamental.

Una vez neutralizadas las posibilidades de acción de la izquierda, y consolidado el pleno control sobre la Guardia, el régimen llevó adelante las elecciones para Asamblea Constituyente el 3 de agosto, según se había anunciado. Sin embargo, al parecer la participación fue muy escasa, por lo que los resultados del escrutinio de los votos ni siquiera fueron publicados en La Gaceta/Diario Oficial. De acuerdo a *La Prensa*, no más de un 5% del electorado de Managua se tomó la molestia de votar, y la mayoría de éstos eran empleados públicos preocupados por conservar el puesto.⁷ Otro indicador de la apatía predominante entre el electorado es el número de votantes que asistieron a inscribirse en el padrón del departamento de Chinandega, los días 7 y 14 de julio de 1947. De acuerdo a la dirigencia departamental del PLN, se inscribieron 6,058 liberales y 1,813 conservado-

res, lo que suma un total de 7,871 votantes inscritos.⁸ En comparación a los 19,499 que se inscribieron para las elecciones presidenciales de 1947, solamente un 40% lo hizo para las elecciones de Asamblea Constituyente en ese departamento dominado por los liberales.

Sin duda, la premura con la cual se anunciaron las elecciones impidió que se desarrollara una campaña de convocatoria más eficaz. Por otra parte, el interés principal de los liberales era efectuar las elecciones tan pronto como fuera posible, sin preocuparse mucho por el número de ciudadanos que se presentarían a las urnas. La elección no tuvo mayor significado para el pueblo, pues las únicas opciones eran el PLN y los conservadores nacionalistas, a quienes Somoza devolvió su protagonismo político, en vista de la abstención de los conservadores tradicionales. En todo caso, Somoza logró su objetivo de conformar una Asamblea Constituyente, necesaria para darle un cariz de legitimidad al cambio de gobierno. Lacayo Sacasa insistió en este aspecto en su discurso ante la Constituyente el día de su inauguración. Según el nuevo presidente, tanto liberales como conservadores coincidían en que la Constituyente representaba la solución a la crisis; si bien los conservadores se habían ausentado de los comicios, todos los sectores del pueblo que desearon expresar sus preferencias políticas lo hicieron en plena libertad. Además, su gobierno había sido respetuoso de las libertades ciudadanas, aunque se había visto obligado a clausurar un par de periódicos por emitir opiniones “subversivas”, y confinar en la isla de Ometepe a un grupo de individuos – los dirigentes socialistas – por difundir “propaganda comunista” y planificar actividades “terroristas” en Managua y otras ciudades del país. En general, concluyó Lacayo, el país se encontraba en paz y el gobierno controlaba la situación.⁹

La instalación de la Asamblea Constituyente fue muy oportuna, pues hasta entonces ningún gobierno del hemisferio había reconocido la legitimidad del gobierno de Lacayo Sacasa. Peor aún, Washington decidió suspender toda la ayuda y el entrenamiento militar a la Guardia Nacional, y retiró al director estadounidense de la Academia Militar.¹⁰ Además, las sesiones de la conferencia interamericana de Río de Janeiro estaban por iniciarse, y la delegación nicaragüense ignoraba si sería reconocida como representación oficial de un gobierno legalmente constituido.

A comienzos de agosto, la preocupación de Somoza ante la actitud del gobierno de Washington era evidente. En una reunión con el embajador estadounidense, le ofreció redactar una Constitución nueva acorde con las preocupaciones de Washington sobre seguridad regional y defensa militar. En concreto, prometió incluir algunas cláusulas proscribiendo todas “las actividades y propaganda comunista”. Además, ofreció que se facultaría al ejecutivo nicaragüense para autorizar la instalación de bases militares en suelo nacional, en momentos de emergencia continental.¹¹ Llegada la fecha de inauguración de la conferencia de Río de Janeiro, el 21 de agosto, la Asamblea Constituyente ya había electo un nuevo presidente para concluir el período de Argüello. El escogido era Víctor Román y Reyes, un señor de edad, tío de Somoza; el único punto notable de su discurso inaugural ante la Asamblea fue su llamado a la unidad nacional, dirigido especialmente a los liberales disidentes y conservadores recalcitrantes.¹² Estados Unidos se resistía a reconocer al nuevo gobierno, pero Somoza ejercía un evidente control sobre el país. En consecuencia, el Departamento de Estado envió un cable a su embajador en Managua comunicándole: “aunque nos guste o no”, el gobierno de Román y Reyes tiene “todos los atributos y cualidades de un gobierno de facto estable”. El nuevo gobierno no sólo mantenía el orden público interno, sino también cumplía con todas sus obligaciones internacionales. La interrogante del momento era su viabilidad, al margen de su condición de gobierno títere de Somoza. A juicio del autor del cable, las probabilidades de que surgiera un gobierno estrictamente constitucional o más representativo en el futuro eran escasas.¹³ No obstante, Estados Unidos se negó a establecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Román y Reyes hasta después de la conferencia panamericana, celebrada nueve meses más tarde en Bogotá, en abril de 1948.¹⁴

Aprovechando la presión externa y el aislamiento internacional del gobierno de Román y Reyes, un grupo de conservadores intentó organizar un golpe armado. Éste fue uno de los casos más lastimosos dentro del largo historial de asaltos al poder por la vía de la fuerza en Nicaragua. El 7 de septiembre de 1947, pequeños grupos de hombres armados atacaron la mina La India, en el norte del departamento de Chinandega, así como el puerto de Muelle de los Bue-

yes en el río Rama, departamento de Zelaya. La Guardia Nacional sufrió varias bajas pero en cuestión de horas puso en fuga a los atacantes y procedió a perseguirlos. Una semana más tarde, el estado mayor de la Guardia informó al país haber capturado a los cabecillas de la intentona, y comprobado sus nexos con el Partido Conservador, en particular con el general Chamorro, quien supuestamente les había prometido grandes recompensas cuando llegara al poder.¹⁵ En efecto, Chamorro permaneció oculto hasta recibir un salvoconducto del gobierno, y abandonó el país el 27 de septiembre.¹⁶ Otros no fueron tan afortunados; muchos conservadores y liberales independientes fueron capturados en Chinandega, Granada, Masaya y otros puntos del país. Sin embargo, al parecer, el gobierno conoció que los miembros del PLI, incluyendo a su líder Carlos Pasos, no tuvieron participación en el intento de golpe, pues fueron puestos en libertad a comienzos de octubre.¹⁷ Los conservadores que seguían guardando prisión fueron liberados en noviembre, después de una reunión entre delegados de ese partido y Somoza.¹⁸ Finalmente, el 29 de noviembre, el gobierno permitió al expresidente Argüello salir de su refugio en la embajada de México en Managua y trasladarse a aquel país, donde murió dos semanas más tarde.¹⁹

Somoza logró, pues, maniobrar con éxito para superar la crisis de seis meses abierta por el episodio Argüello y sus secuelas: el boicot conservador a las elecciones, el intento de golpe de Estado y el aislamiento diplomático. El régimen sobrevivió sin mayores daños, y la siguiente tarea consistía en atar los cabos sueltos y organizar una nueva coalición para garantizar un período de tranquilidad política. La iniciativa en este sentido la tomó Carlos Cuadra Pasos, al enviar una carta a Somoza y Chamorro el 20 de junio de 1947.

B. Ablandando a los conservadores

La mayor preocupación de Cuadra Pasos, dirigente de la facción “civilista” del Partido Conservador, siempre fue el problema de la unidad nacional y el peligro de la agitación popular que, a su juicio, se manifestaba cuando el gobierno era débil, indeciso o, peor aún, ilegítimo. La unidad nacional – consideraba Cuadra Pasos – sólo podía ser resultado de un consenso entre los dos partidos políticos

principales y sus respectivos líderes, Somoza y Chamorro. Sin embargo, también tomaba en cuenta una tercera fuerza, la Guardia Nacional, que se identificaba con uno de los partidos y su líder. Sus palabras son más que elocuentes:

“... la situación actual es turbada por los siguientes elementos: carencia de legitimidad en las autoridades supremas. Una posición de Gobierno de facto en el orden internacional. Una oposición vehemente, que se exalta cada día más y más. Como tornillo central, el Ejército, moderado hasta hoy por su disciplina, y que mantiene la paz por el temor que infunde su eficiencia militar. Ensombrecen el cuadro los disturbios producidos por la inconformidad creciente de las masas, en las cuales, asoman métodos no conocidos antes en nuestras luchas, que a pesar de su barbarie tenían algo de caballeresco. Las probabilidades crecientes de la guerra civil. La flaqueza en aumento de nuestra economía que nos muestra el fantasma del hambre. Han operado hasta hoy, algunas libertades como válvulas de seguridad, para el escape de las exaltaciones: la libertad de prensa, relativa libertad de reuniones, y la libertad de palabra. Pero el dominador de la paz aparente es el Ejército, contenido en sus procedimientos de muerte por la buena disciplina”.²⁰

A juicio de Cuadra Pasos, la amenaza de la anarquía era real, especialmente por el cariz ilegítimo que había rodeado la elección de Argüello, su posterior derrocamiento y el nombramiento del gobierno provisional de Lacayo. Solamente la elección de un gobierno nuevo surgido de comicios limpios podría revitalizar el consenso nacional y otorgarle el respeto y la legitimidad que tanta falta hacía. Pero la garantía de una elección libre pasaba primero por la separación de la Guardia Nacional de la vida política, lo que según Cuadra Pasos podría lograrse si ambos partidos políticos mayoritarios prometían no alterar su estructura institucional o su carácter permanente.²¹ Para alcanzar este objetivo, y prevenir cualquier “perturbación”, resultaba indispensable que Chamorro y Somoza se reunieran lo antes posible.

La reacción de Somoza fue positiva, al menos en lo que se refería a una reunión con Chamorro bajo el patrocinio de ambos partidos políticos. Sin embargo, el general Chamorro – cuyas discrepancias con Cuadra Pasos eran quizás más graves que sus desavenencias con Somoza – respondió en términos muy cautelosos. De acuerdo a su propia interpretación del momento político, los liberales se hallaban muy débiles debido a la escisión de los liberales independientes, por lo que Somoza apenas encabezaba a “un reducidísimo número del liberalismo oriental” – región en la que la fuerza de ese partido era tradicionalmente escasa, de todos modos. Además, Chamorro insistía en que Argüello debía ser tomado en cuenta en cualquier acuerdo, en vista de que su figura gozaba de amplia simpatía en el ámbito internacional. En síntesis, Chamorro proponía reunirse con Somoza y con Argüello, a la vez, para sentar las bases de una elección limpia y proceder a la transformación de la Guardia Nacional en un ente apolítico, tal como establecía el tratado firmado veinte años atrás por el encargado de negocios de Estados Unidos, Dana Munro, y el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Cuadra Pasos.²²

El rechazo de Chamorro a la propuesta de Cuadra Pasos, y su insistencia en condiciones inaceptables para Somoza, se correspondía con su creencia de que el momento era propicio para un golpe de Estado. Sin duda, pensó que el rechazo estadounidense al derrocamiento de Argüello había debilitado el control de Somoza sobre la Guardia, así como su liderazgo dentro de un PLN dividido.²³ Por lo tanto, llegó al convencimiento de que bastaría atacar algunos cuarteles de la Guardia para animar a la población a levantarse en apoyo a la rebelión; además, suponía que los oficiales de la Guardia repudiarían a Somoza y procederían a derrocarlo. Sin embargo, la intentona de Chamorro fracasó rotundamente, socavando su control sobre el partido Conservador, por lo que los civilistas pudieron tomar la iniciativa política cuando retornó la calma. De nuevo, Cuadra Pasos se ofreció para negociar un acuerdo político con Somoza que garantizara la paz en Nicaragua a largo plazo.

El 23 de diciembre de 1947, Cuadra Pasos escribió a Somoza ofreciéndole su análisis sobre la situación nacional. Le expresó su

profunda preocupación por la falta de reconocimiento diplomático al gobierno de Román y Reyes, así como por el creciente número de exiliados nicaragüenses que se movilizaban en Centroamérica y México, en busca de armas para derrocarlo. En su opinión, la causa principal de esta situación era la naturaleza ilegítima del gobierno de Román y Reyes, pero en vista de la reciente muerte del expresidente Argüello, ninguna de las facciones políticas en contienda podía arrogarse más legitimidad que la otra. Por lo tanto, resultaba necesario y posible alcanzar un nuevo consenso nacional y así allanar el camino para la instauración de un gobierno legítimo. Éste debía ser resultado de elecciones imparciales y honestas o, para utilizar los términos de Cuadra Pasos: “de la libertad de los comicios o de una ficción cercana de esa libertad que ha calmado otras veces la agitación”. Cuadra Pasos consideraba aceptable la permanencia de Román y Reyes en la presidencia durante un par de años más mientras se organizaba la elección nacional; sin embargo, era necesario dar al Partido Conservador una cuota de participación en los cargos del gobierno, con miras a garantizar la buena marcha del proceso. Sugería, pues, ofrecer a los conservadores algunos puestos en el Consejo Nacional de Elecciones, así como en las ramas legislativa y judicial del gobierno. Estas medidas, junto con una amnistía nacional que cubriera todas las ofensas políticas cometidas hasta entonces, calmarían las pasiones políticas en el país y conduciría al reconocimiento diplomático.²⁴

La respuesta de Somoza fue, por lo general, bastante receptiva, aunque observó que las preocupaciones de Cuadra Pasos en torno a la posibilidad de un estallido de violencia y anarquía dentro de Nicaragua eran exageradas, pues la Guardia Nacional se mantenía disciplinada y en control pleno del país, asegurando: “Estoy en capacidad de asegurar que la oposición no cuenta con la fuerza necesaria para desatar una guerra civil que arrastre al pueblo a la matanza y que ponga en peligro la estabilidad del Gobierno legítimo”. Somoza expresó que su mayor preocupación era que la posible inestabilidad política abriera las puertas a la penetración de la ideología y las prácticas comunistas, las cuales, a su vez, pondrían en peligro la seguridad continental. Por lo demás, rechazó la posición de Cuadra Pasos acerca de la ilegitimidad del gobierno de Román y Reyes, cuya falacia quedaba demostrada por el reconocimiento diplomático que recién le

habían extendido los gobiernos de Costa Rica y República Dominicana. En todo caso, manifestó su disposición de negociar con los elementos más “moderados” del Partido Conservador un acuerdo político que condujera a elecciones nacionales, en las cuales cada partido “histórico” mediría su verdadero apoyo popular. Concluyó su misiva invitando a Cuadra Pasos a elaborar un borrador del pacto que debía servir de marco político para dicho proceso electoral.²⁵

De esta manera, las bases de un acuerdo político integral empezaron a tomar cuerpo hacia comienzos de 1948. La Asamblea Constituyente se aprestaba a terminar la redacción de una nueva Carta Magna. Puesto que su caudillo conflictivo Emiliano Chamorro se encontraba en el exilio, los conservadores sólo podían recibir orientaciones de Cuadra Pasos, líder moderado y conciliador, y sus allegados. El movimiento obrero y los grupos de izquierda habían sido desbandados, encarcelados o desterrados. No existía otra fuerza política con posibilidades de triunfar, y la opción de la insurrección armada recién había demostrado su ineffectividad. Sin lugar a dudas, Somoza estaba actuando desde una posición de mucho poder, tal como se reflejaría en la nueva Constitución y los pactos Somoza-Cuadra Pasos de enero y febrero de 1948.

En términos generales, la nueva Constitución era muy similar a aquella promulgada en 1939. Sin embargo, contemplaba algunos cambios significativos, así como ciertas concesiones simbólicas dirigidas a los conservadores. En primer lugar, el preámbulo contenía una referencia religiosa, lo que constituía una de las reivindicaciones más sentidas por los conservadores desde la época en que los liberales habían eliminado toda mención a Dios en la Carta Magna. En segundo lugar, se eliminaron los artículos presentes en el documento de 1939 que otorgaban al Estado la facultad de parcelar las tierras no cultivadas de los latifundios, con miras a fomentar la pequeña y mediana propiedad rural – articulado que, a juicio de los terratenientes conservadores, representaba una permanente amenaza a sus propiedades. Por otra parte, se incluyó un artículo de particular interés para Estados Unidos, prohibiendo terminantemente cualquier partido comunista o fascista, y proscribiendo aquellos que tuviesen nexos internacionales. Otro artículo permitía al Congreso nicaragüense actuar

de manera expedita para autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, así como la instalación de bases militares extranjeras en caso de una emergencia continental. Finalmente, para complacer a Anastasio Somoza, el artículo 283 otorgaba al Jefe Director de la Guardia Nacional el control exclusivo sobre todo nombramiento o traslado dentro de la Guardia; la única condición al respecto era la de informar al presidente de la República de los cambios efectuados.²⁶ Sin duda, el episodio Argüello había convencido a Somoza que no podía confiar en ninguna otra persona las decisiones concernientes a la Guardia.

La nueva Constitución revistió de legitimidad el gobierno de Román y Reyes al extender su gestión hasta mayo de 1952, y convertir la Asamblea Constituyente en la rama legislativa del gobierno hasta abril del mismo año. Sin embargo, su mayor legitimidad se derivó del acuerdo Somoza-Cuadra Pasos del 26 de febrero de 1948. Mediante este acuerdo, los dos partidos principales del país proyectaron la imagen de haber conciliado sus diferencias, abriendo las puertas al reconocimiento diplomático por parte de las Repúblicas americanas. Asimismo, la participación de los conservadores en algunas funciones de gobierno transmitió la idea de que se había alcanzado la unidad nacional bipartidista. En realidad, Cuadra Pasos había firmado dicho acuerdo a nombre de “un grupo considerable de conservadores que han permanecido en la Oposición”, y no como representante oficial del Partido Conservador como tal. En todo caso, el objetivo principal estipulado por el acuerdo era la celebración de elecciones libres en un plazo de tres años, lo que daba a Cuadra Pasos suficiente margen de tiempo para persuadir a los demás dirigentes del Partido Conservador para que refrendaran oficialmente el pacto.²⁷

Tal como se desprende de una carta enviada por Cuadra Pasos a Somoza el 23 de diciembre de 1947, el acuerdo establecía que debían hacerse todos los esfuerzos posibles para garantizar la imparcialidad de las elecciones a celebrarse en 1952. En primer lugar, los Conservadores debían ser consultados para la formación de un nuevo consejo electoral nacional y los correspondientes consejos departamentales. Además, la Guardia Nacional mantendría una estricta neutralidad durante el proceso electoral, bajo la supervisión de

una comisión bipartidista que emitiría las recomendaciones del caso. También se decretaría una amnistía general para liberar a todos los presos por delitos políticos y permitir el retorno a Nicaragua de los exiliados. De esta manera, los Conservadores podrían aspirar a ganar una cuota significativa del poder político en el país, incluso la presidencia de la República. Pero el acuerdo tuvo alcances todavía mayores: le otorgó de inmediato a los Conservadores un número de cargos en el gobierno mediante una serie de decretos ejecutivos y artimañas legislativas.

En primer lugar, bajo los términos del acuerdo, siete diputados y cuatro senadores del Partido Conservador “en oposición” serían “electos” en comicios especiales a realizarse en el corto plazo. La Constitución recién promulgada contemplaba esta eventualidad, pero el acuerdo expresamente estipulaba que los liberales se abstendrían de participar “para dar lugar para que sean electos los Representantes Conservadores de la oposición” – una aclaración necesaria para distinguirlos de los Conservadores Nacionalistas, quienes no estaban en la oposición. En segundo lugar, los liberales abrirían una vacante en la Corte Suprema de Justicia y en cada tribunal de apelaciones, para que abogados conservadores ocuparan esos cargos. En tercer lugar, se daría al Partido Conservador una “participación justa” en las juntas directivas de los bancos estatales y en las instituciones de servicio público, al igual que en todas las misiones diplomáticas especiales y delegaciones a conferencias internacionales. En cuarto lugar, se trasladaría bajo el control del Partido Conservador una mayoría de concejos municipales en aquellos departamentos donde habían obtenido el mayor número de votos en las elecciones presidenciales de 1932 – y donde presuntamente todavía contaban con un apoyo mayoritario. Finalmente, la puesta en marcha de los acuerdos anteriores dependería del reconocimiento diplomático que recibiera el gobierno de Román y Reyes de los demás gobiernos del continente; si dicho reconocimiento no se materializaba, el acuerdo sería anulado.

De esta manera, todos recibían algún beneficio del acuerdo. Por un lado, confirmaba la legitimidad del gobierno de Román y Reyes ante los ojos de la oposición – o, al menos, una parte de la misma – y proyectaba esta imagen de legitimidad ante la comunidad internacional. Contenía garantías escritas asegurando que la siguiente elec-

ción sería realmente limpia y libre. Otorgaba a los conservadores una representación limitada en ciertos gobiernos municipales de acuerdo a los resultados de la elección de 1932, considerada por ellos como la última contienda libre y transparente en la historia del país. Asimismo, les garantizaba una representación minoritaria en los poderes legislativo y judicial, y les ofrecía la oportunidad de colocar a algunos de sus seguidores – al menos, a los allegados de Cuadra Pasos – en las empresas públicas. De esta manera, los conservadores “civilistas” obtuvieron acceso a algunas de las prebendas repartidas por el régimen, lo que fortaleció su posición dentro del Partido Conservador. Si bien es cierto que esta negociación se proyectó como un esfuerzo patriótico para garantizar la paz y la prosperidad del país, en realidad fue una componenda política que proporcionó ventajas mutuas a ambas partes.

Así lo percibió el general Chamorro, quien, desde la ciudad de Guatemala, criticó el acuerdo en un comunicado fechado el 2 de marzo de 1948. Dicho pacto carecía de apoyo popular – afirmó – pues había sido suscrito por el representante de un “grupo” de conservadores y el jefe de un partido liberal resquebrajado por la escisión del PLI. A juicio de Chamorro, la única alianza política con apoyo popular era la que había ganado las elecciones de 1947: la coalición de conservadores y liberales independientes. Por tanto, rechazó el acuerdo Somoza-Cuadra Pasos de manera tajante, y llamó a la oposición a no desmayar en su lucha contra Somoza.²⁸ Efectivamente, no le quedaba otra opción.

Los demás grupos que se oponían a Somoza se encontraban en un dilema similar. Su impotencia se refleja en un panfleto que hicieron publicar en Bogotá un mes antes de la Novena Conferencia Panamericana celebrada en esa ciudad en abril de 1948. Éste fue suscrito por el Frente Nacional pro Libertad de Nicaragua, que agrupaba a conservadores chamorristas, liberales independientes, y dos organizaciones hasta entonces desconocidas: la Asociación Nacional Femenina y la Unión Democrática de Obreros y Campesinos. En su proclama, denunciaron al régimen somocista por sus prácticas rapaces en el mundo de los negocios y su irrespeto a las libertades democráticas fundamentales. Explicaron que Argüello había sido derrocado debido a su afán de cortar el cordón umbilical que alimentaba

las empresas de Somoza a expensas del erario público: “Sus primeras disposiciones gubernamentales trataron de impedir que el Dictador General Anastasio Somoza continuara haciendo uso de los recursos de las empresas públicas de la Nación, y de la Guardia Nacional, en el beneficio particular de sus innumerables propiedades rústicas y urbanas, en un anhelo de rehabilitación económica del país, con los propios fondos del pueblo nicaragüense, que Somoza ha usado por largos años en su exclusivo provecho personal”. El Frente Nacional procedió entonces a describir la concentración de poder de Somoza y su control sobre la Guardia Nacional, los principales bancos y los servicios públicos y la burocracia estatal – lo que, en su conjunto, constituía un verdadero monstruo político. “Nos encontramos, pues, frente a una formidable maquinaria de manejo centralizado, en todas y cada una de las actividades del país: un poder totalitario que, emergiendo de una sola y caprichosa mano, forma la clásica pirámide cesarista”.²⁹

A fin de enfrentar este poder omnímodo – sugería el Frente Nacional – la Unión Panamericana debía mediar entre las fuerzas políticas opositoras, con miras a lograr una transición a la democracia mediante la supervisión de elecciones libres, la reorganización y despolitización de la Guardia Nacional y la sustitución de Somoza por una junta de gobierno interina.³⁰ Sin embargo, Somoza se había adelantado al negociar con Cuadra Pasos su propia “transición” a la democracia, la que incluía una amnistía general para todos aquellos implicados en crímenes contra el Estado y la convocatoria a elecciones especiales de legisladores conservadores. Además, no estaba dispuesto a permitir que instancias internacionales, como la Unión Panamericana, intervinieran en los asuntos internos de Nicaragua.³¹ Las maniobras de Somoza dieron fruto cuando la Conferencia Panamericana resolvió que todos los países del hemisferio debían restablecer relaciones diplomáticas entre sí, abriendo las puertas para que Washington se reconciliara con el gobierno de Managua.

C. La gran coalición

El sector de la oposición que rechazaba la opción de negociar con Somoza se encontró en un callejón sin salida, cuando su llamado a la comunidad internacional a censurar el régimen fue desa-

tendido, y quedó al margen del acuerdo pactado por Cuadra Pasos en febrero de 1948. En último término, tan sólo tenía dos alternativas: mantener su rechazo a cualquier contacto o arreglo con el régimen, o convertirse en una oposición “leal” a Somoza, sujeta a las condiciones y limitaciones que le impondría el mismo régimen. La primera alternativa era válida con miras a que en el futuro se le presentara la oportunidad de obtener un triunfo rotundo, en la medida en que conservara su imagen limpia de cualquier trato con el somocismo. Quienes sostenían esta posición, preveían que eventualmente la oposición popular al régimen llegaría a ser lo suficientemente fuerte como para barrer totalmente con el somocismo. Sin embargo, los líderes de este sector intransigente de la oposición debían poseer ciertas cualidades políticas, sobre todo, un historial de lucha inclaudicable ante la dictadura. El Partido Liberal Independiente, así como algunos grupos estudiantiles y juveniles, asumieron este desafío, como se verá más adelante.

La segunda alternativa contemplaba negociar y presionar políticamente al régimen desde el interior del sistema, con miras a lograr cambios evolutivos, específicamente hacia un sistema bipartidista funcional dominado por “las paralelas históricas” – como se denominaba entonces a los Partidos Liberal y Conservador – dejando a la Guardia Nacional la función de vigilar por el buen funcionamiento del sistema electoral y la sucesión normal de los gobiernos. Esta fue la posición adoptada por los civilistas dentro del Partido Conservador, que desarrollaron una estrategia para atraer gradualmente a los elementos más recalcitrantes, especialmente a los seguidores del general Chamorro.

En efecto, entre 1948 y 1950 el Partido Conservador atravesó luchas internas para definir sus opciones políticas. En un inicio, los chamorristas se ubicaron al lado de la oposición radical. El propio Chamorro se ocupaba de organizar una revuelta armada contra Somoza; con ese propósito fundó la Legión del Caribe junto con José Figueres de Costa Rica y Juan Rodríguez García de la República Dominicana.³² Dentro de Nicaragua, los civilistas luchaban por conservar cierta influencia dentro de las estructuras del partido, aunque constituían una minoría y eran desplazados ocasionalmente por

chamorristas.³³ El propio Somoza se mostró preocupado, pues el pleno del Partido Conservador se demoraba en ratificar el pacto Somoza-Cuadra Pasos.³⁴ Finalmente, Chamorro aceptó discutir una solución política al impasse y volvió a Managua en enero de 1950.

Después de varias reuniones entre los emisarios del general Chamorro y Somoza, ambos líderes finalmente se sentaron a conversar en marzo de 1950. Chamorro exteriorizó su preocupación en torno a la honestidad de las elecciones venideras e inicialmente exigió que éstas fueran supervisadas por la recién creada Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, Cuadra Pasos insinuó que él y sus civilistas participarían en las elecciones aunque tal condición no se cumpliera. El 31 de marzo de 1950, Chamorro y Somoza suscribieron un nuevo pacto político que fijó la celebración de elecciones presidenciales y para conformar una Asamblea Constituyente el 21 de mayo de 1950. Asimismo, el pacto aseguraba veinte curules para los conservadores en la futura Asamblea Constituyente y garantizaba que la nueva Constitución contemplaría la elección directa de las autoridades municipales. Los ministerios de Finanzas y Educación también quedarían en manos de políticos conservadores.³⁵

El pacto Chamorro-Somoza fue ratificado por la junta directiva del Partido Conservador el 2 de abril de 1950. De acuerdo a *La Prensa* éste fue aprobado por una mayoría de 10 votos contra 3, aunque muchas personas que asistieron a la reunión en calidad de observadores expresaron su insatisfacción con el pacto. Chamorro se vio obligado a ofrecer una explicación pública sobre las razones que lo habían llevado a tomar tal decisión, después de mantener durante años una oposición intransigente contra Somoza. El caudillo recordó su constante lucha por derrocar a la dictadura de Somoza, pero explicó que sus esfuerzos por encontrar aliados y armamento para “revolucionar” siempre habían fracasado. En consecuencia, al regresar de su último período de exilio, decidió cambiar sus tácticas y avanzar por el camino del acomodamiento político. Solicitó a todos los conservadores que pensarán seriamente sobre el pacto, a fin de entender su lógica y su importancia.³⁶ Tres días más tarde, Somoza y Chamorro firmaron el llamado “Pacto de los Generales”, colocando así las bases de una nueva coalición política y abriendo una nueva etapa en las relaciones entre ambos partidos históricos.³⁷

Una vez firmado el pacto, el Congreso procedió a oficializar la fecha y establecer los procedimientos a seguir en el proceso electoral venidero. Proclamó que las elecciones se realizarían “con base en la libertad electoral y la representación de las minorías”, pero bajo “la amenaza comunista”.³⁸ Se elegirían sesenta diputados a la Asamblea Constituyente, de los cuales el partido mayoritario recibiría cuarenta y el minoritario diecisiete, además de tres curules reservados para el candidato presidencial derrotado y para los dos expresidentes electos por voto popular directo; es decir, Chamorro y Somoza. El Congreso suspendió la vigencia de los procedimientos constitucionales para la inscripción de nuevos partidos, limitando la participación en el proceso electoral a los liberales y conservadores. Con miras a garantizar la “honestidad” de las elecciones, se procedería a reorganizar las juntas electorales departamentales, dejando a los conservadores una representación mayoritaria en las juntas de los departamentos donde habían demostrado mayor fuerza en las elecciones de 1932; es decir, Chontales, Granada, Rivas, Matagalpa y Boaco. En los demás departamentos, los liberales tendrían mayoría en las juntas electorales. Una vez instalada la Asamblea Constituyente, se procedería a escoger a los nuevos miembros del poder judicial; la Corte Suprema de Justicia tendría tres magistrados liberales y dos conservadores, mientras que las cortes de apelaciones de Granada, León y Masaya tendrían minorías de magistrados conservadores.

El Congreso también fijó una lista de principios que debían ser incorporados en la nueva Constitución. Entre éstos, se destacaba el principio que establecía la participación de un representante del partido de la minoría en todos los cuerpos colegiados – administrativos y políticos – incluyendo las juntas directivas de los bancos estatales y los servicios públicos, los concejos municipales y todas las misiones internacionales. Para efectos de la reorganización de los concejos municipales, la representación de los partidos mayoritario y minoritario debía reflejar los resultados de las elecciones de 1932. Asimismo, la nueva Constitución incluiría algunas disposiciones relativas al carácter no partidista del ejército nacional, absoluta libertad electoral, prohibición de la reelección presidencial, la libertad de expresión y posibilidad de conceder el derecho al voto a las mujeres. Era obvio, por lo tanto, que las negociaciones entre liberales y con-

servadores, así como los acuerdos legislativos que definieron todo el proceso político, acabaron determinando el resultado electoral aún antes de realizarse los comicios. La puesta en escena de esta pantomima estaba preparada; tan sólo restaba seleccionar los candidatos presidenciales, elaborar los programas de gobierno respectivos y llevar a cabo la campaña electoral.

Los conservadores tomaron los acuerdos muy en serio, suponiendo que, al menos en esta oportunidad, el proceso electoral no estaría sesgados en su contra. Una “junta de notables”, presidida por Chamorro, escogió a Emilio Chamorro Benard, un conocido empresario de Granada, como su candidato presidencial. También elaboró un programa de gobierno que coincidía, en términos generales, con los planteamientos de los liberales en torno a la seguridad social y el salario mínimo para los obreros, la igualdad cívica y política de las mujeres, la ampliación del sistema escolar y de la red de carreteras, y la construcción de represas hidroeléctricas y sistemas de riego. La única “diferencia” explícita entre conservadores y liberales era la insistencia de los primeros en la necesidad de inculcar valores cristianos en las escuelas para combatir el comunismo, de respetar a la Iglesia y sus sacramentos, y de reducir el consumo de alcohol entre la población, lo que implicaba reducir su importancia como fuente de ingresos fiscales. Algunos de estos puntos no generaban controversia, pues bajo el régimen somocista, los liberales nunca habían molestado a la Iglesia ni habían sido tolerantes frente a los comunistas, y la reducción del consumo de aguardiente era un objetivo aceptable para todos. Quizás la única diferencia sustancial que distinguía a los conservadores era su apoyo a la “libertad de comercio irrestricta”, entendida como un apoyo al derecho de los agroexportadores de recibir pago en dólares y negociar su venta en un mercado libre.³⁹ Sin embargo, ni siquiera este punto constituía un problema serio, después de la estabilización del córdoba en el período de la posguerra.

El asunto más importante para los conservadores era la promesa de Somoza de garantizar una campaña libre y de respetar los resultados electorales. La dirigencia conservadora hizo circular un volante en León, atribuyendo su disposición a participar en el proceso electoral – después de muchos años de abstención – a su confian-

za en que los acuerdos formales suscritos por ambos partidos y el compromiso personal de Somoza garantizaban la plena libertad y transparencia de la contienda. Aunque Chamorro Benard carecía de experiencia política y base social, su designación como candidato presidencial de los conservadores, indica el deseo de este partido de presentar una nueva imagen.⁴⁰ Al parecer, el entusiasmo de la dirigencia conservadora se mantuvo en alto, pese a la selección de Somoza como candidato presidencial de los liberales en la convención del partido en León el 22 de abril de 1950, y a su elevación al cargo de presidente provisional el 7 de mayo por decisión del senado a la muerte de Román y Reyes. El general Chamorro difundió un comunicado asegurando que la presidencia provisional de Somoza no incrementaba su ya considerable poder, por lo que no constituía suficiente motivo para retirarse de la contienda. Los conservadores también se preocuparon por dar amplia difusión a un memorando enviado por Somoza, el 9 de mayo, a todos los oficiales de la Guardia Nacional y a las autoridades civiles, instándolos a comportarse de forma imparcial, y permitir el desarrollo de la campaña y las elecciones en plena libertad.⁴¹ Estas disposiciones hacen suponer que el principal adversario de los conservadores no era Somoza, sino la apatía de los electores, sobre todo a raíz del Pacto de los Generales, percibida por muchos como la rendición de Chamorro frente a Somoza. Por tanto, la dirigencia conservadora se veía obligada a convencer a sus seguidores que el proceso electoral de 1950 sería distinto al del año 1947, y que su posición no era una de debilidad.

Una vez iniciada la campaña, los conservadores, al parecer, gozaron de bastante libertad para desarrollar sus actividades proselitistas. El 2 de mayo organizaron una manifestación importante a la cual concurrieron unas 75,000 personas, portando pancartas en que se criticaba el “continuismo somocista”. Los dirigentes conservadores se jactaron de su capacidad de reunir tal multitud, sin recurrir a las tácticas somocistas de repartir dinero, comida y guaro. En Granada y Masaya también se llevaron a cabo otras concentraciones numerosas.⁴² Sin embargo, el proceso no estuvo exento del tradicional acoso a la oposición por parte de autoridades locales, ni de amenazas vertidas por los matones armados de la reserva civil.⁴³ No obstante, la dirigencia conservadora no emitió amenaza alguna de retirar-

se de la contienda, y las elecciones se realizaron el 21 de mayo, tal como se había previsto.

Los resultados de los comicios representaron un desastre para los conservadores, pues recibieron menos de la cuarta parte del total de votos depositados, y tan sólo ganaron con mayoría absoluta en el departamento de Granada. (Ver Cuadro 5.1.) En los demás departamentos de tendencia conservadora, como Boaco, Chontales y Rivas, lograron un poco más del 45 por ciento de los votos. En el resto del país, los liberales ganaron con mayorías sustanciales o abrumadoras. Como de costumbre, se recibieron denuncias de abusos electorales desde muchos sitios. El representante conservador ante el Consejo Electoral firmó el acta final después de presentar una lista de irregularidades, entre éstos, recuentos viciados, intimidación a votantes y ausencia de observadores del Partido Conservador en diversas urnas. Sin embargo, los conservadores solamente presentaron una demanda de anulación de los resultados en un pequeño cantón en Boaco, donde estaban en juego noventa y seis votos.⁴⁴ Incluso *La Prensa* reconoció la victoria de Somoza, y aplaudió el comportamiento de altura de la Guardia Nacional, insinuando que los pobres resultados de los conservadores eran producto de un abstencionismo generalizado. Una vez publicados los resultados de la votación, el Partido Conservador emitió un manifiesto expresando su inconformidad con los resultados, pero se comprometió a continuar participando en el proceso político en calidad de “centinela” de los intereses nacionales. Es decir, el partido estaba dispuesto a acatar los compromisos adquiridos en el Pacto de los Generales, pero no daría su apoyo al partido de gobierno a cambio de favores.⁴⁵

D. Crecimiento económico y reforma institucional

El triunfo electoral somocista constituyó tan sólo la manifestación más visible del poder acumulado por el régimen a comienzos de la década de 1950. Al parecer, se hallaba fortalecido, después de resistir y superar una serie de desafíos a su autoridad tanto en Nicaragua como en el exterior. Sus enemigos políticos habían sido anulados o acallados por el mero peso de su presencia. Conjugando políticas de conciliación y confrontación con respecto a diversos grupos sociales y políticos, Somoza logró mantener una permanente ventaja

sobre sus opositores. Sin embargo, no es posible atribuir la permanencia del régimen únicamente a la habilidad política de Somoza frente a sus opositores. El fundamento de su fuerza radicaba en las instituciones políticas y administrativas conformadas desde la década de 1930, que constituían una “formidable maquinaria de manejo centralizado”, tal como expresó el Frente Nacional pro Libertad de Nicaragua en 1948. Precisamente, la supervivencia del régimen fue posible porque el Estado nicaragüense – estructurado y dirigido durante quince años de control somocista – había adquirido la cohesión y la capacidad de adaptación para resistir ataques y crisis sucesivas.

Cuadro 5.1
Resultados electorales, 1950

Departamento	Liberales	%	Conservadores	%	Totales
Boaco	4,476	(52.2)	4,106	(47.8)	8,582
Carazo	6,706	(71.5)	2,666	(28.5)	9,372
Chinandega	14,395	(85.2)	2,498	(14.8)	16,893
Chontales	5,406	(52.4)	4,906	(47.6)	10,312
Estelí	6,796	(82.5)	1,439	(17.5)	8,235
Granada	4,340	(46.9)	4,911	(53.1)	9,251
Jinotega	6,231	(86.7)	957	(13.3)	7,188
León	22,468	(92.0)	1,951	(8.0)	24,419
Madriz	5,286	(89.9)	595	(10.1)	5,881
Managua	26,319	(75.0)	8,754	(25.0)	35,073
Masaya	8,561	(67.0)	4,209	(33.0)	12,770
Matagalpa	14,848	(74.6)	5,047	(25.4)	19,895
Nva. Segovia	4,437	(86.9)	667	(13.1)	5,104
Rivas	4,320	(54.5)	3,609	(45.5)	7,929
Río San Juan	3,307	(83.2)	669	(16.8)	3,976
Río San Juan	15,401	(86.4)	2,417	(13.6)	17,818
Totales	153,297	(75.6)	49,401	64,904	202,698

Fuente: Consejo Nacional de Elecciones, *El juicio electoral de 1950* (Managua: Talleres Nacionales, 1956), pp. 354-55.

Bajo el régimen somocista, el Estado se desarrolló pese a la marcada estrechez económica experimentada en diversas coyunturas, durante la década transcurrida entre 1935 y 1945. El peso de la Gran Depresión mermó considerablemente los recursos materiales necesarios para fortalecer al Estado. Por tanto, el régimen se esforzó por incrementar la eficiencia de la burocracia y extraer todos los recursos posibles mediante nuevos impuestos, con miras a incrementar el poder y la presencia del Estado. Después de 1945, la situación

cambió radicalmente dada la abundancia de recursos materiales, al grado que el Estado evidenció dificultades para absorber y administrar su porción del ingreso nacional. Esta nueva situación fue directamente resultado de la expansión económica que arrancó de manera modesta en los años inmediatos al fin de la Guerra Mundial, pero alcanzó proporciones impresionantes después de 1950.

La base de esta expansión económica fue un acelerado crecimiento del valor de las exportaciones que se cuadruplicó entre 1946 y 1956, acompañado de un crecimiento aún mayor de las importaciones. La bonanza exportadora fue alimentada por un incremento notable en la demanda y el precio del café, el producto de exportación más importante de Nicaragua hasta entonces. El precio promedio de una libra de café nicaragüense de exportación pasó de US\$0.168 en 1946 a US\$0.527 en 1951, llegando a alcanzar el valor de US\$0.629 en 1956. Sin embargo, los cambios más dramáticos en la producción para la exportación se dieron en el cultivo del algodón, que hasta 1949 había sido cosechado y exportado en cantidades insignificantes. Sin embargo, hacia 1955 el algodón superó al café como principal producto de exportación del país, lo que conllevó la tala masiva de árboles en toda la planicie costera entre Managua y Chinandega para crear grandes plantaciones. Las exportaciones de sésamo y madera también experimentaron incrementos notables, pero en volúmenes muy inferiores a los del algodón. La producción de oro se mantuvo durante todo el período, pero su importancia para la economía del país siguió siendo modesta a causa de la naturaleza tipo enclave de su producción y exportación.⁴⁶

La bonanza económica se tradujo de inmediato en un incremento dramático en los niveles de recaudación fiscal del gobierno. En términos de dólares estadounidenses, los ingresos del Estado se cuadruplicaron entre 1946 y 1956, y los egresos experimentaron un aumento todavía mayor. (Ver Cuadro 5.2.) Evidentemente, esta expansión se debió a un incremento del comercio exterior y, en particular, de las importaciones, que todavía ocupaban el primer lugar como fuente de ingresos fiscales. Durante algunos años de la década de 1950, los derechos aduaneros llegaron a superar el 60 por ciento del total de los ingresos del gobierno, y adquirieron una importancia similar a la que tenían durante los años anteriores a la crisis de la década

de 1920. (Ver Cuadro 5.3.) Como resultado, otras fuentes de ingreso fiscal decrecieron proporcionalmente, aunque los impuestos indirectos todavía sumaban entre dos tercios y tres cuartas partes del total de ingresos fiscales.

Cuadro 5.2
Ingresos y egresos fiscales, 1945-1956

Año	Ingresos en C\$	Ingresos en US\$	Egresos en C\$	Superávit/ déficit
1945-46	52,908,606	10,581,721	57,683,888	4,775,282
1946-47	77,128,808	15,425,761	66,285,236	10,843,572
1947-48	59,082,290	11,816,458	64,627,342	(-) 5,545,052
1948-49	78,365,921	15,673,184	76,658,161	1,707,760
1949-50	69,159,084	13,831,816	66,199,235	2,959,849
1950-51	90,316,688	18,063,337	81,409,515	8,907,173
1951-52	117,509,624	23,501,924	112,034,294	5,475,330
1952-53	154,497,174	30,899,434	145,693,549	8,803,625
1953-54	183,309,700	36,661,940	174,400,774	8,908,926
1954-55	209,836,171	41,967,234	232,651,800	(-) 22,815,629
1955-56	282,573,405	40,367,628	253,345,131	29,228,274

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Memorias*, especialmente las que corresponden a los años fiscales de 1954-55 y 1955-56, que contienen resúmenes estadísticos para todo el período.

*La tasa de cambio del córdoba con el dólar fue de 5:1 hasta julio de 1955, cuando se devaluó hasta 7:1.

Cuadro 5.3
Fuentes del ingreso fiscales, 1945-1956 (como porcentaje del ingreso total)

Año	a	Indirectos b	c	d	Directos(*)	Servicios públicos	Crédito público
1945-46	37.2	16.2	6.1	6.4	2.9	27.2	4.0
1946-47	35.2	9.1	4.3	5.1	1.9	24.2	20.2
1947-48	49.4	14.7	7.6	7.2	2.4	18.7	—
1948-49	41.9	12.1	6.6	6.4	1.7	18.3	13.0
1949-50	47.8	14.1	8.5	8.6	2.6	13.0	5.4
1950-51	57.7	12.0	7.0	7.8	2.5	13.0	—
1951-52	57.3	11.1	6.7	7.6	2.2	10.5	4.6
1952-53	61.3	8.7	6.5	7.4	2.1	11.0	3.0
1953-54	58.0	8.7	6.4	7.4	5.4	10.4	3.7
1954-55	56.2	8.7	6.4	7.4	9.8	8.5	3.0
1955-56	64.5	6.4	5.0	6.1	8.3	8.1	1.6

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Memorias*.

Claves: a = aduanas; b = aguardiente; c = tabaco; d = otros

(*) Incluye impuestos al capital y, después de 1953, impuestos sobre la renta.

El aumento del ingreso fiscal dio lugar a un crecimiento considerable de la participación del sector público en el desarrollo económico y social del país, aunque la distribución del gasto fiscal no varió mayor cosa durante los años de la posguerra. (Ver Cuadro 5.4.) Sin embargo, es notorio el cambio en la distribución del gasto en relación a los primeros diez años del régimen somocista. (Ver Cuadro 3.6.) La proporción de fondos destinados al pago de la deuda pública y las finanzas nacionales, así como a obras públicas, disminuyó considerablemente, aunque sus niveles en términos absolutos aumentaron durante todo el período en cuestión, debido al incremento acelerado del gasto fiscal en su conjunto. Por otra parte, la proporción del gasto dedicado a las fuerzas armadas y al ministerio de Gobernación se incrementó significativamente, después de alcanzar un punto bajo en 1943-44. Este incremento fue mayor después de 1950, cuando el régimen percibió que la amenaza de la resistencia armada había alcanzado niveles peligrosos. De igual manera, el porcentaje del gasto fiscal en educación casi se duplicó durante el período 1946-56, en relación a la década anterior, y las asignaciones fiscales dedicadas a la salud y la agricultura también experimentaron un incremento importante.

Cuadro 5.4

Egresos fiscales como porcentaje del total, 1945-1956

Año	Legislativo y judicial	Fuerzas armadas y Gobernación	Finanzas y deuda pública	Educación	Obras públicas y fomento	Agricultura, trabajo, salud	Otros
1945-46	5.0	26.4	19.7	10.0	30.7	4.5	3.7
1946-47	4.5	26.1	22.7	10.5	28.8	3.7	3.7
1947-48	4.5	26.9	27.3	11.1	20.9	5.4	3.9
1948-49	4.4	25.0	27.2	10.5	23.1	5.1	4.7
1949-50	5.0	34.0	28.0	10.0	11.3	4.3	7.4
1950-51	4.4	33.6	22.4	9.8	16.8	6.3	6.7
1951-52	4.3	31.3	21.0	11.1	20.4	5.9	6.0
1952-53	3.3	30.7	18.5	12.4	17.0	6.9	11.2
1953-54	3.3	27.8	18.0	11.2	21.8	9.4	8.5
1954-55	2.9	37.8	17.5	9.3	18.7	7.3	6.5
1955-56	2.8	31.7	19.7	10.0	19.2	8.7	7.9

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, *Memorias* 1955-56.

El incremento del gasto fiscal no fue acompañado por un incremento proporcional del empleo público, ni tampoco se dio un incremento proporcional del empleo público tan fuerte como el de los años 1936-1945. Durante el primer período, el empleo público aumentó en un 78 por ciento sobre un presupuesto que casi se duplicó (ver Cuadros 3.2 y 3.7), mientras que durante el período 1945-1956 el empleo público aumentó en un 60 por ciento sobre un presupuesto que aumentó cuatro veces. (Ver Cuadro 5.5.) Son dos las razones que explican esta diferencia. Por un lado, la proporción de fondos públicos destinados a la inversión aumentó de un 15.9 por ciento del total de egresos fiscales en 1945 hasta alcanzar un 34.7 por ciento en 1956, mientras que, por otro, el gasto en bienes y servicios (incluyendo salarios) disminuyó de un 84.1 por ciento a un 65.3 por ciento en el mismo período.⁴⁷ En síntesis, el salario promedio aumentó mientras que la proporción del gasto dedicado a salarios disminuyó, lo cual explica en parte el menor incremento proporcional del empleo público en relación al gasto total del gobierno.

Cuadro 5.5
Empleo público, 1945-1956
(1936-37=100)

Año	Plazas según Número	presupuesto nacional Índice	Ferrocarril Nacional	Otros
1945-46	9,837	185		
1946-47	10,305	194		
1947-48	10,546	198		
1948-49	11,470	216		
1949-50	11,392	214		
1950-51	11,326	213	1,870	
1951-52	11,917	224	2,036	423
1952-53	12,599	237	1,964	472
1953-54	14,742	277	1,991	618
1954-55	14,943	281	2,256	706
1955-56	15,772	296	2,152	

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto general de ingresos y egresos de la República de Nicaragua. Los datos de los empleados del ferrocarril para 1951-52 han sido tomados del Fondo Salvadora de Somoza, no. 6, AN; y para 1950-53 hasta 1955-56 de Naciones Unidas, CEPAL, *El desarrollo económico de Nicaragua* (México: Naciones Unidas, 1967), p. 171.

El aumento del empleo público en algunos rubros indicaría un creciente interés por parte del régimen en los programas sociales. El número de asalariados en el área de educación, maestros en su gran mayoría, aumentó de aproximadamente 2,100 en 1945 a cerca de 4,000 en 1956. (Ver Cuadro 5.6.) El número de trabajadores de las áreas de salud, agricultura y trabajo experimentó el mayor incremento proporcional. Dentro de éstos, se observó un mayor aumento entre los trabajadores de la salud, quienes pasaron de 375 en 1949-50 a 907 en 1955-56. Sin embargo, tal como se aprecia en el Cuadro 5.7, la distribución porcentual del empleo público durante los diez años en cuestión se mantuvo bastante equilibrada. Con la excepción de salud, agricultura y trabajo – el grupo más reducido de los empleados públicos – las demás categorías sufrieron pocas modificaciones en términos porcentuales. Esto sugiere que los incrementos en el número de empleados públicos se determinaron sin que mediara algún objetivo específico de política de Estado. Además, la gran mayoría de empleados públicos seguían dedicados a tareas puramente administrativas, fiscales y policiales.⁴⁸

Cuadro 5.6

Empleo público por categorías, 1945-1956
(1936-1937 = 100)

Año	a	b	c	d	e	f
1945-46	786 (245)	3,711 (142)	2,165 (197)	1,192 (414)	1,589 (193)	394 (219)
1946-47	828 (258)	3,862 (148)	2,331 (212)	1,210 (420)	1,566 (191)	508 (282)
1947-48	852 (265)	3,895 (149)	2,388 (217)	1,202 (417)	1,626 (198)	585 (325)
1948-49	812 (253)	4,256 (163)	2,769 (251)	1,193 (414)	1,726 (210)	714 (397)
1949-50	812 (253)	4,338 (166)	2,718 (247)	1,432 (497)	1,491 (182)	601 (334)
1950-51	820 (255)	4,385 (168)	2,577 (234)	1,304 (453)	1,494 (182)	746 (414)
1951-52	845 (263)	4,402 (169)	2,722 (247)	1,478 (513)	1,589 (194)	881 (489)
1952-53	828 (258)	4,463 (171)	3,191 (290)	1,385 (480)	1,615 (197)	1,117 (621)
1953-54	864 (269)	5,125 (200)	4,061 (369)	1,797 (624)	1,610 (196)	1,285 (714)
1954-55	908 (283)	5,240 (201)	3,992 (363)	1,694 (588)	1,774 (216)	1,335 (742)
1955-56	929 (289)	5,505 (211)	4,000 (363)	1,846 (641)	2,099 (256)	1,393 (774)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto general de ingresos y egresos de la República de Nicaragua. La cifra del número de plazas en educación pública para 1955-56 es un estimado. Claves: a = poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y Relaciones Exteriores; b = Ejército y Gobernación; c = Educación Pública; d = Hacienda (y Economía después de 1949-50); e = Fomento y Obras Públicas; f = Salud, Agricultura y Trabajo.

Cuadro 5.7

· Empleo público por categorías, 1945-1956
(como porcentajes del total)

Año	a	b	c	d	e	f
1945-46	8.0	37.7	22.0	12.1	16.2	4.0
1946-47	8.0	37.5	22.6	11.7	15.3	4.9
1947-48	8.1	36.9	22.6	16.4	15.5	5.5
1948-49	7.1	37.1	24.1	10.4	15.1	6.2
1949-50	7.1	38.1	23.8	12.6	13.1	5.3
1950-51	7.2	38.7	22.8	11.5	13.2	6.6
1951-52	7.1	36.9	22.8	12.4	13.4	7.4
1952-53	6.6	35.4	25.3	11.0	12.8	8.9
1953-54	5.9	34.8	27.5	12.2	10.9	8.7
1954-55	6.1	35.1	26.7	11.3	11.9	8.9
1955-56	5.9	34.9	25.4	11.7	13.3	8.8

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto general de ingresos y egresos de la República de Nicaragua. Claves: a = poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y Relaciones Exteriores; b = Ejército y Gobernación; c = Educación Pública; d = Hacienda (y Economía después de 1949-50); e = Fomento y Obras Públicas; f = Salud, Agricultura y Trabajo.

La preocupación del régimen por el desarrollo económico no se aprecia tanto en la organización de su burocracia sino en el afán de mejorar su eficiencia, así como en la creación de nuevas instituciones gubernamentales diseñadas para aumentar el apoyo del sector público a la empresa privada. Desde las reformas bancarias y fiscales de fines de la década de 1930 y comienzos de la de 1940, el régimen no había mostrado tanta preocupación por crear nuevos impuestos e instituciones públicas con miras a preparar al Estado para asumir un nuevo papel dentro del desarrollo nacional. En adelante, los asuntos concernientes a la política económica y fiscal, así como el desarrollo económico en general, serían abordados, supuestamente, a la luz de estudios técnicos, informes de comisiones, recomendaciones de grupos de consultores internacionales y la creación de nuevas instituciones estatales. Estos cambios fueron propiciados por la creciente presencia de diversas instituciones bilaterales y multilaterales, tales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y el programa de ayuda externa del presidente Truman conocido como Punto Cuatro. Estas instituciones proporcionaban asistencia financiera y técnica para programas de desarrollo, pero exigían garantías de que dicha asisten-

cia sería administrada correctamente por el país receptor. Desde el punto de vista del gobierno nicaragüense, el incremento del ingreso fiscal exigía una evaluación de las capacidades de las instituciones del estado para desembolsar los fondos de la manera más adecuada a los requerimientos de una economía capitalista en crecimiento.

El primer intento por racionalizar la estructura institucional del Estado desde comienzos de la década de 1940 ocurrió en noviembre de 1948, cuando el Congreso aprobó una ley definiendo las funciones administrativas y políticas de cada ministerio.⁴⁹ Dicha ley contemplaba la existencia de un gabinete de nueve ministerios, un jefe director de la Guardia Nacional, un ministro del Distrito Nacional correspondiente a la ciudad de Managua, un presidente del Tribunal de Cuentas y un fiscal general de Hacienda, quien representaría al gobierno en todos los trámites legales relacionados con asuntos fiscales. La mayoría de las funciones y atribuciones de los diversos ministerios y oficinas no sufrieron modificaciones de importancia. Sin embargo, la ley introdujo una innovación importante: la creación del Ministerio de Economía. Esta nueva institución centralizó numerosas funciones, tales como: la elaboración de las políticas de desarrollo económico, el establecimiento de la política fiscal y monetaria, la realización de estudios de inversión productiva en rubros no tradicionales, y la supervisión del control de precios. El personal de los ministerios sería nombrado y cesado, en última instancia, por el presidente de la República. Sin embargo, en el caso del Ministerio de Economía se debían aplicar criterios adicionales: el personal debía escogerse sobre la base de “conocimientos técnicos comprobados”, en vista de las funciones tan especiales que debían desempeñar. Esta innovación reflejaba un interés por despolitizar la formulación de las políticas económicas, con miras a fortalecer la credibilidad del régimen al fijar los objetivos del desarrollo nacional.

Un segundo paso en este sentido fue la creación del Consejo Nacional de Economía, en junio de 1949.⁵⁰ Esta institución se colocó bajo la autoridad directa del presidente, y se le atribuyó la responsabilidad de velar por la buena marcha de la “política económica general de la nación”. En particular, se le encomendó mejorar la eficiencia del sector público en la puesta en marcha de los programas económi-

cos, promover la investigación en temas de interés económico en apoyo al Ministerio de Economía en la formulación de políticas, y comunicar al público la importancia de un desarrollo económico ordenado y armonioso. El Consejo estaría integrado por los ministros de Economía, Hacienda, Fomento y Agricultura, además del presidente del Banco Nacional. Una Junta Técnica de Economía, integrada por profesionales calificados, llevaría a cabo los estudios y presentaría las recomendaciones necesarias para la formulación de políticas de Estado, bajo la dirección directa del Consejo. Finalmente, un tercer órgano, la Junta Consultiva, asesoraría al ministro de Economía sobre los requerimientos y los problemas de aquellas instituciones y grupos más vinculados a las actividades económicas del país. En la Junta Consultiva tendrían representación la Cámara de Comercio de Managua, la Sociedad Anónima de Cafeteros, la Cooperativa Nacional de Agricultores y la Asociación Agrícola de Nicaragua, así como otras organizaciones similares que se crearan en el futuro. De esta manera, el sector privado logró un acceso directo y formal a los más altos niveles del gobierno.

En febrero de 1953, el presidente emitió un decreto otorgando atribuciones adicionales al Consejo Nacional de Economía, como la elaboración de planes nacionales de desarrollo, la coordinación de los proyectos económicos de las diversas oficinas del gobierno, el asesoramiento sobre asuntos fiscales y la contratación de asistencia técnica especializada.⁵¹ Asimismo, contemplaba la exigencia de que todas las dependencias del poder ejecutivo e instituciones autónomas sometieran sus propuestas de legislación económica a revisión del Consejo, que a su vez trasladaría sus recomendaciones directamente a la oficina del presidente de la República. El Consejo adquirió, asimismo, la autoridad de convocar a cualquier funcionario público y exigirle explicar y justificar el mérito de las medidas impulsadas por su dependencia. En suma, el Consejo se convirtió en una especie de superministerio de desarrollo económico que buscaba la coherencia y la eficiencia de la inversión pública y privada bajo la tutela del Estado.

El papel del Estado no se limitó a la planificación y la formulación de recomendaciones de política. A partir de un decreto presidencial de marzo de 1953, se estableció el Instituto de Fomento Na-

cional (INFONAC) como una corporación de derecho público con su propio patrimonio y la facultad para contratar préstamos adicionales. Con miras a alcanzar sus objetivos de ampliar y diversificar la capacidad productiva nacional, el Instituto proporcionaría asistencia técnica y financiera a aquellas empresas privadas dedicadas a la producción, tanto para el mercado externo como el interno. Específicamente, el INFONAC procuraría apoyar aquellas áreas de la producción poco atractivas para el capital privado. Incluso, estaba facultado para adquirir acciones en una empresa o proceder a fundarla directamente, y venderla al sector privado una vez que alcanzara cierto nivel de rentabilidad. El instituto también recibió autorización para comprar y vender todo tipo de maquinaria agrícola, ganado, abonos e insecticidas, lo mismo que operar centros de acopio de granos. El gobierno debía entregar al INFONAC un total de C\$50 millones durante los años 1952-62 como capital semilla, pero el instituto estaba facultado para recibir depósitos a cuenta, vender acciones, y negociar préstamos con fuentes de crédito locales y extranjeras.⁵² Es decir, el INFONAC asumió diversas funciones que anteriormente habían sido manejadas por el Banco Nacional y su subsidiaria, la Compañía Mercantil de Ultramar; por ejemplo, la concesión de préstamos para el desarrollo industrial e importaciones de bienes de capital y materias primas.

Si bien es cierto que el INFONAC era una institución pública, su junta directiva incluía a tres representantes del sector privado – un agricultor, un industrial, y un miembro del partido de la minoría – todos escogidos por el presidente de la República sobre la base de listas sometidas a su consideración por los diferentes gremios de productores y el Partido Conservador. Los demás miembros de la directiva eran los ministros de Economía, Hacienda, Fomento y Agricultura, y el gerente general del Banco Nacional – todos ellos nombrados por el presidente. Oficialmente, el INFONAC era un ente “autónomo”; sin embargo, su independencia con respecto al gobierno era muy cuestionable, pues cinco de sus ocho directivos eran nombrados directamente por el presidente. En la práctica, esta institución terminó supeditada al poder ejecutivo, igual que el Banco Nacional. Sin embargo, representó un intento de trasladar el aporte del Estado al desarrollo económico a una institución más competente y técnica que

las ya existentes, como el Banco Nacional y el Banco Hipotecario, que se suponían más ineficientes y politizadas.

E. Política fiscal y desarrollo económico

La creación de instituciones nuevas en apoyo a las necesidades del desarrollo nacional no resultó ser una solución fácil a los complejos problemas fiscales y administrativos heredados por el Estado somocista. El legado del pasado se hacía más evidente en tiempos de bonanza económica, especialmente cuando el régimen intentó involucrarse más de lleno en la definición de política económica. El sistema fiscal, en particular, había cambiado poco desde las reformas introducidas por Somoza a fines de la década de 1930, y todavía conservaba algunos rasgos que le imprimieron las administraciones precedentes. En 1952, el señor George Garvy, un asesor en finanzas públicas contratado por el BIRF a invitación del gobierno nicaragüense, preparó un informe exhaustivo sobre el sistema fiscal del país. En este documento, argumentó que el sistema nicaragüense era totalmente inadecuado para enfrentar los retos de una economía nacional en crecimiento acelerado.⁵³ En primer lugar – sostuvo Garvy – el sistema impositivo conservaba características que limitaban seriamente la capacidad tributaria del Estado, tales como su exagerada dependencia con respecto a los impuestos indirectos, la ausencia de un impuesto sobre la renta, y las limitaciones del impuesto patrimonial. A juicio del experto, todo el sistema se caracterizaba por su carácter regresivo. Los impuestos a las exportaciones, que podrían considerarse como un impuesto directo a los agroexportadores, solamente generaban un 8.8% del total de los ingresos fiscales, y este modesto aporte se debía, en gran parte, al establecimiento de una tasa impositiva variable a las exportaciones de café y algodón en 1951.⁵⁴ Por lo demás, los profesionales, los rentistas, los comerciantes y los terratenientes pagaban un impuesto patrimonial nominal – en caso de pagar impuesto alguno. Con mucha frecuencia, las contribuciones eran fijadas con base en estimados del valor de la propiedad que no guardaban relación alguna con el precio de mercado. En 1951, Garvy estimó que el número de individuos y empresas que pagaban impuestos patrimoniales no pasaba de 13,500.

El sistema impositivo no sólo era regresivo sino también extremadamente complicado. Nuevos impuestos se habían venido sumando a los anteriores, de manera que un determinado artículo podría ser objeto de numerosos gravámenes antes de llegar al consumidor final. Éste era el caso de la gasolina – observó Garvy – que cargaba ocho impuestos distintos, además de los derechos de importación, las tasas consulares y dos impuestos municipales cobrados en Managua. Asimismo, la evasión del pago de impuestos contribuía a elevar el costo de su recaudación; y en algunos casos, como el del papel sellado, éstos excedían los ingresos del fisco sobre ese rubro. Finalmente, dada la gran dependencia del estado en los impuestos sobre el consumo y derechos de aduanas, la estructura tributaria resultaba ser muy rígida. Es decir, el monto de los ingresos tributarios dependía del volumen de bienes importados o consumidos, por lo que constituía una base muy débil para financiar un programa de desarrollo económico de largo plazo.

En vista de lo anterior, Garvy concluyó: “el actual sistema tributario se encuentra en tal situación que se ha convertido en un obstáculo al desarrollo económico del país”. Debido a sus características regresivas, el sistema contribuía más bien a deprimir los niveles de vida de la población, conformada en su mayoría por peones de hacienda y campesinos pobres. Por otra parte, la ausencia de impuestos directos sobre la renta no había estimulado a los grupos de ingresos altos a orientar una proporción mayor de sus ahorros hacia la inversión productiva. A juicio de Garvy, cualquier intento de aumentar los ingresos tributarios con base en un incremento de los viejos impuestos sería un fracaso. La única forma de aumentar los ingresos del Estado era incorporar a la estructura tributaria a todos aquellos sectores que tradicionalmente evadían el pago de impuestos. Éste objetivo podría lograrse, sobre todo, mediante un impuesto sobre la renta, de carácter general y progresivo, pues éste constituía “el fundamento de todo sistema tributario moderno”.⁵⁵

El incremento de los ingresos del Estado era solamente una cara de la moneda. Según apuntó Garvy, la capacidad del gobierno para erogar sus fondos se veía seriamente constreñida por una es-

estructura administrativa que había cambiado muy poco desde los días de austeridad fiscal de las décadas de 1930 y 1940. En teoría, el Ministerio de Hacienda tenía a su cargo la recaudación fiscal, la contabilidad del gobierno, las compras de bienes y servicios y la elaboración del presupuesto. En realidad – según Garvy – dicha institución no pasaba de ser “una oficina que combinaba de manera rutinaria las funciones de cobros y egresos”, encabezada por un ministro que centralizaba todas las decisiones, aunque en la práctica destinaba entre un 60 y un 80 por ciento de su tiempo firmando cheques y hablando con visitantes. Por ejemplo, el proceso de elaboración del presupuesto del Estado – que era responsabilidad exclusiva del ministro de Hacienda – consistía en calcular un estimado de los ingresos anticipados, de una manera poco profesional. Este presupuesto después era ajustado de acuerdo a las solicitudes de egresos presentados por las diversas dependencias del gobierno. Posteriormente, se enviaba dicho presupuesto al Congreso, donde se le hacían unos cambios mínimos. En consecuencia, los estimados de los ingresos fiscales, por lo general, superaban los ingresos reales; y los egresos se reducían a una lista de salarios agrupados por ministerios y oficinas, quedando en el misterio el monto de los gastos destinados a otros fines.⁵⁶

Obviamente, existían algunas prioridades, implícitas o explícitas, en el plan de egresos fiscales. Tal como se observa en el Cuadro 5.7, la distribución porcentual de los empleados públicos de acuerdo a diversas categorías administrativas se mantuvo bastante equilibrada durante el período 1945-1956, indicando que el régimen probablemente asignaba igual importancia a todas sus dependencias. Sin embargo, en momentos de estrechez fiscal, el régimen se vio obligado a tomar decisiones sobre el gasto público que reflejan claramente su escala de prioridades. Por ejemplo, en 1949, cuando la cosecha de café se redujo a menos de la mitad, ensombreciendo las perspectivas para el año fiscal 1949-1950, el gobierno solicitó la asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este organismo envió una misión técnica a Nicaragua, que recetó su remedio típico para tales situaciones: reducir el gasto público hasta donde fuera posible.⁵⁷ En consecuencia, el ministro de Hacienda, León Debayle, preparó un plan para reducir el gasto público del siguiente año fiscal, acorde con

la prevista disminución del 30 por ciento de los ingresos aduaneros. Debayle estimaba que sin dicha reducción del gasto público se alcanzaría un déficit fiscal de C\$15 millones, aproximadamente, lo cual provocaría una espiral inflacionaria.

El plan presentado por Debayle contemplaba recortes presupuestarios sobre la base de los estimados de gastos del año fiscal 1948-49. Todas las dependencias públicas, por igual, sufrirían un recorte del 33 por ciento de su presupuesto, aproximadamente. Sólo quedaban exentas de dicho recorte, las oficinas del presidente de la República y el ramo de defensa, fundamentalmente, la Guardia Nacional. Por lo tanto – aseguró Debayle – se lograría reducir los gastos en C\$15 millones, sin afectar “aquellos servicios primordiales del Estado que tienen que mantenerse inalterables,” vale decir, las Fuerzas Armadas.⁵⁸ Aunque el plan de Debayle permitió alcanzar los objetivos esperados, su lógica se acercaba más a un ejercicio sencillo de matemática aplicada, que a una estrategia fiscal muy elaborada. Debayle simplemente eliminó C\$15 millones del presupuesto anterior, asignó una cantidad igual para defensa y la oficina del presidente, y finalmente redujo los demás rubros en un 33 por ciento, sin tomar en cuenta el impacto social o económico de semejante medida. En la práctica, el gasto real del año fiscal 1949-50 sobrepasó las proyecciones de Debayle, aunque todas las dependencias del estado – con excepción de la defensa y la presidencia – redujeron sus erogaciones con relación al año fiscal anterior.

Las improvisaciones en la elaboración del presupuesto, como la descrita anteriormente, empezaron a ser superadas en 1952, mediante el diseño de un plan quinquenal de desarrollo sobre la base de un informe técnico preparado por el BIRF, y bajo la supervisión del Consejo Nacional de Economía. El plan contemplaba inversiones estatales por un monto aproximado de US\$59.3 millones, más US\$16.7 millones provenientes de préstamos internacionales, para completar la red principal de carreteras y numerosos caminos de acceso, modernizar el ferrocarril, mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado en las principales ciudades y pueblos, aumentar la generación eléctrica y construir una red de distribución, elevar la pro-

ducción de café y ganado, crear nuevas industrias, reducir los índices de analfabetismo y promover la capacitación técnica y vocacional.⁵⁹ El plan buscaba un crecimiento del ingreso per cápita de un 15 por ciento durante los siguientes cinco años, objetivo que el BIRF consideraba factible en vista de la bonanza agroexportadora y la disponibilidad de fuentes de crédito externo.

La segunda medida dictada por el régimen para fortalecer las finanzas públicas fue la introducción de un impuesto sobre la renta. En diciembre de 1952 el Congreso aprobó una ley que obligaba a todas las personas con ingresos anuales superiores a los C\$20,000 córdobas – equivalentes a unos US\$4,000 dólares – a presentar una declaración de renta y pagar un impuesto mínimo del 4 por ciento, que aumentaba progresivamente hasta un máximo del 18 por ciento para aquellos con ingresos anuales de más de C\$1 millón.⁶⁰ Únicamente quedaron exentos de este gravamen los ingresos personales provenientes de los premios de la lotería nacional, las herencias, donaciones, intereses de cuentas de ahorro y reembolsos de pólizas de seguros, así como los ingresos de organizaciones sin fines de lucro.

Finalmente, el gobierno contrató numerosos préstamos con el BIRF y el Export-Import Bank a través del Banco Nacional para el desarrollo de infraestructura. Entre 1951 y 1956, el BIRF prestó a Nicaragua un total de US\$16.3 millones para construcción de carreteras, generación eléctrica y modernización de los puertos, entre otros. El Export-Import Bank también prestó US\$600,000 para el sistema eléctrico de la ciudad de Managua, con lo cual el total de préstamos llegó a US\$16.9 millones, una suma ligeramente superior a los US\$16.7 que contemplaba el plan quinquenal de desarrollo.⁶¹

Aunque una evaluación exhaustiva del impacto de estas medidas administrativas y fiscales sobre el desarrollo de la sociedad nicaragüense y su economía no está contemplada en este estudio, es posible presentar algunas conclusiones sobre el papel del Estado en la formulación de la política económica, durante el período 1945-56. En primer lugar, los esfuerzos del régimen por mejorar la eficiencia de su burocracia no parecen haber sido muy exitosos. En 1952, Garvy

criticó la excesiva centralización ministerial y la ausencia de coordinación para evitar la duplicación innecesaria de funciones burocráticas; cuatro años más tarde, estos señalamientos reaparecieron en un escrito de Modesto Armijo – uno de los asesores en asuntos fiscales más cercanos a Somoza. A juicio de Armijo, el acelerado crecimiento económico experimentado por el país después de 1950, había obligado al Estado a extender sus responsabilidades públicas más allá de sus capacidades reales, por lo que se cayó en una excesiva improvisación y centralización de la toma de decisiones. Propuso modificar el número y las atribuciones de los ministerios del gobierno, con miras a definir mejor las jurisdicciones burocráticas, eliminar los puestos innecesarios para mejorar la eficiencia y, en general, otorgarle más racionalidad al apartado del Estado.⁶²

Años más tarde, las recomendaciones de Armijo fueron reiteradas en mucho más detalle por el Consejo Nacional de Economía, que destacó la persistente duplicación de funciones administrativas y la excesiva centralización de la autoridad en los ministerios del gobierno. Asimismo, criticó la falta de mecanismos adecuados para la selección del personal del gobierno, problema que atribuyó a la ineterada costumbre de favorecer a los amigos y parientes, en perjuicio de otras personas con mayores méritos personales. Cabe señalar que el Consejo omitió referirse a los favoritismos derivados de la afiliación partidista como criterio para el empleo público. Sin embargo, señaló que la desorganización burocrática impediría alcanzar los objetivos de la planificación económica y social trazados por el gobierno – tal como el secretario del Consejo, José M. Castillo, hizo saber a Somoza en abril de 1956. A juicio de Castillo, cualquier intento serio de planificación para superar la improvisación exigía elaborar estadísticas económicas y sociales precisas, así como planes de desarrollo alternativos, para permitir al gobierno la toma de decisiones con base en opciones realistas. Hasta ese momento, según Castillo, la planificación del gobierno había sido más “ex-post” que “ex-ante”; es decir, era inexistente.⁶³

Sin embargo, ninguno de estos tecnócratas abordó el problema de la naturaleza eminentemente política del empleo público, que

convertía a la burocracia estatal en una creciente clientela política que esperaba ser recompensada por el régimen. Tanto la ausencia de criterios adecuados para la selección de los empleados públicos, como el crecimiento desordenado de la burocracia y la duplicación de las funciones administrativas, contribuían a reducir la eficiencia del sector público, pero la eficiencia no era ni el principal ni el único objetivo de la gestión estatal.

La información disponible permite concluir también que la reforma fiscal sugerida por la misión del BIRF sí alteró, en alguna medida, la proporción de los ingresos fiscales provenientes de la tributación directa. Después de 1953-54, una vez introducido el impuesto sobre la renta, el volumen de impuestos directos, como proporción del ingreso total, pasó de menos del 3 por ciento antes de 1952 a un poco más del 8 por ciento en 1955-56. (Ver el Cuadro 5.3.) Sin embargo, la importancia de los impuestos indirectos decayó poco, pues se mantuvo cerca del 80 por ciento de los ingresos totales del fisco. Por una parte, existían límites muy claros en cuanto a la cantidad de impuestos directos que podrían recabarse; ésta se veía determinada, en gran medida, por la distribución muy sesgada del ingreso en Nicaragua en aquellos tiempos. De acuerdo a estimados del BIRF para el año 1952, el 25 por ciento del producto interno bruto era captado por el 1 por ciento de la población, y la bonanza agroexportadora había agravado esta situación. Por ejemplo, estimó que entre el 70 y 75 por ciento de la producción de café y algodón estaba en manos de unos 950 productores.⁶⁴ Por ende, hacia el año fiscal de 1959-60, solamente 2,208 individuos y 572 empresas privadas pagaban impuesto sobre la renta.⁶⁵ Por otra parte, la persistente dependencia con respecto a la tributación indirecta, sobre todo de los impuestos aduanales, era consecuencia, en parte, del peso de la bonanza económica de la década de 1950, y de la relativa facilidad para cobrar estos impuestos sin tener que efectuar cambios profundos en el sistema administrativo.

En tercer lugar, el papel del Estado en la promoción del crecimiento económico aumentó notablemente después de 1950. El gasto del Estado se orientó en proporciones y cantidades mayores hacia la

inversión, mientras disminuía la proporción del gasto corriente. (Ver Cuadro 5.8.) Esto se evidenció particularmente después de la creación del INFONAC y la contratación de préstamos con instituciones multilaterales de crédito a partir de 1953. Además, la inversión del gobierno se comportó de manera mucho más dinámica que la del sector privado. (Ver Cuadro 5.9.) Entre 1950 y 1956, la inversión privada en el sector agrícola no dio indicios de una tendencia positiva, y la inversión privada no agrícola aumentó solamente dos veces y medio, pero la inversión pública casi se cuadruplicó.⁶⁶

En general, las políticas estatales de desarrollo se basaron en una evidente apertura hacia las clases propietarias del país, a través de una serie de decisiones fiscales y financieras combinadas con el pacto firmado entre Somoza y Chamorro que, supuestamente, acabó con el enfrentamiento liberal-conservador de una vez por todas. Después de 1950, un nuevo conjunto de objetivos sociales y económicos reemplazó la retórica populista y partidaria que había caracterizado los primeros quince años del régimen somocista. Además, nuevas prácticas y consensos permitieron la participación de grupos sociales hasta entonces excluidos en la formulación de las decisiones económicas y políticas tomadas por el régimen.

Cuadro 5.8
Inversión pública y gasto corriente, 1945-1956
(en millones de C\$ de 1958)

Año	Inversión	%	Gastos corrientes	%	Total gasto fiscal
1945	24.4	15.9	128.8	84.1	153.2
1946	38.4	23.6	124.0	76.4	162.4
1947	41.0	27.5	107.9	72.5	148.9
1948	33.4	18.0	152.3	82.0	185.7
1949	20.5	11.4	159.7	88.6	180.2
1950	27.2	16.6	136.2	83.4	163.4
1951	32.3	19.6	132.7	80.4	165.0
1952	53.1	26.3	148.9	73.7	202.0
1953	68.1	29.3	164.7	70.7	232.8
1954	74.9	28.7	186.4	71.3	261.3
1955	88.4	32.1	187.3	67.9	275.7
1956	102.7	34.7	193.3	65.3	296.0

Fuente: Nicaragua, Consejo Nacional de Economía, *Análisis del desarrollo económico y social de Nicaragua, 1950-1962* (Managua: 1964), p. 68.

En cuarto lugar, la inversión pública se concentró sobre todo en el desarrollo de infraestructura económica, especialmente en la construcción de carreteras y puentes, así como en la generación y distribución de electricidad – áreas que absorbieron entre un 65 y 80 por ciento de toda la inversión estatal entre 1950 y 1956. Por su parte, los servicios sociales y comunales recibieron entre una cuarta y una quinta parte de la inversión pública, la mitad de la cual se orientó al desarrollo de la infraestructura urbana.⁶⁷ Algunas estadísticas comparadas sobre el desarrollo socioeconómico de Nicaragua parecen respaldar las conclusiones entresacadas de los datos fiscales expuestos anteriormente. (Ver Cuadro 5.10.) En suma, el régimen se dedicó a realizar inversiones fuertes en empresas y actividades de importancia económica, mientras apenas mantenía los logros en materia de inversión social.

Cuadro 5.9
Inversión pública y privada, 1945-1956
(en millones de C\$ de 1958; 1950 = 100)

Año	Inversión pública		Inversión privada				Total	
			Agrícola		No agrícola			
1945	24.4	(90)	29.1	(39)	73.7	(84)	127.2	(67)
1946	38.4	(141)	33.9	(45)	66.8	(76)	139.1	(73)
1947	41.0	(151)	39.8	(53)	99.1	(113)	179.9	(95)
1948	33.4	(123)	41.4	(55)	106.1	(121)	180.9	(95)
1949	20.5	(75)	41.9	(56)	132.3	(150)	194.7	(102)
1950	27.2	(100)	75.1	(100)	88.0	(100)	190.3	(100)
1951	32.3	(119)	70.1	(93)	113.3	(129)	215.7	(113)
1952	53.1	(195)	98.4	(131)	178.3	(203)	329.8	(173)
1953	68.1	(250)	63.4	(84)	218.4	(248)	349.9	(184)
1954	74.9	(275)	96.0	(128)	271.3	(308)	442.2	(232)
1955	88.4	(325)	109.2	(145)	244.6	(278)	442.2	(232)
1956	102.8	(378)	86.0	(115)	218.9	(249)	407.7	(214)

Fuente: Naciones Unidas, CEPAL, *El desarrollo económico de Nicaragua* (México: Naciones Unidas, 1967), p. 44.

Cuadro 5.10

Estadísticas del desarrollo económico y social de Nicaragua, 1950-1956

Año	Carreteras y caminos (kms.)	Generación eléctrica (mw)	Tractores importados	Camas de hospital	Matrícula a nivel primario	Población entre 6-13 años
1950	1,880	20.6	125	2,114	126,367	229,700
1951	2,440	26.3	345	2,114	121,496	238,792
1952	2,715	26.4	283	2,055	124,785	249,221
1953	3,100	33.2	306	2,072	125,171	259,432
1954	3,310	37.8	713	2,072	131,637	269,696
1955	3,687	40.2	604	2,129	135,977	280,188
1956	4,087	42.4	83	2,242	139,896	291,416

Fuente: Los datos sobre carreteras han sido tomados de Naciones Unidas, CEPAL, *El desarrollo económico de Nicaragua* (México: Naciones Unidas, 1967), p. 172 y Dirección General de Estadística, *Boletín de estadística*, no. 8 (septiembre de 1967); sobre generación eléctrica, BIRF, *The Economic Development of Nicaragua* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1953), p. 174; sobre tractores importados, Pedro Bellí "Prolegómeno para una historia económica de Nicaragua de 1905 a 1966", *Revista del Pensamiento Centroamericano* 30, no. 146 (enero-marzo de 1965), p. 18; sobre camas de hospital, Nicaragua, Dirección General de Estadística y Censos, *Resumen estadístico 1950-1960*, 2da. edición (Managua: junio de 1961), p. 39; sobre matrícula escolar y población en edad escolar, Nicaragua, Consejo Nacional de Economía, *Análisis del desarrollo económico y social de Nicaragua, 1950-1962* (Managua: 1964), p. 186.

F. El régimen y el sector privado

Uno de los cambios más evidentes registrados durante el nuevo período presidencial de Somoza concierne al sistema financiero del país. Hasta 1950, los bancos del gobierno administraban la gran mayoría de las operaciones de crédito institucionales. (Ver Cuadro 5.11.) Entre 1941 y 1948, los bancos del estado jamás manejaron menos del 86 por ciento de todo el crédito otorgado. Además, no existían bancos privados nicaragüenses de cierto peso; las empresas bancarias de JRE Tefel y Caley Dagnall normalmente manejaban entre un 2 y un 4 por ciento del total del volumen de crédito otorgado anualmente, mientras que el Banco de Londres suplía entre un 6 y un 10 por ciento del total. En consecuencia, casi la totalidad del crédito bancario era administrado por bancos estatales, y, puesto que se hallaban directamente subordinados a Somoza, constituían un poderoso instrumento de control político dentro del sistema mayor de dominación.

Cuadro 5.11
Operaciones de crédito públicas y privadas, 1945-1948
(en miles de C\$)

	1945	%	1946	%	1947	%	1948	%
Bancos privados:								
JRE Tefel	453	(0.7)	658	(1.0)	725	(0.9)	691	(0.8)
Caley Dagnall	943	(1.5)	2,012	(3.1)	2,514	(3.2)	2,574	(3.0)
Banco de Londres	5,653	(9.2)	5,759	(9.0)	4,504	(5.8)	5,499	(6.5)
Total	7,049	(11.4)	8,429	(13.1)	7,743	(9.9)	8,764	(10.3)
Bancos estatales:								
Caja Cred. Pop.	1,162	(1.9)	1,363	(2.1)	1,210	(1.6)	1,226	(1.5)
Banco Hipotecario	7,873	(12.7)	7,672	(12.0)	26,462	(34.0)	27,815	(32.8)
Banco Nacional	45,861	(74.0)	46,695	(72.8)	42,413	(54.5)	46,998	(55.4)
Total	54,896	(88.6)	55,730	(86.9)	70,085	(90.1)	76,039	(89.7)
Total general	61,945		64,159		77,828		84,803	

Fuentes: Juan María Castro Silva, *Nicaragua económica* (Managua: Talleres Nacionales, 1949), pp. 103-110. El incremento notable en el volumen de créditos que ofreció el Banco Hipotecario a partir de 1947 se debió a una importante emisión de bonos por valor de C\$22.5 millones ese año.

Después de 1950, el virtual monopolio del Estado en las operaciones de crédito fue alterado, como consecuencia de la creación de los primeros bancos privados importantes de capital nicaragüense. Uno de éstos, el Banco de América, surgió a raíz de la apertura política producto del pacto Somoza-Chamorro de 1950. Entre sus fundadores se encontraban algunas de las antiguas familias conservadoras de la región de Granada, tales como los Chamorro, los Pellas y los Benard. Estas familias estaban muy ligadas a la producción pecuaria y al comercio; el poderoso grupo propietario de la Nicaragua Sugar Estates, Limited, controlaba buena parte del cultivo y refinamiento de la caña de azúcar desde el Ingenio San Antonio ubicado en el noroeste del país. En 1953, se fundó otro banco privado, el Banco Nicaragüense, que surgió de una alianza entre los principales productores de algodón de la región de León y Chinandega. En un inicio, el Banco Nicaragüense limitó sus operaciones a financiar el cultivo del algodón en esos departamentos. Más adelante, durante la década de 1960, tanto éste como el Banco de América extendieron sus operaciones a todo el país y se convirtieron en los núcleos de grandes consorcios financieros y empresariales.⁶⁸

La información disponible no permite determinar la importancia inicial de estos nuevos bancos dentro del sistema crediticio del país. Probablemente, durante la década de 1950 se mantuvieron en un segundo plano en relación con el Banco Nacional y el Banco Hipotecario y no fue sino hasta la década de 1960 cuando adquirieron una presencia verdaderamente nacional, como resultado del crecimiento económico experimentado durante los años del Mercado Común Centroamericano. Sin embargo, su aparición a comienzos de la década de 1950 puede interpretarse como parte de la apertura económica y política que el régimen extendió a los principales grupos económicos no-somocistas del país.

Otro aspecto de la política económica del Estado que sugiere una apertura a los intereses económicos conservadores fue un incremento del apoyo a la ganadería. El gobierno, que durante muchos años impuso estrictas restricciones a la exportación de ganado, volvió a permitir la salida de hatos de reses fuera de Nicaragua. Hacia 1956, las exportaciones anuales de ganado se habían cuadruplicado en comparación a 1946.⁶⁹ Además, la política crediticia del INFONAC manifestaba una clara inclinación a apoyar el desarrollo del hato nacional; de los C\$20,930,348 en créditos externos que negoció el INFONAC entre 1954 y 1960, más de la mitad se destinó a la compra de ganado de raza y equipo para montar plantas de pasteurización de leche y mataderos industriales. Su más importante inversión industrial fue la construcción del matadero y empacadora de carne IFAGAN, que absorbió la quinta parte de toda la inversión industrial del INFONAC durante los años 1954-60. Por otra parte, el INFONAC abrió agencias en los departamentos de Chontales, Boaco y Rivas, donde se concentraba la actividad ganadera de los terratenientes conservadores.⁷⁰ Todas estas decisiones comerciales y financieras parecerían constituir un epílogo lógico del Pacto de los Generales y la creación de la Compañía Nacional de Productores de Leche, que unió los intereses pecuarios de somocistas y conservadores.

Sin embargo, el componente más importante de la política del régimen hacia los conservadores quizás fue la tolerancia o indiferencia con la cual fueron tratados los principales líderes de la oposi-

ción conservadora en lo que se refiere a sus propiedades y negocios. Somoza siempre respetó sus propiedades, aún después de enviarlos a la cárcel o al exilio. Emiliano Chamorro, por ejemplo, volvió de sus años de exilio para retomar la administración personal de sus haciendas.

Asimismo, Somoza nunca intentó entrometerse en los negocios de la oligarquía granadina. Por el contrario, parece haber mantenido una actitud muy respetuosa hacia los negocios de los capitalistas conservadores más importantes, actitud que fue particularmente evidente en el caso del complejo agroindustrial del Ingenio San Antonio. Justo después de la firma del Pacto de los Generales, el gobierno autorizó un incremento del precio de venta del azúcar al consumidor de C\$0.10 a C\$0.15 la libra.⁷¹ Unos pocos meses más tarde, F. Alfredo Pellas, gerente general de Nicaragua Sugar Estates, Limited, solicitó al gobierno de Somoza tarifas portuarias y ferrocarrileras especiales para su empresa así como exoneraciones fiscales, pues se proponía construir nuevas instalaciones para exportar el excedente de melaza, que la empresa estaba botando a razón de 1.5 millones de galones al año.⁷² En noviembre de 1954, Pellas escribió nuevamente a Somoza solicitando el permiso del gobierno para exportar una mayor cuota de azúcar del Ingenio San Antonio durante el año agrícola 1954-55, hasta un total de 300,000 quintales. Según los estimados de Pellas, el Ingenio San Antonio y otros asociados al mismo, en conjunto producirían 800,000 quintales de azúcar. Además, la producción del ingenio Montelimar del propio Somoza, sumada a la de otros ingenios menores, llegaría a los 100,000 quintales. Por tanto, después de satisfacer la demanda interna, quedaría un excedente de unos 400,000 quintales para la exportación.⁷³ Aunque no se ha encontrado documentación que permita conocer con certeza cual fue la respuesta de Somoza, no parece probable que haya desestimado las peticiones de Pellas, en vista del enorme peso que tenía el Ingenio San Antonio dentro de la economía nacional.⁷⁴

Sin embargo, a veces las relaciones del régimen con el sector privado no eran del todo armoniosas. A comienzos de la década de 1950, el imperio empresarial de los Somoza era comparable al de las familias más antiguas de Granada y León. Además, los Somoza ha-

bían incursionado en otras actividades muy lucrativas, sobre todo en el campo de la agricultura y los bienes raíces urbanos, que adquirieron durante los años de la guerra. Hacia 1950, Somoza era el principal accionista de la línea aérea interna, LANICA, y había fundado su propia empresa de aguardiente, la Fábrica de Licores Bell. En 1953, estableció la única empresa naviera nacional, MAMENIC Line, e hizo algunas inversiones en la industria textil.⁷⁵ A diferencia de la actitud asumida a inicios de la década de 1940, el crecimiento de los negocios de los Somoza en los años cincuenta no parece haber preocupado al sector privado, probablemente debido a que la bonanza económica ofrecía amplias oportunidades para muchos de los empresarios nacionales. Además, el control económico ejercido por las empresas estatales decayó con la fundación de los nuevos bancos privados, así como por la construcción de una red de carreteras que proporcionaba una alternativa al ferrocarril del Estado. Por tanto, en esta nueva coyuntura, las quejas más comunes exteriorizadas por los gremios del sector privado se referían a los controles ejercidos por el gobierno sobre las importaciones y el cambio de divisas, así como por el alza en los impuestos.

Estos reclamos databan del período de la gran crisis que provocó escasez de divisas, y siguieron escuchándose durante los años de la guerra, cuando el gobierno impuso controles sobre precios e importaciones. Sin embargo, con el fin de la guerra disminuyó la necesidad de mantener dichos controles, en vista de la creciente oferta de bienes importados provenientes sobre todo de Estados Unidos, y de la liberación de las reservas de dólares acumuladas durante la guerra. No obstante, el régimen siguió controlando las operaciones de cambio y de importaciones. En octubre de 1945, un decreto presidencial permitió la importación irrestricta de bienes de primera necesidad, pero siguió restringiendo los bienes suntuarios, cuya importación requería un permiso especial de la Comisión Reguladora de Comercio. Por otra parte, todas las exportaciones continuaban sujetas a la autorización de costumbre extendida por el Banco Nacional, así como a la obligación de depositar las divisas percibidas en el Banco Nacional al cambio oficial de 5:1. Tampoco se permitía la compra o tenencia de divisas extranjeras a título particular.⁷⁶ Pese a estas medidas, hacia 1947 el país había agotado casi todas sus reservas de

dólares para pagar las importaciones efectuadas desde el fin de la guerra. A comienzos de 1948, el gobierno decretó otra medida que limitaba aún más la importación de bienes suntuarios y elevó la cantidad del depósito previo exigido para comprar dólares.⁷⁷ En abril de 1949, las restricciones a las importaciones se volvieron más estrictas, debido al pobre comportamiento del sector exportador. La Comisión Reguladora de Comercio fue sustituida por una nueva entidad llamada Comisión de Cambios, que impuso a lo inmediato nuevos obstáculos a las importaciones de bienes suntuarios o no indispensables. Hacia fines de 1949, la Comisión de Cambios pasó a llamarse oficina del Contralor de Cambios, pero en lo fundamental todas desempeñaban la misma función: el control de la distribución de las escasas divisas extranjeras, con el objetivo de prevenir los altos costos políticos que acarrearía una devaluación.⁷⁸

Finalmente, el Contralor de Cambios se vio en la necesidad de decretar la devaluación, aunque ésta se introdujo de manera escalonada. Dicho decreto ejecutivo contemplaba una disposición que permitía a los exportadores vender hasta un 20 por ciento de sus divisas al mejor postor, lo cual se exigía en el caso de divisas para importar bienes suntuarios o no esenciales. Posteriormente, en noviembre de 1950, el Congreso emitió una ley fijando la tasa de cambio en 7:1 para todo tipo de importaciones, aunque el cambio oficial se mantuvo en 5:1; es decir, la deuda externa y las importaciones del gobierno se seguirían calculando sobre la base de la tasa más favorable. A su vez, se dispuso clasificar las importaciones de acuerdo a una de tres categorías: esenciales, cuasi-esenciales y no esenciales. Las últimas dos categorías estarían sujetas a requisitos adicionales de depósito previo de uno y tres córdobas por dólar, mientras se procesaba la solicitud de compra de divisas.⁷⁹ En julio de 1955, la tasa oficial del córdoba con relación al dólar se redujo finalmente a 7:1.⁸⁰ En suma, el régimen retuvo un control sobre la compraventa de divisas aún en tiempos de bonanza económica, lo cual dio pie a una serie de reclamos y quejas de parte de las asociaciones del sector privado.

El Banco Nacional fue el principal blanco de estas críticas, como resultado del control administrativo que ejercía sobre las operaciones de cambio y a su papel preponderante en las operaciones de

crédito en el país. Hacia fines de 1947, la Cámara de Comercio de Managua declaró que las operaciones del Banco Nacional eran deficientes en todo sentido; por tanto, sugería crear un banco central estrictamente autónomo e independiente de la injerencia del poder ejecutivo del gobierno. De acuerdo a esta propuesta, esta nueva institución, que se conocería como “Banco Central Sociedad Anónima”, debía ejercer un control sobre las finanzas del país desde una posición más imparcial; por tanto, el gobierno no podía esperar que le prestara, de manera automática, todo el dinero solicitado para cubrir sus déficit fiscales. Según la Cámara de Comercio, las frecuentes solicitudes de préstamo que hacía el gobierno incrementaban las presiones inflacionarias y restringían las posibilidades del banco de prestarle al sector privado.⁸¹ La Cooperativa Nacional de Agricultores, S.A., se expresó en el mismo sentido, y solicitó que los límites máximos de crédito del Banco Nacional fueran incrementados en proporción a la tasa de inflación; además sugirió que la junta directiva del Banco se reuniera con más frecuencia para agilizar el trámite de las solicitudes de crédito.⁸²

Sin embargo, el objeto del mayor número de críticas fue el control de cambios. La Cámara de Comercio de León dijo abiertamente en julio de 1950 que los dieciocho años de “economía dirigida” por el Estado no habían dado buenos resultados. A su juicio, la causa principal de esta situación radicaba en los mecanismos de control de cambios, y en el hecho de que la distribución de divisas siempre había obedecido a favoritismos en beneficio de algunos y perjuicio de otros. La Cámara consideraba que había llegado el momento de rectificar tal política, a fin de que “se libere el comercio de la pesada carga de los controles, para darle paso a una nueva era de reajustes económicos y libertades individuales, base fundamental para llegar al éxito del desarrollo de las finanzas de un país”.⁸³ Al mismo tiempo, las cámaras de comercio de todo el país se reunieron con la junta directiva de la Cooperativa Anónima de Cafetaleros y elaboraron un plan para reformar el sistema de control de cambios, con miras a dejar un 80 por ciento de todas las divisas en manos de los exportadores y permitir a éstos negociarlas libremente.⁸⁴ Esta propuesta invertía completamente la proporción de las divisas que podrían negociarse según lo dispuesto por el gobierno.

En febrero de 1951, la Cámara de Comercio de Managua se quejó de que los procedimientos para solicitar la venta de divisas eran excesivamente complicados, pues los funcionarios del Banco Nacional se demoraban mucho en procesar las solicitudes.⁸⁵ El mes siguiente, cuando se negoció el primer tratado de libre comercio con El Salvador, la Cámara de Comercio de Managua volvió a insistir en que la libertad de intercambio de productos debía ir acompañada de la libertad para comprar y vender divisas.⁸⁶ En mayo de 1953, la Cámara de Managua repitió las mismas quejas, agregando que el sistema de control de cambios “ha llegado a crear una situación que ya resulta insostenible para casi todas las ramas de la iniciativa privada”.⁸⁷ Según la Cámara, a comienzos de 1956, el control de cambios y los altos impuestos aduanales provocaron el encarecimiento y la escasez de bienes importados, al grado de que “miles” de nicaragüenses estaban viajando a Costa Rica y Honduras a comprar lo que necesitaban.⁸⁸

Durante todo este período, el gobierno insistió en mantener su política de control de cambios. De hecho, a partir de septiembre de 1939, el Congreso ratificaba cada año el “estado de emergencia económica”, a fin de permitir al gobierno limitar el derecho constitucional de libertad de comercio y justificar el sistema de control de cambios.⁸⁹ La prolongación de tal estado de “emergencia económica” hasta 1956, e incluso después, era una medida absurda desde una óptica estrictamente económica, pues la situación económica de Nicaragua en la década de 1950 no se parecía en nada a la que se había experimentado a fines de la década de 1930. En realidad, hubiera bastado que el gobierno decretara un estado de emergencia económica en situaciones puntuales; por ejemplo, en 1947, cuando se produjo una demanda excesiva de dólares, o en 1949-50 cuando escasearon las divisas.

Por tanto, la permanente imposición del estado de emergencia económica obedecía a motivos, en cierto modo, ajenos a la lógica económica del país. En primer lugar, un mercado de divisas completamente libre hubiera generado grandes altibajos en la tasa de cambio, provocando una fluctuación en el precio de las importaciones, y el régimen no estaba dispuesto a enfrentar los costos políticos que se

derivarían de semejante situación. En segundo lugar, el entorno político volátil en que se desenvolvía la economía nicaragüense era propicio a la fuga de capitales; por tanto, un descontrol en el mercado de divisas podría acabar con las reservas internacionales en poco tiempo. Finalmente, cabe señalar que, durante todos los años de dominio somocista, el control gubernamental sobre el mercado de divisas y el crédito bancario representó un instrumento político poderoso. Si bien es cierto que las personas en busca de divisas siempre podían recurrir al mercado negro, y el crédito privado era una alternativa para quienes no deseaban tratos con el Banco Nacional, los costos de transacción eran más altos, aparte de su carácter ilegal. Por lo tanto, un importador, un agricultor o un industrial preferían guardarse sus opiniones políticas y trabajar, en la medida de lo posible, a través de los mecanismos de la comisión de cambios.

Además de quejarse de los controles del gobierno en la banca y el cambio de divisas, el sector privado también expresó su oposición a la introducción de nuevos impuestos, así como de servicios sociales que recargarían los aportes de los empresarios. La Cámara de Comercio de Managua y la Cooperativa Nacional de Agricultores rechazaron públicamente la propuesta de un impuesto sobre la renta presentada por el gobierno a fines de 1952, argumentando que, para alcanzar su objetivo de redistribuir la carga tributaria, primero era necesario rescindir la multitud de impuestos indirectos al consumo.⁹⁰ Asimismo, a mediados de 1956, la Cámara criticó la introducción del sistema de seguridad social, en vista de que exigía fuertes contribuciones de parte de los empresarios y de los mismos trabajadores. A juicio de la Cámara, la medida en sí podría interpretarse como un importante avance en la lucha por los derechos sociales, aunque insinuó la posibilidad de que estuviese “políticamente motivada”. El Instituto del Seguro Social respondió que los amplios márgenes de utilidad de las empresas les permitirían cubrir sus contribuciones; por tanto, no era correcto negarle a los trabajadores sus derechos a fin de mantener bajos los costos de producción.⁹¹

Un ejemplo claro de la actitud del régimen hacia el sector privado lo constituye la reunión sostenida por Somoza con representantes de la Cooperativa Nacional de Agricultores, el 29 de noviem-

bre de 1955. Los delegados de este gremio solicitaron dicha entrevista para discutir los problemas asociados con el cultivo del algodón, en particular, los escasos rendimientos y bajos precios pagados por las desmotadoras. Empezaron describiendo la mejoría en las condiciones de vida del campesinado, como resultado de los buenos salarios que devengaban; Somoza respondió que, a su saber, los campesinos nunca habían estado en mala situación durante su gobierno. Procedió, entonces, a dictarles una lección sobre el carácter del capitalismo nicaragüense: “Nosotros los agricultores siempre vivimos tirando el dado . . . Un año tenemos buena cosecha, y entonces nos bañamos en plata; el otro, la cosecha y los precios se vienen al suelo, y la situación varía cambia completamente.” Luego, agregó: “Cuando los agricultores ganamos bastante, nunca se nos ocurre, por ejemplo, decirle al Gobierno que aquí tiene esta pequeña parte de nuestra ganancia para que haga obras de progreso para el país. Ustedes saben que hay muchas obras en construcción, y que se han solicitado empréstitos que hay que pagar. Esta es la hora en que todos debemos sacrificarnos”. Asimismo, Somoza observó que en épocas de dificultades económicas, se separarían los agricultores eficientes de aquellos que habían alquilado tierras a precio alto para cultivar algodón pero no atendían bien sus fincas. En todo caso, aseguró que él estaba dispuesto a continuar cultivando el algodón en sus propiedades, como de costumbre.⁹²

En respuesta a la solicitud de apoyo de los agricultores, Somoza ofreció crear una comisión integrada por representantes de la Compañía Mercantil de Ultramar, el Banco Nacional y la Cooperativa, que se encargaría de evaluar las ganancias y las pérdidas de los agricultores y proponer algunas medidas en apoyo a quienes lo necesitaban y merecían. Al mismo tiempo, rechazó de manera tajante, la propuesta de destinar parte de las reservas internacionales del país para créditos agrícolas, reducir los costos del transporte ferroviario o cancelar el valor del algodón exportado a una tasa de cambio preferencial. Sin embargo, se mostró dispuesto a reducir los impuestos sobre fertilizantes y combustible, otorgar una prórroga para cancelar créditos solicitados para compra de maquinarias, así como reducir los precios cobrados por las desmotadoras y las tarifas del procesamiento y embarque del algodón en los puertos. Es decir, el régi-

men se mostró anuente a otorgar cierto apoyo al sector privado en un momento de contracción económica, pero esperaba que los empresarios sobrevivieran bajo las leyes tácitas del sistema capitalista. Por otra parte, la capacidad del régimen para proporcionar ayuda estaba limitada por la situación económica general del país en ese momento. Al referirse al pago de deudas y a las inversiones públicas, Somoza dejó en claro que el gobierno también debía preocuparse por su propia solvencia. Por ende, el régimen y el sector privado debían compartir las dificultades que se presentaran en períodos de crisis – situación que Somoza, el empresario-político, muy probablemente comprendía mejor que cualquiera.

G. Conclusión

La fricción y el debate entre el régimen somocista, la oposición política tradicional y el sector privado no giraban en torno a cuestiones esenciales, sino más bien de forma. El proceso de negociaciones que culminó con la firma del Pacto de los Generales entre Somoza y Emiliano Chamorro no requirió que Somoza cediera una cuota significativa de poder político, ni conllevó cambios fundamentales en el Estado nicaragüense. Al fomentar la imagen de un poder compartido, mediante resultados electorales predeterminados y la representación del partido minoritario en ciertas instancias del gobierno, el régimen pudo fortalecer su legitimidad, sin poner en juego su control sobre el aparato coercitivo – la Guardia Nacional – y las principales instituciones del Estado, como los bancos estatales, las instituciones de desarrollo económico y los ministerios del gobierno. Por su parte, la oposición conservadora comprendió la necesidad de llegar a un acuerdo con el régimen, al darse cuenta de la imposibilidad de derrocarlo por la vía tradicional de un golpe de estado y, lo que era más importante aún, de vislumbrar que las diferencias entre liberales y conservadores no eran fundamentales. Carlos Cuadra Pasos, el vocero más elocuente del ala conciliadora del Partido Conservador, se mostró más preocupado por evitar una posible explosión social o inestabilidad política que por construir un gobierno más representativo o mejorar la condición de vida de las grandes mayorías. El Pacto de los Generales confirmó la validez de la tesis de Cuadra Pasos y permitió a los conservadores aceptar su derrota de manera elegante.

Las relaciones entre el régimen y el sector privado también se caracterizaron por momentos de tensión y conciliación, pero nunca llegaron a una ruptura total. Sin duda, los empresarios independientes resentían el acceso preferencial al crédito y a las divisas internacionales disfrutado por Somoza y sus allegados – “el grupo de los dados cargados”, como lo ha descrito Jaime Wheelock. El BIRF, en su estudio del desarrollo económico nicaragüense, atribuyó los bajos niveles de formación de capital en Nicaragua a una actitud cautelosa por parte de los inversionistas privados, la que atribuyó a una falta de confianza en el gobierno y sus políticas. Esto era comprensible, según el BIRF, porque “los factores políticos han incidido a menudo en la determinación de la distribución del crédito, la aprobación de nuevas industrias y en varias formas indirectas y psicológicas”. Por otra parte, el BIRF reconoció que la empresa privada también había sido exageradamente cautelosa, limitándose a invertir en negocios seguros con altas tasas de ganancias: “Se ha dedicado a la especulación en tierras o inmuebles o ha buscado utilidades a través de la exportación y la importación o de la usura en vez de aumentos en la producción”.⁹³

En cierta medida, los comentarios del BIRF no hacen justicia a la clase empresarial nicaragüense. Aún cuando los factores políticos ejercieron una influencia importante en las decisiones del sector privado sobre inversión y producción, su actuación durante los años de la posguerra fue típica de una economía capitalista agroexportadora que reaccionaba principalmente ante estímulos provenientes del exterior. En otras palabras, el que este comportamiento haya sido “especulativo” obedeció más a las condiciones en el mercado mundial para los productos de exportación nicaragüenses, que a la situación interna del país. Los empresarios nicaragüenses simplemente se dedicaron a los negocios que ya sabían administrar. Si bien es cierto que algunos se quejaban de las políticas económicas del régimen, su principal preocupación era conservar la paz en Nicaragua, garantizar la estabilidad social a cualquier costo, y obtener las tasas de utilidad más altas posibles de sus inversiones. El régimen somocista respondió adecuadamente ante estas demandas, sobre todo después de haber alcanzado un acuerdo con los conservadores en 1950. El Pacto de los Generales, por lo tanto, debe interpretarse no sólo en términos de

la capitulación de Chamorro ante la hegemonía somocista en las esferas política y militar. Fue también el resultado natural de la exigencia de terratenientes y comerciantes de un nuevo consenso nacional, para sustituir el viejo sistema de luchas por el poder que generaba gran inseguridad y amenazaba con un desborde de violencia. Emiliano Chamorro – el último de los caudillos nicaragüenses de la vieja guardia, quien se había enfrentado de manera intransigente a Zelaya, Moncada y Somoza – terminó convertido en un completo anacronismo dentro del nuevo Estado nicaragüense.

CITAS Y NOTAS

1. *La Prensa*, 6, 10 y 11 de junio de 1947.

2. *La Prensa*, 17 y 18 de junio de 1947.

3. *La Prensa*, 2 de julio de 1947.

4. Nicaragua, Decreto de confinamiento, LG/DO 51,142 (5 de julio de 1947). Puede también consultarse a Armando Amador, *Origen, auge y crisis de una dictadura*, quien ofrece una descripción detallada de la represión gubernamental del movimiento obrero durante 1946-48. Como uno de los principales dirigentes del PSN, Amador fue exiliado por Somoza en 1947.

5. Millett, *Guardians of the Dynasty*, p. 211.

6. Rafael Córdova Rivas, entrevista con el autor, Managua, 22 de junio de 1984. Enrique Espinoza Sotomayor también afirma que Somoza tuvo que despedir a una tercer parte de la oficialidad de la Guardia Nacional después del golpe. Espinoza Sotomayor, entrevista con el autor, Managua, 11 de marzo de 1985. De acuerdo a datos oficiales, la Guardia tenía 373 oficiales hacia fines de 1947, en

comparación a 345 en abril de 1946. Si la cifra que ofrece Córdova Rivas es correcta, el cuerpo de oficiales tiene que haber crecido con rapidez entre abril de 1946 y mayo de 1947 (lo cual resulta poco probable) y así absorber la purga sin mucha merma de sus números, o Somoza reemplazó casi de inmediato a los oficiales depurados en mayo de 1947. Ver Nicaragua, Secretaría de Guerra, Marina y Aviación, *Memorias* de los años 1946 y 1947.

7. *La Prensa*, 5 de agosto de 1947. Novedades, el periódico del régimen, informó de un total de 108,487 votos depositados, de los cuales el PLN recibió 91,261 y los Conservadores Naciona-listas 17,226. *Novedades*, 11 de agosto de 1947. Con base a estas cifras, puede estimarse que la afluencia de votantes liberales se redujo en un 13% en comparación a sus resultados en febrero.

8. Salvador Guerrero, presidente de la Junta Directiva Departamental y Legal del PLN en Chinandega, a ASG, Chinandega, 17 de julio de 1947, caja 24, AN(A).

9. Nicaragua, "Mensaje presidencial del Dr. Benjamín Lacayo Sacasa a la Asamblea Constituyente al iniciar sus sesiones el 19 de agosto de 1947," LG/DO 51,177 (20 de agosto de 1947).

10. Millett, *Guardians of the Dynasty*, p. 211.

11. Chargé en Nicaragua (Bernbaum) a Secretario de Estado, 7 de agosto de 1947, FRUS, 1947, 8:864-64.

12. Nicaragua, "Mensaje inaugural del Dr. Victor Román y Reyes ante la Asamblea Constituyente al asumir las funciones de Presidente de la República," LG/DO 51,178 (21 de agosto de 1947).

13. Secretario de Estado en funciones a embajada en Nicaragua, FRUS, 1947, 8:865-66.

14. Secretario de Estado a los representantes diplomáticos de Estados Unidos en las Repúblicas americanas con la excepción de Nicaragua, 30 de mayo de 1948, FRUS, 1948, 9:108.

15. *La Prensa*, 17 de septiembre de 1947.

16. Chamorro fue trasladado al aeropuerto de Managua en un automóvil de la embajada de Estados Unidos en compañía del primer secretario de la embajada, el ministro salvadoreño y Anastasio Somoza Debayle. *La Prensa*, 28 de septiembre de 1947.

17. *La Prensa*, 16 y 28 de septiembre y 4 de octubre de 1947.

18. *La Prensa*, 1 de noviembre de 1947.

19. *La Prensa*, 30 de noviembre y 16 de diciembre de 1947.

20. Carta del Dr. Carlos Cuadra Pasos a los generales Somoza y Chamorro, Granada, 30 de junio de 1947, en Nicaragua, Ministerio de Relaciones Exteriores, *Realidad política de Nicaragua*, p. 64.

21. Ibid., pp. 65 y 67.

22. Carta del general E. Chamorro al Dr. Carlos Cuadra Pasos, Managua, 2 de julio de 1947, *ibid.*, pp. 72-73.

23. Chamorro no hace referencia alguna en su autobiografía al fracasado golpe de estado. Solamente menciona que su vida corría peligro y que tuvo que salir nuevamente de Nicaragua al exilio en Guatemala. Chamorro, *Autobiografía*, p. 105.

24. Carta del Dr. Carlos Cuadra Pasos al general Anastasio Somoza, Managua, 23 de diciembre de 1947, en Ministerio de Relaciones Exteriores, *Realidad política de Nicaragua*, pp. 103-11.

25. Carta del general Anastasio Somoza al Dr. Carlos Cuadra Pasos, Managua, 30 de diciembre de 1947, *ibid.*, pp. 112-18.

26. Nicaragua, *Constitución política de 1948*, LG/DO 52,16 (22 de enero de 1948).

27. Carlos Cuadra Pasos, *Mensaje a los Conservadores de Nicaragua*, p. 11. El texto del acuerdo Somoza-Cuadra Pasos aparece en *ibid.*, pp. 11-14.

28. Emiliano Chamorro, “Declaración al Partido Conservador de Nicaragua y al pueblo nicaragüense en general,” Guatemala, 2 de marzo de 1948, tomo 24 (B-31), Archivo no. 5, gaveta 2, no. 4, IHCA.

29. Frente Nacional pro Libertad de Nicaragua, *La verdadera realidad política de Nicaragua*, pp. 28-29, 45.

30. *Ibid.*, pp. 47-51.

31. Nicaragua, Decreto de amnistía, LG/DO 52,56 (11 de marzo de 1948). El decreto de amnistía hacía referencia específica a los opositores recalcitrantes (es decir, Chamorro) para que volvieran y participaran en un proceso ordenado y evolutivo “que evite los medios violentos y procure la completa armonía nacional.” Nicaragua, Decreto presidencial convocando a elección especial para senadores y diputados conforme acuerdo entre el PLN y políticos Conservadores, LG/DO 52,76 (10 de abril de 1948). Este decreto autorizó la participación de todos los partidos “históricos”, es decir, el PLN y los conservadores. Bajo el acuerdo Somoza-Cuadra Pasos, el PLN se abstuvo de presentar candidatos y permitió, de esa manera, que los cuatro candidatos a senador y los siete a diputado que presentaron los conservadores pudiesen ser electos sin oposición. En consecuencia, el partido Conservador Nacionalista fue lanzado por la borda al haberse agotado su utilidad para el régimen, al menos por el momento.

32. El Pacto de Alianza firmado el 16 de diciembre por Chamorro y Rosendo Argüello, en representación del PLI, comprometió a los signatarios a combinar sus recursos económicos y militares para derrocar a los gobiernos de Costa Rica, Nicaragua y la República Dominicana y reemplazarlos con regímenes democráticos. Conforme se “liberaba” un país, su nuevo gobierno apoyaría la lucha contra las dictaduras restantes hasta que todos estuvieran libres. El

presidente Arévalo de Guatemala fue invitado a participar como mediador en caso de presentarse diferencias irreconciliables entre las partes.

33. Puede verse el manifiesto publicado por los seguidores de Cuadra Pasos en el cual denuncian la sustitución de funcionarios de partido de la línea civilista en los departamentos de Boaco, Granada y Rivas. "Manifiesto: El grupo conservador civilista denuncia los procedimientos ilegales de ciertas entidades del Partido," Managua, 29 de septiembre de 1949, Editorial La Prensa, T-24 (B-31), Archivo no. 5, gaveta no. 2, no. 6, IHCA.

34. ASG a Carlos Cuadra Pasos, Managua, 7 de diciembre de 1949, Fondo Salvadora de Somoza, no. 8, AN.

35. *La Prensa*, 17 y 21 de enero, 22 de febrero y 30 y 31 de marzo de 1950.

36. *La Prensa*, 2 de abril de 1950.

37. El Pacto de los Generales fue precedido por un negocio entre los dos individuos. La Compañía Nacional de Productores de Leche, S.A. se organizó en febrero de 1950 con Chamorro como presidente de la junta directiva y Somoza como vice-presidente. Se convirtió eventualmente en la planta lechera más grande del país. LG/DO 54,39 (23 de febrero de 1950). Algunos ejemplos de las acciones que se emitieron pueden verse en Fondo Salvadora de Somoza, no. 7, AN.

38. Nicaragua, Decreto convocando a elecciones para Asamblea Constituyente y Presidente de la República, LG/DO 54,75 (15 de abril de 1950).

39. *La Prensa*, 16 y 20 de abril y 18 de mayo de 1950.

40. Partido Conservador de Nicaragua, "Manifiesto de la Junta Directiva Departamental y Legal del Partido Conservador de Nicaragua al pueblo de occidente," León, 21 de abril de 1950, Fondo Salvadora de Somoza, no. 9, AN. A Chamorro Benard se le atribi-

buían credenciales impecables, “por ser absolutamente extraño a nuestras cuestiones políticas”.

41. Partido Conservador de Nicaragua, “Manifiesto de la Junta Directiva Nacional y Legal del Partido Conservador de Nicaragua a los Conservadores y todos los que con nosotros quieren luchar por acabar con el continuismo,” Managua, 10 de mayo de 1950. Colección Centroamérica, legajo 4, no. 588, IHCA; “Comité de Propaganda Chamorro-Benard reproduce la circular del señor Comandante General de la República,” Managua, 10 de mayo de 1950, Colección Centroamérica, legajo 4, no. 607, IHCA.

42. *La Prensa*, 23 de abril y 2 de mayo de 1950.

43. Véanse, por ejemplo, un par de cartas de Emiliano Chamorro y Gustavo Manzanares al presidente del Consejo Nacional de Elecciones, Managua, 24 de abril de 1950, quejándose de que la Guardia Nacional prohibió la transmisión radiofónica de un comunicado del Partido Conservador en Managua y que los policías de tránsito impidieron el paso de Managua a Granada de camiones que llevaban a simpatizantes del partido, en Fondo Salvadora de Somoza, no. 13, AN. También pueden consultarse los reportajes periodísticos sobre hostigamientos a conservadores en León, Jinotega y Matagalpa en *La Prensa*, 14 y 18 de mayo de 1950.

44. Nicaragua, Consejo Nacional de Elecciones, *El juicio electoral de 1950*, pp. 352-54 y 359-60.

45. *La Prensa*, 23 de mayo de 1950. El editorial de *La Prensa* para esa fecha manifestó lo siguiente: “Y ahora solo nos queda decir al Gral. Somoza: Esta vez tiene Ud. el campo propicio para ser un gobernante perfecto. Nadie le echará en cara que ha usurpado el gobierno”. La posición del Partido Conservador se encuentra en *La Prensa*, 3 de junio de 1950. Esta cita tiene que rastrearse en el número correspondiente de *La Prensa*.

46. Nicaragua, Recaudación General de Aduanas, *Memorias de 1949 y 1956*. Puede también consultarse U.S. Department of Commerce, Country Economic Reviews, “Economic Review of Nicaragua in 1947.”

47. Ibid., p. 68. La inversión pública creció a una tasa anual promedio de 26.6% durante el período 1950-55, una cifra mucho más alta que la tasa anual de crecimiento económico de 8.3% registrada en el mismo período. Nicaragua, Consejo Nacional de Economía, Oficina de Planificación. *Análisis del desarrollo económico y social de Nicaragua*, pp. 1-16.

48. Aun en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, la gran mayoría de los empleados estaban dedicados al funcionamiento de los servicios nacionales de correo y telégrafo.

49. Nicaragua, Ley creadora de los ministerios de estado y otras dependencias del Poder Ejecutivo, LG/DO 52,249 (13 de noviembre de 1948).

50. Nicaragua, Decreto de creación del Consejo Nacional de Economía, LG/DO 53,132 (20 de junio de 1949).

51. Nicaragua, Ley que reforma el decreto de creación del Consejo Nacional de Economía de 1949, LG/DO 57,36 (13 de febrero de 1953).

52. Nicaragua, Ley creadora del Instituto de Fomento Nacional (INFONAC), LG/DO 57,60 (13 de marzo de 1953).

53. IBRD, Mission to Nicaragua, *The Fiscal System of Nicaragua*.

54. Nicaragua, Impuesto sobre ingresos netos a productores de café y algodón, LG/DO 55,263 (7 de diciembre de 1951).

55. IBRD, *The Fiscal System of Nicaragua*, pp. 5-8.

56. Ibid., pp. 61-66.

57. Víctor Román y Reyes a ministros del gabinete, Managua, 6 de junio de 1949, Fondo Salvadora de Somoza, no. 3, AN.

58. León Debayle a ASG, Managua, 6 de junio de 1949, Fondo Salvadora de Somoza, no. 3, AN.

59. IBRD, *The Economic System of Nicaragua*, pp. 5-12.

60. Nicaragua, Ley de impuesto sobre la renta, LG/DO 56,300 (31 de diciembre de 1952).

61. Los detalles de los contratos de préstamo pueden verse en LG/DO 55,167 (11 de agosto de 1951); 55,171 (17 de agosto de 1951); 55,274 (20 de diciembre de 1950); 57,227 (2 de octubre de 1953); 59,125 (22 de septiembre de 1955); 59,260 (16 de noviembre de 1955); y 60,212 (19 de agosto de 1956).

62. Modesto Armijo Mejía, *Ideas sobre la organización del ejecutivo*, pp. 2-10. Armijo llegó a ser ministro de Obras Públicas en el gobierno de Luis Somoza D.

63. Consejo Nacional de Economía, *Análisis del desarrollo económico y social de Nicaragua*, pp. 293-99; José M. Castillo a ASG, Managua, 13 de abril de 1956, caja 45, AN(A).

64. IBRD, *The Economic Development of Nicaragua*, p. 75.

65. Consejo Nacional de Economía, *Análisis del desarrollo económico y social de Nicaragua*, p. 246.

66. Durante los años de 1950-1956, entre un 20 y un 40 por ciento de toda la inversión privada se orientó a fines no productivos tales como la construcción de viviendas y edificios. CEPAL, *El desarrollo económico de Nicaragua*, p. 56.

67. Ibid., pp. 57 y 59.

68. Un análisis bastante completo de la génesis y desarrollo de estos dos bancos se encuentra en Jaime Wheelock, *Imperialismo y dictadura*, pp. 148-58.

69. Recaudación General de Aduanas, *Memoria* de 1940, p. 100; Memoria de 1949, p. 89; y Memoria de 1956, p. 78.

70. Nicaragua, Instituto de Fomento Nacional, *Realizaciones*.

71. Entrevistados por el autor: Dr. Mario Flores Ortiz, Managua, 15 de mayo de 1984; Enrique Alvarado, Managua, 13 de mayo de 1985.

72. F. Alfredo Pellas a ASG, Granada, 11 de septiembre de 1950, caja 58, AN(A).

73. F. Alfredo Pellas a ASG, Managua, noviembre de 1954, Fondo Salvadora de Somoza, no. 12, AN.

74. En 1953 el Ingenio San Antonio producía alrededor de un 75 por ciento del azúcar del país mientras que el total de trabajadores que laboraban en los ingenios de azúcar representaba un 47 por ciento de la fuerza de trabajo industrial del país. Nicaragua, Ministerios de Economía y de Trabajo, *Antecedentes del Seguro Social en Nicaragua*, pp. 61-64.

75. Parte de la información pública disponible sobre estas empresas se encuentra en LG/DO 49,154 (26 de julio de 1945); 50,137 (28 de junio de 1946); 57,185 (12 de agosto de 1953); y 57,291 (18 de diciembre de 1953).

76. Nicaragua, Ley reguladora del comercio, LG/DO 49,218 (15 de octubre de 1945).

77. U.S. Department of Commerce, Country Economic Reviews, "Economic Review of Nicaragua in 1947," p. 1; Nicaragua, Reforma a la ley reguladora del comercio, LG/DO 52,76 (10 de abril de 1948).

78. Nicaragua, Decreto-ley de nivelación de cambios, LG/DO 53,79 (7 de abril de 1949); y Reformas al decreto-ley de nivelación de cambios, LG/DO 53,276 (17 de diciembre de 1949).

79. Nicaragua, Ley reguladora de cambios internacionales, LG/DO 54,238 (9 de noviembre de 1950). Esta ley transfirió los procedimientos de compra y venta de divisas directamente al Departamento de Emisión del Banco Nacional, aboliéndose así el puesto de Contralor de Cambios.

80. Nicaragua, Ley reguladora de cambios internacionales, LG/DO 59,145 (30 de junio de 1955).

81. Cámara de Comercio de Managua, *Boletín*, no. 146-147 (octubre-noviembre de 1947), pp. 3-5.

82. Junta Directiva de la Cooperativa Nacional de Agricultores a sus socios, Managua, 26 de mayo de 1951, Fondo Salvadora de Somoza, no. 3, AN.

83. Cámara de Comercio de León, *Mercurio*, no. 155 (julio de 1950), pp. 13 y 15.

84. Cámara de Comercio de Managua al Consejo Directivo del Departamento de Emisión del Banco Nacional, 12 de febrero de 1951, *Boletín*, no. 170 (marzo de 1951).

85. *Mercurio*, no. 155 (julio de 1950), pp. 13 y 15.

86. Cámara de Comercio de Managua, *Boletín*, no. 171 (abril de 1951), pp. 38-39.

87. *Boletín*, no. 189 (mayo de 1953), pp. 1-2.

88. *Boletín*, no. 213 (febrero-marzo de 1956), pp. 3-4.

89. Nicaragua, Decreto del estado de emergencia económica, LG/DO 43,208 (26 de septiembre de 1939). Este decreto se renovaba por lo general en octubre de cada año; el último de la presidencia de Somoza García se publicó en LG/DO 59,230 (10 de octubre de 1955).

90. *Boletín*, no. 185 (octubre-noviembre de 1952).

91. *Boletín*, no. 215 (junio de 1950), pp. 3 y 8. La cotización al seguro social que tenían que pagar las empresas era el equivalente al 8 por ciento del salario del trabajador; los trabajadores, por su parte, cotizaban con el 4 por ciento de su salario.

92. *La Prensa*, 30 de noviembre de 1955. Es posible que parte de la explicación de la actitud algo negativa de Somoza ante los algodóneros se haya debido a la expansión exagerada de la superficie dedicada al algodón en desmedro de los cultivos de granos básicos. Tal como se expresó, “todo mundo está cultivando algodón”. Por cierto, en junio de 1955 el gobierno se vio obligado a prohibir la exportación de maíz, frijoles, sorgo, papas, arroz y verduras frescas. Nicaragua, Ley de defensa al consumidor de artículos nacionales de primera necesidad en tiempos de escasez, LG/DO 590,134 (17 de junio de 1955) y 59,136 (20 de junio de 1955).

93. IBRD, *The Economic Development of Nicaragua*, p. 100. Bajo esta óptica, podría argumentarse que Somoza fue uno de los pocos empresarios con visión estratégica en el país, aparte de que gozaba, por supuesto, de muchas ventajas sobre otros empresarios.

CAPÍTULO VI

Defensores y opositores del régimen

Hacia 1950, el régimen de Anastasio Somoza había adquirido las características formales y sustanciales que lo marcarían hasta la muerte del dictador en 1956. Logró reconciliarse – al menos oficialmente – con el Partido Conservador, mediante la suscripción de una serie de acuerdos y la apertura de algunos espacios de participación política y burocrática. De esta manera, los políticos conservadores obtuvieron acceso a algunos cargos públicos, y diversos grupos empresariales ligados con dicho partido recibieron apoyo del gobierno. Además, Somoza se comprometió a impulsar una política de desarrollo económico favorable para todos los empresarios y terratenientes, tanto dentro de las áreas geográficas de influencia del Partido Liberal como del Conservador. Finalmente, impulsó una serie de medidas fiscales y administrativas – unas más exitosas que otras – que procuraban modernizar el aparato del Estado para ponerlo al día con el cambiante entorno económico y político de la década de 1950. Estas disposiciones fueron aplicadas durante un período de marcada expansión económica que obligó al Estado a adaptar su funcionamiento a la nueva realidad; a la vez, permitieron al régimen mantenerse en el poder sin interrupciones.

Sin embargo, las alianzas políticas y la coyuntura económica favorable no fueron suficientes como para permitir al régimen somocista la superación de todas sus debilidades. La continua presencia de

Somoza al frente del gobierno no era del agrado de todos, menos aún de los conservadores. El propio Chamorro y sus seguidores dentro del Partido Conservador no dejaban de criticar a Somoza y su gobierno. Por otra parte, un buen número de nicaragüenses seguían identificados con corrientes políticas que abiertamente pedían la eliminación del somocismo; entre éstos, se destacaban los liberales independientes, así como los exiliados que se dedicaban por entero a organizar conspiraciones y tratar de ponerlas en ejecución. En otras palabras, el régimen no podía bajar la guarda ni confiar en que la oposición actuaría dentro de los límites establecidos. Esta situación exigía un continuo esfuerzo por consolidar el aparato coercitivo del Estado y el brazo político del somocismo, a fin de estar preparados para enfrentar cualquier eventualidad. Asimismo, Somoza debía dejar muy en claro su control absoluto y permanente sobre la Guardia Nacional y el Partido Liberal. Aunque la victoria de la oposición en las urnas era muy improbable – como resultado de sus divisiones internas y de las prácticas fraudulentas del Partido Liberal Nacionalista (PLN) en el poder – Somoza necesitaba mantener fuerte la maquinaria del PLN para impulsar sus planes reeleccionistas.

A. El partido Liberal

El régimen somocista asignó a su brazo político, el PLN, las tareas vitales de estimular y organizar el apoyo popular, así como de llevar a los votantes a las urnas el día de las elecciones. En esencia, el PLN era una maquinaria política muy eficiente que se activaba durante las campañas electorales. Al igual que en 1936 y 1945, hacia fines de 1949 los activistas del PLN se dedicaron a organizar reuniones “espontáneas” de liberales somocistas para proclamar la candidatura presidencial del general Somoza. Así también lo harían desde mediados de 1954, anticipando las elecciones de 1956.¹ Dichas proclamas se llevaban a cabo, a veces, en una plaza pública, pero lo usual era realizarlas en la alcaldía, o en la casa de algún caudillo liberal. Después de redactar un documento ensalzando hasta la saciedad las cualidades del general, los presentes suscribían el acta y se comprometían a trabajar por el triunfo de su candidato. Posteriormente, la proclama era enviada a Managua, donde el periódico somocista *Novedades* se encargaba de publicarla como expre-

sión de un gran movimiento popular que reclamaba la continuación de Somoza en el poder.

En otros casos, la candidatura de Somoza era adoptada por un sólo individuo, que declaraba su adhesión a la causa somocista. En cada municipalidad se guardaba un “Libro Rojo” donde se llevaba un registro de todos los liberales. Los nuevos miembros asentaban su nombre en el libro y firmaban una constancia en presencia de testigos, explicando las razones que los motivaban a convertirse en liberales somocistas, abandonando otras agrupaciones políticas como el Partido Conservador, o asumiendo por primera vez un compromiso partidista. Por lo general, en la constancia se referían a Somoza como adalid de la paz y el progreso, amenazados por sus enemigos, Emiliano Chamorro y los conservadores. Por ejemplo, Aníbal Hernández y Ricardo Irigoyen de la Isla de Ometepe, suscribieron un documento describiendo a los conservadores como “refractarios al progreso y cultura nacionales y solo amantes del desorden y las montoneras con que ensangrentaron siempre el suelo de Nicaragua”.² Tomás Adolfo Martínez, presidente del comité liberal en la Isla de Ometepe, envió a Somoza las declaraciones de Hernández e Irigoyen, acompañadas de una nota en la cual afirmaba que éstos eran “dos nuevos correligionarios, que como los anteriores que ya he enviado a Ud., contribuirán como buenos somocistas a conseguir el triunfo de la candidatura de Somoza”.³ Obviamente, Martínez estaba buscando ganar méritos con Somoza mediante el reclutamiento de seguidores para la causa. En Jinotepe, departamento de Carazo, siete habitantes del pueblo de La Conquista se inscribieron como liberales en agosto de 1956, después de muchos años de pertenecer al Partido Conservador, argumentando que Somoza había llevado la paz y el progreso a Nicaragua; a diferencia de “los horrores, desaciertos y la intranquilidad en que los jefes de este partido [el Conservador] mantuvieron a la República en años anteriores”.⁴ Tales conversiones de fe política no eran, necesariamente, sinceras o espontáneas.

Las proclamas y muestras individuales de adhesión a la causa somocista eran respaldadas durante las campañas políticas mediante concentraciones populares, durante las cuales los dirigentes del partido o el mismo Somoza ofrecían discursos y entregaban comida y

licor a los concurrentes. Por ejemplo, cuando Somoza llegó a Rivas en febrero de 1950 para asistir a una concentración en apoyo a su candidatura, se hicieron presentes unas 1,500 personas, a quienes repartieron 400 litros de aguardiente. Además, cada asistente recibió una “magnífica”, es decir, una tarjeta de identidad impresa con la foto de Somoza y el siguiente mensaje: “El portador de esta tarjeta asistió a la proclamación del Gral. Somoza a la Presidencia de la República. Rivas, 26 de febrero de 1950”.⁵ Registrarse como miembro del Partido Liberal y portar una “magnífica” otorgaba a la persona una constancia pública de su militancia somocista, que podría resultar muy útil en caso de un problema con las autoridades o cuando se solicitaba algún favor de los poderosos.

Por lo general, los cierres de campaña del PLN consistían en grandes concentraciones organizadas en León y otras ciudades. Todos los recursos del Estado se ponían a disposición del PLN para movilizar a los participantes. El ferrocarril y los camiones del gobierno proporcionaban transporte gratis; la distribución de comida y aguardiente retenía a la gente en la plaza mientras Somoza y su comitiva saludaban a los correligionarios y pronunciaban sus discursos.⁶ En general, el PLN no descuidaba ningún aspecto en su labor proselitista: su gente tomaba en serio las campañas electorales al margen de sus motivaciones, ya fueran éstas la conveniencia personal o la presión social. La movilización popular era un elemento clave en la estrategia del régimen para asegurar su presencia y su control dentro la población. Por una parte, obligaba a los dirigentes a mantener el aparato del partido activo y eficiente; así también cohesionaba e identificaba a la gente alrededor de una persona y una organización que le ofrecían algunos beneficios tangibles.

En realidad, las promesas del PLN resultaban atractivas para el ciudadano común, así como para el campesino y el obrero urbano. Su ideología y programa de gobierno se divulgaban por medio de volantes y panfletos. Durante la campaña electoral de 1950, el PLN preparó un programa de gobierno que ofrecía entregar tierras vírgenes para su colonización a pequeños agricultores, así como títulos de propiedad a los campesinos que se encontraban trabajando en tierras del Estado. Asimismo, el PLN ofreció al obrero urbano crear un sis-

tema de seguridad social e incrementar la inversión estatal en salud, electrificación y vivienda. Tal como expresó Somoza: “Quiero que el pueblo nicaragüense sea un pueblo sano, con viviendas sanas y alegres, dentro de una vida de sencillas virtudes”.⁷

En 1956, el PLN ofreció continuar impulsando las “profundas transformaciones” experimentadas por el país durante los seis años anteriores, especialmente en aquellos campos que beneficiaban de manera directa a los trabajadores, tales como los sistemas de seguridad social y educación pública.⁸ Sin embargo, los logros reales del régimen se hallaban muy distantes de sus promesas. Por ejemplo, en 1956 ofreció promulgar una ley agraria, según la cual los campesinos podrían obtener títulos de propiedad sobre las tierras estatales que cultivaban – promesa que ya había hecho previamente en 1950. En todo caso, el hecho de incluir estos ofrecimientos atractivos para campesinos y obreros sugiere que, al menos, el somocismo reconocía su importancia como fuente de apoyo electoral.

El PLN también insistió en que su ideología y sus logros lo colocaban por encima de otras corrientes políticas en Nicaragua. Los somocistas mostraban especial orgullo por el Código de Trabajo promulgado en 1945, los proyectos de vivienda de bajo costo, el impuesto sobre la renta, y la seguridad social del año 1956. Su posición contrastaba con la del Partido Conservador, pues, por lo general, se oponía a toda legislación que permitiera al Estado inmiscuirse en las relaciones entre el capital y el trabajo, o darle asistencia directa a personas de bajos ingresos. Estas medidas eran aprovechadas por la propaganda somocista para describir a Nicaragua como un país que surgía de un orden semifeudal de atraso e injusticia social. En contraste, el nuevo orden liberal somocista buscaba elevar los niveles de vida de la gente por medio de políticas de desarrollo económico y “equilibrio social”, mientras luchaba contra toda ideología “extremista” de la izquierda y la derecha – aunque, con mucho más frecuencia, se referían a la “amenaza” comunista como el enemigo principal.⁹

Aunque la ideología y los programas de gobierno pudieron haber tenido importancia para la dirigencia del partido y ciertos grupos sociales urbanos, probablemente no figuraban entre las preocu-

paciones de la gran mayoría de nicaragüenses, dado los altos niveles de analfabetismo y la considerable población rural del país. La importancia del PLN era mucho más significativa en términos concretos, materializada en la presencia de los caudillos locales, de las organizaciones de base, y de la influencia que se podría ejercer a través de ellos. Para la dirigencia, la organización eficiente y el financiamiento adecuado del partido resultaba una preocupación permanente, aunque la actividad partidaria se intensificaba en momentos de elecciones o de tensiones políticas graves, tales como el golpe de Estado de 1947, el alzamiento armado de 1954 o el asesinato de Somoza García en 1956.

La estructura formal del partido fue reformada por Somoza en 1944 para aumentar considerablemente el poder de las autoridades nacionales, característica que conservó en el futuro. En la cima de la estructura se ubicaba el propio Somoza – el “jefe máximo” – y, subordinada bajo su mando, se hallaba la Junta Directiva Nacional y Legal, que administraba el partido por medio de un equipo asalariado y permanente en Managua. Los comités departamentales funcionaban bajo la influencia de caudillos locales, individuos que generalmente ocupaban algún puesto en el Congreso o en la burocracia del Estado. En los pueblos y las áreas rurales, los comités del partido al parecer estaban bajo el control de caudillos menores y de los jueces de mesta.

Sin embargo, durante los períodos electorales, las actividades del partido se extendían territorialmente y su estructura se ensanchaba. A la par de la estructura “regular” del partido, brotaba una multitud de comités de diversos grupos de liberales dedicados a la causa del somocismo. Los más comunes eran los llamados “comités de propaganda pro-General Somoza”, cuya única función era apoyar su candidatura y colaborar con las actividades electorales. Por ejemplo, en el departamento de Madriz, el Comité Departamental de Propaganda estableció siete comités locales integrados por un total de 114 adeptos comprometidos con la causa de la candidatura somocista en 1950. A su vez, estos comités locales organizaron 91 “comisiones de propaganda” para llevar a cabo actividades electorales específicas.¹⁰ En el caso de las elecciones de 1956, surgió un número consi-

derable de organizaciones electorales a la par de la estructura del PLN, al parecer como resultado de iniciativas locales empeñadas en convencer a Somoza de su lealtad y activismo. Así, en Nueva Segovia se creó el Frente Liberal Nacionalista, en Chontales un Sub-Comité Liberal de Obreros y un Sub-Comité de Obreros y Campesinos Liberales Nacionalistas pro Anastasio Somoza García, en Managua un Comité Central Ferrocarrilero Pro-Somoza, en Masaya un Frente Obrero Somocista, en Chinandega un Comité de Compactación Liberal, y así por el estilo.¹¹ Incluso, surgió un intento de crear una federación nacional de los llamados Frentes Populares Liberales Somocistas, encabezada por Nicolasa Sevilla, una ferviente somocista que adquirió notoriedad por encabezar grupos de choque en Managua.¹²

El comité electoral de Managua era, por supuesto, el más importante, y llevaba el nombre de Comité Nacional de Propaganda Pro-Candidatura del General Anastasio Somoza. Durante la campaña de 1956, se hallaba integrado por veintidós miembros que constituían las figuras principales del partido. Además, existía un consejo asesor de treinta y ocho miembros, y diversos comités encargados de tareas específicas –finanzas, publicidad, prensa, radio, asistencia social, afiliación y asuntos legales– en el que trabajaban cincuenta y ocho miembros del partido.¹³ Sin embargo, sin duda el peso y la importancia de este comité nacional descansaba en el presupuesto que estaba en capacidad de repartir durante la campaña. Al igual que en años anteriores, el grueso de los fondos del partido provenía de la contribución del 5% que se descontaba de los salarios de todos los empleados públicos, cantidad que aumentó notablemente durante la década de 1950 como resultado del crecimiento de la planilla del gobierno. Así, desde julio de 1947 hasta diciembre de 1949, el PLN recibió un poco más de C\$2 millones de la contribución del 5%, lo que equivalía a alrededor de C\$69,000 mensuales; y desde abril de 1950 hasta diciembre de 1955 recibió C\$8.9 millones, es decir, C\$128,000 mensuales.¹⁴

Durante la campaña electoral, los gastos del partido se concentraban en los medios de comunicación. En el período 1950-52, los pagos a los medios de comunicación, en conjunto con un rubro

ambiguo identificado tan sólo bajo el término de “otros”, sumaron más del 80% del total de los gastos del partido.¹⁵ La información disponible no permite conocer en detalle en que consistían los “otros” gastos del partido, pero cierta documentación ofrece pistas sobre las diversas maneras empleadas por el somocismo para atraer a los votantes. El licor seguía siendo un elemento importante y su contribución a la causa se cuantificó en términos precisos. En efecto, los administradores del partido estimaron la cantidad de aguardiente a distribuirse por departamento durante la campaña de 1950 utilizando los datos de votación liberal en 1947, y fijando el consumo per cápita en 0.4 litros. De esta manera, calcularon que necesitaban distribuir un total de 43,369 litros, cifra que fue cerrada en 46,800 litros para compensar las cantidades derramadas al momento de servir el licor. Asimismo, estimaron el costo de cada voto liberal en todos los departamentos del país, tomando en cuenta la fuerza del Partido Conservador, las distancias a recorrer, y la “resistencia política de la oposición” en general. Por lo tanto, Carazo, un departamento pequeño y fuertemente permeado por el somocismo, recibió C\$3.00 por votante, lo mismo que León, donde los liberales no tendrían mayor problema en ganar. Pero en Chontales, Matagalpa, Rivas, Boaco y Granada se asignó C\$5.00 por votante, considerando que la fuerza del Partido Conservador y las distancias entre los poblados eran mayores. Mientras tanto, Managua y Masaya recibieron C\$4.00 por votante, porque la fuerza de los dos partidos principales era más o menos igual. Zelaya, un departamento enorme de población muy dispersa, recibió C\$10.00 por cada potencial votante.¹⁶ Por tanto, el PLN debía invertir un promedio de C\$4.75 por cada voto que esperaba recibir, más una pequeña cantidad para “gastos imprevistos”. Es de suponerse que estos fondos cubrían los gastos de comida, transporte, banderines, pólvora, música, tarimas y otros.

La campaña de 1950 costó al PLN aproximadamente C\$1.4 millones, de acuerdo José María Castillo, tesorero del partido. Sin embargo, para la campaña de 1956 el partido llegó a acumular un total de casi C\$5 millones para los gastos correspondientes. Los ingresos que recibía el PLN de la contribución del 5% no representaban su única fuente de recursos, pero sí la más importante. En una

situación apremiante, el PLN podía conseguir un préstamo del Banco Nacional, el cual sería cancelado con fondos del 5%. Además, el PLN vendía bonos a sus correligionarios y simpatizantes, comprometiéndose a cancelar el valor de los mismos durante el siguiente período presidencial. Para la campaña de 1956, por ejemplo, el PLN colocó bonos por un total de un millón de córdobas en denominaciones de 10, 25, 50, 100, 500 y 1,000 córdobas; prometió amortizarlos “mediante sorteos a partir del 1 de marzo de 1957”.¹⁷ En otras ocasiones, algunos eventos especiales del partido se sufragaban con fondos provenientes tanto de la jefatura nacional del PLN como de donantes particulares en el ámbito local. Tal fue el caso de la visita de Somoza a León en febrero de 1956, en la que se invirtieron casi C\$77,000 de los fondos de la campaña; de esta cantidad, el PLN contribuyó C\$40,000 y lo demás se consiguió con donaciones particulares en dinero y en especie – generalmente donativos de reses para las comidas – y los ingresos de la venta de unos 5,000 litros de aguardiente, donados por la oficina de administración fiscal del gobierno en la ciudad.¹⁸

B. La Guardia Nacional

Mediante estos métodos, el Partido Liberal lograba los votos que legitimaban las victorias somocistas en las urnas. Sin embargo, tales votos no eran suficientes para legitimar la continuidad del régimen en el poder, pues no bastaban para convencer a los grupos de oposición de que Somoza era – legal y constitucionalmente – el presidente de la República. Sin duda, la existencia y continuidad del régimen también descansaban en el control ejercido sobre los elementos de coerción del Estado, principalmente la Guardia Nacional y los diversos grupos paramilitares en el país. De hecho, la maquinaria política empleada por el régimen era una fusión, orgánicamente articulada, entre el Partido Liberal y la Guardia Nacional – ambas encabezadas por Somoza en calidad de jefe indiscutible. Los efectivos de la Guardia eran todos liberales y, sobre todo, somocistas; los miembros del Partido Liberal trabajaban de cerca con la Guardia para dejar en claro ante la población que este poder coercitivo no sólo se hallaba al servicio del Estado sino también del partido.

El vínculo entre la Guardia y el Partido Liberal quedó en clara evidencia hacia fines de la década de 1940, cuando la legitimidad del régimen era muy escasa, tanto dentro como fuera de Nicaragua, como consecuencia del fiasco de Argüello y de los planes reeleccionistas de Somoza. El intento de golpe de Estado de los conservadores en septiembre de 1947, también debe haber generado preocupación: en los meses inmediatamente posteriores al ataque a los puestos de la Guardia en Muelle de los Bueyes y La India, la Guardia y el Partido Liberal procedieron aceleradamente a reorganizar los grupos paramilitares para defender al régimen, pues al parecer la vieja Liga Militar Liberal se había deteriorado. Por lo general, los nuevos grupos que se crearon llevaron el nombre de “Reserva Civil de la Guardia Nacional”, y estaban integrados por “amigos Liberales Nacionalistas”.¹⁹ Estos grupos de Reserva Civil procuraban cooperar con la Guardia en el mantenimiento de la paz y el orden, obedecían las instrucciones impartidas por oficiales de la Guardia e informaban de cualquier “actividad sospechosa”; además, se les autorizó el porte de armas, con la advertencia de emplearlas “responsablemente”.²⁰

No es posible estimar cuántos individuos estaban afiliados en el ámbito nacional a estos grupos de Reserva Civil. Algunas de las actas de fundación disponibles reflejan una gran diversidad en cuanto al número de integrantes de cada grupo. Por ejemplo, la compañía formada en el valle de La Grecia, cerca de Chinandega, tenía tan sólo veintitrés miembros, pero en Masaya se organizó un batallón con 322 miembros distribuidos en nueve compañías; y en el departamento de Estelí se formó un batallón de 1,152 miembros, divididos en cuatro compañías.²¹ Al parecer, el grupo más grande se constituyó en Chontales, donde se percibía que la amenaza conservadora era más peligrosa; hacia diciembre de 1947, se habían incorporado un total de 2,492 “auxiliares de la Guardia Nacional” a dicha estructura paramilitar en ese departamento.²² Considerando que en 1947 la Guardia tan sólo disponía de 85 efectivos permanentes en todo el departamento de Chontales, la incorporación de casi 2,500 reservistas daba la impresión de un aumento masivo de la fuerza de la Guardia.²³ Esto no quiere decir que el poder de fuego de la Guardia se incrementara en la misma proporción; la mayoría de los miembros de la Reserva Civil probablemente jamás habían recibido instrucción militar, aunque algunos de ellos tenían autorización para portar pisto-

las y escopetas de cacería. En todo caso, el verdadero objetivo de la militarización de los miembros del Partido Liberal era proyectar una imagen de poderío ante la amenaza de una rebelión conservadora, y colocar a la maquinaria política liberal en estado de emergencia para facilitar su movilización rápida en caso de necesidad.

Al margen de la existencia de las Reservas Civiles e incluso del propio Partido Liberal, el árbitro final en momentos de crisis era la Guardia Nacional. Después de la purga de oficiales disidentes implicados en el caso Argüello, la Guardia permaneció totalmente leal al régimen y fue recompensada con incrementos considerables de su presupuesto, aunque el total de efectivos de tropa, por lo general, disminuyó hasta 1953. (Ver Cuadro 6.1.) La reducción en el número de efectivos reflejó, sin duda alguna, la confianza del régimen en su capacidad para controlar cualquier situación, como también de una mejoría notable en la calidad de su armamento. Estados Unidos jugó un papel clave en este sentido, al incrementar sus programas de asistencia y adiestramiento militares, como parte de su estrategia de contención al gobierno nacionalista de Guatemala encabezado por Jacobo Arbenz. En 1952, una misión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegó a Managua; el siguiente año, llegó una del ejército norteamericano. En 1954 se inició un programa de asistencia militar.²⁴ Como resultado de estos acuerdos, sumados a las compras militares realizadas por el propio Somoza, hacia 1955 Nicaragua tenía la fuerza aérea más grande en Centroamérica.²⁵

La identificación de los miembros de la Guardia Nacional con su institución y su jefe se vieron fortalecidas por la disponibilidad de equipos modernos y programas de adiestramiento profesional, así como por el goce de atractivos salarios y oportunidades de enriquecimiento por medios tanto lícitos como ilícitos. Durante el período de 1945-56, el salario promedio de un oficial de la Guardia aumentó casi dos veces y medio, y el de un raso casi tres veces.²⁶ Los oficiales generalmente hacían carrera en la Guardia, pero ocasionalmente se les daba de baja temporal para que pudieran trabajar en alguna empresa de Somoza u ocupar un cargo diplomático en el extranjero. Mientras estaban de alta, las abundantes oportunidades de corrupción que se le presentaban a un oficial deben haber aumentado sus ingresos totales de manera considerable.

Cuadro 6.1
Fuerza de la Guardia Nacional, 1946-1956
(1946 = 100)

Año	Oficiales	Tropa	Total
1946	345 (100)	3,290 (100)	3,635 (100)
1947	n.d.	n.d.	3,546 (97)
1948	373 (108)	3,162 (96)	3,535 (97)
1949	394 (114)	3,544 (108)	3,938 (108)
1950	386 (112)	3,201 (97)	3,587 (99)
1951	402 (117)	2,962 (90)	3,364 (93)
1952	418 (121)	2,803 (85)	3,221 (89)
1953	458 (133)	2,814 (86)	3,272 (90)
1954	470 (136)	2,981 (91)	3,451 (95)
1955	n.d.	n.d.	4,155 (114)
1956	526 (153)	3,865 (118)	4,391 (121)

Fuente: Ministerio de Guerra, Marina y Aviación, *Memorias*. Los datos de 1947 y 1955 son de Nicaragua, Cuartel General de la Guardia Nacional, Informe consolidado de fuerza de la Guardia Nacional, caja 351, y Fondo Salvadora de Somoza, no. 11, AN. La fuerza de tropa se contabiliza alrededor del 15 de abril de cada año.

Los cabos y rasos también podían participar en la corrupción, pero sus oportunidades eran más limitadas. No obstante, para ellos no resultaba despreciable una carrera dentro de la Guardia; tendrían asegurada su atención médica y podían apelar directamente a Somoza para que les ayudara en situaciones de dificultad financiera. Somoza cultivó el contacto personal con la tropa; permitía que le hablaran en audiencias especiales y se identificaba con la más pequeña de sus preocupaciones. Durante una cena en celebración de sus sesenta años de edad, Somoza puntualizó su compromiso con la Guardia Nacional y su tropa, que a su vez debían considerarlo como “el benefactor de los pobres y de los humildes de la Guardia Nacional . . . como un hermano y un padre”. Anunció que obsequiaría a todos sus “amigos y hermanos” de la Guardia un encendedor grabado con su firma, para que recordaran a su “Jefe, Compañero, Padre y Hermano”, cada vez que fumarán un cigarrillo. Gracias a los beneficios que generalmente recibía la tropa, entre 1947 y 1956 el número de soldados que anualmente solicitaban quedarse en la Guardia por un nuevo período duplicaba la cifra de nuevos reclutas.²⁷

El papel de la Guardia en la sociedad nicaragüense era variado, pues incluía funciones de policía y de defensa del territorio nacio-

nal. Obviamente, la primera tenía mucho más importancia, pues Nicaragua nunca se vio amenazada por invasiones extranjeras.²⁸ Sin embargo, la función más importante era defender al régimen de sus enemigos; en la práctica, suponía anular todo complot chamorrista o cualquier tipo de rebelión, además de impedir la propagación de algún movimiento sedicioso dentro de la Guardia. A tal fin, la mayoría de la tropa y el personal administrativo de la Guardia estaba destacada en Managua, bajo la vigilancia estricta del Jefe Director, y listos para ser despachados rápidamente a cualquier parte del país, en caso necesario. Además, la concentración de la tropa en Managua representaba la última línea de defensa del régimen, en caso de una insurrección armada. Como puede apreciarse en el Cuadro 6.2, el incremento de la fuerza de la Guardia en 1954 se debió, sobre todo, a la concentración de más tropa en Managua; ni siquiera se destacó a un mayor número de soldados hacia los departamentos fuertemente conservadores. En diciembre de 1955, más del 60% de la tropa estaba destacada en Managua y lugares circundantes.

El poco incremento de la fuerza de la Guardia en los departamentos del interior del país también es reflejo, sin duda, del alto grado de control político que ejercía el gobierno central en todo el país a través de mecanismos no militares. Además de la estructura del Partido Liberal y las organizaciones paramilitares, la Guardia Nacional montó operaciones de inteligencia política en gran escala, utilizando para tal fin a espías pagados, así como a miembros del Partido Liberal y la Reserva Civil, quienes se dieron a la tarea de asistir a eventos de la oposición y platicar con dirigentes opositores.²⁹ Finalmente, el control total ejercido por la Guardia sobre la portación de armas, más su propio monopolio de las armas de guerra, le proporcionaron una capacidad de fuego muy por encima de cualquier grupo, o combinación de grupos, que pudieran intentar una acción violenta en contra del régimen. La decisión de Chamorro de llegar a un entendimiento con Somoza reflejó, sin duda, su convencimiento de que el régimen era prácticamente invulnerable ante un golpe de fuerza; por lo tanto, le convenía lograr un *modus vivendi* que le abriera cierto espacio político y le diera acceso a una cuota de cargos públicos.

Cuadro 6.2
Distribución de la tropa de la Guardia Nacional

	mayo 1947 %	julio 1951 %	junio 1954 %	dic. 1955 %
Managua (*)	1,704 (48.1)	1,834 (55.2)	2,092 (56.9)	2,703 (61.6)
3er. Bat. (Granada, Masaya, Rivas)	302 (8.5)	257 (7.7)	253 (6.9)	293 (6.7)
4to. Bat. (Chontales, Boaco)	157 (4.4)	141 (4.2)	157 (4.3)	176 (4.0)
5to. Bat. (León, Chinandega)	281 (7.9)	237 (7.1)	227 (6.2)	255 (5.8)
6to. Bat. (Nueva Segovia, Estelí, Madriz)	341 (9.6)	264 (8.0)	333 (9.0)	345 (7.8)
7mo. Bat. (Matagalpa, Jinotega)	243 (6.9)	176 (5.3)	156 (4.2)	194 (4.4)
8vo. Bat. (Zelaya)	359 (10.1)	299 (9.0)	352 (9.6)	312 (7.1)
Otros	159 (4.5)	115 (3.5)	108 (2.9)	113 (2.6)
Total	3,546	3,323	3,678	4,391

Fuente: Nicaragua, Cuartel General de la Guardia Nacional, Informe consolidado de fuerza de la Guardia Nacional, caja 351, y Fondo Salvadora de Somoza, números 1 y 11, AN. Los datos de distribución de la tropa para determinadas fechas no es sino reflejo de la documentación disponible.

(*) La tropa en Managua incluye la guardia presidencial, el 2do. Batallón destacado en los departamentos de Managua y Carazo, la policía de Managua, el Estado Mayor, la Academia Militar, la Fuerza Aérea, y otros efectivos destacados de manera permanente o de paso por Managua.

C. La oposición cívica

Sin embargo, Chamorro no estaba totalmente convencido de la necesidad de conformarse con un papel subsidiario para el Partido Conservador. Además, no todos los nicaragüenses compartían la idea de que el régimen somocista era invulnerable, tal como se evidenciaría durante los acontecimientos de abril de 1954. Sin embargo, los grupos más categóricos en su rechazo a Somoza – que deseaban el fin del somocismo y algún tipo de cambio en la estructura socioeconómica – representaban una novedad con respecto a las posturas del Partido Conservador tradicional, y aún del mismo PLI.

Era una nueva oposición, que con frecuencia criticaba tanto al Partido Conservador como al PLI, ya sea por su manifiesta incapacidad para deshacerse del somocismo o, aún peor, por su disposición de llegar a arreglos con el régimen. Por tanto, en la medida en que consolidaba su posición, el régimen somocista generó una oposición cuyo discurso, táctica y organización diferían mucho de lo que hasta entonces se conocía.

A partir del episodio protagonizado por Argüello en 1947, es posible identificar tres tipos de oposición al régimen: una oposición “cívica”, una oposición en el exilio, y una oposición armada. Estas categorías no eran mutuamente excluyentes; en algún momento determinado, un miembro de la oposición cívica podía asociarse con un grupo dedicado al derrocamiento violento del régimen, y los opositores en el exilio se dedicaban con igual ahínco a impulsar estrategias militares o políticas en contra de Somoza. Sin embargo, la ausencia de un frente común entre los diversos grupos opositores les restó mucha fuerza en su afán por eliminar a Somoza. Al mismo tiempo, la fácil victoria del régimen frente a estos grupos fortaleció su imagen de un gobierno poderoso y estable, capaz de sentar su propia agenda política.

La oposición cívica surgió de las viejas estructuras de los Partidos Conservador y Liberal. El Partido Liberal Independiente – escindido del Partido Liberal Nacionalista – tuvo, sin duda, la mayor presencia dentro de la oposición cívica. Desde su aparición en 1944, el PLI se había mantenido firmemente opuesto a Somoza, rechazando cualquier tipo de pacto o acuerdo para limar sus diferencias con el liberalismo somocista, o acceder a cargos en el gobierno. No tuvo mayor reparo en aliarse con los conservadores para la elección de 1947, pero rompió con ese partido en 1950 cuando Chamorro hizo las paces con Somoza y acordó postular un candidato para las elecciones presidenciales. Sin embargo, el principal problema del PLI radicaba en la ambigüedad de su programa; si bien era claro que estaba en contra de Somoza, en contra de la reelección, y en contra de cualquier pacto, nunca explicó en que se distinguía su propuesta de gobierno con respecto a la agenda del liberalismo somocista.

En primer lugar, el PLI retuvo el programa de gobierno y los estatutos de su progenitor, el Partido Liberal Nacionalista, hasta 1961 en que fue reformado por una asamblea del partido. En este sentido, el PLI difícilmente podía presentarse como una alternativa real al PLN somocista.³⁰ Su base social provenía de la clase media —médicos, abogados, maestros y estudiantes universitarios— pues el PLI nunca pudo incursionar entre la clase obrera industrial o, mucho menos, entre los peones agrícolas y los pequeños propietarios. Tampoco recibió mucho apoyo, ya fuese moral o financiero, de la comunidad empresarial; como resultado, los fondos del PLI siempre fueron muy escasos.³¹ Peor aún, el PLI nunca fue reconocido como un partido político legal; por tanto, su única alternativa para participar en elecciones era aliarse con los conservadores —opción que tomó una sola vez, en ocasión del lanzamiento del dirigente del PLI, Dr. Enoc Aguado, como candidato presidencial de dicha coalición en 1947.

Puesto que carecía de existencia legal propia, el PLI difícilmente podía operar durante el lapso de tiempo entre una elección y otra. Por tanto, sus oportunidades para reclutar nuevos miembros eran escasas, y enfrentaba muchos problemas para efectuar reuniones de su dirigencia en el ámbito regional o nacional. Además, con frecuencia la Guardia Nacional vigilaba sus actividades, obligando a sus partidarios a moverse de manera casi clandestina.³² Finalmente, el PLI conservó una línea de pensamiento de oposición a Estados Unidos, expresada en términos de su supuesto origen sandinista, y su rechazo a la intervención estadounidense en apoyo a Somoza. A diferencia del PLN y el Partido Conservador, al parecer el PLI nunca mantuvo contactos formales con la embajada de Estados Unidos en Managua —lo que era considerado un requisito para sostener un nivel mínimo de actividad política dentro del ámbito nicaragüense.³³

En suma, el PLI enfrentaba un dilema, pues mientras crecía su prestigio como una agrupación implacablemente antisomocista, su fuerza política real menguó después de la euforia inicial de los acontecimientos de 1944. Otro problema consistía en el hecho que algunos de sus dirigentes estaban en el exilio, como era el caso de Carlos Pasos, quien vivía en Costa Rica desde 1947. Otros dirigentes habían fosilizado la estructura partidista, al negarse a ceder ciertos car-

gos a miembros más recientes o jóvenes del partido. Muestra de ellos es que la Convención Nacional del PLI, celebrada en León en febrero de 1956, fue presidida por la misma junta directiva escogida en 1944. Más grave aún, algunos de los dirigentes más respetados del PLI acusaron al partido de descuidar sus nexos con las masas populares, y de limitar sus actividades a “intrigas de alcoba” o pequeñas reuniones.³⁴ Por supuesto, el nivel y forma de actuar del PLI pueden entenderse como resultado de las restricciones a la actividad política impuestas por el régimen. No obstante, con el paso del tiempo aumentaba la insatisfacción entre los miembros del partido más impacientes y agresivos; además, surgieron nuevos canales y métodos de expresión para la política disidente.

Dentro del Partido Conservador también se escucharon voces críticas sobre el comportamiento del partido y su ideología. Ya en 1947, Carlos José Solórzano, un dirigente conservador, publicó un breve libro que esbozaba un plan de acción para ese partido. *En La ideología que debe sustentar el Partido Conservador de Nicaragua*, Solórzano insistía que el Partido Conservador nunca había desarrollado una ideología coherente y acabada. Al contrario, sus plataformas electorales se limitaban a pronunciamientos referidos a problemas de corto plazo, a expensas de una visión de largo plazo para la sociedad nicaragüense. Por otra parte, dijo, los liberales – tanto los somocistas como los independientes – ya no constituían una alternativa ideológica viable. Por tanto, de acuerdo a Solórzano, la lucha política del futuro se definiría como un enfrentamiento entre el conservatismo y el socialismo. Éste último sí constituía una verdadera alternativa política, “una ideología más moderna, más demagógica y más halagadora de las pasiones y los deseos de las masas”. Para enfrentar tal amenaza, los conservadores no podían girar hacia la izquierda, pues semejante postura era contraria a su respeto por los valores tradicionales de familia, religión y libertad individual. Tal giro – opinaba Solórzano – tampoco encajaría con la “situación geográfica de Nicaragua, que nos liga, en el presente, a la influencia de los Estados Unidos”. A los conservadores también les estaba vedado realizar un giro hacia la derecha, pues los identificaría con la defensa del capital y los privilegios sociales, así como con el clericalismo. Por tanto, la posición correcta se ubicaba en el centro – por encima de la

derecha y la izquierda – como reflejo fiel de la realidad social, de las necesidades y aspiraciones del pueblo nicaragüense, en general.

Solórzano insistía en que Nicaragua era un país cristiano; por tanto, el partido debía basar su ideología en la ética cristiana. En segundo lugar, la sociedad nicaragüense estaba viviendo con mayor intensidad el conflicto entre el capital y el trabajo; la solución a dicho conflicto exigía aplicar algunas medidas contempladas por el socialismo, pero un socialismo de tipo “espiritual” como el que, en ese momento, se proponía impulsar el presidente de Guatemala, Juan José Arévalo. En tercer lugar –advertía Solórzano– si bien dichas disposiciones socialistas beneficiarían a trabajadores y campesinos, no debían implicar la expropiación de los capitalistas, sino un reconocimiento del derecho de la clase trabajadora a beneficiarse más plenamente de los frutos de su trabajo. Finalmente, el modelo de sociedad ideal de los conservadores debía tomar en cuenta las “desigualdades naturales” entre los hombres, buscando reducirlas, al menos, en cuanto a sus aspectos económicos, pero sin echar mano de un socialismo materialista e igualitario de tipo soviético. En suma, decía Solórzano, “debemos, pues, aceptar francamente la parte cristiana y humanitaria del socialismo. Si nuestro Partido no se pone, como es el deber de todo grupo de verdaderos cristianos, al lado del obrero y no del capitalista, nuestra ideología estará solamente al servicio de una clase pequeña, cuyas tendencias explotadoras es necesario corregir”.³⁵

Tres años más tarde, Rafael Paniagua Rivas escribió otro breve comentario sobre la línea política que el Partido Conservador debía adoptar en el futuro. Ésta contemplaba los postulados conservadores de respeto a las tradiciones y la religión, así como una concepción trascendente del hombre y la sociedad. Pero, además, Paniagua Rivas insistió en la necesidad de introducir cambios dentro del partido, para permitirle llevar a cabo su “misión histórica”. Sobre todo, era preciso erradicar el excesivo “oportunismo” que lo había caracterizado, y asumir principios sólidamente fundamentados. Paniagua era partidario de mantener un equilibrio entre la autoridad y la libertad, por lo que rechazaba el individualismo exagerado de los liberales, así como la dictadura del proletariado de los marxistas. A su juicio, los conser-

vadores debían aspirar al establecimiento de un nuevo orden “social cristiano”, en el que las necesidades del individuo se conjugaran con los requerimientos de la sociedad. Por tanto, la propiedad privada debía cumplir una función tanto individual como social, el capital y el trabajo producirían en armonía, y los bienes materiales se distribuirían equitativamente para alcanzar el bien común. El complemento político de este nuevo orden social y económico – señalaba Paniagua – debía consistir en una amplia participación en los asuntos del gobierno.³⁶

Algunos de los miembros más jóvenes del partido – hijos de familias conservadoras de la región de Granada – retomaron estas ideas, y organizaron la Juventud Conservadora para impulsar una reforma ideológica dentro de dicha organización política. Aparte de exigir una nueva orientación para el partido, pidieron la renovación de su dirigencia. Se mostraron particularmente críticos hacia Emiliano Chamorro y otros conservadores que ocupaban cargos en el gobierno en virtud del Pacto de los Generales, acusándolos de no hacer esfuerzo alguno por mejorar las condiciones de vida del pueblo.³⁷ Asimismo, criticaron a la vieja guardia por negarse a permitir el ingreso de sangre nueva en los niveles de dirección del partido, y por emplear las mismas tácticas utilizadas por Somoza para manipular la elección de las autoridades del PLN.³⁸ La postura de la Juventud Conservadora fue apoyada por La Prensa, cuya dirección acababa de asumir Pedro Joaquín Chamorro Cardenal después del retiro de su padre, Pedro Joaquín Chamorro Zelaya. Carlos Cuadra Pasos, la eminencia gris del partido, también dio su apoyo a la Juventud y a su hijo, José Joaquín Cuadra, quien encabezaba dicha organización.³⁹

La presión ejercida por el principal periódico de oposición, la juventud y los jerarcas del partido que estaban inconformes con el liderazgo del general Chamorro y de la vieja guardia, empezó a surtir efecto. Durante la Gran Convención Conservadora, realizada en Managua en febrero de 1954, se acordó efectuar ciertos cambios importantes en la posición y el programa del partido. Éste emitió una proclama pública denunciando cualquier forma de “continuismo” somocista, fraguada a través de una enmienda constitucional o la elec-

ción de otro Somoza a la presidencia, pues a su juicio ambas constituían una violación del pacto de 1950. El partido prometió utilizar “todos los recursos políticos a su alcance” para impedir tal posibilidad, entre éstos, las alianzas con todas las demás fuerzas opositoras y, en caso extremo, la abstención electoral. Aunque el empleo de estas tácticas no representaba una novedad dentro de la historia reciente del partido, constituían una señal del descontento generado por el espíritu del pacto de 1950. Por tanto, era de esperarse que la demanda de la Juventud Conservadora de suspender toda colaboración con el régimen somocista sería escuchada. La convención del partido también aprobó una resolución en apoyo a la organización sindical libre e irrestricta, y la puesta en marcha de un programa de reforma agraria en tierras incultas, tanto privadas como estatales. Ambas resoluciones representaban importantes cambios en la línea del partido, con respecto a las décadas anteriores. Cabe recordar que en 1945 los conservadores se opusieron a la promulgación del Código de Trabajo, y rechazaban toda mención o discusión del tema de la distribución de tierras. Finalmente, la convención reiteró su voluntad de apoyar y respetar a la Guardia Nacional – que debía mantener un carácter apolítico – y ofreció mejorar tanto los salarios como el armamento de sus efectivos. Obviamente, este pronunciamiento buscaba socavar el control y el prestigio de Somoza dentro de la Guardia.⁴⁰

Aunque la convención de 1954 representó un golpe de timón para el Partido Conservador, la vieja guardia aún conservaba cierto poder. En consecuencia, Chamorro logró imponer a sus candidatos en los principales cargos de dirección, como el presidente de la junta directiva, Emilio Chamorro Benard, quien fue electo por una votación de 99 contra 1, y Carlos Cuadra Pasos, quien ocupó la vicepresidencia por igual margen de votos.⁴¹ No fue sino hasta la década de 1960 que una nueva generación de conservadores asumió la dirección del partido bajo el liderazgo de Fernando Agüero. Este cambio obedeció, en parte, a las ambiciones de los conservadores más jóvenes, así como al fallecimiento de Chamorro y Cuadra Pasos. Por tanto, durante la década de 1950 los conservadores mantuvieron sus rasgos tradicionales, y su partido siguió caracterizándose por una estructura

de poder muy cerrada, un programa de gobierno de poca sustancia, y un sólo activo político de peso – el propio general Chamorro.

Durante los años posteriores a la crisis de 1947, surgieron algunas agrupaciones políticas ajenas a la oposición tradicional antisomocista, representada por los conservadores y los liberales independientes. Ninguna de ellas logró tener una presencia permanente en el panorama político del país, ni acaparar mucho apoyo popular. Tal fue el caso de la Unión Nacional de Acción Popular (UNAP), fundada por estudiantes de la universidad en Managua en 1948 bajo banderas de inspiración socialcristiana.⁴² A comienzos de la década de 1950, UNAP se adentró en la arena política en busca de alianzas con los partidos ya establecidos. En ese momento, definió sus objetivos en términos de luchar contra el somocismo, el comunismo y la injusticia social.⁴³ Censuró de manera particular al régimen somocista por los males que aquejaban a Nicaragua, señalando, entre éstos, la corrupción de la teoría y la práctica de la democracia bajo la férula de una impopular Guardia Nacional, así como la excesiva centralización del poder político y económico. En consecuencia – observaba la UNAP – la población nicaragüense se encontraba desilusionada y frustrada, indiferente ante la corrupción en el gobierno y, por ende, propensa a escuchar con simpatía el mensaje de los comunistas.⁴⁴

A medida que los planes reeleccionistas de Somoza se hacían más evidentes, la UNAP se dio a la tarea de organizar a la oposición en un bloque electoral. En julio de 1955, convocó a una concentración de la oposición en la cual tomaron la palabra representantes del PLI, del Partido Conservador, de algunos pequeños grupos opositores y dirigentes sindicales de izquierda – con excepción de la izquierda marxista que la UNAP rechazaba tajantemente, tanto por razones ideológicas como por sus antiguas alianzas con Somoza.⁴⁵ Durante el evento se anunció la formación de un “Frente Defensor de la República” (FDR).⁴⁶ A comienzos de 1956, el FDR se había convertido en la principal arma de la oposición en su lucha contra el somocismo. Bajo la proclama “Democracia representativa – no reelección”, el FDR organizó mítines, vendió bonos, publicó volantes, instaló comités departamentales, y denunció la represión del gobierno contra sus activistas.⁴⁷

D. La oposición sindical

El rechazo del FDR hacia la izquierda significó, en la práctica, la exclusión de ciertos sindicatos obreros, ya que la izquierda no tenía ninguna organización política propia que pudiera operar abierta o clandestinamente en Nicaragua. Las actividades de la izquierda, por lo tanto, se limitaron a la sindicalización obrera, la publicación de un periódico y la distribución de volantes. La exclusión de la izquierda, por parte del FDR, no significó la pérdida de mucho apoyo político en la campaña contra Somoza. El movimiento obrero se hallaba muy dividido, infiltrado y, en general, debilitado, a raíz de la represión en contra de la dirigencia obrera opositora iniciada en 1947. Un sector del movimiento obrero se identificaba abiertamente con el régimen; otro, colaboraba ocasionalmente con el mismo; y un tercer grupo era ilegal, en el sentido estricto de la palabra, aunque el régimen toleraba su existencia. De acuerdo a un informe confidencial preparado en febrero de 1953 por el Comité de Unidad y Reconstrucción Sindical (CURS) – fachada de una agrupación sindical marxista – la Confederación General del Trabajo (CGT) representaba la tendencia “peronista” dentro del movimiento sindical. Ocasionalmente, emitía proclamas antiimperialistas o exigía leyes de seguridad social y reformas al código laboral, pero sostenía conversaciones con Somoza y algunos de sus dirigentes recibían dinero del gobierno. A lo sumo, la CGT manifestó un poco de autonomía al convocar a la unión sindical, e incluso declaró su anuencia a conversar con la izquierda marxista. Un segundo grupo, la Federación Sindical Nacionalista (FSN), se manifestó abiertamente somocista, y su principal labor consistía en hacer propaganda favorable al gobierno. De acuerdo al CURS, todos sus dirigentes eran “orejas”; es decir, espías a sueldo del gobierno, encargados de vigilar permanentemente a los activistas del CURS. Un tercer grupo, la Asociación de Sindicatos Libres, había sido fundado recientemente con el apoyo de los obreros de la construcción y de la embajada de Estados Unidos; hacía llamados a la unidad sindical pero insistía expresamente en la exclusión de los comunistas.

A pesar de la existencia de algunas federaciones y movimientos sindicales, el informe del CURS subraya el hecho de que la mayoría de obreros industriales en Nicaragua seguían sin organizarse en las

minas, las empresas madereras, los ingenios de azúcar, las desmotadoras de algodón y en diversas fábricas urbanas. Esta situación obedecía, en buena medida, al acoso y la represión del régimen, que prohibía a los trabajadores el derecho a reunirse para discutir sus problemas en común. Con frecuencia, los miembros del CURS eran blancos de la represión. En efecto, esta organización denunció que varios de sus afiliados habían sido expulsados de la CGT por el único motivo de solicitar un pronunciamiento en favor de la paz mundial. Una de las principales preocupaciones del CURS era su situación ilegal; por tanto, el informe recomendaba, entre otros puntos, desplegar mayores esfuerzos para lograr la unidad con las demás organizaciones sindicales y superar la situación de clandestinidad para pasar a la acción abierta. En concreto, el informe proponía diluir los planteamientos políticos o ideológicos y hacer énfasis en las reivindicaciones de mayor impacto entre los trabajadores.⁴⁸ En suma, el informe refleja la profunda impotencia de los miembros más radicales del movimiento sindical, pues habían llegado a la conclusión de que su única alternativa era lograr un arreglo con el régimen y otras organizaciones sindicales. Al mismo tiempo, reconocía que el régimen permitía cierta actividad sindical, pues su principal interés era controlar o ganarse a la dirigencia obrera.

En realidad, el régimen nunca reprimió en forma masiva al movimiento sindical, sino que aplicó presiones selectivas para provocar serias divisiones dentro del movimiento. El caso de la CGT es un ejemplo claro de esta situación. Ésta era la federación más numerosa, e incluía tendencias abiertamente identificadas con el régimen, así como otras ubicadas en la oposición; además, incluía una tercera tendencia – el llamado grupo peronista – que intentaba guardar la distancia de ambas y lograr cierto nivel de autonomía. Los conflictos entre dichas tendencias afloraron durante una reunión de los dirigentes de la CGT, celebrada en Managua en abril de 1953, con el fin de organizar un congreso que buscaría la unidad del movimiento sindical. Los miembros más izquierdistas de la organización rechazaron la presencia de representantes de la Federación Sindical Nacionalista, en vista de sus evidentes nexos con el régimen. Por otra parte, los partidarios de Somoza pidieron excluir a la Unión General de Trabajadores (UGT), porque se hallaba encabezada por los socialistas Juan Lorío y Ar-

mando Amador.⁴⁹ Las luchas dentro de la CGT aún continuaban vivas en 1955, cuando la campaña de reelección de Somoza avanzaba a todo vapor y el dictador buscaba el apoyo del movimiento obrero. Un grupo denominado Unión Popular Nacional de Obreros y Campesinos (UPNOC), fue expulsado de la CGT por “politizar” el movimiento sindical a favor de la candidatura de Somoza.⁵⁰

Finalmente, la CGT emitió un comunicado denunciando la deplorable situación del obrero nicaragüense, atribuida al hecho de que la bonanza económica sólo beneficiaba a la reducida minoría de habitantes más acaudalados del país. Por tanto, la CGT solicitó que el gobierno decretara un aumento de los salarios y proporcionara más créditos a los pequeños y medianos productores de artículos de primera necesidad. Por lo demás, la organización reconoció que el régimen había favorecido a la clase obrera mediante la creación del Instituto de Seguridad Social, y alabó a Somoza por su ofrecimiento de promulgar una ley agraria. En consecuencia, la CGT decidió “apoyar y defender decididamente al gobierno de Somoza en su política de bienestar social”.⁵¹ Así, el régimen logró su objetivo, pues el movimiento obrero había expresado su reconocimiento de que Somoza tomaba en cuenta a la clase trabajadora en sus programas de gobierno; además, su gobierno estaba dispuesto a escuchar y dar respuesta a las demandas de los trabajadores, al menos dentro de ciertos límites.

A decir verdad, el movimiento obrero no estaba en condiciones de alcanzar objetivos más importantes. Las leyes vigentes, que regulaban la existencia y el funcionamiento de los sindicatos y las organizaciones obreras, otorgaban al gobierno una enorme cuota de discrecionalidad para limitar el campo de acción de los sindicatos. La legislación aprobada posteriormente no hizo sino aumentar las potestades del gobierno. Un Reglamento de asociaciones sindicales, emitido como decreto presidencial en mayo de 1951, definió sin ambages las finalidades de los sindicatos obreros: elevar la “condición moral” de sus miembros; crear y operar cooperativas; mejorar la condición intelectual, social y física de los trabajadores; y promover la armonía entre el trabajo y el capital. Asimismo, el reglamento enumeraba una serie de actividades prohibidas: difundir ideas comunistas u otras

igualmente “dañinas”, participar en actividades políticas o apoyar a partidos políticos con el mismo fin, promover o apoyar huelgas “ilegales”, y emplear la violencia o la presión para alcanzar sus fines. Además, los sindicatos estaban en la obligación de entregar al Ministerio del Trabajo una lista completa de sus miembros, cada seis meses. Los representantes del ministerio estaban facultados para asistir a todas las reuniones de los sindicatos y asegurar el cumplimiento de las estipulaciones del reglamento. De hecho, el ministerio podía decretar la disolución de un sindicato si éste no cumplía con lo estipulado en el reglamento. Finalmente, se restringió la creación de federaciones sindicales en varios aspectos importantes. Las federaciones solamente se podrían organizar a nivel departamental; es decir, los sindicatos obreros de varios departamentos no se podrían aglutinar directamente para formar una federación nacional. Tampoco se permitió la federación de sindicatos urbanos y rurales, a fin de mantener aislados a los campesinos de los obreros de las fábricas. Solamente las federaciones departamentales debidamente reconocidas podían constituirse en una confederación nacional; pero una vez constituidas, estas federaciones y confederaciones sólo podían dar apoyo moral y económico a los sindicatos afiliados que enfrentaban un conflicto laboral.⁵²

Las Casas del Obrero, que ya se encontraban bajo supervisión del gobierno desde su creación en la década de 1940, fueron sometidas a controles aún más estrictos. De acuerdo a un decreto ejecutivo emitido en enero de 1951, la mayoría de las Casas del Obrero en el país no llevaban al día sus libros de contabilidad, y sus juntas directivas no se hallaban inscritas formalmente ante el Ministerio de Trabajo. Por tanto, a partir de ese momento, correspondería al Ministerio escoger a las juntas directivas de ternas presentadas por las diversas asociaciones laborales afiliadas a cada casa. Este decreto modificaba el antiguo reglamento emitido en 1940, según el cual correspondía a las asambleas generales de socios nombrar a las juntas. Finalmente, se exigió a cada Casa del Obrero depositar sus fondos en el Banco Nacional, y enviar informes financieros cada mes a la Inspección General del Trabajo del Ministerio del Trabajo. El Ministerio también estaba facultado para remover a la junta directiva, parcial o totalmente, y nombrar nuevos directores si consideraba que ésta no cumplía a cabalidad las disposiciones ministeriales.⁵³

A pesar de esta legislación restrictiva, Somoza presentaba una imagen pública de apoyo al movimiento sindical y a la clase obrera. Por ejemplo, en mensaje a los trabajadores el 1 de mayo de 1950 – cargado de loas a los logros y proyectos de su gobierno – recalcó que su condición de empresario y propietario “no ha secado, ni remotamente, las fuentes de justicia de mi corazón, ni mi apasionada vocación de trabajador”.⁵⁴ Dirigentes sindicales de todas las corrientes escribían a Somoza en busca de su apoyo para lograr mejores salarios y leyes laborales, y le pedían la oportunidad de conversar personalmente con él.⁵⁵ Somoza hizo acto de presencia durante la firma de un nuevo contrato de trabajo de los obreros del muelle de Corinto, en cuyas negociaciones había participado personalmente durante el mes de diciembre de 1955.⁵⁶ Por otra parte, el Sub-Comité de Obreros y Campesinos del departamento de Chontales llegó al extremo de imprimir un volante describiendo a Somoza como “el primer obrero nacional”, asegurando que salía de su oficina presidencial y se dirigía a trabajar en los campos como cualquier otro peón.⁵⁷

El “primer obrero” también decidía hasta qué punto les era permitido a los trabajadores expresar sus opiniones o presionar por sus reivindicaciones. En el discurso pronunciado en ocasión del *día del trabajo* en 1950, Somoza advirtió que sobre la clase obrera de Nicaragua se cernía una grave amenaza: el comunismo internacional. Sin embargo, afirmó que los trabajadores nicaragüenses sabrían alejarse de dicha amenaza, “porque si en mala hora se infiltrara entre vosotros la sirena de la propaganda soviética, reptante y venenosa, todo estaría perdido. El comunismo termina con todo perfil de libertad y establece un bárbaro despotismo que convierte al hombre en autómatas esclavo del Estado.” Consecuente con su discurso, en junio de 1953 Somoza ordenó el cierre del periódico semanal *Orientación*, una publicación de la UGT. A través de este órgano, se vertían críticas abiertas al sistema capitalista y las inversiones estadounidenses en Nicaragua, conteniendo opiniones que transgredían los límites establecidos por el régimen. En esta ocasión, el gobierno no tomó represalias contra los editores o columnistas, pues – tal como lo explicó el ministro de Gobernación, Modesto Salmerón – su objetivo era tan sólo clausurar el periódico.⁵⁸ Sin embargo, el año siguiente,

siete personas fueron llevadas a juicio, bajo la acusación de imprimir y distribuir un volante en que se denunciaba el imperialismo y la intervención de Estados Unidos en Nicaragua.⁵⁹

E. Censura, represión y la oposición en el exilio

Al igual que los sindicatos y los ideólogos de izquierda, todos los grupos pertenecientes a la oposición cívica se vieron afectados, con distintos grados de intensidad, por las limitaciones impuestas a la libertad de expresión. En efecto, todos sufrían una política de censura que el régimen había desarrollado y refinado con el paso de los años. El control sobre la palabra escrita y hablada era fundamental para el régimen, tanto para impedir que las actividades de la oposición crecieran hasta desbordar la capacidad represiva del régimen, como para establecer con claridad las reglas bajo las cuales, en la práctica, se permitiría actuar a la oposición. La ley de libertad de expresión, aprobada en septiembre de 1944, había estado vigente durante todo este período. Por tanto, se prohibía la publicación de todo material que – según opinión de las autoridades – buscara subvertir el orden social y público, o incitar a los habitantes a desobedecer a las autoridades constituidas. Paradójicamente, esta ley explícitamente prohibía la censura previa; sin embargo, a raíz del conato de insurrección de los conservadores en septiembre de 1947, el presidente Román y Reyes firmó un decreto ejecutivo facultando al gobierno para aplicarla a discreción. Por ejemplo, las autoridades podían ejercer la censura previa en el caso de los periódicos que sobrepasaran los límites de la libertad de expresión de la ley de 1944, y prohibir la circulación de aquellos ejemplares cuyo contenido se considerase violatorio de la ley.⁶⁰

En julio de 1948, el Congreso aprobó una ley que ratificaba la mayoría de los artículos estipulados en 1944, y creó un tribunal nacional integrado por dueños de periódicos, magistrados de la Corte Suprema, alcaldes y jefes políticos, que se encargaría de emitir un fallo en aquellos casos de violación de la ley.⁶¹ Mediante otra ley aprobada en septiembre de 1953, se abolió este tribunal especial; los casos de violación al reglamento fueron tipificados como un delito a

ser juzgado en los tribunales comunes. Además, la nueva ley penalizó cualquier crítica “ofensiva” a las autoridades establecidas o a un gobierno extranjero “amigo”, y prohibió a los propietarios de imprentas o periódicos pertenecer a cualquier partido político con nexos internacionales.⁶² Finalmente, mediante un decreto presidencial emitido en febrero de 1955, se prohibió expresamente la circulación de cualquier libro, revista u otro tipo de material impreso que contuviera “propaganda comunista”.⁶³

Además de aplicar estos controles administrativos, el régimen procuraba corromper a los periodistas y dueños de periódicos, ofreciéndoles abiertamente regalías, pagos y prebendas. Por ejemplo, en el período entre enero y octubre de 1952, el Ferrocarril del Pacífico entregó aproximadamente US\$3,500 a treinta personas que trabajaban para periódicos y estaciones de radio.⁶⁴ Mediante estas “dádivas” se buscaba sobornar a los periodistas o dueños de periódicos a fin de que presentaran las noticias de la manera más favorable al gobierno, o dejaran de imprimir material demasiado crítico. La distribución de tales dádivas era importante para el régimen, pues según datos del propio gobierno, la mayoría de los periódicos del país no seguían la línea oficial del partido de gobierno. En efecto, en 1955, de los nueve periódicos existentes en Nicaragua, sólo cuatro eran gobiernistas; el resto obedecía a los intereses de los Partidos Conservador o Liberal Independiente, y otros eran autónomos.⁶⁵

Al conjugar la corrupción oficial y las restricciones legales sobre los medios de comunicación, el régimen impidió que la oposición montara una campaña concertada de críticas en su contra. Toda denuncia o llamado a la acción, considerada excesiva por el gobierno, acarrearba la aplicación inmediata de una variedad de medidas a disposición del gobierno. Por ejemplo, en marzo de 1956, el director de *La Prensa*, Pedro Joaquín Chamorro, publicó un editorial que, en términos muy sutiles, llamaba a la oposición a incrementar sus esfuerzos para frenar los planes reeleccionistas de Somoza. A juicio de Chamorro, la oposición sólo podría efectuar cambios reales en Nicaragua cuando “todos los militantes de esas asociaciones estén dispuestos a ser héroes de la Patria; hasta el día en que hombres de la calle, que no aspiran a un puesto público pero que sí aman a su Patria

y quieren verla libre de la opresión, se unan y se dispongan a sufrir los atropellos de las fuerzas de choque del gobiernismo; hasta ese día las organizaciones democráticas podrán demostrar sus fuerzas cívicas”.⁶⁶ De inmediato, el gobierno interpretó estas palabras como un llamado a la acción violenta para desafiar a las autoridades, y entabló una demanda judicial contra *La Prensa*. Sin embargo, el juez a cargo del caso eventualmente descartó la demanda, argumentando que la expresión “fuerzas del gobiernismo” no significaba lo mismo que “fuerzas del gobierno”; además, en todo caso, la resistencia ante esas fuerzas podría tener un carácter pacífico.⁶⁷

Así, pues, se desarrollaba el ejercicio de la libertad de expresión en la Nicaragua de Somoza. Las restricciones y los castigos se hacían acompañar de medidas aparentemente conciliadoras, pero en términos generales el régimen había restringido tanto las actividades de las organizaciones opositoras, que imposibilitaba cualquier cambio real en el país – tal como lo observó Chamorro en el editorial referido. En semejante entorno, algunos grupos optaron por apartarse del sistema político y abandonar el país, para seguir con sus actividades opositoras desde la relativa seguridad del exilio. Otros se vieron obligados a partir debido a diversas amenazas, o fueron expulsados forzosamente de Nicaragua por las autoridades. En el exterior, tampoco estaban enteramente a salvo de los tentáculos del régimen nicaragüense, pues los diplomáticos y agentes de Somoza seguían vigilando sus movimientos, y exigían a los demás gobiernos restringir sus actividades.⁶⁸ Aun así, tenían mucho más libertad para publicar y organizarse que sus colegas que permanecían en Nicaragua.

La oposición en el exilio se mostró particularmente activa en Costa Rica y México, donde las oportunidades para publicar y organizarse eran relativamente amplias. Desde estos países, se divulgaban muchos comunicados y volantes, denunciando al régimen y a los elementos colaboracionistas dentro del sistema político nicaragüense, y haciendo llamados para la instauración de un nuevo orden social y político. Durante los años 1953-1955, el Partido Revolucionario Nicaragüense (PRN) publicó un periódico titulado *Revolución* desde San José, Costa Rica. Sin embargo, muy pocas de estas publicaciones lograron circular dentro de Nicaragua; incluso, su circulación fue-

ra del país no parece haber sido muy extensa. Pese a ello, su presencia preocupaba a Somoza, pues sus actividades manchaban, en cierto modo, la imagen que el dictador deseaba proyectar en el exterior: la de una Nicaragua idílica, donde el pueblo vivía en paz y contento con su gobierno.⁶⁹

Sin embargo, los grupos de opositores en el exilio representaban un peligro mínimo para el régimen dentro de Nicaragua. Por una parte, su expresión política era, en el fondo, una crítica del sistema político somocista, a la vez que llamaban a la población nicaragüense a levantarse en armas y derrocar al dictador. Por ejemplo, el Pacto de los Generales de 1950 generó mucha crítica entre la oposición en el exilio, pues se interpretó como una traición de Emiliano Chamorro. En la ciudad de México, el Partido Revolucionario en el Exilio distribuyó un volante comparando a Chamorro con Somoza, y acusando al primero de preocuparse tan sólo por representar los intereses azucareros del ingenio San Antonio, y protegerlos de la codicia de Somoza. En consecuencia, el Partido Revolucionario llamó a los nicaragüenses a abstenerse de votar, en protesta contra el sistema político.⁷⁰

Por otra parte, con pocas excepciones, los objetivos sociales reivindicados en el discurso de la oposición en el exilio apenas se distinguían de las políticas enunciadas por el régimen somocista. Por ejemplo, el programa político publicado por el PRN en agosto de 1953 enumeraba una serie de objetivos que parecían una versión mejorada de las repetidas promesas de Somoza: más carreteras, apoyo a la clase obrera, mejoras en la salud pública, mayor cobertura del sistema educativo, derechos políticos para la mujer y reparto de pequeñas parcelas a los campesinos pobres.⁷¹ La Unión Revolucionaria Democrática (URD) – otra organización cuya directiva incluía a algunos miembros del PRN – expuso un programa similar cuando se constituyó en la ciudad de México en 1954. A lo sumo, la URD se distinguió por reconocer la necesidad de incorporar a las masas en la lucha contra Somoza, y sustituir la tradicional dinámica política de competencia entre la misma elite – “de cúspide a cúspide” – con una acción más generalizada contra el régimen. A juicio de la URD, hasta esa fecha, tanto la oposición como el régimen habían utilizado a las masas

en función de sus propios fines elitistas: “los miembros de base de la oposición, lo mismo que los miembros de base del somocismo, carecen de toda educación política, desconocen lo que para sus partidos son los problemas nacionales, ignoran las soluciones que sus partidos recomiendan”. Tanto Somoza como la oposición tradicional necesitaban de una masa de seguidores – acrítica y no pensante – que saliera a gritar a las calles y votara según se le ordenara. En palabras de la URD: “En suma, con un verdadero partido, un ideario y un programa, Somoza peligraría; sin ellos, la oposición se muere”.⁷²

En última instancia, el carácter de las actividades y los objetivos de la oposición en el exilio se hallaba determinada por el origen de clase de sus líderes, que era más o menos similar al de los dirigentes del PLN, el PLI o aun del Partido Conservador. El Comité Central del PRN estaba constituido por tres abogados, un ingeniero civil, un periodista, cinco médicos, un general, un coronel y un obrero.⁷³ El grupo fundador de la URD tampoco era muy distinto. En consecuencia, mientras el PRN criticaba la política de Estados Unidos de apoyar a Somoza – aunque insistía no ser “anti-yanqui” – y alababa a Sandino, al mismo tiempo rechazaba cualquier alianza con “los comunistas criollos que siempre se han desentendido de las realidades latinoamericanas, para dar cumplimiento sumiso a las órdenes de sus amos rusos”. Y, refiriéndose al otro extremo del espectro político, el PRN se comprometió a destruir “las oligarquías burocráticas y latifundistas que entraban el progreso de Nicaragua”.⁷⁴ Como era de esperarse, el PRN recibió expresiones de apoyo de los dirigentes venezolanos exiliados de Acción Democrática, Rómulo Gallegos y Rómulo Betancourt.⁷⁵ La URD también rechazó la incorporación de algún comunista en sus filas, o de los “amigos de éstos”, y destacaba su apoyo al sector privado y la libertad de empresa.⁷⁶

En general, la oposición nicaragüense en el exilio proyectaba una imagen y un programa de naturaleza social demócrata, a tono con diversos movimientos y partidos similares en Costa Rica, Guatemala y Venezuela. Su visión del futuro era de una Nicaragua sin Somoza, de un Estado más compenetrado con las necesidades de las masas, de unas políticas de desarrollo social y económico impulsadas por un régimen que procurara mayor participación en la toma decisiones y la

institucionalización de prácticas y métodos democráticos en la selección de los gobernantes. A su manera de ver, el objetivo de su lucha debía ser “la creación de un gobierno honesto y eficiente que dirija la construcción de nuestro futuro”.⁷⁷

La oposición en el exilio estaba consciente de que sus denuncias públicas eran necesarias para desacreditar y, en lo posible, debilitar al régimen, aunque estas acciones por sí solas no podían provocar la caída de Somoza. Se empeñaron en causarle cuanto problema fuera posible a Somoza, utilizando todos los medios públicos y legales, así como los clandestinos e ilegales: “Se recalcará y remachará, hasta hacer de ello una verdadera obsesión nacional, la idea de que Somoza es el escollo esencial contrario al progreso de Nicaragua, de que es, decimos, el enemigo público número uno de Nicaragua y de todos los nicaragüenses”.⁷⁸ A su juicio, eventualmente la opinión pública se tornaría tan desfavorable que Somoza caería frente a una ola de manifestaciones, huelgas y desórdenes generalizados. Tampoco descartaban la insurrección armada, aunque aclararon: “pero ese es un aspecto al que nosotros, políticos, somos ajenos. A otros toca planearla y desarrollarla. Pero es evidente que sus posibilidades de triunfo serán mayores si encuentra a su rededor un clima de oposición y de resistencia activa a Somoza; y no el ambiente de pasivo conformismo que encontraron los hombres de abril”.⁷⁹

F. La oposición armada

“Los hombres de abril”, a los que se refería la URD, eran los participantes de la fallida revuelta armada de 1954, cuyos dirigentes eran ex-oficiales de la Guardia Nacional y civiles pertenecientes al Partido Revolucionario Nicaragüense y la Unión Revolucionaria Democrática. Esta fue la primera empresa militar seria en contra de Somoza, que reflejó la disposición de algunos nicaragüenses a tomar las armas para deponer al dictador. En 1947, Emiliano Chamorro y Rosendo Argüello, del Partido Conservador y el PLI, respectivamente, habían suscrito el acuerdo de constitución de la llamada Legión del Caribe. Sin embargo, la Legión nunca llegó a emprender acciones contra Somoza; a lo sumo, contribuyó a la causa de José Figueres cuando éste tomó el poder en Costa Rica en 1948. El pacto

de Chamorro con Somoza en 1950 constituyó, en cierta medida, un reconocimiento tácito de la enorme superioridad militar del régimen somocista, y de la necesidad de llegar a un acuerdo con el mismo. Sin embargo, entre los exiliados en Costa Rica y Guatemala, seguía viva la idea de un golpe militar, especialmente entre aquellos oficiales de la Guardia Nacional que habían sido dados de baja por Somoza a raíz de los acontecimientos de 1947.⁸⁰

El principal problema que debían resolver estos exiliados era encontrar la manera de organizar un ataque y derrotar militarmente a Somoza y la Guardia Nacional. El intento armado de Chamorro en 1947 ofrecía un ejemplo claro de los errores que se debían evitar. En suma, era inútil realizar ataques esporádicos o espontáneos a puestos aislados de la Guardia, cuando el grueso de su fuerza estaba concentrado en Managua y la aviación de Somoza se desplazaba a voluntad sobre todo el territorio nacional. Tampoco era razonable anticipar un levantamiento popular en apoyo a una acción militar, pues el PLN y las organizaciones paramilitares somocistas ejercían un amplio control político en el país entero. La única alternativa viable era un golpe al propio corazón de la maquinaria militar del régimen: la comandancia de la Guardia Nacional en Managua y las oficinas de la presidencia de la República. En caso de poder eliminar el mando central de la Guardia, y capturar o matar a Somoza, era de esperarse un desmoronamiento del resto de la estructura de la Guardia, ante la ausencia de liderazgo y dirección. Incluso, existían antecedentes históricos que sustentaban la viabilidad de esta estrategia: el golpe de Estado de Chamorro en 1926, el llamado “lomazo”, que permitió al caudillo apoderarse del gobierno sin mayor problema o derramamiento de sangre. El ataque de Somoza al fortín de Acosasco en León, en 1936, previo al derrocamiento de Sacasa, constituía otro antecedente alentador.

La organización del golpe militar exigía recaudar fondos y comprar y transportar armas hasta Nicaragua. Además, era necesario reclutar dentro de Nicaragua a suficientes hombres capaces de utilizar las armas en contra del régimen. El dinero fue aportado por diversas personas; entre éstas, Carlos Prío Socarrás, presidente de Cuba, y el cómico mexicano Mario Moreno “Cantinflas”, quien con-

tribuyó US\$10,000. Además, los conspiradores – algunos de los cuales eran personas acaudaladas – aportaron fondos de su propio bolsillo.⁸¹ Las armas, compradas en México, consistían de 100 fusiles automáticos, 325 carabinas, 10 cajas de granadas y un surtido de armas pequeñas. Las municiones eran pocas, pues los conspiradores no anticipaban sino unos cuantos enfrentamientos intensos pero cortos. Las armas se trasladaron por aire a Costa Rica, donde los conspiradores contaban con el apoyo de Figueres. En San José, los conspiradores se reunieron con enviados de Emiliano Chamorro, quien ofreció seis casas de seguridad y 300 hombres en Managua; a éstos se unirían 25 personas procedentes de Costa Rica, para sumar una fuerza total de 325 hombres. Finalmente, hacia fines de marzo de 1954, las armas fueron llevadas a través de la frontera sur de Nicaragua, y transportadas en barco a través del lago Cocibolca hasta una hacienda cerca de Granada, perteneciente a un simpatizante conservador. Desde este punto, fueron llevadas por camión a otra hacienda en las afueras de Managua, donde fueron descargadas, limpiadas y preparadas para el asalto. Dicha hacienda se convirtió en el centro de operaciones, donde se hizo presente Emiliano Chamorro con los hombres que había prometido, pero en vez de 300 eran solamente ochenta. Tampoco cumplió con su promesa de conseguir seis casas de seguridad. La conspiración había empezado mal.

Se organizaron cuatro grupos de combatientes, dos de los cuales intentarían interceptar a Somoza camino a su finca en Montelimar, aunque no se conocía con certeza la ubicación precisa de Somoza. Otro grupo debía tomar por asalto el cuartel central de la policía de Managua en El Hormiguero. Un cuarto grupo debía atacar y someter el cuartel de La Loma, donde estaba ubicado el palacio presidencial. Los combatientes de los dos últimos grupos se hallaban en gran desventaja, porque solamente se asignaron 15 hombres para el asalto a El Hormiguero, y 30 para someter La Loma, donde había un destacamento permanente de 100 guardias. El jefe del grupo que debía atacar La Loma se rehusó a emprender la acción con tan pocos hombres, aun cuando el elemento de sorpresa podía haberles dado el triunfo. En este momento el plan comenzó a descarrilarse. La situación se volvió más grave el 5 de abril, cuando uno de los conjurados llevó la noticia de que el gobierno estaba enterado de la conspiración,

por lo que debían empacar los pertrechos y moverse de inmediato. Las armas fueron cargadas en dos camiones y los conspiradores se dirigieron hacia el sur por la carretera Panamericana. A unos 25 kilómetros de Managua fueron interceptados y desarticulados por un destacamento de la Guardia. Algunos de los hombres fueron muertos en los cafetales mientras intentaban huir; otros escaparon pero fueron capturados más tarde. Unos pocos lograron llegar hasta las embajadas de Costa Rica y Guatemala, donde pidieron asilo político.

El gobierno decretó de inmediato el estado de sitio y la ley marcial, argumentando la necesidad de impedir el estallido de una guerra civil. Asimismo, ofreció recompensas de C\$10,000 a cualquiera que proporcionara información para permitir la captura de siete ex-guardias y ocho civiles involucrados en la conspiración.⁸² Somoza informó que el objetivo principal de los alzados era asesinarlo, pero los nicaragüenses no habían apoyado la conspiración en ningún momento, pues reconocían la importancia de mantener la paz alcanzada por el régimen con mucho esfuerzo. Además, recalcó que la Guardia Nacional se había mantenido completamente fiel a su Jefe Director.⁸³ Un mes más tarde, Somoza convocó al cuerpo diplomático y a la prensa a la casa presidencial para mostrarles un alijo de armas, algunas procedentes de países de Europa oriental. Informó que dichas armas habían sido llevadas hasta las costas del Pacífico nicaragüense por un submarino soviético, para apoyar a los conspiradores, e insinuó que con toda seguridad volvería con más refuerzos.⁸⁴ De esa manera, Somoza dio a entender que, en un espacio de pocas semanas, Nicaragua se había salvado de los horrores de la guerra civil y de una invasión bolchevique desde el mar, gracias a la eficiente y rápida respuesta del gobierno y la Guardia Nacional a estas amenazas.

Una vez sofocado el alzamiento, el régimen desató una represión en gran escala contra todos los grupos anti-somocistas en el país. Muchos miembros de los Partidos Conservador y Liberal Independiente fueron encarcelados, y juzgados por sedición e intento de asesinato. Los más prominentes de éstos, tales como Pedro Joaquín Chamorro y Arturo Cruz Porras, fueron condenados a guardar prisión, pero después de un año la pena fue conmutada a casa por cárcel, y en mayo de 1956 recibieron una amnistía.⁸⁵ Asimismo, el gene-

ral Emiliano Chamorro – entonces senador de la República – y otros dos miembros del Congreso, fueron hallados culpables del delito de conato de rebelión por la Corte Suprema de Justicia, y condenados a guardar casa por cárcel; sin embargo, también fueron amnistiados al cabo de un año.⁸⁶ Finalmente, el estado de sitio impuesto en abril de 1954 fue levantado en julio de 1954, excepto en los departamentos de Managua y Carazo donde se mantuvo vigente hasta abril de 1955.⁸⁷ Después de un año, la “normalidad” volvió al país, y dos años más tarde, los conspiradores sobrevivientes y sus supuestos cómplices fueron puestos en libertad. De esta manera, el régimen deseaba demostrar su indulgencia, además de dejar en claro que no temía permitir a sus enemigos volver a incursionar en la vida política del país, si éstos se mostraban dispuestos a reconocer sus errores y aprender de ellos.

G. La última campaña

A comienzos de 1956, Somoza se encaminaba hacia una tercera candidatura para la presidencia de la República. En el transcurso de una visita de campaña a León, admitió que su postulación como candidato presidencial por el Partido Liberal era efectiva e irrevocable.⁸⁸ Durante los siguientes meses, todos los grupos opositores anunciaron su decisión de abstenerse de participar en el proceso electoral, si Somoza insistía en ser candidato. El Frente Defensor de la República – en representación de los conservadores –, la UNAP, el PLI y el pequeño Partido Renovación Nacional divulgaron un manifiesto denunciando la falta de garantías para que las elecciones fueran libres y justas, en vista de que el dominio somocista sobre Nicaragua duraba ya veinte años. Recalaron, además, que no participarían en la contienda si Somoza, o algún pariente suyo, insistía en presentarse como candidato.⁸⁹ Por tanto, en vez de escoger a su propio candidato presidencial para enfrentarse a Somoza, la oposición organizó concentraciones para llamar al pueblo a abstenerse de votar, y así reducir el caudal electoral a su mínima expresión.

Al parecer, el régimen permitió a la oposición bastante espacio político, pues ésta realizó grandes concentraciones en Granada, donde el FDR estimó una concurrencia de 10,000 personas, y en

Boaco, donde se reunió una muchedumbre de unos 20,000 conservadores, según informó *La Prensa*. Sin embargo, en ambos casos, la oposición acusó al gobierno de impedir la llegada de personas que se dirigían a las ciudades y de arrestar a otros que regresaban de las concentraciones.⁹⁰ Por otra parte, en julio, cuando el FDR convocó a un mitin en León para protestar por la reelección de Somoza, sólo pudo reunir a 700 personas, pues matones armados intimidaron a la población; además, ese mismo día, el ferrocarril del Estado ofreció pasajes gratis a todos los leoneses que quisieran trasladarse a Managua a presenciar un juego de béisbol.⁹¹ En agosto, el general Chamorro denunció otros incidentes de amenazas y capturas selectivas en diversas partes del país. Varios conservadores habían sido apresados en Chinandega por el simple hecho de “hablar mal de Somoza”; el juez les impuso una multa de C\$40 a cada uno, y los dejó en libertad después de advertirles que irían a parar de nuevo a la cárcel si repetían la ofensa.⁹²

El 21 de septiembre de 1956, la campaña reeleccionista de Somoza y los mítines de protesta de la oposición se detuvieron. Ese día, Somoza se encontraba en León para aceptar la candidatura presidencial del Partido Liberal, acto que no pasaba de ser una formalidad. Después del discurso de aceptación, Somoza participó con el resto de simpatizantes liberales en una fiesta de celebración en la Casa del Obrero. Un hombre que no había sido invitado también logró colarse a la Casa, evadiendo fácilmente las escasas medidas de seguridad en la entrada. Se acercó a la tarima donde Somoza estaba sentado con su esposa y varios jerarcas del partido, sacó un revolver de su bolsillo y disparó varias veces a quemarropa al dictador. Los guardaespaldas lo acribillaron casi de inmediato, pero Somoza estaba mortalmente herido; murió una semana más tarde en el hospital Gorgas de la Zona del Canal de Panamá, donde había sido llevado por instrucciones expresas del presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower.

El verdugo de Somoza, Rigoberto López Pérez, era un estudiante y poeta nicaragüense quien decidió sacrificar su vida para poner fin a la de Somoza. Había vivido por algún tiempo en El Salvador, donde entró en contacto con exiliados nicaragüenses. Allí tomó la

decisión de deshacerse de Somoza y aprendió a usar un revolver. Los espías de Somoza no lograron detectar este complot probablemente debido a que muy pocas personas estuvieron involucradas, quizás no más de diez. Tampoco llegó a oídos de los jerarcas de la oposición, como Chamorro o Aguado. De hecho, el asesinato de Somoza se organizó y ejecutó fuera de las estructuras de los partidos políticos de oposición tradicionales del PLI o los conservadores.⁹³ Por otra parte, puesto que el atentado tomó a todos por sorpresa – no sólo al aparato de seguridad del dictador sino también a la dirigencia del Partido Conservador y del PLI – nadie pudo sacar ventaja de la acción de López Pérez. Más bien, el régimen reaccionó con un salvajismo sin precedentes. Miles de personas de todos los grupos de la oposición fueron encarcelados o confinados a sus casas. Un grupo más selecto fue llevado ante una corte militar y acusado de participar en el asesinato; algunos fueron declarados culpables y condenados a prisión, pero se les excarceló a comienzos de 1957, justo antes de la elección presidencial.⁹⁴

Al parecer, el carácter de la represión desatada por el régimen era más bien de tipo preventivo, y reflejo de la furia de los dos hijos de Somoza ante el atentado a su progenitor. En ningún momento, el régimen estuvo en peligro de caer como resultado de la muerte del dictador. Luis Somoza, el hijo mayor, ocupaba un curul como diputado en el Congreso Nacional desde agosto de 1950; fue electo presidente de la Cámara de Diputados en abril de 1951 y presidente del Congreso cuando las dos cámaras sesionaban juntas. Cuando Somoza García fue herido, Luis inmediatamente ocupó la presidencia de la República de forma interina; pocos días después, el Congreso – con el apoyo tácito de los legisladores conservadores – le dio sus votos para que pudiera completar el período presidencial de su padre.⁹⁵ El otro hijo, Anastasio Somoza Debayle, había disfrutado de un ascenso espectacular dentro de la Guardia Nacional desde su graduación en la academia militar estadounidense de West Point, en 1946. A raíz del derrocamiento de Argüello, fue nombrado jefe del estado mayor presidencial, y en 1950 llegó a ser director de la Academia Militar. Posteriormente, ocupó el cargo de jefe del estado mayor de la Guardia Nacional y, de manera interina, el de jefe director, cuando su padre se dedicó a su última campaña presidencial.⁹⁶ Mientras

Somoza García agonizaba en Panamá, ambos hijos se quedaron en Managua, dirigiendo el gobierno y el ejército. Finalmente, Somoza murió el 29 de septiembre, y se organizó un funeral de Estado para el día 2 de octubre de 1956, al cual asistieron más de 100,000 personas.⁹⁷ Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Managua bajo una enorme efigie representando a un guardia nacional; durante veintitrés años permanecieron allí, hasta que fueron desenterrados apresuradamente y transportados a la ciudad de Miami por Anastasio Somoza Debayle, poco antes del triunfo sandinista del 19 de julio de 1979.

CITAS Y NOTAS

1. Los pormenores de estas actividades pueden verse en Tte. Gonzalo Matus, Guardia Nacional, a ASG (Ciudad Darío, 27 de octubre de 1949) y Justo Jarquín a ASG (La Paz Centro, 23 de octubre de 1949), caja 10, ANA(A). Una colección bastante completa de “proclamaciones” de la campaña electoral de 1956 se encuentra en la caja 96, folders “proclamaciones de julio a septiembre de 1954” y “proclamaciones y correspondencia del PLN 1955,” AN(A).

2. Declaración firmada por Aníbal Alemán Hernández y Ricardo Irigoyen González (Alta Gracia, isla de Ometepe, 27 de mayo de 1956), caja 47, folder “Partido Liberal 1956,” AN(A).

3. Tomás Adolfo Martínez a ASG (Alta Gracia, isla de Ometepe, 27 de mayo de 1956), caja 47, folder “Partido Liberal 1956,” AN(A).

4. Caja 107, AN(A). Unas declaraciones similares de fines de 1954 en el departamento de Boaco pueden encontrarse en la caja 96, folder “Boaco,” AN(A).

5. *La Prensa*, 28 de febrero de 1950. Para las elecciones de 1956, el PLN sacó una “magnífica” especial para simpatizantes fe-

meninas de Somoza en vista de la posible aprobación legislativa del sufragio femenino. *La Prensa*, 1 de abril de 1954.

6. La proclamación de Somoza en León como candidato presidencial reunió a más de 20,000 de sus seguidores. *La Prensa* informó que funcionarios y empleados del gobierno fueron transportados desde Managua mientras que los jueces de mesta organizaron el traslado de los campesinos de las zonas circunvecinas. *La Prensa*, 23 de abril de 1950. Una concentración similar en febrero de 1956 congregó a más de 30,000 personas. *La Prensa*, 15 de febrero de 1956.

7. La plataforma de gobierno del PLN se incluye en Nicaragua, Presidencia de la República, Mensaje del excelentísimo General Anastasio Somoza leído ante el Honorable Congreso Nacional al tomar posesión de la Presidencia de la República para el período constitucional que se inicia el 1 de mayo de 1951, pp. 12-16 y 25-27.

8. Partido Liberal Nacionalista, Plataforma de gobierno que el General Anastasio Somoza presenta a la Gran Convención del Partido Liberal Nacionalista, al ser proclamado su candidato presidencial para el período 1957-1963. Puede verse también Nicaragua, Presidencia de la República, Mensaje que el Presidente de la República, General de División Anastasio Somoza dirige al Honorable Congreso Nacional al inaugurar las sesiones ordinarias correspondientes a su VI período constitucional el 15 de abril de 1956, pp. 106-8.

9. Véase Valle Ríos, *Por qué los obreros y los campesinos están con Somoza*, pp. 1-6, y Juventud Liberal Nicaragüense, *Recopilación de la Asamblea General de Juventud Liberal Nicaragüense* del 2 de febrero de 1952, pp. 29-38.

10. José Santos García, secretario del Comité Departamental de Propaganda pro-General Somoza, a ASG (Somoto, 17 de octubre de 1949), caja 10, AN(A).

11. Una colección bastante amplia de este tipo de documentación puede verse en caja 107, AN(A).

12. Luis Enrique López Castro, secretario del Comité Nacional de los Frentes Populares Liberales Somocistas, a Junta Directiva del Comité Nacional pro-Candidatura General Somoza (Managua, 2 de septiembre de 1956), caja 107, AN(A).

13. Una colección de cartas y documentos del Comité Nacional que se organizó para la elección de 1956 pueden verse en la caja 107, AN(A).

14. Ver los informes preparados por el tesorero del PLN, José María Castellón, el 5 de enero de 1950 y el 6 de enero de 1956, Fondo Salvadora de Somoza, nos. 9 y 12, AN.

15. Ver el informe preparado por el tesorero del PLN, José María Castellón, el 21 de enero de 1953, Fondo Salvadora de Somoza, no. 6, AN.

16. Ver varios documentos mecanografiados del Comité Nacional de Propaganda Liberal del PLN (Managua, s.f.), Fondo Salvadora de Somoza, no. 8, AN.

17. Informe de José María Castellón del 6 de enero de 1956 citado previamente. También puede verse Fondo Salvadora de Somoza, no. 9, AN; en este material se encuentra un ejemplar de un bono de C\$10 emitido por la Comisión de Hacienda del Comité Nacional pro-Candidatura Presidencial General Anastasio Somoza.

18. "Informe de la Tesorería del Comité Central Pro-Festivos a Anastasio Somoza García," León, febrero de 1956, Fondo Salvadora de Somoza, no. 11, AN. La venta de aguardiente como mecanismo de recaudación de fondos se materializaba mediante la compra del licor libre de impuestos en algún centro destilatorio del gobierno y su posterior reventa a un precio por debajo del establecido; el PLN se embolsaba la diferencia. Ver René Schick, secretario de ASG, a Rafael A. Huevo, Ministro de Hacienda (Managua, 9 de agosto de 1956), caja 107, AN(A).

19. Tal fue el caso de Chichigalpa, departamento de Chinandega, donde se reunieron aproximadamente sesenta individuos a tal efecto. Jesús Solano Cerda a ASG (Chichigalpa, 29 de octubre de 1947), caja 353, AN. Otro grupo organizado en el municipio de Chinandega se hizo llamar “compañía de civiles liberales.” Tomás Céspedes Cepeda, jefe político de Chinandega, a ASG (Chinandega, 30 de octubre de 1947), caja 342, AN.

20. Ver el documento de fundación de la Reserva Civil en el Ingenio San Antonio (Chichigalpa, 3 de noviembre de 1947), caja 107, AN(A).

21. Tomás Céspedes Cepeda, jefe político de Chinandega, a ASG (Chinandega, 30 de octubre de 1947), caja no. 342, AN; y “Acta de fundación” del batallón departamental “Julio César” (Masaya, 7 de diciembre de 1947) y “Acta de creación” de las Reservas Civiles del departamento de Estelí (Estelí, 7 de diciembre de 1947), ambas en caja 107, AN(A).

22. Lista de miembros de los “auxiliares” de la Guardia Nacional en el departamento de Chontales (Juigalpa, diciembre de 1947), caja 107, AN(A).

23. Cuartel General de la Guardia Nacional (Managua, Loma de Tiscapa), Informe consolidado de fuerza de la Guardia Nacional a 17 de mayo de 1947, caja 351, AN.

24. Millett, *Guardians of the Dynasty*, p. 213. Los textos de estos acuerdos se encuentra en los siguientes números de la LG/DO: 56,294 (23 de diciembre de 1952); 57,276 (1 de diciembre de 1953; y 58,138 (22 de junio de 1954). Lafeber, *Inevitable Revolutions*, especialmente las pp. 106-111, ubica la política militar de Estados Unidos en Centroamérica dentro de sus preocupaciones mayores hacia Latinoamérica como un todo.

25. Millett, *Guardians of the Dynasty*, p. 214.

26. Ver Nicaragua, Ministerio de Guerra, Marina y Aviación, *Memorias* de los años 1945-56, las cuales proporcionan datos del gasto total en salarios para oficiales y tropa.

27. *La Prensa*, 3 de febrero de 1956. Entre 1947 y 1956, hubo 3,201 reclutamientos y 7,493 reenganches, lo cual da una proporción de 1:2.34. Véase Nicaragua, Ministerio de Guerra, Marina y Aviación, *Memorias* de los años en cuestión.

28. Somoza amenazó a Honduras hacia fines de la década de 1930 en relación a una disputa fronteriza en la región de Cabo Gracias a Dios. También conspiró en varias oportunidades para derrocar a uno de sus principales enemigos, José Figueres de Costa Rica.

29. Véanse, por ejemplo, los informes de inteligencia de un tal Inocente León, quien se comunicaba directamente con el general Francisco Gaitán, ministro de Guerra, durante el período 1950-54, para dar cuenta de las actividades y las opiniones de los dirigentes del PLI y del Partido Conservador. Fondo Salvadora de Somoza, nos. 2, 8 y 14, AN.

30. Orlando Blandino, entrevista con el autor, León, 26 de marzo de 1984. Véase también Selva, *Cero política*, pp. 25-26.

31. Dr. Alonso Castellón, entrevista con el autor, León, 10 de abril de 1984.

32. Entrevistas del autor con Blandino y Castellón citadas anteriormente. El temor a la represión gubernamental aparentemente desalentaba a las personas de unirse abiertamente al partido y permitir que sus nombres fueron asentados en los libros del partido, aunque en privado expresaban su apoyo hacia el PLI y sus actividades. Alejandro Zúñiga Castillo, entrevista con el autor, Managua, 16 de marzo de 1985.

33. Juan Sandoval, entrevista con el autor, León, 26 de marzo de 1984.

34. Reinaldo Antonio Tefel, entrevista con el autor, Managua, 11 de junio de 1984. También puede consultarse un manifiesto firmado por la dirigencia del PLI en León, incluyendo a Tomás Borge, posteriormente uno de los principales dirigentes del Frente Sandinista, en *La Prensa*, 9 de octubre de 1955; un discurso de Adán Selva ante la Gran Convención del PLI en León, *La Prensa*, 28 de agosto de 1956; y Selva, *Cero política*, p. 26.

35. Solórzano, *La ideología que debe sustentar el Partido Conservador de Nicaragua*, pp. 5-12.

36. Paniagua Rivas, *Los principios fundamentales del conservatismo*, pp. 3-11.

37. Véase, por ejemplo, el discurso de José Joaquín Cuadra en ocasión de la formación de un grupo de Juventud Conservadora en el pueblo de Diriomo, cerca de Granada, *La Prensa*, 28 de abril de 1953. Unos pocos meses después, durante una reunión del partido de agasajo al general Chamorro en Granada, un miembro de Juventud Conservadora abiertamente criticó al general por su demagogia e inconsistencia política. *La Prensa*, 28 de mayo de 1953.

38. *La Prensa*, 17 de noviembre de 1953 y 7 de febrero de 1954.

39. *La Prensa*, 18 de febrero de 1954.

40. *La Prensa*, 16 de febrero de 1954. Las versiones íntegras de las resoluciones se encuentran en Partido Conservador de Nicaragua, Junta Directiva Nacional y Legal, *Documentos y resoluciones del Partido Conservador de Nicaragua*, pp. 37-48.

41. *La Prensa*, 17 de febrero de 1954.

42. Reinaldo Antonio Tefel, entrevista con el autor, Managua, 11 de junio de 1984. Un análisis detallado de los orígenes y el desarrollo de la UNAP, lo mismo que de todo el movimiento demócrata cristiano, se encuentra en Walker, *The Christian Democratic Movement in Nicaragua*, especialmente pp. 24-42.

43. *La Prensa*, 12 de diciembre de 1953.

44. *La Prensa*, 15 de septiembre de 1955. El análisis de la UNAP se encuentra en un comunicado publicado íntegramente por *La Prensa*. La lista de sus firmantes refleja los efectos polarizantes que tuvo la Revolución Sandinista sobre la clase política de la Nicaragua contemporánea; incluye a Emilio Álvarez M., dirigente de una de las tendencias del Partido Conservador; Ernesto Cardenal, quien fungió como ministro de Cultura del gobierno revolucionario; y Arturo Cruz, quien tuvo un papel destacado dentro de la oposición en el exilio al gobierno sandinista. Pedro Joaquín Chamorro, presidente de *La Prensa*, se integró a la dirigencia de la UNAP el año siguiente.

45. *La Prensa*, 19 de enero de 1956. Según un editorial de *La Prensa*, el gobierno de Somoza todavía estaba lleno de dirigentes sindicales y maestros de orientación marxista. *La Prensa*, 20 de enero de 1956.

46. *La Prensa*, 26 de julio de 1955.

47. Véanse los ejemplares de *La Prensa* del 11 de febrero, el 3 de marzo, el 30 de mayo, el 17 de julio y el 4 de septiembre de 1956.

48. Comité de Unidad y Reconstrucción Sindical, informe sin título sobre la situación del movimiento sindical de Nicaragua, febrero de 1953. El informe fue preparado en San José, Costa Rica, donde representantes del CURS se entrevistaron con la Comisión Obrera Sindical, el movimiento obrero de izquierda de aquel país. A Somoza le llegó una copia carbón del informe. Fondo Salvadora de Somoza, no. 6, AN.

49. *La Prensa*, 9 y 11 de abril de 1953.

50. *La Prensa*, 28 de agosto y 22 de septiembre de 1955.

51. *La Prensa*, 4 de enero de 1956.

52. Nicaragua, Reglamento de asociaciones sindicales, LG/DO 55,93 (10 de mayo de 1951).

53. Nicaragua, Reglas generales para el manejo y administración de la Casa del Obrero, LG/DO 55,10 (18 de enero de 1951).

54. Anastasio Somoza, "Mensaje a los trabajadores," Managua, 1 de mayo de 1950, Fondo Salvadora de Somoza, no. 13, AN.

55. Véanse, por ejemplo, los siguientes: obreros del ingenio San Antonio a ASG (San Antonio, 4 de noviembre de 1947, caja 353, AN) agradeciéndole el apoyo a sus demandas; CGT a ASG (*La Prensa*, 25 de junio de 1950) solicitando que el gobierno otorgue más créditos a los grandes agricultores para generar empleo, que facilite la entrega de pequeñas parcelas a campesinos sin tierra, y que persiga a los acaparadores y especuladores de productos de primera necesidad; Bernardo Otero U., miembro de la junta directiva de la CGT, a ASG (Managua, 22 de junio de 1951, caja 77, ANA) solicitando que se mantenga el control de alquileres.

56. *La Prensa*, 12 y 13 de diciembre de 1955.

57. Volante titulado "Alerta, obreros y campesinos de Nicaragua," del Sub-Comité de Obreros y Campesinos" de San Pedro Lóvago, departamento de Chontales (1 de febrero de 1956), caja 47, folder "proclamaciones comités liberales candidatura ASG," AN(A).

58. *La Prensa*, 11, 12, 16 y 18 de junio de 1953; la cita de Somoza se encuentra en Anastasio Somoza, "Mensaje a los trabajadores," Managua, 1 de mayo de 1950, Fondo Salvadora de Somoza, no. 13, AN.

59. *La Prensa*, 26, 27 y 31 de abril de 1954. Entre los siete se encontraba Manolo Cuadra, un conocido poeta, y Manuel Pérez Estrada, un dirigente sindical que había trabajado para *Orientación*. El resto incluyó a dos médicos, un dirigente sindical, un escritor y el dueño de la imprenta.

60. Nicaragua, Decreto normando la censura previa de acuerdo a la ley de libertad de emisión del pensamiento, LG/DO 51,206 (24 de septiembre de 1947).

61. Nicaragua, Ley de libertad de emisión y difusión del pensamiento, LG/DO 52,166 (31 de julio de 1948).

62. Nicaragua, Ley de libertad de emisión y difusión del pensamiento, LG/DO 57,202 (1 de septiembre de 1953).

63. Nicaragua, Decreto prohibiendo la circulación de propaganda comunista, LG/DO 59,31 (8 de febrero de 1955).

64. Fondo Salvadora de Somoza, no. 1, AN.

65. Modesto Salmerón, ministro de Gobernación, a René Schick, secretario de la presidencia, Managua, 17 de noviembre de 1955, caja 96, folder "Ministerio de Gobernación (2do. semestre 1955)," AN(A). De una circulación diaria total de 59,800 ejemplares, Salmerón estimó que solamente 26,000 correspondían a periódicos identificados abiertamente con el régimen y que de estos, *No vedades*, propiedad de Somoza, aportaba unos 20,000.

66. *La Prensa*, 13 de marzo de 1956.

67. *La Prensa*, 17 de marzo y 7 de abril de 1956.

68. Ver, por ejemplo, una lista de 53 exiliados nicaragüenses, incluyendo 22 ex-oficiales de la Guardia Nacional, quienes vivían en Costa Rica y Guatemala (Managua, 9 de enero de 1949). Fondo Salvadora de Somoza, no. 3, AN. Ver también Benjamín Odio, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, al ministro costarricense de Seguridad Pública (San José, 17 de mayo de 1949), donde transcribe una lista de 109 nicaragüenses quienes, de acuerdo al ministro nicaragüense en Costa Rica, estaban involucrados en "actividades en contra del régimen de aquel país". Fondo Salvadora de Somoza, no. 6, AN. Guillermo Sevilla Sacasa, embajador nicaragüense en Washington, informó a Somoza (Washington, 4 de enero

de 1950) de una conversación que sostuvo con Pedro Estrada, jefe de la policía secreta venezolana, acerca de las actividades de exiliados nicaragüenses y otros en Costa Rica y Guatemala. Fondo Salvadora de Somoza, no. 3, AN.

69. En cierto momento, Somoza hasta contrató los servicios de una compañía en la ciudad de Nueva York para que colocara artículos favorables a su régimen en la prensa de Estados Unidos, que también destacarían la paz y el progreso que Nicaragua disfrutaba bajo su mandato. M. Mark Sulkes a ASG, ciudad de Nueva York, 11 de febrero de 1949, Fondo Salvadora de Somoza, no. 6, AN.

70. El ministro nicaragüense en San José, Alejandro Argüello Montiel, envió el volante a ASG desde Costa Rica, país donde circuló. El pie de imprenta dice "Imprenta Sandino, México, D.F." pero Argüello Montiel estaba seguro de que había sido impreso clandestinamente en San José. Alejandro Argüello Montiel a ASG, San José, Costa Rica, 8 de mayo de 1950, Fondo Salvadora de Somoza, no. 8, AN.

71. *Revolución*, agosto de 1953.

72. Unión Revolucionaria Democrática, *La lucha contra Somoza*, pp. 16-24; la cita es la página 18.

73. *Revolución*, marzo de 1954.

74. *Revolución*, marzo de 1955.

75. *Revolución*, septiembre de 1954.

76. Unión Revolucionaria Democrática, *La lucha contra Somoza*, pp. 34-36 y 57.

77. Idem., p. 25.

78. Idem., pp. 25-27 y 40-41.

79. Idem., pp. 41-42.

80. Hacia mediados de 1949, al menos veintitrés ex-oficiales de la Guardia Nacional que participaban en actividades políticas de oposición vivían en Costa Rica. Ver nota de Odio a ministro de Seguridad Pública de Costa Rica citado en nota no. 68.

81. Los pormenores del complot de 1954 se basan en gran medida en información proporcionada por Julián Salaverry, uno de los participantes, entrevistado por el autor en Managua, 26 de junio y 1 de julio de 1985.

82. Nicaragua, Decreto de suspensión de garantías a raíz del complot armado, LG/DO (5 de abril de 1954). Uno de los afiches anunciando las recompensas puede verse en Fondo Salvadora de Somoza, no. 4, AN.

83. *La Prensa*, 6 y 11 de abril de 1954.

84. *La Prensa*, 7 de mayo de 1954.

85. *La Prensa*, 25, 29 y 30 de abril de 1954; 2 de febrero de 1955; y 11 de mayo de 1956.

86. *La Prensa*, 12 de febrero de 1955 y 5 de mayo de 1956.

87. Nicaragua, Decreto derogando restricción de garantías constitucionales en todo el país menos Managua y Carazo, LG/DO 58,159 (17 de julio de 1954); y Decreto derogando restricción de garantías constitucionales en todo el país, LG/DO 59,82 (16 de abril de 1955).

88. *La Prensa*, 15 de febrero de 1956.

89. *La Prensa*, 3 de marzo de 1956. En agosto del mismo año el FDR reiteró su decisión de abstenerse, especialmente porque el nuevo presidente del Consejo Nacional de Elecciones, Modesto Salmerón, era un incondicional de Somoza que había presidido sobre

el fiasco electoral de 1947. El FDR también expresó su preocupación por el nombramiento de Anastasio Somoza Debayle, el hijo menor de ASG, como Jefe Director en funciones de la Guardia Nacional mientras ASG se dedicaba a la campaña política; dicho nombramiento violaba la jerarquía militar, propiciaba un dominio dinástico y colocaba una enorme cuota de poder en manos de “una persona de espíritu arbitrario y temperamento violento.” *La Prensa*, 4 de agosto de 1956.

90. *La Prensa*, 9, 11 y 12 de septiembre de 1956.

91. *La Prensa*, 17 de julio de 1956.

92. *La Prensa*, 16 de agosto de 1956. En esta ocasión, Tomás Borge fue encarcelado junto con los conservadores mientras fungía como periodista de *La Prensa*.

93. Eduardo Conrado Vado, entrevista con el autor, Managua, 9 de mayo de 1984. El PLI ha reclamado de manera insistente a Rigoberto López Pérez como uno de los suyos; ver PLI, “Breve historia del Partido Liberal Independiente” (s.f., mimeo.), p. 16.

94. Enrique Alvarado, entrevista con el autor, Managua, 13 de mayo de 1985. Véanse las transcripciones del testimonio de los acusados ante la corte marcial en *La Prensa* de 6 de octubre-13 de noviembre y 21 de noviembre-11 de diciembre de 1956. La lista reúne a lo más destacado del antisomocismo de esos tiempos: Enoc Aguado, Pedro Joaquín Chamorro, R.A. Tefel, Emiliano Chamorro, Tomás Borge, Clemente Guido, Pablo Antonio Cuadra y Diego Manuel Chamorro, entre otros. También puede consultarse a Millett, *Guardians of the Dynasty*, pp. 223-24, que contiene un recuento detallado de la represión posterior a la muerte de Somoza. Clemente Guido, en su *Noches de tortura*, describe como fue arrestado, torturado y obligado a firmar una confesión falsa en la cual implica a Pedro Joaquín Chamorro y Enoc Aguado en la muerte de Somoza García.

95. Véanse LG/DO 54,177 (28 de agosto de 1950); 55,72 (10 de abril de 1951); 60,222 (1 de octubre de 1956); 60,271 (28 de noviembre de 1956); y 60,277 (5 de diciembre de 1956)

96. Véanse LG/DO 51,141 (3 de julio de 1947); 54,165 (9 de agosto de 1950); y 60,177 (6 de agosto de 1956).

97. Véase Guardia Nacional, no. 286-287 (septiembre-octubre de 1956), que contiene fotos y descripciones del funeral de Somoza. Esta publicación estima que se hicieron presentes 140,000 personas durante el entierro.

CONCLUSIÓN

Al morir Anastasio Somoza García, la presidencia de Nicaragua y la jefatura de la Guardia Nacional pasaron a ser ocupadas, respectivamente, por sus hijos Luis y Anastasio Somoza Debayle. El poder, antes detentado por una sola persona, se repartió entre dos Somozas. Sin embargo, no es correcto interpretar esta transferencia de poder político y militar como un fenómeno dinástico, en el sentido de que el nombre Somoza, por sí solo, legitimaba el ejercicio del poder político. Desde 1936, hubo presidentes que no llevaban el apellido Somoza, y habría otros en el futuro. En cualquier sistema político, alguien – ya sea un individuo o un grupo – debe ejercer el poder supremo, tomar las decisiones y representar la autoridad del Estado. Por tanto, el problema no consiste en determinar quién ejerce el poder, sino identificar qué intereses representa. Encontrar la respuesta a esta interrogante exige examinar las medidas concretas y específicas tomadas por el Estado, y determinar a qué sectores de la sociedad beneficia más.

Los estados justifican su existencia proclamando que benefician a todos los habitantes de un territorio determinado, siempre que éstos se hallen dispuestos a acatar las normas que el mismo estado dicta. Pero en la medida en que existen diferencias sociales, el acceso al poder político y los beneficios que se derivan de ese poder, favorecerán a unos más que a otros. En las sociedades capitalistas, las clases sociales más acomodadas gozan de las mayores cuotas de in-

fluencia, y exigen que sus intereses sean atendidos primero. En una sociedad capitalista, la autoridad y la estabilidad del gobierno dependen de su capacidad de satisfacer las demandas de los grupos económicamente poderosos, y de organizar una coalición política aceptable para los dueños del capital y la riqueza.

A. El somocismo y las alianzas políticas

A lo largo de sus veinte años de gobierno, Anastasio Somoza García se esforzó, de manera constante, por formar alianzas sociales y políticas. Si bien es cierto que Somoza llegó al poder por la fuerza, después del golpe de Estado de 1936 dictó una serie de medidas y pronunciamientos con el fin de revestir a su régimen de la legitimidad política que le faltaba, como resultado de su origen inconstitucional. Los esfuerzos de Somoza por constituir alianzas políticas son muy evidentes, al grado que es posible dividir sus años de gobierno en períodos, con base en la presencia de un conjunto específico de actores sociales y políticos dentro de la coalición gobernante.

Entre 1933 y 1943, la coalición somocista fue de naturaleza policlasista, pues estos años difíciles de crisis económica exigían la incorporación de diversos grupos sociales, y era preciso recompensar a aquellos sectores que hacían los aportes más importantes a los esfuerzos por sacar el país de la depresión. Durante este período, el régimen mostró simpatías por el movimiento obrero y tomó medidas en beneficio de los asalariados, tanto de la clase obrera como de la clase media. Sin embargo, sus disposiciones más importantes y duraderas se dirigieron a ayudar a los caficultores y los comerciantes. Estas medidas incluyeron la devaluación y la inflación, las reformas bancarias y fiscales, y el desarrollo de infraestructura económica. Todas se hallaban orientadas a favorecer las exportaciones nicaragüenses en el mercado mundial, mediante la reducción de los costos de producción y el suministro adecuado de capitales para financiar la expansión económica. Si bien Somoza, su familia y su camarilla se beneficiaron de estas medidas de estímulo económico, no fueron los únicos afortunados.

En efecto, estas medidas no representaron tan sólo ventajas inmediatas para el grupo somocista, sino también sentaron las bases

del Estado capitalista moderno en Nicaragua. Y, aunque el Estado nicaragüense nunca superó su carácter subdesarrollado y dependiente, la modernización impulsada por el régimen somocista abrió condiciones para que diversos intereses económicos del país pudiesen operar y prosperar. Otros sectores resultaron perjudicados, pues tuvieron que cargar con el grueso de los costos de las medidas económicas y fiscales. Sin embargo, siempre existió para ellos la promesa de un futuro mejor, representado a través de la legislación de la seguridad social, el código de trabajo y la reforma agraria, o mediante algunas concesiones menores, tales como el control de precios, la legislación de seguridad industrial y el descanso dominical obligatorio. Cabe señalar que tales leyes y concesiones no significaron para los agroexportadores o comerciantes un encarecimiento sensible de los costos de producción y distribución.

Entre 1944 y 1947 – en respuesta a un desafío a su autoridad proveniente de las propias filas del PLN – el régimen se inclinó hacia la izquierda, y buscó con ahínco el apoyo de la clase obrera urbana. En vista de la seriedad de la amenaza que enfrentaba, agravada por las presiones ejercidas desde Estados Unidos, Somoza se vio obligado a reconsiderar sus intenciones reeleccionistas. Por ende, buscó una alternativa política en la figura de Leonardo Argüello, en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo político con los liberales descontentos. Sin embargo, ante la magnitud de las protestas callejeras desencadenadas en julio de 1944, Somoza comprendió que debía organizar sus propias bases de apoyo popular, y neutralizar a la oposición que podría gestarse entre la clase obrera. Con tal propósito, el régimen se dedicó a crear una red de sindicatos obreros, y promulgó el Código de Trabajo. Sin embargo, evitó tomar medidas que pudieran afectar los intereses de los empresarios, excepto la expropiación de las tierras de los caficultores alemanes y el hostigamiento a unos pocos empresarios del Partido Liberal Independiente.

Desde esta óptica, el fiasco de la presidencia de Argüello debe entenderse, sobre todo, como un evento fortuito. Es decir, fue un episodio inesperado que sometió al régimen y a la Guardia Nacional a grandes tensiones durante un breve período, que fue aprovechado por algunas figuras políticas, como el general Chamorro, para

sus propios fines. Pero ni la insurrección armada, la censura internacional o la presión de Estados Unidos pudieron desalojar a Somoza de su posición de fuerza dentro de la Guardia, o alejarlo del gobierno del país. Por el contrario, los acontecimientos de 1947 seguramente convencieron a Somoza de que sólo podría encontrar aliados políticos confiables entre los enemigos tradicionales de su Partido Liberal, los oligarcas conservadores de Granada. En efecto, el ala conciliadora del Partido Conservador, encabezada por Carlos Cuadra Pasos, estaba dispuesta a tomar todos los riesgos necesarios con tal de formar una gran alianza con los liberales.

Desde 1947 hasta 1956 (y aún después), el moderno Estado nicaragüense llegó a su madurez en la medida en que las dos principales agrupaciones políticas del país alcanzaron acuerdos fundamentales acerca de las reglas del juego político. A partir de los acuerdos entre Cuadra Pasos y Somoza, que culminarían en el Pacto de los Generales, ambos partidos hicieron a un lado las escasas divergencias ideológicas que los separaban. Así también, hicieron caso omiso de sus planteamientos regionalistas, ya obsoletos, y procedieron a compartir funciones legislativas y judiciales, en un entorno de bonanza económica y políticas desarrollistas. El Estado adecuó sus actividades y organización institucional en consonancia con las nuevas orientaciones económicas y políticas que habrían de permitir la prosperidad de caficultores y algodoneros, ganaderos y lecheros, industriales y comerciantes, en un ambiente de estabilidad. El gobierno de Somoza logró garantizar la confianza empresarial y mantener el orden social, gracias a tres condiciones fundamentales: su fuerte retórica anticomunista, el control del entorno político, y la enorme superioridad de los medios de coerción. Asimismo, el régimen no perdió sus vínculos con el movimiento laboral, pues concretó sus promesas en el campo de la seguridad social, y llevó a efecto una limitada redistribución de la riqueza del país a través del impuesto sobre la renta. Sin embargo, evitó en todo momento alarmar al sector privado con disposiciones que pudieran dar la impresión de que se estaba alejando de su compromiso con el desarrollo bajo esquemas capitalistas. En este sentido, fue muy importante la posición del régimen con respecto a los créditos y la asistencia internacionales, pues fueron canalizados, sobre todo, hacia infraestructura básica e inversiones en la producción industrial y agrícola.

Durante estos tres períodos, Estados Unidos – que, sin duda, formaba parte del sistema político nicaragüense y constituía una variable importante en los desenlaces políticos dentro del país – manifestó actitudes muy volubles ante el régimen somocista. Durante el primer período en cuestión, Estados Unidos insistió en una estricta política de no-intervención en los asuntos políticos internos de Nicaragua. La no-intervención, parte integral de la política del Buen Vecino de la administración Roosevelt, obviamente favoreció a los elementos más fuertes de la sociedad nicaragüense, particularmente a Somoza y la Guardia Nacional, a expensas de los grupos más débiles. La insistencia de Estados Unidos de que los nicaragüenses resolvieran sus propios problemas sin la tutela de Washington otorgó carta blanca a Somoza, quien procedió a materializar sus ambiciones sin temor de una reacción estadounidense. Una vez que Somoza se hallaba instalado en la presidencia, Estados Unidos abandonó su política de no-intervención y otorgó el reconocimiento diplomático al régimen. Además, dio apoyo abierto a sus proyectos de desarrollo y empleo público, sobre todo en el área de la construcción de carreteras, que Somoza negoció con Roosevelt durante su visita a Washington en 1939. La política estadounidense respondía a su necesidad de contar con aliados confiables en Centroamérica, ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial; además, Nicaragua podía proporcionar algunas materias primas importantes para el esfuerzo militar.

Al acercarse el fin de la guerra, y en respuesta a un notorio auge de los movimientos anti-dictatoriales en Centroamérica, Estados Unidos empezó a tomar distancia de Somoza cuando éste exteriorizó sus deseos de reelegirse al término de su mandato. Los disturbios en Managua en 1944, organizados en el contexto de la conmemoración de la Independencia de Estados Unidos, revelaron a Washington el nivel de impopularidad de Somoza entre ciertos sectores muy importantes de la población nicaragüense: la clase media urbana y la oposición conservadora, además de empresarios y pensadores liberales disidentes. Sin embargo, Somoza demostró capacidad para desactivar la crisis, conjugando medidas políticas y represivas, y Washington se convenció de que no sería muy fácil deshacerse de él. En consecuencia, Estados Unidos se limitó a presionar a Somoza para que desistiera de sus ambiciones reeleccionistas, pero no intentó

obligarlo a renunciar antes del término de su período presidencial. Washington tampoco insistió en que Somoza abandonara su cargo de jefe director de la Guardia Nacional, en cumplimiento de la orden que le diera Argüello cuando asumió la presidencia en 1947. En consecuencia, la reacción de Estados Unidos al golpe de Estado perpetrado por Somoza en contra de Argüello fue muy suave. Washington se limitó a negar, por un tiempo, el reconocimiento diplomático al títere colocado por Somoza en la presidencia; esta medida no pasaba de ser una discreta reprimenda, en comparación a las duras represalias que dicha potencia podía haber aplicado si realmente quería sacar a Somoza de la arena política.

Después de 1948, ya iniciada la Guerra Fría, la preocupación fundamental de los funcionarios del Departamento de Estado pasó a ser la seguridad continental. Estados Unidos comenzó a percibir a Somoza como una ventaja en lugar de un estorbo, sobre todo después del viraje izquierdista del gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz en 1950. Desde ese momento en adelante, Nicaragua – bajo las sucesivas administraciones somocistas – pasó a ser el aliado más leal y constante de Washington en Centroamérica, siempre dispuesto a ayudar en la cruzada anticomunista.

El continuismo somocista solamente se vio amenazado durante momentos muy específicos y por períodos de tiempo relativamente cortos. La alianza somocista generalmente se mantuvo firme, aún en momentos difíciles, y Somoza siempre contó con el respaldo de los conservadores civilistas. Por ende, en 1944, 1947 y 1954 – los años de mayor peligro para el régimen – Somoza tan solo se vio obligado a enfrentarse a ciertos grupos sociales cuya fuerza combinada nunca alcanzó los niveles mínimos requeridos para derrocar a su gobierno.

B. El somocismo y el desarrollo institucional

La fortaleza de la alianza política somocista se conjugó con un compromiso del régimen de propiciar el desarrollo institucional. Aparte de las características personalistas del régimen – dentro del cual Somoza se atribuía la mayoría de los éxitos, pero pocos desa-

ciertos — siempre se privilegió la búsqueda de soluciones institucionales a los problemas políticos y administrativos. En el ámbito puramente político, el régimen se preocupó por involucrar a diversas organizaciones en la búsqueda de acuerdos y consensos, llegando al extremo de crear grupos políticos opositores, cuando los demás partidos se negaban a competir con el PLN en los eventos electorales. En Nicaragua se impuso un sistema bipartidista *sui generis*, dentro del cual las elecciones, el co-gobierno y los pactos políticos desempeñaban un papel dentro de los esfuerzos por imponer soluciones institucionales al proceso político. De esta manera, los caudillos locales gradualmente se opacaron como factores determinantes de los acuerdos políticos. Siguieron existiendo, como terratenientes, profesionales y comerciantes, en los pueblos y las ciudades, pero ya no estaban en capacidad de montar iniciativas políticas por cuenta propia. En 1927, casi todos los caudillos fueron desarmados bajo los términos del acuerdo de Tipitapa, y la creación de la Guardia Nacional, como único cuerpo armado en el país, los debilitó aún más. A lo interno del Partido Liberal, las reformas impulsadas por Somoza en 1943 prácticamente eliminaron toda autonomía local en lo que se refiere a la selección de los integrantes de los cuadros dirigentes en el ámbito local e intermedio. Y dentro del Partido Conservador, el ocaso de los caudillos se aprecia claramente en la figura del general Chamorro, quien después de años de exilio y del rotundo fracaso de su levantamiento armado contra el régimen en 1947, terminó suscribiendo con Somoza el Pacto de los Generales.

En términos burocráticos y administrativos, el desarrollo del aparato del Estado también fue impulsado por diversas innovaciones institucionales. Por una parte, éstas fueron puestas en marcha como parte de los objetivos políticos propios del Estado, tales como la seguridad social, la estabilidad financiera, el crecimiento económico y el desarrollo del país. Por otra parte, el crecimiento de las instituciones públicas extendió la presencia del Estado en términos de la burocracia y del peso fiscal, ejercido a través de la capacidad del Estado para extraer impuestos. Esto no significa que, bajo el régimen somocista, los ingresos del Estado hayan aumentado en una proporción mayor al valor de las exportaciones. Tampoco implica que el Estado haya logrado reducir sensiblemente su dependencia con res-

pecto a los impuestos aduanales, frente a otras fuentes de ingresos. El régimen se preocupó por mantener los servicios públicos esenciales requeridos para la reproducción del sistema económico y social, pero jamás mostró intenciones de ahogar con impuestos a la empresa privada nacional o extranjera, liberal o conservadora.

Por supuesto, la institución del Estado más importante y fuerte era la Guardia Nacional. Al respecto, es preciso determinar el nivel de institucionalidad que la Guardia llegó a alcanzar en la práctica. Richard Millett, en su libro *Guardians of the Dynasty*, describe a la Guardia como una fuerza pretoriana, que debía su lealtad por entero hacia un hombre y su familia. Sin lugar a dudas, la Guardia Nacional se identificó estrechamente con Somoza García y, más adelante, con Somoza Debayle. Éstos representaban figuras paternas y benefactoras frente a la tropa, y la oficialidad los percibía como colegas y socios en el mundo de los negocios. La organización interna de la Guardia estaba sujeta a las manipulaciones políticas de Somoza, empeñado en mantener un control estricto sobre ese cuerpo militar. Los ascensos y las bajas se determinaban tanto en función de consideraciones políticas como de mérito y capacidad profesional. Bajo esta óptica, puede argumentarse que el cuerpo más importante del Estado carecía de mucha institucionalidad en lo que se refiere a su funcionamiento interno. Sin embargo, su papel dentro del Estado nicaragüense era similar al de otros ejércitos centroamericanos: constituía el último baluarte ante la oposición política y las amenazas al orden social, a la vez que representaba el soporte institucional más visible y estable del régimen. La necesidad de una Guardia Nacional fuerte nunca fue puesta en duda dentro de la coalición de liberales y conservadores. A lo sumo, hubo intentos de remover a Somoza del cargo de jefe director por la vía administrativa, como lo intentó Argüello en 1947, o por la fuerza en el caso de la conspiración armada de 1954.

En suma, la sociedad nicaragüense se vio obligada a resignarse ante la presencia de un Somoza a la cabeza de la Guardia Nacional. Este fue el precio que pagaron los grupos políticos y económicos dominantes para garantizar la paz y la seguridad necesarias para su funcionamiento normal.¹ En este sentido, la Guardia Nacional se constituyó en una parte integral del Estado nicaragüense, al igual que

las demás instituciones públicas. Si bien es cierto que no logró alcanzar los niveles de eficiencia y racionalidad propias de una institución del mundo capitalista desarrollado, lo mismo puede decirse de buena parte de las demás instituciones públicas y privadas de Nicaragua. Finalmente, el hecho de que la Guardia Nacional sobrevivió intacta el asesinato de su jefe director en 1956 es quizás la mejor evidencia de su cohesión institucional, si bien bajo el mando de otro Somoza. Pero tampoco existen razones para dudar que hubiera podido sobrevivir como tal bajo un jefe director con un apellido distinto.

C. El somocismo y la oposición política

La presencia en Nicaragua de diversos grupos opositores que representaban una constante amenaza a la paz social y política – objetivo primordial de la dirigencia de los Partidos Liberal y Conservador – revistió de mucha importancia el consenso político creado en torno a la Guardia Nacional. Sin embargo, la oposición política era parte integral del sistema político. De hecho, formaba parte de la historia política de Nicaragua desde el siglo XIX. Con el transcurso del tiempo, la oposición tradicional, ya fuese conservadora o liberal, perdió su significado como verdadera alternativa política. Hacia la década de 1920, los liberales y conservadores buscaban con afán diversas fórmulas de co-gobierno, y después de 1936 se dedicaron a colaborar de manera abierta. Somoza enfrentó el gran desafío de completar esta reconciliación política nacional, e incorporar a la coalición gobernante a los últimos elementos intransigentes de la oposición tradicional, como el general Chamorro.

Somoza pudo haber logrado el objetivo de la reconciliación política nacional de dos maneras: por medio de la fuerza para reprimir a la oposición, o persuadiendo a la oposición de su inviabilidad como alternativa política, mientras convencía a otros que el programa de gobierno de sus enemigos no constituía una verdadera opción. En realidad, Somoza utilizó ambas fórmulas. Cuando el régimen percibía que la oposición había sobrepasado los límites establecidos por el Estado, de manera explícita o implícita, se le reprimía. Éste fue el caso de los incidentes ocurridos en 1944, 1947 y 1954, cuando el régimen enfrentó la amenaza de la oposición cívica o de una insurrec-

ción armada, y dispuso dar una respuesta fuerte para obligar a la oposición a volver a niveles de actividad más manejables o aceptables. En otras coyunturas, la oposición recibió un trato más indulgente, sobre todo cuando el régimen necesitaba mejorar su imagen dentro y fuera del país. Las expresiones más acabadas de conciliación política la constituyeron los diversos pactos firmados por Somoza con la dirigencia del Partido Conservador, y que aseguraron a éste un espacio para participar en los eventos electorales y un mínimo de puestos legislativos y judiciales para sus adeptos.

No obstante, es preciso recalcar que el régimen sólo se sentaba a negociar con la oposición “leal”; es decir, aquella que confiaba en el sistema “bipartidista” y aceptaba la importancia primordial de la conciliación. El régimen permitió a los liberales independientes organizarse y actuar, pero dentro de espacios estrechos, y nunca les ofreció una diputación en el Congreso o un cargo en el sistema judicial. A diferencia de los conservadores, los liberales independientes eran intrínsecamente antisomocistas, contrarios a todos sus negocios y su continuada presencia política. Por el contrario, los miembros de la oligarquía conservadora ya habían acumulado sus fortunas, y sólo necesitaban garantías para seguir prosperando. La oligarquía, pues, se mostraba dispuesta a negociar con Somoza porque sus condiciones y ofertas eran aceptables y atractivas.

Después de unir a los Partidos Liberal y Conservador y ganar la lealtad de sus dirigentes, el régimen somocista estaba en capacidad de controlar eficazmente a la población nicaragüense. En las ciudades, la maquinaria del PLN se ocupó de vigilar a la burocracia estatal e infiltrar el movimiento obrero para influenciar sus decisiones. En las áreas rurales, los terratenientes de ambos partidos seguían ejerciendo un dominio sobre campesinos y peones. Por tanto, se podía dominar a las masas una vez que se hubiera asegurado el control sobre los estratos superiores de la sociedad. En algunas zonas del país, el PLN intentó ganarse a los simpatizantes de los conservadores, pero éste no parece haber sido un mecanismo importante dentro de la competencia por votos que enfrentaba a ambos partidos. En un sistema político elitista, la dinámica partidista se resuelve mediante acuerdos entre las cúpulas, y la participación política obedece principalmente a

las decisiones de los dirigentes. Por lo tanto, cuando los conservadores decidían participar en una elección, como ocurrió en 1928, 1932, 1947 y 1950, la proporción de votos emitidos aumentó significativamente. (Ver Cuadro C.1.)

Cuadro C. 1
Participación en elecciones nacionales

Año	Población total	Votos emitidos	% votos/población
1928	698,612	133,663	19.1
1932	733,942	130,114	17.7
1936	771,320	109,419	14.2
1938	790,817	88,775	11.2
1947	977,944	169,708	17.4
1950	1,049,611	202,698	19.3

Fuentes: Los resultados electorales son los mismos que aparecen en los cuadros 2.2, 4.1 y 5.1, y en el pie de página 62 del capítulo 3. La población total ha sido estimada con base a los resultados de los censos de 1920, 1940, 1950 y 1962. También puede consultarse los estimados en intervalos de cinco años preparados por CELADE en Nicaragua, Oficina Ejecutiva de Encuestas y Censos, *Boletín demográfico*, no. 5 (diciembre de 1978), p. 5.

Sin embargo, la aparición de algunos intersticios en el bloque de la oposición “leal” abrió espacios a la oposición más radical para sobrevivir y, en cierta medida, hacer sentir su presencia. La existencia de estos espacios no significa que el régimen los considerara necesarios. Más bien, su presencia fue parte ineludible de la oposición leal como un todo. Es decir, fue el costo que el régimen debió pagar para garantizar la participación de otro partido político en las contiendas electorales, que respaldara, en alguna medida, la afirmación de Somoza de que en Nicaragua imperaba la democracia. Estos intersticios fueron ocupados por los medios de comunicación opositores —especialmente por La Prensa—, los partidos y grupos más pequeños de la oposición, como el PLI, la UNAP, la Juventud Conservadora, el Frente Defensor de la República, la universidad y el movimiento sindical.

Algunos de los opositores más radicales al régimen somocista pudieron actuar abiertamente dentro de estos grupos sin provocar la

represión inmediata de la Guardia. Por ejemplo, varias personas que eventualmente formaron parte del grupo fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), utilizaron durante un tiempo al PLI como mampara. El régimen tan sólo se mostró absolutamente intolerante en el caso de la oposición armada, la cual fue reprimida sin contemplaciones, ya fuese conservadora, liberal o de cualquier otro signo. El régimen estaba perfectamente consciente de la necesidad de mantener un total monopolio sobre el uso de la fuerza. Esto era cierto, tanto en el caso de la oposición de tipo caudillista – representada sobre todo por los chamorristas – como de la oposición en el exilio.

Al parecer, Somoza no deseaba ganarse enemigos, si podía evitarlo, pues procuró evitar la represión abierta contra sus opositores. Los conservadores que le ocasionaban más problemas eran desterrados, encarcelados o confinados, pero sus propiedades nunca fueron expropiadas o confiscadas, y eventualmente se les otorgaba una amnistía. El régimen permitió la existencia del PLI, pese a que constituía la agrupación antisomocista por excelencia, aunque sus dirigentes más intransigentes fueron exiliados. La moderación del régimen en el uso de la represión, sin duda, también reflejaba la relativa debilidad de la oposición. En fin, Somoza acostumbraba dosificar la represión de acuerdo a las exigencias de cada coyuntura, y procuraba evitar los excesos innecesarios.

¿A qué se debía la debilidad de la oposición? En primer lugar, a su grave fragmentación. Los oligarcas granadinos del Partido Conservador tenían muchas más afinidades con Somoza que con los dirigentes sindicales antisomocistas, y aún con los propios empresarios del Partido Liberal Independiente. Por tanto, no era posible unirlos para conformar alternativa política viable al régimen somocista. En otras palabras, algunos sectores de la oposición preferían ver a Somoza en el poder en caso de no poder sustituirlo ellos mismos, pues cada uno se consideraba como la única alternativa frente al dictador. En segundo lugar, el discurso de la oposición se reducía a atacar a Somoza sin contemplar las preocupaciones cotidianas de la población, que eran ajenas a las aspiraciones de las cúpulas de los grupos opositores. Por tanto, el discurso de la oposición no logró atraer muchos seguidores. Finalmente, las promesas de la oposición

no eran radicalmente distintas con respecto a lo que el régimen ofrecía y aseguraba cumplir. Además, por lo general, en la redacción de las plataformas políticas de los partidos opositores, se empleaba un lenguaje vago y altisonante, que carecía de significado para la mayoría de la población.

El único camino que se le presentaba a la oposición, si quería ganarle espacios a Somoza y al somocismo, era transformar su postura meramente “anti-régimen”, en una plataforma “anti-sistema” o “anti-estado”. Esto implicaba rechazar la “democracia” somocista, así como a todos aquellos sectores dispuestos a hacerle el juego. Asimismo, exigía construir una coalición militar y política capaz de derrotar tanto al PLN como a la Guardia Nacional. Sin embargo, ni los conservadores, ni el PLI o la UNAP mostraron voluntad o capacidad para dar este salto. Correspondió al Frente Sandinista de Liberación Nacional, organización político-militar fundada en 1961, iniciar un nuevo tipo de oposición al somocismo y sus aliados – una oposición que buscaría no sólo barrer con el régimen sino también redefinir el propio Estado.

D. El estado nicaragüense bajo Somoza García

La debilidad y el divisionismo que caracterizaron a la oposición al régimen somocista no deben confundirse con la fuerza que adquirió el Estado nicaragüense bajo Somoza García. El régimen somocista respondió a las demandas de los sectores agrícolas y comerciales, proporcionándoles paz, orden social y estímulo gubernamental para el crecimiento económico – todo ello al costo más bajo posible. Satisfizo mínimamente las demandas del sector obrero mediante un discurso atractivo y ciertas concesiones concretas, tales como las Casas del Obrero, el Código de Trabajo y la seguridad social. Toleró las actividades de la oposición, especialmente durante los procesos electorales, y abrió un espacio bastante amplio para dar cabida a la expresión de críticas contra las políticas y la gestión de su gobierno. En este sentido, el régimen manifestó características propias de las democracias convencionales de corte liberal, con la notable excepción de que, en Nicaragua, Somoza exigía supervisar personalmente todas las decisiones del Estado, aún cuando otra persona

ocupara la silla presidencial. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿Cuán diferente habría sido un régimen democrático? ¿Cómo habría actuado, por ejemplo, el general Chamorro, de haber sido electo presidente? ¿Qué políticas de Estado habría puesto en ejecución el PLI de haber llegado al gobierno? ¿Cuánta tolerancia habrían mostrado los liberales independientes hacia la oposición izquierdista o el movimiento obrero?

Las respuestas a estas preguntas descansan sobre una adecuada interpretación de las características del Estado nicaragüense. Es posible que el desarrollo de los acontecimientos no hubiese sido muy distinto, en caso de que Somoza no hubiera llegado al poder o permanecido tanto tiempo al frente de la Guardia Nacional. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que, durante el régimen somocista, el estado nicaragüense reflejó el consenso general entre los grupos políticamente dominantes en torno a la conveniencia de propiciar el crecimiento económico sobre bases capitalistas y agroexportadoras, así como de garantizar la fuerza institucional y coercitiva del Estado con esa finalidad. Los conflictos que de vez en cuando estallaban entre diversos actores políticos, se reducían a desacuerdos a lo interno de los estratos altos y medios de la sociedad – pese a los niveles de violencia y animosidad que pudieron generar.

En suma, el desarrollo político y la evolución del Estado nicaragüense no habría sido diferente sin los Somoza en el poder, excepto por un aspecto significativo: el imperio económico de esta familia. Sin duda, los negocios y las propiedades de Somoza prosperaron bajo la sombra de las instituciones financieras y fiscales del Estado. Si Somoza no hubiera aprovechado las oportunidades que conlleva el poder político para extender sus negocios, otros lo habrían hecho, aunque es probable que el poder económico no se habría concentrado o centralizado tanto como ocurrió bajo Somoza. En este sentido, los negocios de Somoza tendrían mucho peso como factor causal de la revolución del año 1979, mas no tanta incidencia en el proceso de formación del Estado. El Estado nicaragüense, tal como evolucionó bajo el control somocista, sin duda favoreció los intereses económicos de Somoza y su camarilla; sin embargo, es preciso aclarar que las instituciones y las políticas del Estado no fueron diseñadas exclusiva o

primordialmente para favorecer dichos intereses económicos. En efecto, su diseño obedeció al interés por promover el desarrollo de una economía capitalista y agroexportadora, y para controlar a la población trabajadora de la que dependía la producción. Sin embargo, la incesante expansión del emporio somocista con el tiempo llegó a golpear a muchos empresarios privados, el extremo de socavar el consenso libero-conservador, contribuyendo así a la crisis del propio Estado durante la década de 1970.

Cabe destacar que, desde 1956, Pedro Joaquín Chamorro vislumbró tal desenlace. En efecto, pocos días antes del asesinato de Somoza, dedicó un editorial de *La Prensa* a reflexionar sobre el futuro que esperaba a los capitalistas y trabajadores nicaragüenses, si el dominio somocista se prolongaba más. Advirtió a los capitalistas que procuraban mantener buenas relaciones con el régimen sobre el grave peligro que éste representaba para sus intereses. Tal amenaza no radicaba en la posibilidad de que Somoza pretendiera aplicar algún programa social ambicioso, sino en el hecho que el propio “supercapital” de la familia gobernante, tarde o temprano, acabaría devorándolos por completo. Asimismo, Pedro Joaquín Chamorro señaló a los obreros la futilidad de sus esfuerzos por asegurar sus intereses a largo plazo mediante un acercamiento con Somoza. Al final – les advirtió – el supercapital de Somoza también acabaría por anular al movimiento obrero, debido a la enorme concentración de poder económico en manos del dictador. En consecuencia, tanto los capitalistas como los obreros debían comprender que, gracias a su enorme fortuna, Somoza llegaría a ejercer un monopolio total de la economía nicaragüense, y que este control exclusivo sería irreversible.²

Chamorro señaló, pues, una de las causas principales de la revolución en Nicaragua. Bajo el régimen de Somoza García, el Estado nicaragüense fue diseñado como un instrumento de conciliación política y económica; sin embargo, poco a poco el Estado fue perdiendo la capacidad de conciliar las crecientes tensiones entre el imperio económico somocista y el resto de la burguesía nicaragüense. Finalmente, la población percibió la total parcialización del Estado en favor de un sector de la clase dominante. De esta manera, perdió su

carácter de “Estado para todos”, pues la generalidad de los nicaragüenses lo percibió como un Estado organizado para beneficiar a los Somoza, de manera casi exclusiva.³ Sin lugar a dudas, algunos nicaragüenses ya habían comprendido esta situación a comienzos de la década de 1940, sobre todo los empresarios y profesionales que formaron el PLI con miras a expulsar a Somoza de sus cargos en el gobierno y la Guardia Nacional. Precisamente, justificaron su escisión del partido Liberal somocista como una protesta por la codicia de Somoza, aunada a su control monolítico del aparato del Estado; es decir, su renuencia a compartir el poder político y las ventajas económicas derivadas de éste. En 1948, la oposición intentó desprestigiar al régimen somocista mediante denuncias similares ante la Conferencia Panamericana celebrada ese año en Bogotá. Sin embargo, en ese momento el repudio al régimen aún no era suficientemente profundo como para crear una situación de conflicto irreconciliable. A partir de 1945, y sobre todo en la década de 1950, el crecimiento de la economía nicaragüense ofreció suficientes oportunidades económicas para que la mayoría de los nicaragüenses pudiera beneficiarse, por lo que la crisis final del régimen demoró varios años más en presentarse.

En cierto sentido, podría argumentarse que Somoza García sentó las reglas del juego, pero que sus hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle, procedieron a violarlas. Sin embargo, tal interpretación es excesivamente simplista. El proceso de concentración de riquezas en manos de los Somoza se vio acelerado y acentuado gracias a su control del aparato del Estado, pero este fenómeno no constituye una anomalía del desarrollo económico capitalista – sobre todo, en una sociedad pobre y dependiente como la de Nicaragua. Además, la concentración económica no sólo benefició a los Somoza, sino también a otros sectores de la clase empresarial nicaragüense. Finalmente, la concentración económica no afectó la capacidad del Estado de seguir extrayendo recursos de la población, con el fin de costear los servicios públicos básicos requeridos para mantener la paz, el orden social y el crecimiento económico.

Si bien la concentración económica aumentó la competencia entre los grupos económicos por sobrevivir y lograr ventajas, no representó, por sí misma, la causa del surgimiento de las presiones re-

volucionarias en Nicaragua. El crecimiento económico proporcionó al Estado los recursos materiales para consolidar su control institucional y coercitivo sobre la población, pero no contribuyó a elevar su legitimidad. Es muy posible que la mayoría de nicaragüenses interesados en la vida política del país hayan observado con satisfacción los primeros años de gobierno de Somoza García. Sin embargo, la legitimidad del régimen y del Estado se vio menguada como resultado de la continua presencia de un miembro de la familia Somoza en los altos cargos del Estado y de la espiral de corrupción descarada dentro de la burocracia gubernamental y la Guardia Nacional. La evidente subordinación del régimen somocista ante los intereses de Estados Unidos en la región contribuyó, asimismo, a mermar su legitimidad. En la década de 1950, surgieron diversas personas y agrupaciones dispuestas a utilizar la fuerza para eliminar al régimen somocista. En los años posteriores a la muerte de Somoza García, se intentó organizar movimientos revolucionarios en las zonas rurales, inspirados sin duda en el éxito de los guerrilleros cubanos encabezados por Fidel Castro. Sin embargo, estos movimientos no lograron consolidarse, y su liderazgo no se comprometió con el proyecto de librar una lucha prolongada contra el régimen. No constituyeron esfuerzos realmente revolucionarios; más bien, parecían episodios fugaces de inspiración romántica. Sin embargo, con la creación del FSLN en 1961, el cuestionamiento a la legitimidad del régimen somocista se llevó hasta las últimas consecuencias. Al revivir la figura de Sandino y el contenido de su lucha, acompañada de una propuesta para organizar un nuevo Estado nicaragüense, el FSLN fue capaz de sentar las bases de una lucha prolongada contra el régimen somocista. Durante mucho tiempo, la lucha de los sandinistas no parecía tener futuro; sin embargo, poco a poco empezó a subvertir la legitimidad del orden establecido, al cuestionar sus orígenes y su razón de ser.

Diversos factores empujaron al Estado somocista a su crisis final. En la década de 1970, empezó a debilitarse como resultado de la fractura de la coalición gobernante de liberales y conservadores. En la misma época, las fuerzas insurgentes lideradas por el FSLN empezaron a ganar legitimidad, después de años de lucha difícil e innumerables reveses. Finalmente, el Estado somocista, aparentemente tan fuerte, perdurable y legítimo, se derrumbó en medio del humo y el

fuego ante un pueblo insurrecto, que se lanzó a las calles a construir barricadas, dispuesto a deshacerse, de una vez por todas, de un gobierno que parecía destinado a durar para siempre. Así se cumplió el refrán: “No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.”

NOTAS

1 Para comprender la experiencia europea acerca de la protección que los estados proporcionaban a sus habitantes, y especialmente a los más ricos, véase Tilly, “War Making and State Making as Organized Crime.”

2 *La Prensa*, 8 de septiembre de 1956.

3 Un análisis detallado de este enfoque se encuentra en Torres Rivas, “El estado contra la sociedad.”

Bibliografía

Fuentes manuscritas:

Archivo Nacional de Nicaragua

Los documentos consultados en el Archivo Nacional se encuentran en las siguientes colecciones: los documentos del poder ejecutivo del gobierno (identificados como AN en el texto); el Fondo Salvadora de Somoza (un conjunto de documentos encontrados en 1980 en la casa de la viuda de Somoza García en Managua); el Fondo Felipe Rodríguez Serrano (secretario privado de Somoza García); y una colección de documentos sin clasificar correspondientes a los años posteriores a 1948 que todavía se encontraban empacados (identificados como AN[A]). Cuando un documento de la colección AN se encontró en un folder debidamente identificado, se menciona el título del folder; de lo contrario, se identifica solamente con el número de la caja de documentos. Los documentos del Fondo Salvadora de Somoza se identifican solamente con el número del bulto.

Instituto Histórico Centroamericano (IHCA), Managua

Los documentos del IHCA se identifican de acuerdo al sistema de clasificación del Instituto.

Publicaciones oficiales:

Censos de población, estadísticas e indicadores económicos

Fuentes nicaragüenses

Consejo Nacional de Economía. *Análisis del desarrollo económico y social de Nicaragua, 1950-1962*. Managua: s.l., 1964.

_____. *Estudio de la salud pública en Nicaragua, 1950-1962*. Managua: s.l., 1964

_____. *Estructura del sector público de Nicaragua*. Managua: s.l., 1965.

_____. *Estudio del desarrollo industrial de Nicaragua, 1950-1962*. Managua: s.l., 1965.

_____. *Estudio de los servicios de transporte de Nicaragua, 1950-1962*. Managua: s.l., 1965.

_____. *Estudio del comercio exterior y de la balanza de pagos de Nicaragua, 1950-1964*. Managua: s.l., 1966.

_____. *Estudio de la energía eléctrica en Nicaragua, 1950-1964*. Managua: s.l., 1966.

Dirección General de Estadísticas y Censos. *Anuario estadístico general*. Managua: Talleres Nacionales. (Publicado anualmente entre 1938 y 1947.)

_____. *Boletín mensual de estadística*. (Publicado cada dos o tres meses entre 1944 y 1959.)

_____. *Resumen estadístico de Nicaragua, 1935-1948*. Managua: s.l., 1949.

_____. *Censo general de población de la República de Nicaragua, 1950*. (Managua: Talleres Nacionales, 1951).

_____. *Boletín de estadística*. III época. (Publicado irregularmente entre 1956 y 1960.)

_____. *Resumen estadístico, 1950-1960*. Managua: s.l., 1961.

Instituto de Fomento Nacional. *Balances condensados y estadística*. Managua: s.l., s.f.

_____. *Realizaciones*. Managua: Editorial Hospicio, s.f.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. *Población de Nicaragua: Compendio de las cifras censales y proyecciones por departamentos y municipios*. Managua: julio de 1977.

_____. *Boletín demográfico* 1 (noviembre de 1980).

Ministerio de Economía y Trabajo. *Antecedentes del Seguro Social en Nicaragua, capítulo V*. Managua: s.l., 1955.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. *Presupuesto general de ingresos y egresos de la República de Nicaragua*. (Publicado anualmente.)

Oficina Central del Censo. *Censo general de 1920*. Managua: Tipografía Nacional, 1920.

Oficina Ejecutiva de Encuestas y Censos. *Boletín demográfico* nos. 4 y 5 (diciembre de 1978).

Otras fuentes

Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina (CEPAL). *Análisis y proyecciones de desarrollo económico*. Vol. 9, *El desarrollo económico de Nicaragua*. E/CN.12/742/Rev. 1. México: Naciones Unidas, 1967.

U.S. Department of Commerce. International Reference Service. *Country Economic Reviews*, vol. 1, no. 44 (julio de 1944), "Economic Conditions in Nicaragua in 1940"; vol. 3, no. 33 (agosto de 1946), "Nicaragua"; vol. 4, no. 33 (julio de 1947), "Nicaragua: Economic situation in 1946"; y vol. 5, no. 32 (mayo de 1948), "Economic Review of Nicaragua in 1947."

U.S. Department of State, *A Brief History of the Relations between the United States and Nicaragua, 1909-1928*. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1928.

_____. *The United States and Nicaragua: A Survey of the Relations from 1909 to 1932*. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1932.

_____. *Foreign Relations of the United States (FRUS)*. Washington, D.C.: Government Printing Office. (Publicado anualmente.)

Documentos ministeriales

Consejo Nacional de Elecciones. *La verdad electoral de 1936*. Managua: Talleres Nacionales, 1937.

_____. *El juicio electoral de 1950*. Managua: Talleres Nacionales, 1956.

Ministerio de Agricultura y Trabajo. *Memoria*. Managua: Talleres Nacionales. (Estas y las memorias que se listan a continuación fueron publicadas anualmente, con algunas excepciones, en las prensas del gobierno, los Talleres Nacionales.)

Ministerio de Economía. *Memoria*. (Publicadas anualmente después de la creación de este ministerio en 1950.)

Ministerio de Educación. *Memoria*. (Este ministerio se denominó inicialmente como "Instrucción Pública.")

Ministerio de Fomento y Obras Públicas. *Memoria*. (El nombre de este ministerio cambió varias veces: Fomento y Anexos, Fomento y Obras Públicas, y finalmente Obras Públicas a secas.)

Ministerio de Gobernación y Anexos. *Anales del primer congreso de municipalidades de Nicaragua*. Managua: Talleres Nacionales, 1939.

_____. *Gobierno municipal de Nicaragua*. Managua: Talleres Nacionales, 1940.

_____. *Programa del segundo congreso de municipalidades de Nicaragua*. Managua: s.l., 1942.

_____. *Memoria*.

Ministerio de Guerra, Marina y Aviación. *Memoria*.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. *Memoria*.

Ministerio de Relaciones Exteriores. *Realidad política de Nicaragua*. Managua: Talleres Nacionales, 1948.

Ministerio de Trabajo. *Memoria*.

Presidencia de la República. *Mensaje del Presidente de la República al Honorable Congreso Nacional*. (Estos eran de tres tipos: cuando el presidente prestaba juramento al cargo, cuando el Congreso iniciaba sus sesiones, y cuando el presidente presentaba su informe anual a la nación.)

Recaudación General de Aduanas. *Memoria*. (Esta oficina fue conocida durante algunos años como la Oficina del Recaudador General de Aduanas y Alta Comisión.)

Documentos partidistas

Argüello, Leonardo. *Plataforma política para el período presidencial 1947-1953*. Managua: Editorial Novedades, 1947.

Argüello B., Horacio, et al. *Interpretación de las propuestas que la Junta Directiva Nacional y Legal del Partido Conservador ha presentado a la Junta Directiva Nacional y Legal del Partido Liberal Nacionalista*. Managua: s.l., 1936.

Chamorro, Emiliano. *Declaración del General Emiliano Chamorro*. Guatemala: s.l., 1948.

Comité Revolucionario Nicaragüense. *Programa de acción*. México: s.l., 1938.

Cordero Reyes, Manuel, Carlos Castro Wassmer y Carlos Pasos. *Nicaragua bajo el régimen de Somoza: A los gobiernos y pueblos de América*. San Salvador: Imprenta Funes, 1944.

Coronel Urtecho, José. *Carta política del señor José Coronel Urtecho al general Emiliano Chamorro*. Managua: Editorial San Carlos, 1938.

Cuadra Pasos, Carlos. *Posibilidades de existencia del comunismo en Nicaragua*. Granada: Tipografía El Centro Americano, 1937.

_____. *Mensaje a los Conservadores de Nicaragua*. Managua: Editorial La Prensa, 1950.

Espinoza, Horacio. *El liberalismo debe renovar su ideología y su actuación*. Managua: Tipografía Alemana de Carlos Heuberger, 1935.

Frente Nacional pro Libertad de Nicaragua. *La verdadera realidad política de Nicaragua*. Bogotá: Tipografía Voluntad, 1948.

Grupo Conservador Civilista. *Manifiesto*. Managua: Editorial La Prensa, 1949.

Juventud Liberal Nicaragüense. *Recopilación de la Asamblea General de Juventud Liberal Nacionalista del 2 de febrero de 1952*. Managua: Tipografía Progreso, 1952.

Lacayo L., Chester. *590 días de acción estudiantil*. S.l., 1938.

Paniagua Rivas, Rafael. *Los principios fundamentales del conservatismo*. Managua: Editorial La Prensa, 1950.

Partido Conservador de Nicaragua. *Documentos y resoluciones del Partido Conservador de Nicaragua*. Managua: Editorial San Rafael, 1955.

Partido Liberal Independiente. "Breve historia del Partido Liberal Independiente." S.l., s.f., mimeo.

Partido Liberal Nacionalista, *Estatuto constitutivo, programa y declaración de principios del Partido Liberal Nacionalista de Nicaragua de 1913. Reformas de 1920, 1923, 1928*. Managua: Tipografía del Partido Liberal, 1932.

_____. *Política liberal concerniente a los convenios de conciliación*. Managua: Tipografía Roja, 1935.

_____. *Informe de las actividades desplegadas por el Comité Departamental de Propaganda del PLN del Departamento de León durante la campaña electoral de 1936*. S.l., s.f.

_____. *Declaración de principios, estatutos del Partido Liberal Nacionalista; y reglamento de la Casa del Partido Liberal Nacionalista*. Managua: Tipografía Gurdíán, 1944.

_____. *Informe que rinde la Junta Directiva Nacional y Legal del Partido Liberal Nacionalista a la Gran Convención*. León: s.l., 20 de enero de 1946.

_____. *Plataforma de gobierno que el General Anastasio Somoza presenta a la Gran Convención del Partido Liberal Nacionalista al ser proclamado su candidato presidencial para el período 1957-1963*. Managua: Editorial Novedades, 1956.

Salvatierra, Sofonías, ed. *Conciliación democrática de los partidos políticos de Nicaragua: Convenios sobre representación de las minorías celebrados en 1932*. Managua: Tipografía Progreso, s.f.

Sánchez, Rodrigo, ed. *La vieja guardia*. Managua: s.l., 1936.

Selva, Adán. *Cero política*. Managua: Editorial Asel, 1961.

_____. *Política del Partido Liberal Independiente. En defensa del pueblo y contra la dictadura*. Managua: Editorial Asel, 1961.

Solórzano, Carlos José. *La ideología que debe sustentar el Partido Conservador de Nicaragua*. Managua: Editorial Nuevos Horizontes, 1947.

Unión Revolucionaria Democrática. *La lucha contra Somoza: Crítica interna y programa*. México: s.l., 1954.

Valle Ríos, Julio, ed. *Por qué los obreros y los campesinos están con Somoza*. Managua: Editorial Novedades, 1955.

Periódicos y revistas:

Boletín de la Cámara Nacional de Comercio e Industria de Managua. (Citada como *Boletín*.)

Elite. Managua. (Revista ilustrada mensual.)

La Gaceta/Diario Oficial (LG/DO). (Boletín diario del gobierno; contiene leyes, decretos ejecutivos, minuta de debates parlamentarios, e información oficial diversa.)

Guardia Nacional. (Publicación oficial de la Guardia Nacional de Nicaragua; el editor siempre fue un Somoza.)

Mercurio. (Revista de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de León.)

La Prensa. (Managua)

Revolución. (Periódico mensual del Partido Revolucionario Nicaragüense publicado en Costa Rica.)

Libros y artículos:

Amador, Armando. *Orígenes, auge y crisis de una dictadura*. Guatemala: s.l., 1949.

Anderson, Charles W. "Nicaragua: The Somoza Dynasty." En Needler.

Anderson, Perry. *Lineages of the Absolutist State*. London: Verso Editions, 1974.

Armijo Mejía, Modesto. *Ideas sobre la organización del ejecutivo en los países pequeños*. Managua: s.l., 1956.

Barahona Portocarrero, Amaru. "Estudio sobre la historia contemporánea de Nicaragua." *Revista del Pensamiento Centroamericano* 22, no. 157 (octubre-diciembre de 1977): 32-49.

Barreto, Pablo Emilio. *44 años de dictadura somocista*. Managua: s.l., s.f.

Belli, Humberto. "Un ensayo de interpretación sobre las luchas políticas nicaragüenses (de la independencia hasta la revolución cubana)." *Revista del Pensamiento Centroamericano* 22, no. 157 (octubre-diciembre de 1977): 50-59.

Belli, Pedro. "Prolegómeno para una historia económica de Nicaragua de 1905 a 1966." *Revista del Pensamiento Centroamericano* 30, no. 146 (enero-marzo de 1965): 2-30.

Black, George. *Triumph of the People: The Sandinista Revolution in Nicaragua*. London: Zed Press, 1981.

Callcott, Wilfrid Hardy. *The Caribbean Policy of the United States, 1890-1920*. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1942.

Cantarero, Luis Augusto. "The Economic Development of Nicaragua, 1920-1947." Tesis doctoral, State University of Iowa, 1948.

Castro Silva, Juan María. *Nicaragua económica*. Managua: Talleres Nacionales, 1949.

Chamorro, Emiliano. *Autobiografía*. Reedición en *Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano* 14 (abril de 1969).

Chapman, Charles E. "The Age of the Caudillo." *Hispanic American Historical Review* 12 (agosto de 1932): 281-300.

Cox, Isaac Joslin. *Nicaragua and the United States, 1909-1927*. Boston: World Peace Foundation Pamphlets, 1927.

Cuadra Pasos, Carlos. *Historia de medio siglo*. Managua: Ediciones El Pez y la Serpiente, 1964.

_____. *Obras*. Vol. 1, *Historia de medio siglo*. Managua: Colección Cultural del Banco de América, 1976.

Cumberland, W.W. *Nicaragua: An Economic and Financial Survey*. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1928. .

Dodd, Thomas Joseph. "United States in Nicaraguan Politics: Supervised Elections, 1923-1932." Tesis doctoral, George Washington University, 1966.

Dodds, Harold W. "American Supervision of Nicaraguan Elections." *Foreign Affairs* 7 (abril de 1929): 488-96.

Douglas, Charles A. y John V. Morgan. *Nicaragua and the United States*. Washington, D.C.: s.l., 1936.

Espinoza Sotomayor, Enrique. *Partidos políticos*. Managua: Tipografía Progreso, 1940.

Evans, Peter, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol, eds. *Bringing the State Back In*. Cambridge University Press, 1986.

Findling, John Ellis. "The United States and Zelaya: A Study in the Diplomacy of Expediency." Tesis doctoral, University of Texas at Austin, 1971.

Frazier, Charles A. "The Dawn of Nationalism and its Consequences in Nicaragua." Tesis doctoral, University of Texas at Austin, 1968.

Gallardo, Ricardo. *Las constituciones de la República Federal de Centro-América*, 2 vols. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1958.

Gould, Jeffrey. "For an Organized Nicaragua: Somoza and the Labour Movement, 1944-1948." *Journal of Latin American Studies* 19: 353-387.

Grieb, Kenneth J. *Guatemalan Caudillo. The Regime of Jorge Ubico: Guatemala, 1931-1944*. Athens, Ohio: Ohio University Press, 1979.

Guido, Clemente. *Noches de tortura*. Managua: Ediciones Nicaraao, 1980.

Gutiérrez Mayorga, Gustavo. "Dos etapas en la historia del movimiento obrero de Nicaragua." Tesis de grado: Universidad de Costa Rica, 1977.

_____. "El reformismo artesanal en el movimiento obrero nicaragüense (1913-1960)." *Revista del Pensamiento Centroamericano* 23, no. 159 (abril-junio 1978): 2-21.

Hamilton, Nora. *The Limits of State Autonomy: Post Revolutionary Mexico*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1982.

Held, David. "Central Perspectives on the Modern State." En Held, pp. 1-55.

_____, ed. *State and Societies*. New York: New York University Press, 1983.

Herrera Zúniga, René. "Nicaragua: El desarrollo capitalista dependiente y la crisis de la dominación burguesa, 1950-1980." *Foro Internacional* 80 (abril-junio 1980): 612-645.

Hill, Roscoe. *Fiscal Intervention in Nicaragua*. New York: s.l., 1933.

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Mission to Nicaragua. *The Fiscal System of Nicaragua. A Report of the Semestre on Public Finance*. 1952. Mimeo.

_____. *The Economic Development of Nicaragua*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1953.

Kamman, William. *A Search for Stability: United States Diplomacy towards Nicaragua, 1925-1933*. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1968.

Kaplan, Marcos. *Formación del estado nacional en América Latina*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1969.

Karnes, Thomas. *The Failure of Union: Central America, 1824-1960*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1961.

Krehm, William. *Democracias y tiranías en el Caribe*. Buenos Aires: Editorial Parnaso, 1957.

LaFeber, Walter. *Inevitable Revolutions: The United States in Central America*. New York: Norton, 1984.

Langley, Lester D. *The United States and the Caribbean, 1900-1970*. Atlanta: University of Georgia Press, 1980.

Lanuza, Alberto. "La formación del estado nacional en Nicaragua." En Lanuza, et al., pp. 7-138.

Lanuza, Alberto, Juan Luis Vásquez, Amaru Barahona y Amalia Chamorro. *Economía y sociedad en la construcción del estado en Nicaragua*. San José, Costa Rica: ICAP, 1983.

Laski, Harold. *The State in Theory and Practice*. New York: Viking Press, 1935.

Lewis, Paul H. *Paraguay under Stroessner*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980.

Macaulay, Neill. *The Sandino Affair*. Chicago: Quadrangle Books, 1971.

MacLeod, Murdo J. *Spanish Central America: A Socioeconomic History, 1520-1720*. Berkeley: University of California Press, 1973.

Mariscal, Nicolás, Rubén Zamora y Edgar Jiménez Cabrera, eds. *El Estado*. San Salvador: UCA Editores, 1979.

Meléndez, Carlos, ed. *Textos fundamentales de la independencia centroamericana*. San José, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana, 1971.

Millett, Richard. "Anastasio Somoza García: A Brief History of Nicaragua's 'Enduring' Dictator." *Revista/Review Interamericana* 7, no. 3 (otoño de 1977): 486-508.

_____. *Guardians of the Dynasty: A History of the U.S. Created Guardia Nacional of Nicaragua and the Somoza Family*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1977.

Munro, Dana. *The United States and the Caribbean Republics, 1921-1933*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1974.

Needler, Martin, ed. *Political Systems of Latin America*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1964.

Nicaragua Sugar Estates, Ltd. *Ingenio San Antonio*. Granada: s.l., 1953.

North, Douglas C. y Robert Paul Thomas. *The Rise of the Western World: A New Economic History*. Cambridge University Press, 1975.

O'Donnell, Guillermo. "Apuntes para una teoría del estado." En Mariscal et al., pp. 194-237.

Oszlak, Oscar. "Formación histórica del estado en América Latina. Elementos teórico-metodológicos para su estudio." En Mariscal et al., pp. 238-272.

_____. *La formación del estado argentino*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1985.

Pérez Bermúdez, Carlos y Onofre Guevara López. *El movimiento obrero en Nicaragua. Primera parte*. Managua: Editorial El Amanecer, s.f.

_____. *El movimiento obrero en Nicaragua*, fascículos 5 y 6. Managua: Ediciones Dávila Bolaños, 1981.

Playter, Harold. *Nicaragua: A Commercial and Economic Survey*. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1927.

Radell, David Richard. "An Historical Geography of Western Nicaragua: The Spheres of Influence of León, Granada, and Managua." Tesis doctoral, University of California at Berkeley, 1969.

Ramírez, Sergio, ed. *Augusto C. Sandino: El pensamiento vivo*. Managua: Editorial Nueva Nicaragua, 1984.

Sacasa, Juan Bautista. *Cómo y por qué caí del poder*. León, Nicaragua: s.l., 1946. Reedición en *Revista del Pensamiento Centroamericano* 23, no. 161 (octubre-diciembre 1978): 2-32.

Selser, Gregorio. *Sandino: General de hombres libres*. San José, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana, 1974.

Skocpol, Theda. *States and Social Revolutions*. Cambridge University Press, 1979.

_____. "Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research." En Evans, Rueschemeyer y Skocpol, pp. 3-37.

Stansifer, Charles L. "Una nueva interpretación de José Santos Zelaya, dictador de Nicaragua, 1893-1909." *Anuario de Estudios Centroamericanos*, no. 1 (1974): 47-59.

Stepan, Alfred. *The State and Society: Peru in Comparative Perspective*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1978.

Stimson, Henry Lewis. *American Policy in Nicaragua*. New York: Charles Scribner's Sons, 1927. Reimpreso por New York: Arno Press y New York Times, 1970.

Teplitz, Benjamin I. "The Political and Economic Foundations of Modernization in Nicaragua: The Administration of José Santos Zelaya, 1893-1909." Tesis doctoral, Howard University, 1973.

Tilly, Charles, ed. *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1975.

_____. "War Making and State Making as Organized Crime." En Evans, Rueschemeyer y Skocpol, pp. 169-191.

Tirado, Manlio. *Conversando con José Coronel Urtecho*. Managua: Editorial Nueva Nicaragua, 1983.

Torres Rivas, Edelberto. "Poder nacional y sociedad dependiente: las clases y el estado en Centroamérica." En Mariscal et al., pp. 157-193.

_____. "La formación del Estado y el sector público en Centroamérica y Panamá." *Revista Mexicana de Sociología* 42, no. 2 (abril-junio de 1980): 561-589.

_____. "El estado contra la sociedad: las raíces de la revolución nicaragüense." *Estudios Sociales Centroamericanos* 9, no. 27 (septiembre-diciembre 1980): 79-96.

Tulchin, Joseph S. *The Aftermath of War: World War I and U.S. Policy towards Latin America*. New York: New York University Press, 1971.

Valle Martínez, Marco Antonio. "Desarrollo económico y político de Nicaragua, 1912-1947." Tesis de grado, Consejo Superior Universitario Centroamericano, San José, Costa Rica, 1976.

Velásquez, José Luis. "La incidencia de la formación de la economía agroexportadora en el intento de formación del estado nacional en Nicaragua, 1860-1930." *Revista del Pensamiento Centroamericano* 32, no. 157 (octubre-diciembre de 1977): 11-31.

Walker, Thomas. *The Christian Democratic Movement in Nicaragua*. Tucson: University of Arizona Press, 1970.

Wallerstein, Immanuel. *The Modern World System I*. New York: Academic Press, 1974.

Wheelock Román, Jaime. *Imperialismo y dictadura: crisis de una formación social*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1975.

Woodward, Ralph Lee. *Central America: A Nation Divided*. New York: Oxford University Press, 1976.

Wortman, Miles L. *Government and Society in Central America, 1680-1840*. New York: Columbia University Press, 1982.

